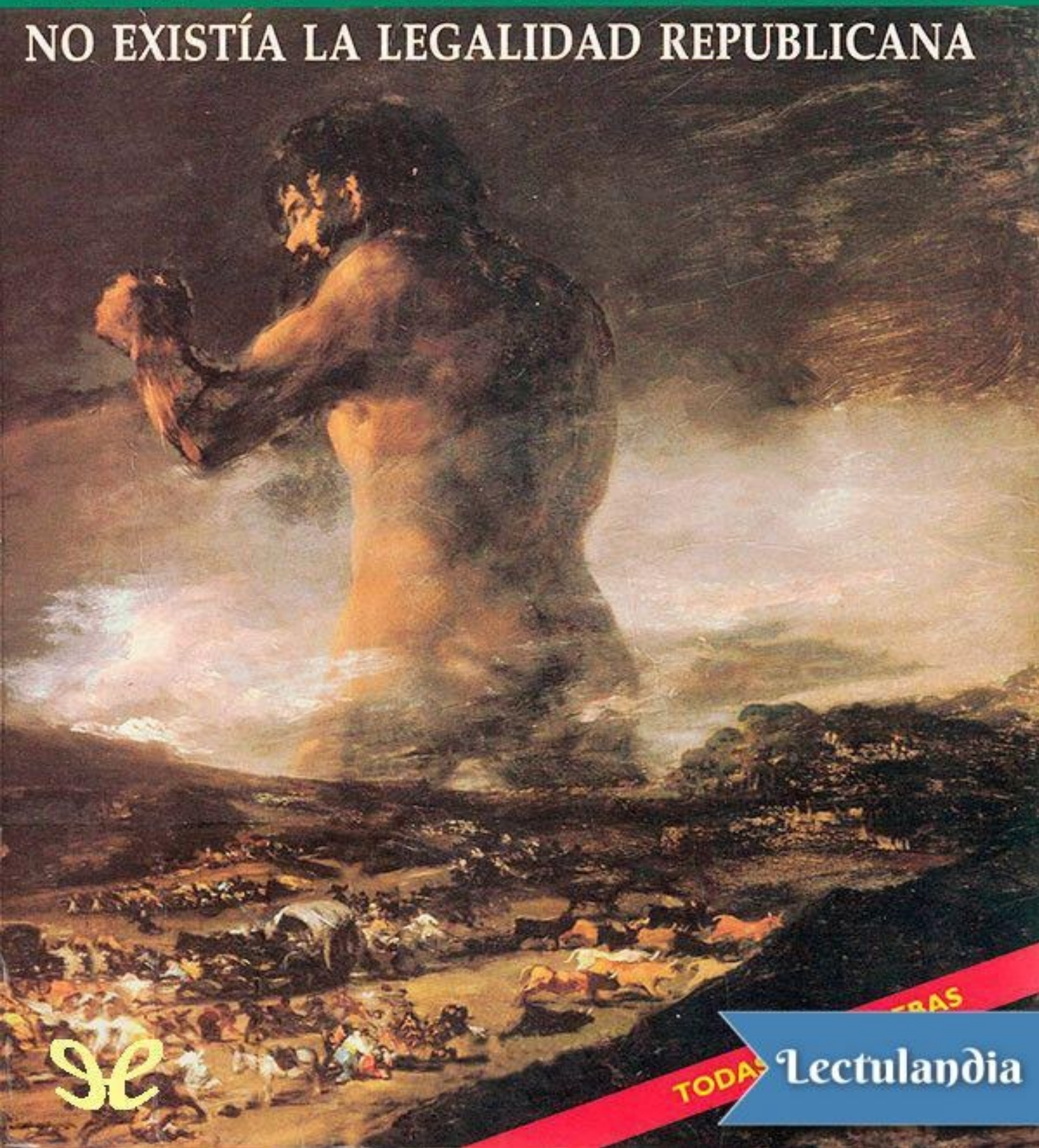
Ricardo de la Cierva

EL 18 DE JULIO

NO FUE UN GOLPE MILITAR FASCISTA

NO EXISTÍA LA LEGALIDAD REPUBLICANA



TODAS Lectulandia

En 1999 una proposición de las Cortes (en su comisión de Asuntos Exteriores) provocó una profunda sorpresa. A propósito de una ayuda a los exiliados por la guerra civil (en la que todo el mundo estaba de acuerdo) se propuso por iniciativa socialista, en el preámbulo, una calificación histórica que no figura entre las funciones parlamentarias; y se denominó al alzamiento nacional de 1936 nada menos que golpe militar fascista contra la legalidad republicana. El Partido Popular se opuso a ese término, pero la proposición fue aprobada por los demás grupos.

El autor de este libro demuestra que en aquellos momentos no existía legalidad republicana alguna y cree que lo sucedido el 18 de julio de 1936 no tuvo nada que ver con un golpe militar fascista, ni que el Congreso tenga entre sus funciones la de dictaminar sobre los acontecimientos históricos de un pasado cada vez más remoto. Si se admite ese criterio, las Cortes pueden debatir un día el reinado de Isabel II, las guerras carlistas, la invasión musulmana o la campaña de Augusto en Cantabria.

Con un aparato documental abrumador, el autor designa al 18 de julio como Alzamiento Nacional, impulsado no sólo por un conjunto de militares que jamás fueron fascistas y respaldado por lo que llamó José María Gil Robles «media España que no se resigna a morir». Para ello analiza las campañas contra la figura del general Franco, por la exaltación de la República y la deformación de la guerra civil. Tales campañas las atribuye a una conjura de poderosos intereses empeñados en deformar la memoria histórica de los españoles.

Ricardo de la Cierva

El 18 de julio no fue un golpe militar fascista

No existía la legalidad republicana. Todas las pruebas

ePub r1.0
Titivillus 05.11.2022

Título original: *El 18 de julio no fue un golpe militar fascista*
Ricardo de la Cierva, 1999

Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1

Índice de contenido

Cubierta
El 18 de julio no fue un golpe militar fascista
Introducción
Capítulo I: La consigna y la rendición general: envilecer, satanizar y aniquilar la memoria histórica de Franco y de su época
- 1. Los grandes enemigos de Franco
  - La marea negra se retrasó hasta 1982
  - La derecha de Edipo
  - Franco y Azaña
  - Las agresiones de Prieto a Franco y a don Juan
  - Los comunistas: el odio impotente de Santiago Carrillo
  - La venganza de la Internacional Socialista
  - La venganza masónica contra Franco
  - La lucha a muerte por el control de la comunicación y por la configuración de la memoria histórica
- 2. La hora de las revanchas: los pequeños enemigos de Franco en la transición y en la actualidad
  - Santos Juliá, el historiador oficioso del PSOE
  - ¿Víctimas de la guerra o armas para la venganza?
  - El interesante e incoherente «Franco» de Juan Pablo Fusi
  - La insoportable levedad de Javier Tusell
  - La insuficiente trilogía de Tusell contra Franco
  - Paul Preston, el enemigo está dentro
  - El crimen de Preston y Anson: Una antibiografía de Franco
  - Epílogo provisional de Preston: La República asediada
  - Anson-Vilallonga: Un doble misterio histórico en unas extrañas vidas paralelas
  - El sable del caudillo: Antología del odio de Vilallonga contra Franco
  - Las cuatro fases de la conjura contra la historia de España
  - Unas notas de lectura

Capítulo II: La falsa glorificación de la Segunda República como ejemplar régimen democrático
- Abandono y huida de Alfonso XIII
- La Segunda República no fue democrática

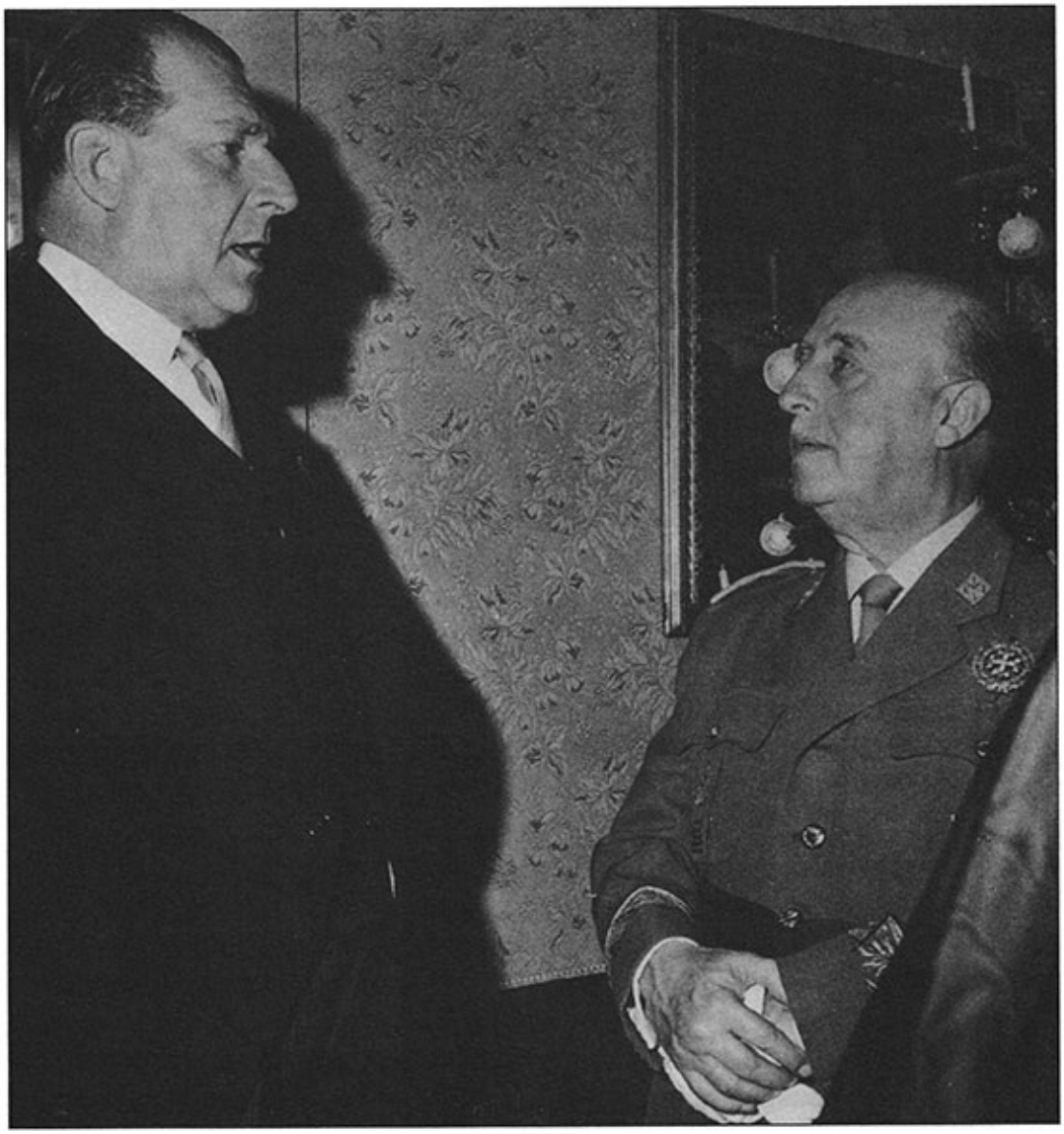
Capítulo III: La prueba suprema contra la República Democrática: La Revolución Socialista de Octubre de 1934. (Los documentos fundamentales)
- Documento 1 de la revolución: Las notas republicanas y subversivas del 5 de octubre

Documento 2 de la revolución: El dictamen de Madariaga
Documento (múltiple) n.º 3 de la revolución: Los socialistas rompen su conjunción con los republicanos
Documento (múltiple) n.º 4: Los socialistas anuncian la revolución armada para la toma del poder
Documento (múltiple) n.º 5: El anuncio oficial de la revolución
Los documentos secretos de la Revolución de Octubre
Capítulo IV: La degradación antidemocrática de la República: campaña, elecciones, gobierno y régimen del Frente Popular
La rebelión de las masas en 1935
El ignorado «dictamen» de Burgos en 1938 conserva toda su fuerza probatoria
Las elecciones antidemocráticas e ilegítimas de febrero de 1936
La ilegitimidad de ejercicio del gobierno del Frente Popular
Los documentos de la primavera trágica
El asesinato de Calvo Sotelo: «Ese atentado es la guerra»
De la guerra justa a la guerra santa
El objetivo político del alzamiento. Todo menos un golpe militar fascista
Capítulo V: La guerra civil, madre de todas las mentiras
La mayor fuerza que mueve al mundo
Preston y la mentira fundamental de la guerra civil
Juan Benet: Cultura y estrategia en la guerra civil
El Alcázar de Toledo: Mentira, victoria y final
Hugh Thomas exige el arrepentimiento a los vencedores de la guerra civil
El bombardeo de Guernica en las Cortes
Las exequias polémicas de Rafael Alberti
La nueva campaña del odio sobre las víctimas y la serenidad cristiana de Ángel David Martín Rubio
Los sacerdotes asesinados en el País Vasco
Las primeras canonizaciones
La carta colectiva de 1999
Nuevos enfoques sobre lo que no fue el 18 de julio: Orwell en las Cortes
Capítulo VI: La conjura contra la historia de España
Las fuentes de la conjura: inspiraciones comunistas, socialistas y masónicas
Primera fuente: la inspiración comunista
Cien millones de muertos por el comunismo
Semprún, Tuñón y la lucha cultural en España
La crisis cultural del PCE y la expulsión de Semprún
Tuñón de Lara y los encuentros de Pau
El factor masónico y la línea socialista de la gran conjura
Epílogo 1: La historia de la España rota

Epílogo 2: Objetivo final, la corona
Sobre el autor
Notas

Para Mercedes 121

En su Capricho número 49, el más célebre de todos, Goya imaginó los monstruos que acosaban a España. Los pintó en forma de sueño para evitar problemas. «El sueño de la razón engendra monstruos». En este libro, presidido por dos formidables evocaciones goyescas, tratamos de identificar a los monstruos principales engendrados por el sueño de la razón histórica al servicio de poderosos intereses mundiales.



Los enemigos de Franco no le perdonaron su decisión del 18 de julio de 1936 desde esa misma fecha. En los últimos años se ha recrudecido la ofensiva hasta extremos inconcebibles contra la historia. La figura de don Juan de Borbón se ha utilizado contra Franco con métodos que ni siquiera imaginó el propio don Juan.

Introducción

La mayor fuerza de cuantas mueven al mundo es la mentira

Jean-François Revel

Declaración previa

Para evitar malentendidos deseo dejar en claro desde el principio que éste no es un libro político, sino de Historia y de crítica histórica. Que las discrepancias respecto de otros autores en problemas tan controvertidos no se refieren nunca a aspectos personales ni se emprenden con ánimo despectivo, sino por un intento de objetividad y veracidad, expresado a veces en términos de honda convicción e inevitable dureza, pero siempre dejando a salvo la dignidad y el honor de las personas aludidas. Que en este libro, como en los demás, afirmo de manera expresa mi respeto a la Constitución que incluye expresamente la salvaguardia de la libertad de expresión.

En la portada de este libro figura el *Coloso*, pintado por Goya hacia 1812, que nos presenta a un gigante terrorífico ante el que huye el pueblo español despavorido. Algunos intérpretes han querido ver en la figura un símbolo de la agresión napoleónica; otros el recuerdo de Hércules, tan vinculado a la monarquía española, que representaría la reacción brutal del hasta entonces dormido espíritu de España contra la agresión que viene de las montañas. (Ver Juan J. Luna y Margarita Moreno, *Goya 250 aniversario*, catálogo de la Exposición de 1996, p. 403). Como Goya nos ofreció su *Coloso* con una evidente relación agresiva, pero bajo un deliberado revestimiento enigmático, me permito asumir conjuntamente estas interpretaciones de algunos especialistas o bien como símbolo de la agresión que, a mi entender, sufre la Historia de España en su fase contemporánea rigurosa a mano de varias fuerzas colosales coordinadas con el objeto de manipular y violar sistemáticamente la memoria histórica de los españoles; o bien como expresión de la voluntad de muchos españoles para oponerse a esa agresión. Las dos interpretaciones me parecen compatibles y complementarias.

Sin salir de Goya, ejemplo permanente, este libro lleva una portada interior con el más célebre de los *Caprichos*, titulado «El sueño de la razón engendra monstruos». Por desgracia muchos libros de historia de España se escriben, dentro y fuera de España, con la razón dormida, así salen.

No poseo, por supuesto, el monopolio de la verdad, pero sí el derecho a exponer y defender lo que creo como verdad histórica, que sólo puede ser una; la tesis medieval de la doble verdad, que tantos aplican hoy en el terreno de la política, entre otros, no sirve tampoco hoy en terreno alguno y menos en el de la Historia. La Historia, desde su creador definitivo, Tucídides, a fines del siglo V antes de nuestra era, consiste en la determinación de unos hechos incontrovertibles, presentados con una técnica que hoy llamamos análisis histórico y se basa en descubrir las relaciones y la proyección de esos hechos del pasado sobre las páginas en que los plasma y los engarza el historiador. No podemos, desde luego, juzgar tales hechos y relaciones con nuestros propios criterios, que corresponden a nuestro tiempo, no al tiempo en que se plantearon y desarrollaron.

El autor está convencido de que la historia de España se presenta hoy muy distorsionada y deformada de acuerdo con las directrices de poderosas fuerzas internacionales que siempre se han distinguido por la manipulación de la Historia. La más importante de esas fuerzas, en relación con la historia contemporánea de España, ha sido el Partido Comunista bajo la orientación de la Internacional Comunista y sus sucedáneos. Suele decirse que el comunismo murió con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desaparición formal de la Unión Soviética poco después. Creo que, desgraciadamente, no es verdad. La fuerza deformadora del comunismo se ha transmitido, casi en su totalidad, a la Internacional Socialista, una fuerza que, en definitiva, reconoce el mismo origen que el comunismo, es decir, el marxismo, la doctrina de Carlos Marx. Esa doctrina se ha desacreditado muchísimo a partir de la caída de la primera gran potencia que la adoptó, la URSS, pero se mantiene incólume en otra gran potencia, China, en varios países más del mundo y en considerables reductos del mundo occidental, clerical y universitario señaladamente en España, al amparo de la Internacional Socialista que, junto a la antigua corriente cultural comunista transfigurada, que no desaparecida, forma lo que desde hace ya una década vengo llamando el Frente Popular de la Cultura. Las corrientes, los postulados y hasta el culto a las personalidades de ese Frente han sido amparados, además y en ocasiones tragicómicamente asumidos, por formaciones de la derecha o el centro-derecha, con resultados catastróficos como puede imaginar el lector.

En este libro dividimos la investigación en seis grandes capítulos. El primero se refiere al envilecimiento y satanización de la figura del general Francisco Franco y su época, que cubre cuarenta años de la historia de España hasta 1975. Esa campaña deformadora contra Franco y su época, contenida al principio de la llamada transición, se desencadenó desde 1982 con motivo de la llegada al poder del Partido Socialista y se ha recrudecido visiblemente en los años noventa, como experimentamos prácticamente a diario en nuevas publicaciones y en los medios de comunicación, incluso los afines al centro-derecha. Dedicamos un segundo capítulo a la glorificación de la Segunda República española como régimen ejemplarmente democrático, lo cual nos parece una falacia múltiple que tratamos de analizar punto por punto. Nos extendemos con más interés aún (capítulo tercero) en la Revolución socialista y catalanista que estalló en octubre de 1934 de forma absolutamente antidemocrática; y presentamos a esa Revolución como la clave antidemocrática de la República española. El período del Frente Popular, entre las elecciones de febrero y el Alzamiento de julio de 1936 es ya el prólogo inevitable de la guerra civil; lo presentamos en el capítulo cuarto como ilegítimo en su origen y su ejercicio y como provocador del alzamiento de aquella «media España que no se resigna a morir» como la anunció profética y exactamente en el Parlamento el líder de la derecha católica don José María Gil Robles en abril de 1936. Por último, el capítulo quinto se refiere a las mentiras sobre la guerra civil española, que se agudizan y se acentúan a medida que pasan los años y disminuyen, por ley de vida, los testigos directos. Afortunadamente quedan todavía muchos que pueden corroborar mis palabras de historiador y de testigo —aunque fuera infantil— de aquel conflicto. Finalmente dentro del epílogo propongo la participación en la conjura contra la historia de España por parte de los nacionalismos separatistas, que se han esmerado en esa deformación y tratan de edificar el futuro de una España rota sobre un pasado ficticio.

Éste es mi intento, con el que deseo contribuir a la denuncia y desenmascaramiento de la deformación y violación histórica que hoy se perpetra y se coordina en lo que llamo conjura contra la historia de España porque creo que lo es. Junto a cada mentira y cada denuncia aduzco el o los documentos que la prueban. No conozco otro modo de hacer Historia.

Ricardo DE LA CIERVA
Otoño-invierno de 1999

Señal de alarma

He de comunicar esta advertencia en todos los tonos, por todos los medios a mi alcance, con oportunidad o sin ella. Los problemas que he abordado en mi libro anterior, *Los signos del Anticristo* y en éste, que el lector tiene entre las manos, son tan extremadamente graves que pueden provocar una o varias catástrofes irreversibles si no acertamos a ponerles remedio. Estos problemas son muchos pero de forma perentoria debo reducirlos a tres.

Primero, la desintegración de España que puede estar próxima, quizás inminente. Hablamos y hablamos de asuntos políticos, nos dejamos halagar con diagnósticos sobre la excelente situación económica pero no acabamos de reconocer que España está en peligro de desintegrarse, de terminar como nación, de cerrar su Historia multisecular a mano airada. Existen fuerzas separatistas interiores y fuerzas disgregadoras externas, algunas de ámbito mundial, empeñadas en que España termine. Para conjurarlas hay quien invoca a la Constitución pero no como un remedio sino como un fetiche; pero nadie propone hacer uso de los medios que la Constitución pone en manos del Gobierno y el Parlamento para evitar la desintegración, sobre todo el vital artículo 155, además del famoso artículo 8 sobre la misión de las Fuerzas Armadas para preservar la unidad, un artículo del que sólo se habla para denostarle. La Constitución se viola gravemente en España prácticamente a diario en asuntos fundamentales y de forma impune.

Segundo, la extinción de España por envejecimiento y falta de renovación demográfica. Ahora se dice que necesitamos doce millones de emigrantes antes del 2050 para asegurar la mano de obra. Pero con doce millones de extranjeros, ¿se preservará la identidad de España?

Tercero, la amenaza creciente contra la libertad de expresión. El Poder Judicial, en buena parte des o antimotivado, interpreta la libertad de expresión cada vez con más restricciones. Hay de nuevo miedo al secuestro de libros y los medios de comunicación parecen cada vez más dominados por el pensamiento único. En este panorama aciago sólo libros heroicos como el de Jesús Cacho *El negocio de la libertad* reaviva muy de tarde en tarde una chispa de esperanza. Este problema se identifica, naturalmente, con la crisis

de la Justicia que ese libro describe de forma insuperable. En el fondo es una consecuencia de esa crisis.

Dentro de nuestro campo intentamos en este libro combatir por España mediante la preservación de la memoria histórica de millones de españoles, gravemente amenazada desde dentro y desde fuera. En sentido histórico estamos convencidos de que también ahora, como en 1936, MEDIA NACIÓN NO SE RESIGNA A MORIR. Y perder la propia Historia es una forma definitiva de morir.

Capítulo I: La consigna y la rendición general: envilecer, satanizar y aniquilar la memoria histórica de Franco y de su época

1. Los grandes enemigos de Franco

LA MAREA NEGRA SE RETRASÓ HASTA 1982

La marea negra contra Franco y su época empezó su avance desde los comienzos de la guerra civil española. Tengo delante el diario comunista *Mundo Obrero*, fechado el 20 de julio de 1936 (y tirado en los talleres de la Editorial Católica, previamente robados por los comunistas en honor a la libertad de expresión), que ostenta en su primera página un titular de bandera: «*Viva la República democrática*», flanqueado por las efigies de dos generales sublevados: uno de ellos es Franco, que en aquellos momentos no ostentaba cargo alguno dentro de la recién formada zona nacional, fuera de su mando «natural» del Ejército de África, que había asumido a primera hora de la mañana anterior inmediatamente después de su vuelo desde Las Palmas a Tetuán. Los comunistas, y todos los dirigentes del Frente Popular, daban ya por segura la jefatura suprema de Franco en la zona enemiga y desde entonces concentraron contra la figura de Franco todo su esfuerzo de propaganda. No andaban desacertados: la posición de Franco se fue reforzando durante los meses siguientes y, el 28 de septiembre de 1936, los generales que integraban la Junta de Defensa Nacional, creada por Mola, le confirieron cerca de Salamanca el mando supremo, militar y político, sobre toda la zona. Los ataques de la propaganda enemiga se redoblaron entonces con intensidad creciente y obsesiva. Hasta que terminó la guerra civil no advirtieron su error: por identificar casi en exclusiva a Franco con la otra zona, con la España enemiga, contribuyeron muy a su pesar a la exaltación absoluta de Franco que de esta forma apareció ante las dos Españas, la vencedora y la vencida, como encamación de la victoria.

Los dirigentes del Frente Popular advirtieron, efectivamente, su error, pero por increíble que parezca, persistieron en él cuando terminó la guerra,

durante la confusa fase de oposición que fueron montando en el exilio y, con mucha menos eficacia, en el interior de España. En el recuento de enemigos de Franco que voy a analizar en este capítulo citaré a varios que pertenecen a esa época del exilio, pero me interesan especialmente los que se han alzado contra su memoria después de la muerte del Caudillo.

En 1972/1973 publiqué en Editora Nacional mi primera biografía de Franco, *Francisco Franco, un siglo de España* por cuadernos semanales. Cuando terminó la serie llevé el conjunto encuadernado de la obra al propio Franco en el palacio del Pardo. Era, naturalmente, una biografía incompleta, aunque no por mucho tiempo; sólo le quedaban a Franco dos años de vida y lo más importante de esa vida estaba ya reflejado en el libro. En aquella época se habían publicado ya otras biografías de Franco en forma personal o como descripciones de su época y su régimen: las de los historiadores británicos Brian Crozier, George Hills y Trythall; la del alemán H. G. Dahms; la del escritor francés derechista Claude Martin y la de su compatriota socialista Max Gallo, que después sería asesor de François Mitterrand[1]. Por aquel entonces yo trabajaba en el Ministerio de Información y Turismo, en puesto ganado mediante oposición y puedo asegurar que ni el Ministerio ni otra autoridad alguna sugirió a ninguno de estos autores la confección de su intento biográfico. Posteriormente Brian Crozier ha publicado un suplemento después de la muerte de Franco.

Estas biografías, todas de autor extranjero, están bien preparadas y muestran una comprensión histórica notable en torno a la figura de Franco. En España, durante la primera etapa del régimen, se habían publicado varias biografías tras la primera, debida a Joaquín Arrarás, que fueron, naturalmente, primerizas y muy favorables. Desde el campo antifranquista sólo conozco un intento, el de «Luis Ramírez», (Luciano Rincón): *Francisco Franco, Historia de un mesianismo*, publicada en la editorial antifranquista obsesiva de París, Ruedo Ibérico, en 1964 que carece de todo valor histórico y biográfico y, que yo sepa, no se ha reeditado en España después de 1975. Ruedo Ibérico, auténtica trinchera del antifranquismo, creada por un señor Martínez, merece esa descripción no por antifranquista, sino por su condición beligerante; el señor Martínez se quedó asombrado al comprobar su fracaso dramático cuando trasladó su trinchera a la España de las libertades y tuvo que cerrar por aburrimiento. Creía que aquí se había producido una ruptura y no una reforma, al menos hasta 1982.

Esa mañana de 1973, a la que me he referido, fuimos a ver al Caudillo para entregarle los primeros ejemplares de mi primera biografía. La

conversación, junto al borde exterior de su mesa de despacho, atiborrada de papeles, fue grata y distendida. Franco conocía el proyecto, que no fue idea suya sino mía; le hice saber, por medio del ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, mi extrañeza ante el hecho de que ya se hubieran publicado importantes estudios biográficos sobre su figura, pero todos ellos por iniciativa de autores extranjeros. ¿Es que a los historiadores y al público español no les interesaba la imagen histórica de Franco? El ministro estaba de acuerdo, pero otros personajes del régimen, como Adolfo Suárez, entonces director general de Radio y Televisión, se oponían cerradamente a mi proyecto biográfico, sin que sus razones me constaran. Hicimos un sondeo editorial que resultó altamente positivo. Franco aceptó el proyecto sin vacilar y colaboró muy eficazmente a él; yo le enviaba cada semana el borrador de un capítulo, lo leía detenidamente con una persona de su absoluta confianza, el almirante Amador Franco y por medio de él me hacía llegar sus observaciones, que casi siempre consistían en datos concretos de ampliación, sin una sola modificación ni supresión a lo largo de toda la obra. Cuando encontraba alguna dificultad o le extrañaba alguno de mis datos o comentarios se limitaba a pedirme la fuente, pero sin imponerme corrección de ninguna clase. Es ridícula la acusación de Paul Preston que considera «oficial» a mi biografía; no se concibió ni realizó con ese carácter, aunque por supuesto se revalorizó de forma incalculable a través de la cooperación del propio Franco. (Con ese criterio los apuntes biográficos de Kitty Kelley, digamos, que ha hablado con varios personajes de la familia real británica, deberían ser considerados como biografía oficial). Conservo mis originales con las marcas y anotaciones de Franco y las adiciones sugeridas por el almirante Amador. De carácter «oficial» nada. Hice un esfuerzo muy intenso para allegar fuentes y redactar la biografía, pero no recibí por ello ni una recompensa, ni una condecoración ni un cargo público. No escribí mi libro para ninguno de esos fines.

En esa conversación con Franco en 1973, mientras le ofrecíamos los dos grandes tomos ilustrados de aquella mi primera biografía, comprobamos que cuanto se nos había dicho sobre su decadencia física era cierto, pero que también saltaba a la vista su capacidad de comprensión y su sentido de lo fundamental. Tomaba en sus manos, sucesivamente, los dos tomos (a los cuales nadie aplicó censura alguna porque, como suelen olvidar algunos hipercríticos, la ley de Prensa propuesta por el ministro Manuel Fraga en 1966 había suprimido la censura previa) y como Franco ya conocía mis borradores, elogió mi obtención de fuentes y mi trabajo de análisis y de síntesis. Por lo

visto le gustó el resultado de mi esfuerzo tanto como al famoso escritor comunista Manuel Vázquez Montalbán, que años después atracó a mi libro con un plagio descomunal en su sesgada *Autobiografía del general Franco*[2], donde me copia al pie de la letra en varias páginas el extenso episodio que Franco dictó personalmente para mi biografía bajo el título *Mi rebeldía contra Primo de Rivera* y que se refería al famoso incidente de Ben-Tieb en territorio de la comandancia de Melilla (1924). Franco dictó en primera persona sus recuerdos sobre aquel decisivo punto de inflexión en su vida militar y el escritor comunista, sin citar a la fuente, cometió el vil plagio que denuncié públicamente en mi libro *No nos robarán la Historia*, sin que naturalmente se atreviera a replicarme.

Durante ese encuentro con Franco en 1973, que sería el último de mi vida, respondí a sus elogios con un pronóstico que me parecía muy fácil. «Cuando V. E. nos deje se suscitará contra su figura histórica una marea negra inevitable, ante la que con este libro he pretendido alzar una barrera a la que tal vez no resulte fácil rebasar». Pero murió Franco el 20 de noviembre de 1975 y la marea negra no se notó por el momento en España. Durante las campañas electorales sobre la Reforma Política (1976) y para las primeras elecciones generales (junio de 1977) coincidíamos derechas, centro e izquierdas en que Franco era una figura histórica que no debía ser objeto de debate político. Esta actitud general, que nadie impuso, pero que emanaba claramente de la opinión del cuerpo electoral (lo mismo que el propósito de no caer de nuevo por nada del mundo en una guerra civil para solucionar los problemas de España), se debía sin duda a la posición que adoptó con toda claridad el Rey don Juan Carlos, que se portó admirablemente con la memoria de Franco y con la familia de Franco. El primer presidente constitucional del Gobierno, don Adolfo Suárez, afirmó con todo valor en pleno Congreso que había servido lealmente al régimen de Franco y no pensaba renegar de ello; y los líderes de todos los partidos políticos adoptaron una posición respetuosa o al menos prudente sobre Franco y su época. Socialistas, comunistas y nacionalistas pedían intensamente la Ruptura con el régimen anterior, pero acabaron por aceptar, *de iure* o al menos *de facto*, la Reforma prevista en las Leyes Fundamentales de Franco; durante la época de Franco, los socialistas (lo comprobaremos en el caso de Indalecio Prieto) y los comunistas (lo comprobaremos en el caso de Santiago Carrillo) habían abominado de Franco incluso cubriéndole de insultos y se repitió mucho durante aquella época que algunos antifranquistas habían brindado con champán al conocer la muerte del que llamaban dictador: aunque Felipe González afirmó después que nunca

ha brindado por la muerte de un español y Santiago Carrillo recuerda que se enteró del suceso por la mañana y nunca toma champán por la mañana. Las Fuerzas Armadas, garantes de la transición, actuaban como «poder disuasorio», según expresión muy utilizada entonces por el profesor Amando de Miguel; y Franco figuraba en cabeza de sus escalafones. El caso es que mi prevista marea negra contra Franco no se produjo durante los primeros años que siguieron a su muerte, ni durante la interinidad representada por el gobierno de don Carlos Arias Navarro, ni durante la época de los gobiernos de la Unión de Centro Democrático entre julio de 1976 y octubre de 1982. Me parece que fue la revista *Interviú*, creada por Antonio Asensio, el primer medio en que de forma continua se atacó al franquismo, sobre todo a propósito de numerosos reportajes sensacionalistas sobre la represión en la guerra civil, pero no cabía hablar de «marea negra» contra Franco hasta que se sucedieron dos fechas trascendentales: el 23 de febrero de 1981, es decir, el golpe de un sector militar contra el régimen democrático; y las elecciones celebradas a fines de octubre de 1982, cuando el Partido Comunista acabó de hundirse, pero el Partido Socialista ocupó el Poder en virtud de una mayoría aplastante. Y tal vez podamos adelantar algo las fechas hasta la primavera de 1979, cuando las izquierdas vencieron ampliamente en las elecciones municipales; una de sus primeras medidas al controlar sus numerosos Ayuntamientos consistió en la desaparición de casi todas las efigies y rótulos que conmemoraban a Franco, sobre todo en las grandes ciudades. Entre 1979, pues, 1981 y 1982 se empezó a cumplir mi predicción y la marea negra contra la memoria y la figura de Franco inició su ascenso; ahora, en vísperas de terminar el siglo, esa marea se ha transformado en una riada que parece haber anegado a toda España.

LA DERECHA DE EDIPO

Con este mismo título envié a *Diario 16*, a petición de su entonces director, don José Luis Gutiérrez, un artículo de contenido histórico sobre no recuerdo ahora qué ocasión; fue años antes de publicarse este libro. En la España de los años noventa se practica la censura de prensa, de radio y de televisión, así como la censura editorial, en los medios de la derecha como en los del centro y los de la izquierda, aunque no todos lleguen a las exageraciones censorias del señor Jordi Pujol. El señor Gutiérrez, uno de los paladines de la democracia, me censuró ese artículo que no se publicó. No recuerdo ahora la fecha exacta del lamentable suceso, pero fue al comienzo de

la etapa Aznar o al final del felipismo. Mi tesis, que ahora reitero y subrayo, es que la izquierda nunca reniega de sus raíces ni de sus personajes históricos; el Partido Comunista permanece hoy aferrado a Marx y el PSOE alimenta una fundación dedicada a Pablo Iglesias, su fundador, y otra a Francisco Largo Caballero, ninguno de los cuales pueden denominarse demócratas ni por el forro. Iglesias proclamó siempre la vigencia del programa revolucionario que el PSOE, al mantenerle hoy de forma expresa en todos sus Congresos, denomina «programa máximo», es decir, horizonte político, por utópico que sea; y ese programa contiene la dictadura del proletariado, la abolición de la propiedad privada, la supresión de las fuerzas armadas y de la Iglesia como bastiones de la reacción y demás fundamentos del marxismo. Pablo Iglesias proclamó en los debates parlamentarios de 1910 que, contra don Antonio Maura y para impedir su retomo al Poder, era lícito el atentado personal. Largo Caballero colaboró estrechamente con la Dictadura del general Primo de Rivera, dirigió la antidemocrática Revolución de Octubre de 1934 y después, siendo jefe del gobierno de la República en la guerra civil, replicó a Stalin, que le aconsejaba a fines de diciembre de ese año, que asumiera al menos una apariencia democrática, con una famosa condena de la democracia parlamentaria que, según Largo, nadie deseaba en España. Pero Iglesias y Caballero siguen siendo los grandes héroes históricos del PSOE. En los capítulos siguientes de este libro documentaré estas tesis de manera irrebatible.

La derecha no cultiva ejemplos semejantes de solidaridad histórica. Desde mediados del siglo XIX, la derecha española reniega de su propio nombre y dice que no es derecha sino centro, lo cual es una simple tautología: la derecha es derecha, llámese como quiera. Don José María Aznar ha expresado con especial virulencia esta renegación; ha repetido que nada tiene que ver con la derecha histórica, por más que tiene que ver todo; el noventa y nueve por ciento de su partido se siente derecha, porque lo es. Esta actitud tan falsa e irracional ha forzado al señor Aznar a prescindir de la gran tradición democrática que alienta en grandes figuras de la derecha histórica española, como Jovellanos, Balmes, Donoso Cortés, los liberales doceañistas, el gran Cánovas del Castillo, el ejemplar gobernante don Antonio Maura, que no sólo fue siempre un demócrata, sino además uno de los más importantes teóricos de la democracia española; Aznar prescinde de Santiago Alba, de José María Gil Robles y de todo el admirable friso democrático que esculpe el profesor Fraga Iribarne en uno de sus mejores libros. No quedan ahí las cosas. José María Aznar ha sustituido a Cánovas y Antonio Maura por un modelo tan

equívoco y tan desviado de la democracia en sus actuaciones reales como don Manuel Azaña, que pretende imponer como ejemplo a su Partido Popular, donde quienes realmente saben quién fue Manuel Azaña se ríen a mandíbula batiente, aunque se callan.

Si don José María Aznar rechaza, como si de peste se tratara, los modelos democráticos de la derecha, imagine el lector cuál será su actitud ante los modelos autoritarios, que sin embargo pertenecen a la tradición de la derecha española tanto como los modelos autoritarios socialistas —Iglesias, Caballero, Santiago Carrillo— a la tradición del PSOE. Me refiero a un gran político civil —don Juan Bravo Murillo— y a tres militares pre o regeneracionistas: los generales Ramón Narváez, Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco. Ésta es la gran diferencia de fondo histórico entre el PP y el PSOE. La derecha actual desciende directamente de Franco y el franquismo, por simple continuidad histórica de la que los grandes políticos actuales del Partido Popular —señores Aznar, Ruiz Gallardón, Trillo Figueroa y no digamos Fraga Iribarne— provienen por evolución personal homogénea o por sucesión generacional directa. Sin embargo, la reacción del señor Aznar ante la figura de Franco parece trazada según las pautas de la tragedia griega; por eso llamo *derecha de Edipo* a la derecha de Aznar. El negro destino de Edipo fue matar a su padre; y la obsesión azañista del señor Aznar es flagrantemente edípica, porque consiste en matar en la memoria histórica —conscientemente, además— al salvador y padre de la actual derecha española, que es el general Franco, sustituyéndole, para mayor escarnio, por la figura del máximo enemigo histórico de Franco, que es don Manuel Azaña, jefe del Estado de la zona enemiga de Franco.

Los principales responsables del esfuerzo reciente para pervertir, satanizar y aniquilar la memoria histórica de Franco no son los socialistas, los comunistas y los nacionalistas, sino, aunque parezca un contrasentido brutal, los hijos legítimos de Franco y el franquismo, los grandes portavoces de la derecha española salvada por Franco —como la Iglesia— de la aniquilación; quisiera destacar nominalmente entre esos portavoces de la derecha a los peores enemigos de la memoria histórica de Franco que son don José María Aznar y don Luis María Anson. El Edipo originario, al lado de estos dos epígonos suyos, una ursulina.

Estoy seguro de que Franco, ni en medio de sus más amenazadoras pesadillas (si es que las tuvo, cosa que dudo) adivinó la enemistad que le profesaba ya cordialmente don Luis María Anson en medio de sus deliquios juanistas (si bien atisbo algo en sus conversaciones con Franco Salgado), pero

jamás pudo sospechar que un nieto de don Manuel Aznar trataría por todos los medios de convertir en antifranquista militante a la derecha española. Sin embargo, como vamos a comprobar en este mismo capítulo, los señores Anson y Aznar son los principales enemigos históricos de Franco, pero ni mucho menos los únicos dentro de la derecha; desde el final de la guerra civil el reclutamiento de enemigos de Franco en las filas de la derecha ha sido el rayo que no cesa. Voy a analizar con el rigor cronológico posible la aparición y trayectoria histórica de los enemigos de Franco hasta nuestros días.

FRANCO Y AZAÑA

En teoría el primero de los grandes enemigos de Franco tendría que ser Manuel Azaña. ¿En qué sentido fueron y se sintieron enemigos Franco y Azaña? Creo que esta pregunta no se ha formulado nunca. Para dar una respuesta debemos reconocer algo muy claro, aunque también sea generalmente ignorado: los dos personajes sentían, cada uno hacia el otro, un frío pero innegable respeto. Poseo un testimonio directo de Franco que, al hablar sobre Azaña durante las conversaciones en torno a su biografía, me dijo de pronto: «Azaña era el más inteligente de todos ellos». Una de las primeras medidas de Azaña, al ser nombrado ministro de la Guerra con el advenimiento de la República de 1931, suprimió por decreto la Academia General Militar, de la que había sido fundador y era primer director el general Franco en Zaragoza, con lo que Franco se quedó sin destino y en situación de disponible. Esta decisión, como es natural, molestó a Franco que, sin embargo, la acató; aunque en el discurso que dirigió a los cadetes como despedida, no ocultó su disconformidad con el cierre de la Academia General, si bien envolvió su protesta con enérgicas invocaciones a la disciplina por lo que el ministro impuso a Franco la única nota desfavorable en su extensa y ejemplar hoja de servicios. Hasta aquel momento y desde su ingreso en la Academia de Infantería de Toledo en 1907, lo más importante del mundo para Franco era su carrera militar, que Azaña frenó en seco con otra de sus disposiciones; al anular los ascensos y situaciones de los militares obtenidas por méritos de guerra estuvo a punto de degradar a Franco desde su empleo como general de brigada (ganado en 1926 por su actuación en las campañas de África), aunque no consumó la amenaza; pero sí en cambio derribó a Franco desde el número uno en la escalilla de ese grado hasta situarle en último lugar, lo que en principio equivalía a cerrarle el paso hasta el grado superior del Ejército, que era general de división. Esto constituyó para Franco

una grave arbitrariedad y una ofensa que no perdonaría jamás, aunque en 1934 otro ministro republicano de la Guerra, el notario don Diego Hidalgo, subsanó el desafuero de Azaña y aprovechó la primera vacante para ascender a Franco a divisionario, sin que se registrara protesta alguna en el Ejército, dado el prestigio de que gozaba el ascendido. Pero fue el propio Azaña quien sacó relativamente a Franco de la situación de disponibilidad; en 1932 le nombró comandante militar de La Coruña, destino que le era muy grato y al año siguiente comandante general de Baleares, en puesto de superior categoría que significaba en principio la próxima concesión de un ascenso. Tal vez así premiaba Azaña la negativa tajante de Franco a participar en el pronunciamiento del general Sanjurjo que le requirió para ello durante una visita del comandante militar de La Coruña a Madrid. Actuó como contacto para concertar la entrevista entre los dos generales (que tuvo lugar en el antepalco de un teatro de Madrid) el profesor Pedro Sainz Rodríguez, que era muy amigo de Franco desde la estancia de los dos en Oviedo y que durante la República actuaba en política como salsa de todos los guisos.

Una fuente valiosa y fiable para conocer las opiniones de Franco sobre personas y sucesos de su época son las *Conversaciones* con su pariente y secretario militar, general Franco Salgado. El 5 de octubre de 1963 se registra la primera alusión de Franco, que sorprenderá a muchos; porque comunica un breve dictamen muy equilibrado sobre las famosas «leyes de Azaña» en la primavera de 1931, que entonces fueron denostadas por buena parte de las fuerzas armadas y por la derecha en bloque.

«La ley del retiro no estaba mal proyectada ni era tan mala como se decía en aquella época; tenía el sectarismo de querer apartar del Ejército a la oficialidad de ideales monárquicos, pero esto no se realizó, pues se retiraron los que quisieron y nos quedamos la mayoría[3]».

El 29 de junio de 1965, Franco explica los motivos de su negativa a participar en el golpe de Sanjurjo: «En aquellos tiempos en que el pueblo estaba ilusionado con el régimen, un levantamiento militar, de no triunfar, abriría las puertas al comunismo». Franco recuerda que Azaña llamó por teléfono al jefe de la División y le contestó Franco que le suplía por ausencia, lo que puso muy contento a Azaña a quien habían llegado rumores sobre la adhesión de Franco al golpe[4]. El 27 de marzo de 1967 vuelve Franco a explicar su abstención ante el golpe de Sanjurjo y sus desmentidos a los militares que propalaban rumores sobre su participación.

No conozco otras opiniones directas, escritas u orales, de Franco sobre Azaña. En los rasgos que he transcrito se puede advertir, desde luego, un

distanciamiento; pero ningún insulto, ni siquiera una descalificación. Incluso hemos visto una opinión excepcionalmente comprensiva de Franco en torno a las leyes de Azaña, que le valieron el calificativo de «monstruo» con el que le distinguió el general Mola, de acuerdo con la opinión de buena parte del Ejército y toda la derecha. Luego deduciré de fuentes indirectas, pero con relativa seguridad, la actitud de Franco sobre Azaña durante la guerra civil. Pero antes vayamos a los testimonios de Azaña sobre Franco.

Cuarenta y dos veces, creo que no he contado mal, se refiere Manuel Azaña expresamente en sus Memorias a Francisco Franco que es, por lo tanto, uno de sus personajes más citados. Las citas aumentan si agregamos las que aparecen en la parte raptada (hoy recuperada) de las Memorias de Azaña, de las que Franco ordenó publicar una selección en la prensa de la zona nacional y en forma de libro nada más acabada la guerra civil. Vayamos a los textos y los contextos.

El 16 de julio de 1931, Azaña habla por primera vez del general Franco. «Alocución del general Franco a los cadetes de la Academia General, con motivo de la conclusión del curso. Completamente desafecto al Gobierno, reticentes ataques al mando; caso de destitución inmediata, si no cesase hoy en el mando. Le paso la alocución al asesor, para que vea si hay materia punible. Me entrega un informe escrito, diciendo que no se puede proceder en forma judicial; que cabría gubernativamente corregirle». En esa misma jornada, el general Queipo de Llano recibe un bofetón del capitán Salinas, sublevado de Jaca, en el gabinete militar de Azaña, que anota el incidente con displicencia[5].

Azaña se ha quedado con un temor difuso por el cierre de la Academia General Militar. Saca varias veces el asunto en conversaciones y audiencias de aquellos días. El 20 de julio lo comenta con el general Sanjurjo que le habla bien de Franco como uno de los mejores generales del momento y revela al presidente que ha tratado de aconsejar a Franco resignación. El 23 de julio consigue que el consejo de ministros apruebe la reprensión al general Franco por su discurso de Zaragoza, pero no las tiene todas consigo. «Este asunto —anota en el diario— puede tener consecuencias[6]». Al hablar con Sanjurjo cree Azaña que una de las causas del resentimiento de Franco es la disposición sobre ascensos que no le afecta en su grado, pero sí le rebaja en el escalafón. Conocía bien a Franco; a quien este descenso de escala le había afectado muchísimo.

Azaña vigilaba de cerca los movimientos y actitudes de los militares principales. Creía haberse atraído a Goded y seguía con interés a Franco. El

12 de agosto escribe: «También recibo información de los generales Franco y Orgaz. Franco es el más temible». Al día siguiente habla con Diego Martínez Barrio, que como alto dignatario de la Masonería posee excelente información. Hablan de Franco y Orgaz como conspiradores y Azaña subraya: «Franco es el único temible[7]». Tampoco se equivoca Azaña cuando añade en sus notas que el peligro militar mayor puede venir de Navarra. ¿Por qué se le habría olvidado en 1936? Franco vivía en Asturias, disponible forzoso, después de su destitución en la Academia General. Azaña y Galarza, independientemente, conocen de forma inmediata su llegada a Madrid el 14 de ese mes[8]. Franco sigue en Madrid el 24 de agosto; cuando acude a cumplimentarle; hablan detenidamente y Azaña lo refleja en su diario:

> «Recibo al general Franco, a quien no había visto desde que se me presentó, a poco de venir la República. Ayer estuvo a visitar al subsecretario, quien le recordó que es obligatorio presentarse al ministro y se lo aconsejó como compañero.
>
> »He recibido muy bien al general. Le digo que me dio un disgusto con su proclama y que no lo pensó bien. Pretende sincerarse, un poco hipócritamente. Le aconsejo que no se deje traer y llevar por sus amigos y admiradores, porque en la vida pública no se es lo que uno quiere, sino lo que los demás se empeñan en hacer de uno. Hace protestas de lealtad y aunque le han buscado ha dicho que respeta al régimen constituido como respetó a la monarquía. Me hace una gran defensa de la Academia General que he suprimido, contra la que había muy mal ambiente en el ministerio.
>
> »Como yo le dejo entrever que, cambiando las circunstancias del momento, me sería grato utilizar sus servicios, me responde con una sonrisita: ¡Y para utilizar mis servicios me pone policía que me sigue a todas partes en automóvil. Habrán visto que no voy a ninguna parte!
>
> »(En la Dirección de Seguridad han hecho, pues, una tontería. Le dije a Galarza que vigilaran lo que hace este general y se les ocurre ponerle detrás un auto con tres agentes. Esta tarde le he dicho a Galarza que se lo quite). Le recuerdo el ejemplo de su hermano que tuvo toda mi confianza y a quien la popularidad le ha llevado a donde quizá no pensaba ir, y a donde quizá esté arrepentido de haber llegado. La entrevista concluye con las cortesías de uso[9]».

Está claro que Azaña pretende ganarse a Franco como cree haberse ganado a Goded, el que, también como coronel, fue jefe de la otra vanguardia del desembarco en Alhucemas. Precisamente a fines de enero de 1932, cuando Sanjurjo iniciaba sus contactos conspiratorios para el pronunciamiento que acabaría por estallar el siguiente verano, el exministro de la Gobernación Miguel Maura, proponía el nombramiento de Franco o el de Goded para la Alta Comisaría de Marruecos, pero Azaña se negó[10]. Designó a Franco en cambio comandante militar de La Coruña, puesto que encantaba al general y se comentó mucho una foto tomada allí en que aparecen los dos durante una visita oficial del jefe del gobierno a Galicia. Ya sabemos que Franco se opuso cerradamente a colaborar en la intentona de Sanjurjo, que al llegar el verano de 1932 se preparaba activamente. Participaba en ella, sin embargo, de forma que aún no se conoce bien, el líder republicano radical Alejandro Lerroux, a quien Azaña había dejado al margen

del gobierno cuando asumió su jefatura; y algunas semanas antes del golpe, Azaña se indignó muchísimo cuando supo que Lerroux había pronunciado en Zaragoza un discurso en que, para atraerse a la opinión moderada, prometió el restablecimiento de la Academia General Militar «con el general Franco a la cabeza». Otros jefes republicanos tomaron a broma la noticia, pero Azaña se preocupó mucho y así lo reflejó en su diario, sin atribuir a Franco la menor responsabilidad en el proyecto[11]. El viaje de Franco a Madrid era de paso para Palma de Mallorca, destinado por Azaña en calidad de comandante general de Baleares en puesto de superior categoría, lo que restablecía virtualmente su carrera al tratarse de un destino propio de un general de división. Azaña, por tanto, confirmaba con hechos la disposición favorable a Franco que había mostrado en su audiencia anterior.

«El general Franco viene a presentarse —escribe Azaña en la noche del 1 de marzo—. De paso para Mallorca. Hace dos días que está en Madrid. Se ha enojado mucho por la anulación de ascensos y eso que él no ha perdido más que unos cuantos puestos en el escalafón y sigue de general con todos sus derechos. No me ha hablado del asunto ni yo le he dicho nada. Tratamos de la situación militar de Baleares y de lo que ha de hacerse allí con urgencia[12]». Pero entre este comentario sobre Franco y el anterior que hemos tomado del diario de Azaña había ocurrido un grave suceso, el pronunciamiento del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Conocemos, por las conversaciones de Franco con su secretario militar, que Azaña había temido la implicación del entonces gobernador militar de La Coruña en el pronunciamiento. Cuando se convenció de que no hubo tal, premió a Franco con el destino a Baleares, aunque en sus «Memorias íntimas», es decir, los cuadernos raptados de las Memorias originales en la guerra civil, Azaña insinúa que el destino a Baleares se decidió para evitar tentaciones al general. El 19 de mayo de 1933 anota Azaña que ha comentado en consejo de ministros los informes de Franco sobre defensa de las Baleares: el jefe del gobierno sentía preocupación por las islas en caso de conflicto en el Mediterráneo, cada vez más posible por el belicismo de Italia y manifestó su deseo de visitar el archipiélago cuando encuentre tiempo.

Azaña inserta su siguiente mención a Franco el 19 de febrero de 1936, en su *Crónica de dos días* que refleja las consecuencias de la victoria del Frente Popular en las últimas elecciones generales de la República. Dice Azaña que conocía la implicación de los generales Franco y Goded en un golpe preparado para impedir la toma del poder por el Frente Popular; Franco era entonces, desde mayo de 1935, jefe de Estado Mayor Central, designado por

el ministro de la Guerra, José María Gil Robles. Pero el golpe, que iba a estallar en Cuatro Vientos, resultó un falso rumor. Azaña acababa de tomar posesión de la jefatura del gobierno de forma enteramente ilegal; no se había celebrado la segunda vuelta de las elecciones y el presidente de la República, Alcalá Zamora, le había confiado el poder, en su calidad de líder del Frente Popular, cuando el jefe del gobierno derrotado, Manuel Portela, había decidido abandonar su puesto por las buenas. Azaña conocía los movimientos de Franco que, en efecto, trataba de impedir ese atropello y quería declarar el estado de guerra en las guarniciones. Y ahí queda todo; el intento de Franco fracasó y Manuel Azaña no vuelve a nombrarle en sus escritos, entre otras cosas porque conocemos varios discursos de Azaña en el período del Frente Popular, durante el cual no encontró tiempo para confiarse a su diario[13].

La alusión siguiente se escribe el 31 de mayo de 1937. Azaña y Franco han variado sus posiciones anteriores: los dos eran ahora jefes de Estado, uno en cada zona de la guerra civil. Por lo general Azaña se refiere a Franco de forma impersonal, como encamación de la zona rebelde. En la fecha recién citada, Azaña acaba de sufrir en Barcelona el asedio de los anarquistas hasta que la llegada de fuerzas del gobierno enviadas por Largo Caballero han ahogado la pequeña guerra civil que se conoce como «sucesos de mayo». Se ha refugiado en La Pobleta, cerca de Valencia, donde escribe su famoso cuaderno de este nombre. Apunta la posibilidad de que Inglaterra y Francia traten de proteger a Franco para sustraerle «de la tutela alemana e italiana» como de hecho se cumplió en la fase final de la guerra civil, ya en 1939[14].

El 17 de junio siguiente, Azaña habla con don Ángel Ossorio y Gallardo y le reitera su pesimismo sobre las posibilidades de victoria en la guerra, una victoria que el Presidente ya había descartado cuando habló con el exministro monárquico, ahora al servicio del Frente Popular, a raíz de la pérdida de Talavera en los comienzos del mes de septiembre de 1936. Tan abatido se había mostrado entonces Azaña que Ossorio le replicó: «Entonces no queda más camino que tratar con Franco[15]».

Es importante detectar que, para Azaña, Franco es el vencedor de la guerra civil desde el verano de 1936. Disimuló cuanto pudo esta intuición, pero no la modificó nunca. El 17 de mayo de 1937, cuando agonizaba Bilbao, Azaña recibe al político socialista Fernando de los Ríos que le transmite su reciente conversación con Roosevelt: «Espero —decía el presidente— que si Franco triunfa establecerá un régimen liberal en España». Azaña se queda de piedra[16]. El 29 de junio el Presidente refleja una dramática conversación con Indalecio Prieto, nombrado el mes anterior, a propuesta de Negrín, ministro

de Defensa Nacional, por quien sabe noticias desalentadoras sobre la defección de los nacionalistas vascos en la caída de Bilbao. El líder socialista asturiano Belarmino Tomás ha revelado a Prieto que el pensamiento de los jefes del nacionalismo vasco, expresado por Leizaola, consistía en formalizar «un acuerdo con Franco para el País Vasco», pero ya era tarde; el País Vasco terminaba de perderse con la toma de Bilbao por el enemigo[17]. El 15 de julio informa Azaña de que según un hijo del general Caridad Pita, comandante general de La Coruña el 18 de julio, su padre había sido fusilado lo mismo que el jefe de la División, general Salcedo, «por orden de Franco que lo estimaba necesario para su política militar[18]». El 26 de julio Azaña recibe al embajador de México, muy preocupado por la repercusión que una victoria de Franco pudiera tener en la América española, incluso en México[19]. Tres días más tarde, el jefe del gobierno, Juan Negrín, despacha con Azaña y le da cuenta de la posición cada vez más antiespañola que exhiben los políticos catalanes (Companys) y vascos (Aguirre, que acaba de pasar por Barcelona). Las expresiones del doctor Negrín son tremendas. «Está —escribe Azaña— muy irritado por los incidentes a que ha dado lugar el paso de Aguirre por Barcelona. Aguirre —dice— no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca —agrega— lo que llaman españolista, ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si estas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros o nuestros hijos o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero y más dinero…»[20].

Azaña, en lo alto de la presidencia de la República, carecía, aunque menos de lo que pensaba, de poder real durante el transcurso de la guerra civil. Por eso muchas veces en su diario se explaya en acontecimientos anteriores durante la fase de la República en paz. El 7 de agosto de 1937 refiere una conversación con Diego Martínez Barrio, en la que hablan del efímero gobierno que éste trató de formar en la noche del 18 de julio de 1936, una vez formalizada la dimisión de Casares Quiroga. Martínez Barrio se queja de que la presión popular en la calle le desbancó del gobierno y entonces se marchó a Valencia para tratar de impedir allí el triunfo de la sublevación. Azaña le desmiente y afirma que ni él ni nadie le había encargado de semejante misión y que además el presidente de las Cortes exagera mucho su eficacia en aquel empeño. En su reciente discurso del 18 de julio de 1937, Franco había aludido a esa acción de Martínez Barrio en Valencia, pero según Azaña, Franco se equivocaba; el nombramiento de Martínez Barrio para presidir la Junta

Delegada del gobierno en Levante fue posterior[21]. Es muy curioso que en pleno verano de 1937, cuando se estrellaban una tras otra las batallas de penetración ideadas por el Estado Mayor de la República para salvar la amenaza enemiga contra el Norte, la gran preocupación de los números uno y tres de la República fuera establecer lo que realmente había sucedido en los primeros días de la guerra civil, algo más de un año antes. El 13 de agosto, Azaña habla con el embajador en Moscú, Pascua, según el cual, la dirección del gobierno soviético cree que «Inglaterra juega por Franco» y fomenta la restauración de la monarquía en España después de la victoria de Franco. Los dos interlocutores se explayan en problemas de política exterior cuando la República casi entraba ya en agonía[22]. Unos días más tarde, las altas conversaciones de Estado, que Azaña mantiene con el embajador en Londres, Azcárate, y el doctor Giral, se centran en las posibilidades de restauración monárquica, con o sin Alfonso XIII, y en las desavenencias entre los jefes falangistas de Sevilla, Burgos y Salamanca, sin saber, por lo visto, que a mediados de abril la crisis de mando en Falange había sido definitivamente descabezada por Franco. Azaña vivía en otro mundo, parecía dar por descontada, junto a sus interlocutores, la victoria del caudillo enemigo, al que se refiere como cifra de esa victoria, no como a persona, ni siquiera como enemigo[23].

El 26 de agosto Azaña se queja de que el gobierno autónomo vasco solicita que le giren a Barcelona cien millones, cuando ya ha perdido todo su territorio; y se extraña, no sin razón, de que el armador vasco Ramón de la Sota pida que el gobierno de la República salve sus barcos «en vista de que Franco le persigue[24]». El 8 de septiembre Azaña comparte con algunos ministros de su gobierno los temores de que el enemigo, una vez que consume su dominio del Norte, se revuelva contra la zona centro-sur y la corte en dos, lo que supondría el golpe mortal y definitivo para la República, como en efecto sucedió en abril de 1938[25]. Al día siguiente, Azaña recibe al presidente de la Segunda Internacional, Louis de Brouckére, que le informa sobre la impresión que los telegramas de Mussolini a Franco para celebrar las victorias del Norte han producido en Francia[26]. Una vez más, Franco no es el enemigo absoluto, sino la referencia de la «otra España». En esta época las menciones a Franco por parte de Azaña son casi diarias. El mismo día de la cita anterior, Azaña se ríe de Largo Caballero, según el cual las mujeres de los moros que combaten a favor de Franco van a venir a España para que sus maridos se subleven contra el antiguo jefe del ejército de África.

Azaña no comparte los entusiasmos de Prieto que trama la división de la zona rebelde mediante el envío de algún líder falangista que se presenta como enemigo de Franco[27]. El 27 de septiembre, Negrín despacha con Azaña después de un viaje a Europa y los dos discuten sobre problemas de política internacional que se refieren a la indecisión de Francia e Inglaterra ante la posibilidad de una guerra europea[28]. Azaña no cree en la reunión de Cortes que, sin contenido alguno, se han celebrado en Valencia a primeros de octubre de 1937. Y se indigna con el ministro navarro Irujo, del PNV, que sigue empeñado en convalidar el pacto de Santoña entre los batallones vascos cercados y el mando italiano, pacto que fue deshecho por orden de Franco[29]. Azaña gasta mucho espacio de su diario del 6 de octubre de 1937 en ridiculizar las opiniones absurdas de un falangista monárquico a quien Prieto pretende enviar a zona nacional para que divida a sus compañeros y cree problemas a Franco. De esa página de diario lo único que queda claro es que ni Azaña ni Prieto tenían la menor idea de lo que era realmente la zona nacional; a Dionisio Ridruejo y Ramón Serrano Suñer les bastarían después unos párrafos para describirlo con justeza, aun cuando uno y otro ya estaban alejados de Franco[30].

El 21 de octubre, Azaña sabe que se ha hundido la resistencia republicana en Asturias. Azaña piensa cada vez más obsesivamente en acabar la guerra por una mediación extranjera, que ya había intentado en vano al enviar a Londres, sin conocimiento del gobierno, al profesor Julián Besteiro[31].

Termina el Cuaderno de La Pobleta y, cuando se va a cumplir inexorablemente la premonición de Azaña sobre el corte de las dos zonas (en abril de 1938), el Presidente huye de nuevo, ahora a Barcelona, donde le encierran en el palacio de Pedralbes, que da nombre al siguiente cuaderno, esquemático y entrecortado, cada día con menos esperanza. El 7 de junio, Azaña vuelve a su expresión obsesiva: «el triunfo de Franco[32]».

El 14 de agosto, Azaña ve visiones: un complot organizado «por orden de Franco» que bastante ocupación tenía en aquellos momentos con la batalla del Ebro[33]. El 1 de diciembre de 1938 llegan ya las vísperas del final. Franco ha liquidado victoriosamente la batalla del Ebro, las democracias occidentales han aceptado las imposiciones de Hitler en Múnich y la Unión Soviética, ante esa cobardía, tiene ya decidida la aproximación (engañosa y dilatoria) a Hitler, lo que comporta el abandono completo de su propia causa en España. Negrín rompe virtualmente relaciones con Bélgica cuando cree saber que la política inglesa pretende el reconocimiento de Franco lanzando por delante a algunos países menores[34]. La última mención de Azaña a Franco en sus

diarios es del 12 de enero de 1939, cuando ya ha saltado en pedazos todo el frente catalán de la República y faltan un par de semanas para la caída de Barcelona. Azaña, fuera de la realidad, se entretiene en fantasmagorías sobre política internacional. Una semana justa más tarde termina su último diario con el sonido de los obuses que caen sobre Igualada[35].

En sus diarios de la República y la guerra civil, como acabamos de comprobar, Manuel Azaña no se expresa con la más mínima agresividad contra Franco. Le nombra muchas veces, jamás le insulta. En sus discursos de guerra, en su famoso ensayo escrito en 1937 *La velada en Benicarló*, en sus importantísimos artículos sobre la guerra de España, que con el ensayo citado se incluyen en el tomo III de las *Obras completas* editadas en México por Oasis en 1966, no se menciona a Franco si no he repasado mal los textos. Azaña no hizo de la guerra civil una cuestión personal.

Su actitud hacia Franco recuerda la del primer jefe militar de la República, el general Vicente Rojo. En el primero de sus libros, escrito poco después de la guerra civil, *Alerta los pueblos*[36] el general Rojo, que había sido amigo de Franco, insertó un capítulo final, *Las causas del triunfo de Franco*, que es un trenzado de elogios a la ejecutoria militar y política de Franco durante la guerra, en contraste con la falta de unidad de mando y el desgobierno de la zona republicana.

Franco no agredió verbalmente a Manuel Azaña ni, por supuesto, a Vicente Rojo. Aceptó como resultado de una acción de guerra el rapto de los diarios de Azaña que realizó un funcionario del consulado general de España en Ginebra, donde los guardaba con imprudencia el cuñado de Azaña, Cipriano Rivas Cherif. Franco aprovechó la presa como un arma de guerra contra Azaña, de quien se extractaron los fragmentos que podían resultar más comprometedores, que fueron publicados en la prensa y reunidos en el volumen *Memorias íntimas de Azaña*, publicadas en 1939 por la Editora Nacional, poco después de acabada la guerra civil en 1939 y en Madrid. Franco se quedó con el original de los diarios raptados en Ginebra que fueron entregados a la ministra de Educación y Cultura del gobierno Aznar, poco antes de que se escriban estas líneas. En la edición de 1939, los encargados de acondicionar los extractos a los objetivos de la propaganda asumieron las tesis del general Mola sobre Azaña, que se resumían en el calificativo de «monstruo» dirigido a Azaña por Mola en sus libros publicados durante la República y por tanto en vida de Azaña, perseguido con saña por las derechas y por los militares que, como Mola, se consideraban perseguidos y perjudicados injustamente durante el primer bienio de la República.

LAS AGRESIONES DE PRIETO A FRANCO Y A DON JUAN

Si Azaña, que era indudablemente un enemigo profundo de Franco, supo dominar su ánimo y refrenar su pluma cuando tuvo que mencionarle en sus palabras y sus escritos, el impetuoso político socialista Indalecio Prieto pasó del halago al vituperio de Franco con la misma vehemencia a que las circunstancias políticas le impulsaban.

Indalecio Prieto nos revela en la colección de sus obras principales, que le compilaron sus amigos, los socialistas españoles en México, después de su muerte en 1962, el odio que acabó por sentir hacia tres personajes españoles: el rey don Alfonso XIII, el general Franco y el hijo del primero, es decir, don Juan de Borbón. Contra Alfonso XIII el aborrecimiento se remontaba a la adolescencia: cuando don Alfonso visitó Bilbao en compañía de su madre la reina Regente doña María Cristina de Austria; les pudo ver el jovencísimo Prieto, asturiano recriado a orillas del Nervión. Prieto, de familia muy humilde, quedó muy impresionado al observar personalmente cómo el joven rey trataba despectivamente a su madre la Reina y concibió por don Alfonso un desvío que acabó por convertirse en enemistad profunda.

Sus sentimientos hacia Franco, cuando le conoció, fueron completamente diferentes. El primer encuentro tuvo lugar en el verano de 1921, cuando a raíz del desastre de Annual, Prieto, que era diputado socialista por Bilbao, acudió a Melilla como corresponsal de *El Liberal* de Bilbao, propiedad del millonario Horacio Echevarrieta, quien le había confiado además una delicada misión: negociar con Abd-el-Krim la libertad de los prisioneros españoles del Desastre que el jefe rifeño custodiaba en su pueblo de Axdir, a la vista del peñón español situado en el centro de la bahía de Alhucemas. Prieto, junto a otros periodistas como Manuel Aznar, fueron testigos de la eficacia del Tercio de Extranjeros que, a las órdenes de Franco, intervino en las operaciones para la reconquista del territorio de Melilla, siempre en vanguardia. Quince años después, en la primavera de 1936, habían corrido rumores sobre la presentación de Franco, a quien el Frente Popular había alejado a la comandancia general de Canarias, dentro de una candidatura de la derecha en las elecciones parciales de Cuenca. Con el fin de disuadirle, Prieto pronunció un discurso de tonos patrióticos en esa ciudad el 1 de mayo, en el que recordó el valeroso comportamiento de Franco en 1921 y le aconsejó que se apartase de intervenir en la conspiración contra el Frente Popular de la que Prieto,

famoso por su excelente información, conocía bastantes rasgos significativos que apuntaban a Franco.

La exaltación de Franco por Prieto en 1921 y 1936

Conviene reproducir los párrafos de ese discurso en los que Prieto se refiere a Franco en tonos muy elogiosos:

> «Merece la pena, luego de haber remarcado el sentido de menosprecio que los elementos directores de los partidos derechistas acusan con la inclusión en sus candidaturas de los nombres del general Franco y del señor Primo de Rivera (José Antonio), consagrar unos minutos de atención a tan curioso fenómeno político. Ha desaparecido de la candidatura de Cuenca el nombre del general Franco. Yo me felicito sinceramente de tal desaparición. He leído en la prensa manifestaciones de este general, según las cuales su nombre se incluyó en la candidatura por Cuenca contra su voluntad, sin su autorización. No tengo por qué poner en duda la sinceridad de estas manifestaciones, aunque he de decir también, no pudiendo recatar la sinceridad mía, que hubiese preferido que esa rectificación del general Franco se hubiera producido con anterioridad al justo acuerdo de la Junta Provincial del Censo, que le eliminó de la candidatura. No he de decir ni media palabra en menoscabo de la figura del ilustre militar. Le he conocido de cerca, cuando era comandante. Le he visto pelear en África; y para mí, el general Franco, que entonces peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también general Millán Astray, llega a la fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. Tengo que rendir este homenaje a la verdad. Ahora bien, no podemos negar, cualquiera que sea nuestra representación política y nuestra proximidad al Gobierno —y no lo podemos negar porque al negarlo, sobre incurrir en falsedad, concluiríamos por patentizar que no nos manifestábamos honradamente—, que entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone en su presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo. El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el ejército, es hombre que, en momento dado, puede acaudillar con el máximo de probabilidades —todas las que se derivan de su prestigio personal— un movimiento de este género.
>
> »No me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de tal naturaleza. Acepto íntegra su declaración de apartamiento de la política. ¡Ah!, pero lo que yo no puedo negar es que los elementos que, con autorización o sin autorización suya, pretendieron incluirle en la candidatura de Cuenca, buscaban su exaltación política con objeto de que, investido de la inmunidad parlamentaria, pudiera, interpretando así los designios de sus patrocinadores, ser el caudillo de una subversión militar.
>
> »Si esto es así, y su evidencia resulta mayor después de las declaraciones del general Franco, ¿qué valor tienen las protestas de legalidad que constantemente vienen formulando, cuando menos en el Parlamento, las fuerzas de derecha? Si las fuerzas de derecha, en vez de reñir la batalla en el terreno limpio de las ideas, buscan cobardemente un caudillo militar que provoque una subversión y que se ponga al frente de ella, ¿qué valor atribuir a las manifestaciones de sus líderes? ¿No pierden, en realidad, toda virtud sus palabras, cuando éstas no resisten siquiera el primer choque con los hechos dimanados de su conducta? ¿Qué se busca aquí? A través de una provincia, cuya ciudadanía se supone reducidísima por el sometimiento de la masa general de los electores a las personas que mantienen un régimen caciquil, se busca la investidura parlamentaria para un caudillo militar. El problema tiene, a mi juicio, gravedad extraordinaria en las circunstancias presentes y por eso paro mi atención en él[37]».

La prensa del ala marxista del socialismo —concretamente el diario *Claridad*— rechazó airadamente el discurso de Prieto y sus tonos patrióticos.

Pero no cabe negar la clarividencia del líder socialdemócrata del PSOE, al pronosticar el inminente caudillaje de Franco, que ya estaba en plena conspiración, aunque aún tardaría unas semanas en tomar su decisión definitiva para el alzamiento.

«Bufonadas y megalomanía de Franco»: la invectiva de 1944

Al estallar la guerra civil, para la que Franco se sublevó en Las Palmas durante la madrugada del 18 de julio de 1936, Prieto pudo comprobar el exacto acierto de sus predicciones. A primeros de agosto y cuando aún no poseía nombramiento oficial alguno, Indalecio Prieto se convirtió en gran animador y coordinador del esfuerzo de resistencia en la zona republicana y pronunció un discurso famoso en que pronosticaba la victoria ineludible del Frente Popular por su abrumadora superioridad de medios militares, económicos y sobre todo financieros. Esa superioridad era cierta, pero Prieto no tuvo en cuenta el factor moral que resultó mucho más vivo y operante en el bando rebelde —gracias al respaldo de la Iglesia frente a la absurda represión de la zona republicana— y a la unidad, eficacia y coordinación de los sublevados, incluso en los meses anteriores a que otorgasen a Franco el mando único. La victoria de Franco en 1939 y su firme mantenimiento en el poder, pese a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, sacaron de quicio a Prieto que actuó a partir de 1939 como el máximo portavoz del exilio contra Franco. Para ilustrar esta posición de Prieto voy a reproducir dos de sus artículos, uno al principio de la lucha del exilio, el 4 de agosto de 1944 y otro casi en vísperas de la muerte de Prieto, el 19 de julio de 1961.

El primer artículo se titula *A Francisco Franco. «OYE, TÚ»*, y consiste en una desaforada sucesión de invectivas características del estilo agresivo de que Prieto siempre hizo gala en su lucha política y parlamentaria.

> «OYE TÚ, FRANCO… Al dirigirme a ti echo de menos un pronombre personal adecuado, porque no me satisface tratarte con el de segunda persona. Cierto que el tuteo significa trato desdeñoso, pero otras veces indica amistad, cariño y adoración. De tú hablamos a nuestros íntimos, a nuestros hijos y a nuestras esposas, y los creyentes, en sus altas imploraciones, exclaman con reverencia: "¡Tú, Dios mío!", "¡Tú, Virgen mía!". Por poco despreciativo no me sirve bien el tú para hablarte; pero a falta de pronombre más irrespetuoso echo mano de él. Aunque te hayas colgado el tratamiento de excelencia, sólo te lo aplican tus cómplices en la tiranía gobernante y los cretinos que han convertido la prensa española en sentina de adulaciones hediondas. Los demás, toman a guasa eso de "Su Excelencia el Caudillo" y "Su Excelencia el Jefe del Estado". Pues bien, oye tú, Franco».
>
> *Paco, el chacal*
>
> «Tengo a la vista un ejemplar del diario madrileño *Ya* correspondiente al 2 de octubre de 1943. En los ángulos de su primera página figuran anuncios impresos en rojo. Al ser doblado el ejemplar tales anuncios repintaron las columnas del texto formadas por tu discurso de la víspera al Consejo

Nacional de Falange. El fondo negro de la plana de *Ya* con chafarrinones rojos simboliza a España. Luto y sangre. Para mayor perfección del símbolo tres retratos tuyos presiden la página. Y manchas rojas maculan tu blanca casaca de gala y emborronan párrafos de tu discurso, iniciado con esta insigne petulancia: “En el momento en que damos al mundo el ejemplo más grande de sabiduría…”.

»Por lo visto crees el crimen equivalente a sabiduría, cuando responde simplemente a falta de corazón, tu principal característica. Si alguien quisiera elegir un tipo antitético al español neto, te elegiría a ti, no lo dudes. Porque el español es apasionado y tú eres impasible, porque el español tiene sangre cálida, de león y tú la tienes fría, de serpiente; porque el español es de fondo generoso y después de la pelea olvida y perdona, y tú, en cambio, ni olvidas ni perdonas, por llevar anegada en crueldad el alma.

»La mayor desventura de España no proviene de haber derrotado el fascismo al régimen republicano, sino de que tú presidas la facción triunfante. Con Sanjurjo —estoy segurísimo— no ocurriría lo que contigo, que, al cabo de cinco años de tu exaltación al poder, sigues ordenando fusilamientos. Jamás sucedieron tamañas monstruosidades tras las contiendas civiles que nos desgarraron en el siglo XIX. Se peleó en ellas con furia, pero no tuvieron por séquito un solo fusilamiento; en cambio, los dispuestos por ti se cuentan a miles. No hubo entonces saña contra los vencidos. Tú los exterminas. Al vencedor de la última guerra civil del siglo XIX se le llegó a titular, porque no fue sañudo como tú, Alfonso XII, el Pacificador, a ti, porque te nutres de carne muerta, se te podrá llamar Paco, el Chacal. Y lo peor, lo más terrible es que lejos de pacificar a España vas cavando y cavando su sima de odios hasta hacerla insondable».

El valor de la vida humana

«No te merecen respeto vivos ni muertos si son enemigos tuyos. A cuántos fusilas los escarneces, diciendo, para justificarte, que pagan con la vida asesinatos y latrocinios, aunque hayan sido verdaderas luminarias de honradez, como don Juan Pesset, doctor en todas las facultades universitarias y hombre de bondad infinita, cuyo fusilamiento horrorizó a Valencia entera, a la de izquierdas y a la de derechas, que lo adoraba por su gran saber y su acrisolada virtud. Pero para tu venganza bastaba con que Pesset fuera diputado republicano.

»¿Dónde has visto que un jefe de Estado, olvidando la altura de su sitial, se produzca como tú te has producido en ese discurso, cubriéndonos de injurias a los españoles —cien veces más españoles que tú— que nos hemos expatriado para librarnos de tu furia vengativa? Quizá encuentres ejemplo excepcional en Hitler, tu maestro.

»Te duele nuestra propaganda. Tanto mejor. Al quejarte de que se intenta “mixtificar las características espirituales, nacionales y sociales de nuestro régimen” —del tuyo—, dices que “ello es fruto, en gran parte, de las intrigas que desarrollan desde el extranjero los autores morales, cuando no materiales, de los crímenes de la revolución roja” y añades haber deseado que “un silencio piadoso llegara a sepultar el recuerdo de criminales tan destacados”. Quien debería callar eres tú, no nosotros. Porque si a ti y a nosotros nos alcanzaron salpicaduras en excesos de violencia durante la lucha, a nosotros no nos llegan las de esa fría e implacable venganza que presides desde hace cinco largos años.

»Mas vamos a cuentas sobre lo que durante la guerra aconteció. Un pueblo enloquecido al ver despedazados a seres queridos bajo el bombardeo de aviones italianos y alemanes, que tú llevaste a España para que hiciesen experiencias en carne española, desató ciegamente su frenesí contra reales y supuestos cómplices de tan tremenda alevosía. Fue el pueblo, sin que los gobernantes republicanos, desprovistos de medios coercitivos, pudiesen contenerlo. Pero en tu campo fuisteis tú y jerarcas subalternos a tus órdenes, quienes no sólo permitisteis, sino que decretasteis terribles matanzas incluso en regiones, cual Navarra, donde ni siquiera se intentó oponer resistencia al levantamiento sedicioso, matanzas que obedecían a planes previamente trazados, según revela el cura de Azpeitia, don Ignacio de Aberrigoyen, testigo de fusilamientos en Pamplona, y según se descubre con claridad meridiana en la biografía del general Mola, escrita por su secretario particular Iribarren.

»El 10 de agosto de 1936 hablé públicamente por última vez antes de ser ministro, desde un micrófono instalado en el Ministerio de la Guerra. Estaban en auge las matanzas en masa por los facciosos bajo tu mando y llegaba su eco a Madrid. Pedí con toda la fuerza de mi corazón que

aquella conducta criminal no se imitara, que se tuviera el pecho duro para el combate, pero el corazón sensible a la piedad, porque cuando el corazón no alberga tan tierno sentimiento se extingue en el hombre el rasgo sublime que le hace sobresalir por encima de las bestias… ¿Dijiste tú algo parecido? ¿Lo dijo, acaso, alguno de los tuyos? ¿Te valiste de tu autoridad para contener semejantes matanzas? No, la utilizaste para fomentarlas, y sin que temblara la voz de tus labios dijiste que era indispensable aniquilar a un millón de españoles. Estás cumpliendo tu palabra.

»Ahora, para persuadir al mundo de que tú eres un bendito y nosotros unos malvados, exhibes cifras de sacerdotes que sucumbieron durante la furiosa contienda. ¿Es que sólo te conmueven esas víctimas? Pues yo me apiado de todas. Para mí la vida humana tiene igual valor con hábitos religiosos que sin ellos. Para ti, por lo visto, no, a pesar de dártelas de caballero cristiano. Cristo no distinguió de vestiduras para amar a los hombres».

Rasgos de increíble magnanimidad

«Aún hay en tu discurso —discurso negro manchado de rojo— palabras más cínicas. Son éstas: "Habíamos ordenado a nuestros representantes diplomáticos en el extranjero prestaran a los españoles expatriados un benévolo amparo que les permitiera rehacer su vida y en el destierro redimir sus culpas, pero ante sus campañas de difamación hemos de recordarlo para que los españoles no lo olviden y el mundo conozca la catadura moral de las gentes que acogen". Te fatiga pronto la benevolencia. Cansado de la que nos prodigaste —¡oh, magnánimo y excelentísimo señor! —, pides al mundo que nos rechace, empujándonos hacia tus ergástulas y cadalsos. ¿Quién osaría dudar de las piadosas instrucciones que en nuestro favor diste a tus representantes diplomáticos? Las conocemos bien y si las hemos silenciado achácalo a repulsiva ingratitud. Merced a caritativas instrucciones a tus embajadores lograste —cito sólo a los más destacados— que te fueran entregados Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, Luis Companys y Juan Peyró, y siendo inagotable tu caridad, decidiste fusilar a los cuatro para que no pensaran más en este mísero mundo. Nada te detuvo en tan cristiano designio, ni las alegaciones hechas ante el Consejo de Guerra por devotos tuyos, entre ellos el escritor Wenceslao Fernández Flórez, salvado por Zugazagoitia desde el Ministerio de la Gobernación, ni la prueba plena de que Cruz Salido jamás había desempeñado función oficial alguna, reduciéndose todo a haber sido secretario particular mío, ni la honradísima conducta de Luis Companys, ni la noble austeridad que guió los pasos de Peyró desde que tuvo uso de razón hasta que se enfrentó con los fusiles ejecutores de tu justicia… ¡Qué bella alma la tuya! ¡Y qué perversa la nuestra que, sin parar mientes en tu generosidad, se enfanga en la difamación!

»Rodeado de tu guardia mora y cubierto con atavíos propios de grandes solemnidades llegaste al palacio de Falange, para decir de nosotros, los españoles expatriados: "Desde las columnas de la prensa hostigaron al crimen y al saqueo, estipularon con las hordas la impunidad para el asalto de las cárceles y el asesinato de los presos…, y en trance de derrota abandonaron cobardemente a los que habían arrastrado a la lucha para disfrutar en el extranjero del fruto de sus expoliaciones". Pretendías, por lo visto, que no hubiéramos huido de ti para mejor saciar tu sed de venganza. Querías más víctimas, más, muchas más. Somos cobardes, ladrones, asesinos. Despáchate a tu gusto, vertiendo desde tu trono insultos a granel. Que tú nos insultes constituye para nosotros un honor. La mejor honra que podemos alcanzar es que nos distingas con tu rencor. Suscitarlo constituye limpio blasón. Acaso ignoras que jamás hubo español más odiado que tú. Fernando VII, el charrán, era un caballero comparado contigo. La historia te inscribirá rodeado del desprecio de España y de la execración del mundo. En una carta confidencial sustraída en Hendaya a cierta marquesa procedente de Suiza, el infante Juan te llamaba traidorzuelo. Lo sabes, porque esa carta la puso en tus manos la Gestapo. ¡Figúrate cómo te calificará el pueblo! ¡Es inútil que vociferes, trágico enano!

»Más cosas te diría, pero basta, basta. Porque oye tú, Franco, no puedo seguirte en tu disertación. Me lo impide el asco**[38]**».

Los enemigos de Franco le han acusado siempre de hacer todo lo posible para perpetuar la guerra civil. Esos enemigos, de los cuales Prieto era el más vociferante, hacían exactamente eso. La diferencia con la actitud de Manuel

Azaña, que en sus escritos íntimos y en sus manifestaciones públicas de 1936 hasta su muerte en 1940 no pronunció un solo insulto ni dejó escapar un solo desahogo contra Franco —ya lo hemos comprobado— es más que notoria. Azaña hablaba del odio y el miedo como causas principales de la guerra civil. Prieto es un conspicuo portavoz de esos dos sentimientos. Desde sus acusaciones, perfectamente unilaterales (reduce los crímenes de su zona a una reacción explicable contra los bombardeos de la retaguardia, no dice una palabra sobre el terror organizado en zona roja, atribuye los desmanes a la ira popular, mientras Azaña denuncia los crímenes de su zona, hasta los meses finales, y los atribuye a designios del mismo gobierno), los enemigos de Franco que siguieron a Prieto han repetido en la misma línea y con los mismos excesos, hasta hoy mismo, el argumento de la represión absoluta, que se ha enquistado en la convicción de muchos españoles que carecen de ideas precisas sobre esa represión. Pero no es ésta la ocasión de discutir ese problema histórico, cosa que hemos hecho extensamente en otras obras, por ejemplo en la *Historia esencial de la guerra civil española* y reiteramos en este libro; ahora estamos detectando los orígenes del odio contra Franco en una de las principales y más tenaces fuentes de ese odio, el líder socialista Indalecio Prieto, que para nada recuerda la decisiva intervención de miembros de su escolta personal en el asesinato de Calvo Sotelo, la señal para la guerra civil.

La última embestida de Prieto contra Franco

Durante toda su vida en el exilio, Prieto no varió su actitud de implacable hostilidad contra Franco, el militar a quien tanto había elogiado de 1921 a 1936. Lo muestra este artículo, *Una carta sin miramientos, a mi colega Francisco Franco*, publicado en 1961 cuando Prieto sentía ya la proximidad de su muerte.

«¿De manera que has sido periodista? No lo sabía. Mas habiéndolo dicho tú lo creo, ya que, como has demostrado con creces, nunca faltas a la verdad. Se lo dijiste recientemente a *Mr*. William Randolph Hearst, Jr., propietario, por herencia, de una cadena de periódicos norteamericanos. Pero ¿fuiste periodista al modo que lo es el citado junior, quien, por notoria incapacidad profesional, llevó consigo ante ti, como ayudantes, a los señores Considine y Fliegere, encargados de formular las preguntas y de copiar las respuestas que tú dieres?

»Es corriente que los empresarios de periódicos blasonen de periodistas, y ello no es privativo de América, pues en España hemos tenido el caso de *ABC*, a cuyo último director, Torcuatito Luca de Tena —más inteligente que su padre Juan Ignacio y mucho menos tonto que su abuelo Torcuato— destituiste tú por no complacerte su gestión.

»El viejo Torcuato, refinador de aceite de oliva y fabricante de agua de azahar, amplió sus negocios financiando periódicos, en empresa acrecentadora de su vanidad al valerle un título de

marqués y una senaduría vitalicia. También se las daba de periodista, aunque todo su esfuerzo literario se limitó a cartas amorosas dirigidas a tiples zarzueleras y cupletistas en boga.

»"En cuanto a la prensa —manifestaste a Hearst y a sus mentores o coadyuvantes—, los que la conocemos por dentro, como ustedes y como yo, pues he actuado de periodista y he dirigido algunas publicaciones, sabemos de sobra la censura que sobre ella ejercen dueños y directores". Pudiste añadir: y los tiranos. Mas lo callaste, sin duda para no mentar la cuerda en casa del ahorcado.

»Me asombra la inmensidad de mi ignorancia por donde navego constantemente. ¿Cómo pude ignorar hasta hoy esa tu cualidad de periodista, perteneciendo yo al gremio desde hace más de sesenta años? ¡Se le escapan a uno tantas cosas aun viviendo entre ellas! Pero, en fin, aunque tardíamente, admito la validez de esa credencial que acabas de exhibir y a título de colega me permito tutearte. Colega y no compañero, porque esta palabra tiene cierto valor ritual en el campo socialista, donde milito desde antes de ingresar en el periodismo, y acaso la rechaces queriendo evitar confusiones dañosas a tu prestigio, a pesar de la modernidad ideológica que ostentas como nuevo galardón.

»Sin embargo, no concedas mucho valor a esa credencial, porque el periodismo —salvo excepciones, y creo que tú no figuras entre ellas— constituye un gran colector de medianías y fracasados en diversas ramas del saber, pese a lo cual mucha gente tiene a gala titularse periodista. Antiguamente —no sé si también ahora— apenas había gobernador civil que al posesionarse del cargo no llamara compañeros a los periodistas provincianos que recibía.

»Recuerdo a una de esas autoridades que lo fue en Vizcaya el año 1917. Se llamaba Javier Molina y era de Huelva, donde secundaba al cacicato casi omnímodo del exministro conservador Manuel Burgos y Mazo. Fui a entrevistarle en el hotel Roma, de Madrid, al conocer su nombramiento y me mandó subir a la habitación. "Perdóneme usted —me dijo— por recibirle en calzoncillos". Cuando yo, sorprendido por tan extraña recepción, balbuceaba excusas, él se quitó los calzoncillos colmando mi aturdimiento. Volví a verle poco después en Bilbao, ya posesionado del Gobierno civil. Mostrábase extrañado de que los obreros de Altos Hornos tuviesen salarios que cuadruplicaban o quintuplicaban el de los campesinos de su tierra andaluza y que exigieran mayor retribución. "He tenido que aprender —añadió, como si se tratara de arduo problema— qué es siderúrgico y qué es metalúrgico". Se estaba gestando ya la huelga general revolucionaria de aquel agosto. Al volver a su despacho, tras copiosa comilona, encontró Molina un montón de telegramas cifrados con la indicación "Descifre usía personalmente". Pero él no tema la cabeza despejada para manejar claves y se acostó, dejando la tarea para el día siguiente. Al amanecer quedó atónito por la paralización de todo trabajo. Los telegramas eran de Sánchez Guerra, anunciándole desde el Ministerio de Gobernación y ordenándole tomar urgentes disposiciones para contrarrestarla. No sé si aquel formidable movimiento huelguístico le sorprendió con los calzoncillos puestos o quitados. Como inmediatamente se proclamó el estado de guerra, pasando todas las atribuciones gubernativas al gobernador militar, el civil se liberó de preocupaciones. El único telegrama que después le llegó fue el de su destitución… Mi manía por las anécdotas me ha hecho intercalar una en esta carta que, sin miramientos, dirijo a mi colega Francisco Franco.

»Ningún periodista tuvo en país alguno de la Tierra más influencia sobre diarios y revistas que tú en España, aunque no escribas ni sepas escribir. Porque los directores de cualesquiera publicaciones los nombras y los destituyes tú, y los redactores deben estar provistos del carnet de Falange. Antes cité la destitución que personalmente decretaste del director de *ABC*, Torcuatito Luca de Tena, a quien reemplazaste con Luis Calvo, que estuvo preso en Londres por espionaje a favor de Alemania durante la última guerra mundial y que se libró de la horca gracias al influjo del duque de Alba, a cuyo servicio estaba en la Embajada española. Alba era ajeno a los manejos de su subordinado, mas no así el ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Serrano Suñer, que —en abril último, de acuerdo contigo, preparó el viaje clandestino del general francés Salan, desde Madrid a Argel, para sublevarse en dicha ciudad africana— hacía ir y venir constantemente entre Londres y Madrid a Luis Calvo para aportar noticias que interesaban a Hitler, hasta que cierta tarde, al descender del avión en la capital de Inglaterra, un policía que iba vigilándole desde Barajas le sujetó la muñeca con férreas esposas al diminuto y avisado Calvito y lo llevó a la cárcel.

»El historial de Calvo lo conoces tan bien o mejor que yo. Su nombramiento de director de *ABC* ¿lo hiciste para recompensarle tan laudable comportamiento de espía? ¿Se lo justificaste a lord Home, titular del Foreign Office, cuando éste te cumplimentó semanas atrás? Lástima grande si lo callaste, no sumándolo a cuántos merecimientos contrajiste con los aliados en aquella sangrienta contienda.

»Has dicho a *Mr*. Hearst y lo ha copiado *Mr*. Considine: "Los sucesos europeos y mundiales de los últimos treinta años son consecuencia natural de la guerra pasada. Se fue a ella para destruir un poder que ponía en peligro la vida de las naciones de Europa y que ya había agredido y ocupado a dos de ellas". ¿Cómo explicas que te aliaras entonces con ese poder agresivo que ponía en peligro a Europa? Porque indiscutiblemente cooperabas a él. Sin embargo, ahora has dicho a *Mr*. Hearst *and company*: "Está bien claro que España no rehúye nunca sus responsabilidades en la defensa de Europa". ¿No te parece el vocablo "nunca" un adverbio demasiado categórico?

»"Nuestra nación —agregaste— se encuentra en una situación periférica de gran importancia estratégica y como tal contribuye a la defensa de Occidente". Esta situación de siempre, pues no la ha producido ninguna conmoción sísmica de que se guarde memoria, la haces girar como los caballitos de un tiovivo. Antes, el Occidente que mencionas no era para ti otra cosa que un conjunto de "democracias podridas" según calificabas a los países que se batían contra tu compinche Hitler, a quien ofreciste un millón de bayonetas para defender al amenazado Berlín. Cuando esas democracias comenzaron a pudrirse de veras fue cuando te tomaron bajo su protección.

»En realidad, permíteme que te lo diga, debiste comparecer como criminal de guerra ante el tribunal de Núremberg. Pero ni ellos reclamaron tu comparecencia allí ni tampoco Rusia, a la cual y a su líder Jruschov le haces igualmente carantoñas, tú sabrás por qué, si bien no hayas llegado al servilismo a que llegaste ensalzando a Hitler. Considerada la guerra de España como prólogo de la mundial, debían haber computado los crímenes de tu bárbara represión, midiéndolos por el rasero de Núremberg. Los genocidios cometidos por Eichmann y por su jefe Himmler, a quien tanto agasajaste en Madrid, los conociste a tiempo y no hirieron tu conciencia cuando, entre alabanzas que constituían afrenta a la humanidad, te adheriste al régimen nazi que los organizó.

»Si no metiste a España en la guerra mundial no fue por falta de ganas, sino porque, casi intacto el poder naval de Inglaterra, te diste cuenta de que las flotas británicas podían hacer añicos nuestro litoral atlántico y mediterráneo sin que Alemania pudiera prestarte ningún apoyo eficaz. Luego, merced a tu astuto olfato gallego, oliste que la victoria alemana, por la cual formulabas fervientes y públicos votos, iba a resultar imposible y cambiaste de rumbo. En eso sólo siguió dando la cara Serrano Suñer. En fin, colega, eres una alhaja. La actitud desdeñosa en que te colocaste con respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte se parece mucho a la de aquella zorra que, por verdes, prescindió de comer uvas imposibles de alcanzar. "España —has mantenido con ridículo énfasis— no necesita de la OTAN y nunca ha pretendido ingresar en ella ni ha hecho gestiones, directas o indirectas, para ser incluida en dicha organización". ¿Procedía motu propio (sic) Portugal, sin siquiera consultarte, mientras reiteradamente abogó por tu admisión en reuniones plenarias de los ministros de Relaciones Exteriores de los países signatarios? ¿Quién sería capaz de creerlo? Además, ¿por qué te enojaste con Noruega hasta el extremo de declararle el boicot suspendiéndole los envíos de bacalao y madera, base principal de su comercio con España, y prohibiéndole la entrada de sus buques en puertos españoles? Simplemente porque se opuso a tu ingreso en la OTAN reputándolo de descarada violación del espíritu y la letra del tratado, establecido para mutua defensa de las libertades que son comunes a cuantas naciones lo firmaron, entre las cuales serías tú un garbanzo negro. ¡Pero si hay notas diplomáticas confesando, implícita y explícitamente, el motivo de dicho boicot, que no mantuviste porque te lo vedaron países poderosos a quienes no puedes desobedecer! Y como quiera que el ingreso de nuevos asociados al pacto ha de acordarse unánimemente por todos los pactantes, y Noruega, además de Dinamarca, se opone resueltamente a que el tratado sea transgredido, no logras lo que lograron Italia, Grecia y Turquía, que ni siquiera son naciones atlánticas. Lo dicho: las uvas están verdes y al parecer nunca las verás maduras.

»Después de contemplar panorámicamente el mundo guiándote por preguntas del terceto periodístico que te entrevistó, concentraste tu atención en España al contestar otras interrogaciones.

»“En España —afirmaste con aplomo— no existe una dictadura. Al término de nuestra guerra se constituyó un Estado de derecho y mis poderes como jefe del Estado los limitaron las instituciones básicas creadas… El que nuestras representaciones en el Parlamento sean orgánicas y representativas de los distintos sectores del país, las convierten en más naturales y sinceras. Mis poderes como jefe del Estado son muy inferiores a los que ejercen los presidentes de la mayoría de los Estados americanos, y el que las leyes en vigor impidan la práctica del libertinaje no niega ni limita las verdaderas libertades. El que nuestro sistema político, por haber vivido más de prisa, se encuentre más evolucionado y actual que los que en otras partes todavía se llevan, no autoriza a esas campañas de descrédito que se organizan contra nosotros”.

»¡Estado de derecho! ¡Parlamento! ¡Leyes! ¡Libertades! A cualquier cosa llaman chocolate las patrañas. Cuánto he transcrito, y algo más por el estilo, has debido de decirlo desde dentro de una refrigeradora. Porque sólo así puede explicarse semejante frescura. Nadie te limitó nunca los poderes, que siguen siendo idénticos a cuantos disfrutaba en la República Dominicana tu compadre Rafael Leónidas Trujillo, quien, al desaparecer trágicamente, os legó a Oliveira Salazar y a ti la veteranía dictatorial, pues él implantó su dictadura antes que vosotros establecierais las vuestras. Los procuradores en Cortes son designados por ti, unos directamente y otros a través de organismos cuyos elementos directivos los nombras tú. En suma, el Parlamento significa una grotesca farsa, y su parte más honorable —algún calificativo le hemos de dar— es la que eliges directamente bajo tu firma. En cuanto a la independencia de sus miembros, acuérdate de aquellos que, al comienzo de tan curioso régimen parlamentario, depusiste por haber hecho indicaciones que no te agradaron. Desde entonces, ninguno ha vuelto a chistar.

»Por lo que se refiere a libertades que impiden el libertinaje —frase cuya originalidad no se te puede atribuir, pues data de siglos—, no autorizas más partido político que Falange. Hasta los monárquicos han de actuar en la clandestinidad, pese a ser España un reino, conforme a definición discurrida por ti, pero para aplicarla a calendas griegas. Algunos de esos monárquicos han sido castigados, con más o menos severidad, por defender lo que tú mismo dices patrocinar. El caso más reciente es el de Luis María Anson, colaborador de *ABC*, a quien se impuso fuerte multa por el discurso que pronunció en un banquete con que le obsequiaron sus correligionarios. Los organizadores del banquete, entre quienes figuraba el marqués de Eliseda, hijo del que fue mayordomo mayor de Alfonso XIII y asimismo del heredero de éste, conde de los Andes, fueron igualmente multados. Además, a Anson se le ha prohibido seguir escribiendo para el público, sancionándose así su libertinaje, pues sólo a un libertino se le ocurre decir, invitándote a seguir el ejemplo de Carlos V, que “en época donde España reinaba sobre la mitad del mundo y se imponía a la otra mitad, un emperador había sabido dar una lección, que podría ser ahora imitada, abandonando el poder para retirarse a un monasterio”. Lo que vienes haciendo con Juan de Borbón y sus seguidores representa colosal tomadura de pelo. Claro que la tienen bien merecida y que tú, al burlarte de todos ellos, revelas conocer muy bien el paño.

»Lo que más me duele de tu conducta en estos veinticinco años oprobiosos, es que hayas castrado al pueblo español, incapacitándole para toda rebeldía digna, y que hayas convertido la gobernación en maloliente sentina. De España, modelo de gobernantes honrados, tanto monárquicos como republicanos, has hecho un apestoso pudridero, fomentando adrede la corrupción para que cuantos no se hubieran manchado con la sangre de millares de españoles, se emporcaran en la administración pública, recibiendo dádivas de las que has estado puntualmente enterado. Así formaste dos ligas monstruosas: una de asesinos y otra de ladrones. La corrupción gubernativa se ha extendido por amplias zonas sociales. Si escribieras tus memorias, las hojas de tal libraco, compendio de malas artes engendradas por el odio, la soberbia y la ruindad, únicamente serían útiles en los retretes. Tente allá, porque hiedes. Tu hedor llega hasta esta ribera del Atlántico desde donde, procurando vencer el asco, te escribo. Ni las brisas oceánicas son capaces de disipar tamaña pestilencia**[39]**».

Este artículo feroz representa el testamento antifranquista de Prieto. Todos sus argumentos han sido utilizados profusamente por los diversos frentes

antifranquistas exteriores e interiores; el halago al periodista monárquico Luis María Anson se combina, para Prieto, con un despectivo ataque a don Juan y sus consejeros, a quienes Anson pertenecía; ni Anson ni don Juan ni los consejeros se habían convertido aún ni de lejos a la democracia. Las argumentaciones de Prieto son transcripción exacta de los motivos que esgrimieron contra Franco los Tres Grandes reunidos en Potsdam en 1945, bajo la férula del muy demócrata dictador Josif Stalin, que antes de un año revelaría su auténtico juego contra Occidente. Prieto confiesa su ignorancia sobre las actividades periodísticas de Franco; pero en sus días de África, que tanto había elogiado Prieto hasta 1936, Franco fue colaborador y director de una revista militar, la *Revista de Tropas Coloniales*, a la que contribuyó con varios artículos que entonces causaron gran impresión. Hace bastantes años, el Servicio Histórico Militar publicó un estudio-antología, titulado *Francisco Franco, escritor militar*, que ignoran todos los que descalifican en bloque la cultura profesional y general del militar africanista.

El artículo de Prieto, que refleja una vez más su estado de guerra permanente contra Franco, contiene también los principales argumentos contra la política interior del Caudillo. Señala algunos defectos reales, pero ni uno solo de los numerosos aspectos positivos de esa política interior. Y la descripción de Franco que hace Prieto como jefe de una banda de asesinos y ladrones se podría aplicar trágicamente contra una parte del partido de Prieto en tiempos posteriores, entonces insospechados; a veces las condenas más tajantes se revuelven contra quien las formula y por supuesto el líder socialista no dice una palabra sobre las siniestras actividades del SIM (Servicio de Información Militar) que dependía de él como ministro de Defensa en la guerra civil, ni sobre el enorme latrocinio del yate *Vita*, que transportó a México al final de la guerra civil un tesoro de primera magnitud procedente de robos y atracos sin cuento perpetrados por los correligionarios de Prieto en propiedades de la Iglesia y los particulares. Pero no me interesan aquí directamente las culpas históricas de Prieto, sino su acuñación de las que serían, y son hasta hoy, argumentaciones principales de la propaganda antifranquista. Cuyo fallo fundamental es el carácter unilateral; ningún bando de la guerra civil puede acusar al contrario en exclusiva de los excesos cometidos durante ella.

Prieto, tras su breve fase borbónica, arremete brutalmente contra don Juan de Borbón

En 1946 Inglaterra y Francia, sometidas a gobiernos de izquierda durante la época del Gran Miedo ante la probable invasión soviética de Europa occidental, desahogaron sus frustraciones contra España y contra Franco, a quien descalificaron con graves sanciones diplomáticas en las Naciones Unidas. En 1947 la estrategia norteamericana apuntó ya un giro antisoviético que comportaba un acercamiento a España como posible aliado seguro frente a una invasión comunista de Europa, pero Inglaterra y Francia afectaron no enterarse. Por iniciativa del gobierno laborista británico se produjo una extraña conjunción de los tres primeros líderes del antifranquismo español, con vistas a implantar un régimen democrático en España, bajo la égida de don Juan de Borbón, que poco antes se había trasladado de Lausana a Estoril. Hoy, ante una documentación abrumadora, sabemos que ni don Juan de Borbón ni esos líderes del antifranquismo eran demócratas, aunque tantos historiadores se empeñen en decir que sí. Hablaremos pronto de Gil Robles. Salvador de Madariaga seguía siendo el inventor de la democracia orgánica que planificó en su libro de 1935 *Anarquía o jerarquía* del que por cierto ofreció entonces al general Franco uno de los primeros ejemplares. Don Juan de Borbón había aceptado las Bases fundamentales de la Monarquía Española, que definían una Monarquía tan totalitaria como la que pretendía Franco; el inspirador de ese interesante documento era precisamente Gil Robles. Prieto quería presentarse al término de la Segunda Guerra Mundial como demócrata de toda la vida, pero su ejecutoria anterior no tuvo nada de demócrata: fue el promotor de la Revolución antidemocrática en octubre de 1934, perteneció al grupo dirigente de la zona republicana, a la que el propio Stalin recomendaba a fines de 1936 que asumiera formas democráticas y confundía ser antifranquista furioso con ser demócrata sin advertir que no se trataba de sinónimos.

La conjunción, que Franco llamaba conjura, entre los tres líderes del antifranquismo —Madariaga, Gil Robles y Prieto— se realizó en 1947; cada uno de los tres quedó muy desagradablemente impresionado de los otros dos. Gran parte del PSOE del exilio seguía a Prieto, que estaba dispuesto a aceptar un régimen monárquico si el pueblo español así lo decidía a través de un plebiscito celebrado con plenas garantías. Madariaga carecía de seguidores y Gil Robles era director de una fantasmal Confederación de Fuerzas Monárquicas, cuyos componentes cabían en un par de taxis y sobraba sitio. Pero el pacto se fue concretando, aunque fuera en las nubes y hasta parece que se llegó a firmar en San Juan de Luz en septiembre de 1948. Sus firmantes ignoraban que pocos días antes Franco había celebrado otro pacto

con don Juan de Borbón a bordo del yate *Azor* en aguas de San Sebastián, con lo que dejó a los conjurados, dicho sea con todo respeto, con el culo al aire, en uno de los actos de borboneo más significativos de la época contemporánea, que abunda en ellos.

Durante la que he llamado fase borbónica de Prieto, los consejeros de don Juan cometieron la insondable torpeza de entregar al líder socialista la colección completa de las cartas que hasta entonces se habían cruzado entre Franco y don Juan. Fuera de sí por el pacto del *Azor*, en el que se había decidido que el príncipe don Juan Carlos y su hermano Alfonso realizasen en España sus estudios medios, Indalecio Prieto escribió una serie de artículos soeces contra el conde de Barcelona, a través de los que, una vez publicados por los amigos de Prieto en 1967, algunos pudimos enterarnos de las cartas más importantes entre Franco y don Juan que después hemos conocido en versión completa, que he publicado, comentado y contrastado en mi libro de 1996 *Don Juan de Borbón, toda la verdad* (Ed. Fénix). De todos esos artículos, el más significativo es el que publicó Prieto el 4 de mayo de 1960 con el título *Todo está igual, el rey mendigo*. Lo voy a reproducir para que algunos lectores no tomen al pie de la letra el título sarcástico que Rafael Borras ha puesto a su importante y documentado libro *Don Juan, el rey de los rojos*. Es verdad que algunos rojos se acercaron interesadamente a don Juan para manipularle y conseguir a su amparo el derribo de Franco; pero tales elementos poseían en el fondo el mismo fervor monárquico que Prieto demuestra en este terrible ataque de 1960 contra don Juan:

El rey mendigo

«Antiguamente era costumbre en las funciones teatrales representar después del drama un pasillo cómico para quitarles a los espectadores el amargo sabor de aquél. De igual modo, la espantosa tragedia que entrañó la guerra española se ve ahora coronada con el sainete de la restauración monárquica, al cual podría ponérsele por título *El rey mendigo*».

Puntapiés de Su Excelencia a Su Alteza

«Lamento tener que elegir como protagonista de este sainete a don Juan de Borbón y Battenberg. De hombre a hombre, siento por él un respeto compasivo, inspirándomelo sus infortunios. Declárasele heredero de los derechos de Alfonso XIII por la incapacidad física de sus dos hermanos mayores, Alfonso, hemofílico, y Jaime, sordomudo. Le nace ciega una hija y a uno de sus dos hijos varones lo mata la bala de una pequeña pistola que imprudentemente intenta desencasquillar su otro hijo, uniéndose a esas desventuras decretadas por el destino la pérdida de majestad, quebranto imputable al designio propio, pues semejante arruinamiento mayestático lo ha producido un largo período de mendicidad que, con documentos fehacientes a la vista, voy a señalar.

»Apenas don Juan columbra el triunfo de los países aliados en la guerra mundial y supone que tal victoria —también lo supusimos nosotros— acarrearía el derrumbe de un régimen nacido bajo el amparo militar de Hitler y Mussolini, comienza desde Lausana a dar muestras de impaciencia por ocupar el trono que en 1931 abandonara su padre.

»El 12 de mayo de 1942, en carta que Francisco Franco le dirige, opone éste reparos al impaciente y empieza a denostar a sus antecesores, afirmando no haber habido monarquía española digna de aprecio tras la de los Reyes Católicos. “Los tiempos posteriores —añade— son, en cambio, los de la mala escuela de la monarquía decadente y sin pulso, que ya no proyecta hacia el exterior el genio de España, sino que recibe, acoge y ensalza lo que la Antiespaña concibe allende las fronteras y que culmina con la invasión enciclopédica y masónica que patrocinan Floridablanca y el conde de Aranda… Siento tener que deciros que el sentimiento monárquico, que os quieren hacer ver que existe en nuestro pueblo, es falso. Una gran parte de los que hablan de monarquía añoran la decadente y sin pulso”.

»Al cabo de diez meses —8 de marzo de 1943— contesta el príncipe: “Apremia —dice— adelantar lo más posible la fecha de la restauración, y ello sin recurrir a formas intermedias cuya introducción se susurra y cuyo único resultado sería el de desvirtuar la eficacia de la monarquía… Apelo solemnemente a la conciencia española de V. E.”.

»Cualquier apelación, por solemne que sea, dista mucho de la exigencia. El monarca no le exige acatamiento al monárquico subordinado; se limita a apelar a su conciencia, algo así como llamar a Cachano con dos tejas.

»Pero, en cambio, manifiéstase altivo Franco, quien, en réplica de 27 de mayo del mismo año, se expresa en los siguientes términos: “Otras personas pueden hablaros con la sumisión que su celo dinástico y su conveniencia cortesana les dicten. Yo cuando os escribo no puedo prescindir de hacerlo como jefe del Estado de la nación española que se dirige al pretendiente al trono de la misma nación; y considero recordaros esta situación por veros desviado de la posición que corresponde a un príncipe que aspira a reinar por la vía natural (semejante a la del príncipe heredero), de acuerdo con la voluntad del que ejerce la potestad actualmente y la continuación de la gran obra política que nuestra Cruzada hizo posible… A un Estado que tanto ha rendido a la nación, no se puede, sin injusticia, ponérsele en interinidad ni en entredicho porque una docena de politicastros despechados o de capitalistas insaciables pretendan difamarlo… Nuestro Movimiento no es un partido que se aproveche de la revolución. Soy yo su conductor, el que después de sacar a España de la ruina donde aparecía hundida, interpreta el sentir general de cuántos participaron en el Alzamiento y ante las imperiosas necesidades de la nación. Por eso no debería extrañaros el que os pida que os identifiquéis con estos principios, que son los comunes de nuestra juventud y sobre los cuales no cabe discusión”.

»¿Cómo reacciona el hijo de Alfonso XIII ante tan dura catilinaria? Con nueva apelación, o súplica, contenida en un telegrama cursado al generalísimo el 3 de agosto de 1943, la cual puede compendiarse en los renglones que siguen: “En esta suprema llamada, para conjurar el inminente peligro, de mi conciencia de español a la suya. Si nuevamente resulta en vano, cada uno de nosotros habrá de asumir, sin equívocos, su responsabilidad ante la historia”.

»No desdeña el Caudillo el telégrafo usado por su interlocutor y, utilizándolo a su vez, le expide cinco días más tarde un mensaje en el que luego de advertir que cuestión tan ardua y compleja no encuentra en el laconismo telegráfico medio adecuado para la respuesta, agrega: “La gravedad de vuestro telegrama aconseja, en servicio de la patria, la máxima discreción en el príncipe, evitando todo acto o manifestación que pueda tender a menoscabar el prestigio y autoridad del régimen español ante el exterior y la unidad de los españoles en el interior, lo que redundaría en daño grave para la Monarquía y para Vuestra Alteza”.

»Franco, revolviéndose contra el consabido laconismo telegráfico, se suelta el pelo en una misiva enviada a don Juan el 6 de enero de 1944, de la que copio sus principales admoniciones: “Tres falsedades se intentan ir grabando en vuestro ánimo: la supuesta ilegitimidad de mis poderes, una calumniosa situación de España y un pobre concepto de los españoles, para arrastraros, como consecuencia de ello, a una aventura estéril, en la que lo perderíais todo y ellos nada. Por interés de nuestra patria, intentaré aclarároslas. Poniendo por delante que para mí el Poder es un acto de servicio más, entre los muchos prestados a mi nación y a su fin, el bienestar único, he de sentar varias afirmaciones: a) la Monarquía abandonó en 1931 el Poder a la República; b) nosotros no nos levantamos contra una situación republicana; c) nuestro Movimiento no tuvo significación monárquica, sino española y católica; d) Mola dejó claramente establecido que el Movimiento no era

monárquico; e) los combatientes de nuestra Cruzada pasaron de un millón, y los monárquicos constituían entre ellos exigua minoría. Por lo tanto, el régimen no derrocó a la Monarquía ni estaba obligado a su restablecimiento. Entre los títulos que dan origen a una autoridad soberana, sabéis que cuentan la ocupación y conquista, no digamos el que engendra el salvar a una sociedad. Propios merecimientos contraídos en una vida de intensos servicios; prestigio y categoría en todos los órdenes de la sociedad, y reconocimiento único de esa autoridad se dan en este caso. Ha existido, por tanto, una previa superioridad pública. Y en la Cruzada, la proclamación como jefe supremo del Estado por las tropas y fuerzas políticas integradoras del Movimiento y el beneplácito de toda la nación me otorgan otro título indubitable, y no digamos el haber alcanzado, con el favor divino repetidamente prodigado, la victoria, y el haber salvado a la sociedad del caos, lo cual engendra y consolida, por muchos conceptos, ese derecho soberano".

»El príncipe vejado no respira postalmente hasta el 25 de enero de 1944, y lo hace sin virilidad, casi pidiendo disculpas. "Nadie se ha propuesto persuadirme de la ilegalidad de los poderes que de hecho V. E. ejerce… Siempre me he negado a acceder a los requerimientos escritos de V. E. para identificarme con el Estado falangista, por estimar que ello era incompatible con la esencia misma de la Monarquía"».

Acto de plena sumisión

«Esta negativa no perduró, según veremos después de registrar otros puntapiés que su Excelencia dio impunemente a su Alteza Real y que nunca tuvieron digna réplica.

»El 3 de febrero de 1944, don Juan hace vibrar de nuevo los hilos del telégrafo para otras imploraciones: "Estoy seguro —dice en su despacho— de que V. E., consciente de los graves peligros que amenazan a España, no habrá de negarse a considerar la única solución que exige perentoriamente el interés de nuestra patria". La respuesta de Franco por los mismos alambres, cinco días más tarde, termina con este reproche: "Por mi historia y mis servicios, creo merecer una mayor estimación de mi capacidad".

»Cual anteriormente, a Franco no le parecen bastantes sus zapatazos por el Hughes y los multiplica por correo el mismo 7 de febrero: "Os aseguro —le dice al pertinaz implorador— que esas manifestaciones, expresión clara de la directriz que desde hace más de un año os habéis trazado, os divorcian cada vez más del sentir de los españoles, y muy especialmente del ideal por el que cayeron esos héroes y mártires que con error invocáis y que, como jefe y caudillo que los condujo a la victoria, tengo alguna autoridad para definir… Los españoles lamentan que cuando las campañas rojas y masónicas intentan provocar en el extranjero susceptibilidades contra nuestra patria, sea Vuestra Alteza quien, con desconocimiento absoluto de las realidades españolas, desconocimiento justificado precisamente por trece años de ausencia, califique públicamente a nuestro régimen con juicios erróneos, daño para España y regocijo de sus enemigos… Los cambios que en estos siete años vengo observando en vuestro pensamiento, sujetos a la oportunidad de cada instante, me permiten considerar lo poco arraigado de vuestras convicciones, e intentar una vez más, con poca esperanza, el apartaros de un camino que sólo os podría conducir, en un eventual momento de desgracia para España que Dios y los españoles no han de permitir, a ser el rey efímero de una Monarquía estilo griego, y no el legítimo soberano, querido por la nación".

»Para repetir la pateadura, el generalísimo cursa una nueva carta al pretendiente el 23 de enero de 1946, donde consigna: "Accedí a que Vuestra Alteza pudiera pasar un par de semanas en Portugal y ver a sus padres políticos, los infantes, siempre que existiera vuestra promesa formal de no permitir que se explotase la estancia para llevar a cabo actividades y conspiraciones de carácter monárquico".

»Aquí la insolencia de Franco rebasa todo lo imaginable. No hay testimonio de que don Juan rechazara en forma debida la intolerable injerencia. Pero en el verano de 1948 —después de sufrir tantas diatribas humillantes—, admite una entrevista con su injuriador. En el golfo de Vizcaya coinciden el yate *Saltillo*, del pretendiente, y el *Azor*, de Franco. Parecía obligado que los dos magnates conferenciaran a bordo de la primera de dichas embarcaciones, pero su Alteza hubo de transbordar al *Azor*, si bien lo digno hubiese sido desoír una demanda precedida de insultos. Franco los suspende al enterarse de que el pacto entre el Partido Socialista y la Confederación de Fuerzas

Monárquicas, consistente en que un plebiscito libre determine el régimen definitivo de España, encuentra decidido apoyo por parte de importantes cancillerías occidentales.

»A aquella entrevista en el mar siguió otra en tierra, o sea, la primeramente celebrada en el castillo cacereño de Las Cabezas. En ambas entrevistas, don Juan hizo jirones su majestad e inclusive su patria potestad aviniéndose a ciertas imposiciones de Franco sobre los estudios de Juan Carlos.

»Queda dicho ya que no perduró la negativa del príncipe a identificarse con el Estado falangista. En diversas fechas, posteriores a formularla rotundamente, aparecieron declaraciones suyas exponiendo absoluta conformidad con el programa de Falange. Pero el acto de plena sumisión realizóse en Estoril el 20 de diciembre de 1957, cuando una nutrida embajada de la Comunión Tradicionalista presentóse en Villa Giralda para reconocer al conde de Barcelona como único heredero del trono de San Fernando e "invitarle con la debida solemnidad a la pública aceptación y consiguiente adscripción" a principios estimados "como intangibles fundamentos de la legitimidad española". Previamente, y para desvanecer equívocos —todo ello se hizo de acuerdo con el generalísimo—, la embajada declaró mantener la vigencia de los principios inspiradores del proceso iniciado el 18 de julio de 1936. Es decir, carlismo y falangismo tienen por denominador común el absolutismo. Don Juan adscribióse a unos y otros principios, y allí mismo fue proclamado "Rey y Abanderado de la Comunión". Para hacer más castiza y típica la ceremonia, don Juan se caló una boina roja y su esposa una boina blanca, tocados iguales a los que en el siglo último, lucieron Carlos VII, quien tampoco pasó de pretendiente, y doña Margarita, su cónyuge».

Tercer cuadro del sainete

«El tercer cuadro del sainete bufo, que hemos titulado *El rey mendigo*, se representó en marzo último con la misma decoración del cuadro segundo: el castillo de Las Cabezas. Franco llamó por tercera vez al pretendiente y éste acudió sumiso. Los juanistas echaron las campanas a vuelo creyendo que, por fin, iba a verificarse el traspaso del poder, de lo cual veían indicio en los anuncios de que acompañaría a Franco su ministro de Justicia. ¿A qué iba a concurrir éste no siendo, en su calidad de notario mayor del reino, para levantar acta del trascendental hecho histórico?

»Pero todo se redujo a una nueva humillación y a un nuevo desencanto. El comunicado oficioso reza fundamentalmente: "En la entrevista, que se desarrolló en términos de gran cordialidad, se han examinado temas de importancia para la vida nacional, en los que ambos interlocutores se mostraron de acuerdo… La entrevista terminó con la robustecida persuasión de que la cordialidad y buen entendimiento es preciosa para el porvenir de España y para la consolidación y continuidad de la paz y de la obra realizada por el Movimiento Nacional".

»Prescindiendo del gastadísimo clisé de la cordialidad, al que se echa mano siempre que se entrevistan dos personajes discrepantes, y saltando sobre la falta de sintaxis cometida al decir que "a cordialidad y buen entendimiento es preciosa", en lugar de decir que son preciosos, es fácil descubrir que el acuerdo consiste en la reiteración de cuánto anteriormente tenían prometido los entrevistados: Acatamiento al programa falangista. Ninguna novedad, por tanto.

»La referida nota alude a la ley de Sucesión. "Es conveniente —se manifiesta dentro de otro de sus párrafos— que el príncipe don Juan Carlos se eduque en el ambiente de la patria, lo que (conforme a la ley de Sucesión) no prejuzga la cuestión sucesoria ni la normal transmisión de obligaciones y responsabilidades dinásticas". Ni el sistema educativo ni el régimen alimenticio —comentamos nosotros— influyen en la transferencia de esas obligaciones y responsabilidades, porque maldito si causarían perjuicio que el muchacho se aficionara al pote gallego, a la paella valenciana, al gazpacho andaluz o al cocido madrileño. ¿Para estampar tamañas incongruencias se requirió al notario mayor del reino?

»El complicado mecanismo de la ley de Sucesión —reuniones del Consejo del Reino y del Consejo de Regencia y deliberación de las Cortes— sólo puede ponerse en marcha si Franco renuncia, de lo que no hay atisbos, o si fallece, de lo cual no hay síntomas. Pero tal puesta en marcha implica, en cualquiera de los casos, el desconocimiento de la legitimidad de don Juan, la que él se asigna y la que le han adjudicado los carlistas. Inclusive los mencionados órganos pueden proponer y proclamar un rey que no sea don Juan ni su hijo.

»En suma, el pretendiente debe cantar la romanza de tenor que para la zarzuela *La bruja* escribiera Miguel Ramos Carrión y musicara Ruperto Chapí: "Todo está igual, parece que fue ayer el día que partí…". Sí, parece que fue ayer el día que Juan de Borbón y Battenberg partió de Suiza para Portugal creyendo que, al cabo de cortas semanas, se aposentaría en el Palacio de la Plaza de Oriente, de Madrid. Pero han transcurrido catorce años. Sólo ha habido un cambio, y éste en el atuendo del príncipe vasallo: su suntuoso manto real se ha convertido en harapiento sayal de pordiosero. En el presente caso falló el adagio de que pobre porfiado saca limosna, pues el rey mendigo no la ha sacado. Al menos, en forma ostensible[40]».

El alegato de Prieto en 1961 contra don Juan de Borbón es, por desgracia, explicable y justo en muchos de sus puntos. En cuanto a Franco de las palabras de Prieto se desprende una intensa admiración. Hace bien Prieto en recalcar una de las más profundas convicciones de Franco para legitimar su régimen: «Salvar una sociedad». Franco salvó a la Iglesia, salvó a la Banca, a la industria y a las fuentes de riqueza, salvó a las clases altas, las clases medias y la parte de clases obreras y modestas que no había renegado del catolicismo; salvó a las derechas, al centro y a partes sensibles de la propia izquierda. Para el autor de este libro esta convicción de Franco es la suya propia y la de innumerables personas que sintonizan en la misma creencia.

Prieto simplifica excesivamente al identificar al régimen de Franco con «la Falange». Franco prefería cada vez más referirse al «Movimiento» como un conjunto mucho más genérico, en el que cabían todas las fuerzas y tendencias que contribuyeron al «movimiento cívico-militar» como le llamaron los obispos de 1937, que surgió el 18 de julio.

Por supuesto, Franco salvó a la idea monárquica y su realización. De no haber sido por él, la monarquía que se hundió con Alfonso XIII no hubiera retornado jamás a España. Es muy extraño que don Juan se oponga a la Falange en los años cuarenta cuando, como he demostrado en un sobrecogedor facsímil de 1937, anterior a la unificación de abril, don Juan se adhirió formalmente a Falange suscribiéndose a la revista teórica de Falange *Jerarquía*, que no era sólo falangista sino fascista; y la adhesión se produjo en términos de identificación incondicional y entusiasta. Por eso le he llamado varias veces «el Pretendiente variable». El facsímil figura en mi libro *Don Juan de Borbón, toda la verdad*.

La posición de Prieto contra Franco y contra don Juan, la nutrida artillería pesada de sus argumentaciones y sus parcialidades ha quedado, después de su muerte en 1962, como un arsenal permanente del antifranquismo y especialmente del socialismo. Por eso merecía la pena analizar en este libro esa posición y esas argumentaciones que con escasa originalidad y matización se siguen repitiendo en la marea antifranquista de hoy, rutinariamente.

LOS COMUNISTAS: EL ODIO IMPOTENTE DE SANTIAGO CARRILLO

Los comunistas en el Frente Popular y en la guerra civil

Franco vivió y murió convencido de que su rebelión (conste que aceptaba encantado este término) de 1936 no era contra la República legítima (que además nada tenía de legítima como he explicado muchas veces y reitero en tres capítulos del presente libro), sino contra la degeneración de la República que fue el desgobierno y el caos del Frente Popular, tras el cual Franco veía al comunismo como fuerza y peligro dominante. Esto podrá ser verdad o no, pero la convicción de Franco era firme y absoluta. Y además era, fundamentalmente, verdad.

Es cierto que el conjunto de afiliados y, por consiguiente, la fuerza electoral y política del Partido Comunista de España era, en febrero de 1936, mínima y que de todas las fuerzas proletarias que se integraron o acabarían por integrarse en el Frente Popular, el PCE constituía la menos importante. Algo semejante ocurría, en el campo contrario, con la Falange; su fuerza electoral en febrero de 1936 resultó tan exigua que no obtuvo un solo diputado y el conjunto de sus afiliados en aquel momento no superaba seguramente los veinte mil en toda España; los comunistas alcanzaban probablemente esa cifra en Madrid, pero ni mucho menos llegaban a duplicarla contando con sus núcleos fuera de Madrid. Lo que pasó es que los comunistas, gracias a la generosidad de las demás fuerzas del Frente Popular, recibieron en las elecciones de febrero de 1936 un fuerte suplemento de votos y una desmesurada inclusión de candidatos en las listas por lo que el grupo parlamentario comunista obtuvo docena y media de diputados, muchos más de los que hubiera logrado en solitario; en las elecciones de 1933 sólo había alcanzado uno.

Sin embargo, falangistas y comunistas eran las grandes fuerzas del inmediato futuro. Los partidos de la derecha se desfondaron durante las luchas de la primavera de 1936 y quedaron desmantelados en la zona nacional cuando los militares tomaron el poder mediante la Junta de Defensa de Burgos. El trasvase de nuevas afiliaciones que afluyó a la Falange desde la celebración de las elecciones de febrero no hizo más que incrementarse en los meses siguientes y se convirtió en una riada durante la guerra civil, en la que la nueva Falange se alzó como la primera fuerza política de la España nacional con un millón de afiliados. La única fuerza política diferente y significativa que hubo en la zona nacional durante la guerra fue la carlista o

tradicionalista, mucho menor en número, pero valiosísima por su dedicación y el valor reconocido de sus milicias.

El ascenso de los comunistas en zona republicana no resultó tan desbordante, pero rebasó todas las anteriores estadísticas del partido prosoviético. Por lo pronto, el fuerte contingente de las Juventudes Socialistas, superior a los cincuenta mil hombres y mujeres, era ya en la práctica una disciplinada fuerza comunista en los meses inmediatamente anteriores a la guerra civil, porque la mayoría, aunque no la totalidad de los jóvenes socialistas siguieron a su líder Santiago Carrillo que se inscribió oficialmente en el PCE el 6 de noviembre de 1936, pero que ya era virtualmente miembro del PCE desde la primavera anterior. No son muy fiables las estadísticas del PCE en la guerra pero su cifra de afiliados creció muy probablemente hasta el medio millón de hombres y mujeres gracias a la tenacísima labor de proselitismo que los comunistas efectuaron en toda la zona, sobre todo en sectores muy sensibles y decisivos como el nuevo Ejército Popular, donde el dominio comunista llegó a ser palmario; los mandos principales como el defensor de Madrid, general Miaja; el jefe de Estado Mayor de la República, general Vicente Rojo; el jefe de la Aviación, Ignacio Hidalgo de Cisneros, y otros innumerables jefes y oficiales obtuvieron el carnet comunista. Los comunistas recibieron dos carteras en el gobierno Largo Caballero, formado el 4 de septiembre de 1936, y, respaldados por el chantaje permanente de los asesores y suministros soviéticos, sin los que no podía sobrevivir la zona republicana, coparon prácticamente el poder político desde que echaron a Largo Caballero y le sustituyeron al frente del gobierno por un socialista procomunista y entregado a las directrices soviéticas, el doctor Juan Negrín, a partir de los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona y hasta el final de la guerra civil. Los comunistas, desde el principio, orientaron su acción hacia el pleno control del Ejército Popular, favorecieron la disciplina frente a la anarquía de las milicias, crearon el Quinto Regimiento de Milicias Populares para formar y enviar unidades de choque a los nuevos frentes, controlaron por completo la formación de las Brigadas Internacionales, que eran básicamente comunistas, a partir del 15 de octubre de 1936 y consiguieron que la gran unidad principal del Ejército de Maniobra, el Quinto Cuerpo de Ejército, se configurase como una unidad comunista a las órdenes del teniente coronel comunista Juan Modesto Guilloto. Modesto fue, en 1938, jefe del Ejército del Ebro, protagonista en la batalla del mismo nombre. El Quinto Cuerpo fue el más importante del Ejército del Ebro; su jefe, los jefes de división, los jefes de brigada, los

comisarios y muchos de sus efectivos eran fervientemente comunistas. La institución del Comisariado, vital para el Ejército Popular, era desde el principio de predominio comunista bajo la dirección del comisario general criptocomunista Julio Álvarez del Vayo. Los comunistas consiguieron dividir y esterilizar políticamente al Partido Socialista; utilizaron al socialista Prieto para eliminar al jefe socialista del gobierno Largo Caballero y luego al socialista doctor Negrín para eliminar a Prieto. Toda esta exposición de estrategia político-militar hoy no se atreve a negarla nadie fuera de los partidarios fanáticos del comunismo histórico o el comunismo residual, que aún no se han enterado de la caída del Muro. El lector que desee profundizar en esta trayectoria del comunismo español entre 1936 y 1939 puede verla comprobada en un libro definitivo: el de Burnett Bolloten *Guerra civil española, revolución y contrarrevolución* Madrid, Alianza Editorial, 1989. Y en el enjundioso informe de Prieto fechado en 1939 y publicado en el segundo tomo de sus obras políticas *Convulsiones de España*.

El odio absoluto de Santiago Carrillo contra Francisco Franco

En este capítulo estoy tratando de detectar las raíces históricas de la campaña actual y de la consigna para eliminar la memoria histórica de los españoles sobre Franco y su época. Los comunistas y sus afines, muy especialmente los intelectuales comunistas infiltrados en las cátedras de Historia y en los medios de comunicación tienen, sin la menor duda, una importante carga de responsabilidad en ese proyecto. Acabo de fundamentar los motivos de Franco para atribuir básicamente al comunismo la degradación revolucionaria del Frente Popular y la vertebración del combate político y militar que se dirigía contra el propio Franco desde la zona republicana; donde, además del creciente control comunista sobre la política general y especialmente sobre la política militar, los comunistas dominaban también las directrices de la propaganda. Todo el mundo está de acuerdo en que los comunistas actuaron también como los primeros animadores de la oposición contra el régimen de Franco a partir de la derrota del Frente Popular el 1 de abril de 1939. Esa oposición conoció, al principio, una fase violenta, cuyo ápice fue, sin duda, la invasión de los «maquis» comunistas a través de algunos valles del Pirineo —sobre todo el de Aran— en algunos sectores muy mal elegidos, porque correspondían a regiones españolas muy anticomunistas y de fuerte tradición católica. Los «maquis» irrumpían en España alucinados por sus experiencias en la resistencia francesa, donde habían luchado contra los alemanes y como se habían creído su propia propaganda se llevaron una

terrible decepción al comprobar la indiferencia y el rechazo de los habitantes de esas regiones. Franco montó un dispositivo militar muy poderoso en la vertiente sur del Pirineo que aplastó la «invasión», expulsó a los principales núcleos infiltrados y encomendó después a la Guardia Civil la caza y captura de los grupos que habían conseguido penetrar hasta las serranías interiores de España, donde acabaron por extinguirse.

En vista del sangriento fracaso de los «maquis» comunistas, el propio Josif Stalin convocó en agosto de 1948 a Carrillo, la Pasionaria y el amante de ésta, Antón, ante los que certificó el fracaso de la infiltración violenta y les instó a trabajar políticamente en los organismos del régimen de Franco y la sociedad española, como la Iglesia y la Universidad[41]. Las órdenes de Stalin fueron, naturalmente, cumplidas. Con bastante retraso hasta la década siguiente; porque en 1948 la guerra civil estaba aún demasiado próxima y el PCE carecía de las personas adecuadas para montar las delicadas líneas de acción que exigía la nueva estrategia.

Pero esas personas se encontraron y esa acción se montó con eficacia notable, hay que reconocerlo. En la década de los años cincuenta el despegue económico español era notorio desde el principio de ese período; el nivel de renta, que permanecía clavado en los recuerdos de 1930, se recuperó y no hizo más que aumentar; generaciones nuevas acudían a las Universidades y la retórica falangista parecía cada vez más anacrónica. El año clave fue 1956, cuando por una parte Dionisio Ridruejo, al ver fracasados sus esfuerzos para democratizar desde dentro el régimen de Franco, inició ya abiertamente una labor de oposición en la que confluyó con la actividad, muy efectiva, de los enviados comunistas para el campo de la universidad y de la cultura, como Jorge Semprún, Federico Sánchez y Enrique Múgica Herzog. El régimen de Franco, por otra parte, no supo encontrar un método de atracción cultural que convenciese a las nuevas generaciones de la Universidad y de la cultura para que contribuyeran a su evolución. Lo intentó con muy buen acuerdo Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés, miembro de la Asociación Nacional de Propagandistas y liberal de talante, que había colaborado muy efectivamente con el régimen de Franco en el terreno de las relaciones con la Iglesia y trató de articular un frente cultural e intelectual de primera magnitud con sus colaboradores en el Ministerio de Educación (Fraga, Pérez Villanueva, Fernández-Miranda) y con el antiguo equipo falangista de Serrano Suñer (Pedro Laín, Antonio Tovar, a quienes nombró rectores de las universidades de Madrid y de Salamanca). Pero la rebelión universitaria que estalló a principios de 1956 (más por influjo de Ridruejo que por obra de los enviados

comunistas) alarmó excesivamente a las alturas del régimen y de las fuerzas armadas. Con el cese de Ruiz-Giménez se frustró su proyecto de apertura y el ya exministro católico se orientaría pronto a los nuevos vientos que soplaban del Vaticano después de la desaparición de Pío XII y la llegada de Juan XXIII.

Los comunistas y los antiguos intelectuales del franquismo que, como Ridruejo, se incorporaban ya a la oposición contra el régimen empezaron a articular poco a poco una acción de desvío y demolición que se sumaba a la de un sector de la Iglesia y especialmente los jesuitas *progresistas* (Juan N. García Nieto, José M.ª de Llanos) que se aproximaron a la estrategia comunista de infiltración y, sobre todo, al conjuro del ambiente del Concilio (1962-1965) contribuyeron, junto con los comunistas, a la creación y desarrollo del sindicato de oposición Comisiones Obreras. Al abrir paso en 1957 a la acción del nuevo equipo de tecnócratas vinculados al Opus Dei, Franco dejó bien claro que deseaba prescindir de los enfrentamientos de signo teórico y prefería impulsar a España hacia metas de desarrollo económico y social. Tales metas se alcanzaron brillantemente, pero el incremento del nivel de vida, la extensión de las clases medias y de la educación en todos sus grados, junto con los contactos de la beneficiosa invasión turística, exigían además, a fines de la década de los sesenta, el fomento de un «desarrollo político» correspondiente (la expresión era de Fraga), que Franco trató de satisfacer con la designación de don Juan Carlos como sucesor a título de Rey en 1969, después de la promulgación, dos años antes, de la Ley Orgánica del Estado a la que el régimen presentó como un gran paso democratizador cuando en realidad no fue más que un estancamiento.

Animados por sus éxitos indudables en la infiltración dentro del campo de la cultura, los comunistas trataron de erigirse en los abanderados de la «reconciliación nacional» y en directores de la transición a la democracia. Pero al intentar esos objetivos Carrillo cometió gravísimos errores de estrategia y de táctica. No conseguía disimular su talante y su metodología totalitaria que se demostraron en la expulsión de dos intelectuales importantes del Partido por la sencilla razón de que le hacían sombra: Jorge Semprún y Fernando Claudín, que pasarían después a la órbita socialista cuando escribieron alegatos realmente sobrecogedores contra los métodos totalitarios de Carrillo; con su *Autobiografía de Federico Sánchez,* que fue premio Planeta en 1977, Semprún infirió un golpe de muerte a la credibilidad democrática del líder comunista. Se acercaba ya, inexorablemente, la agonía del régimen de Franco. En diciembre de 1973 se declaró formalmente esa

agonía cuando una cuadrilla de la banda terrorista ETA, con la cooperación más que probable tanto de la KGB como de la CIA, asesinó con una mina reforzada al presidente del gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, que se proponía realizar una transición de signo bien diferente a la que realmente se produjo. Por entonces el Partido Comunista, aunque después lo haya negado, elogiaba y se mostraba muy comprensivo con los métodos de la ETA y significados militantes del PCE colaboraron con la banda terrorista para misiones concretas, de lo que existen pruebas más que suficientes. Dispuesto a aliarse con el diablo, según él mismo afirmaba, para terminar con el odiado régimen de Franco, Santiago Carrillo creó en la primavera de 1974 la Junta Democrática de España en curiosa alianza con un grupo de políticos pertenecientes al Opus Dei y dirigidos por el profesor Calvo Serer, antiguo ideólogo del franquismo; los dos intentan presentar la Junta Democrática en París por medio de don Juan de Borbón, que al principio no se opuso a la idea, aunque pronto algunos de sus consejeros, en un rapto de sensatez, le disuadieron de ella.

En octubre de 1974 aparece en París y pronto en España una larga conversación de Santiago Carrillo con dos intelectuales franceses, Régis Debray y Max Gallo, bajo el título *Mañana, España*[42]. Releídas hoy las afirmaciones de Carrillo provocan una hilaridad irreprimible. «Juan Carlos —profetiza en la p. 206— sería el continuador del régimen. Además se ha desacreditado ante el pueblo español porque vendió a su padre por una corona y eso no se lo perdonan ni los monárquicos». (No me parece Carrillo la persona más indicada para el difícil asunto de vender padres; él lo hizo cumplidamente con el suyo al descalificarle brutalmente con su famosa carta de 1939 nada más terminar la guerra civil española, cuando su padre, Wenceslao, había participado en el Consejo de Defensa que terminó con los comunistas en Madrid).

Si Carrillo fue capaz de manifestar públicamente, durante muchos años, un odio total a su propio padre, no deben extrañamos sus manifestaciones de odio contra Franco, en medio de sus hipocresías sobre la «reconciliación nacional»; porque odiar a Franco equivalía entonces a odiar por lo menos a media España. «Estoy entre los españoles —decía Carrillo— que piensan que ver morir a Franco en su lecho sería una injusticia histórica. Existen pocos pueblos en Europa que hayan luchado tanto por la libertad como nosotros y no nos merecemos verle morir con la ilusión de que su tiranía sea indestructible. No debe tener esa satisfacción. Debe ver con los ojos abiertos el fin de su tiranía… Yo no he esperado nunca que Franco muriese y he hecho

todo lo posible para echarle antes. Todavía cuento con realizarlo antes de que muera… la condena de muerte a Franco la firmaría[43]».

Se ve que los clérigos que tanto frecuentaban en aquella época a Santiago Carrillo no acertaron a sustituir su odio por sentimientos de caridad cristiana. Carrillo no intentó absolutamente nada contra Franco pese a sus alardes. Puso como título al primero de sus libros sobre el futuro de España *Y después de Franco, ¿qué?* Como sugiriendo que mientras alentase Franco no había nada que hacer. Es curioso que Carrillo se atreva a hablar de tiranía de otros, cuando era un hijo político de Stalin, el mayor tirano de los tiempos modernos; cuando él mismo había ejercido una tiranía brutal en la Junta de Defensa de Madrid en 1936 y en el gobierno de su propio partido, como le acusaron con acentos vengadores sus antiguos subordinados Claudín y Semprún. El enemigo del tirano era en cambio amigo y protegido de dos tiranos orientales incomparablemente más arbitrarios y crueles, Nicolae Ceaucescu y Kim Il Sung.

En su lucha contra Franco sembró Carrillo la lección del odio que a estas alturas sigue rebrotando contra Franco entre los medios que intentan tergiversar e incluso borrar la memoria histórica del Caudillo. Pero el líder comunista no pudo consumar su venganza. Volvió a España, consiguió tras la muerte de Franco la legalización del Partido Comunista en la primavera de 1977 y pudo contemplar otra venganza histórica más próxima: la de España y la Historia contra él. En tres elecciones sucesivas, desde 1977 a 1982, vio cómo el antaño orgulloso Partido Comunista sufría la descalificación y el repudio de los españoles, que no habían perdido la memoria histórica de Carrillo y sus hazañas. Carrillo y los comunistas, que jamás fueron demócratas, no sobrevivieron a la luz de la democracia y se hundieron. En un ejercicio sarcástico de justicia poética, Carrillo atribuyó sus tres derrotas electorales sucesivas a la influencia de Franco, que ganaba tales batallas después de muerto, como el Cid. No cabe mayor victoria de Franco en labios de su peor enemigo.

Sin embargo sería ingenuidad menospreciar la influencia de los comunistas —residuales, reconvertidos o infiltrados en el socialismo, enquistados en su obsesión marxista porque no saben cómo pensar y operar fuera de ella— en el campo actual de la cultura y muy especialmente en el campo de la Historia. En mi libro de 1994 *Carrillo miente* y en el prólogo al de 1997 *Historia total de España* (los dos en Editorial Fénix) he descrito la maniobra, dirigida por el criptocomunista Manuel Tuñón de Lara, a quien Jorge Semprún, comunista durante muchos años, identifica como agente de la

KGB, para formar en los Cursos de Pau, durante la fase final del régimen de Franco, promociones enteras de historiadores jóvenes que luego han ocupado muchas cátedras de Historia en Universidades españolas. Para conseguirlas han contado en varias ocasiones con la complicidad del gobierno socialista y con la colaboración absurda, pero demostrada, de un sector del Opus Dei que también se ha llamado a la parte. No es la primera vez que miembros de esta asociación católica han cooperado con los comunistas en terrenos vitales; lo muestra la aventura de la Junta Democrática creada en 1974 a través de la alianza de varios miembros del Opus Dei, capitaneados por el profesor Rafael Calvo Serer, anterior ideólogo integrista del franquismo, con Santiago Carrillo, líder del PCE. Mi discrepancia es con esos miembros y por razones políticas, no con el Opus Dei como institución a la que admiro.

LA VENGANZA DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

El Partido Comunista puede tal vez hoy recrudecer su venganza contra Franco, que le venció en 1939 y después hizo todo lo posible por aniquilarle. Muchos comunistas, además, siguiendo el ejemplo del ya fallecido Fernando Claudín, abandonaron al PCE cuando hacía ya agua por todas partes y se acogieron a la Internacional Socialista, a la que los comunistas llamaron «casa común de la izquierda» y los socialistas, con el deseo de verse juntos, pero no revueltos con los comunistas, prefirieron decir lo mismo con una letra más: «Causa común de la izquierda». La Internacional Socialista es una institución compleja y por lo general mal estudiada que en buena parte se identifica con otra institución aún más extraña y complicada; nada menos que la Masonería. Por supuesto que Internacional Socialista y Masonería son dos grandes enemigas de Franco y junto con la perdurable resaca comunista, creo que en ellas hay que encontrar las fuentes principales para la iniciativa y el mantenimiento de la campaña de abominación contra su figura y para la destrucción de la memoria histórica de los españoles respecto de Franco y su régimen.

La Internacional Socialista y el PSOE

La Internacional Socialista —ya lo hemos dicho y lo repetiremos en este libro—, que es el nombre actual de la institución, fue creada formalmente por el gran colaborador de Carlos Marx, Friedrich Engels, poco después de la muerte de Marx, con la intención de coordinar los diversos partidos

socialistas o socialdemócratas de ámbito nacional que se habían fundado después de que Marx perdiera el control de la Primera Internacional, que contribuyó a crear en la reunión de Londres celebrada en 1864. La Primera Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) era un conjunto exclusivo con tres elementos principales: en primer lugar, los anarquistas y anarcosindicalistas, cuyo líder era Bakunin, que pretendían la destrucción del Estado y de la sociedad tal como la conocemos y cuyo método era la *propaganda por el hecho*, eufemismo para designar el terrorismo puro y duro. Se llamaban también *libertarios*. El segundo elemento eran los autoritarios o marxistas, que reconocían como maestro y jefe al propio Marx y se enfrentaron a los seguidores de Bakunin desde los primeros pasos de la Internacional. El tercer elemento eran los masones de signo revolucionario, que se oponían a los de signo burgués y se mostraron muy activos en acontecimientos subversivos de la época como la Commune de París en 1871. Los anarquistas de Bakunin acabaron por hacerse con el control de la Primera Internacional, de la que se separaron los marxistas que fueron creando, bajo la orientación de Marx, partidos nacionales entre los que el primero fue el alemán (Partido Socialista de Alemania o SPD, siglas que hoy conserva), aunque a veces se llamaron socialdemócratas, que no representaban la acepción actual de este término, sino a un socialismo marxista revolucionario, como el Partido Socialdemócrata de Rusia, escindido después en sus dos ramas de mencheviques y bolcheviques. El PSOE español, creado por Pablo Iglesias con algunos compañeros de Madrid en el año 1879, pertenecía a esta misma tendencia y su *programa máximo*, cuya vigencia se reitera en todos los congresos socialistas hasta hoy mismo, es netamente marxista, revolucionario, enemigo de la propiedad privada, de la religión y del Ejército, adscrito a la lucha de clases y con exigencia de atribuir los medios de producción exclusivamente a la propiedad pública. A poco de la muerte de Marx (1883), Engels observó que la Internacional, como todo el mundo llamaba a la Primera, estaba completamente dominada por la tendencia anarquista y para no entregarle el monopolio revolucionario creó en París la Segunda Internacional, que coordinase la actuación de todos los partidos socialistas nacionales; era por encima de todo una Internacional de símbolos, que asumió la bandera roja de la A. I. T, creó la Fiesta del Trabajo el 1 de mayo y adoptó el famoso himno «Arriba, parias de la tierra, en pie famélica legión» que los actuales socialistas españoles cantan, a veces con el puño en alto, con sus camisas de marca y con los emolumentos, nada famélicos, que a los más

vivos de ellos les han producido sus bien organizadas prebendas, rapiñas y corrupciones.

La Segunda Internacional fue surcada casi desde sus orígenes por intensas corrientes reformistas que conservaban la terminología revolucionaria y truculenta, aunque dulcificaban la *praxis* en sentido burgués y moderado, y al menos proponían, en los primeros tiempos, una gran causa común: impedir la guerra entre naciones «burguesas» que se preparaba por motivos materiales disfrazados de nacionalismo patriótico y con fatales consecuencias para las clases trabajadoras. En 1914, los líderes socialistas de Europa descartaron tan humanitario propósito y entraron, junto a los nacionalistas burgueses, en los gobiernos de guerra dentro de las *uniones sagradas* que liquidaron la primera gran ilusión del socialismo internacional. Este gravísimo fracaso motivó la muerte de la Segunda Internacional, una muerte certificada por Lenin al dar origen en 1919 a la Tercera, la Internacional Comunista, que pretendía asumir en plenitud el legado revolucionario de Marx y Engels.

Bajo diversas denominaciones, la Segunda Internacional malvivió como muerto viviente hasta después de la Segunda Guerra Mundial; ya en plena guerra fría y en 1951 la estrategia norteamericana propuso a los socialistas alemanes una revitalización de la Segunda Internacional, que en efecto resurgió con el nombre actual de Internacional Socialista y con la misión histórica de alinear a lo más activo de la izquierda europea en contra de la expansión del Movimiento Comunista, es decir, el imperialismo del bloque soviético-maoísta, la URSS y China. El poderoso SPD, el partido socialista de Alemania, encabezó la nueva coordinación del socialismo mundial como había hecho por inspiración de Engels en los años ochenta del siglo anterior. En este sentido, la Internacional Socialista logró un gran éxito.

Como base para su nueva ideología, que aparentemente prescindió del marxismo, la Internacional Socialista asumió las doctrinas de la llamada Escuela de Frankfurt, el «Instituto para la Investigación Social», cuyos maestros alemanes —de Horkheimer a Adorno y Marcuse— se habían refugiado en Estados Unidos por la persecución de Hitler (eran casi todos judíos) y regresaron a Alemania para profundizar en su nueva línea de ideas que resumían difusamente en la palabra «crítica». Se trata en realidad de un neomarxismo crítico con el sistema capitalista, pero en el fondo compatible con él y que busca el poder político reforzado mediante la intervención en los mecanismos económicos y culturales de la sociedad.

Este marxismo descafeinado, pero corrosivo, que constituye el nuevo núcleo ideológico de la Internacional Socialista, ofrece varios asideros de

comprensión y conexión hacia otras dos instituciones renovadas: la Masonería y el sector «progresista» de la Iglesia católica. La conexión entre la Internacional Socialista y la Masonería la ha dejado muy clara un alto dignatario de las dos instituciones, Jacques Mitterrand, en su libro *La politique des Francmaçons* (París, Edit. Roblot), que pude comprar en París poco antes de que, según me han informado fuentes solventes, fuera retirado de las librerías por revelar tan imprudentemente algo que por lo visto convenía mantener en secreto. Pero la conexión triangular entre la actual Internacional Socialista, la Masonería y el progresismo teológico es un hecho sumamente sugestivo para comprender algunos de los misterios de nuestro tiempo. Añádase otra conexión de las dos primeras instituciones con los llamados *liberals* que se agrupan en el Partido Demócrata de los Estados Unidos y podremos comprender mejor el trasfondo de la decidida posición antifranquista de socialistas, masones, clero *progresista* y medios mundialistas con base en los Estados Unidos y extensas ramificaciones en todo el mundo. La extraña y emocionante inclinación de los jesuitas «progresistas» a socialistas y masones de nuestro tiempo no es sino un ejemplo más de cuánto venimos diciendo e insinuando. Para concretar aún más estos puntos de vista, debo añadir que nada me extraña un hecho poco o nada comentado: en los momentos en que se inicia este libro, en vísperas del XXV aniversario de la muerte del general Franco. Con motivo de un programa de Televisión Española dirigido por el equilibrado periodista Luis Herrero y dedicado a reflexionar sobre la época de Franco, con intervención de personalidades de varios pelajes, creo que conseguimos, por primera vez en muchos años, cuajar una discusión educada y moderada sobre esos cuarenta años de España. Allí estábamos personas antifranquistas como los señores Albiac y García Trevijano, el historiador moderado, pero con evidente inclinación política al PSOE, Juan Pablo Fusi, y dos exministros, uno de Franco, que era Gonzalo Fernández de la Mora, y otro de la democracia, que era yo. Resulta que Trevijano y Albiac aprovecharon la ocasión para negar carácter democrático a la situación actual; a lo que Fusi y yo nos opusimos sin negar las disfunciones, defectos y peligros de la actual democracia. Algunos describimos la época de Franco como compuesta por luces y sombras, pero con claro predominio de las luces. La comunicación entre todos resultó, sin embargo, educada y correcta. Aun así, el Partido Socialista ha llevado el programa hasta el Parlamento, ha protestado enérgicamente por algunas de nuestras opiniones, ha descalificado a algunos interlocutores y ha demostrado de nuevo el nulo respeto que siente por la

libertad de expresión, así como su brutal apego a la censura totalitaria que tantas veces nos ha impuesto durante su largo e intolerable mandato político que no se resignan a perder. El portavoz habitual del PSOE, es decir, el diario *El País*, dedicó dos días a proferir críticas insensatas, infundadas y antidemocráticas sobre el mismo asunto. Ese diario, lo he dicho más de una vez, actúa frecuentemente como portavoz de la Internacional Socialista y de la Masonería, refleja como norma las líneas de pensamiento propias de los *liberals* norteamericanos y disimula de forma virulenta su ignorancia crónica y su mala fe sesgada sobre la historia reciente de España. Hacía tiempo que sentía necesidad de proclamarlo con toda claridad en un libro de reflexiones históricas y desde una actitud de pleno respeto a la auténtica libertad de expresión. También el diario *ABC*, que suele circular ahora por la Historia dando tumbos y bandazos, se ha permitido descalificar ese mismo programa de TVE con argumentos estúpidos. A estas alturas sabemos todos que ni *El País* ni *ABC* consideran que su función principal sea informar; se han convertido en dos grandes medios manipuladores de la realidad y especialmente de la Historia. La reciente sustitución del director de *ABC*, relevado por un periodista tan cabal como don José Antonio Zarzalejos, me impulsó a conceder al nuevo director y al glorioso periódico un nuevo margen de esperanza. No sé.

Franco y los socialistas

Franco atribuía a los socialistas el carácter de fuerza principal dentro de la coalición del Frente Popular y por tanto les hacía responsables del desgobierno caótico que sufrió España desde las elecciones de febrero al alzamiento de julio de 1936. Conocía perfectamente los desahogos insultantes de Indalecio Prieto, como portavoz del exilio, contra su régimen y contra su persona, pero no formuló, ante ello, reacción negativa alguna que yo sepa. Más aún, cuando ya estaba preparando en cierto sentido la transición en los años setenta seguía persiguiendo con saña a los comunistas, pero no tomó medidas especiales contra los socialistas, a los que sabía protegidos por la estrategia norteamericana. El año 1974 fue decisivo para la configuración de un nuevo Partido Socialista cuando los jóvenes socialistas sevillanos, dirigidos por Felipe González, consiguieron la homologación por parte de la Internacional Socialista y —según un dirigente notable, Pablo Castellano— de la Masonería, por lo que empezaron a recibir, como les sucedería en el último año de Franco, 1975, una auténtica avalancha de adhesiones. El gobierno de Franco conocía perfectamente los movimientos del clan socialista

sevillano y apenas molestó a sus dirigentes; Felipe González hizo alguna breve visita a la comisaría, pero nunca estuvo en la cárcel. Franco comunica a su secretario militar, Franco Salgado, que conoce el plan norteamericano para articular la política de la transición española sobre un partido socialista moderado y otro de centro democrático y lo refiere como una cuestión de hecho, sin intención de oponerse a él. La revelación de Pablo Castellano es una nueva demostración de la tesis que acabo de exponer sobre la identificación de la Masonería y la Internacional Socialista.

La verdad es que el PSOE abogó por la Ruptura para la sustitución del régimen de Franco frente a los aperturistas del régimen que trabajábamos por la Reforma, pero Felipe González y los suyos no extremaron sus exigencias y se acomodaron perfectamente a la Reforma conducida por Adolfo Suárez, donde les constaba que tenían una posición privilegiada y una posibilidad segura para el acceso al poder. Lo cierto es que hasta 1982, cuando se produjo ese acceso, los socialistas no demostraron un especial encono contra la figura histórica de Franco. Por eso sospecho que la actual campaña recrudecida contra la memoria histórica de Franco se debe más bien a la frustración de Felipe González y sus seguidores por haber perdido el poder (en la campaña electoral de febrero y marzo de 1996 vimos con sorpresa como González y sus jenízaros se desbocaban hacia la manipulación y la regresión histórica) y tal vez a la venganza, un tanto tardía, de la Internacional Socialista y de su aliada íntima la Masonería.

En su desaforada campaña para las elecciones de 1996, Felipe González incurrió en todos los desafueros imaginables y algunos no imaginables. Rompió el pacto democrático, vigente desde la muerte de Franco y mucho más desde la Constitución, para no exhumar los recuerdos trágicos de la guerra civil en sentido político ni partidista. Entonó en Barcelona el grito de «No pasarán» (sin recordar que pasaron) y resucitó el enfrentamiento de las Dos Españas. Aun así perdió las elecciones porque estaba clavado y enfangado en la espantosa corrupción de la que era responsable, pero en vista de que obtuvo, contra sus propias expectativas, más de nueve millones de votos, se empeñó en repetir las mismas tácticas en su desmañada campaña electoral para las autonómicas gallegas de 1997 con un resultado catastrófico: su partido, el PSOE, fue derrotado por Manuel Fraga (que volvió a obtener la mayoría absoluta) y quedó relegado humillantemente al tercer lugar después de los abigarrados nacionalistas del hirsuto señor Beiras. González lo ignora todo sobre la guerra civil —especialmente sobre lo que sucedió durante la guerra civil en Galicia— y por eso metió allí la pata hasta el corvejón.

El Partido Socialista ha decidido en los últimos tiempos reavivar toda la panoplia de argumentos contra Franco que como hemos visto ideó Indalecio Prieto durante el exilio. Pero la identificación virtual entre la Internacional Socialista y la Masonería me sugiere que el motivo principal para la anacrónica ofensiva del PSOE contra la memoria de Franco es precisamente una venganza de signo masónico.

LA VENGANZA MASÓNICA CONTRA FRANCO

Me he pasado media vida desmintiendo informaciones falsas sobre la relación de Franco con la Masonería. Creo ver relativamente claro en medio de la *Oscuridad visible*, como denominan los masones a su ambiente interior. La Masonería, como ya advirtió el Papa León XIII, es la forma moderna de la gnosis, esa herejía de los primeros siglos cristianos que atenta directamente al corazón del cristianismo en nombre de un conocimiento superior (eso significa gnosis) que sólo pueden captar los iniciados. He dedicado a la Masonería que llamo Total un esfuerzo importante en mi recentísimo libro *Los signos del Anticristo* en esta misma editorial. La forma moderna de la Masonería, que se implantó en Inglaterra por pastores protestantes a comienzos del siglo XVIII, prescinde formalmente de Dios o le relega a una especie de limbo incognoscible y ajeno al hombre. Ha borrado de sus rituales la invocación y hasta el nombre de Cristo. Su objetivo fundamental es la *secularización*, que consiste en arrancar de la sociedad toda huella de Cristo y toda influencia de la Iglesia católica; por eso se opone cerradamente a la libertad de enseñanza para la Iglesia, como hemos visto en el caso de la Segunda República española y en la obsesión de los actuales socialistas contra la presencia de la Iglesia en la enseñanza y en la cultura.

Desde el punto de vista geopolítico, la Masonería moderna, cuya principal «obediencia» es la que depende de la Gran Logia de Inglaterra, ha actuado persistentemente como servidora del imperialismo británico tanto en los aspectos políticos como en los económicos. Hoy está demostrado que la revolución ultraliberal europea de 1848 fue tramada por Inglaterra y difundida por los agentes británicos en Europa. Sólo los masones recalcitrantes se atreven hoy a negar el influjo de la Masonería de obediencia inglesa en el hundimiento del Imperio español en América según las conveniencias británicas. La identificación del liberalismo radical español con la Masonería

es un hecho comprobado a lo largo del siglo XIX que continuó durante el primer tercio del siglo XX con virulencia.

Las relaciones del general Franco con la Masonería de su tiempo fueron muy complejas. Es un infundio masónico absolutamente falso que el resentimiento de Franco contra la Masonería se debiera a que el joven militar solicitase en África su ingreso en la orden secreta (a la que pertenecía seguramente su padre y ciertamente su hermano menor Ramón, el famoso aviador). Al contrario, Franco miraba con recelo y hostilidad la extensión de la Masonería en el Ejército de África, a la que atribuía las arbitrariedades y favoritismos que se notaban en cuestiones de ascensos y destinos, algo que Franco, desde un punto de vista profesional, miraba con repugnancia. Toda su vida, incluso durante su etapa africana, se comportó como un católico sincero y practicante, cuando en aquellos tiempos la Iglesia católica se mostraba profundamente incompatible con la secta masónica. Franco no era un militar inculto como repiten sin fundamento alguno sus enemigos; además de sus estudios profesionales constantemente renovados se interesaba por la literatura, la historia y el análisis político y llegó a convencerse de que la Masonería había perjudicado grave y constantemente a España desde las primeras décadas del siglo XVIII, en lo cual no le faltaban razones profundas. Creo que simplificaba bastante cuando atribuía a la Masonería las causas principales para la decadencia española, pero tampoco le faltaban razones para ello. La intervención masónica en el Desastre de 1898, que afectó vivísimamente a Franco adolescente, está firmemente probada como puede comprobarse en el testimonio y el análisis de un experto historiador militar, el teniente general duque de la Torre en su libro *España bélica, siglo XIX*, editado por Aguilar.

La decisiva intervención masónica en la política sectaria y anticlerical de la Segunda República ha sido cabalmente demostrada por la profesora Gómez Molleda en su libro *La Masonería española en el siglo XX* (Edit. Taurus). Y Franco conocía perfectamente el problema, así como la penetración masónica en la fuerzas armadas, que fue denunciada con nombres y apellidos por el diputado de la CEDA señor Cano en el Congreso de 1935. En la serie documental extraída del archivo de Franco por el profesor Luis Suárez Fernández y publicada por la Fundación Francisco Franco, así como en los ocho tomos de la documentada obra del mismo autor *Francisco Franco y su tiempo*, hay pruebas abundantes de que la información de Franco sobre la Masonería era de primera mano y provenía de fuentes diversas, generalmente fiables. La prohibición de Franco contra la Masonería, que formuló por ley,

fue implacable y se comprende el odio que los masones sintieron siempre por él. Para Franco, la Masonería y el comunismo eran los dos enemigos capitales de España y procedió en consecuencia, con la plena aprobación de la Iglesia católica en su tiempo.

En 1952, con pie de imprenta pero sin sello editorial, Franco, con el seudónimo «Jakin Boor», publicó un libro, *Masonería*, en que reunió numerosos artículos que, casi siempre con ese mismo y desnudo título, había publicado en el diario oficioso *Arriba*. (Mi amigo Gonzalo Fernández de la Mora cree que el autor no fue Franco, sino un íntimo colaborador; en todo caso los artículos reflejan exactamente el pensamiento de Franco sobre el asunto). Algunos críticos, sin haberse dignado leer ese libro, lo descalifican en bloque. No pienso seguir tan cómodo procedimiento. La información sobre la Masonería que se expone en ese libro no es despreciable. Incurre a veces en simplificación y en exageración, pero muchos rasgos y datos están históricamente fundados.

Basten estos puntos para resumir la hostilidad del general Franco hacia la Masonería, actitud correspondida lógicamente por la Masonería con un aborrecimiento perpetuo. El Rey Juan Carlos, por el contrario, incluyó pronta y expresamente a la Masonería en su decisión en favor de las libertades y levantó los vetos de Franco contra la institución. En 1977 los masones «alzaron columnas» según su peculiar terminología y reanudaron en España su vida normal interrumpida por el estallido de la guerra civil en 1936. Dada la formidable capacidad de comunicación que poseen los masones, creo muy probable que la excelente imagen universal de que pronto empezó a gozar el actual Rey de España se debe, en parte nada despreciable, al buen ambiente que la Masonería, agradecida, le ha creado en toda la extensión de su red de influencias, lo que nada tiene que ver con las opiniones personales que pueda albergar el Rey acerca de la Masonería, opiniones que por cierto, que yo sepa, nunca ha manifestado.

En estas notas me estoy refiriendo genéricamente a la Masonería como si se tratara de una institución unitaria. Es así y no es así. La Masonería es múltiple y su red de logias se agrupa en dos grandes obediencias más una constelación de líneas más o menos autónomas. La obediencia principal es la que sigue a la Gran Logia de Inglaterra, directamente derivada de la que se creó a principios del siglo XVIII con motivo de la unión de cuatro logias de Londres, pertenecientes hasta entonces a la llamada Masonería operativa, que a su vez derivaba de las asociaciones de constructores cuyas raíces se remontan a la Edad Media e incluso conservan rasgos de los *collegia*

profesionales donde estaban afiliados quienes se dedicaban al arte de la construcción en la época clásica. La Masonería antigua arrastraba huellas de ritos iniciáticos relacionados con los misterios orientales y combinados con residuos gnósticos. Estas herencias ancestrales han dejado su rastro en los rituales de la Masonería operativa que luego, modificados, han pasado a la Masonería especulativa, posiblemente a través de la Tradición de las Órdenes Militares.

Todavía dentro de la primera mitad del siglo XVIII, un masón de alto coturno, el caballero Ramsay, dirigió a las logias del continente un famoso discurso en que vinculaba los orígenes de la Masonería moderna a la actividad de las Órdenes Militares que combatieron en Tierra Santa, templarios y hospitalarios. Esta tesis ha sido muy discutida, pero contiene casi seguramente elementos de verdad. Por esa vía entraron en la Masonería operativa las tradiciones y leyendas en torno a la construcción del Templo de Salomón, cuyo principal proveedor fue Hiram rey de Tiro. Según esas tradiciones, Salomón confió la realización del Templo a un gran arquitecto, Hiram Abif, que fue asesinado por una banda de colaboradores infieles. En torno a la muerte y el descubrimiento de la tumba de Hiram Abif se han montado importantes ritos masónicos que se mantienen en la actualidad. Los cruzados, siempre según la tradición reiterada por Ramsay, trajeron los ritos masónicos a su red de encomiendas en Europa y los conservaron en los colegios de operarios adosados a esas encomiendas. De ahí deriva toda la tradición legendaria que vincula a la Masonería con la supervivencia de esos colegios después de la extinción de los Templarios por la hostilidad del rey Felipe el Hermoso de Francia que arrancó al Papa esa extinción a comienzos del siglo XIV.

Creo ser el primer historiador que ha publicado en castellano las Constituciones de la Masonería especulativa o de Anderson y los rituales de los cuatro grados correspondientes a la Gran Logia de Inglaterra. Mi esfuerzo de traducción ha sido a veces muy trabajoso por las dificultades que ofrece el inglés medieval en que están redactados los rituales, transmitidos por tradición oral ya que estaba (y está) terminantemente prohibido reproducirlos en forma impresa. Publiqué Constituciones y rituales en mi libro, de Editorial Fénix, *El Triple Secreto de la Masonería*, en el año 1994, cuyas tres ediciones están hoy virtualmente agotadas. Por ello he publicado en 1999 prácticamente el mismo libro, mejorado, con el título *La palabra perdida*.

Precisamente el estudio de los rituales me confirmó, por diversos contactos masónicos que pude mantener a raíz de la salida de mi libro, que

por encima de las diversas obediencias existe una clara unidad genérica que nos permite hablar de Masonería Universal. La obediencia más numerosa es la que se inserta en la Gran Logia de Inglaterra, que reúne a los masones del Reino Unido y los Estados Unidos hasta superar los doce millones de adeptos, que quizás lleguen hasta quince. Esta clase de Masonería acepta al Gran Arquitecto del Universo, que no es el Dios de los cristianos, sino una entidad fantasmagórica, gnóstica, perdida en la lejanía absoluta y desvinculada de las preocupaciones y los problemas del hombre; una actitud radicalmente deísta muy propia de la Ilustración radical. La segunda gran obediencia masónica se agrupa en los Grandes Orientes y es propia de la Masonería continental europea, donde muchas logias están también inscritas en la obediencia británica. Los Grandes Orientes, creados posteriormente a la Gran Logia, son autónomos entre sí y el más característico es el de Francia, que a fines del siglo XIX prescindió, ¡por votación!, de toda idea de Dios, que se relega como creencia libre e individual, pero no recibe ni asomos de culto en las reuniones masónicas; se trata por tanto de una Masonería atea. Hay también otras obediencias menores y variopintas además de estas dos principales; logias simbólicas, supremos capítulos, etc.

Pero debo insistir en que la Masonería, aun dividida en obediencias diferentes, mantiene la unidad genérica. Cualquier masón de cualquier obediencia es recibido fraternalmente en cualquier logia del mundo, puede participar en sus trabajos y recabar la protección y solidaridad de los demás masones. La Masonería es una sociedad hondamente solidaria; los masones se protegen y defienden entre sí, se ayudan en todo lo posible, suelen hablar siempre bien unos de otros. Forman una vasta red de socorros mutuos e influencias protectoras que cubre todo el mundo y difunde por todo el mundo sus actitudes fundamentales y sus consignas. La unidad masónica se confirma con el uso común de los principales ritos por obediencias diferentes. Recientemente, durante una conversación radiofónica con dignatarios masónicos de uno de los Grandes Orientes que operan en España, el gran maestre me dijo que en sus *tenidas* utilizaban mi traducción del grado cuarto, que yo tomé del ritual correspondiente a la Gran Logia, en el que se afirma que ese grado es «la cifra de toda la Masonería». Precisamente en ese ritual, que por lo visto es de uso común, se comunica «la palabra perdida», la expresión sincrética de la divinidad masónica cuyo nombre es Jah-Bul-On, extraña combinación del Dios de los judíos que es mismo de los cristianos (Yahvé), el dios de los sirios, los fenicios y los cartagineses (Bul, Baal) y el dios de los egipcios (On, abreviatura de Osiris), según se explica en el mismo

ritual. Éste es uno de los argumentos capitales por el que no tengo necesidad alguna de que la Iglesia católica me diga si la Masonería es o no compatible con el cristianismo; porque, en uno de sus grados fundamentales y universales, la Masonería invoca como nombre de Dios a una combinación impía del Dios verdadero con dos dioses paganos, a quienes los Santos Padres de la Iglesia identifican habitualmente con sendas configuraciones diabólicas.

LA LUCHA A MUERTE POR EL CONTROL DE LA COMUNICACIÓN Y POR LA CONFIGURACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

A partir de su legalización en España después de la muerte del general Franco, la Masonería se comportó con relativa prudencia y no desencadenó, por el momento, ninguna contraofensiva contra el recuerdo y la figura de Franco. Esta situación duró un cierto tiempo, pero como era de esperar no ha sido permanente. Hoy la Masonería, identificada genéricamente también con la Internacional Socialista, interviene de forma decidida en la abominación de Franco a que me estoy refiriendo en el presente estudio. Para mí, no ofrece duda la raíz masónica y gnóstica de algunas actitudes del Partido Socialista contra el general Franco y contra la memoria histórica positiva que muchos españoles conservan acerca de él. Un órgano oficioso de la Internacional Socialista, que sintoniza casi sin excepciones con las directrices y líneas ideológicas de esa institución, es el diario *El País*, que trata siempre con guante blanco a la Masonería y se hace eco de sus actuaciones y de sus consignas, así como combate incansablemente por el objetivo supremo de la secularización. En la actual campaña contra la figura histórica de Franco participa, evidentemente, un tenaz frente masónico. Vamos a encontrar algunos ejemplos concretos y relevantes a lo largo del presente estudio.

Recuerdo haber escuchado por radio un discurso del ex primer ministro socialista francés, Michel Rocard, que procedente de la extrema izquierda acabó por asentarse en el socialismo marxista. Expuso una tesis que me impresionó vivamente. No recuerdo la fecha, pero acababa de caer el Muro y desfondarse la Unión Soviética, hechos capitales del siglo XX que algunos interpretaron apresuradamente como el ocaso definitivo del marxismo. Cierto que el marxismo y el comunismo sufrieron un golpe mortal entre 1989 y 1991, pero tal vez sea prematuro extender a vuelta de correo las actas de defunción: un régimen comunista intenta arriesgadas experiencias en China, donde acaba de apoderarse de Hong-Kong; otro, el de Cuba, sigue siendo el

escándalo de todos los demócratas del mundo, menos de quienes le sostienen cínicamente; y se mantienen vivas numerosas huellas del marxismo en diversos regímenes de África y diversos sectores de la política y la Iglesia iberoamericana, por ejemplo en México. Los partidos comunistas se están reciclando a trompicones, pero con bastante efectividad y la Internacional Socialista está trufada de núcleos excomunistas que la obligan a escorar a la izquierda. Cuando escribo estas líneas, Polonia acaba de salir de un período de gobierno comunista y los comunistas participan intensamente en el gobierno socialista de Francia. Por su parte, los enjambres de intelectuales y profesores comunistas permanecen muchas veces fieles al marxismo, en el que se han formado, dentro del planeta universitario en los Estados Unidos, en Europa, en España y en el Tercer Mundo.

Por eso la tesis de Michel Rocard, a la que me estoy refiriendo, alcanza tanta importancia. «En el siglo XXI —afirmó— el dogma de la lucha de clases deberá sustituirse por el dominio de los medios de comunicación». Entre los tirones mundialistas que provienen de las estructuras del poder social en los Estados Unidos, mejor relacionadas con el horizonte de Israel y el complejo radical que forman la Internacional Socialista y la Masonería, el combate por el dominio de los medios de comunicación está en pleno desarrollo, como vemos con toda claridad en esta España de fin de siglo.

El combate se libra a tres bandas, con delimitaciones muy confusas entre los tres campos. Por una parte, la línea mundialista de poder, apoyada en fortísimas instituciones que preconizan el «nuevo orden mundial» bajo la hegemonía norteamericana cada vez más absoluta y prepotente. En segundo lugar, la simbiosis, porque no es una simple alianza, entre la Internacional Socialista, muy cargada de marxismo y comunismo residual más o menos disimulado, y el complejo masónico unitario a que nos hemos referido al evocar la situación de la Masonería hoy; entre estos dos frentes, el mundialista y el socialista-masónico, se tienden numerosos puentes de comunicación y mutua influencia. Queda el tercer frente, de signo religioso y culto a los valores tradicionales, cuya fuerza principal es la Iglesia católica entendida según las directrices espirituales del Papa Juan Pablo II, cuyas orientaciones pueden sufrir, por desgracia, un duro proceso de crítica e incluso un intento de demolición cuando él desaparezca, lo que, dado su estado de salud, puede estar desgraciadamente a la vuelta de la esquina, a la vuelta del Milenio. Este tercer frente espiritual, moral y religioso no es monolítico; crisis fatales, como la protagonizada por la Compañía de Jesús y que afecta también a otras órdenes e instituciones religiosas, lo tienen

cuarteado y le restan mucha eficacia. El clan dirigente de la Compañía de Jesús a partir de la elección del desventurado padre Pedro Arrupe en 1965 está en sintonía con la Internacional Socialista y la Masonería, que antes figuraban entre las instituciones enemigas de la orden ignaciana.

La lucha por el control de los medios de comunicación se ha hecho particularmente visible en España desde hace algunos años. En torno al —diario *El País*, que preside como núcleo toda una constelación de medios de comunicación, se concentran las líneas de fuerza de la Internacional Socialista, la Masonería genérica, el apoyo comunista residual, varios sectores del liberalismo radical y los intentos de monopolio mediático entre los que figura como más importante una plataforma de televisión digital. En el frente contrario, mucho menos definido, figuran la otra plataforma llamada Vía Digital, la influyente red de emisoras de radio dirigida por la Iglesia católica, la *COPE*, el diario *ABC*, que se perdía demasiadas veces en vericuetos erráticos, el diario *El Mundo*, que constituye una fuerza de choque a la que se debe, sin duda, el desahucio socialista en las elecciones de 1996 y el Partido Popular, cuyas directrices ideológicas no están nada claras y a veces contradicen al sentimiento de la mayoría de sus miembros. Pero este frente me parece mucho más confuso e indefinido que el frente socialista-masónico, cuyo aparente pluralismo encubre una férrea decisión de alcanzar los objetivos mundialistas que le marcan sus rígidas e implacables directrices internacionales. Todo este panorama puede parecer muy alambicado, pero contiene, en mi opinión, una intensa carga de realidad. Por lo que hace a nuestro propósito, la figura histórica del general Franco es tan ajena a un frente como al otro. Con más odio en el primer frente, con más cobardía acomplejada en el segundo, Francisco Franco y la idea de España por él representada constituyen un obstáculo y un estorbo para las dos agrupaciones que hoy se disputan la orientación de los destinos de España. Revelarlo y denunciarlo no entra, desde luego, en lo *políticamente correcto*, pero constituye una obligación ineludible para un historiador como el que suscribe, que valora por encima de todo su libertad y su independencia.

2. La hora de las revanchas: los pequeños enemigos de Franco en la transición y en la actualidad

Claro que no voy a situar a Santos Juliá, a Javier Tusell y a Paul Preston como enemigos de Franco al mismo nivel que Manuel Azaña e Indalecio Prieto. Cuando desapareció el general Primo de Rivera, su hijo José Antonio se enfrentó con los nuevos enemigos de la dictadura de los años veinte que proliferaban como hongos. Una de las más sugestivas defensas que hizo de su padre descalificaba las revanchas dirigidas contra él.

Los heroicos y clarividentes demócratas de toda la vida, que repitieron tan triste comportamiento a la muerte de Franco, no pueden catalogarse entre los grandes enemigos de don Francisco (así le llamaba siempre un concejal de Madrid democristiano y secretamente antifranquista, llamado Soler), pero sí que son enemigos tenaces, que toman la hostilidad y la argumentación de los grandes enemigos históricos de Franco para actualizarla en la etapa democrática abierta con la Reforma Política en 1976. En este epígrafe me voy a referir a los portavoces de la izquierda, porque dentro de la que he llamado derecha de Edipo han rebullido también grandes y pequeños enemigos de Franco, de los que daré cuenta después.

SANTOS JULIÁ, EL HISTORIADOR OFICIOSO DEL PSOE

Pablo Iglesias impuso como dominante la línea obrerista en el PSOE, que tras él siguió el demagogo estuquista Francisco Largo Caballero. Iglesias y Caballero recelaban, por definición, de los intelectuales y no les concedieron mucho juego en el socialismo español, donde eran, a lo sumo, tolerados. Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, nada menos, se acercaron al Partido Socialista con cierta ilusión. Unamuno joven llegó a ingresar en la Agrupación Socialista de Bilbao, en la que se sintió tan incómodo que salió pronto haciendo fu y cubriendo de insultos a sus excompañeros por zafios, dogmáticos y adoradores de Marx sin conocer a Marx. Ortega estuvo en algunas ocasiones en la Casa del Pueblo, pero no llegó a ingresar. Aparte del doctor Jaime Vera, que perteneció al círculo fundacional del PSOE sin que haya dejado obra duradera, los intelectuales socialistas más importantes hasta la guerra civil fueron tres catedráticos; el de Derecho Penal, don Luis Jiménez de Asúa; el de Lógica, don Julián Besteiro, y el granadino, don Fernando de los Ríos Urruti. Jiménez Asúa adquirió prestigio en su especialidad de Derecho Penal, que luego ejerció en Buenos Aires durante el exilio. Besteiro fue sucesor de Pablo Iglesias en la presidencia del PSOE y la UGT, publicó un ensayo teórico sobre marxismo, pero asumió una línea reformista y

moderada, actuó con respeto general como presidente de las Cortes en el primer bienio de la Segunda República y después fue arrinconado por los turbiones revolucionarios del socialismo, entregado a la orientación suicida de Francisco Largo Caballero, a quien jaleaban los delegados soviéticos y las juventudes socialistas volcadas en la bolchevización del PSOE. Al llegar la guerra civil, el profesor Besteiro no recibió cargo ni encargo político alguno. Permaneció todo el tiempo del conflicto en Madrid, donde estaban sus electores que siempre le habían otorgado el máximo número de votos en las listas donde figuraba el PSOE. No desempeñó funciones de gobierno ni se le consultó para nada, con excepción de Azaña que le confió una misión confidencial a Londres para procurar una mediación británica que pusiera fin a la guerra civil. No tuvo éxito y desde 1938 la Quinta Columna entró en contacto con él para que una junta que debería constituirse en Madrid entablara negociaciones de paz con el cuartel general de Franco. Así se hizo en marzo de 1939 al crearse en Madrid el Consejo de Defensa tras el pronunciamiento del coronel Casado contra Negrín. El profesor Besteiro era la figura más representativa de ese Consejo. No quiso escapar de Madrid y cayó prisionero de los vencedores que le encarcelaron. Murió en prisión poco después.

El profesor Jiménez Asúa había formado parte de la ponencia encargada de redactar el proyecto de Constitución de la República. No desempeñó funciones relevantes entre 1931 y 1939. Se refugió en el exilio. Fernando de los Ríos, que había tratado con Lenin sobre la incorporación del PSOE a la Tercera Internacional, quedó muy decepcionado ante el espectáculo de los dirigentes y delegados comunistas en Rusia. Es conocido por su libro *El sentido humanista del socialismo*. Fue ministro en los primeros gobiernos republicanos y durante la guerra civil desempeñó misiones diplomáticas. Se mostró muy activo en la política antifranquista del exilio.

El PSOE ha dispuesto de historiadores voluntariosos. El veterano Juan J. Morato fue autor de una historia de los primeros tiempos del Partido y el dirigente de la transición Luis Gómez Llorente, que se apartó de la actividad política al apreciar los primeros síntomas de corrupción en el PSOE de Felipe González, ha escrito también un ensayo histórico interesante. Durante la época de Franco, el único historiador socialista que conozco es Antonio Ramos Oliveira, que publicó en México una ambiciosa *Historia de España* en tres tomos durante los años cincuenta en la editorial mexicana Compañía General de Ediciones, sin fecha concreta. La obra es muy desequilibrada; se inicia en la prehistoria y el tomo tercero se dedica a la Segunda República y la

guerra civil. Este tercer tomo es de un partidismo feroz; pero no carece de interés, lo mismo que los dos primeros. Se trata de una Historia trazada desde una óptica marxista, pero ni siquiera con esa estructura me parece hoy un simple anacronismo.

No ha existido, pues, en la España del siglo XX, una escuela de historiadores socialistas. En nuestros días, sin embargo, han aparecido cuatro que, con o sin especial coordinación entre ellos, pueden considerarse como historiadores socialistas: uno autóctono, Santos Juliá, a quien veo claramente como historiador oficioso del PSOE con reconocida inclinación radical y marxista; otro relativamente moderado, Juan Pablo Fusi; otro a quien su ambición política y sus extraños resentimientos han convertido virtualmente en historiador socialista tal vez a pesar suyo, Javier Tusell; y otro de signo internacionalista que, tras pasar desapercibido durante muchos años, ha adquirido recientemente mucha nombradla como biógrafo de Franco, me refiero a Paul Preston. También Fusi es autor de una biografía sintética de Franco, a quien Tusell ha dedicado estudios parciales en todos los sentidos de la palabra. Creo necesario prestar una cierta atención a los cuatro. Empezaré por Santos Juliá, el historiador oficioso.

Una ambiciosa síntesis de toda la Historia

Santos Juliá nació, según una solapa de sus libros, en 1970. Es colaborador habitual de *El País* y acérrimo competidor de Javier Tusell en vacíos históricos, así como en desmañamiento literario, uno de los pocos escritores que puede disputar a Tusell la primacía en la chapuza estilística. No es autor muy prolífico, supongo que porque, pese a su íntima vinculación con el PSOE, no suelen formarse grandes colas en las librerías para adquirir sus producciones. Creo que el mejor comentario a su figura será analizar las tesis principales de sus libros más conocidos

Se lleva bien con los jesuitas progresistas, gremio al que, según me dicen algunos expertos, perteneció personalmente, aunque no lo he podido confirmar. De hecho los jesuitas de izquierda le han publicado un libro inconcebible en una de sus editoriales degradadas, «Mensajero» que en mejores tiempos ostentaba como nombre completo «El Mensajero del Corazón de Jesús», pero los dirigentes jesuitas de hoy, pese a las severas admoniciones del Papa Juan Pablo II, han prescindido del Corazón de Jesús por motivos que un día me explicó uno de ellos, muy apostólico: «¿Para qué vamos a rendir culto a una víscera?» El libro jesuítico de Santos Juliá se titula nada menos que *Introducción a la Historia (hombres, clases y pueblos)*[44].

Aunque de las tres figuras desnudas que aparecen en portada sólo una parezca un hombre; la primera es un simio inconfundible y la segunda un pitecántropo con garrote. Lo de «clases» evidencia ya la burda interpretación marxista de la Historia que adopta el autor, seis años antes de la caída del Muro de Berlín, ya es mala suerte.

El libro es una pretenciosa historia de la Humanidad que se abre con una frase genial: «La Tierra es una bola ígnea que se desprendió de alguna otra masa» (p. 7). Pero Marx debe esperar: «El salvajismo primitivo no conoce diferencias de clases sociales» (p. 15).

Menos mal que tan grave carencia se remedia pronto; porque una vez que los salvajes han saciado su hambre, «surge una clase que no se dedica al trabajo ni al laboreo, sino a otras actividades no productivas como son las del gobierno, las religiosas y las guerreras, a las que se añadiría después el deporte» (ibíd.). Por lo tanto gobernantes, sacerdotes y guerreros (más los deportistas, naturalmente) constituyen la «clase ociosa», es decir, la institucionalización de la vagancia, en la que surge el derecho de propiedad, cuyo primer objeto es apoderarse de la mujer ajena (p. 16). Vida muelle y novela verde, así es como concibe Santos Juliá una época que creíamos tan dura como la Prehistoria.

Me limito a espigar entre mis notas de lectura que van adornadas con más de dos signos de admiración; de lo contrario esta reseña se convertiría en un largo tratado de humor histórico, más bien negro. Hay un gran descubrimiento en la p. 28. «Egipto no conoce la esclavitud». Las Pirámides se construyeron, pues, como un ejercicio de libertad. (La egiptóloga Pauline Gedge ha descrito, en varios libros recientes de gran éxito, la amplitud del tráfico de esclavos en el período más idealista de Egipto, el de Akenatón). La historia de Grecia es una pura delicia, sobre todo cuando se aplica ya plenamente la lucha de clases a la tierra madre de nuestra civilización. «El incremento de la población, junto con la labranza de la tierra, creaban fuertes tensiones entre las clases más pobres y la clase rica. La única forma de paliar estos conflictos sociales, que llenan dos siglos de historia griega, era empujar a los ciudadanos al mar, a la búsqueda de nuevas tierras que explotar, así es como se inicia la vocación marinera de los griegos» (p. 49). A empujones, naturalmente. La Magna Grecia, Massalia, Ampurias y Rosas, la admirable talasocracia ateniense, a empujones.

Pero no bastaron los empujones. En las metrópolis se desencadenó, pese a los huecos que dejaron las expediciones colonizadoras, la lucha de clases pura y dura, grave conclusión que Santos Juliá deduce sin un dato, sin una fecha,

sin una prueba, hablando de «burguesía» nada menos. La figura del tirano «es el representante de los intereses de las clases medias y bajas» (p. 50) y a esta fase de tiranía sigue «el triunfo, en toda Grecia, de los partidos democráticos», otro invento genial de Juliá, la democracia de Esparta, de Corinto y de Tebas. En Atenas reinaba «el capitalismo liberal y mercantil» (p. 53) veintitrés siglos antes de que naciera el capitalismo, una notable anticipación. Nada debe extrañamos en esa Grecia del profesor Juliá, inventora, según él, del carácter individual del hombre (p. 56).

La historia de Roma y Cartago se abre con otro descubrimiento colosal. Hasta Juliá pensábamos que la expansión cartaginesa contra los griegos del Mediterráneo occidental (Sicilia, Cerdeña, Massalia) se había conseguido gracias a la acción combinada del ejército y la marina; Cartago fue inicialmente una colonia fenicia y se hicieron famosos los periplos de sus grandes navegantes allende el Estrecho, las Columnas de Hércules. Pues no. «Cartago es una potencia continental con un fuerte ejército de tierra, pero desprovista de flota» (p. 63). Es decir, que la victoria estratégica de Cartago frente a Alalia en el siglo VI a. C. se consiguió con el ejército de tierra andando sobre las aguas. El auge de Roma se debe a la lucha de clases; es decir, a la aparición de una nueva clase «que provenía fundamentalmente de la plebe, los capitalistas» (p. 64). Santos Juliá quería referirse a los *equites*, pero le salen los capitalistas de Marx sin advertir que el dominio de los recursos financieros nunca salió de los *optimates* que también se le olvidan. Eso le pasa por querer encorsetar la Historia viva en las pautas férreas que ni siquiera Marx se atrevió a aplicar a todas las épocas de la Historia. Y Juliá se inventa nuevas fases de la lucha de clases sin diseñar ni un remedo de la lucha de los partidos popular y aristocrático que es una lucha política mucho más que social.

Era inevitable que Santos Juliá presentase el desembarco del cristianismo en España como un episodio de la lucha de clases atemperada, menos mal, como una esperanza de salvación. La eclosión del cristianismo se describe de forma muy superficial; y cuando Juliá nos presenta las consecuencias de las invasiones bárbaras sobre la sociedad hispano-romana, primero nos dice (p. 93) que tales consecuencias resultaron mínimas y a la página siguiente cree, por el contrario, que fueron fundamentales, naturalmente; porque las invasiones comportaron nada menos que una sustitución en el núcleo dominante de la sociedad. El imaginativo historiador marxista ve burguesías por todas partes; las ha detectado en Grecia y en Roma y cree distinguirlas incluso en el seno de la sociedad islámica (p. 100). Su visión de la sociedad

medieval es donosa: no la concibe como una penetración profunda de la fe y la espiritualidad, sino como una identificación de la sociedad y la Iglesia con lo que «la misión espiritual de la Iglesia sufrió un eclipse» (p. 106). Un eclipse llamado nada menos que Cristiandad, el nombre medieval de Europa.

La que llamamos «pérdida de España» se describe por Santos Juliá de forma sumamente original. «En el año 711, para ayudar al rey visigodo Witiza en su lucha contra el usurpador Rodrigo desembarcan en España unos 35 000 hombres» (p. 110). El problema es que Witiza murió en el año 710, el año anterior a la invasión; que los islámicos no vinieron a ayudar a nadie, sino a quedarse con la Península y de paso con la Europa cristiana; y que no desembarcaron 35 000, sino primero siete mil y luego diez mil. La interpretación de Castilla como sociedad democrática es muy estimulante, pero ajena a la realidad (p. 113). La gestación de las clases sociales y su correspondiente lucha sólo nace de la obsesión marxista del historiador, que no puede explicar hechos ciertos como el ascenso social de la caballería villana, fijado por Sánchez Albornoz (p. 115).

A Santos Juliá se le escapa toda la magia de la Edad Media, aun orlada de tragedia; y toda la grandeza del «otoño de la Edad Media» que fue tan decisivo para la configuración imperial de Europa en el siglo XVI, pero es que un historiador marxista no es capaz de la más mínima sintonía con la poesía de la Historia. Con la llegada de la Edad Moderna ya puede aferrarse Juliá a su querencia marxista de capitalismo contra feudalismo; incluso al tratar de España, potencia hegemónica en la primera fase de la Edad Moderna, reino al que tan mal se acomodan las descripciones de capitalismo y feudalismo. No sé qué rayos pinta en la descripción de la Edad Moderna la carga inglesa de la brigada ligera que sucedió en pleno siglo XIX; y Santos Juliá se arma un lío descomunal con el enfrentamiento de caballería pesada y artillería de campaña, que fue durante muchas décadas la gloria de las armas francesas. Debería leer despacio la *Historia del arte de la guerra* del mariscal Montgomery para salir del embrollo (p. 131).

No merece el catolicismo la descalificación total por su «desprecio al trabajo» (p. 139), eso es una mala generalización de una discutible tesis de Weber.

Nuevo lío de Santos Juliá entre el Humanismo y el Renacimiento, cuyas fuentes no están en el siglo XV, sino en el anterior; Dante nace poco después de mediado el XIII. «La Iglesia católica —dice— conoció divisiones y cismas desde el momento en que pasó a ser religión oficial» (p. 147). Y tres siglos antes: la más peligrosa de todas las herejías, la gnosis, arranca del siglo I.

Atribuir a la vocación marítima de Inglaterra su ruptura con Roma bajo Enrique VIII (p. 149) es otro alarde de imaginación arbitraria. Interpretar el Concilio de Trento como un intento católico de ahondar en la separación (ibíd.) es ignorar la clave del Concilio de Trento en su tracto más creativo. Juliá llama intransigente a la Reforma Católica, designada por él negativamente como Contrarreforma (p. 150); e interpreta la Reforma Católica, de la que brotó una fantástica eclosión de pensamiento, arte y cultura, como una «impermeabilización que condenaba desde Roma todas las corrientes culturales y de pensamiento que llenaron los siglos XVIII y XIX», equivale a divinizar los aspectos más negativos y excluyentes de las dos Ilustraciones y a ignorar que la ciencia moderna, el pensamiento moderno y la metafísica moderna nacieron en mentes católicas: Galileo, Descartes y Francisco Suárez.

Santos Juliá no demuestra conocer la clave del reinado de los Reyes Católicos. Atribuye al «pueblo español, ignorante y cegado por la clase dominante hacia el odio contra los judíos» (p. 155), cuando ese odio fue un fenómeno general en Europa muy anterior respecto de España. Interpretar la rebelión de las Comunidades como un «movimiento progresista» es provocar la hilaridad de un lector medianamente culto (p. 164). Y no cabe mayor injusticia histórica que describir con esta vil caricatura la obra de España en las Indias: «La España inferior, que ora y bosteza (Machado), la España ignorante y presuntuosa, mísera y caballeresca, holgazana y presumida, fue el fruto del Imperio» (p. 168). Ni una palabra de la España de los virreinatos y la evangelización del Nuevo Mundo, la España de don Quijote y las Meninas, la España de Trento y de Lepanto, la España que salvó dos veces a Viena y se reflejó en el testamento imperial de Carlos III. Hasta tales abismos de impericia puede conducir a un historiador el «progresismo» marxista. Con esas ideas sobre el Imperio no debe extrañamos la desvaída descripción que nos ofrece Santos Juliá del siglo XVIII en España.

La Revolución francesa de Santos Juliá es la de Marx, aunque privada de la base que utilizó Marx para sus famosas distorsiones. El siglo XIX de Juliá es uno de los más lamentables de su aventura histórica. Atribuir el motín de Aranjuez en 1808 a la sublevación de las clases populares (p. 220) y no a un pronunciamiento tramado por Fernando VII y su partido fernandino es no querer saber nada sobre ese acontecimiento capital. La visión julianesca del siglo XIX es sumamente barata y su cicatería con el intento de la primera Restauración, lamentable. El siglo XX de nuestro historiador es una apoteosis del marxismo; parece escrito sobre otro planeta. Juliá fustiga al imperialismo

capitalista, pero no tiene una palabra de condena para el imperialismo marxista-leninista. La Revolución soviética, obra de intelectuales lunáticos consumada por los peores criminales de la Historia, que sumieron a Rusia y a casi todo el mundo en una tragedia de setenta años, es para Santos Juliá «obra de los amantes de la paz y el socialismo» que encendieron para los pueblos «por vez primera una gran esperanza». Supongo que a estas alturas el historiador oficioso del PSOE tratará de olvidar estas páginas, muerto de vergüenza.

El capítulo final de Santos Juliá sobre la historia de España resulta especialmente lamentable. Sitúa la muerte de Cánovas en 1898, cuando ocurrió el año anterior (p. 271). Es injustísimo con la Iglesia católica, a la que presenta entregada a los intereses de las clases dominantes (p. 274). Identifica a la Dictadura de Primo de Rivera con la inspiración fascista (p. 278). Su presentación de la República y la guerra civil es sencillamente aberrante; la guerra civil es un efecto de la lucha de clases, no faltaba más, lo cual supone una crasa ignorancia sobre la entraña de la guerra civil. Multiplica las víctimas republicanas de la postguerra (p. 283). El libro termina sin el menor atisbo de la crisis y la caída del comunismo, para las que sólo faltaban seis años, y con una descripción de la Iglesia católica como instrumento de las clases dominantes del capitalismo, que es quizás la caricatura más detonante de las muchas con que nos obsequia Santos Juliá a lo largo de su esperpento histórico.

Éstos son los fundamentos históricos sobre los que se asientan las «investigaciones» del historiador oficioso del PSOE. Sectarismo puro, digno del sectarismo socialista.

Una versión alienada del Frente Popular

Pero Santos Juliá se ganó los entorchados de historiador socialista oficioso en 1977 y 1979 con dos libros, publicados por la editorial marxista Siglo XXI Editores, sobre la fase final de la República. Parece que estas dos obras provienen de una tesis doctoral que preparó en Oxford bajo la supervisión del profesor Raymond Carr, ilustre hispanista que debió de delegar en alguien menos experto la tutoría sobre Juliá porque Carr sabe perfectamente lo que fue el Frente Popular en España y Santos Juliá, por el contrario, demuestra cumplidamente no tener de ese acontecimiento la menor idea. He estudiado de cerca en varias ocasiones esa fase final de la República y como réplica a las provocaciones antihistóricas de los señores González y Guerra en las últimas confrontaciones electorales me propongo publicar,

cuanto antes, un nuevo estudio, cuyo título provisional es *El PSOE provocó la guerra civil (análisis documental e histórico),* con la sana intención de que dichos ilustres políticos dejen de despreciar públicamente cuánto ignoran. En dos capítulos de este mismo libro ofrezco un anticipo por ahora suficiente.

El primero de los libros histórico-teóricos publicados por Santos Juliá después de la muerte de Franco se titula *La izquierda del PSOE (1935 y 1936)* y se refiere a la actuación de esa izquierda socialista, marxista y revolucionaria, a raíz de la Revolución de Octubre de 1934 hasta el estallido de la guerra civil. Dos son los elementos de esa izquierda socialista: el grupo intelectual, reunido en torno a Luis Araquistáin en el periódico *Claridad*, que es su órgano; y el conjunto de líderes de la UGT, que se oponen al «centrismo» de Prieto y al reformismo de Besteiro para respaldar, en combinación con los comunistas, a la demagogia revolucionaria de Largo Caballero. La primera impresión que produce el estudio de Juliá es que se refiere a un país diferente de España. Por lo pronto no hay una exposición seria de la Revolución de Octubre, a la que los testimonios socialistas que aduce y aprueba el propio Juliá no condenan por antidemocrática, sino que elogian como el único recurso para frenar «la marcha imparable del fascismo hacia el poder». Lo malo es que Santos Juliá no define el fascismo europeo más que con lugares comunes tomados de la propaganda antifascista y ni se toma la molestia de ofrecernos al menos una descripción somera del fascismo español.

Santos Juliá no estudia las tres corrientes del socialismo en la República. Su libro es un comentario pegado a las huellas escritas de Araquistáin, a quien Madariaga denominó «capellán» de Largo Caballero junto con Álvarez del Vayo. No estudia la dimensión prosoviética y criptocomunista de Araquistáin en ese período, ni su evolución posterior al anticomunismo, que seguramente se debió al trato inicuo que soviéticos y comunistas dedicaron a Caballero durante la guerra civil, donde acabaron con su poder y su capacidad política. Santos Juliá tampoco presenta, ni poco ni mucho, la figura y la trayectoria de Prieto, ni tiene más que una palabra formularia y despectiva para el reformismo de Julián Besteiro. La Revolución de Octubre, hecho capital de la historia de la República y carga de profundidad que reventó en la guerra civil, no merece el menor análisis. Para Juliá sólo tenían derecho en 1935-1936 a la vida y la hegemonía política los socialistas y dentro de ellos los socialistas revolucionarios, la izquierda socialista que es el objeto de su estudio. La derecha católica no era más que una banda fascista y los militares otra banda de golpistas.

Hay un texto socialista fundamental para comprender la degradación revolucionaria del PSOE que fue seguramente la causa principal y determinante de la guerra civil: el *Anticaballero* del escritor besteirista Gabriel Mario de Coca, publicado en 1936 poco antes de la guerra civil y que siempre me pareció tan importante que cuando dirigí la Editora Nacional, en los últimos años de la vida de Franco, lo reedité en Ediciones del Centro, que era un sello de la Editora. Pues bien, Santos Juliá, que podía disponer de la edición de 1936 y de la nuestra, publicada poco antes de que él abordase su investigación, no menciona en el texto ni en la bibliografía el libro de Coca, que se subtitula «Crítica marxista a la bolchevización del Partido Socialista». Este fenómeno de la bolchevización socialista es de primera magnitud y explica casi por sí solo el deslizamiento de la República hacia la guerra civil; porque provocó la desunión irreconciliable del PSOE, «la guerra civil dentro del partido socialista provocó la guerra civil general», como dijo lapidariamente Salvador de Madariaga, cito de memoria, pero reflejo lo esencial de su dictamen, con toda seguridad.

Aunque Santos Juliá cita la primera versión de la *Historia del socialismo en España*, que reedité en Planeta el año 1983, no da muestras de haber leído mi libro, en el que se analizan a fondo los contenidos que para Santos Juliá son simples vacíos.

Los defectos del libro que acabo de descalificar se agravan en el segundo, *Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936)*, publicado por la misma editorial marxista Siglo XXI Editores en 1979. Estudiado el librito de Juliá con el mayor interés, mi decepción ha sido casi absoluta; el fenómeno por él descrito tiene que ver muy poco con lo que realmente fue el Frente Popular, en su origen y en su ejercicio.

Por lo pronto para Juliá la CEDA de Gil Robles sólo tiene una dimensión totalitaria (p. 4), lo cual es simplemente falso; cedió, sí, verbalmente, a ciertas tentaciones totalitarias, pero fue un partido que trató casi siempre de mantenerse en la legalidad republicana. Juliá es muy injusto cuando descalifica a los primeros ministros de la CEDA, cuya inclusión en el gobierno forzó Gil Robles a principios de octubre de 1934 con toda razón, porque había ganado limpiamente las elecciones del año anterior. Sin concretar nombres ni fechas acusa Juliá a Falange de haber asesinado en 1934 a destacados miembros de las organizaciones juveniles socialistas y comunistas, pero no alude a los falangistas asesinados por sus enemigos (p. 7). La comparación histórica de Gil Robles con los reyes absolutos (p. 9) es una simple *boutade*.

Yerra Juliá al atribuir al Frente Popular español un origen de inspiración francesa y otro en «la acción directa de la Internacional Comunista» (p. 12). Por el contrario, el origen del Frente Popular español, así como el esbozo de su estrategia, proviene de los contactos epistolares Azaña-Prieto posteriores a la revolución de octubre de 1934 como he demostrado documentalmente desde 1969. Describir al líder socialista asturiano Ramón González Peña como «aureolado de Revolución» (p. 48) es desconocer la opinión general sobre el personaje, desprestigiado y vilipendiado por derechas e izquierdas en vista de, sus desvalijamientos de bancos en Asturias y su huida interminable con el producto de sus rapiñas hasta que fue capturado por la policía republicana como ladrón, no como caudillo político.

Juliá atribuye a la influencia comunista —el PCE y la Internacional Comunista— una importancia desmesurada en la gestación del Frente Popular (p. 72 s.). No tiene razón. El Frente Popular fue el nuevo nombre de la veterana Conjunción republicano-socialista, creada por primera vez en 1909 contra el gobierno largo de Maura y revitalizada para el brote revolucionario de 1917 y nuevamente para la conspiración republicana de 1930-1931. Los comunistas, aleccionados desde su III Internacional, hicieron lo imposible para subirse al tren del Frente Popular (al que llamaron inicialmente «bloque popular») en el segundo semestre de 1935, pero encontraron una cerrada oposición por parte de los republicanos y los socialistas moderados, hasta que Largo Caballero, sometido a un proceso de bolchevización galopante, les franqueó el paso ya en el mes de enero de 1936, pocos días antes de la firma del pacto de Frente Popular. Cree Santos Juliá que todo el programa del Frente Popular «es republicano» (p. 141), pero me parece mucho más exacta la interpretación de Gil Robles que denomina a ese programa «acta de desacuerdos», lista contradictoria de exigencias republicanas —relativamente moderadas— y reclamaciones obreras, que son abiertamente revolucionarias. El historiador socialista incurre luego en varias contradicciones graves. Subraya la diversidad radical entre la línea de Largo Caballero en el Frente Popular y la línea comunista, pero los textos que aduce demuestran lo contrario, es decir, la identidad de esas dos líneas (p. 156 s). Luego se pierde en disquisiciones verbales sobre la esencia del Frente Popular hasta que descubre su juego y revela a su ídolo: «Juan Negrín es quien inaugura en España la verdadera historia del Frente Popular» (p. 161). Acabáramos. Santos Juliá aparece por fin con su característica dominante: como defensor e idólatra del doctor Juan Negrín, el socialista prosoviético y entregado a las directrices de Moscú, que le elevó en 1937 a la jefatura del gobierno de la

República en guerra tras eliminar a Largo Caballero. Negrín, aliado de los comunistas españoles, protegido de los soviéticos, alfil español de la estrategia de Stalin, a quien había entregado en 1936, como ministro de Hacienda, el oro del Banco de España. Burnett Bolloten, el especialista máximo en la zona roja, ha marcado indeleblemente a Negrín como el hombre de Moscú en España; ahí está su estudio monumental *La guerra civil española: revolución y contrarrevolución*, cuya primera versión es de 1961 y la última y definitiva fue publicada por Alianza Editorial en 1989.

La conclusión de Juliá es que el Frente Popular fue «el sueño de una nueva sociedad». Una sociedad revolucionaria, vengativa, plano inclinado hacia la guerra civil. Manuel Azaña, en *La Velada en Benicarló* y en sus lúcidos artículos escritos desde el exilio francés sobre la guerra española, es mucho menos optimista que Santos Juliá. Y Azaña no fue un testigo cualquiera del Frente Popular sino su creador. Santos Juliá se queda en turiferario, al margen de la auténtica Historia.

Azaña en la cresta de la ola

El cuarto libro de Santos Juliá, que debo presentar, es precisamente *Manuel Azaña, una biografía política*, publicado por Alianza Editorial en 1990. No me consta que Santos Juliá haya publicado un segundo tomo; que en todo caso resultaría muy conveniente, porque esta biografía política no comprende más que la vida de Azaña hasta que llega a la presidencia de la República en mayo de 1936, por lo que deja fuera su actuación en los meses finales de la República, en toda la guerra civil y en el exilio.

Aun así, el libro ofrece notable interés y desde luego es el más estimable de los cuatro del mismo autor que integran hasta ahora este comentario. Por supuesto que Santos Juliá no consigue desprenderse de su partidismo e incluso de su sectarismo, pero tales defectos no anulan el valor del libro. El campo republicano se presentaba muy desvaído en los dos libros anteriores sobre la segunda y tercera fase de la República; ahora, gracias a un seguimiento minucioso de la figura de Azaña, el factor republicano adquiere la importancia debida. La biografía de Juliá es azañista, es decir, netamente favorable a la «revelación de la República». Incluye facetas humanas sugestivas y mal conocidas, como las experiencias religiosas de Azaña en el colegio de los agustinos del Escorial y su enamoramiento sincero de Dolores Rivas Cherif. Juliá no clarifica la complicada relación de Azaña con su cuñado Cipriano Rivas, sino que la embrolla un poco más, tal vez porque estuvo embrollada casi desde el principio.

La trayectoria humana de Azaña, inevitablemente implicada en su aventura y su desventura política, aparece seguida con intensa atención y fundada en documentación seria aunque no completa. Está bien estudiada la evolución de Azaña desde su adhesión al Partido Reformista de Melquíades Álvarez hasta que se da de baja en este grupo a raíz del advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera. También ofrece aires de novedad la etapa oculta de Azaña bajo la Dictadura, su pronta adscripción al republicanismo en Acción Política, luego llamada Acción Republicana, el grupo que se sumó a la Alianza Republicana de 1925. Está bien vista la prolongada relación de Azaña con el Ateneo de Madrid y su acceso a la presidencia de esta entidad político-cultural en 1930.

El tratamiento de Azaña como «revelación de la República» me parece muy desigual. Las reformas militares se estudian con escasa atención a los agravios institucionales que sufrieron las Fuerzas Armadas y no se distingue entre los problemas del Ejército, la Marina y las fuerzas de Orden Público, que fueron muy diferentes. Juliá conoce y valora los estudios del general Ramón Salas, pero no los aprovecha debidamente; en cambio pasa con negligencia por los importantísimos escritos del general Mola, cuyas críticas a las reformas de Azaña se escribieron en caliente, sí, pero con sinceridad y fundamento. Elude Santos Juliá la crítica de la insuficiente reforma agraria, cuyo fracaso ha de atribuirse al político de Alcalá, como ha demostrado el clarividente ingeniero don Pascual Camón, a quien Azaña no hizo el menor caso. La actuación de Azaña ante el problema de la Iglesia se interpreta de forma injustamente favorable al político jacobino, que no fue responsable de la moderación equilibrada (como él pretendía), sino de la provocación que arrojó a España en la guerra civil. Tampoco tiene Santos Juliá nada que decir sobre la trascendencia del ingreso de Azaña en la Masonería en 1932, sobre la injusticia gratuita de su obsesión antidemocrática contra la libertad de docencia que arrebató a las congregaciones religiosas, ni sobre su espantoso error en el restablecimiento del orden público por medio de procedimientos autoritarios y reprobables. La caída paulatina de Azaña a lo largo del año 1933, el año de Hitler, su aferramiento antidemocrático al poder cuando ya había perdido el favor de la opinión pública no merecen un análisis tan insuficiente y superficial.

Santos Juliá presenta a Azaña como espejo de demócratas, pero a medida que ganamos perspectiva sobre sus actuaciones vemos cada vez más resaltados sus rasgos antiliberales y antidemocráticos, que reventaron con motivo de la Revolución de Octubre de 1934. Azaña concebía a la República

exclusivamente para los republicanos. El triunfo del Catorce de Abril fue tan inesperado y el hundimiento de la Monarquía tan abrumador que Manuel Azaña y los líderes republicanos pensaron que sería también definitivo y articularon un régimen en el que no pensaban dar paso jamás a sus enemigos. Por eso no aceptaron la victoria electoral de sus enemigos en noviembre de 1933 y se alzaron contra ella. Por eso no eran, en el fondo, demócratas, aunque el profesor Santos Juliá no acierte a comprenderlo.

Hay otros desbarajustes históricos de Santos Juliá que comentaremos en otros momentos de este libro. Por ahora creo que esta crítica de sus tesis y libros fundamentales deja las cosas bastante en claro. Eso pensaba yo hasta este mismo año de 1999, cuando Juliá nos ha dado una gran sorpresa: el libro (del que es coordinador) *Víctimas de la guerra civil*, editado por Temas de Hoy, y que ha alcanzado un importante éxito editorial. Le dedicaré el siguiente epígrafe.

¿VÍCTIMAS DE LA GUERRA O ARMAS PARA LA VENGANZA?

En 1966, cuando publiqué mi primer libro de Historia, titulado *Cien libros básicos sobre la guerra de España* (Madrid, Publicaciones Españolas), me referí a varias obras que trataban de la represión en la guerra civil. Dos sobre la zona nacional; las de Antonio Ruiz Vilaplana y la de Antonio Bahamonde. Uno sobre la represión roja, la célebre *Causa General*, término que significa dos cosas. Una es el gran proceso de instrucción que se abrió en 1940 y reunió una documentación ingente sobre las represiones cometidas por los partidarios del Frente Popular; otra es el libro que apareció con el mismo título y cuya cuarta edición, correspondiente al año 1961, tengo delante, editada por la Dirección General de Información del Ministerio de Información y Turismo.

En mi citado libro de 1966 reconocí el alto valor histórico del libro y el relevante valor documental del gran archivo. Había rebajado el valor histórico de los testimonios enemigos (Vilaplana y Bahamonde) muy jaleados por la propaganda republicana y me creí con derecho a apuntar algunas críticas sobre la *Causa General* como publicación. Esta actitud me costó cara. La Fiscalía de la Causa General elevó al gobierno una enérgica protesta contra mí por esas críticas y se me prohibió por bastante tiempo el acceso a los archivos del Servicio Histórico Militar, lo cual por supuesto no me hizo cambiar mis ideas sobre la guerra civil ni mi método como historiador. Me

limité a esperar, en pleno trabajo, tiempos mejores que llegaron, como no podía ser menos.

En esas críticas de 1966 afirmé que «La Causa General está aún por terminar» y lo sigo creyendo. Después de la muerte de Franco se han realizado en ese archivo investigaciones muy valiosas, como las del general Casas de la Vega sobre la represión del Frente Popular en Madrid y la de los historiadores Fernández y Gibson sobre los crímenes de Paracuellos del Jarama. Pero no se ha verificado el análisis completo de la represión efectuada por los partidarios del Frente Popular, mientras que los herederos de éstos han organizado una especie de Causa General por su cuenta, cuyos resultados se resumen en este libro de Santos Juliá.

Este historiador socialista escribe la introducción general al libro, que nos da ya idea de la más que discutible metodología utilizada en toda la obra. No se ofrecen en notas a pie de página datos que demuestren cada afirmación, sino que las afirmaciones y las tesis —en forma de generalizaciones muchas veces gratuitas e infundadas— se refieren, a veces, a los autores y obras que se citan en la bibliografía, pero sin el más mínimo análisis de fuentes; en ellas se entremezclan los autores de épocas anteriores (como los citados Bahamonde y Vilaplana) con los estudios monográficos recientes. Pero el tono general de la obra, las afirmaciones y las reticencias, son de una parcialidad abrumadora; el calificativo de *genocidio*, por ejemplo, se reserva, sin excepción a las represiones de origen nacional, el matiz irónico o jocoso, a veces de pésimo gusto, siempre suena a favor del Frente Popular. Los cuatro autores principales del libro no disimulan su abierta militancia antifranquista. Pero en vez de generalizar vamos al comentario, necesariamente breve, de la obra.

El libro se presenta, un tanto impúdicamente, en la cuarta de cubierta como de reconciliación, pero desmiente tan loable espíritu desde la portada, una escena de prisioneros del ejército republicano conducidos, seguramente a la muerte, por una patrulla del ejercito nacional. (No sé si es una fotografía o un fotograma). Santos Juliá, sin desmentir su manifiesta parcialidad que hemos advertido en sus obras ya comentadas, apunta que la causa del estallido de la guerra civil son los generales pronunciados en julio de 1936 (p. 14) y el libro se inicia también el 17 de julio de ese año, sin admitir los condicionamientos decisivos de 1934 —la agresión antidemocrática de las izquierdas a la República— ni de la primavera de 1936, la nueva agresión antidemocrática del Frente Popular desde la convocatoria de las elecciones a celebrar en febrero de 1936. Ésta parece ser ahora la táctica histórica de los

herederos del Frente Popular; no conciben que, en los terrenos político y religioso, la guerra civil fue una respuesta, no simplemente una iniciativa. Cierto que Juliá alude al «ciclo del levantamiento plebiscitario» desde las rebeliones anarquistas de 1932; pero luego se olvida, así como sus coautores en este libro, de antecedentes tan inexcusables. En cambio tiene toda la razón cuando atribuye el carácter y la duración de la guerra civil no al «levantamiento del ejército contra el pueblo», que antes esgrimían los historiadores de izquierda, sino a la «fractura del ejército y las fuerzas de seguridad» (p. 16), lo cual es correcto y esencial, pero se debe a las investigaciones, no citadas, de Ramón Salas Larrazábal, aceptadas unánimemente dentro y fuera de España desde los años sesenta. Sin embargo, Juliá sucumbe al mito después de haberlo superado: concibe a las luchas de 1936 como enfrentamientos «de campesinos con alpargatas y fusil al hombro… y militares al mando de tropas mercenarias» (p. 17). Las columnas del Frente Popular siempre eran mixtas de milicias y fuerzas regulares, al mando de militares; la Legión, prototipo de «tropa mercenaria» para Juliá, era una importante unidad del Ejército español, como los Regulares, y el sueldo diario de un legionario en 1936 era exactamente la tercera parte de las diez pesetas que cobraban los milicianos. La impregnación del mundo católico en 1936 por la «nueva ideología fascista» (p. 18), en la que Juliá incluye a la Iglesia, es sencillamente falsa. También es falsa «la inmediata alianza entre los mandos del ejército expedicionario y los propietarios agrícolas», como dice Juliá (p. 18) en su obsesión por definir al conflicto de España como guerra de clases. Reconoce que en Navarra «los sublevados obtuvieron desde las primeras horas un masivo apoyo popular» (p. 19), pero no extiende ese apoyo a las demás regiones, donde también se registró, con varios matices; tenían toda la razón los denostados obispos de España al definir al Movimiento como «cívico militar». Es cierto, en cambio, que en la guerra civil «la Iglesia sufrió la peor hecatombe de su historia» (p. 20), cosa que olvidan después los coautores de este libro al explicar la identificación de la Iglesia con el bando rebelde; más que a ideologías, esto se debió al instinto de supervivencia.

Cree Juliá que Serrano Suñer «pugnó por convertir al Estado campamental en Estado fascista» (p. 21) y es falso; el cuñado de Franco era un dirigente católico que quiso expresamente construir un Estado confesional para diferenciarlo del fascismo, una doctrina incompatible con la Iglesia católica. Arremete Juliá contra los obispos de Salamanca, el cardenal de Toledo y los firmantes de la Carta Colectiva por sus documentos, que leídos

hoy sin pasión partidista mantienen un alto grado de objetividad y que en todo caso reflejaban el sentimiento defensivo de aquella «media España que no se resigna a morir» como había dicho Gil Robles ante las Cortes del Frente Popular y Santos Juliá se cuida mucho de repetir. El historiador socialista acepta complacido el disparate anarquista que identifica a Viriato con Durruti, nada menos; el héroe protohistórico hispano con el asesino profesional de la FAI en el siglo XX (p. 23). Pero Juliá es socialista procomunista y reconoce al Partido Comunista de España como «forjador de la consigna de ganar la guerra» y de la identificación de la guerra civil «como una guerra del pueblo contra el invasor» (p. 23), tenaz consigna comunista que cayó por los suelos cuando los «invasores» de Italia y Alemania abandonaron el suelo español a las pocas semanas de terminar la guerra civil, gesto que jamás había realizado por su voluntad invasor alguno en toda la Historia.

En la página 26, Santos Juliá propone una tesis fundamental del libro. Las ejecuciones realizadas en la zona nacional correspondían a una fría decisión del mando militar o de las autoridades para exterminar al enemigo; las ejecuciones de la zona republicana se deben, por el contrario, a la desaparición del Estado, al vacío de poder y por tanto tienen carácter de arrebato popular espontáneo; en definitiva, son justificables. Luego, a lo largo del libro, los sucesivos autores desmienten muchas veces esta artificiosa distinción, que en el fondo divide a los muertos de la guerra civil en injustificables (los de la zona nacional) y explicables (las víctimas de la represión republicana), disparate que me exponía muy ufano un profesor de la Universidad de Cáceres, después de una conferencia mía durante la que había mostrado su desacuerdo. Íbamos por la maravillosa noche cacereña y me refugié en aquel fantástico paisaje urbano para no dejarle plantado en plena calle, lo que sin duda merecía.

Los autores de este libro son militantes antifranquistas redomados, pero en algunas ocasiones se ven obligados a reconocer algunas verdades. El libro no alcanza ni de lejos su propósito de servir de fundamento a una reconciliación, pero avanza en el campo de la imparcialidad más que otros intentos anteriores de la izquierda. El propio Juliá reconoce que vestir correctamente o llevar sombrero era causa de muerte en zona republicana y que la principal obsesión de los partidarios del Frente Popular era aniquilar a la Iglesia (pp. 27-28). Sin embargo, los autores no se molestan en explicar esto que llaman justamente «furia iconoclasta» y muy equivocadamente «ira sagrada» que no era sagrada sino sacrílega. Tenía razón Jesús Pabón: la historia trágica y bestial del anticlericalismo español está todavía por hacer.

Una vez que ha despachado la guerra civil con una mezcla tan superficial de banalidades, Santos Juliá recorre rápidamente las etapas del régimen de Franco en busca del rastro de la memoria histórica. Atribuye mucha importancia a la fecha renovadora de 1956, la aparición de una nueva juventud, señala la nueva presencia del partido comunista y el comienzo de lo que llamó su líder, Santiago Carrillo, «política de reconciliación nacional», que por parte comunista significaba, ante todo, odio absoluto a la figura de Franco. Los nuevos tiempos vienen marcados, para Santos Juliá, por la iniciativa de la oposición al régimen, que según él arrastró a la propia Iglesia como pudo demostrarse, nos dice, por la autocrítica efectuada en 1971 por la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes. Pero omite dos realidades muy graves y decisivas. Primera, que el impulso principal para la transición política a la democracia se debió a la propia Iglesia y más concretamente a las directrices del Papa Pablo VI, a partir de la época del Concilio y muy especialmente desde el envío a España del nuncio Dadaglio en 1967. Segunda, que la Asamblea Conjunta fue, pese a la propaganda eclesial en contra, un acontecimiento preparado y manipulado por el sector de la Iglesia llamado, no sé por qué, progresista. En mi extenso libro *La Hoz y la Cruz* podrá encontrar Juliá las pruebas documentales de cuánto afirmo.

De ahí salta Juliá a la celebración de los cincuenta años de la guerra civil en 1986, ya bajo gobierno socialista, que se negó a conmemorar oficialmente el aniversario, como se había negado a recordar el de la Revolución de Octubre en 1984. Con suma prudencia; porque los viejos socialistas sabían perfectamente que el PSOE había convocado la Revolución de Octubre y había provocado la guerra civil por su actuación prerevolucionaria durante el período del Frente Popular. Al hablar de amnistía, concedida por el gobierno de la transición, Santos Juliá no menciona que la primera amnistía por los delitos cometidos en cualquier bando o lugar de la guerra civil fue dictada por Franco en la primavera de 1969, pocas semanas antes de la proclamación del Príncipe don Juan Carlos como sucesor a título de Rey. Y con esta seria omisión termina el parcial y superficial prólogo de Santos Juliá a este libro.

Rebelión y revolución

La primera parte del libro se debe a Julián Casanova y comprende los acontecimientos represivos desde el estallido de la guerra civil hasta la pequeña guerra civil en Barcelona al comenzar el mes de mayo de 1937. El señor Casanova es profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor de varios estudios, preferentemente, acerca del anarquismo

español. Su contribución a este libro ofrece los mismos caracteres que ya hemos señalado al hablar de la introducción de Santos Juliá: parcialidad manifiesta a favor del Frente Popular, incomprensión radical hacia la zona nacional, falta completa de atención a los antecedentes y condicionamientos de la guerra civil que no convienen a sus tesis, ausencia de notas para expresar las pruebas inmediatas de las afirmaciones, tono irónico y despectivo hacia el bando nacional y sus protagonistas, es decir, crítica histórica muy desigual y partidista, que se agrava por la ausencia de todo análisis de fuentes; cualquier testimonio o estudio contrario a los nacionales y favorable a los republicanos se acepta como prueba. Muchas afirmaciones competen por igual a los dos bandos (cambiando las organizaciones), pero sólo se aplican, cuando son negativas o acusatorias, al nacional. Un ejemplo entre centenares; en la p. 62 se afirma: «los sublevados pusieron en funcionamiento una máquina terrorífica, que destruyó la capacidad de resistencia de las organizaciones obreras y republicanas, intimidó a sus adversarios…». A los nueve años recuerdo cómo estaba con mi familia almorzando el 18 de julio de 1936 en casa de mis abuelos, calle Alfonso XII, n.º 30, cuando sonó el timbre y los mayores se levantaron sobrecogidos porque sabían que era un «registro» de las milicias —en este caso de la CNT— que irrumpieron en la casa con aire más que intimidatorio y se marcharon de momento al no encontrar armas, pero advirtieron que se incautaban del piso que deberíamos abandonar inmediatamente, como en efecto hicimos esa misma tarde. Ninguno de los varones mayores de edad de aquella familia sobrevivió, por diversos motivos, a la guerra civil y algo semejante sucedió en el resto de nuestra familia, muy amplia.

El método del profesor Casanova, como el de los demás colaboradores del libro, consiste en enunciar sus tesis y luego «probarlas» con la enumeración agobiante de casos particulares, que desde el punto de vista personal no rebasan seguramente los trescientos en todo el libro, pero producen una impresión de terror absoluto por parte de los nacionales. Se escogen con cuentagotas algunos casos personales de terror republicano, que se pierden en el mare mágnum del terror enemigo y son inmediatamente contrarrestados por ejemplos de signo contrario. Es un procedimiento calculado de suma habilidad, pero que no engaña a quienes conocemos ligeramente la metodología histórica. Éste no es un libro para convencer a historiadores, sino un acta de acusación para influir y condicionar a la opinión pública.

El «paseo» y la «saca», como la «checa» son términos que se utilizaron primero en la zona republicana y que prácticamente nunca se oían en la zona

nacional, incluso cuando nos constaba la existencia de represiones concretas, pero el señor Casanova los aplica con clara preferencia a la represión nacional (p. 65 y ss.). Cualquier referencia extemporánea se utiliza a favor de la tesis propia sobre la represión. La ejecución de los generales Goded y Fernández Burriel en 1936 arrastra a aludir a la ejecución del anarquista Francisco Ferrer en 1909, en un contexto que nada tiene que ver (p. 68). Las terribles sacas de Madrid en noviembre de 1936 se describen como «ambiente inicial» de la guerra (p. 69). Y no es así; el «ambiente inicial» se crea el mismo 18 de julio de 1936, fecha de las primeras actuaciones de la represión republicana. Con ánimo claro de justificar esta represión aparecen en este estudio alusiones a la «tea purificadora» (p. 69), cuando es simplemente incendiaria y asesina.

Resulta muy extraño que algunos casos importantísimos de represión, que por lo demás están ya bien estudiados y documentados, obtengan una atención tan escasa y poco detallada en el trabajo del señor Casanova. Y esto vale para las dos zonas. Por ejemplo, los terribles asesinatos de la cárcel Modelo de Madrid el 22 de agosto de 1936, en los que cayeron varios exministros de la República y el prócer reformista don Melquíades Álvarez, se pasan de puntillas por Casanova (p. 72), que se refiere a la «legalidad republicana» representada entonces por don Manuel Azaña, quien protesta en sus Memorias por ese acto de vandalismo. Pienso que ese acto y otros muchos semejantes, que ya se habían iniciado en la etapa republicana anterior a la guerra civil, prueban precisamente lo contrario: el deterioro y la inexistencia de la legalidad republicana, por más que la mejor prueba puede verse en el ensayo de Azaña *La Velada en Benicarló* y en los magistrales artículos que envió en 1940 a los periódicos de Buenos Aires. Pero es que además Azaña, ante el asesinato de su maestro y antiguo jefe político en agosto de 1936, no tenía derecho a protestar en su diario, incógnito durante muchos años. Era Presidente de la República y no protestó de manera efectiva y fehaciente —por ejemplo, con su dimisión, si en verdad carecía de poder, lo cual no es cierto— al conocer entonces mismo los hechos.

Otros casos extraños son el de Guernica, del que Casanova sólo aduce generalidades sobre una tesis falsa, el de Paracuellos, que deja prácticamente inédito pese a su enorme gravedad, y el de Badajoz, para el que asciende a general al teniente coronel Yagüe (p. 77) y lo describe mediante el tópico y aun el tono parcial. No citaré todas mis discrepancias; desbordarían el espacio de este libro. Es verdad que la depuración de los maestros fue amplia y cruel por parte nacional (p. 95). Pero Casanova no cita la extensa documentación que existe en los boletines oficiales de las provincias, por ejemplo la de

Castellón, sobre la masiva depuración de los maestros favorables al Alzamiento, que yo poseo hace años en espera de tiempo para organizar un estudio a fondo. Otro capítulo de negligencia es el caso de don Miguel de Unamuno (p. 96) con omisiones flagrantes, por ejemplo, las visitas amistosas del Rector de Salamanca a Franco después del famoso acto de octubre en el Paraninfo. Es claro propósito de este libro implicar a la Iglesia católica en la represión del bando nacional (p. 112). Muchas actividades de los capellanes, que deseaban auxiliar a los condenados, se interpretan, ya lo vimos, como coactivas y represivas, «la violencia bendecida». No veo probado en todo el libro un solo caso, aunque se pretende dar la impresión de que hubo muchos. En cambio, al hablar del horizonte supremo de una y otra zona (p. 116), se contrapone «la unidad de la patria» entrecomillada, como horizonte de la zona nacional —lo cual es cierto— con el ideal de la zona enemiga, que era esta enormidad: «la ampliación, incluso por vía revolucionaria, de las libertades y reformas republicanas». Las expropiaciones, las vejaciones y los asesinatos eran, para los revolucionarios, ampliaciones de las reformas y las libertades de la República. A la que, según parece, habían comprendido muy bien en el fondo quienes tal pensaban.

El estudio científico de la zona republicana se aborda al amparo de dos películas infames que merecen toda clase de elogios del señor Casanova; las de Ken Loach y Vicente Aranda, exaltadoras del anarquismo. Casanova siente una extraña proclividad por la justificación del anarquismo y sus métodos; expone sin crítica disparates como éste: «Antes de construir había que eliminar de raíz el mal social» (p. 119), que se detalla en la página anterior: «Para destruir todos los símbolos de jerarquía social en el vestido y en las costumbres había que pasar por encima de los cadáveres de miles de personas». En cambio tiene razón al rebajar la importancia de los «incontrolados», porque las fechorías se debieron sobre todo a poderes organizados en la zona republicana (p. 121). En la «borrachera armada» de comités y demás organizaciones represivas se produjeron numerosísimos crímenes que «sería inagotable relatar» (p. 123). Sería imposible referirlos cuando se trata de terror republicano, porque cuando el terror es nacional los autores de este libro no se cansan nunca de acumular un caso tras otro, por lo que nos llenamos de asombro al comprobar, en las estadísticas ofrecidas luego por los autores, que todavía quedaban personas vivas en libertad fuera de las cárceles, que las víctimas no fueron millones, como las de Lenin y Stalin, sino miles.

La especie de que autoridades de la zona republicana proporcionaron la salida a «miles de ciudadanos» contrarios, especialmente en Cataluña, no se sostiene. Sucedió, en efecto, con el cardenal Vidal y Barraquer, cuya evasión protegida se anota como un mérito (p. 131), pero los miles, porque sí lo fueron, de evadidos del caos catalán, a quienes un militar catalán, don Magín Vinielles Trepat, denominó «la sexta columna», pudieron salvarse a pesar de las autoridades, a través del Pirineo de Lérida, por ejemplo, ayudados por los numerosos partidarios de Franco que allí vivían.

El caso de Madrid y su provincia es muy esclarecedor. Casanova trata de contraponer los 8500 asesinatos registrados por el general Casas de la Vega en su libro *El terror*, publicado en esta Editorial Fénix, con los casi quince mil que el general Ramón Salas Larrazábal deduce de datos estadísticos serios. Casanova y el libro dirigido por Santos Juliá no han sido capaces de ofrecer datos sobre la represión republicana en Madrid, apenas creen poder documentar unos dos mil, sin nombres, en la represión nacional de postguerra. Pero el general Casas ha sido capaz de ofrecer una lista pavorosa con 8500 nombres, y con escasísimos errores entre el conjunto. No hay contradicción con los quince mil de Salas que al provenir de estimaciones estadísticas no se incluyen con nombres personales. Es muy posible que sean realmente quince mil, con algo más de la mitad identificados por el general Casas, entre ellos su padre y el mío. Éste es un ejemplo de los resultados que podríamos conseguir si hubiéramos sido capaces de articular un plan de investigación comparable al que han promovido los herederos del Frente Popular. Simplemente con peinar a fondo los archivos disponibles los resultados hubieran sido sobrecogedores. Mientras no lo hagamos estaremos en desventaja. Tengo en mi archivo la fotocopia de las nutridas listas de víctimas por la represión republicana que el propio Franco ordenó recopilar y custodiar en el Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid. Por desgracia en esas listas se han deslizado muchos errores, por ejemplo, la confusión entre sacados de las cárceles y realmente ejecutados. Lo fueron casi todos, pero no todos; en las listas hay varias personas que siguieron vivas.

El profesor Casanova se ve obligado a reconocer, parece que a regañadientes, que entre los numerosos «enemigos» ejecutados por el Frente Popular en Aragón hay muchos jornaleros. Parece que le molesta el hecho de no poder calificar esta represión como «de clase»; y tanto, porque no lo era.

Casanova cita, en efecto, relativamente pocos casos personales entre las víctimas de la represión republicana y cabe alegrarse de que proceda así, porque cuando cita personas cae en serias desviaciones. Por ejemplo, el caso

de José Antonio Primo de Rivera, a quien hace dirigir la preparación del Movimiento nacional desde su celda de Alicante; y de quien ignora sus clarísimos rasgos de grandeza humana, patriótica y religiosa (p. 142). Su valoración de Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos desborda la más cruel injusticia, a la que se agrega el desprecio en el caso del gran dramaturgo Pedro Muñoz Seca, que sigue triunfando en Madrid más de sesenta años después de su trágica muerte.

Las alusiones a la violencia anticlerical se extienden a todo el estudio, pero se concentran a partir de la p. 153. Los pavorosos ejemplos de tortura que documenta el famoso libro de monseñor Montero apenas son tenidos en cuenta; y parece que el autor intenta una especie de justificación social de la violencia contra el clero, los religiosos y las monjas, además de extrañarse por las numerosas beatificaciones y causas de canonización con que Juan Pablo II ha distinguido a las víctimas. Eso sí, el autor achaca a la violencia asesina contra la Iglesia el hecho, para él lamentable, de que esa violencia haya pasado a la historia como «prácticas negativas», mientras que el anticlericalismo merecía un puesto bien diferente: «un importante fenómeno de la historia cultural» (p. 157), la misma página en que Casanova se atreve a descalificar al Vaticano por las glorificaciones de nuestros mártires.

El estudio sobre los Tribunales Populares es incompleto, pero dotado de notable interés, aunque da la impresión de aceptar la radical antijuricidad de su constitución y procedimientos. A cada paso nos asalta la carencia, realmente lamentable, de un análisis de fuentes: así se acepta sin discusión la validez testimonial del polémico libro de Georges Bernanos sobre la represión en Mallorca, la isla que estuvo a punto de caer bajo el dominio enemigo por desidia de alguna autoridad militar que hubo de ser destituida a distancia por el general Franco. El estudio termina con una nueva invocación a la impotencia de don Manuel Azaña frente a la represión de una zona en la que era presidente de la República.

La segunda parte de la guerra civil

La represión durante el período comprendido entre mayo de 1937 y el final de la guerra, el 1 de abril de 1939, se encarga para este libro a dos autores catalanes: el doctor Josep María Solé y Sabaté, exdirector del Museo de Historia de Cataluña, y el profesor Joan Villarroya, que ejerció en la Universidad de Barcelona. Tras una atenta lectura de su trabajo cabría hacerles las mismas críticas generales y metodológicas que he apuntado en el estudio anterior sobre ausencia de notas inmediatamente probatorias, carencia

de todo análisis de fuentes y partidismo evidente a favor del Frente Popular desde una militancia antifranquista que no necesitan confesar.

Mal empieza el trabajo, con un brochazo indocumentado sobre la destrucción de Guernica y la atribución a Franco de «salvar a España, aunque fuera a costa de fusilar a la mitad de los españoles» (p. 182 s.).

Se dedica mucha atención a la «represión de los huidos» en la zona nacional, y sólo una atención formularia e insuficiente a la represión republicana. En Cáceres (p. 190) se monta por los espías e infiltrados de la República un «supuesto complot» del que se dan luego tantos detalles que unas líneas más abajo tiene que caerse el adjetivo; era un complot más que probado. La reacción de los mandos nacionales en tiempo de guerra a las actividades de este tipo se incluye en la represión; pero son actos de guerra, penados con la muerte en cualquier legislación militar, y desde luego en la que regía en zona republicana, donde sabemos perfectamente la suerte reservada a los capturados de las «quintas columnas». Parecen extrañarse los autores que las «acciones violentas de los huidos» (p. 196) en Huelva y otras partes provocasen una respuesta durísima; por desgracia es lo normal en cualquier guerra. Conseguir la superioridad de efectivos en un frente determinado, no debe considerarse como desdoro de quien ataca, como hacen los autores ante la ofensiva nacional sobre Bilbao (p. 203); ventaja semejante, y por tanto semejante mérito, consiguieron los republicanos en Brunete, en el frente de Zaragoza y en el de Teruel dentro del mismo año 1937. Los italianos no traicionaron a los vascos en la negociación de Santoña (p. 204), donde fueron desautorizados por el mando nacional, al que estaban sometidos. Citan los autores la «sistemática represión del clero vasco» por los nacionales (p. 205), pero hacen como que ignoran la sistemática represión del clero vasco por el Frente Popular en las zonas que dominaba; en mi libro *Misterios de la Historia* reproduje todos los nombres de los sacerdotes y religiosos vascos asesinados por el Frente Popular, una cifra que triplicaba a la represión nacional en la misma región; en el capítulo sobre la guerra civil volveré sobre ello. Y además los autores no dicen una palabra sobre la enérgica intervención del cardenal Goma ante Franco, una vez investido como Jefe del Estado, con la que se cortaron de manera inmediata las ejecuciones de sacerdotes.

Entre datos aparentemente precisos, los autores incurren en serias imprecisiones, como en el caso de Asturias, donde luego se permiten calcular sin fundamento cantidades exorbitantes de ejecuciones; y serias omisiones, por ejemplo, la represión republicana en Teruel, cuando la ciudad fue asaltada por el Ejército Popular en enero de 1938. Luego se hablará del asesinato del

obispo de Teruel y del defensor de la plaza, coronel Rey d'Harcourt, fuera del contexto del asedio y caída de la ciudad. De las columnas de prisioneros civiles hechos en Teruel y trasladados a Valencia, ni una palabra; lo mismo sucede en el caso de Santa María de la Cabeza, la heroica fortaleza de la Sierra de Andújar, que sucumbió en mayo de 1937 tras una resistencia poco creíble. Es cierto que hubo lamentables y execrables exageraciones y desmanes contra la lengua y la cultura de Cataluña a raíz de la ocupación de sus provincias; los autores hacen bien en publicar una orden expresa del general Franco para cortar semejantes comportamientos, pero no indican otros casos de profunda comprensión con la lengua y la cultura catalana en el bando vencedor; Dionisio Ridruejo, protagonista de uno de esos casos, lo cuenta con detalle en *Casi unas memorias*. Tampoco citan los autores el revelador informe de un jefe del Ejército Popular, transcrito por el general Vicente Rojo, con motivo de la ofensiva final sobre Cataluña y rematado con esta frase: «Toda Cataluña deseaba ya a Franco».

Un estudio de tan altas ambiciones no debería hacerse un lío con el nombre y los apellidos del famosísimo cardenal de la transición, que desde luego no se llama don «Enrique Vicente y Tarancón» (p. 234), y si cita una opinión del cardenal referida a la guerra civil, debería citarse todo el conjunto, que es abrumadoramente favorable a la causa rebelde, como ha recordado con documentos de la época monseñor José Guerra Campos y yo he reproducido en mi libro *La Hoz y la Cruz* de esta misma editorial. Al hablar de la represión en Castellón, los autores no deberían omitir la tragedia que marcó el final de la ocupación republicana y que sigue grabada a fuego en la memoria colectiva de la ciudad; cuando los partidarios del Frente Popular engañaron a la población civil partidaria de Franco fingiéndose libertadores, provocaron grandes muestras de entusiasmo y las ahogaron en un baño final de sangre que, en el libro que comento, no ha dejado huella alguna.

Los autores del estudio de que hablamos son historiadores catalanes y por tanto cabría esperar una alta precisión en la campaña para la ocupación de Cataluña a partir de las Navidades de 1938. Me temo que no es así. Esa campaña se emprendió, dicen, «con ánimo genocida» (p. 237), término que siempre se reserva a las ejecuciones realizadas en zona nacional. El genocidio en Cataluña, que es una atribución enemiga y partidista, se compagina mal con el «toda Cataluña deseaba ya a Franco», que es el testimonio de un jefe republicano transmitido por el general Rojo, y peor aún con la entrada de una vanguardia de Navarra, Diagonal abajo, en Barcelona, al mando de un comandante catalán, el hoy general don Narciso Díaz Romañach, que

respondía en catalán a las aclamaciones que se le dirigían en catalán. Hasta Santiago Carrillo, que pudo cruzar en su huida a través de una Barcelona entusiasmada, ha contado en sus malas memorias la auténtica acogida del pueblo catalán a los tropas que le liberaron de la «barbarie roja», porque mal que les pese a los historiadores propagandistas, eso fue, exactamente.

Los autores tienen que reconocer, aunque con pocos detalles, el sádico asesinato del líder del POUM, Andrés Nin, por los servicios secretos de Stalin en España, con la eficaz colaboración de sus subordinados del PCE (p. 242). Las atrocidades del SIM rojo (Servicio de Información Militar), creado por Prieto, se difuminan por los autores, que denominan a su homólogo nacional SIPM «Servicio de Información Político-Militar», cuando era en realidad «de la Policía Militar» (p. 243). El estudio de las diversas formas de la Quinta Columna es muy deficiente; ofrezco a los autores la profundización que he intentado en mi libro de 1999 *La Victoria y el caos* en esta misma editorial. Suelen insistir los autores en que, tras la explosión de violencia en la zona republicana durante el verano de 1936, las ejecuciones desaparecieron prácticamente. Pero la realidad se les impone y deben confesar, hablando de 1938 «ante la magnitud de las cifras de ejecuciones»… (p. 248). Y es loable otra confesión: «las irregularidades (republicanas) en relación de las garantías jurídicas de los acusados eran constantes» (p. 249). Muy adecuada parece la cita de una frase muy intencionada del presidente Azaña: «A los ocho días de hablar de piedad y perdón me refriegan 58 muertos» (p. 250). Lo cual no exculpa a Azaña de su alta responsabilidad; no puede bastar con la protesta secreta en un diario íntimo, era el Jefe del Estado, a quien correspondía el derecho de gracia, que no reclamó de manera oficial ni menos pública.

Al citar la «odisea de Menorca» (p. 251), los autores aluden a un brote tardío de represión republicana en la isla, pero no a la represión inicial, que fue la más sangrienta. Con audacia desmentida por los hechos, los autores intentan desvirtuar uno de los puntos más negros de la represión republicana, las llamadas checas a imitación de los métodos soviéticos (p. 256), métodos que se utilizaron también en Paracuellos del Jarama sin que los autores lo mencionen.

El asesinato incalificable del obispo de Teruel, fray Anselmo Polanco, hoy beatificado por Juan Pablo II junto a su vicario general Ripoll, sufre un desdibujamiento cuando los autores denominan al obispo «beligerante» (p. 263) y no mencionan el carácter comunista de quienes le asesinaron y quemaron. Todo el relato del final de la guerra, la sublevación de Cartagena, la sublevación comunista en Madrid y anteriormente el golpe de Estado de

Negrín y los comunistas, que he documentado con todo detalle en mi citado libro *La Victoria y el caos*, está expuesto por los autores entre carencias muy notables, sobre todo el golpe de Estado comunista, que virtualmente se niega cuando está fundado en una documentación y un testimonio histórico irrebatible. Por cierto que la huida por aire del doctor Negrín y los líderes comunistas no tuvo lugar desde el aeródromo de Los Llanos, que estaba cerca de Albacete, como dicen los autores (p. 270), sino del de Monóvar, que estaba en la provincia de Alicante. El contexto histórico de todo el estudio sobre la segunda parte de la guerra civil me parece especialmente decepcionante y escasamente fiable.

La represión en la postguerra

La tercera parte del libro que comentamos se refiere a la represión en la postguerra y se debe al historiador y profesor Francisco Moreno, que se dio a conocer en 1992 con un resonante libro sobre la represión en Córdoba. Su ideología es marcadamente de izquierdas y además pertenece al Centro de Estudio de la Masonería Española, la institución netamente promasónica creada por el jesuita José Antonio Ferrer Benimeli.

Al analizar el conjunto de la represión originada por la guerra civil, me parece imprescindible una puntualización que los autores de este libro no formulan nunca.

La represión nacional, que se desarrolló inicialmente en la parte de España donde triunfo el Alzamiento de 1936 (más o menos una tercera parte de las provincias), se fue luego ampliando inexorablemente a medida que el Ejército Nacional iba ocupando el resto del territorio español; en definitiva se ejerció en las cincuenta provincias, sin que pudiera alcanzar a los numerosos huidos de la zona republicana poco antes de la caída del frente Norte, y al final de la guerra, poco antes de caer la llamada zona Centro-Sur. La represión republicana se refirió a un territorio bastante inferior, que además se iba reduciendo continuamente a lo largo del conflicto. Esto es un hecho que no se aduce como excusa, pero que en cierto sentido geográfico puede explicar las magnitudes relativas de la represión. Pero hay otro hecho significativo al que tampoco aluden los autores del libro que comento. La suerte de las armas fue casi siempre desfavorable al Frente Popular una vez fijados los frentes y las zonas iniciales, pero se registraron dos excepciones notables y algunas menores. Las notables consisten en que el Frente Popular consiguió apoderarse de dos capitales de provincia y solamente dos: Albacete, al principio de la guerra, y Teruel, a principios de enero de 1937. También

ocupó el Ejército Popular algunos reductos nacionales en los frentes: varios pueblos de la provincia de Madrid a raíz de la batalla de Brunete (por ejemplo Quijorna) y el santuario de la Virgen de la Cabeza en mayo de 1937. En todos estos casos, la represión ejercida por el Frente Popular fue implacable: ya hemos aludido al caso de Teruel, la columna de prisioneros y el asesinato del obispo y el jefe militar de la resistencia. Los propios autores del libro reconocen que la represión en Albacete fue atroz. No citan en cambio el comportamiento brutal del Campesino con la heroica guarnición de Quijorna, con la que colaboraron bastantes habitantes del pueblo. A juzgar por lo que sucedió en estos casos podemos imaginar lo que hubiera sido la represión republicana en la zona nacional si la victoria hubiera tenido signo contrario. Es un futurible o una historia virtual, pero el resultado puede imaginarse muy fácilmente.

Recuerdo que en varias conversaciones con el general Ramón Salas Larrazábal, el insigne historiador militar y académico, me expresaba su disgusto por la represión nacional que se abatió sobre los vencidos en la postguerra, con una actitud tan diferente a las generosas amnistías que registra la historia del siglo XIX en las guerras civiles de la época. Cuando don Ramón Serrano Suñer se refiere a este asunto trata de explicarlo por las numerosas expresiones del deseo de venganza que pudo observar desde el gobierno entre los familiares y allegados de las víctimas del terror enemigo y seguramente es verdad; aunque conozco, en lo más íntimo de mi propia familia, casos admirables de perdón, incluso cuando nos constaba la proximidad de alguna persona que había denunciado a miembros de la familia con resultados fatales. Me consta que no fuimos excepción: los casos de este tipo fueron muy abundantes. Por desgracia los casos de venganza u otros móviles peores también lo fueron. Ángel María de Lera solía repetir que si Franco hubiera concedido la amnistía, que se esperaba en las prisiones de Madrid durante la inmediata postguerra, se hubiera ganado a la gran mayoría de sus enemigos y creo que Lera, comisario en el Ejército Popular, tenía razón.

Esto supuesto, debo decir que el estudio de Francisco Moreno sobre la represión de postguerra contiene, sin duda, datos válidos, pero está muy afeado por el rencor que destilan muchos de sus párrafos; creo que no se trata de un estudio histórico como los trabajos del general Salas, sino de un intento de revancha, en que sobreabundan las referencias a la represión en Córdoba y especialmente en Villanueva de Córdoba, vengan o no a cuento.

Es muy imprecisa la referencia a los «centenares de miles de prisioneros» encerrados en campos de concentración, «medio centenar» de los que tiene

noticia por el testimonio, no analizado, de Joan Llarch (p. 279). Las sumarias referencias a los españoles que lograron salvarse en el exilio (y que en gran medida regresaron poco después a España), no se pueden comparar con la precisión y el carácter exhaustivo del estudio de un auténtico especialista riguroso, Javier Rubio, *La emigración republicana de la guerra civil* (Madrid, San Martín, 1977), que, a mi modo de ver, sentencia históricamente el asunto. El recorrido por los campos de concentración franceses y alemanes me parece también insuficiente y perfunctorio, lo mismo que el recuento de los «niños de la guerra» (p. 286), a los que estuvo a punto de incorporarse en Barcelona el autor del presente libro, y desde entonces siento un dramático interés por este capítulo de nuestra Historia común.

Las imprecisiones se combinan a veces con flagrantes exageraciones, como en la p. 298: «Se puede concluir (¿de qué datos?) que el franquismo condenó a morir de hambre a varios miles de presos», expresión simplemente falsa, que se envuelve en acusaciones injuriosas contra don Máximo Cuervo, que nada tenía de sanguinario ni de vengador. Lo que pasa es que España vivía «los años del hambre» que combinaron las escaseces de la postguerra con las de la Segunda Guerra Mundial —a veces por fría decisión de los aliados— y se pasaba hambre en las familias urbanas, en los colegios y en las cárceles, jamás en virtud de condena alguna.

La Redención de Penas por el Trabajo no fue el equivalente de la «condena a galeras por parte de los dictadores romanos» (p. 336) por razones varias; en primer lugar, las galeras no fueron barcos de la época romana y la Redención de Penas fue un sistema humanitario proyectado por el benemérito jesuita padre Pérez del Pulgar que de hecho acortó numerosas penas de cárcel y con diversas modificaciones se conserva todavía hoy. La «represión económica» que privó de sus bienes a muchos antiguos enemigos fue sin duda una medida cruel, que respondía a la privación de bienes aplicada en la zona republicana por los gobiernos del Frente Popular. Los recuerdos de niño no suelen borrarse fácilmente y cuando huíamos de nuestra casa de la calle Alfonso XII, 30 (luego Alcalá Zamora, luego Reforma Agraria), los que nos habían expropiado pegaban unos grandes carteles en nuestro piso y los demás: «Incautado por la CNT». No estoy justificando la represión económica nacional, sólo indicando que aquello era una guerra a muerte, una guerra de aniquilación como dijo la Pasionaria, y la represión económica nacional fue precedida por la republicana, pero de ésta veo pocos ejemplos en este estudio. Por eso estoy de acuerdo con la frase con que termina la p. 345: «Nunca podrá ser cuantificado ni documentado en toda su magnitud el pillaje incontrolado y

arbitrario que se llevó a cabo en toda España contra los bienes y enseres de los vencidos. El derecho a la propiedad del vencido perdió todo significado». Es verdad: para los vencidos, provisionales o permanentes, de cualquiera de las zonas, si se quiere escribir Historia, no venganza.

Al hablar de la represión ideológica, el profesor Moreno califica al Alzamiento de 1936 como «aventura fascista» (como el Congreso de los Diputados en 1999), pero ni el señor Moreno ni el Congreso podrán señalar el nombre de un solo general fascista entre los que se sublevaron en julio de 1936. Luego dedica un epígrafe alevoso al papel de la Iglesia a la que quiere hacer cómplice silenciosa de la represión (p. 351). Cuando se refiere a las actividades de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, no dice una palabra de dos de sus miembros, don José Antonio de Aguirre y don Luis Lucia, que colaboraron con el bando gubernamental, y en su saña vindicativa, el autor llega a denostar a la Biblioteca de Autores Cristianos, una obra monumental de la cultura católica que aún subsiste, como «la célebre BAC»; es la primera vez que veo utilizar al adjetivo «célebre» como una agresión (p. 352). La atribución a los capellanes militares o de prisiones de complicidad en los «paseos» (p. 353) es falsa e inicua; los capellanes de prisiones, y conozco casos numerosos, trataban realmente de auxiliar espiritualmente a los presos, sin participar lo más mínimo en la represión justa o injusta. El autor del estudio posee una auténtica obsesión por los jesuitas; considera como jesuita al «arzobispo de Madrid, Eijo Garay» que jamás fue arzobispo ni perteneció a la Orden (p. 354).

Las depuraciones que se decretaron en la zona nacional y se mantuvieron en la postguerra contra maestros y otros funcionarios docentes y no docentes son, por desgracia, ciertas; pero el autor no dice una palabra sobre las terribles depuraciones que se habían ejecutado en la zona republicana contra los mismos estamentos docentes y funcionariales. Creo que ya he aludido a la depuración de maestros en la provincia de Castellón por supuestas afinidades con el bando nacional. El profesor y eximio filósofo don Manuel García Morente, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, fue depurado en Madrid como otros muchos catedráticos y profesores.

El profesor Moreno denomina «trienio del terror» al marcado por los años 1947-1949. Y dedica el capítulo IV de su estudio a la represión contra las actividades guerrilleras y políticas hostiles al régimen de Franco. Realmente esto no debería confundirse con la represión de la postguerra porque representa un capítulo enteramente diferente; la actividad del «maquis» en España, al amparo del curso de la Segunda Guerra Mundial, favorable cada

vez más a los aliados a partir de 1943. El episodio más importante de la guerra secreta (porque casi nunca llegó a la opinión pública más que de forma muy difusa) fue la invasión del maquis comunista por los valles pirenaicos en noviembre de 1944, una ofensiva de alcance que fue contrarrestada eficazmente por el Ejército y luego acorralada por la Guardia Civil y que veo lamentablemente descrita en el ensayo de Moreno; no dice nada de los asesinatos de párrocos ni sobre el rechazo unánime de la población rural y urbana a la intentona, pésimamente concebida al no advertir sus promotores que los sectores para la infiltración se habían seleccionado según los sueños de la propaganda comunista, pero totalmente fuera de la realidad; se trataba de comarcas católicas y conservadoras, completamente decididas a no reproducir la guerra civil en sus contornos. Por supuesto que este capítulo de la guerrilla contiene datos interesantes pero es injusto con la investigación del general de la Guardia Civil señor Aguado, escrita sobre documentación primaria y no advierte que ya no se trata de «represión de postguerra», sino de rechazo, popular y militar, a un nuevo intento de guerra por parte de los comunistas hasta que el propio Stalin hubo de frenarlos en vista del clarísimo fracaso. En el capítulo de la represión política clandestina, el profesor Moreno no nos ofrece prácticamente datos nuevos.

Hay una afirmación del señor Moreno que pone en entredicho la veracidad de todo su ensayo y pone en evidencia la necesidad de revisar una por una las «fuentes monográficas» sobre la represión, que esconden numerosas trampas y flagrantes insuficiencias. En la p. 354 del libro dirigido por Santos Juliá, el señor Moreno sólo cita un caso de militancia falangista en el clero:

> «La militancia falangista de miembros del clero, no fue algo episódico o aislado. Citemos al menos el caso del cura falangista de Campanario (Badajoz), Pedro Morillo Velarde que, en la inmediata postguerra, recorría los locales de FET dando conferencias.»

Un especialista en el problema de la represión mucho más serio que Moreno, don Ángel David Martín Rubio, en su ejemplar investigación *Salvar la memoria* (Fondo de Estudios Sociales, Badajoz, 1999, p. 167) desenmascara la mentira de forma decisiva:

> «Sencillamente ridículo. Conocí bien a don Pedro —nunca ocultó sus ideales que siempre pudo ostentar con toda limpieza—, pero al acabar la guerra era un chiquillo que había tenido que interrumpir los estudios en el Seminario a causa de la guerra civil. En la "inmediata postguerra" aún le faltaban años para ser sacerdote, pues recibió la ordenación en 1952. Luego, en ejercicio de su ministerio, daría conferencias en los locales de FET como lo hicieron muchos sacerdotes y obispos dispuestos a acudir a cualquier lugar en que se reclamara su asistencia espiritual.»

El problema de las cifras, para determinar el alcance de la represión en las dos zonas de la guerra civil y la postguerra, debe matizarse genéricamente con todas las observaciones críticas y de contexto que hemos anticipado en esta serie de comentarios.

Es muy significativo que, si bien los autores dicen haber consultado los archivos de la Causa General, atribuyan a la represión del Frente Popular en Madrid la cifra obtenida por el general Casas de la Vega en su obra de esta Editorial *El terror* (unas 8500 víctimas), sin que los autores demuestren haber investigado a fondo esta importantísima zona de guerra, en la que la represión debida a los nacionales dada por ellos alcanza una cifra muy inferior. Las cifras que se ofrecen en el libro se basan fundamentalmente en estudios provinciales y locales, sin que se haga de ellos, ni en un solo caso, un análisis de fuentes que demuestre ante todo la imparcialidad de cada estudio monográfico. Obras importantes sobre la represión, como la impresionante serie *Cataluña prisionera*, no merecen la más mínima atención de los autores. Con el espíritu que inspira los diversos estudios de este libro y gran parte de las monografías en que se apoya su catálogo, nos vemos obligados a poner en entredicho el conjunto de conclusiones. La metodología, usada en todos los estudios, de entremezclar de forma impresionista consideraciones generales no fundadas y retahílas de casos concretos casi siempre favorables al Frente Popular, nos fuerza a concluir que éste es un libro para la venganza, no para la crítica histórica rigurosa. Es lamentable, pero es así. Un indicio semejante sucede con la represión del Frente Popular contra el clero, donde los autores tienen que aceptar, rebajándolas algo sin explicación, las documentadísimas estadísticas de monseñor Antonio Montero, apoyadas en una decisiva lista de nombres. Cuando estos herederos históricos del Frente Popular se enfrentan con investigaciones esenciales como las del general Casas y monseñor Montero, se ven obligados a callar y conceder. Eso supone marcar el verdadero camino a los historiadores no condicionados.

EL INTERESANTE E INCOHERENTE «FRANCO» DE JUAN PABLO FUSI

Santos Juliá es hoy el historiador oficioso del socialismo, pero apenas habla de Franco en los cuatro libros que acabo de comentar. Termina, eso sí, su ambiciosa historia marxista del mundo con un epígrafe sobre la «era de Franco», expresión, por cierto, acuñada por el profesor Tamames; el epígrafe contiene un resumen lamentable de una época trascendental, inscrita en

coordenadas del marxismo más burdo y obsoleto. Los otros tres historiadores de órbita socialista que estudio en este comentario sí que se refieren ampliamente a la figura histórica de Franco, con métodos y resultados a cual más lamentables. Empezaré por el profesor Juan Pablo Fusi Aizpurúa, que según me dicen pertenece a una familia muy adicta a Franco. Ignoro si es socialista de carnet, pero sí que lo es de órbita; al llegar los socialistas al poder le confiaron un puesto de suma importancia, la dirección de la Biblioteca Nacional y en el debate dirigido por Luis Herrero en noviembre de 1997, al que ya me he referido, defendió con ardor la génesis de la transición a través de la Ruptura, a lo que me opuse con firmeza porque tengo muy claro, desde más cerca, que esa génesis se concibió y desarrolló a través de la Reforma. Su posición coincidía con el proyecto de Felipe González para ese delicado período, pero se trató, evidentemente, de un proyecto frustrado.

El profesor Fusi es, pese a ello, un historiador moderado, nacido en San Sebastián en 1945, discípulo de Raymond Carr en Oxford, donde hizo su tesis doctoral. Ha sido profesor en la Universidad californiana de San Diego y ha dirigido en el St. Antony's college de Oxford el centro de estudios ibéricos, creado por Carr con el apoyo de un banco español de tendencias «progresistas». No es muy prolífico, pero ha dedicado varios estudios a la historia contemporánea del País Vasco y ha colaborado con Raymond Carr en un libro sobre la transición política española. Hoy es catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Madrid.

El único libro de Juan Pablo Fusi que nos interesa para estas reflexiones históricas es su biografía breve *Franco, autoritarismo y poder personal*, que alcanzó cuatro ediciones en 1985, cuando fue publicado por el diario *El País*, órgano informativo (y desinformativo) del PSOE y la Internacional Socialista. Esta identificación, a la que vengo aludiendo hace muchos años (después de haber figurado como columnista de ese periódico durante los dos primeros años de su publicación, a partir de 1976, hasta que me desprendí de él de manera natural, sin traumas ni explicaciones, en cuanto advertí con toda claridad que me encontraba en corral ajeno), se ha hecho desafiante y descarada cuando *El País* se ha revelado como la otra cara del PSOE con motivo de la «guerra digital» entablada en 1997 para la defensa, emprendida por el diario, del monopolio de que creía gozar para siempre en el campo minado de la comunicación televisiva digital. No se trataba solamente de una defensa de los intereses personales y empresariales del señor Polanco, presidente y árbitro de la sociedad PRISA que es dueña del periódico y sus cadenas de radio y televisión, sino de un combate absoluto en favor del

monopolio y en contra de una libertad auténtica de comunicación. El hecho de que *El País* presente, con el cerrado apoyo de la Internacional Socialista, sus designios como exigencias de la libertad de comunicación y expresión, no es más que una nueva utilización del lenguaje de Orwell —la verdad es la mentira, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud— que, como ya he indicado más de una vez en este libro, es el idioma oficial de *El País* y de la Internacional Socialista a la que tan tenazmente sirve. Muchas veces me asombra cómo personas inteligentes, sensatas y desprovistas en principio de todo sectarismo, como los señores García Añoveros, Herrero de Miñón y Guillermo Gortázar, pueden colaborar tranquilamente con ese periódico a pesar de que les consta, porque no pueden ignorarla, su dimensión política internacional y su talante constitutivamente sectario, ya he sugerido cuál es la secta. En cambio, la colaboración del publicista señor Tusell en las mismas páginas, aunque habitualmente sea ininteligible, me parece mucho más explicable.

La identificación editorial del profesor Juan Pablo Fusi con *El País* constituye una nueva prueba de que el autor y el contenido de esta biografía breve de Franco —que son el arquetipo de lo *políticamente correcto*— se inscriben en la órbita y en el proyecto cultural del PSOE y la Internacional Socialista. Para estos fines políticos fue sin duda un gran acierto encargar esta biografía a Juan Pablo Fusi, historiador moderado y nada tremendista.

El hispanista Edward Malefakis, autor de un trabajo clásico sobre la reforma agraria en la Segunda República, se encarga del prólogo y, al reconocer la impronta profunda de Franco en la vida española durante décadas, subraya la dificultad del empeño biográfico. El propio Malefakis lo demuestra al afirmar que «Franco nunca fue una persona extravertida» (p. 7), con lo que cae en un error muy frecuente; porque Franco fue una persona extravertida hasta 1931, fue la República quien le cambió el carácter. Niega a Franco todo «sentido de intimidad», pero debería repasar los libros de Franco Salgado y el doctor Vicente Gil para encontrar abundantes muestras de lo contrario. También me parece erróneo ese «sorprendente olvido público en que cayó Franco después de su muerte» (p. 8), cuando acabamos de ver las tempestades de repulsa y adhesión que suscita su memoria tantos años después de su muerte, hasta el punto de que nada menos que Günther Grass ha profetizado una próxima rehabilitación de la figura de Franco en España. Cree Malefakis que los rótulos con el nombre y el título de Franco no cambiaron de nombre hasta «varios años más tarde» (p. 8). Miles de esos rótulos, fácil es comprobarlo, siguen a estas alturas sin cambiar de nombre,

según el color de los ayuntamientos de quienes depende la rotulación del callejero. Reconoce Malefakis implícitamente la grandeza de Franco al compararle con otros estadistas occidentales y, aunque retrasa diez años el final del estancamiento de España (p. 9), admite el «extraordinario dinamismo económico» y otros factores muy positivos de la transformación de España. Malefakis extiende los aspectos positivos del régimen de Franco no sólo a la transformación económica, sino también a la evolución política.

En una advertencia previa, Fusi presenta con modestia su «ensayo biográfico» más bien que como «biografía propiamente dicha» (p. 15). La principal objeción que hace a Franco es «que careció siempre de verdadera legitimidad moral» (ibíd.), pero no dedica la misma objeción a las demás figuras históricas que implantaron violentamente una legalidad nueva; ni insinúa la pérdida de legitimidad que puede acarrear a otras figuras democráticas una caída sistemática en la corrupción y en la arbitrariedad, un hecho lamentable del que hemos sido testigos recientemente. Da por supuesto que la República de 1931-1936 gozaba de legitimidad moral y democrática; cuando es evidente que no surgió de unas elecciones legales y que en 1936 había caído en una degradación antidemocrática que justificaba el alzamiento contra ella como una exigencia de media España simplemente para sobrevivir. Desde el principio confirma Fusi su moderación al establecer en su análisis que la «literatura de denuncia» contra el franquismo elude plantearse «problemas no menos inquietantes, como la voluntad y duradera acomodación de muy amplios sectores de la sociedad española en el franquismo, la estabilidad casi intachable de éste durante varias décadas, la debilidad de la oposición, la formidable transformación de España y de su Estado desde 1939 a 1975» (p. 17). La verdad es que Fusi no empieza mal su difícil intento.

En su primer capítulo, *Soldado de África*, Fusi ratifica la opinión de Prieto favorable a la carrera y el comportamiento militar de Franco en la guerra de Marruecos, tal como la formuló en su discurso de Cuenca el 1 de mayo de 1936. Incorporación, y no «reincorporación», como dice Fusi, de Franco a la Legión fue lo ocurrido en 1920; Franco, cofundador del Tercio, empezó entonces el adiestramiento de los efectivos (p. 19). La comparación que Fusi establece entre Franco y Goded en África (Franco táctico, Goded estratega) es injusta; Franco no actuó en África más que hasta el grado de coronel, a quien sólo correspondía dirigir operaciones tácticas, su valor como estratega lo acreditaría durante la guerra civil (p. 21). La consideración de las fuerzas armadas como garantía de la unidad nacional no se aplica solamente a la

monarquía liberal de 1876 (p. 21), sino que se reconoce de forma expresa en la actual Constitución española. Fusi parece criticar negativamente la pésima opinión de Franco sobre el siglo XIX (p. 24), pero en mi reciente *Historia total de España* he manifestado, y creo que comprobado, la misma valoración de Franco. Fusi cae en el falso tópico de negar la religiosidad de Franco en su juventud (pero siempre fue católico practicante) y acepta el falso lema de Franco en África «ni curas, ni vino ni mujeres», que Franco me desmintió personalmente con mucha convicción (p. 26). Fusi se extraña de que Franco creyera que «el catolicismo había sido el crisol de la nación española» (p. 27), pero no debería extrañarse, sino admitir esa multisecular realidad histórica. Es verdad que el Frente Popular fue ante todo una coalición electoral de la izquierda española, pero Fusi se equivoca al descartar la dimensión soviética del intento, según las directrices del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en el verano de 1935. Cuando expuse la tesis combinada en mi primer libro de Historia durante el año 1969, Franco se mostró de pleno acuerdo (p. 32). En fin, este primer capítulo sobre la vida de Franco hasta el alzamiento de 1936 es relativamente correcto, pese a las salvedades indicadas. Con dos excepciones de fondo. Fusi se muestra excesivamente formalista en favor de la Monarquía constitucional y acusa a Franco de no comprenderla; pero esa Monarquía estaba ya degradada desde 1921 y ni el propio Rey la comprendía. Fusi considera a la República del Frente Popular —ya lo he dicho— como régimen legítimo y democrático; después de las elecciones de febrero ya no era ni lo uno ni lo otro. Fusi no cita ni entiende la razón suprema del alzamiento de julio; la que Gil Robles, jefe de la oposición parlamentaria, había formulado en plenas Cortes a mediados de abril: «Media nación no se resigna a morir». He aquí dos gravísimos fallos históricos de Juan Pablo Fusi, que lastran irremediablemente su contexto biográfico.

El capítulo segundo *Caudillo de España* trata de seguir la trayectoria de Franco durante la guerra civil. (Por cierto que en sus citas, muy atinadas, de las conversaciones de Franco con su secretario militar y ayudante Franco Salgado, Fusi llama a éste «primo» de Franco, pero su parentesco, próximo, era algo más complicado). No es rechazable del todo la valoración de Franco como militar que Fusi propone, pero es injusto cuando le niega capacidad para la guerra rápida y mecanizada como la que ya se ideaba en Europa (p. 42); cuando Franco dispuso de los medios suficientes no sólo practicó ese tipo de guerra (a partir de las primeras semanas del año 1938), sino que en parte la anticipó como en la táctica de avance por los flancos para embolsar a

los contingentes enemigos, que fue característica en la ofensiva de Aragón y luego en la de Cataluña. Fusi atribuye la posibilidad del puente aéreo sobre el Estrecho a la llegada de los transportes de Alemania e Italia, pero en realidad el puente aéreo empezó a funcionar con excepcional eficacia gracias a los aviones exclusivamente españoles en mismo día 19 de julio, horas después de que Franco aterrizara en Tetuán (p. 43). La decisión de socorrer al Alcázar no la tomó Franco al llegar a Maqueda como cree Fusi (p. 44), sino un mes largo antes, cuando al conquistar Mérida conoció con seguridad las noticias sobre la resistencia de la fortaleza toledana. No es cierto que el desvío a Toledo perjudicase a la marcha sobre Madrid; Franco no podía dejar a la concentración de fuerzas enemigas que asediaba al Alcázar (más de diez mil hombres) como una peligrosa amenaza a su flanco derecho y no podía desdeñar a la opinión mundial favorable a los sitiados. Para Fusi la gesta del Alcázar de Toledo fue convertida por la propaganda en «gesta legendaria» (p. 44), pero no fue efecto de la propaganda de Franco (que siempre fue precaria y entonces casi no existía), sino del interés y la información mundial, basta una ojeada a la gran prensa de la época en Europa y en toda América. Las circunstancias y la entraña de la elección de Franco a la jefatura suprema a fines de septiembre de 1936 están bien vistas por Fusi, lo que por desgracia no sucede en el caso de otros historiadores. También está bien visto el apoyo de la Iglesia a Franco y a la causa rebelde (llamo así a la causa nacional porque a Franco le gustaba mucho que le llamaran rebelde contra el Frente Popular). Pero añade Fusi que el País Vasco fue una excepción en las persecuciones de la zona republicana contra la Iglesia (p. 49). No hubo tal excepción. En el País Vasco, bajo dominio de la República, fueron fusilados más de cuarenta sacerdotes y religiosos, cuyos nombres he reproducido en mi libro *Misterios de la Historia* de 1990.

Fusi acierta en las líneas esenciales de la batalla de Madrid y de la intervención extranjera, aunque no recalca suficientemente que esta intervención se adelantó sustancialmente en favor de la República, tanto en aportaciones de efectivos de infantería como en cantidad y calidad de material pesado; he dado las cifras en mi *Historia esencial de la guerra civil española*, publicada en esta misma Editorial en 1996. Es plausible también el resumen y la interpretación de las operaciones militares en 1937; la decisiva conquista de la franja republicana del Norte y la neutralización de las contraofensivas de la República en el Centro. La articulación política del régimen en la primavera de 1937 está correctamente expuesta, aunque Fusi no ahonda en los motivos de la superioridad moral de la zona de Franco, que se fundaba en una ardiente

revitalización de lo religioso. Fusi describe luego con acierto las grandes maniobras ofensivas para la recuperación de Teruel y la ruptura de las líneas republicanas de Aragón. Pero parece extrañamente obsesionado con encontrar fallos en la capacidad militar de Franco —contraofensiva de Teruel, batalla del Ebro— cuando se trataba en realidad de pruebas que demuestran la extraordinaria capacidad militar del general Rojo; cuando Franco consiguió neutralizar los éxitos iniciales del enemigo con la acertada utilización de sus reservas locales; y cuando, en definitiva, las operaciones de iniciativa enemiga desembocaron en grandes y decisivas victorias de Franco. A un general hay que juzgarle por el conjunto de sus campañas, no sólo por los episodios parciales de esas campañas.

La presentación militar de la guerra civil y de la actuación de Franco durante ella me parece, en líneas generales, aceptable. El capítulo 3 *El tercer hombre* describe la vida cotidiana de Franco, algunos rasgos de sus costumbres políticas y la actuación de Franco durante la Segunda Guerra Mundial y la primera época de la postguerra. Una cosa es que Franco desconfiara de los intelectuales cuando trataban de influir en política y otra que fuese, como insinúa Fusi, hombre de escasas lecturas (p. 70), ése es uno de los más enquistados mitos del antifranquismo. Leyó siempre con atención las publicaciones profesionales y numerosos libros y revistas de actualidad política y expresión literaria; conocía bien la historia de España en su circunstancia europea y sabía mucho sobre sociedades secretas. La valoración absolutamente negativa de la novela-guión *Raza*, escrita por Franco después de la guerra civil, no demuestra suficientemente que Fusi la haya leído.

No es verdad que Franco prohibiera las discusiones en los consejos de ministros (p. 72). Fusi describe con rasgos a veces acertados el talante político de Franco; su aversión visceral, a los partidos políticos; y reconoce que Franco no era un fascista, como Franco afirmó tajantemente sobre sí mismo. Tampoco permitió que la Falange se adueñase del Estado. Fusi se equivoca al atribuir a Franco la autarquía como ideal; sólo adoptó la autarquía por necesidad después de declarada la guerra mundial, pero siempre fue partidario de los intercambios abiertos con todas las potencias. Las víctimas de la represión a raíz de la guerra civil están exageradísimas por Fusi; Ramón Salas las fija en unas 20 000 que es cifra trágica, pero diez veces inferior a la que alegan algunos (p. 78) sin pruebas suficientes. Fusi reconoce que Franco se negó a entrar en la guerra mundial, pero atribuye la realización de este designio a factores que en parte fueron ajenos a España; prefiero la versión del investigador Halstead que subraya la importancia de la decisión de Franco

para que efectivamente España no entrase. El relativo desinterés de Alemania por la entrada de España en la guerra, que es otro clásico tópico de los antifranquistas fue, a lo sumo, efímero; hay innumerables pruebas documentales que abonan ese interés, que se desbordó en la amenaza y el chantaje. Al describir, muy insuficientemente, la entrevista de Hendaya, Fusi admite sin crítica algunos elementos permanentes de la mitología antifranquista; no es éste el tracto más brillante de su libro. En cambio acierta al aceptar la tesis de Franco sobre la inexistencia de un sentimiento monárquico generalizado en España. En la actitud de los aliados, que desde principios de 1944 hasta fines de 1946 resultó muy hostil a la España de Franco, el profesor Fusi ve sobre todo la enemistad de los gobiernos contra el régimen español, pero la clave de esa hostilidad es la venganza de los comunistas soviéticos y europeos. Franco lo veía con toda claridad y por eso decidió resistir hasta que el bloque comunista se desintegrase ante la inevitable enemistad entre la URSS y sus anteriores aliados occidentales. Fusi no lo ve así y por eso no capta la verdadera razón de la resistencia de Franco y de otra importante apuesta de Franco: la URSS no podría mantener indefinidamente su imperio rojo en la Europa central y oriental. Franco no llegaría a ver personalmente el cumplimiento de esa profecía, que se hizo realidad en 1989, catorce años después de su muerte.

Para su capítulo cuarto Fusi toma el título *Centinela de Occidente* de la hagiografía debida a Luis de Galinsoga, un periodista del régimen. En ese capítulo se describe la época del aislamiento del régimen español entre 1946, fecha de las condenas de la ONU, y 1953, cuando los pactos de España con el Vaticano y los Estados Unidos rompieron ese aislamiento. Como Franco había previsto expresamente (eso no lo recuerda Fusi), la guerra fría estalló al año siguiente de la victoria aliada en la guerra mundial para frenar al imperialismo expansivo de la Unión Soviética. En 1947, por medio de la ley de Sucesión, Franco configuraba a España como un reino y obtenía una indudable victoria política en el referéndum de la nación. Don Juan de Borbón, los socialistas y los conspiradores monárquicos se opusieron; pero Fusi no reconoce que los grupos que les seguían eran, en España, exiguos y con fuerza política prácticamente nula. Fusi expone la trayectoria de don Juan de Borbón, pero no apunta suficientemente que el conde de Barcelona no fue nunca un demócrata ni actuó como tal hasta muy entrados los años sesenta; su equipo de consejeros fue, hasta esa fecha, tan antidemócrata como Franco. Fusi no cree que la Masonería, obsesión de Franco, tenga fundamento alguno (p. 108); tal vez no ha tenido tiempo para adentrarse en la verdadera historia

masónica, bien cerca la ha tenido durante sus estancias en Inglaterra (p. 110). Fusi quita importancia a la amenaza comunista en 1936, por la insignificancia del partido comunista (p. 112); pero no advierte que el partido comunista, no muy importante en sí, tenía detrás a una potencia revolucionaria mundial y actuaba en España a través del ala bolchevique del socialismo, representada por Largo Caballero y desde 1936, además, por el líder de las Juventudes socialistas Santiago Carrillo. Cree Fusi estar muy seguro de que el Frente Popular no preparaba una revolución; ¿para qué, entonces, se encuadraban sus juventudes en las MAOC y otras milicias que se adiestraban intensamente para el combate? Además, ¿para qué necesitaban Caballero y sus colegas revolucionarios programar una revolución si se habían adueñado del poder real a raíz de las elecciones de febrero de 1936? No hace falta, para demostrar ese propósito revolucionario, acudir a «documentos secretos»; basta con atender a los hechos diarios de aquella primavera trágica y caótica. Es cierto que la actitud anticomunista de Franco se endureció con los años; y que según él, el materialismo y la pérdida de la fe eran graves amenazas contra Occidente ante la realidad expansiva y subversiva de la URSS. Pero testigos que vivían en el corazón de Rusia, como Aleksander Solzhenitsin, pensaban exactamente igual y trataban de convencer a Occidente en ese mismo sentido; a un Occidente que llamaban suicida.

Fusi traza un excelente cuadro de las ventajas estratégicas que Franco supo extraer de la guerra fría (p. 113) y describe con acierto las circunstancias históricas que condujeron a los pactos hispano-norteamericanos de 1953. Más esquemática, hasta rozar la caricatura, es la presentación de las relaciones entre Franco y la Iglesia, que merecerían un análisis mucho más profundo. Lo mismo que el historiador socialista francés Max Gallo, Fusi califica de victoria —segunda victoria— de Franco los acuerdos de 1953 con el Vaticano y los Estados Unidos, Fusi emplea la misma palabra para enfocarlos. Uno y otro tienen toda la razón.

El capítulo quinto se titula *Cambio de piel*, en el que Fusi analiza la transformación de España en los años cincuenta y sesenta. Reconoce que el cambio en la política económica que Franco decidió en 1957-1959 permitió superar la grave crisis; pero omite el hecho, para mí indudable, de que la crisis, en sus más peligrosos aspectos económicos, se había superado en 1950/1951, cuando se recuperó al alza y con impulso ya imparable el nivel de renta individual que se había estancado en 1930 para hundirse en la regresión de la República y la guerra civil. Fusi desconoce el esfuerzo colectivo realmente asombroso de los empresarios españoles para reedificar la

economía durante la época del aislamiento y el esfuerzo del Estado para mejorar la infraestructura del país en circunstancias de aislamiento y casi de penuria (p. 126). Es sencillamente falso que la autarquía fuese un proyecto ideológico de Franco, éste es uno de los más graves fallos de interpretación que Fusi nos ofrece (p. 127). En cambio acepta como sincera la preocupación social de Franco. Aunque no explica con la suficiente amplitud y profundidad que durante el régimen de Franco se planificó y realizó la política social más importante de toda la historia de España, se creó la Seguridad Social hasta entonces en mantillas, se extendió la sanidad pública hasta una amplitud nunca conocida. Se consiguió el pleno empleo y sobre todo, se logró la transformación del antiguo «proletariado» en una gama de clases medias por expreso designio de Franco, que lo proclamó el mismo 1 de octubre de 1936 en su discurso de Radio Castilla. Comprendo que a un historiador de órbita socialista le cueste mucho este reconocimiento, pero en el hacer histórico de Fusi aparecen rasgos inequívocos de honradez que deberían impulsarle a profundizar en un terreno social que deja bastante a la intemperie.

El «éxito fulminante» de los planes de estabilización y desarrollo es, para Fusi, uno de los momentos más positivos del régimen de Franco (p. 144).

Después de Franco, ¿qué? Es el título del capítulo sexto, que analiza la época del desarrollo hasta la designación del príncipe don Juan Carlos como sucesor en julio de 1969. El título es el mismo de un libro de Santiago Carrillo que constituye un grave error porque equivale a reconocer que mientras Franco alentase la oposición nada tenía que hacer. Exagera notablemente Fusi cuando opina que «el verdadero problema de Franco eran las irrenunciables aspiraciones de don Juan» (p. 152). Otra vez se equivoca con don Juan, que había dejado de ser un problema para Franco en 1947, cuando Franco le apartó irreversiblemente de la posibilidad sucesoria. No es cierto que Franco nunca perdonara al Manifiesto de don Juan en Lausana (1945, p. 153), porque expresamente lo comprendió. La que no olvidó fue la descalificación de don Juan, mal guiado por sus consejeros, como casi siempre, de que le hizo objeto en el manifiesto de Estoril en 1947. Yerra Fusi al afirmar que don Juan proponía la Universidad de Salamanca para los estudios superiores del príncipe (p. 154), don Juan proponía Lovaina según el consejo de Gil Robles, Salamanca era la propuesta del duque de la Torre, según el fragmento inédito de su diario que di a conocer en la revista *Nueva Historia*. Tampoco es cierto que don Juan «no aceptara la Monarquía del Movimiento Nacional» (p. 155), en mi libro *Don Juan de Borbón* demuestro que el conde de Barcelona aceptó varias veces, durante años y años, al

Movimiento, las Leyes Fundamentales, la legitimidad de la Cruzada y todo cuanto había que aceptar, cuando ya era tarde. No es verdad que fracasara el objetivo de Castiella sobre la integración de España en Europa; el régimen de asociación a la CEE resultaba en varios aspectos más favorable para España que el sistema actual, negociado chapuceramente por los socialistas cuando alcanzaron el poder. El dictamen de Fusi sobre los planes de desarrollo es, en cambio, tan lúcido como el que dedicó al plan de estabilización (p. 161). Utiliza el acertado término «las transformación de España» que yo expliqué (delante de Fusi) en el debate dirigido por Luis Herrero sobre el franquismo en noviembre de 1997 y que tanto ha molestado a los jenízaros de la izquierda, simplemente por ignorancia; ni siquiera leen la biografía de Franco escrita por uno de lo suyos. Parece que Fusi se asusta siempre que tiene que reconocer algún logro importante de Franco y por eso, tras su elogio al desarrollo, se cree obligado a endilgarnos una lista de calificativos altisonantes en favor de Franco que sólo son fruto de algunos aduladores y casi nunca compartió la opinión pública (p. 164). La absurda declaración sobre la Iglesia y la guerra civil no se produjo en una «asamblea episcopal», sino en la tristemente famosa y manipuladísima «asamblea conjunta obispos-sacerdotes» (p. 167), y, tal vez por haber dedicado dos décadas de investigación a los problemas de la Iglesia española en el siglo XX, me suenan a hueco las insuficientes disquisiciones de Fusi sobre esos problemas, que merecen mucha mayor documentación y seriedad (p. 167).

Coincido con Fusi en que la Ley Orgánica del Estado de 1966/1967 fue una victoria política de Franco, pero también una decepción para los españoles que habían votado en favor de una seria apertura (p. 176). El proceso histórico que condujo a la designación de don Juan Carlos como sucesor está bien trazado, aunque Fusi exagera de nuevo la preocupación de Franco por la actitud de don Juan de Borbón, que no le importaba poco ni mucho (p. 180).

El capítulo séptimo se titula *El otoño del patriarca* y registra los años que discurren entre la designación del sucesor y la agonía de Franco. La decadencia física del Caudillo era evidente, así como su aferramiento al poder. La decadencia de Franco, dice Fusi con razón, se correspondía con la decadencia de su régimen. Y el último capítulo, *Agonía y muerte*. Fusi calibra bien la época de la «apertura» y las incidencias, cada vez más preocupantes, del año 1974; todo este tratamiento me parece muy adecuado.

No hay novedades notables, pero sí exactitud y dignidad en la exposición de la agonía de Franco a partir de los primeros días de octubre de 1975. Salvo

el párrafo final del libro, donde Fusi, con notorio apriorismo, se cree obligado a adelantar un juicio negativo de la Historia sobre Franco. Esto no es verdad ni siquiera en cuanto a la Historia escrita por él; esta biografía es tan favorable a Franco en momentos esenciales como desfavorable en otros. La descalificación final no es «*a posteriori*», derivada de la experiencia histórica resumida por Fusi, sino «*a priori*», exigida tal vez por los condicionamientos personales del historiador que se mueve en órbita socialista. Pero en todo caso creo haber mostrado que no se trata de una biografía despreciable, ni mucho menos.

A lo largo de sus páginas se advierte continuamente la fascinación que la figura de Franco ejerce sobre Juan Pablo Fusi. Muchas veces le elogia, le da la razón, alaba la habilidad y la prudencia con que soluciona las sucesivas crisis que se presentan a su causa y a su régimen. Pero cuando parece que la conclusión de un determinado análisis le va a salir inevitablemente positiva, se propina a sí mismo un tirón de riendas y concluye exactamente lo contrario de lo que prometían sus premisas. La incoherencia histórica, pues, inducida por motivos que sólo pueden ser de índole política, es uno de los defectos más patentes de este libro.

LA INSOPORTABLE LEVEDAD DE JAVIER TUSELL

Una emocionante fidelidad democrática

¿Cómo incluye usted —preguntará el lector— a Tusell entre los historiadores socialistas? Es cierto que él dice varias veces que ha votado al centrismo. Pero la clave me la ofrecieron, hace algún tiempo, los universitarios de una asociación radicada en la Autónoma de Madrid que anunciaban una conferencia mía en un cartel distribuido por toda la Universidad en que podía leerse: «Para desintoxicarnos del petardo que acaba de ofrecer el historiador socialista Javier Tusell», el cual, por lo visto, había pontificado recientemente por allí. Es la primera vez que he visto calificar a Tusell, con tanta rotundidad, como historiador socialista. Algo verían en él aquellos chicos para proclamarlo tan abiertamente.

Muchas veces me he referido a Javier Tusell en varios libros y varios apéndices. Parece que su origen estuvo en los minipartidos de la Democracia Cristiana que pululaban por los márgenes de la transición desde antes de la muerte de Franco y que no consiguieron unificarse nunca, aunque emprendieron algún intento unitario de inefable nombre: «Equipo demócrata-

cristiano del Estado español». Algo que se llama así tiene que hundirse necesariamente y así sucedió. Los democristianos entraron en la transición muy divididos. Unos, fieles al régimen de Franco, se agruparon en la UDE (Unión Democrática Española), en torno a dos políticos de primer orden, Federico Silva Muñoz y Alfonso Osorio. Silva, el «ministro eficacia» de los años sesenta, ha muerto poco antes de escribirse estas líneas y confieso mi asombro al ver la frialdad, la lejanía y el menosprecio que ha rodeado su desaparición, cuando tras la forzada dimisión de Carlos Arias en 1976 obtuvo la práctica unanimidad para el primer puesto en la tema del Consejo del Reino, una institución manipulada que permitió la victoria de un intenso juego sucio organizado desde las alturas para disminuir el peso de Silva en favor de la inclusión de Adolfo Suárez. Luego Silva pasó a la primera versión de Alianza Popular, se manifestó implacablemente contrario a incluir en la Constitución el término «nacionalidades» y emigró más a la derecha, a la «Unión Nacional» que no consiguió resultados apreciables y se desintegró. El segundo líder de la derecha democristiana era Alfonso Osorio, político inteligente, sereno y clarividente, que fue vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez, hizo posible el gobierno Suárez y se convertiría injustamente en una de las primeras víctimas de la política de Suárez, hoy exaltada de forma históricamente irresponsable por quienes intentan envolverle en un equívoco halo de leyenda; el último promotor de la leyenda es don José María Aznar. Osorio ha publicado el mejor libro que conozco sobre la historia de la transición; creo que está a punto de ofrecernos una nueva edición muy mejorada que espero con avidez.

Alfonso Osorio estaba relacionado íntimamente con el «grupo Tácito», conjunto de jóvenes democristianos que se aglutinaron en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (hoy, por la exacerbación autonómica, ha dejado caer torpemente el adjetivo «nacional»), en torno a la inspiración del presidente de la Asociación, Abelardo Algora. Formaron un grupo de excepcional importancia para la transición. A la que proporcionaron varias figuras de primer orden, como los ministros Landelino Lavilla (luego presidente de las Cortes), José Luis Álvarez, Marcelino Oreja, José Manuel Otero Novas y Andrés Reguera, entre otros, que serían figuras capitales de la Unión de Centro Democrático a las órdenes de Adolfo Suárez. Casi todos estos personajes, de alta categoría política, sin excepción, provenían de la ancha zona aperturista del franquismo y actuaban de forma paralela, que se hizo convergente en el seno de la UCD, con los democristianos de oposición moderada al franquismo, que militaban en los pequeños partidos de José

María Gil Robles, Manuel Giménez Fernández y el fervoroso exministro de Franco, Joaquín Ruiz-Giménez, creador de la revista *Cuadernos para el diálogo* que sirvió de plataforma política a varios jóvenes democristianos, socialistas y comunistas. Los políticos más importantes del sector democristiano procedente de la oposición al franquismo eran partidarios de don Juan de Borbón: Íñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda. Otros de actitud semejante, aunque no vinculados, que yo sepa, a Estoril, acabaron también en la UCD, como Óscar Alzaga, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y, en posición mucho más desvaída y secundaria, el joven e inquieto historiador Javier Tusell, a quien en la época de la muerte de Franco todo el mundo relacionaba con el Opus Dei. Tusell no perteneció a la UCD en la fase inicial del centrismo; se incorporó a la UCD cuando el partido de Suárez sufría el acoso de Suárez por la espalda (porque fue Suárez quien al no controlar la UCD decidió apuñalarla fríamente) y se encargó de suministrar ideas —dicen— al espectral residuo del centrismo que fue la UCD presidida por Landelino Lavilla, un insigne jurista y excepcional político que merecía mucho mejor suerte. Parece que Tusell, en funciones de orientador de la campaña para las elecciones de 1982, fue el genial inventor del lema *Contra la derecha dura y la izquierda inmadura*. Como es sabido, la izquierda inmadura consiguió la mayoría absoluta al rebasar los doscientos escaños, y la derecha dura, que no pasaba de dos docenas, rebasó el centenar y se convirtió en la alternativa. Inspirada por el estro de Tusell, la UCD residual pasó de 166 diputados a once y desapareció hacia la Historia.

Siempre me ha impresionado la emocionante lealtad de Javier Tusell a la democracia, sobre todo al observar el desvío y la repulsa que la democracia le ha demostrado siempre. Se ha presentado con ilusión a varias elecciones, pero jamás ha ganado una sola. Los grupos y partidos a los que se adhiere sucumben a la catástrofe a las primeras de cambio. Cuando Tusell asoma por algún partido todo el mundo entona el sálvese quien pueda. Acabamos de ver que su primer partido, el grupo democristiano de oposición, no consiguió un solo escaño en las elecciones de 1977; el segundo, la UCD residual, naufragó en cuanto Tusell subió al puente de mando para las elecciones de 1982. Claro que el presidente del gobierno, don Leopoldo C. S., figuraba en la candidatura de UCD para aquellas elecciones y la conjunción astral del candidato con el inspirado señor Tusell permitía predecir cualquier catástrofe política, que en efecto sucedió. Parece mentira cómo personas tan avisadas como los señores Alzaga y Polanco no advirtieran la peligrosa coincidencia.

Impertérrito ante este descalabro, Javier Tusell decidió nuevamente cambiar de partido y se inscribió en el grupo democristiano PDP, una redundancia hasta en las siglas, a quien la generosidad congénita de don Manuel Fraga Iribarne, al que Tusell nunca ha podido ver ni en pintura, concedió un amplio puñado de escaños que evidentemente no correspondían a la realidad. El Partido Demócrata Popular empezó a segarle al señor Fraga la hierba bajo los pies hasta que consumó la traición y le abandonó. Claro que cuando el PDP se decidió a volar solo, corrió la misma suerte que todos los intentos en que participa el señor Tusell; se desintegró. Creo que fue en una elección para la Comunidad de Madrid —en todo caso fue una candidatura de Madrid— en cuya lista apareció personalmente don Javier Tusell, pero situándose abnegadamente en el último lugar, para respaldar con su prestigio político la candidatura. Confieso que ni yo mismo, que ya era experto en la materia, pude imaginar el resultado; ni siquiera el número uno de esa candidatura, creo que era el señor Rupérez, obtuvo escaño.

Javier Tusell volvió entonces su admiración a la figura políticamente doliente de don Adolfo Suárez. No sé si llegó a inscribirse en el CDS y sospecho que no, porque el señor Suárez conservaba, en medio de tantas desventuras políticas, restos de su antiguo sentido político, pero bastó la admiración y el elogio de Tusell para que, por segunda vez en la historia de la transición, el señor Suárez, que acabó en extraños radicalismos y hasta declarando que el CDS era compatible con el marxismo, fuese desairado y virtualmente expulsado por el partido que había creado; y a poco desapareció también el propio marxismo, como es sabido.

Desde entonces, Javier Tusell revolotea en torno al Partido Popular con escaso éxito; parece que en Génova, 13, le conocen bien desde que le echaron de la fundación Humanismo y Democracia, cuando advirtieron que Tusell, en el fondo, sólo pertenece al partido tuseliano. Hasta que un día nos sorprendió a todos, cuando una persona tan suspicaz y cautelosa como don Jesús de Polanco le fichó como columnista ocasional de *El País* y colaborador asiduo en la red de emisoras SER. Dado el hecho de que el señor Polanco es la cara mediática de la misma moneda que ostenta por la otra cara la vera e hipernariguda efigie de don Felipe González, ya teníamos al señor Tusell en órbita socialista, lo que acarreó consecuencias inmediatas para los dos personajes que comparten la moneda.

No había pasado un año sin que el señor González, pese a su tenaz y descocada campaña electoral, perdiera el poder en las elecciones de marzo de 1996. Lo que no había conseguido la corrupción galopante, la chapuza trágica

del GAL, las aventuras laosianas y las orgías cutres del señor Roldan, las comisiones del AVE y demás prodigios democráticos del felipismo, lo provocó de unos cuantos plumazos —qué plumazos, eso sí— la simple presencia de don Javier Tusell en el diario felipista. En cuanto al señor Polanco, cuya posición parecía desde décadas antes tan inexpugnable como la fortaleza del Viejo de la Montaña, empezó a cuartearse de manera alarmante: le quitaron el pasaporte, le citaron a declarar en la Audiencia Nacional, le birlaron su más preciado monopolio, le robaron Antena 3… y que alguien me explique a qué oscura influencia se debe toda esta acumulación de nubarrones, que los colaboradores del señor Polanco pretenden atribuir a siniestras conjuras judeomasónicas, sólo que al revés; sin advertir que tienen en casa al causante. Después de estos sustos el señor Polanco ha reaccionado, ha vuelto a ganar y a subirse en la cresta de la misma ola que se ha tragado a sus enemigos. Pero el aviso estaba dado y el tiempo dirá.

Y así estamos. Me divierte extraordinariamente que cuando el señor Tusell arremete contra mis amigos, para lo que siente una extraña propensión, mis amigos, inevitablemente, me llamen para que les defienda, «dado que eres un reconocido experto en el personaje». Realmente en esta época sólo pretendo convertirme no ya en un experto, pero sí en un serio conocedor de ciertas parcelas de la informática, pero como el señor Tusell se sigue obstinando en hostigar a mis amigos (hace algún tiempo se le escapó una estupidez insondable sobre mi abuelo, que me ha servido de impulso para este capítulo), no tengo más remedio que revalidar mi especialización en sus inepcias. Y ofrecer aquí, en sencilla clave de humor, nuevas demostraciones sobre su irresistible inclinación al dislate histórico. Sin repetir lo que en otras ocasiones he denunciado; porque el motivo de esa especialización no es otro que mi condición permanente de único lector de Tusell. Creo que soy el único español que tiene la colección completa de las obras en que figura como autor y la de todos los artículos que aparecen con su firma. Esto ya es una hazaña, pero es que además soy el único español que tiene leído y anotado cuidadosamente todo ese material capaz de terminar con cualquier lector por animoso que sea. Revalidaré, pues, mi *expertise* en lo que resta de este epígrafe, y dentro del objeto del presente libro.

Cada vez comprendo menos los elogios exagerados que historiadores tan expertos y respetados como los profesores Stanley G. Payne y Carlos Seco Serrano han vertido sobre Javier Tusell. Sospecho que no le han leído y se han acomodado a los persistentes halagos con que desde hace bastantes años les asedia el político. Sorprende que los dos no hayan caído en la cuenta de

que la verdadera vocación de Tusell es la política, a la que subordina continuamente la Historia. Sorprende aún más que, ante el catálogo de errores que algunos hemos denunciado en las obras firmadas por Tusell, esos notables historiadores se hayan mostrado insensibles, cuando esos errores, que aparecen con sus citas, son fácilmente comprobables. Como goza de colaboradores muy serviciales, que sin duda le facilitan el trabajo más de lo que ellos mismos desean, Tusell parece disponer de tiempo abundante para las relaciones públicas y, desde hace ya tiempo, para acopiar las ingentes cantidades de plomo que vierte luego en sus artículos o sus intervenciones orales en la radio, con los cuales ningún editor querrá, sin duda, publicar una antología de la pesadez ininteligible. Conozco, en cambio, un número mucho mayor de historiadores y, en general, personas de alto nivel cultural que le tienen tomada cabalmente la medida a Tusell y no demuestran signos precoces de senilidad como los poquísimos que le elogian sin condiciones.

Pero ni siquiera éstos se atreven a valorar su expresión literaria. La Historia es un saber; que necesita, desde el siglo V antes de Cristo, tanto de la ciencia como de la expresión. He leído a cientos de historiadores, pero a ninguno que escriba tan mal como Tusell. Varias veces me he quejado de que, con frecuencia, me pregunto qué pretende decir e incluso en qué idioma escribe. Su carencia de dominio sobre el lenguaje es tan profunda que en ocasiones dice lo contrario de lo que pretende. Es el historiador más soso y *esaborío* que conozco. Ni una imagen brillante, ni un tropo decente, ni una cita (las espolvorea con desfachatez) que no parezca salida de antología o de centón. Sin embargo debe realizar frecuentes visitas al que hace años se llamaba «el tubo del Opus», una especie de tratamiento psicológico utilizado, decían, por esa interesante asociación para infundir complejo de superioridad a quienes deberían inclinarse por efectos naturales al complejo de inferioridad.

Los apaleamientos del Atrevido

No tengo la menor intención de montar aquí un estudio psicológico sobre Tusell, porque su psicología me parece una de las más aburridas y menos sugestivas que conozco. Pero tal vez ese complejo de inferioridad, corregido en el legendario «tubo», le provoca un efecto secundario que linda con el masoquismo al incitarle a una inexplicable agresividad contra personalidades de mucho más valor científico y literario que él. Empecé a notar tan graves síntomas en los escritos de Tusell allá por el año 1988, cuando de una tacada con bolas de barro pretendió descalificar a dos de los más grandes periodistas

españoles de este siglo, Emilio Romero y Jaime Campmany. Estaba yo en Roma, a los pocos días del ataque de Tusell a los dos grandísimos escritores, y paseaba felizmente por las anchas aceras del Coliseo, cuando compré en un quiosco varios periódicos y revistas españoles, y a los diez minutos sufrí tal ataque de risa que la gente se volvía e incluso hubo quien me preguntaba por los motivos de semejante acceso. Me resultaba imposible explicárselo y procuré dominarme. Aquí puedo contar esos motivos. Emilio Romero se limitó a contestar con media línea de expresivo laconismo: «Me cago en Javier Tusell». Campmany, que recala cada verano a orillas del lago Mayor, creo, pero siempre se da una vuelta por Florencia para completar su colección de dagas, le dedicó su primera sátira personalizada, como dicen los manuales de informática, bajo el titulo *fray Gerundio Tusell* en que llamó a su infeliz contradictor «gatito casero, remolón y mimado, con las uñas mochas y el ronrón frailuno, y así no hay manera de salir del trance… historiador de chicha y nabo, sochantre tartamudo, subdiácono intenso». Creo que éste es el contexto de la famosa errata que mejoró, y ya es difícil, el texto de Campmany, que decía «intonso» y es que las erratas añaden muchas veces una fuerte carga de objetividad, como aquel «Conejo general del Joder judicial» que convirtió en plataforma profética delirante al mismísimo Boletín Oficial del Estado, según las amables glosas de un jurista insigne, Fernando Vizcaíno Casas.

Junto a un retrato de Tusell con pelo caído —se le cae con frecuencia el pelo—, Campmany le dedicó el primero de sus sonetos personalizados en *Época* el 27 de febrero de 1989. Luego vinieron más, por lo que Tusell debe sentirse muy agradecido al vate murciano, ya que le ofrece con esos sonetos la única vía posible para que el más ramplón de los estilistas de la Historia pase alguna vez, aunque sea pasivamente, a las antologías de la literatura. Me enorgullezco cada vez más de ser el culpable de ese soneto con que mi paisano reaccionó ante el alarde democrático de Tusell que, cuando oficiaba de jurado en el premio Espejo de España, que yo gané unos días antes, abandonó el jurado con el inefable Enrique Múgica, cuando vio que José Manuel Lara le había engañado como a un chino y privó a Tusell del supremo placer de humillarme. El soneto merece pasar a la Historia:

Pues se ha cubierto su merced de gloria
con esa enrabietada pataleta;
mucho más que erudito de la Historia
es usted personaje de historieta.
Por más que me apretujo la memoria,
no encuentro tontería tan completa
ni en aquel famosísimo de Coria
ni en el que asaba al fuego la manteca.
¡Cuánta virtud tendrá la democracia,
pues sabe resistirse a la desgracia
de que usted se decore con su nombre!
Deje de imaginar majaderías
o tendrán que decirle, ya a sus días:
¡vaya usted a paseo, pobre hombre!

Campmany transcribió sus versos al modo de prosa; yo los coloco uno debajo del otro porque Tusell, seguramente, no se ha enterado a estas alturas de que se trataba de un soneto.

Deduzco benévolamente la interpretación masoquista para explicarme la persistencia de Tusell, que sin ella sería vesania; volvió a zaherir a Campmany, volvió a ganarse revoleras y sonetos, adobados con esbozos biográficos de su padre don Jordi Tusell, notable productor cinematográfico (cuya reciente desaparición lamento muy sinceramente), cuando Campmany era presidente de ese sindicato; y don Jordi acreditado sindicalista y beneficiario del franquismo, aquí nos conocemos todos. Pero llegó un momento en que la cosa pasó de castaño oscuro; porque Tusell, una vez agotada la vía del resentimiento personal, se hizo vocero del señor Polanco, contra quien Campmany, en uso de su derecho constitucional como ciudadano, interpuso una demanda judicial por algo que no le gustó en las actuaciones del poderoso y hasta entonces intangible empresario. Allí fue Troya. Ahora Tusell no quitaba ni ponía rey, sino que ayudaba a su señor; ya pertenecía a la escudería informativa del señor Polanco y se sintió obligado a socorrer a su desvalido jefe. No pudo hacerlo ante los tribunales porque sabe de Derecho todavía menos que de Historia; pero espetó a Campmany dos artículos seguidos en *El País*, los días 15 y 27 de junio de 1997, que me obligaron a intervenir en *Época* con un extenso análisis histórico para que la opinión pública conociese de forma fehaciente la credibilidad del Atrevido, que es el europeo más digno de tal sobrenombre desde aquel audaz duque de Borgoña que contaba sus batallas importantes por palizas, pero luego volvía a las andadas como si tal cosa. Por lo del premio Espejo no ha reincidido; como tampoco ha vuelto a ponerse a tiro de las certeras defecaciones del gran Emilio Romero.

Entre la invectiva y el halago

Tusell siente de forma crónica la funesta manía, no ya de pensar, líbreme Dios de acusarle de tal cosa, sino de utilizar machadianamente la cabeza para otro menesteres menos nobles: embestir contra lo más alto y prestigioso de la inteligencia andante española. Así se atreve a descalificar en *El País* (1 de abril de 1995) a las Memorias de Gonzalo Fernández de la Mora, *Río Arriba* con el verbo-autorretrato: «despotrica». Las Memorias del exministro, uno de los intelectuales más relevantes y reconocidos de la derecha española, contienen muchos datos, ambientes y valores históricos, pero sobre todo están escritas con una maestría y una galanura que Tusell es incapaz no ya de imitar, sino aun de admirar; si en el fondo histórico vive Tusell en permanente estado carencial, en la forma no rebasa jamás la ramplonería y el retorcimiento. Otra de sus bestias negras es Federico Jiménez Losantos, el colosal columnista político que posee para dar y tomar todo lo que a Tusell le falta; fondo de información cabal y expresión perfecta, propia de un profesor de literatura. En 1993, Losantos publicó *La dictadura silenciosa*, uno de los libros más decisivos para terminar con la pesadilla felipista en España. Tusell ya sentía la atracción de la órbita polanco-felipista y embistió contra el sereno y combativo intelectual, lo que provocó inmediatamente una riada de ediciones de su libro que Tusell denostó, pero elogió sin reservas el ensayista liberal europeo Jean François Revel. Después consiguió Jiménez Losantos el premio Espejo de España con su intuitiva biografía *La última salida de Manuel Azaña*, un personaje sobre el que Tusell lo ignora todo; e incluso llega a negar importancia a la conversión final de Azaña a la religión católica —reconversión mejor, porque Azaña, aunque Tusell no lo sepa, nunca renegó de su fe—. Todo hace pensar que Tusell se muere de envidia ante los éxitos de Federico Jiménez Losantos; un sentimiento que, sorprendentemente, parecía compartir Luis María Anson, quien en vísperas de abandonar la dirección de *ABC*, cuando ya había dejado al periódico como un acerico con sus *tics* y sus lugares comunes, quiso morir matando y no paró hasta echar a Jiménez Losantos sin el cual *ABC* ha renunciado inexorablemente a su vocación de grandeza y se ha vuelto, salvo algunas grandes columnas que siguen en difícil equilibrio, tan sectario y tan aburrido como *El País*; porque con escritores intrascendentes como el señor Juan Manuel de Prada no podrá colmar nunca el hueco formidable de su mejor columnista defenestrado. (Que gracias a Dios y a Catalina Luca de Tena ha vuelto donde solía y gracias a otro director extraño ha vuelto a su reducto de *El Mundo*).

Tusell el Atrevido se obsesiona contra todo lo importante, contra todo lo indiscutible. Además de la Historia ignora clamorosamente todo el conjunto

de lo que antes se denominaban «ciencias auxiliares de la Historia» y ahora se consideran partes integrantes de ella, especialmente la economía. Pues bien, en 1987 Tusell publicó otro catálogo de sus ignorancias, tanto de historia política como de historia económica, en su librito *Radiografía de un golpe de Estado: el ascenso al poder del general Primo de Rivera*[45]. Allí embiste Tusell contra uno de los primeros especialistas en la historia de la Dictadura, en la historia económica universal y de España, en la historia general: el profesor Juan Velarde Fuertes, de quien hasta sus adversarios reconocen la grandeza. Tusell no; a Tusell le estorba siempre esa grandeza, cegado por su propio espejo.

Velarde, que no es persona impulsiva ni impaciente, se tomó su tiempo y replicó a Tusell de forma aplastante en tribuna tan prestigiosa como la *Revista de Historia económica*[46] con el artículo *Puntualizaciones sobre un golpe de Estado*, que descalificó a Tusell para siempre en relación con la historia económica. El repaso de Velarde a las ignorancias de Tusell sobre Santiago Alba, el ministro desahuciado por don Miguel Primo de Rivera en su Manifiesto, es de los que producen vergüenza ajena. Critica Velarde el vacío de investigación que demuestra Tusell en las relaciones de don Miguel Primo de Rivera y Josep Puig y Cadafalch, presidente de la Mancomunidad de Cataluña. Luego niega la versión de Tusell sobre el cambio repentino de don Miguel Primo de Rivera al venir a Madrid tras el triunfo de su golpe; que contra lo que Tusell afirma sí que ofreció la cartera de Hacienda al prestigioso economista Flores de Lemus, fue éste el que se negó sin que Tusell lo sepa. «Tusell todo esto lo investiga mal. Con decir que no ha consultado siquiera los ejemplares de la *Gaceta de Madrid* de aquellos días…»

También se le escapa a Tusell la cuestión Suárez Inclán. Tusell confunde a Miguel Villanueva, el ministro de 1923, con el periodista Francisco Villanueva. Nueva confusión típica de Tusell, que toma al Suárez Inclán ministro por el Suárez Inclán general de división y se queda tan fresco. A todo este tracto de Tusell denomina Velarde «vasta confusión» y se queda corto; creo que se trata de una aberrante y pertinaz ignorancia.

«La raíz de esta confusión sobre temas archiconocidos radica, a mi juicio —resume Velarde—, en el apresuramiento». Velarde se ceba en los disparates del índice onomástico, que todo autor debe realizar, o al menos revisar personalmente. Allí brillan confusiones como las de don Miguel Primo de Rivera con su tío el también teniente general Fernando Primo de Rivera, uno de los promotores de la Primera Restauración. Velarde se queja de las incoherencias gramaticales del presunto historiador; ignora las reglas de

puntuación, convierte a dos sindicalistas en tres, utiliza mal el término *detentar*. Incurre Tusell hasta en faltas de ortografía, como el *salibazo* de la página 58 o la obsesión, diez veces manifestada, de intercalar un *de* inexistente entre los apellidos del general López Ochoa. Para Velarde éste es un libro-trampa, carente de fiabilidad y recomienda a Tusell que reescriba su libro sin prisas morbosas.

Tusell, herido en lo más vivo de su orgullo por el rapapolvo velardiano, intentó justificarse con balbuceo de excusas desmañadas, que sepultó Velarde acto seguido con un formidable conjunto de citas concretas que por lo visto Tusell, en su ignorancia de las fuentes, parecía necesitar. Y dedica a su osado contradictor un endecasilabo de Quevedo: «Su colerilla tiene cualquier mosca».

Termino la galería de grandes figuras que han sufrido la agresión injustificada de Tusell con la mención de Torcuato Luca de Tena, un novelista eximio, intelectual y académico cultísimo (el adjetivo no se presupone; no abundan, pero existen los académicos de pavorosa incultura, sobre todo entre los recientes, cuando su elección se debe a pactos de componenda). Corrijo este texto al día siguiente de la muerte de Torcuato, en junio de 1999, que me ha afectado enormemente. El 7 de junio de 1981, cuando Tusell escribía en *Diario-16*, periódico que, como anunciaba la presencia del Atrevido, no tardó mucho en marcar un rumbo de irreversible decadencia, calificó de «memoria fallida» el admirable y valiosísimo libro de recuerdos personales que Luca de Tena tituló *Papeles para la pequeña y la gran historia*, editado en Editorial Planeta poco antes. Terminaba su exabrupto con una especie de maldad, al agradecer al editor que no le concediera el premio Espejo de España, sino solamente la condición de finalista; otro rasgo típico de Tusell, cuya recomendación negativa fue anuncio seguro del éxito desbordante que el libro alcanzó; en eso no falla nunca, potencia lo que descalifica y hunde lo que recomienda. Y por supuesto la continuación de ese libro obtuvo el codiciado premio.

Tusell riza el rizo entre el Partido Popular y el felipismo

La aplastante victoria del PSOE en octubre de 1982 dejó descolocado a Tusell; insisto que su preocupación principal no es la Historia sino la política. Fernando Abril Martorell (q. e. p. d.) ha sido, desde hace veinte años, uno de los admiradores políticos de Tusell; no sé que vería en él, pero me dijo un par de veces en 1980: «Es un político de raza». Yo me lo encontré en la Dirección General de Bellas Artes cuando accedí al Ministerio de Cultura y creo que él

estaba seguro de su cese pero recibí de la Empresa, como llamaba Joaquín Garrigues al grupo dirigente del partido y del gobierno —Suárez, Abril y Rafael Arias Salgado— el mego de que le mantuviese en su puesto y como manifestaba en él cierta competencia y habilidad, decidí seguir el consejo para demostrarle, además, que desavenencias personales derivadas de su derrota en las oposiciones que le gané cinco años antes no deberían interferir en decisiones políticas. Pero en 1982 la UCD se fue primero al garete y pronto a pique y Tusell buscó un nuevo acomodo político.

No podía ni acercarse al partido de Fraga por su incompatibilidad absoluta con Fraga; y desde entonces tanteó al felipismo desde *El País*, por el que trataba desesperadamente de fichar como fijo, en su divertido artículo *Las perversiones de la hegemonía*, publicado el 19 de septiembre de 1989. Una vez más la llegada y el beneplácito de Tusell presagiaron la caída inexorable del felipismo. Decretó por el momento «la virtual inexistencia de una oposición alternativa de la que ni siquiera sus más ardientes partidarios esperan que llegue a acceder al poder pronto». Pero la estrella de José María Aznar ya avanzaba en su fase ascendente y se iba a configurar prontísimo como alternativa de poder, una vez superados los terribles obstáculos políticos, bancarios e institucionales que se alzaban ante él. Ya comprobaremos que Dios no llama a Tusell a la vocación profética que ejercita sin embargo asiduamente entre carcajadas universales que no inmutan ni a Payne, ni a Carlos Seco ni al tenaz comando del Opus Dei que con tanta abnegación le patrocina. «El PSOE —vaticinaba en 1989— ha acabado por eludir muchos de los estropicios de los que era perfectamente capaz en 1982». Y se ofrecía casi con impudor: «Ahora, siete años más tarde, resulta ser bastante mejor que entonces por lo que una persona que, como el autor de este artículo, no le votó en aquella fecha, podría tener la tentación de hacerlo ahora».

Nunca tal dijera. El PSOE así lavado en el Jordán tuseliano se lanzó desde entonces a un frenesí de corrupción y suciedad como no se ha visto en los peores momentos de la historia española. Al conjuro legitimador de Tusell, el PSOE se enfangó en el caso Roldan, en el caso FILESA, el caso GAL, en San Sebastián de la RENFE, en el caso Salanueva, en los desmanes de la Expo sevillana, en las comisiones del AVE y en otros estropicios que acaba de catalogar implacablemente Manolo Barrios, convertidos en sapos que, a uno diario, necesitará Tusell doscientos cincuenta días para tragarse. Y al final del despeñamiento, a la calle.

Lanzadas de forma tan cautelosa e insinuante sus redes hacia el PSOE, Tusell empezó a observar que su denostada alternativa mostraba cada vez más posibilidades de poder y entre una de cal y otra de arena empezó a tirarle los tejos a José María Aznar. Una vez más decidió jugar a dos barajas y cuando Aznar venció en las elecciones de 1996, Tusell entró en trance y, según me cuentan en las alturas del PP, lo pidió todo, de lo más alto a los puestos de pedrea. No comprendía cómo un simple profesor titular de su departamento, el historiador Guillermo Gortázar, desempeñaba la secretaría cultural de la nueva ejecutiva. Topó, sin embargo, con una muralla de hielo; en el Partido Popular había demasiadas personas que le conocían perfectamente y ni siquiera sus tenaces patrocinadores consiguieron abrirle camino, mientras los socialistas tomaban buena nota sobre la versatilidad del historiador, que por cierto en el artículo que acabo de citar exponía la idea procaz de que el verdadero responsable de los fallos visibles en la democracia española era Franco, nada menos. Exhibía así la misma metodología que Carrillo cuando atribuía a Franco, por entonces, la culpa de las tres sucesivas catástrofes electorales del Partido Comunista. Ni el Cid consiguió vencer, de cuerpo presente, en batallas tan decisivas.

En otros libros he comentado con sorpresa la audacia profética de Tusell en dos de sus publicaciones: *La URSS y la perestroika desde España* y la biografía del gran escritor Mario Vargas Llosa en vísperas de su frustrada elección presidencial en Perú. El primero se publicó con solemnidad en vísperas de la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la URSS y, como era de esperar, elogiaba la pujante economía de Alemania Oriental, pronosticaba la indefinida permanencia del Muro de Berlín y la Unión Soviética, cuya superioridad militar exaltaba el autor, sin conocer el fracaso total de esa superioridad en la confrontación del Líbano unos años antes. En cuanto a Vargas Llosa, todo el mundo sabe que el célebre escritor liberal no fue elegido presidente de su país ni siquiera con la recomendación de Tusell, a quien Dios no ha llamado por el camino de la profecía.

LA INSUFICIENTE TRILOGÍA DE TUSELL CONTRA FRANCO

Con lo cual llegamos al auténtico objeto de este ensayo sobre Tusell y su circunstancia: presentar su trilogía contra Franco. *Trilogía* es un título exagerado; porque no hay un adarme de *logos* en estos libritos desiguales y deleznables, que para ser exhaustivos habrían de completarse con otros dos: el ya añejo *Franco y los católicos*, que trenzó Tusell sobre el archivo Martín

Artajo y el más reciente *Carrero* que compuso con elementos del archivo Carrero, aunque el actual almirante Carrero Blanco me ha asegurado que de su mano no ha salido un solo documento con destino al señor Tusell y naturalmente creo en su palabra. Pero es evidente que alguien ha dado a Tusell documentos de Carrero; sospecho que tal vez la misma mano que le facilitó los documentos de Martín Artajo. No voy a ocuparme aquí, sin embargo, de esos dos libros; porque mi objetivo en este ensayo es el análisis del antifranquismo morboso y en esos frustrados apuntes biográficos sobre Martín Artajo y Carrero, Tusell demuestra no haberse enterado de la trayectoria y el talante de Franco en relación con esos colaboradores suyos. (El familiar del señor Martín Artajo que facilitó al señor Tusell los papeles de Martín Artajo habrá sentido, espero, serio disgusto al ver cómo el escritor se revolvía contra el personaje). Los tres libros de Tusell en que expone sus lamentables e infundadas opiniones sobre Franco son éstos: *Franco en la guerra civil*, con audacia notoria, ya que siempre lo ha ignorado casi todo sobre la guerra civil; *Franco, España y la Segunda Guerra Mundial*, acometido con semejante audacia, ya que de la guerra mundial Tusell sabe tan poco como de la perestroika; y por último, *La dictadura de Franco*, que no es más que un refrito engordado de un folleto relativamente truncado sobre el régimen y la época de Franco. Voy a presentar al lector, para su regocijo, las principales hazañas de Tusell en esta trilogía que hubiera requerido por su parte una mayor preparación y un mayor respeto al método y a la coherencia.

Tusell perdido en la jungla de la guerra civil

Tusell ignora profunda y copiosamente la guerra civil. No conoce las fuentes, ni los personajes, ni el contexto estratégico, ni los archivos, ni las hemerotecas de la guerra civil. Tusell, sobre todo desde hace unos años, se ha convertido en un cazador de recompensas; debe de saberse de memoria el libro de Fernando Díaz Plaja con el famoso calendario sobre premios de Historia (a los literarios, por supuesto, no osa) y se presenta impávido a cuántos galardones se convocan sobre asuntos históricos. Me temo que presenta sus originales apresuradamente, sin corregir ni rematar, sin tiempo, como en el caso que voy a comentar inmediatamente, de preparar un índice onomástico que es muy conveniente para un estudio histórico. No debo olvidar *Los hijos de la sangre, la España de 1936 desde 1986* no es, insiste el autor, un ensayo porque cree que el ensayo es un vicio nacional y un género deleznable; obtuvo, naturalmente, el premio Espasa de ensayo de 1986, que fue publicado en la colección *Espasa mañana*. Con obras de tal calibre no es

extraño el hundimiento y venta de tan famosa e histórica editorial no mucho después de la publicación del libro.

Promete el libro en portada estudiar «la España de 1936». Abordamos su lectura convencidos de que nos encontramos ante un ensayo para la interpretación de la guerra civil. Nos equivocamos de medio a medio. El libro, que luego dará pie a Tusell para sucesivos refritos —lo cual forma parte de su peculiar metodología—, es un conjunto de divagaciones sobre tres períodos de nuestra Historia; primero la República española de 1931, segundo la guerra civil y tercero la época de Franco. Es decir intenta, en el designio del autor, un compendio histórico de la República, la guerra civil y el franquismo. Lo que quiere hacer Tusell —y además lo confiesa— es una historia breve de esos tres períodos. Pese a ello no ofrece notas a pie de página; cede así a su aborrecimiento por las citas concretas, por la presentación de fuentes. Para compensar esta carencia espolvorea al final de cada tracto histórico unas cuantas fuentes, muchas de las cuales, como el lector avisado advierte al pasar las primeras páginas de cada parte, no ha leído; en bastantes casos no menciona prácticamente nada tomado de ellas. Sí menciona alguno de mis libros y en muchas ocasiones he sentido, en las páginas de Tusell, un sospechoso aroma de «inspiración excesiva» que no me he decidido a comprobar página por página para no prolongar en mi comentario el hastío que me ha producido el texto.

Tusell quiere justificar el predominio de la guerra civil en su título y nos dice, como tesis propia de un águila, que considera a la República como antecedente de la guerra civil, aunque, contradictoriamente, se empeña en demostrarnos que la guerra civil pudo evitarse; pues no pudo, sobre todo después de la Revolución de Octubre de 1934, organizada por socialistas y catalanistas, tras la cual la guerra civil era ya irreversible. El franquismo, por su parte, no es para Tusell más que la consecuencia negativa de la guerra civil.

La primera parte del ensayo se titula «Un pecado colectivo» y trata de abarcar el estudio de la Segunda República y la guerra civil. La tesis fundamental de Tusell consiste en repetir hasta la hartura que la República fue una democracia; aunque luego, a lo largo del desarrollo del ensayo, se ve abocado a reconocer en muchas ocasiones que la República no fue democrática. Tiene razón Tusell contra Tusell. Para que un régimen sea democrático es preciso que cumpla dos condiciones y sólo dos; primera, que funcione a través de elecciones libres y no manipuladas; segunda, que exista entre los ciudadanos un claro consenso en cuanto a la voluntad de

convivencia. Está clarísimo que la República no cumplió estas dos condiciones. No cumplió la primera porque ni las primeras ni las últimas elecciones de la República fueron legítimas. Las primeras, las del 12 de abril de 1931, no se convocaron para decidir entre Monarquía y República. Las últimas, las del Frente Popular en febrero de 1936, fueron coactivas, trucadas y manipuladas hasta la saciedad. Voluntad de convivencia no existió prácticamente nunca, por culpa de los republicanos que sólo querían una República para ellos; que no aceptaron su derrota de 1933 a la que replicaron con la antidemocrática Revolución de Octubre. Tengo cientos de notas más sobre las inepcias de Tusell en el desarrollo de su tesis. Las desarrollaré en otros capítulos de este libro. No son necesarias ahora, ante esa contundente descalificación que acabo de formular.

Sobre la guerra civil propiamente tal es para mí evidente que Tusell se inspira más de lo debido en otros autores que no cita. Mi convicción es que de la guerra civil no sabe mucho. Los aspectos militares le resbalan; una vez critica al general Rojo porque no plantea simultáneamente dos grandes ofensivas (Brunete y Aragón), sin advertir que le era imposible porque no contaba más que con un cuerpo de maniobra; luego le critica también por lanzar a la vez (sobre el papel) las ofensivas finales de Extremadura y Málaga, esta última evaporada. Debería leer el capítulo final del primer libro de Rojo, *Las causas del triunfo de Franco* y se enteraría de algo más. Se le escapa por entero la razón principal de la victoria de Franco y su zona; el factor moral, pero ya nos indica que le produce repugnancia el concepto de Cruzada. Lo siento, pero esa repugnancia ganó la guerra civil.

La tercera parte del libro trata de reconstruir la historia de la época de Franco. Lo hace a rebanadas indigestas, sin la menor capacidad ni de análisis ni de síntesis. El capítulo sobre lo que llama «nacionalcatolicismo» descansa casi exclusivamente sobre las disquisiciones del teólogo de la liberación Alfonso Álvarez Bolado (Tusell no sabe quién es realmente) y en un desconocimiento de la Iglesia española hasta el Concilio que resulta realmente lamentable. Considera al Concilio como fetiche y no sabe una palabra sobre él. Después de escribir cinco libros sobre la historia de la Iglesia, especialmente dedicados a la Iglesia española, después de aportar centenares de documentos inéditos, me da rabia seguir comentando las ideas de Tusell sobre la Iglesia española. No dice nada ni del Opus Dei, del cual supongo que sabe algo porque se dice que de él procede.

Descartada esta fuente de refritos, voy al segundo libro de Tusell sobre la guerra civil: *Franco en la guerra civil, una biografía política*, editado por

Tusquets en 1992. En este libro dice llevar publicados «más de treinta libros». Dos o tres años después reconoce haber perpetrado «una cuarentena de libros». Me salen dos nuevos entre la treintena y la cuarentena; tal vez porque un historiador se vea obligado a ofrecer libros fantasmagóricos en vez de catalogarlos en la dedicatoria, como acabo yo de hacer en el que ofrece el número 121, pero no voy a medirme con él en el aspecto cuantitativo, aunque me sería facilísimo enumerar la cifra exacta de libros firmados por Tusell; ya he dicho aquí que soy la única persona del mundo que los tiene todos, y no rebasan la primera de esas sumas. Esta «biografía» es un esperpento, pero no de Franco, sino del biógrafo. Que adelanta en la p. 9 una de las tesis de su libro: «Nada hacía prever que Francisco Franco pudiera convertirse en persona de relevancia política excepcional». Por el contrario, todo hacía preverlo; ya en Zaragoza, en 1928-1930, las gentes de mayor influencia social pedían a Franco, director de la Academia General Militar, que «salvase a España» como me comunicaron en 1970 algunos supervivientes. «Ni siquiera en la guerra civil sus propios seguidores previeron nada parecido a un mandato tan largo y tan carente de límites» (p. 9). Le citaré tres testimonios en contrario: el general Cabanellas el 28 de septiembre de 1936 en Salamanca; el marqués de Valdeiglesias en su estremecedor testimonio *Así fue*; y el propio Franco a Luis Bolín en la misma noche del 18 de julio, según relata Bolín. «Luego, concluida la contienda, la dictadura de Franco se asentó definitivamente» (p. 9). Fue mucho antes: la prensa de Burgos le llamó Dictador el día 2 de octubre de 1936; y antes de terminar el año, el poder personal de Franco estaba asentado sin rival ni límite posible. Pues empezamos bien si encuentro esos tres gazapos en la primera página del texto tuseliano.

Tendré que resumir y abreviar, pero no puedo prescindir de presentar aquí las perlas continuas de este libro. «Durante la Segunda Guerra Mundial el ya Caudillo aprendió a practicar el arbitraje entre las tendencias de su régimen» (p. 10). Había aprendido mucho antes, en 1937; vea Tusell el testimonio de Hedilla sobre los pródromos de la Unificación; en 1938, analice la composición equilibrada del primer Gobierno de Burgos en el mes de enero. «A partir de 1945 —sigue Tusell, inasequible al sentido del disparate— explotó el temor a la recaída en la guerra civil, se enroscó a la vez de forma parasitaria y espontánea en la Iglesia católica» (p. 10). El temor a la recaída en la guerra civil lo advirtió desde el momento de comunicar el último parte de la guerra en la noche del 1 de abril de 1939; el amparo de la Iglesia (transcribo las acusaciones de Tusell de forma educada) lo solicitó desde

diciembre de 1936 en su comunicación con el cardenal Goma para la preparación de la Carta Colectiva del Episcopado. «Caudillo es, por supuesto, una denominación militar», (p. 10). En la mente de Franco y en la tradición española era una denominación histórica que trascendía a lo militar; repase Tusell *La España del Cid* de Menéndez Pidal. El desarrollo económico, que hasta un historiador antifranquista como Fusi valora con criterio histórico, Tusell lo regatea; según él se debió «a la renta de la situación española, más que a sus medidas de gobierno» (p. 10). Es la primera vez que veo reconocido como factor económico «la renta de una situación», pero ya sabemos cómo anda Tusell en economía.

«Desde el punto de vista militar —pontifica el osado—, la guerra civil española se puede explicar de manera muy simple…, tampoco reveló la existencia de grandes genios estratégicos ni de nuevos tipos de táctica militar» (p. 11), Tusell no ha saludado el «ABC de la batalla defensiva» del propio Franco; los análisis militares de la guerra civil española debidos a Liddell Hart, los generales Aranda y Valiño, Kindelán, Ramón Salas y Casas de la Vega; el admirable reconocimiento de Vicente Rojo al planteamiento y ejecución de la campaña en Cataluña en *Alerta los pueblos*; los libros de Manuel Aznar y Luis María de Lojendio; léalos, medítelos y luego reescriba, por favor.

A Tusell le equivocaron el nombre: debieron llamarle Modesto. «Ésta pretende ser una biografía como la de De Felice acerca de Mussolini; la de Pabón sobre Cambó o la de Álvarez Junco sobre Lerroux» (p. 12). Pero el Atrevido, como hace poco le llamé, no compara bien. Las tres biografías que cita son *completas*; abarcan toda la trayectoria vital de sus personajes. La de Tusell sobre Franco se refiere, y además mal, sólo a tres años escasos de su vida. El capítulo primero —La sublevación y el Estado campamental— empieza con Franco comandante *militar* de Canarias. No era ése su cargo, sino comandante *general* (p. 15). Atribuye Tusell a Franco para su «triunfo profesional» (p. 15) a la valentía (sic), pero sobre todo a la dedicación; olvida su saber militar, su demostrada maestría táctica y logística. «En nada apreció las Juntas Militares de Defensa (p. 17). Eso fue mucho después, cuando atribuyó a las Juntas la responsabilidad por el Desastre; pero en 1917 se sumó a ellas y en su hoja de servicios hay varios datos sobre sus actividades en las Juntas. Recibió —prosigue empecinado en el error— la Dictadura de Primo de Rivera con frialdad». Los sentimientos de Franco ante Primo de Rivera fueron encontrados. Sintió la satisfacción de todo el Ejército ante la llegada de Hércules que venía a limpiar los establos de Augías, la frase es de Ortega, lo

digo por si acaso; y a la vez aprensión por si el capitán general de Barcelona decidía poner en práctica sus propósitos abandonistas. Cuando comprobó que era así, sus sentimientos se trocaron en hostilidad abierta, como demostró en el incidente de Ben-Tieb. Esa misma noche se reconcilió con Primo de Rivera, y cooperó en la dificilísima retirada de Xauen; luego ensayó en El Ksar Seghir la maniobra de Alhucemas y la ejecutó en vanguardia con suma brillantez. Terminó muy identificado con don Miguel que le encargó la creación de la Academia General. Tusell sitúa a Franco en el tribunal militar por los sucesos de Jaca, pero omite un dato esencial; se trataba del *segundo* tribunal, que no dictó sentencias de muerte (p. 18). Hace mal Tusell en reprochar a Franco que escribiera «caterba» cuando él mismo, insigne catedrático de Universidad, deja escapar un horrendo *salibazo*, según vimos, y precisamente en su libro sobre la Dictadura. Es absolutamente falso que Franco «fuera un hombre de cultura más que escasa» (p. 18). Tusell, nunca dueño de su lenguaje, quiere decir «menos que escasa», pero dice «más» y por supuesto que es mucho más; la cultura de Franco era netamente superior a la del militar medio de su tiempo, que por cierto no era nada despreciable. Lea Tusell la antología de Franco como escritor militar que publicó el Servicio Histórico del Ejército y se convencerá.

El desconocimiento de Tusell sobre la realidad militar de la República resulta, a veces, pavoroso. Dice que a Franco «le rebajaron de general de división» (p. 19), lo cual no sucedió jamás, como reconoce expresamente Azaña en sus Memorias; y hemos visto aquí. Le mantuvieron como general de brigada, con bajada de puestos en la escalilla; y el propio Azaña le ascendió en 1933 a la comandancia general de Baleares, en puesto de superior categoría que ya predeterminaba un ascenso, don Diego Hidalgo se lo confirió en 1934. Franco no fue nunca en 1934 «jefe del Estado Mayor» (p. 19) durante la Revolución de Asturias; fue designado para ello por Gil Robles en mayo del año siguiente, 1935. En 1934 fue asesor del ministro de la Guerra.

Sobre la participación de Franco en la conspiración de 1936, Tusell no tiene la menor idea (p. 21). Sus resbalones en este capítulo son especialmente grotescos. «Ninguno de los máximos dirigentes del partido católico —dice— jugó un papel de importancia en la conjura» (p. 21). ¿Por qué Gil Robles se glorió de haber preparado «el pueblo del Movimiento» y confesó los detalles de su participación en esa conjura ante la Causa General en 1942? Para Tusell, los tradicionalistas empezaron a preparar con algunos militares una sublevación armada (p. 23). Se retrasa Tusell cinco años; empezaron en 1931. Cree Tusell que la bandera bicolor era, en 1936, «algo sin verdadera

trascendencia» (p. 24); no lo pensaba yo así cuando en octubre de ese año, recién evadido de la zona roja, vi ondear a lo lejos la bandera de España en el puesto fronterizo de Vera de Bidasoa, esas cosas hay que vivirlas para saber lo que son.

Ni aquí ni en otros libros habla Tusell de los desmanes del Frente Popular; cosa normal en el que piensa que las amenazas de Largo Caballero eran sólo verbales. En la p. 29 cede Tusell a su tentación de hacer trampas, un recurso que forma parte de su «método»; y atribuye a «datos de archivo» afirmaciones que están archipublicadas.

Ya se adentra Tusell en la guerra civil y va desgranando desmañadamente sus terribles carencias. No fueron los líderes monárquicos quienes se inclinaron porque la Junta de Defensa se constituyese como un órgano exclusivamente militar (p. 35). Tusell debería tener especial cuidado con la figura del general Queipo de Llano, por la originalidad de su figura histórica… y porque es el abuelo de su mujer. Pues no. En la p. 41 incurre, al hablar de Queipo, en una donosa contradicción. «No tenía —dice primero—, en realidad, una biografía que permitiese describirle en absoluto como un militar republicano». Unas líneas más abajo todo cambia: «Conspirador en favor de la República, estuvo convertido durante los primeros meses de ésta en todo un símbolo de militar republicano». Por tal se le tenía, sin duda, en 1936; pero se resintió mucho contra el Frente Popular por la injusta destitución de su consuegro don Niceto Alcalá Zamora después de las elecciones de febrero.

Me extraña mucho que Tusell, al hablar del general Queipo como «virrey» de Andalucía, no cite el testimonio fundamental de don Julio de Ramón Laca, *Bajo la férula de Queipo, cómo fue gobernada Andalucía*, que es un gran arsenal de datos y una estupenda defensa de Queipo como administrador y gobernante. Me parece exagerado y extemporáneo calificar como *proto-Estado carlista* (p. 46) a la organización del carlismo, que siempre estuvo sometida a la autoridad de la Junta de Defensa y luego de Franco. El capítulo sobre el acceso de Franco a la jefatura del Estado es lamentable de cabo a rabo. No se puede calificar a Franco como «de nula experiencia política» (p. 51) y guiado por la timidez en sus movimientos políticos. Sus exigencias a Portela y a Alcalá Zamora para la declaración del estado de guerra ante la victoria del Frente Popular no son actos de timidez; su espera hasta sumarse abiertamente al alzamiento no es timidez sino prudencia. La experiencia de Franco en 1934-1935 fue intensamente política, en la lucha contra la revolución de Asturias y en el Estado Mayor central. El

propio Tusell lo reconoce, contradictoriamente, cuando unos párrafos más abajo elogia la «envidiable capacidad para medir el tiempo político» por parte de Franco, al vincular su acceso al poder con la liberación del Alcázar de Toledo (p. 51).

Para fijar históricamente la elección de Franco, Tusell utiliza a fondo mi investigación publicada antes de la muerte de Franco, pero no se digna reconocerlo (p. 52). Afirma erróneamente que el general Kindelán no pertenecía a fines de septiembre a la Junta de Defensa, pero había sido designado para ella a la vez que el jefe de las fuerzas navales (p. 53). Dice que la Junta de Burgos quedó encargada de hacer pública la elección de Franco, «pero tardó en hacerlo» (p. 53). Tardó sólo un día; la elección se verificó finalmente el 28 de septiembre y el decreto de nombramiento lleva fecha del 29. No es verdad que la decisión final sobre el otorgamiento de todos los poderes a Franco quedase en suspenso tras la reunión en el campo de San Fernando; se tomó durante las reuniones parciales tras el almuerzo, donde según un testigo «brilló el oro más puro del patriotismo». Todo quedó acordado en Salamanca y Cabanellas no tomó después la decisión en Burgos. Tusell se asombra de lo «poco que había avanzado en el terreno de la política» Franco, cuando se dirigió a los españoles en la tarde del 1 de octubre por Radio Castilla (p. 55). Me temo que Tusell no ha leído el discurso, que es trascendental; y que, por ejemplo, interesó mucho a Miguel de Unamuno. En él se contenían dos rasgos fundamentales de que Tusell no dice una palabra; buenas relaciones del Estado y la Iglesia, pero delimitación estricta de cada campo; y esfuerzo total del Estado en servicio de las clases medias, que es la clave de todo el impulso personal de Franco a la política de su régimen que nacía entonces. No se puede comprender ni reflejar peor la importantísima sucesión de hechos históricos que tuvieron lugar entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre de 1936. Ya que tomó los datos de mi biografía de Franco, al menos debió leerla bien.

No existió la menor duplicidad política entre la Junta Técnica del Estado y la decisión suprema de Franco, como malinterpreta Tusell en la p. 58; sino una subordinación completa de la institución al jefe. El análisis que nos propone Tusell sobre la Junta Técnica del Estado es incompleto y hostil (p. 64). No imagino qué mosca le ha picado al historiador cuando, a propósito de 1936, nos saca el ejemplo, que además desconoce, del general Pinochet (p. 65). Resulta absurdo prestar credibilidad a ciertos informes alemanes que sólo expresan frustraciones personales de sus autores, para corroborar presuntas divergencias políticas en la zona nacional a fines de 1936,

divergencias que Tusell cree más agudas que las de la zona republicana; repase, por favor, el párrafo famoso de Azaña en *La Velada* sobre la solidaridad nacional y el análisis de Rojo sobre la desunión de su zona frente a la unidad de la zona enemiga (p. 69). Esta apreciación de Tusell no es una simple equivocación, sino un puro dislate. El Problema político entre Franco y los carlistas, que Tusell cree «gravísimo» a fines de 1936 (p. 70), lo despachó el general Dávila de un plumazo y no causó el menor revuelo en la zona. No es cierto que la consecuencia fuese «la división de los tradicionalistas» y la hostilidad permanente de Fal Conde después de su extrañamiento. Fal Conde regresó pronto de Portugal y luego participó de forma distinguida en las actividades políticas de la zona nacional.

El tratamiento que ofrece Tusell sobre la unificación de los partidos de la zona nacional en la primavera de 1937 resulta penoso; y muy alejado de un empeño biográfico sobre Franco, cuya trayectoria se sigue de forma difuminada e imprecisa. Presentar «el forcejeo final por conseguir una victoria en Madrid» prolongándose hasta 1938 carece de sentido; el forcejeo acabó un año antes, cuando Franco, tras las tablas en el Jarama y en Guadalajara, decidió en marzo de 1937 terminar con el frente Norte (p. 81). En sus breves y entrecortados capítulos, Tusell debería haber respetado por lo menos las grandes etapas cronológicas. La valoración de Gil Robles en la p. 83 demuestra la ignorancia de Tusell sobre Gil Robles, cuyas intensas actividades en Portugal a favor de la causa de Franco Tusell ignora, pero yo he corroborado a través de la documentación oficial portuguesa en mi libro *Don Juan de Borbón, toda la verdad* de 1997.

El dictamen de Tusell sobre las relaciones entre Franco y Alfonso XIII es aberrante. En el libro que acabo de citar he documentado la verdad de esa relación; he demostrado que el Rey exiliado llamaba a Franco «el jefe», se ponía expresamente a sus órdenes; y cruzó con él numerosos mensajes, no uno solo como nos dice Tusell, pésimamente informado (p. 88). Se atreve incluso a aventurar que don Alfonso «tardó en identificarse por completo con la causa de los sublevados» (p. 28). Por el contrario, lo hizo inmediatamente; cuando Tusell lea el espléndido testimonio de Juan Ignacio Luca de Tena en *Mis amigos muertos*, comprobará que, ante el fracaso de los emisarios monárquicos a Italia en julio de 1936 para conseguir de Mussolini el vital envío de aviones Savoia de transporte que Franco necesitaba con urgencia para ampliar su puente aéreo y trasladar a Sevilla las unidades del Ejército de África, intervino directamente don Alfonso y los aviones italianos estaban en el Protectorado español de Marruecos antes de terminar el mes. Se inventa

Tusell un juicio peyorativo de Alfonso XIII al principio de la guerra civil, que según él mantuvo hasta el final, muy peyorativo sobre las virtudes políticas de Franco y la firmeza de su régimen (ibíd.). ¿Cómo es posible que Tusell desconozca los documentos más elementales sobre la intensa relación Franco-Alfonso XIII? ¿Cómo no ha leído la carta manuscrita que don Alfonso dirige a Franco el 9 de abril de 1939 en que le reitera su felicitación por la victoria, le asegura que «conociendo sus dotes personales nunca dudé acerca del triunfo definitivo» y añade: «Desde luego le repito que estoy a sus órdenes como siempre para cooperar en lo que de mí dependa a esa difícil tarea (de la paz) seguro de que triunfará…»? ¿Cómo escapa a Tusell que Alfonso XIII pidiera la Laureada para Franco como gran maestre que era de las Órdenes Militares[47]? Al informarnos de la llegada de Serrano Suñer a la zona nacional, Tusell nos explica que «se instaló junto a Franco en el palacio burgalés de la Isla» (p. 95); por lo visto ignora que Serrano llegó a Salamanca apenas terminado el invierno de 1936-37, cuando Franco residía no en Burgos sino en Salamanca; y su cuñado se instaló en el palacio del obispo, que Franco utilizaba como residencia y como cuartel general.

Al referirse al mes de febrero de 1937, Tusell titula su capítulo correspondiente «Franco empieza a ejercer el poder político» con notorio retraso; porque ese poder político lo empezó a ejercer el mismo día 1 de octubre de 1936, fecha en la que firma sus dos primeras leyes e imparte a toda la zona nacional sus primeras directrices políticas.

En sus tediosos capítulos sobre la unificación política de la zona nacional que se consumó a mediados de abril de 1937, Tusell sólo menciona de pasada el objetivo supremo de Franco; eliminar toda efervescencia y no digamos toda oposición política que pudiera comprometer las operaciones militares, que desde febrero a junio de 1937 atravesaban por un momento delicadísimo: entre las grandes victorias en Málaga y en Bilbao, las sangrientas tablas en el Jarama, la victoria defensiva de la República en Guadalajara y la primera fase de la campaña del Norte, dirigida contra el importante bastión enemigo de Vizcaya. Franco dedicaba casi todo su interés y su tiempo a la coordinación y preparación de las operaciones militares; y se molestaba cada día más por las intrigas y maniobras políticas de su zona, sobre las que poseía una completa información. Tusell atribuye efectos importantes para la unificación a la llegada del embajador italiano Cantalupo y la estancia del jerarca italiano Farinacci. Ninguno de los dos italianos ejerció la menor influencia, aunque recibieran buenas palabras. Era mucho más decisivo el consejo continuo que Franco recibía de su cuñado Serrano Suñer, con quien conversaba sobre la

articulación del nuevo Estado en torno al sistema político de los Reyes Católicos y los grandes Austrias; un Estado en el que el peligro fascista quedaba muy atemperado por la ideología católica que Franco y Serrano compartían. Pero es muy significativo el carácter provisional que Franco atribuyó al partido único, FET Y DE LAS JONS, que surgió de la unificación. Porque en realidad Franco, consciente de la unificación real y militarizada que advertía en sus continuas visitas a los frentes de combate, quiso infundir el mismo espíritu a la retaguardia, donde el sentimiento de unidad operaba en torno a su persona. Procuró convencer a los líderes políticos sobre la necesidad de unificar a todos los grupos sobre las dos líneas maestras de las milicias tradicionalistas y falangistas. Lo consiguió en casi todos los casos y fácilmente; pero cuando advirtió que por las riñas de Falange en Salamanca, donde estaba el Cuartel General, podía correr peligro el esfuerzo de guerra, descabezó a las facciones y encerró en la cárcel a los personajes principales de las disidencias. Franco sabía que todo el pueblo estaba con él y terminó fácilmente con los escasos levantiscos sin utilizar al Ejército, le bastó con la Guardia Civil. Ésta es la clave de todo, que se le escapa por completo a Tusell empeñado en seguir con detalle los movimientos y pequeñas intrigas de los dirigentes políticos. Los pequeños encrespamientos no alcanzaron en la zona la menor repercusión. Compárese solución tan fácil y tajante con los gravísimos sucesos de Barcelona durante la siguiente primera semana de mayo, que provocaron la crisis del gobierno Largo Caballero y la elevación del procomunista doctor Negrín. La diferencia entre los dos procesos explica nada menos que el fundamento de la victoria y la derrota, como intuyó con lucidez el general Rojo en *Alerta los pueblos*.

«Ese tipo de cuestiones —dice Tusell, refiriéndose a las de política internacional— no le habían preocupado (a Franco) en absoluto» (p. 175). Gratuita afirmación; precisamente la razón por la que Mola reconoció la primacía de Franco para encabezar la zona nacional era la capacidad de Franco para establecer una red de relaciones internacionales, en las que había profundizado durante su etapa de tres años al frente de la Academia General Militar en Zaragoza. Curiosamente, Tusell reconoce poco más abajo (p. 178) que de todos los generales «Franco era el que estaba en mejores condiciones para establecer esos contactos (exteriores)». Es curiosísimo que Tusell describa a Franco en los primeros días de la guerra como quien «no estaba apremiado por una presión bélica adversaria» (p. 178). Franco tenía a la poderosa escuadra republicana fondeada en Tánger y patrullando por el Estrecho, sin fuerza naval propia que oponerle; ¿no ejercía esa Escuadra

«presión bélica alguna»? No tenía, acaba de decirnos, capacidad de relaciones exteriores; pero una página más adelante afirma que «disponía de diplomáticos de otros países con posibilidad de convertirse en aliados en su proximidad inmediata» (p. 178). Éste es el principal problema de Tusell: no es dueño de sus palabras ni de sus ideas, se contradice a vuelta de página, a vuelta de párrafo. «Sangróniz, al que Franco pudo conocer con ocasión de su paso por Sevilla» (p. 180). Me molestan especialmente estos graves errores de Tusell expresados con tono pontifical. Franco estaba en Sevilla el 8 de agosto de 1936 hasta que se marchó a Cáceres; pero había conocido a Sangróniz, enviado de Mola, al menos el 16 de julio en Canarias, cuando el diplomático vino a informarle sobre los planes definitivos de Mola; lo puede ver Tusell en cualquier biografía de Franco, por ejemplo, en la de Brian Crozier que tengo delante en este momento. Tusell cae en el error, muy corriente, de considerar a Teruel como la única capital de provincia que cambió de manos a favor de la República en la guerra civil (p. 198). A todo el mundo se le olvida Albacete, además de Guadalajara y Toledo. El habitual defecto metodológico de Tusell —la evaporación de los contextos— se nota agudamente en los capítulos dedicados a la política exterior de Franco; expone la declaración de neutralidad española en septiembre de 1938 y la consiguiente retracción de las ayudas militares germano-italianas sin la menor referencia a la que para Franco era entonces realidad suprema y problema principal, la batalla del Ebro.

Esta presunta biografía de Franco —que es fragmentaria y truncada, sólo se refiere a la guerra civil— está, como suele ser normal en Tusell, pésimamente construida. No van avanzando los contextos al ritmo de la Historia, sino que se presenta la Historia en rodajas, lo que hace imposible la articulación de los contextos. Después de la cabalgada por la política exterior se centra Tusell en el análisis del primer gobierno formal de Franco, formado a fines de enero de 1938. Empieza con otra de sus discordancias habituales: después de informarnos de que Serrano y Jordana negociaron durante el año 1937 el gobierno entre sí y con Franco (p. 225), nos dice tranquilamente que Serrano no conocía a Jordana (ibíd.).

El comentario de Tusell a los ministros del gobierno de 1938 es tan impreciso y aberrante que me llevaría páginas puntualizarle. Baste una observación; cree el osado historiador que Juan Antonio Suanzes, creador del INI, adolecía de «simplismo militar» (p. 232), el caso es pontificar, aunque no se tenga la menor idea sobre una persona. En ese simplismo «anidó fácilmente la tendencia a la autarquía cuartelera que caracterizó al franquismo

inicial y de forma singular, durante toda su vida, a la persona que dio su nombre al régimen» (p. 233). ¿Qué es la autarquía cuartelera? ¿El autoabastecimiento de los acantonamientos militares? La autarquía nunca fue un ideal de Franco, que desde la guerra civil procuró la comunicación económica con el máximo número de países; la autarquía fue una necesidad impuesta a España por la dificultad de obtener suministros durante la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento. Una vez más se estrella Tusell contra la auténtica historia económica del régimen. Es curioso que para enfrentar históricamente a Queipo con Franco, Tusell mencione «la hostilidad de Franco a realizar cualquier operación en el frente sur» (p. 241) pero tal motivo sólo demuestra la ignorancia de Tusell sobre la historia militar de la guerra; había cedido a Queipo de Llano, desde agosto de 1936, sus mejores unidades africanas para asegurar el enlace de las capitales rebeldes en Andalucía y para ayudarle en la difícil rectificación del complicado frente; le había entregado por completo el mando en la importantísima operación sobre Málaga en enero-febrero de 1937; desde entonces no programó grandes maniobras en el Sur porque desde el punto de vista estratégico no eran tan necesarias como las que se realizaron en el Norte y en el Este. Me asombra que Tusell se sume a la opinión de un enemigo de Serrano Suñer cuando afirma que el Cuñadísimo «no se sabía rodear de colaboradores de valía» (p. 247); contó, por el contrario, con el mejor equipo intelectual y político de toda la España nacional, entre el que destacó nada menos que a Laín, Tovar y Ridruejo, y así hasta casi dos docenas. Y de que Serrano, no era «un mozo marchoso como Godoy» no tiene la culpa Serrano sino quienes, por lo visto, no sabían de él una palabra. El retrato político y personal sobre Serrano que traza Tusell es incompleto y lamentable; de verdad ése no era Serrano Suñer.

Tusell, poseído por la ambición política personal, considera a la Historia como una plataforma para elevarse en la política. Siempre se le ha visto el plumero y su fracaso en esta pretensión ha sido, hasta el momento, continuo y notorio, pese a que pertenece a la desagradable especie de personas semipúblicas que «pide» los cargos; al formarse el primer gobierno Aznar sus «peticiones» alcanzaron la forma de torrente que cayó en el vacío. Por eso al hacer Historia se pierde en los vericuetos de la política y se olvida del pueblo; la realidad popular de la España nacional se le escapa, o mejor, ni llega a abordarla; para nada tiene en cuenta el factor moral, el espíritu de la zona que otros historiadores tuvimos la suerte de vivir en profundidad y luego hemos procurado transmitir. Ante ésa lejanía culpable, Tusell se permite soltar de vez en cuando dislates insignes como cuando afirma que en algunos

momentos difíciles de la guerra civil, por ejemplo, al detenerse las operaciones sobre Valencia, «un amplio porcentaje de la población de la zona nacional se hallaba en lo que podría llamarse situación de disidencia» (p. 250). ¡Qué enormidad! Acostumbrada a las victorias continuas, la población de la zona nacional se resentía, evidentemente, cuando la marcha de la guerra encontraba dificultades como la citada. Pero en ningún momento cundía la desmoralización, fuera de los eternos agoreros que nunca faltan en la más noble de las causas. Tusell se deja llevar de las arbitrarias observaciones de los diplomáticos extranjeros que en sus mensajes deformaban la realidad según lo que deseaban oír los destinatarios de sus mensajes. La ofensiva contra Valencia, después de éxitos tan notables como la conquista de Castellón, se detuvo, primero, por la presencia del general Miaja, maestro en batallas defensivas; segundo y principal, por el planteamiento de la batalla del Ebro según los planes del general Vicente Rojo. Pero no cundió la desmoralización, ni menos el pánico, en la zona nacional, después del hundimiento decisivo de los frentes republicanos de Aragón en marzo-abril de 1938. Todos sabíamos que se trataba de un retraso, pero que la victoria era indefectible. La opinión del famoso estratega Tusell, acerca de que la parsimonia de Franco le retrasó su victoria en el Ebro, ignora por completo la delicadísima situación internacional que hubiera planteado la prosecución del avance del general Yagüe desde Lérida sobre la frontera pirenaica de Cataluña. Hoy sabemos (Tusell no lo sabe) que ese condicionamiento internacional fue el que impidió la gran maniobra de Franco, quien además quiso destruir al Ejército enemigo encerrado en la gran bolsa del recodo del Ebro. Y al final esa idea se impuso y Franco pudo abordar con plena seguridad la campaña de Cataluña. Dice el «biógrafo» de Franco que el Caudillo escribió «algunas disposiciones» referentes a las operaciones y a la administración militar durante la guerra. Lo que escribió fueron centenares de esas disposiciones, que seguramente rebasan con mucho el millar y se conservan hoy donde Tusell debería saber que están.

Sobre el Fuero del Trabajo, Tusell se obsesiona con la mimesis fascista, que es accidental, y prescinde por completo de lo esencial, que es considerar al documento como el arranque y el impulso de la política populista de Franco, que es una de las características más sinceras, beneficiosas e importantes de su régimen. La consideración de la Ley de Prensa de 1938 es muy superficial y revela por parte de Tusell el desconocimiento de lo que realmente había sido la prensa de izquierdas y la prensa anticlerical a lo largo de los siglos XIX y XX. No es que yo defienda la Ley de Prensa a la que desde

mucho antes de la muerte de Franco he calificado de «brutal», pero hay que situarla en su contexto real —sobre todo en la relación y la antítesis previa de la Prensa y el Ejército— para comprender los motivos de su formulación. Algo semejante habría que decir sobre el siguiente epígrafe de Tusell, «la cuestión religiosa». Identifica absurdamente la religión del pueblo español con «la España tradicional, apegada a usos sociales heredados del pasado» (p. 268). Tusell el Progresista, apegado al futuro, con la consecuencia de que no sigue el método, sino la moda de la Historia y además lo hace muy mal. Atribuye la decadencia del catolicismo español a la decadencia «intelectual y cultural» de la religión (p. 268), siempre se llena la boca de grandes palabras genéricas cuya concreción desconoce.

El epígrafe sobre la cuestión religiosa es uno de los más cicateros e insuficientes de todo el libro. Se le escapa a Tusell por completo el espíritu de la Cruzada, la seguridad en el triunfo, el factor moral que inicialmente descansaba en bases materiales y militares muy reducidas. Seducido por la retorcida investigación de Marquina Barrio, Tusell afecta ignorar el apoyo continuo y decisivo de la Iglesia a la causa nacional —la alocución de Pío XI en Castel Gandolfo a los peregrinos españoles en septiembre de 1936, la bendición entusiasta de Pío XII a la España nacional y a Franco por la Victoria, la encíclica de su predecesor contra el comunismo en España en plena primavera incierta de 1937, la designación temprana del cardenal Goma como representante oficioso, pero efectivo, de la Santa Sede en la España nacional, el respaldo de Roma a la Carta Colectiva del Episcopado (que fue idea de Franco y de Roma, independientemente), la devolución de sus bienes a la Iglesia y a la Compañía de Jesús… Frente a estas realidades inmensas y archidemostradas, sobre las que Tusell no dice una palabra, nos abruma en cambio con pequeñeces de los pasillos vaticanos, con revuelos diplomáticos de pequeño poder, con imprecisas reticencias de política menor y se extasía con ese conjunto de intrascendencias. Nunca ha tenido Tusell sentido de la medida y del equilibrio pero en este tema vital supera sus propias marcas. Parece mentira que sea un historiador católico.

Por minimizar a Pedro Sainz Rodríguez ignora que fue uno de los grandes ministros de Educación y de Cultura en todo el siglo XX, autor de un Plan de bachillerato, el Plan 38 —que yo tuve la suerte de cursar desde su tercer año —. Sobre la introducción del griego y el latín en ese plan sólo comenta que tal idea tiene resabios fascistas…, pero nada dice, porque no lo sabe, que ese sentido humanístico florecía también en Italia siglos antes del fascismo y en naciones democráticas como Francia e Inglaterra.

Tusell dedica su epígrafe siguiente a las «víctimas de la unificación» que concreta en los católicos y en los monárquicos (p. 279). Es un historiador elitista, a quien no interesa el pueblo. Las víctimas fueron las camarillas de la CEDA y de Renovación Española, o mejor algunos miembros de esas camarillas, no la inmensa mayoría de los votantes a quienes Gil Robles definiría en 1942 y 1969 como «el pueblo del Movimiento». Es falso que entre las camarillas, y mucho menos en el pueblo, se formasen dos «alas», una colaboracionista y otra antifranquista. Eso sucedería mucho después, de forma incompleta y a partir de 1945. No cabe imaginar un «ala antifranquista» en una organización nacional de las que contribuyeron a la guerra civil. Tusell está, en este aspecto, equivocado, retorcido, alienado. Es falso que Gil Robles abandonase la colaboración con Franco en medio de la guerra civil. En 1942 su testimonio ante la Causa General le presenta todavía como adicto. Y se publicó luego en *ABC*.

Todo el mundo, según Tusell, resultó víctima de la unificación; también los tradicionalistas y los falangistas (p. 288). Allí, por lo visto, acabó hasta el apuntador. ¿Por qué no leerá Tusell a Ridruejo en *Escrito en España* que es de 1962, cuando el autor había caído ya en la oposición abierta contra el régimen? ¿Por qué no pide el vídeo del programa que Luis Herrero dirigió en TVE-1 sobre el franquismo en noviembre de 1997 y repasa el dictamen de un antifranquista, Antonio García-Trevijano, sobre los dos tercios largos de españoles (incluidos los que habían vivido en zona roja) que estuvieron incondicionalmente con Franco durante décadas? En la zona nacional no eran dos tercios, sino los tres, incluidos luego los previsibles simpatizantes de la zona enemiga que cedían a lo que Ridruejo llamaba «adhesión masiva a las causas triunfantes».

Al hablar del Consejo Nacional, Tusell omite la principal función que para Franco desempeñaba ese organismo: destacar a algunas viejas glorias y a algunas jóvenes promesas del régimen y utilizar al Consejo, por tanto, como respaldo para su política y como vivero de altos cargos para futuras etapas. Tusell ha tenido la suerte de contar con las memorias del conde de Rodezno, un gran tradicionalista inteligente que veía, durante la guerra civil, todo desde la barrera e interpretaba los sucesos con distanciamiento y una buena dosis de sentido del humor. Tusell carece por completo de sentido del humor y me temo que interpreta muchas veces a Rodezno como si el conde hablase con toda seriedad. Rodezno, por ejemplo, aborrecía cordialmente a Serrano Suñer y casi todas las referencias que sobre él nos comunica Serrano Suñer se refieren a cominerías intrascendentes. Una visión de los consejos de ministros

del primer gobierno fundada sobre las chorradas de Rodezno e interpretada por el desajuste crónico de Tusell difícilmente explica que aquél fuese en realidad el Gobierno de la Victoria; si esa imagen de sus componentes fuese real, la Victoria no hubiera llegado nunca. El motivo del cese anticipado de Sainz Rodríguez no fue el que sugiere Tusell ni de lejos. Conozco de forma directa las circunstancias de ese cese que nada tuvo que ver con conspiraciones, sino con prostitutas que evolucionaban en torno al orondo ministro ante la mirada casual e incrédula de doña Carmen Polo de Franco. Cuando don Pedro Sainz Rodríguez supo que yo lo sabía se quedó anonadado.

«La Monarquía, más lejana» reza el título del siguiente epígrafe de Tusell. (p. 317). Tampoco es verdad; a fines de 1938 la Monarquía no estaba más lejana, sino exactamente igual de lejana. Tampoco es verdad que la monarquía estuviera, de una u otra forma, en el horizonte político de casi todos los dirigentes políticos del régimen. En el ideal utópico, puede. Pero en el tramo final de la guerra civil el único horizonte político de esos dirigentes era la Victoria. A la mayoría de los falangistas, contra lo que imagina Tusell, les repugnaba la simple posibilidad de la Monarquía. Convendría a Tusell leer las importantes Memorias del general Carlos Martínez de Campos *Ayer* para enterarse de la auténtica dimensión del falso problema monárquico en la fase final de la guerra civil.

Es absolutamente falso que los colegas militares de Franco pensaran, al elevarle al poder supremo, que este poder se circunscribiese al período de la guerra (p. 327). Esta idea de Tusell demuestra su desconocimiento de cómo se gestó ese poder supremo y de cuáles fueron las condiciones formales de Franco, que nunca lo pidió, si se le ofrecía. Las insuficiencias filológicas de Tusell le llevan a afirmar que fueron hechos ajenos —la llegada de Serrano Suñer y su creciente influencia— «los que definitivamente *autoconvencieron* a Franco de su papel providencial en los destinos de España» (p. 328). Una influencia extema nunca autoconvence, simplemente convence; y Franco estaba ya *autoconvencido* —ahora sí— de ese papel cuando expresó claramente, entre el 12 y el 28 de septiembre de 1936, a quienes acabarían por elegirle, de que o recibía todo el poder militar y político —que él no había reclamado— sin límite de intensidad ni de tiempo o no aceptaría una parte de ese poder. Ésa fue la clave de la actitud de Franco ante la elección y la clave de la elección, aunque Tusell lo ignore. Tusell se contradice; afirma en la misma página que Franco no fue nunca un fascista («estuvo siempre muy lejos») y luego relativiza el *siempre* al revelarnos que al principio fue un fascista (p. 328). El insigne filólogo posee un sentido muy peculiar de la

interpretación del sustantivo *colofón*; para él los meses de abril a septiembre de 1939, que ya son posteriores a la guerra civil, constituyen el colofón del conflicto (p. 329). Y sin embargo no dice una palabra de los meses que corren entre enero y abril de 1939, que forman el tramo final de la guerra civil, sobre el que Tusell no habla porque nada sabe de aquellos meses esenciales que he estudiado día por día en mi libro *1939, agonía y victoria*, ampliado en 1999 como *La Victoria y el caos*. ¿Cómo es posible tanta desidia? Luego trata Tusell de introducir unas consideraciones extemporáneas sobre la Ley Orgánica del Estado de 1967, eso sí que es un colofón. ¿Qué tendrá que ver el epígrafe siguiente, *Italia como ejemplo*, en una consideración sobre 1939, cuando no caben dos ejemplos tan dispares como los que ofrecieron entonces Mussolini y Franco, como ha reconocido recientemente, entre elogios a Franco, el presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro?

Tusell se obsesiona con encontrar «motivos de conflicto interno» en la «España vencedora», pero no parece capaz de detectar que esos conflictos fueron siempre muy minoritarios y afectaban a resentimientos personales o a camarillas poco significativas mientras la gran masa de los españoles, incluso muchísimos que habían sido partidarios del bando del Frente Popular, mantenían su adhesión a Franco incluso en momentos difíciles de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Franco, como dijo Antonio García Trevijano en el citado debate sobre el franquismo, dirigido por Luis Herrero en noviembre de 1997, mantuvo esa adhesión, con deserciones inevitables pero minoritarias, hasta el final de su vida. Esa misma mayoría fue la que en 1976 votó Reforma contra Ruptura y respaldó a la que Manuel Fraga llamaba «mayoría natural» formada por la UCD y Alianza Popular.

Tusell establece una especie de cesura entre el modo de gobierno de Franco durante la guerra y el que adoptó al nombrar el gobierno de 1939 en el mes de agosto. Desde entonces «Franco se siente estadista» por creerse capaz de regenerar al conjunto de España que ya dependía de su poder. La cesura es absolutamente artificiosa; Franco gobernaba ya desde la guerra, sobre todo desde la caída del Norte, para la paz y no hay forma de encontrar —objetivamente— una inflexión en su mentalidad. Como siempre que se trata de Franco, Tusell es peyorativo y arbitrario; proyecta siempre la imagen de Franco que él se ha forjado, pero jamás ha sido capaz de comprender la verdadera mentalidad ni la verdadera intimidad de Franco; ni se ha molestado nunca en averiguar las razones de la adhesión que sintieron por Franco la gran mayoría de los españoles. Concluir que en 1939 Franco (o alguno de sus consejeros) intentaba «dar tratamiento penal a la mitad de la sociedad

española» (p. 378), es algo peor que una injusticia, es una estupidez; la acelerada reducción de los detenidos o presos por su actuación en la guerra es una prueba que Tusell, por lo visto, desconoce. Amigo de despreciar cuánto ignora, Tusell vierte sus carencias económicas a las que ya nos hemos referido en una opinión despectiva sobre la ignorancia de Franco en asuntos de economía. Me fío bastante más del lúcido dictamen de uno de los grandes economistas españoles del siglo XX, el profesor Velarde, cuando afirma que Franco tomó siempre la decisión económica adecuada. Había demostrado su capacidad para la administración económica en la organización y mando de la Legión y el capítulo de la dirección económica de Franco en la guerra civil es precisamente uno de los que ha dejado inéditos esta engañosa «biografía» de Tusell. Había leído muy diversos libros de asuntos económicos y sabía escuchar a los mejores expertos en economía de que pudo disponer, que siempre fueron relevantes. Si Tusell conociera la sección económica de la publicación reservada *Noticiero de España* lo comprendería de una vez.

Tusell titula su epílogo «El origen de la dictadura española» (p. 385). El trenzado de errores garrafales y malevolencias en que consiste este pretencioso epílogo daría más pábulo a la hilaridad que a la reflexión histórica. En el norte de África no había «colonias» españolas (p. 385); sólo plazas de soberanía y un protectorado al que sancionaban los acuerdos internacionales. Es cierto que la guerra civil española fue «sangrienta y cruel»; pero ¿es justo atribuir a Franco en exclusiva esa sangre y esa crueldad? Luego se mece Tusell en el futurible, grave defecto en un historiador que denota en él una irrefrenable tendencia al relato de ficción, para el que se siente, además, incapaz por su carencia casi total de dotes literarias. Y ¿cómo explica Tusell que de hecho, aunque no en teoría, Franco se fuera desprendiendo gradualmente de su poder hasta poner a España en el camino objetivo de la democracia? ¿Cómo se explica que, según el testimonio de su sucesor a título de Rey, Franco conociera perfectamente el proyecto democrático de don Juan Carlos a partir de los años sesenta y no le hiciera la menor advertencia sobre ello, e incluso le insinuase que «V. A. tendrá que gobernar de modo muy distinto que yo» al desaconsejarle que asistiera a los consejos de ministros? Vuelve a insinuar Tusell que el general en jefe de la guerra civil se transformó en dictador formal al término del conflicto. Como en todo lo esencial, Tusell se equivoca. Franco no cambió en su sentido del poder y del «mando» como él decía al llegar la paz. En 1939 era exactamente el mismo que en 1936.

He llegado al final de este leve comentario sobre un libro cuyas tesis fundamentales son falsedad en estado puro. Un libro que se quiere llamar «biografía», es decir, «escritura de una vida», cuando sólo se refiere a tres años mal arrancados del conjunto de esa vida. Un libro escrito desde el odio y la ignorancia, desde la frivolidad del resentimiento, desde un sentido atroz de la narrativa histórica.

Tusell abrumado por la II Guerra Mundial

A estas alturas de nuestro análisis sabemos ya que el método de Tusell consiste, básicamente, en hacerse con un conjunto documental facilitado por quienes no le conocen y luego revolotear por el contenido de ese archivo sin molestarse en encuadrar los documentos en su conjunto de circunstancias y en su contexto histórico. Cuando se ve obligado a integrar sus «hallazgos» en una unidad histórica coherente resbala hasta la inconsecuencia o, en su caso, el desatino. Carece por completo de capacidad para la visión general y la síntesis histórica, dentro de la cual sería hacerle un favor concederle que sólo se equivoca en lo fundamental; porque se equivoca también en muchas cuestiones secundarias.

En 1995 publicó, en la poco escarmentada editorial del grupo Planeta, Temas de hoy (cuyo director fue destituido por los fracasos debidos, en parte, a su insistencia en publicar al invendible), un tomaco titulado *Franco, España y la II Guerra Mundial*. Sabe poco de las tres cosas, pero es, ya lo he anticipado, el Atrevido y se lanza al mare mágnum del conflicto más vasto de la Historia sin la menor idea estratégica, sin el conocimiento suficiente de las crisis que condujeron al choque cósmico de 1939 y, muy especialmente, sin el debido conocimiento de las historias nacionales y las alianzas internacionales que degeneraron hasta ese fatal enfrentamiento, cuyo promotor principal fue Josif Stalin, un hombre clave que para Tusell es una simple etiqueta.

El profesor de la Universidad de Madrid, Sigfredo Hillers de Luque, especialista en varias ramas del Derecho Público y excelente conocedor de la historia contemporánea, redactó una extensa crítica sobre esta última maravilla de Tusell. La crítica permanece inédita y el autor me la ha comunicado generosamente. Voy a aprovecharla en este comentario. Hillers, que por raíces familiares conoce directamente las principales lenguas europeas, muestra ante todo que Tusell no sabe idiomas. Queda claro en las citas, pretenciosas y mendaces, de los documentos publicados oficiosamente sobre la guerra mundial por los gobiernos británico, francés, norteamericano y alemán. Así presenta como obras diferentes, bien separadas en la lista

bibliográfica, las Actas alemanas de política exterior y los famosos *Documents on German Foreign policy*, versión inglesa muy anterior del mismo elenco. Tusell no sabe alemán. No ha saludado la colección documental del Alto Mando de la Wehrmacht, publicada en siete tomos; no ha logrado, lo mismo que le sucedió en la guerra civil, ni redactar una cronología coherente de hechos fundamentales, sucesivos o simultáneos, de la Segunda Guerra Mundial. En unas pocas páginas salta de la invasión alemana contra Polonia a los desembarcos en Escandinavia (p. 48 s.). Testimonia Hillers que convivió con Tusell en los años setenta dentro de la Fundación de Investigación de las Cajas de Ahorros, cuando Tusell se dedicaba, con varios colaboradores, a estudiar los logros económicos del régimen de Franco. Al menos de entonces data la singular costumbre de Tusell, experto en el «trabajo en equipo». Esto puede explicar las incoherencias de sus libros, que a veces parecen escritos por personas diferentes. Yo no he observado nunca de cerca su forma científica de trabajar, pero también he recibido las indignadas confidencias de alguno de esos colaboradores.

Entre los fallos iniciales de Tusell en el tratamiento de los principios de la guerra mundial, Hillers señala los siguientes que he podido comprobar uno a uno:

a) Cuando Tusell publicó su libro se conocían ya los textos y las circunstancias del pacto germano-soviético concertado el 23 de agosto de 1939. Tusell ignora la génesis y estipulaciones de este documento trascendental, que arrojó a media Europa contra la otra media; que provocó la indignada hostilidad de la izquierda europea contra los comunistas, ahora oficialmente amigos de Hitler.

b) Tusell habla del inicio de las operaciones militares de la guerra mundial, pero no facilita la hora: Esa hora fue las 04.45 de la madrugada del 1 de septiembre, lo que equivale a invalidar la afirmación de Tusell sobre el esfuerzo desesperado del Papa para impedir el conflicto; tan importante iniciativa queda fuera de contexto. Dice que el Papa envió su mensaje «a todos los beligerantes», pero en ese momento sólo eran dos, Alemania y Polonia. Ignora Tusell el momento exacto en que Inglaterra y Francia entran en la guerra contra el Reich; y asegura que el mensaje de Franco por la paz se produce el 3 de septiembre, «cuando tenían lugar los primeros combates». Los primeros combates llevaban ya más de dos días en curso acelerado (p. 48). Tusell no menciona la orden de Stalin para que el Ejército Rojo invadiera Polonia, ni da importancia al reparto germano-soviético del territorio polaco, ni a los efectos de las cláusulas secretas del tratado de

agosto, ni a la primera oferta formal de paz de Hitler a Gran Bretaña y Francia.

En el capítulo sobre la caída del fascismo, Tusell comete errores y omisiones lamentables. Las relaciones entre Hitler y Mussolini las traza entre graves confusiones e incoherencias; parece fiarse de los exabruptos de Mussolini sin ofrecernos luego lo que realmente sucedió; que Mussolini se los tragaba. Nada dice —quizás nada sabe— sobre la arriesgada liberación de Mussolini en el Gran Sasso por el comando aéreo dirigido por Otto Skorzeny, que causó enorme impacto en todo el mundo. Nada sobre el imprudentísimo intento de don Juan de Borbón para intervenir personalmente en las actividades de la Resistencia italiana, donde estuvo a punto de ser capturado.

Al principio de su libro (y las que siguen, hasta nuevo aviso, son observaciones mías, no de Hillers), Tusell nos ofrece un delirante discurso del método, en el que equipara a la Historia como reconstrucción de los sucesos reales —lo que todos conocemos como Historia— con la Historia como conjetura de las alternativas que pudieron ocurrir de haberse dado circunstancias diferentes. Es decir, para Tusell la tarea del historiador no consiste sólo en la Historia de las realidades, sino la Historia de los futuribles. Me parece que esta posición basta para descalificar a Tusell como historiador. Y nos propone un ejemplo que parece de locos; se apoya en una presunta tesis de Pascal (Tusell nunca prueba sus citas) sobre la posibilidad de que la nariz de Cleopatra, de haber sido menos perfecta, hubiera cambiado la historia del mundo. Por lo pronto ni Tusell ni por lo visto Pascal saben que la imperfección calculada era una humanización pretendida del canon arquitectónico y escultórico en tiempos del helenismo; y aunque Tusell no lo recuerde, Cleopatra era más griega que egipcia. Pero sobre todo, la pretensión de hacer historia con futuribles está siempre descartada por el sentido común de los historiadores. Tusell es un adicto a la historia-ficción, así le sale la Historia de verdad.

Fiel a su aberrante método, Tusell se permite dar a Hitler lecciones de estrategia. «Si Hitler hubiera tenido una visión más adecuada de las circunstancias estratégicas… quizá habría concluido con su adversario británico estrangulando sus rutas de comunicación en Gibraltar». Se refiere naturalmente a las circunstancias de 1940, cuando los Estados Unidos no habían entrado aún en guerra, cuando la aviación británica estaba ganando la batalla de Inglaterra y cuando la Home Fleet estaba decidida a sacrificarse para evitar el cruce del Canal por una masa alemana de transporte desprotegido. Napoleón y Hitler desistieron de cruzar el Canal. Tusell, si

hubiera estado en la piel de Hitler, hubiera dado la orden. El mundo del siglo XX, que no ha ganado con él a un historiador estimable, hubiera podido contar con un nuevo Alejandro Magno.

Luego nos explica que, ¡en un libro dedicado a Franco, Hitler y la Segunda Guerra Mundial!, no va a estudiar a fondo la entrevista de Hendaya, que es el momento capital y decisivo para España en la Segunda Guerra Mundial (p. 12). La tesis fundamental de Tusell en este libro inane es que Hitler no sintió mucho interés en que España entrase en la guerra; que fue España quien lo deseó repetidas veces, hasta muy avanzado el conflicto, lo cual es una solemne falsedad. Cree Tusell que Franco habría cedido a una amenaza de Hitler en forma de ultimátum (p. 13). Por desgracia para Tusell, el ultimátum se produjo; y Franco replicó con una indignada negativa, lea Tusell mi biografía de Franco y lo comprobará documentalmente.

Sigfredo Hillers —vuelvo a su crítica— se indigna por las inepcias de Tusell en torno a la caída de Mussolini. Y se refiere a la actitud de España ante el holocausto judío. Pero voy a seguir mis propias notas sobre el caso, que desplegué en mi libro *El Tercer Templo: Qué es el sionismo en la historia de Israel*, publicado por Planeta. Tusell habla (sin concretar ni documentar, según su costumbre) de presencia judía en las brigadas internacionales, pero no dice una palabra sobre el apoyo de las comunidades judías de Tánger y Gibraltar a la causa de Franco en la guerra civil, con datos que podrá comprobar en mi citada biografía de Franco. Para todo su «estudio» de los judíos y España durante la guerra mundial Tusell no ofrece datos fundados ni fuentes seguras. Sólo opiniones generales. Reconoce Tusell que los representantes diplomáticos de España en Europa ayudaron a los judíos perseguidos; pero no dice que esos diplomáticos no movían un dedo sin expresa autorización de Franco. Tusell cede una vez más a su obsesión contra Franco cuando ignora los abrumadores testimonios favorables a Franco que comunicaron y publicaron importantes personalidades judías en los años siguientes a la guerra mundial: el testimonio de un relevante judío de Europa oriental, que hoy es ciudadano español, Max Mazin y el del gran rabino Chaim Lipschwitz, publicado en *Newsweek* (febrero de 1970). El propio periódico en que hoy Tusell nos tortura con su sintaxis y su autosuficiencia, *El País*, publicó el 2 de enero de 1989 un reportaje sobre la ayuda del régimen de Franco a los judíos perseguidos por el nazismo.

Hillers expone una amplia y fundada crítica a las insuficiencias de Tusell sobre las auténticas relaciones de Franco con Churchill. En casi todas sus disquisiciones sobre este y otros puntos, Tusell no parece un historiador

español; no demuestra un sentido patriótico que los historiadores, por operar sobre la carne viva de España, deberían dejar en claro continuamente. No le estoy pidiendo que enarbole la bandera en cada capítulo; pero sí que distinga entre su aborrecimiento contra Franco y la condición de Franco como jefe del Estado español. Este fallo de patriotismo que se detecta en numerosas páginas de Tusell se agranda en epígrafes especialmente delicados, como el que dedica a la División Azul. Después de las varias obras de Fernando Vadillo, la historia de la División 250 ofrece ya pocos enigmas; pero a Tusell no le interesa ni la motivación de los españoles en Rusia, ni su heroísmo, ni los ejemplos de valor que los soviéticos llegaron a admirar incluso en sus comunicaciones oficiales. Tusell habla de aquellos hombres, de aquellos muertos, como si fuese ajeno a ellos; se identifica mucho más con los españoles que entraron en París a bordo de los carros de la columna Leclerc en 1944 y por supuesto que aquellos valientes merecen también admiración y respeto; pero el comportamiento y el sacrificio de los millares de españoles que fueron a luchar sinceramente contra el comunismo desde 1941 merece, al menos, los mismos sentimientos por parte de un historiador español.

Cuando Tusell ha de enfrentarse con un problema trascendental y complejo, que bien puede considerarse como el punto clave de su libro, toma una decisión notable que no me extraña nada porque creo conocerle muy bien: se aparta del problema y lo trata con una larga cambiada. Es el caso de la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler en octubre de 1940.

Previamente, a mediados de junio de ese año, cuando los ejércitos alemanes han aniquilado a las fuerzas enemigas en los frentes de Holanda, Bélgica y Francia, cuando ya toda Europa continental parece a merced del dictador alemán, Franco le dirige una carta portada por el general Juan Vigón que para Tusell constituye el primer intento de entrar en la guerra por parte de España. Se nota que Tusell no ha leído la carta; porque Franco, asombrado, como todos los observadores mundiales, por la magnitud de la victoria alemana, lo que hace es sopesar las posibilidades de España en función de las copiosas necesidades de alimentación y material militar que necesitaría para ser útil en el conflicto. No hay en la carta, por eso Tusell no la transcribe entera, ni petición de entrar en guerra, ni decisión española en ese sentido. Hay, eso sí, la huella de una fuerte tentación para que España se tome la revancha deseada contra sus enemigos históricos (p. 85). Para demostrar su falta de prisa, Franco procura que entre la firma de su carta y la entrega de ella por Vigón a Hitler transcurran varias semanas.

Tusell demuestra no haber estudiado bien la entrevista de Serrano Suñer con Hitler, previa a la de Franco y el Führer en Hendaya. Pero vamos a ésta, que Tusell, tras decirnos que no iba a tratarla, no tiene más remedio que intentarlo, aunque lo hace con documentación precaria y desgana notoria. Por lo pronto Tusell desprecia como simples anécdotas algunos rasgos de ambiente que hemos podido detectar en la entrevista de Hendaya con plena seguridad; todo lo que él no descubre le parece irrelevante. Tusell desprecia los datos e interpretaciones del propio Franco sobre el contenido de la entrevista; y dictamina arbitrariamente sobre las versiones a considerar y las versiones a despreciar. El resultado final es que la entrevista de Hendaya no fue importante; es el único historiador que se atiene a esa interpretación peyorativa y falsa. Hendaya demuestra que Franco no quería entrar en la guerra y que Hitler sí lo quería, pero no estaba dispuesto a atender a las exigencias españolas, es lo que Franco esperaba.

En resolución, Tusell, tras decir que no va a tratar de Hendaya, intenta tratar a fondo ese problema. Como siempre, su pretensión y sus fallos en el análisis de fuentes le traicionan y le obligan a producir un texto insuficiente, indeciso, sobre un acontecimiento al que trató de minimizar.

Éstas son las consideraciones que, además de aprovechar la valiosa ayuda de Hillers, debo incluir en este libro sobre las ideas históricas de Tusell acerca de España en la Segunda Guerra Mundial. Nos resta, para completar el estudio de su trilogía sobre Franco, acometer la presentación de su tercera obra.

La dictadura de Franco: el gran refrito

Cuando Tusell empezaba a publicar sus primeras originalidades tenía siempre a mano un reproche para quienes intentábamos la síntesis documentada de altos vuelos sobre algunos períodos de la historia española, como la República y la guerra civil. «Eso no sirve. La única investigación válida es la *monográfica*». Por la boca muere el pez. Tusell realizó algunas que él creía investigaciones monográficas, por ejemplo, sobre determinadas elecciones de la República, sin detectar jamás el truco de esas elecciones, que en buena parte las invalidaba; pero muy pronto dio también el salto en el vacío de las grandes síntesis, que le hicieron bajar la guardia y al omitir el estudio de los datos concretos, le empujaron a la distorsión, la obviedad e incluso el esperpento. Muchos autores hemos intentado estudios de conjunto sobre la época de Franco; un período tan largo y tan difícil nos ha exigido, por lo general, trabajos extensos para ensamblar la inmensa cantidad de

información que debe considerarse con el fin de conseguir reconstrucciones coherentes. Tusell no. Siempre tan original, ha escogido precisamente la época de Franco para olvidarse de sus consejos «monográficos» y ofrecemos poco más que un folleto, a todas luces insuficiente y aun escuálido, provisto de información ramplona y además trucada; porque Tusell no pretende trazar la historia de ese difícil período de España, sino abominar, una vez más, de la figura del general Franco y descalificar a su régimen como *dictadura*. Ignora, sin embargo, que para muchos españoles de derechas y de signo moderado la dictadura anterior, encabezada por el general Primo de Rivera, era un período y un término de carácter positivo, al que, tal vez involuntariamente, se le rinde homenaje con frecuencia escribiendo Dictadura con mayúscula. La angustia del período siguiente, la «dictablanda» del general Berenguer y el caos posterior de la República y la guerra civil lograron que muchos españoles de orden recordasen con aprecio y aun con nostalgia la época de la primera Dictadura, como sinónimo de orden, problemas resueltos, trabajo y prosperidad.

El término *dictadura* aplicado al modo de gobernar e incluso a la época de Franco, fue muy utilizado (y aún sigue) por los enemigos de Franco, la oposición al régimen, con carácter peyorativo, como un insulto histórico y político. Quienes así lo utilizan no llamaban nunca dictadura a los gobiernos de Largo Caballero y el doctor Negrín durante la guerra civil, en los que no hubo vida parlamentaria ni elecciones y que objetivamente constituyeron dictaduras férreas y totalitarias, sobre todo la de don Juan Negrín. Tusell no sabe que cuando Franco fue recibido en Burgos el 1 de octubre de 1936 la prensa castellana le aclamó como Dictador insistentemente, por la buena imagen que mantenía la Dictadura de Primo de Rivera; e incluso se le aclamó por las calles con ese título que pronto dejó de usarse, supongo que por alguna indicación del Cuartel General. Pero conste que en la zona nacional no se consideró, ni mucho menos, como un insulto. Franco manifestó pronto que su título preferido era el de Caudillo.

El tercer movimiento de la trilogía dedicada a Franco por Tusell es, por tanto, *La dictadura de Franco*, con propósito insultante. Es el trabajo menos *monográfico* que imaginarse pueda y se ha publicado en tres versiones. La primera en 1988, con ese título, por la prestigiosa Alianza Editorial, aunque el librejo no ha contribuido demasiado a acrecentar ese prestigio. La segunda, bajo el titulo *La España de Franco*, al año siguiente, 1989, como número uno de la colección de divulgaciones baratas que ha publicado la revista *Historia 16*, que se distingue por su antifranquismo militante. La tercera apareció en

1996 como cabeza de la colección *grandes obras de Historia* lanzada y relanzada a los quioscos por Ediciones Altaya, relacionada entonces con el Grupo Anaya, al que pertenece Alianza Editorial; con un texto absolutamente igual al de la primera versión y el mismo título. Como la segunda versión es posterior cronológicamente a la primera, aunque sólo en un año, supongo que consistirá en algo más elaborado y lo tomaré como versión definitiva. No se preocupe el lector; las tres versiones, que desprenden un inequívoco tufo a refrito, contienen un número semejante de insuficiencias y disparates, pero por la razón indicada voy a atenerme, para el comentario, a la segunda.

La España de Franco, o *La dictadura de Franco* son títulos muy inadecuados; que merecerían cambiarse por *La España de Tusell* o *La dictadura de Tusell*. No se da cuenta este mozo, ya madurito tras cumplir los cincuenta en plena frustración política, de que su prepotencia y su engolamiento le sitúan demasiadas veces en posición de ridículo trascendental. Se llevó a las primeras oposiciones que le enfrentaron conmigo a una nutrida *clac* de incondicionales, encabezada por un ilustre profesor asentado en primera fila como para certificar su aval, el profesor Carlos Seco Serrano, a quien yo chafé el aval dando lectura a los juicios muy elogiosos que me dedicó en la bibliografía de su excelente Historia contemporánea, editada por el Instituto Gallach. Perdió Tusell aquellas oposiciones y perdió el concurso-oposición de 1980, al que yo concurría también para la cátedra de Alcalá de Henares cuando acababa de ser cesado en el ministerio de Cultura, donde había mantenido a Tusell en la dirección general de Bellas Artes, porque nunca he traducido a la vida política los resentimientos personales. Volvió a perder estrepitosamente y volvió a no aprender nada. Su *España de Franco* es la apoteosis del refrito. Ni una idea original, ni un documento importante o interesante, ni un enfoque sugestivo. Es un libro aburridísimo, escrito con ese estilo pedestre que convierte su lectura en una permanente lucha contra el sueño. Carece de método; está escrito con formato de crónica enchorizada, sin distinción de contextos y de movimientos históricos. Los párrafos consisten muchas veces en enojosas repeticiones de otros párrafos tomados de otras obras del autor, que debe de tener clasificados los principales temas en carpetas numeradas, a las que luego enjareta cuando el tema reaparece en otro libro, aunque el «nuevo» libro sea del año siguiente o de muy pocos años después.

Tiene fama Tusell en los medios universitarios de mala uva. La fama es todavía corta frente a la realidad. Encasqueta a un personaje una determinada etiqueta y luego la fotocopia a cada nueva aparición del así distinguido. Habla

casi siempre de oídas, con técnicas de disco rayado. Sólo por un heroico sentido de deber me detengo tanto en el enjuiciamiento de sus obras, guiándome exclusivamente por criterios históricos.

Lo más grave de esta historia del franquismo puede resumirse en los puntos siguientes, además de su absoluta carencia de originalidad y de atractivo:

1. Tusell se recrea en lo secundario, presentado, además, de forma inconexa; no aborda nunca las grandes líneas, los grandes movimientos de la reconstrucción histórica.

2. La clave para el desarrollo histórico de la época de Franco es una clave estratégica, no una clave política. Los documentos editados veinticinco años después de los hechos por el gobierno de los Estados Unidos, que están a disposición del público, no asoman por las disquisiciones de Tusell. Allí podría ver el historiador, de conocer el inglés, cosa harto improbable, que la realidad estratégica interpretada por el Pentágono se impuso en 1946 a la furia de la izquierda europea encelada contra Franco y al inmenso poder de la Presidencia norteamericana. Franco, aunque Tusell no lo dice, fue un hombre de suerte; comprendo que uno de los tres grandes gafes de la historia reciente española no quiera mentar la soga en casa del ahorcado, pero la suerte es un elemento de la realidad y de la Historia y a Franco le sobraba. Además se la merecía. Tusell nunca cita el análisis de Franco formulado en 1945 sobre la pronta desintegración del frente aliado que ganó la Segunda Guerra Mundial; la URSS de Stalin era incompatible con Occidente, y la predicción se cumplió al año siguiente de su formulación, en 1946, a beneficio de Franco. Los consejeros de don Juan no lo advirtieron y así les fue. Franco poseía un alto sentido estratégico, que había demostrado en la guerra civil, aunque Tusell se obstine en ignorarlo.

3. El único criterio de Tusell para valorar a Franco es el odio. Para Tusell Franco era un militar inculto, cuando realmente su cultura profesional era de primer orden y su cultura general superaba con mucho a la media de los militares de su tiempo. Poseía un sentido económico indudable, aunque no fuera un profesional de la economía; pero Tusell llega a negarle, absurdamente, todo mérito en el planteamiento del desarrollo económico español, sin advertir que Franco, como Primo de Rivera, era un regeneracionista típico.

4. Ni una alusión en el libro de Tusell sobre el designio de Franco para la política social, que consistía básicamente en la ampliación de la base española de clases medias, que era mínima en 1936 y dominante en 1975. Franco

expresó de forma insistente ese proyecto desde la tarde del 1 de octubre de 1936 en Radio Castilla, pero Tusell no lo ha sabido nunca o lo ha ocultado siempre. Nunca se ha hecho en España una política social tan amplia y tan consecuente.

5. Vuelve Tusell a utilizar sus carpetas de refritos para denominar «autarquía cuartelera» a la que según él es principal directriz económica de Franco. Le repetiré de nuevo que Franco no fue jamás partidario de la autarquía sino que se vio obligado a asumirla cuando se le cerraron casi todos los caminos exteriores; pero que, antes y después de esa situación, se manifestó siempre en favor de la apertura económica y el intercambio económico exterior.

6. La ignorancia de Tusell sobre las fuerzas armadas y la Iglesia es hiriente e intolerable. Desconoce por completo la historia militar española y no demuestra tener la menor idea sobre la evolución de las fuerzas armadas desde 1936 hasta hoy, por lo que no puede explicar su papel en la transición democrática como garantes de la paz según el testamento de Franco. En cuanto a la Iglesia, cabría exigir un mínimo de seriedad a un historiador que se dice católico, pero no lo demuestra. No apunta una sola idea sobre el papel de la Iglesia católica en la evolución del régimen, desde la legitimación de la Cruzada a la actuación de la Iglesia como adelantada de la transición. Desconoce la crisis general y específicamente la crisis española de la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial. La evolución de las ideas en la Iglesia, el contagio de la mal llamada Modernidad, los embates de la gnosis moderna, del protestantismo, del modernismo, del existencialismo le suenan a chino. El papel vital de la degradación de los jesuitas lo ignora y lo margina. Cita de pasada al Opus Dei, pero afecta no saber nada de él. Llega al absurdo increíble de identificar en 1973 al movimiento «Cristianos por el socialismo» como una ocurrencia de Ruiz-Giménez y Peces-Barba, cuando en realidad no se trataba de un movimiento socialista, sino rigurosamente comunista, creado por los jesuitas chilenos (padre Arroyo) y animado por algunos jesuitas españoles (padres García Nieto y Llanos). Despacha de un plumazo las relaciones de Franco con la Iglesia y pinta a un Franco desconocedor del Concilio Vaticano II, cuando consta que lo estudió intensamente; quien desconoce la evolución, y las variopintas consecuencias del Concilio, es el propio Tusell.

7. Despacha la complicada y muy positiva historia del desarrollo económico y social de España —a partir de 1939, la heroica época de la reconstrucción sin medios— con la banalidad, característica en él, de que

Franco no contribuyó para nada al desarrollo, que simplemente ocurrió en vida de Franco, pero sin ninguna intervención de Franco. Ésta es una vieja y ajada tesis comunista, amén de una prueba contundente de que Tusell desprecia cuánto ignora. El asombroso impulso de los empresarios españoles, toda una nueva clase que surgió pictórica de ánimo y energía tras la victoria de 1939, no significa nada para Tusell, pero fue cabalmente advertida por el embajador americano Carlton Hayes. La génesis del desarrollo, los asesoramientos que Franco, junto con Carrero, recabó para su planeamiento y ejecución, la coherencia del nuevo impulso con las ideas que siempre había mantenido Franco sobre una línea tecnocrática o de *capacidades* como se decía en el reinado de Alfonso XIII, son *terra incognita* para Tusell, aferrado siempre a sus rutinas y a sus pequeños y ridículos ensañamientos. No puedo evitarlo, pero siempre que veo cómo pontifica Tusell sobre todo aquello que desconoce, me asalta (cito de memoria) su famoso dictamen que podía encontrarse en las librerías sobre la situación de la Europa del Este en la primavera de 1989: «Occidente ha de acostumbrarse a convivir con el Muro de Berlín durante el próximo milenio». No en el próximo milenio, sino en el otoño siguiente a esa primavera, el Muro de Berlín —9 de noviembre de 1989 — saltaba en pedazos y, a lo que parece, Javier Tusell no ha conseguido aún salir de los cascotes.

Todas mis notas, discrepancias y signos de admiración anotados al margen de *La dictadura de Franco* se quedan ahí tras este repaso general. No hace falta puntualizar una por una sus inepcias. A principios del nuevo siglo tengo la esperanza de ofrecer mi última biografía de Franco sin una sola cita de Tusell, no por venganza, sino por compasión. Tampoco voy a detallar ahora mis críticas a las últimas publicaciones del genio; su lamentable libro sobre Carrero, su contribución al libro de Carlos Seco Serrano sobre el reinado de Alfonso XIII para la Historia de España, antaño dirigida gloriosamente por don Ramón Menéndez Pidal y que desde hace algún tiempo dirige el profesor Jover Zamora, a quien sobra sabiduría para este empeño, pero por desgracia lo ha destrozado con la selección de colaboradores. No voy a comentar aquí ese libro frustrado sobre Alfonso XIII, que ha comprometido y en parte averiado el excelente trabajo del profesor Seco, él sabrá por qué. Pero debo despedirme con la perla final de Tusell.

Tusell ante don Juan Carlos: la Historia como instrumento de flagrante adulación

A fines de noviembre de 1995, Tusell dirigió un ataque de mal gusto contra Luis María Anson. Yo no estaba entonces en relaciones excesivamente buenas con el señor Anson que, tanto en *ABC* como en el sectario *ABC cultural*, me marginaba de manera ostensible. Anson me insistió sobremanera para que le escribiera una crítica del entonces último libro de Tusell, *Juan Carlos I, la Restauración de la Monarquía*, publicado en la editorial Temas de Hoy, porque al director de *ABC* le constaba mi opinión sobre ese libro como un ejercicio de adulación que ponía la Historia, una vez más, al servicio de la exacerbada finalidad política del autor, no sé tras qué cargo andaba entonces Tusell. Me resistí a escribir la crítica, pero al fin accedí porque Anson, en su libro *Don Juan*, citaba a algunas de mis obras con mucha frecuencia y excepcional aprecio. Después de publicar mi crítica, que apareció en un momento singularmente oportuno y coincidió con un nuevo batacazo de Tusell en sus pretensiones, Anson volvió a marginarme alevosamente dentro de la vil política antifranquista de *ABC*, que debería avergonzar al presidente de Prensa Española, Guillermo Luca de Tena, por la agresión y la descalificación de la memoria de su padre, el inolvidable Juan Ignacio, autor de las espléndidas portadas que publicó *ABC* los días 1 de abril de 1939 y siguientes, cuando el gran periódico robado y prostituido por el Frente Popular —la legalidad republicana, se diría hoy— recuperó su dignidad y su línea de siempre, comprometida de nuevo hoy, como indico en otro capítulo del presente libro. A continuación transcribo lo que escribí sobre el libro adulatorio de Tusell en *ABC* del 1 de diciembre de 1995, el último de mis artículos aparecido hasta hoy en ese diario de accidentada historia reciente.

Está claro que, en su último libro, Javier Tusell pretende trazar una biografía en regla de don Juan Carlos I que comprenda desde su nacimiento hasta la renuncia de su padre don Juan de Borbón, en 1977. Incluso llega a insinuar que este libro tendrá una segunda parte sobre la trayectoria del Rey a partir de esa fecha. Su pretensión queda clara desde la página 33: «Es difícil escribir la biografía histórica de un personaje vivo». Pero su propósito va más allá: no sólo intenta la biografía histórica de don Juan Carlos, sino, paralelamente, la de su padre don Juan de Borbón. Una y otra proyectadas sobre un telón de fondo en negro mayor: la antibiografía del general Francisco Franco.

Vamos a establecer inmediatamente que este libro no es esa pretendida biografía de don Juan Carlos, ni tampoco la de don Juan; pero ni siquiera presenta adecuadamente, en sus solapas, la auténtica biografía de Tusell.

Este libro sobre Juan Carlos I, dice y pretende ser una biografía, pero no cumple ni una sola de las reglas del arte biográfico. Con todos sus defectos y desenfoques otro libro, el que José Luis de Vilallonga dedicó al Rey, resulta un ensayo biográfico directo e imprescindible, en que aprendemos muchas cosas del Rey; lo mismo sucede con las recientes «Conversaciones sobre el Rey» de Tom Burns Marañón y no digamos la auténtica biografía regia debida al historiador británico Charles Powell. En este libro de Tusell, don Juan Carlos prácticamente no existe hasta la página 377; e incluso en el resto del libro las apariciones biográficas de don Juan Carlos se suceden sólo de vez en cuando, a veces a contrapelo de los acontecimientos y la arbitraria descripción de los contextos.

Cuando se emprende la biografía de un personaje vivo, la primera condición es que el escritor trate asidua y profundamente al personaje. Tusell confiesa haber hablado con el Rey en una ocasión, cuando acudió a despedirse protocolariamente de él con motivo de haber cesado en su cargo de Bellas Artes. Insinúa algún contacto esporádico más mientras desempeñó ese cargo, pero no le conviene insistir; porque las altas autoridades del Patrimonio estaban habitualmente hartas de Tusell, como manifestaron reiteradamente a quien correspondía, quien hubo de intervenir enérgicamente para obviar esas discrepancias. (Quien correspondía era yo). Tusell no ha mantenido con el Rey contactos biográficos como los de Vilallonga y otros autores que han escrito sobre don Juan Carlos mucho más de cerca.

Por eso la imagen de don Juan Carlos (y la de don Juan, a quien Tusell tampoco demuestra conocer personalmente) resulta en ese libro fría, hierática, silenciosa, distante. Tusell no ha obtenido del Rey una sola opinión, una sola matización sobre problemas históricos en los que don Juan Carlos se vio implicado, pese a la gran confianza que don Juan Carlos demuestra en ese tipo de conversaciones con las personas de quienes se fía.

Esta presunta biografía del Rey debe trazarse, entonces, «por líneas exteriores», como se definió la de Francisco Cambó por Jesús Pabón. Pabón era un genio de la historia política, que sabía además ganar elecciones (Tusell se presentó a elecciones, pero sin el menor éxito). La biografía de Cambó es excelente aunque fría; Pabón eludía sistemáticamente las revelaciones de tipo personal, que hubieran hecho mucho más divertida y escabrosa su biografía camboniana. Éste es un método erróneo; la biografía, para ser fehaciente, ha de ser total, aunque no caiga en detalles morbosos. Tusell, que no le llega a Pabón ni a la suela del zapato, no nos ofrece la biografía de un Rey entre contextos convulsos, sino la descripción de una esfinge o a lo más de una

estatua. En realidad este libro es una combinación, con trazas de amasijo, de historia (o mejor antihistoria) del franquismo, análisis no de la causa monárquica, sino de las cominerías adjetivas de la causa monárquica, dividida en buenos y malos según las particulares preferencias del autor e incluso un amago sobre la protohistoria de la transición, cuyo autor único es, para Tusell, el Rey, sin la menor matización sobre el papel relevante que varios personajes desempeñaron en torno al Rey o a su padre en aquellos momentos. Muchos párrafos y enfoques de este libro son simples refritos (a veces empeorados) de obras anteriores del propio autor, cuyo trabajo en equipo ha entrado ya en los negros límites de lo legendario. Una biografía debe ser, por supuesto, crítica. Ésta no. Ésta es una biografía del Rey dictada por el ánimo de adulación y por un concepto muy franquista de la adhesión incondicional. En diversos momentos del libro la adulación al Rey y a su padre alcanza extremos patéticos.

Tusell, que se presenta demasiadas veces como definidor del método histórico y de la propia idea democrática, decía hace unos años que una obra no merecía el calificativo de histórica si no se realizaba de forma «monográfica». Luego empezó a prodigarse en libros de bajo nivel generalizador y divulgatorio, como su ramplón folleto sobre la historia del franquismo. Fustigado por muchos observadores serios, cazador infatigable de oportunidades con premio fácil, ahora sólo parece estimar las obras históricas si se escriben sobre la materialidad de unos archivos; experimenta auténtico frenesí por los «documentos inéditos» (que muchas veces están publicados) y niega todo valor a libros importantes por el grave defecto de que sólo constan de «fuentes publicadas», aunque en algunos casos que cita en este libro no haya advertido la abundante documentación inédita que contienen esas obras a las que sólo quiere considerar como refritos. Cuando observa un libro de Historia trenzado sobre testimonios directos, difícilmente recusables, o sobre una colección documental que ni él ni nadie había descubierto (aunque yacía en archivos públicos), su comportamiento roza ya la indignidad; niega la validez del testigo directo y declara dudosos e incluso falseados a los documentos aducidos por otro investigador, por la imperdonable osadía de haberlos publicado antes de que él sospechase su existencia. Esto puede demostrarse abundantemente, por más que haría interminable este análisis. Pero lo más cómico es que en esta aparente biografía del Rey, las fuentes que Tusell utiliza son fuentes publicadas en el noventa por ciento de los casos; la documentación de archivo, a veces mal citada y peor interpretada, es casi irrelevante y apenas aporta novedad alguna

a lo que ya se conocía sobre los temas y personajes de que se trata. Ha tenido la suerte de llegar a tiempo para beber copiosamente en el libro de la familia Fernández-Miranda, aunque les reprueba que traten mal a don Adolfo Suárez; y es que este historiador autoritario ignora cómo trató Suárez a Fernández Miranda, disimula la faceta implacable e ingrata de Suárez, a quien ahora retrata con tonos rosáceos que bordean el ridículo durante los fastos veinteñales de la transición. Demuestra con ello Tusell una proclividad a la censura que nada extraña a quienes le conocen. Por cierto que también el duque de Suárez es objeto de un sentimiento de adoración acrítica y de adulación flagrante por parte de Tusell. Cuando en algunos momentos de su libro, como en la página 32, extrema su adulación al Rey, olvida un término gracioso que Don Juan Carlos prodigaba en los años setenta ante quienes se habían acercado a su intimidad: «Lo que más me molesta de mucha gente es el "lameculismo"», solía exclamar ante ciertas manifestaciones acríticas y complacientes.

Pero esto no es lo peor. En vez de descartar arbitrariamente las fuentes esenciales publicadas, que siguen siendo imprescindibles, debería conocerlas y analizarlas. Como este libro no se refiere a la biografía de don Juan Carlos, sino más bien a sus contextos, resultan hirientes algunos vacíos de su bibliografía. Desconoce, por ejemplo, el importantísimo libro del diplomático Javier Rubio García Mina —que es un historiador documentadísimo— sobre los avatares del exilio español tras la guerra civil (Ed. San Martín, tres vols.), que hubiera evitado a Tusell muchos deslices y vacíos sobre la actuación de las instituciones republicanas en América y en Francia. Al disertar de forma que se aproxima a lo pedante sobre los vislumbres que Franco tenía sobre la futura actuación de su sucesor, podría haberse ahorrado varias conjeturas inanes de haber leído el libro del general Vernon Walters *Misiones discretas* (Planeta) que tampoco ha saludado y además de citar las conversaciones con Franco Salgado-Araújo, a quien llama insistente y equivocadamente «primo de Franco», tendría que haberlas leído en serio, y entonces vería cómo Franco conocía al dedillo el proyecto americano sobre los partidos españoles de la futura transición, «uno socialista y otro de centro democrático»; casi acertó con el nombre de la UCD, como acertó (y tampoco lo dice Tusell) sobre los futuros proyectos de fusión de algunos grandes Bancos. Pero ni siquiera las fuentes que conoce las analiza de forma suficiente. El libro de Sainz Rodríguez *Un reinado en la sombra* (cuyo título fue raptado por don Pedro a Luis María Anson, cosa que Tusell ignora) tuvo cuatro ediciones, cuyo contenido (modificado y manipulado cínicamente por los miembros de una

institución aludida en sus páginas) debe valorarse en función de esas manipulaciones, además de explicarse el misterio de la tercera edición inexistente. Este libro de don Pedro es una fuente esencialísima que no puede utilizarse sin desactivar previamente los campos de minas que contiene. Lo mismo podría decirse de otras fuentes importantes, por ejemplo los libros de Calvo Serer, un personaje errático a quien Tusell trata con guantes de seda, seguramente por compañerismo asociativo-religioso y político, y cuya evolución es importante para el estudio de la causa monárquica precisamente por las razones contrarias a las que Tusell aduce.

En otras ocasiones, el comportamiento de Tusell en cuanto a la documentación y el método es todavía más reprobable. En la página 296 intenta sugerir con torpona jactancia que conoce «una parte del diario de Martínez Campos». Se refiere al duque de la Torre, que nada tenía que ver con los Martínez Campos de la rama Seo de Urgel, sino que se llamaba realmente «Martínez de Campos y Serrano». Pues bien, Tusell no ha consultado ni todo ni parte de ese diario, que los familiares de don Carlos guardan a buen recaudo hasta la fecha establecida por el gran testigo, quien sin embargo confió muchos datos y bastantes páginas a quien Tusell no sospecha. La parte de diario que dice Tusell haber consultado se publicó por el general Armada, pero mucho antes apareció por vez primera en la revista «Nueva Historia» y no precisamente por obra de Tusell, sino por uno de los historiadores que mejor conoce las veleidades de Tusell. Y encima Tusell publica con truco las revelaciones (ya publicadas íntegramente por mí) del teniente general y omite, al tratar de las conversaciones entre don Juan y Sainz Rodríguez, las iniciales «O. D.», (Opus Dei) que don Carlos prodigaba en su diario después de varios nombres significativos. Si esto no es equívoco y juego sucio, no hay forma de encontrar otra calificación. Otras veces (como en la página 53), se aduce un documento vital, pero no se concreta su localización, con lo que se le priva de valor. Lo mismo sucede al enumerar las reacciones en el campo monárquico tras la entrevista del «Azor» (página 183 s.). De manera general y reprobable Tusell justifica sus fuentes mediante el apelotonamiento de citas, con lo que al lector se le hace imposible comprobarlas. Todavía es peor que un historiador con tantas pretensiones utilice algunos términos esenciales como fetiches, sin explicarnos lo que entiende bajo las palabras. En la página 80 hace una inevitable referencia a la Masonería como obsesión de Franco, pero no se ha molestado (ni en éste ni en otro alguno de sus libros) en investigar la información auténtica que Franco poseía sobre el Arte Real, ni tampoco nos define jamás lo que

realmente ha significado la Masonería en la historia de España y de Europa. ¿Será que se apunta acríticamente a las tesis, insuficientes y sesgadas, del jesuita Ferrer Benimeli? Sin embargo, el fetiche supremo de Tusell es la democracia. En la historiografía española actual Tusell posa como pontífice de la Democracia. Lo malo es que no la define nunca; por eso suele considerar como democrática a la República de 1931, por eso dogmatiza sobre el carácter democrático de la causa monárquica en las diversas etapas de su recorrido. Es conmovedor este culto de latría que Tusell dedica a la Democracia sin haberla definido jamás; sin criticar uno solo de sus defectos (hay que ver cómo en medio de esta balumba de conmemoraciones sobre los Veinte Años, la democracia impoluta de Tusell estaba ahogándose en la más espantosa corrupción) —insisto en que estas líneas se escribieron en 1994— y pese a que la Democracia no le ha proporcionado personalmente más que graves frustraciones políticas, ya hemos dicho que se ha estrellado en sus intentonas políticas y electorales y ahora se inscribe en un contexto informativo-político tan escasamente democrático como el felipismo.

Estos graves fallos de método nos hacen dudar sobre el método que realmente utiliza Tusell en este libro y nos sugiere la triste posibilidad de que ese método no existe. Ya se ha indicado que este libro, aunque lo diga, no es una biografía. Quiere ser en parte una historia de la causa monárquica, pero con gravísimos fallos; nada se dice sobre la caída de la Monarquía anterior, sobre el comportamiento de la familia real en la guerra civil, sobre el comportamiento de los monárquicos del interior de España durante el franquismo, y casi es mejor que no se explaye Tusell en estos puntos; porque cuando nos dice que la gran mayoría de los monárquicos «del interior» se apuntó al Manifiesto de Lausana en 1945 se profiere un disparate sólo explicable porque el autor no vivió aquellos años febriles. Tampoco es este libro una historia del franquismo, sino todo lo más un intento incompleto de antihistoria sobre ese período. Aun así, y sea lo que sea este libro (que seguramente no pasa de «totum revolutum»), trata de presentarse como un libro de historia sobre un período amplio, en el cual resultan esenciales los contextos. Pues bien, a Tusell se le escapan los tres contextos más importantes que debería tratar a fondo: la situación estratégica mundial en la que España estaba irremediablemente inscrita; y la actuación de las dos instituciones medulares, las Fuerzas Armadas y la Iglesia.

Hace Tusell alguna alusión al contexto internacional de España. Pero le faltan las fuentes básicas para estudiarlo a fondo; por ejemplo la colección de documentos oficiales norteamericanos que se va publicando al irse

cumpliendo los plazos fijados por la ley. La consulta a esta fuente capital hubiera ahorrado a Tusell varias perplejidades y algún disparate en torno al fracaso de la causa monárquica a partir de 1946, por motivos rigurosamente estratégicos derivados de la hegemonía de los Estados Unidos sobre Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Y no cito más que una omisión entre las innumerables que corresponden a este campo.

De las Fuerzas Armadas, cuya presencia, actuación y evolución de 1939 a 1977 Tusell apenas esboza algunas banalidades, tampoco existe presencia en este libro. Pues bien, se trata de una presencia esencial, que al final de la época de Franco y durante toda la transición se convierte en determinante. Tusell haría bien en leer despacio el reciente libro del general Casas de la Vega, *Franco, militar*, para comprobar que el peso de un Ejército victorioso y todavía muy bien armado entre 1939 y 1945 actuó como eficaz factor disuasorio ante los beligerantes para preservar la neutralidad española en la guerra mundial. (Autores prestigiosos como Halstead coinciden en este diagnóstico; Tusell no les conoce). Y la pervivencia de esas Fuerzas Armadas, aun con eficacia militar muy restringida, fue el factor determinante para garantizar la transición bajo una condición irrenunciable; que se mantuvieran formalmente las Leyes Fundamentales y la transformación por tanto se hiciera por reforma y no por ruptura. Entre las más profundas convicciones del Rey durante la fase más delicada del cambio figuraba, aunque Tusell no lo sepa, esta exigencia que don Juan Carlos planteaba entonces en todas sus conversaciones de altura. Pero la presencia militar queda desconocida por Tusell, quien por ejemplo ni alude a la importantísima reunión del presidente Suárez con los altos mandos el 8 de septiembre de 1976. El vacío de fuentes de Tusell se hace acuciante para la transición; ignora el libro hasta ahora más importante para este período, que es el de uno de los arquitectos secretos de la transición, el ministro José Manuel Otero Novas. De Gonzalo Fernández de la Mora también lo ignora todo, como no sea insultarle.

Otro vacío abismal es la Iglesia, que apenas aparece en este libro. La Iglesia de Roma inició conscientemente la transición española con su despegue del régimen de Franco a partir de la primavera de 1962 (meses antes de la apertura del Concilio) con la llegada a la Nunciatura en Madrid del sustituto monseñor Giovanni Benelli. La Iglesia española apostó después por don Juan Carlos y mayoritariamente, por la UCD mientras una gran parte del clero bajo y los religiosos se deslizaba al apoyo de los partidos de izquierda. Estos gravísimos fenómenos no existen para Tusell, quien por lo menos

debería haberse asomado, por sus afinidades personales, a la suave inflexión del Opus Dei en el mismo sentido. No lo ha hecho, no sabe, no contesta.

Publiqué en el mismo *ABC* algunos comentarios más sobre la desmedrada biografía de Tusell. Entre ellos un atroz catálogo de errores. No merece la pena reproducirlo aquí. El libro se quedó en los anaqueles de las librerías y las estantería de los almacenes, inevitablemente invendido. Y el autor volvió a su habitual oficio de cazador de recompensas por Fundaciones incautas y respetables ateneos provincianos. Repito lo que muchas veces dije de él: «es un escritor sin lectores (la frase es, como se sabe, de Unamuno sobre Azaña) y será capaz de hacer una revolución para que le lean». La primera parte de la frase se aplica a Tusell, la segunda no. Si hace una revolución no le seguiría un solo revolucionario.

Los muertos de Tusell

«La imbecilidad provoca catalepsia cuando el sentimentalismo se enfrenta a la ignorancia»; ésta es una de las más célebres citas, falsa por supuesto, que Javier Tusell, quien jamás la ha escrito, atribuye a Cambó, cuando no a Manuel Azaña. En la mañana del sorteo de Navidad de 1997 Tusell escribió en una de sus puntas sonoras, como decía *Arriba* hablando de Stalin en los años cuarenta (y esta vez la cita es verdadera) y concretamente en el diario que la Internacional Socialista edita en Madrid, un artículo que se titula *Los muertos de Franco* y que una vez traducido al castellano, difícil tarea, veo que trata de arremeter contra mi intervención en el programa de la Primera sobre el franquismo que dirigió Luis Herrero y suscitó las iras entrecortadas de doña Rosa Conde, los retortijones impotentes de don Joaquín Leguina, asesor de don Salvador Allende y las obedientes protestas unánimes de la banda de borregos que prodigan el boca-oído en prietas las filas del primer partido de la oposición. ¿Quién ordenó a Tusell la publicación de su fementido artículo? No cabe duda: el retorcimiento interior de Tusell se basta y se sobra para concebir este trabajito, pero de él se desprende un inequívoco tufillo a «encargo». Parece un artículo de encargo, contra el que envié una réplica a la revista *Época* que ahora reproduzco con algunas mejoras.

Los muertos de Tusell. Pensé primero dedicar este título a los diversos partidos y entes políticos nacionales e internacionales a los que el profeta de la perestroika ha conducido, por sus influjos nefastos, a mejor vida; esto es, ha liquidado en cuestión de meses tras su adhesión sucesiva a todos ellos: el Equipo democristiano, la UCD residual, la coalición AP-PDP, el PDP solitario, el CDS, y sus dos últimas cabelleras, arrancadas un año después de

fichar por el felipismo polanquiano. Y por supuesto la Unión Soviética, a la que profetizó un milenio de supervivencia en su libro famoso *La perestroika desde España* menos de un año antes de que estallara el Muro de Berlín. Éstos son, y creo que me dejo algunos, los muertos de Tusell, además de las editoriales que ha conducido al borde de la frustración con sus continuos éxitos de venta, hasta que se han hartado y para ciertas Navidades han dejado, al fin, de encargarle libros. Pero no, Tusell no habla de sus muertos, que conoce mejor que nadie, sino de los muertos de Franco, de los que no tiene la menor idea. Y encima lo hace insultándome, aunque sin nombrarme, porque es literariamente un reservón además de un rollo. Yo en cambio le replico con mi firma, a pecho descubierto, a ver si con este revés le dejo calladito otra larga temporada; he esperado a publicarlo en este nuevo libro, que comunico después de las por ahora ocho ediciones de la «Historia total de España»; para Tusell esta cifra mágica, ocho, no se refiere a ediciones, sino a ejemplares de cada uno de los libros vendidos habitualmente por el «infatigable historiador», como le ha llamado un sonso en la única bobada que publica la estupenda revista *Aportes* en su último número.

Dice el genio de la predicción, que anunció la victoria del gran Mario Vargas Llosa en las anteriores presidenciales peruanas, que es falsa y frívola mi tesis del debate célebre, en la que proclamé, con cita de fuentes, un hecho histórico: que Franco, a raíz de la Victoria del 1 de abril de 1939, permitió que se cumplieran unas veinte mil sentencias de muerte dictadas por los Consejos de guerra (lo que califiqué de lamentable), pero que esa cantidad trágica había sido bastante menor que las ejecuciones perpetradas por los sistemas democráticos nacientes en Francia y en Italia desde 1944 en adelante. Para corroborar su ignorancia o su mentira (condiciones que suelen identificarse en las «investigaciones» del *jettatore* número 3 de la transición), Tusell no dice una sola palabra del caso italiano, que desconoce, y aduce algunas estadísticas oficiosas del caso francés.

Voy ahora a desenmascarar, con datos y fuentes alejados de la insoportable levedad del profeta, sus tremendos vacíos.

Para fijar bien el término de comparación Tusell cita de lejos, sin penetrar en su entraña ni en sus matices, el excelente libro del general Ramón Salas Larrazábal, *Pérdidas de la guerra* que publicó Planeta en 1977. Participé intensamente en la génesis y edición de este libro (aunque el método y el mérito corresponden exclusivamente a mi llorado amigo, que condenó indignado el comportamiento de Tusell cuando se revolvía, impotente y grosero, ante el cúmulo de datos y documentos que incluí en otro libro,

Agonía y Victoria, de 1989) y puso en mi ejemplar esta dedicatoria: «A R. de la C., a quien se debe la publicación de este libro». Pero como el problema de la represión me ha preocupado siempre, en vez de proferir errores y errores he seguido las diversas investigaciones en curso y descubrí una línea del máximo interés en los trabajos del joven sacerdote pacense Ángel David Martín Rubio que, partiendo de los datos de Salas, acaba de publicar en nuestra editorial Fénix la obra *Paz, piedad, perdón… y verdad*, con un interesante estudio sobre las ejecuciones de postguerra, en que incrementa las cifras de Ramón Salas, aunque no sustancialmente. Situemos, pues, esa cifra entre 20 000 y 30 000, que ya es trágica de por sí, sin la exageración de Solé que cita Tusell sin comprobación alguna. He aquí otra prueba de la frivolidad y la insoportable levedad de Tusell, lanzar las cifras y las citas a voleo, sin concretar nada, sin analizar nada. Por cierto que la primera evaluación de Salas es de veinte mil, no de veinticinco mil, pero qué son cinco mil muertos más o menos para Tusell. No son los muertos de España sino eso, los muertos de Tusell.

El caso de la postguerra italiana que Tusell desconoce hasta el punto que no aduce ni un comentario ni una cita ni un dato podría estudiarlo, en vez de desahogar sus frustraciones con vanos insultos, en las siguientes fuentes:

1. Giorgio Bocea: *Palmiro Togliatti*. Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 377 y siguientes.
2. G. Bocea: *Storia della Repubblica italiana*. Milán, Rizzoli, 1982.
3. Martin McCauley (para las atrocidades del comunismo en Europa desde 1944): *Communist power in Europe, 1944-1948*. Londes, Macmillan, 1978.
4. Aurelio Lepre: *Storia della prima Repubblica*. Bolonia, II Mulino, 1993.
5. L. Klinkhammer: *L'occupazione tedesca in Italia*. Bollati Borrighieri, 1993, p. 712 ss.

El estudio más importante es el último. La mejor perspectiva es la de Bocea, un militante del partido *Giustizia e libertá* que luego se llamó *partido de la Acción* y que es una maravilla de documentación e imparcialidad. El problema de Tusell para leer estas fuentes es que no sabe una palabra de idiomas, tal vez crea comprender el italiano de oído, pero ya el profesor Sigfredo Hillers, en un delicioso comentario al inconcebible libro de Tusell sobre Franco, Hitler y la Segunda Guerra Mundial demuestra con sabrosos escolios que el catedrático de la UNED ignora por completo el alemán, por ejemplo cuando cita dos versiones de un mismo libro en idiomas diferentes

como si fueran libros distintos. Al menos podrá encargar a alguno de sus alumnos de color (no hay que concretar el color) que le traduzca los párrafos esenciales.

De este conjunto de fuentes, que Tusell no cita porque las desconoce, se deduce que la creación de la República fascista de Saló y el alzamiento de la Resistencia (vertebrada por los comunistas) suscitó y enconó en el norte y centro de Italia una auténtica guerra civil que duró veinte meses a partir de la primavera de 1944. No es extraño que Tusell ignore los hechos y las terribles cifras de esta desconocida guerra civil italiana; lo política e históricamente correcto, sobre todo en Italia, es ocultar esos hechos para horrorizarse, en cambio, con la hecatombe de Guernica, cuyas víctimas fueron, según el primer especialista en el tema, el general Jesús Salas, unas ciento veinticinco. Pero las fuerzas armadas de Saló estaban próximas a los cuatrocientos mil hombres y las fuerzas comunistas, según las cifras de Togliatti, llegarían a los doscientos cincuenta mil combatientes. Fue una guerra a muerte, en la que rara vez se hacían prisioneros (bien lo demostró el exmiembro de las Brigadas Internacionales Walter Audisio al capturar y liquidar a Mussolini y sus acompañantes) y cuyo balance de víctimas, según el puntual historiador alemán citado, ascendió a doscientos mil muertos, de los que la inmensa mayoría se produjo en actividades de represión.

He aquí por tanto mi primera respuesta a la insoportable levedad de Tusell; la represión italiana de postguerra es unas diez veces superior a la represión española de postguerra y seguramente también supera al conjunto de las víctimas por represión que sumaron los dos bandos de la guerra civil española en todo el desarrollo del conflicto. Por supuesto que no le admitiré una duplica hasta que me demuestre fehacientemente que conoce de forma directa las fuentes que acabo de aducir.

En el fondo los muertos de la guerra civil española le importan un bledo a Tusell. Compárense las invectivas de su artículo de esas Navidades en *El País* con lo que decía en 1975 en la página 391 de otro de sus libros invendidos, *La España del siglo XX*, editado por Dopesa en Barcelona, donde opina con exactitud y precisión característica sobre las ejecuciones de postguerra:

> «Hay quien afirma que (las ejecuciones desde 1939) fueron diez mil tan sólo, mientras que otros, probablemente con más certeza, elevan la cifra a más de cien mil… Para emitir un juicio imparcial acerca de esta represión habría que tener en cuenta muy probablemente que si los vencedores hubieran sido los adversarios la represión hubiera sido semejante, sobre todo en una democracia popular. La mejor prueba de ello la constituye la actuación de unos grupos frentepopulistas contra otros durante la guerra civil».

Admirable precisión.

Solventado, pues, el caso de la represión italiana, vayamos a la francesa. Con su engolado acento pontifical, Tusell niega en *Los muertos de Franco* que la represión de postguerra organizada por Franco fuese —como yo afirmaba en el debate de TVE— muy inferior a la que realizaron las llamadas fuerzas democráticas al término de la ocupación alemana de Francia, desde 1944 en adelante. Tusell sólo admite, por sentencia de los tribunales ordinarios, la cifra de 767, que asciende hasta 1500 sumándole las ejecuciones realizadas por sentencia de los tribunales militares. Estas cifras son, en efecto, aproximadamente verdaderas, pero, como si tal cosa, Tusell deja caer una frase: «al margen de las ejecuciones sumarias»; ahí está la trampa, muy característica de Tusell. Porque la mayor parte de la represión en Francia se realizó por medio de esas «ejecuciones sumarias», perpetradas en su gran mayoría por las Fuerzas Francesas del Interior, consideradas como fuerzas democráticas, aunque eran de filiación comunista; precisamente los comunistas acabaron por entrar en el gobierno del general De Gaulle, y la opinión del bando aliado se había olvidado ya de la complicidad de la URSS y los comunistas con Hitler entre agosto de 1939 (fecha del pacto germano-soviético) y junio de 1941, cuando el III Reich invadió el territorio de la URSS. Me parece que a las víctimas de estas «ejecuciones sumarias» les importaba bien poco que su muerte se debiera a un fusilamiento legal o ilegal, con una y otra condición definidas exclusivamente por la victoria de las armas.

Pero como hemos hecho en el caso de Italia, vayamos a las fuentes. Para la represión «legal», única de que trata, Tusell cita en su artículo unos nombres de historiadores (Rioux, Lottman, Rouquet) sin datos concretos, sin señalar fuentes, según su acreditada metodología «monográfica» que consiste solamente en procurarse un respaldo indeterminado para sus prejuicios de orejera. En el debate de TVE cité de forma expresa mis fuentes, que ahora concreto así:

1. Robert Aron: *Histoire de l'épuration*, tres vols. París, Fayard, desde 1967.
2. VV. AA.: *Le livre noir de l'épuration*. París, KS Reproservice, 1994.
3. Mourre: *1945-1970*. París, Editions Universitaires, 1971.
4. Robert Aron: *Histoire de Vichy*. París, Fayard, 1954.
5. Jacques Isorni: *Philippe Pétain*. París, La Table Ronde, 1972.
6. Giulio Ceretti: *A l'ombre des deux T (Togliatti, Thorez)*. París, Julliard, 1973.

El problema principal que encuentra el investigador de la represión desencadenada en Francia por la Resistencia y las Fuerzas Francesas del Interior contra los colaboracionistas es el espeso silencio con que la propaganda comunista ha envuelto, hasta hoy, toda la serie de atrocidades disfrazadas de «lucha por la liberación». Por fortuna acaba de aparecer el superlibro francés sobre los crímenes del comunismo, que por supuesto incluyo en mis fuentes y comentaré en otro capítulo. Las cifras para la represión «legal» ordenada por las instituciones del general De Gaulle son semejantes a las que ofrece Tusell, incluso algo menores en cuanto a ejecuciones; muy superiores en cuanto a depuración de funcionarios y prolongación de las persecuciones. Todavía en 1997 se estaba celebrando el proceso Papón, cincuenta y tres años después de los crímenes que se le imputan. Tusell ignora que Franco decretó la prescripción absoluta de los delitos de cualquier clase cometidos durante la guerra civil en la primavera de 1969, para preparar la sucesión a título de Rey en la persona de don Juan Carlos; cuando habían transcurrido treinta años desde el final de la guerra. Muchos crímenes de guerra cometidos en Francia (y en otros puntos de Europa) son, por decisión de los antiguos aliados y por presión de los judíos, imprescriptibles. Por lo pronto en este punto el balance de la clemencia y la crueldad es muy favorable a Franco.

Me ceñiré a la consideración de las ejecuciones por represión en Francia desde 1944. Ha resultado providencial la investigación reflejada en el *Livre noir* (nuestra fuente número 2), cuyos datos y pruebas representan una auténtica victoria contra la permanente censura comunista y la que proviene de la verdadera y la trucada Resistencia, porque buena parte de la Resistencia es puro encubrimiento y leyenda. Una segunda diferencia con el caso italiano es que en Francia el régimen de Vichy se desfondó por completo y apenas estableció centros de resistencia a la venganza «democrática» como hizo, en cambio, en Italia la República de Saló. De las fuentes citadas se deduce que la cifra de represión «democrática» más fiable entre todas las que se han propuesto en Francia, debidas a ejecuciones que Tusell llama púdicamente (es decir, impúdicamente) «sumarias», es la incluida en el testimonio del exministro del Interior Adrien Tixier para el período comprendido entre el 6 de junio de 1944 (fecha del desembarco aliado en Normandía y comienzo real de la Resistencia) y el mes de febrero de 1945: es decir, unas ciento cinco mil, equivalente a cinco veces la que corresponde a las ejecuciones de la postguerra española. No se olvide el lema expuesto por el ministro comunista de Justicia, Marcel Willard: «En adelante el emblema de la Justicia no será la

balanza sino la metralleta». Para el resto de la depuración y persecución represora en Francia, que desborda por todas partes las arbitrarias propuestas de Tusell, me remito a las fuentes enumeradas, especialmente a las números 1 y 2.

Espero que con la confrontación del ridículo y trucado artículo de Tusell y el epígrafe que hoy firmo en este libro comprendan los lectores lo que comprendieron los tribunales de oposición en 1975 y 1980; por qué barrí a Tusell en mi confrontación universitaria con él. La presencia del profesor Seco Serrano, que siente una extraña e infundada debilidad por el profeta de la perestroika, en primera fila del público para respaldarle, no influyó absolutamente nada en el tribunal de oposiciones, ante la exhibición de incompetencia que realizó mi contrincante, cuya metodología anticuada y su impotente nerviosismo no le ayudaron mucho.

Ahora, después de varios alegatos que he dedicado a su insoportable levedad, se le ve crispado, perdido el rumbo entre el mogollón del diario felipista, consciente, tal vez, de sus tendencias que se revelan al enfrentarse con adversarios que escribimos en castellano rotundo, e incluso, como saben bien los lectores de *Época* por los trabajos de su director, a magos de la pluma, frente a los retorcimientos de Tusell y su falta casi absoluta de dominio sobre las palabras, la sintaxis y lo que es peor, las propias ideas que ni siquiera él comprende. De su insuficiencia histórica poco tengo que añadir: la vengo demostrando de forma cada vez más inequívoca desde 1975. Que los señores Polanco y González vean si les compensa mantener a su servicio a un portavoz emparejado, en cuanto a consecuencias letales, con el señor Yáñez, y cuya maléfica influencia ha terminado política y sucesivamente con los señores Gil Robles, Lavilla, Alzaga, Suárez, Vargas Llosa y Gorbachov. Los otros muertos de Tusell.

Con estas consideraciones he terminado con el desagradable análisis de las obras selectas tuselianas. Me he ceñido a las obras, sin entrar en los aspectos personales del historiador porque no es mi estilo, aunque con ello me vea obligado a prescindir de fecundas y jocundas fichas de mi archivo. Éste es Tusell, el personaje público dotado de un ego más desmesurado que la mendacidad de Felipe González o la procacidad de Alfonso Guerra. El historiador que subordina por entero la Historia a su ambición política, verdaderamente ilimitada. El escritor deplorable, dotado de un estilo que es una agresión permanente al buen gusto y que confunde citas de repertorios facilones con erudición ilustrativa.

Terminadas ya las reflexiones anteriores, Javier Tusell nos ha seguido obsequiando con sus ocurrencias históricas y en vista de que vende tan pocos libros ha producido en la editorial Taurus, del señor Polanco, y por entregas, una obra de altisonante título: *Historia de España en el siglo XX*. Van publicados dos tomos en formato bolsillo, que comprenden desde los albores del siglo a la República y la guerra civil. He visto por encima esos dos libros (y el tercero, ya publicado al corregir estas líneas), lo suficiente como para comprobar que no merece la pena ensañarme con ellos. Como era de prever se trata de refritar los refritos previos y el resultado es una fritanga histórica inevitable. No cabía esperar otra cosa. Se ve que el publicista se ha replegado sobre la editorial de su gran patrón, Taurus, en la que ya el año pasado, con la sana intención de ofrecer una alternativa, como ahora se dice, a mi *Historia Total de España*, publicó, por el acreditado sistema de colaboraciones varias, una *Historia de España* en un solo volumen que se vendió poquito. Hogaño ha recurrido a un reflejo editorial bien conocido en los gremios del libro; cambiarle la cara, presentarlo con los mismos vacíos, pero con portada distinta. Comprendo que su escarmentada editorial quiera arrojar un difícil lastre de venta, pero el público español es todo menos tonto y olfatea de lejos ese tipo de extraños recursos. Uno se entera de muchas cosas cuando, familiarmente hablando, ejerce a la vez de autor, de editor y de librero, además de gozar de una más que excelente distribución. Aquí nos vamos conociendo todos.

Y como estrambote, la arremetida inmisericorde de Tusell contra José María Aznar, Ana Botella y el intento biográfico que acaba de dedicarles el matrimonio de grandes escritores políticos formado por José Díaz Herrera e Isabel Duran. Ya sabemos que toda biografía sobre personas vivas y además felizmente jóvenes es necesariamente incompleta, pero todos los libros escritos por la pareja son del más alto interés y éste no es la excepción. Los autores han hablado frecuentemente y a fondo con los biografiados; conocen magistralmente el contexto político e histórico en que se mueven y nos ofrecen un libro imprescindible para todo el mundo…, menos para Tusell, que les dedica en diciembre de 1999 (días 12 y 20 en *El País*) nada menos que dos artículos seguidos para descalificar a Aznar, a su esposa y a sus biógrafos. No voy a repetir las banalidades arbitrarias que forman la trama de los dos artículos de Tusell. Sólo haré una pregunta: Después de la biografía de halagos flagrantes que Tusell ha dedicado al Rey y a su padre don Juan, ¿cómo se atreve a calificar de hagiógrafos a escritores serios, documentados e imparciales? Pues se atreve.

PAUL PRESTON, EL ENEMIGO ESTÁ DENTRO

Ya le he propinado a Paul Preston un aperitivo en mi libro de esta misma editorial *No nos robarán la Historia*. El libro alcanzó, gracias a Dios, un éxito notable y decenas de miles de lectores supieron al fin quién era de verdad y cómo actuaba esta nueva estrella del antifranquismo, lanzada a la opinión pública por la inconcebible actitud de Luis María Anson, quien por ello se merece la contraofensiva que voy a montarle en el epígrafe siguiente de este libro, porque no han resultado suficientes los anticipos con que le he avisado una y otra vez. Pero la nefanda biografía que Preston ha dedicado a Franco se ha difundido ampliamente fuera y dentro de España, por lo que me veo obligado a analizar la contribución «histórica» de Preston con algún mayor detenimiento, aunque sea, en parte, para agradecerle que se haya mostrado tan sensible a mis críticas, sin aparentar que no le afectan; esa loable sinceridad debe ser correspondida, por mi parte, con una sinceridad todavía más descarnada.

Cuando compruebo el encono, el odio, la saña que exhibe Preston en su biografía de Franco y en las frecuentes apariciones que le facilitan, en conferencias y cursos de verano algunos memurcios españoles, a quienes por lo visto apasiona el deporte de escupir sobre nuestra historia reciente, siento la tentación de recordar aquellas palabras de Franco recién terminada la guerra civil, que tantas veces se repetían a las diez de la noche, la hora que durante el conflicto se reservaba para el parte: «Españoles, no bajéis la guardia. El enemigo está dentro». No es que yo considere a Preston como un gran enemigo de Franco. Todo lo contrario, es un pequeño enemigo, y su mamotreto biográfico es tan voluminoso como deleznable. Pero se ha difundido mucho por la visión de un editor avisado y por el reflejo edípico de un gran periodista vuelto de espaldas a la historia y a su propia biografía personal. El editor avisado es quien ha lanzado en España la biografía de Franco por Preston con un título que no figura en la versión inglesa: *Caudillo*, un título muy grato a Franco que hizo pensar a muchos compradores respetuosos con Franco que Preston ofrecía una biografía seria e incluso favorable al Generalísimo. Luego, a la quinta página estaban completamente decepcionados, pero el libro estaba ya pagado, aunque no lo siguieran leyendo. El caso de Anson es mucho más retorcido; encontró en el mal documentado Preston una justificación para su propio odio y retorcimiento contra Franco y decidió exaltar en *ABC* la categoría de Preston como

historiador, aunque luego, cuando tuvo que defenderse de historiadores enemigos como Tusell, acudió a mí, en nombre de nuestra antigua amistad, para que le colocase a Tusell una carga de profundidad. Pero a todo cordero le llega la pascua y confío en que sea en este mismo libro.

El antecedente: la absurda guerra civil de Paul Preston

Conozco a Paul Preston, pero he hablado muy poco con él. Recuerdo solamente un encuentro fugaz entre las calles de Serrano y María de Molina, antes de que publicase su engendro contra Franco. Nació en Liverpool en 1946 y cursó estudios en la Universidad de Oxford. Ha ejercido la docencia en las universidades de Reading y Londres, donde dirigió un centro de estudios sobre la España contemporánea. Actualmente es profesor de Historia internacional en la London School of Economics, centro superior vinculado a la Internacional Socialista y no precisamente desafecto a la Masonería. Su primer libro, sobre los antecedentes de la guerra civil española, mereció los rendidos elogios de Felipe González, entonces jefe de la oposición socialista; lo cual representará para algunos un cierto aval, pero para quienes conocemos la hiriente ignorancia histórica del señor González y su propensión a manipular políticamente la Historia resulta, más bien, una garantía de parcialidad y desacierto. Ha publicado otros libros, alguno de ellos traducido en España, pero seguía siendo un desconocido hasta el espectacular lanzamiento de su biografía *Franco*, por Harper y Collins en 1993, pronto traducida al español y ensalzada hasta las nubes por Luis María Anson en *ABC*, donde Preston oficia desde entonces como colaborador distinguido al que se han confiado muchas Terceras, generalmente ramplonas y antihistóricas. En este comentario me voy a centrar en la biografía de Franco, mucho más a fondo que en el análisis que ya anticipé en *No nos robarán la Historia*. Pero para comprender los fundamentos históricos de Preston sobre España presentaré primero su libro más significativo antes de esa biografía: *La guerra civil española 1936-1939*, editada en España por Plaza y Janes en 1986.

Adelanto mi impresión general de que este libro de Preston es un esperpento, si queremos degradar un término de tan alta tradición literaria para aplicárselo a una Historia indocumentada, indigesta y lamentable, que sin duda hace feliz a don Felipe González. Adelantemos un enfoque general sobre Preston, que actúa como lo haría un historiador oficioso de la Internacional Socialista y la Masonería. No sé si tiene carnet de la primera institución o si utiliza el mandil protocolario de la segunda; es lo de menos:

estoy señalando su tendencia ideológica e histórica, no su pertenencia formal a una secta determinada.

El sectarismo objetivo del libro asoma en la misma dedicatoria a las Brigadas Internacionales, esa caterva de «voluntarios de la libertad» —la libertad del gran demócrata Josif Stalin— que vinieron a España «a luchar contra el fascismo», pese a que en 1936 el fascismo era extremadamente minoritario en la España nacional; donde ni Franco era fascista (hasta Tusell lo reconoce) ni la inmensa mayoría de sus colaboradores y sus partidarios. «El libro —reconoce Preston— no pretende situarse en perfecto equilibrio entre los dos bandos» (p. 9). Cree que España no recogió beneficio alguno del alzamiento de 1936 y la victoria de 1939; pero la vastísima porción de la sociedad española, incluida la Iglesia, las instituciones de la economía libre y las personas de orden recibieron el beneficio de la salvación y la vida, que no es pequeño. Adelanta su fascinación por la Segunda República, que constituyó «un intento de mejorar la vida de los miembros más desasistidos de una sociedad represiva» (ibíd.), pero resulta que esos desasistidos empezaron a rebelarse contra la República desde agosto de 1931 hasta julio de 1936, por lo que no parecían estar muy conformes con la República que pretendía mejorarles. Ya desde la p. 10 Preston asoma el plumero de su amistad con el americano vendedor de bibliotecas Herbert R. Southworth, enconado enemigo de Franco desde posiciones históricas falseadas, cuyo catálogo de errores insondables voy a publicar después de muchos retrasos porque en tiempos armó algo de ruido, pero hoy es un autor olvidado sin influencia alguna en las polémicas de la Historia; no otra cosa se puede esperar de quien confunde al patriarca de la Institución Libre de Enseñanza, don Manuel Bartolomé Cossío, con el famoso pintor falangista Pancho Cossío. El libro de Preston se publicó con motivo del cincuentenario de la guerra civil y no alcanzó resonancia alguna. En cambio su biografía de Franco sí que consiguió una excepcional repercusión gracias a la acción combinada de la Internacional Socialista y esa derecha de Edipo a la que Solzhenitsin llamaba suicida. Pero es el caso que la figura de Franco depende históricamente de la guerra civil: si el tratamiento de la guerra civil que se debe a un autor determinado equivale al vacío y la alienación, ese autor queda *a priori* invalidado para comprender la auténtica figura histórica de Franco. Eso es exactamente lo que le sucede a Preston.

Se empeña Preston en identificar la caída de la República con «la destrucción de la democracia en España» (p. 11). Pero como he explicado en el análisis de las obras de Tusell, emperrado en esa identificación, la

República no fue una democracia porque le faltan las dos condiciones necesarias para ello: ni sus primeras ni sus últimas elecciones (1931 y 1939) fueron democráticas ni aun de lejos, ni existió entre las dos Españas que pugnaban por el poder la menor voluntad general de convivencia. Hoy en 1999 España vive en régimen democrático porque existen esas dos condiciones; aunque la voluntad general de convivencia está en peligro por las provocaciones y las invocaciones de algunos líderes socialistas a la guerra civil y por el tirón anticonstitucional de algunos nacionalismos, por eso la democracia española actual está amenazada, pero existe como tal. La Segunda República no. Ya lo he probado e insistiré en este mismo libro. Algunas de las causas más reconocidas para comprender el fracaso y la caída de la República fueron los desórdenes públicos de 1931 a 1934 y, sobre todo, en el primer semestre de 1936; pero Preston llama «supuestos» a esos desórdenes, cínicamente (p. 13). He publicado en 1997 un estudio documentado sobre el carácter totalitario y estaliniano de las brigadas internacionales enviadas a España por Stalin como «una fuerza soviética en España», según calificación universalmente aceptada del historiador norteamericano David T. Cattell; pero Preston, que conoce el libro de Cattell, las califica como «brigadas organizadas por los comunistas…, simbolizaban la lucha por muchas cosas que merecían la pena, tales como los derechos democráticos y las libertades individuales y sindicales» (p. 15). La República en guerra asesinó a cuántos diputados del centro y la derecha pudo apresar, con rarísimas excepciones; asesinó a trece obispos y más de ocho mil sacerdotes, religiosos y monjas; a decenas de miles de católicos sólo por serlo; a innumerables personas por el delito de ejercer su profesión o trabajar sus propiedades; ¿es eso respetar los derechos y las libertades? Por supuesto que en la zona nacional existió también una durísima represión; pero a nadie se nos ocurre calificar a la zona nacional de democrática. Exalta Preston «las conquistas educativas y culturales de la República» (p. 17), que según uno de los ministros de Instrucción de la República, el liberal antifranquista don Salvador de Madariaga, consistían en mantener miles de escuelas sin maestro y miles de maestros sin escuela; y en dejar a miles de niños sin enseñanza gracias a la antidemocrática ley de Azaña, que prohibía la enseñanza a las congregaciones religiosas, otro derecho fundamental conculcado o mejor dos; el de asociación y el de libertad de enseñanza. La República fue para Preston «una revolución social que tuvo en el mundo contemporáneo un impacto superior al que alcanzaría Cuba…» (p. 16). Pero la República no hizo tal revolución hasta después de las elecciones de febrero de 1936 y antes el breve interludio de la

Revolución de Octubre que fue un atentado socialista y otro catalanista a la democracia y a la propia República; no hizo ni la reforma agraria, ni la reforma bancaria, ni una sola revolución constructiva. Preston está obsesionado con el talante revolucionario constructivo de la clase obrera; se le llena la boca con sus evocaciones continuas de la clase obrera. Pero ignora por completo el alto porcentaje de las clases obreras e inferiores que lucharon en el campo de Franco contra los sectores revolucionarios; y los elogios de Preston a esa clase revolucionaria «que hizo la guerra al viejo orden para construir el nuevo» (p. 16) deben contrastarse con las terribles críticas de Azaña a los sindicatos revolucionarios que ni gobernaban ni dejaban gobernar; que no construían el nuevo orden, sino el desorden anárquico, otra causa principal de la guerra civil. «La guerra —dice— surgió de la oposición violenta de los privilegiados y de sus aliados extranjeros contra los intentos reformadores de los gobiernos liberal-republicanos y socialistas» (p. 17). El libro de Preston se va convirtiendo aceleradamente en la antología del disparate histórico: acabo de indicar que esos «gobiernos reformadores» nada reformaron y quien se levantó contra la degeneración revolucionaria llamada Frente Popular, que de liberal no tenía ni la sombra, no fueron los privilegiados, sino la «media España que no se resigna a morir», como proclamó su líder político en pleno Congreso de 1936, José María Gil Robles. Pero resulta que quien desestabilizó a la República no fue el frenesí revolucionario de sus masas desmandadas, sino precisamente, según Preston, las derechas: por medio de los «desórdenes hábilmente provocados» (p. 17). ¿No se le cae la cara de vergüenza a Luis María Anson y sobre todo a Guillermo Luca de Tena, que conoce perfectamente la realidad histórica de aquellos años, por haber abierto de par en par las páginas de *ABC* a este Preston, ensalzador de la República que quemó, secuestró y robó el *ABC*?

Preston se remonta a 1808 para describir impúdicamente el conjunto de la historia contemporánea española al enunciar la tesis de que «la guerra civil constituyó la culminación de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y de la reacción que habían dominado la historia de España desde 1808» (p. 20). ¿Quiénes eran las fuerzas de la reforma, los promotores del caos de la desamortización, que hizo más pobres a los campesinos pobres, los que durante todo ese tiempo identificaban liberalismo con anticlericalismo, los que desencadenaron el caos no menos vergonzoso del Sexenio revolucionario desde 1868 a 1874, quienes ejercieron de marionetas masónicas a partir del trienio revolucionario de 1820, los asesinos de cinco presidentes moderados del Gobierno desde Prim en 1870 a Carrero Blanco en

1973? Se refiere este historiador aberrante a «los períodos en que los elementos reaccionarios han intentado utilizar el poder político y militar para frenar el progreso social» (p. 20). ¿No sabe este escritor que prácticamente todo el progreso social de la España contemporánea ha sido planeado y realizado por gobiernos de derecha, civiles o militares? ¿Qué progreso social han logrado los gobiernos y situaciones de izquierda en comparación con el progreso social de Narváez, de Cánovas, de Maura-Dato, de Silió, de Primo de Rivera, de Giménez Fernández y de Franco? Dígame nombres y realizaciones, una por una. ¿Se pueden llamar «movimientos progresistas» a los aplastados por el general Pavía en 1874 (la primera República caótica) o el general Primo de Rivera en 1923, cuando el verbo de la intelectualidad, Ortega y Gasset, clamaba porque viniera Hércules a limpiar los establos de Augías? (p. 21).

Este infeliz ignora la historia de la sociedad y la economía tanto como la historia política y militar. «De hecho —propone— hasta los años cincuenta del presente siglo el capitalismo español fue predominantemente agrario» (p. 21). ¿Y la industrialización de Cataluña desde el siglo XVIII, la industrialización de la ría de Bilbao en la segunda mitad del siglo XIX, la electrificación de España en la primera mitad del XX, las emprendieron los terratenientes? ¿Quiénes fueron los grandes nombres nacidos del «monopolio político de la oligarquía terrateniente» (p. 22), Cánovas, Antonio Maura, Canalejas, Primo de Rivera o Franco? La «comercialización de la tierra dice Preston con saña, tuvo lugar ¡en 1830 y 1850!» (p. 22), cuando según él «se pusieron a la venta simultáneamente (ni una fanega en esos años) enormes extensiones de terreno confiscado que era propiedad de la aristocracia…». La desamortización y la mal llamada reforma agraria del XIX no tocó a un solo metro cuadrado de la aristocracia, ¿estará hablando Preston de la Revolución francesa? La creación de la Guardia Civil se hizo para asegurar el orden público y la paz social, pero Preston cree que la finalidad era «proteger las grandes haciendas de los campesinos que trabajaban en ellas» (p. 23). En la revolución liberal de 1868 no intervino más que mínima y localmente el aún inexistente «proletariado militante»; pero este sabelotodo inglés nos dice que «los liberales se horrorizaron al comprobar que su rebelión constitucionalista había hecho aflorar un movimiento revolucionario de signo proletario» (p. 25). ¿Tres años antes de la Comuna de París? La Primera República se proclamó «después de una serie de levantamientos obreros», ¿dónde? Díganos Preston uno solo. «Pero esta intolerable amenaza al orden establecido fue aplastada por el Ejército en diciembre de 1874» (ibíd.). Nunca

he visto una interpretación del golpe de Sagunto (que fue puramente político y no se dirigió contra obrero alguno) como ésta del buen Preston, que sabe del siglo XIX en España menos que del siglo XX, lo que parecía imposible.

Resulta que todos atribuíamos a la Primera Restauración la fecha de 1874, pero estábamos equivocados: fue en 1876 (p. 24). Renuncio a transcribir las cosas de Preston sobre las diferencias (casi inexistentes según él) entre los partidos conservador y liberal en la Restauración. Atribuye a los caciques el donoso truco de los socialistas para inscribir a los difuntos en los censos electorales (p. 25). Y así, entre dislate y dislate, nos plantamos en la Dictadura de 1923. El general Primo de Rivera «encamaba, por tanto, el ideal del defensor pretoriano por el que suspiraba la coalición de industriales y latifundistas» (p. 31). Pero resulta que el gran líder político de los latifundistas, don Santiago Alba, fue el político más perseguido por la Dictadura desde el principio al fin de ese régimen; y que fue un Gobierno liberal-bancario, representante de los intereses latifundistas, industriales y financieros, el que terminó con don Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, el mundo de Preston al revés. De las grandes realizaciones, de la solución de los más acuciantes problemas de España por la Dictadura de 1923, ni una palabra, a eso deben de llamar *fair play* en Liverpool. Y llegamos a la Segunda República, el antecedente obligado de la guerra civil. Si el lector no se ha muerto ya de asombro y de asco por el infernal tratamiento histórico que he criticado con tanta comprensión, verá cómo crece su estupor en las secciones que siguen.

Al relatar el advenimiento de la Segunda República, Paul Preston no se digna ni siquiera discutir el carácter antidemocrático de su creación, nacida de unas elecciones municipales que no planteaban el problema del régimen, así como del desánimo de don Alfonso XIII y sus consejeros liberales, que intentaban paliar los efectos de la dictadura volviendo a la causa que originó aquel régimen. Una de las mayores equivocaciones de Preston consiste en aceptar por parte de los republicanos «el deseo de construir una República para todos los españoles» (p. 37). El propio Azaña reconoció luego que no fue así; que la República era sólo para los republicanos, por lo que resultaba legítimo excluir a sus adversarios, convertidos de este modo en ciudadanos de segunda. «La hostilidad de la derecha contra la República muy pronto se manifestó abiertamente» (p. 38). Fue precisamente al revés: lo que se manifestó abiertamente a las primeras de cambio fue la hostilidad de la República contra la derecha, en una serie de continuas provocaciones; pero Preston no dice una palabra sobre las flagrantes agresiones de la República a

la Iglesia y al Ejército, planteadas e iniciadas ya antes de que terminase el mes de abril de 1931. Las muestras de ignorancia que nos ofrece Preston son continuas. «A principios de mayo —dice— Largo Caballero hizo algo que Primo de Rivera no había conseguido: creó jurados mixtos para regular los salarios y las condiciones de trabajo»… (p. 399). Preston no sabe que los jurados mixtos son los mismos comités paritarios de Primo de Rivera con otro nombre e idéntica función. Por lo visto Preston piensa que los «pequeños propietarios católicos y conservadores» (p. 40) eran también retrasados mentales, cuando les atribuye la idea de que la República era «un instrumento sin Dios del comunismo soviético» (ibíd.). La amenaza comunista no se planteó en el seno de la República hasta la Revolución de Octubre de 1934 y el Frente Popular en 1936; desde entonces no hizo más que crecer hasta que reventó en la guerra civil. Sobre los carlistas, Preston traza una caricatura: «abogados antimodernos de una teocracia cuyo gobierno en la tierra debería recaer en sacerdotes guerreros» (p. 40). Es completamente falso que el cardenal Segura «declarara la guerra a la República» (p. 41); acató de forma expresa al nuevo régimen, como consta en sus documentos y alocuciones. Y jamás «llamó a los católicos a tomar las armas» contra la República; diga Preston dónde lo hizo. «Azaña, experto en el estudio de las relaciones cívico-militares» (p. 42), nada escribió ni había estudiado sobre ellas; era autor de un libro olvidado sobre política militar francesa, cuya edición reposaba casi íntegra en las trastiendas de las librerías. Preston alude al «plan de conspiración judeo-bolchevique-masónica» (p. 43) de la que nadie dijo una palabra durante la República, aunque la exultación de la Masonería por la proclamación del nuevo régimen, sobre la que existen documentos fehacientes, podía haber dado pie a alguna exageración semejante.

Preston prosigue su adoración por la República sin una sola prueba, sin una sola fuente, sin una sola nota; miente y engaña a cara descubierta, sin el menor apoyo documental. Su traductor llama «Sociedad de Jesús» a la orden ignaciana (p. 46), justifica la antidemocrática persecución del nuevo régimen contra la Iglesia católica como «razonable», porque la «construcción de una nueva España exigía la eliminación de los tentáculos que la Iglesia extendía sobre múltiples aspectos de la sociedad» (p. 47). Una vez más, y creo que debería hacerlo a cada página, debo recriminar a Luis María Anson y a Guillermo Luca de Tena su empeño en promover ante los españoles de centro-derecha, que forman el grueso de los lectores de *ABC*, la figura especialísima de este desorientado historiador inglés iconoclasta, que se cisca en todo lo que es más sagrado para los lectores de *ABC*. Los dos han

cometido así un crimen de información, un crimen de Historia. Y Preston añade el escarnio a la agresión; en la misma página habla del «supuesto anticlericalismo de la Constitución republicana» (p. 47).

Una vez más Preston insulta a *ABC* cuando atribuye a la «prensa derechista» la ofensiva contra Azaña por el crimen de Casas Viejas (p. 52); pero era un auténtico crimen ese alevoso asesinato de varios campesinos por la venganza de las fuerzas del Gobierno impulsadas por órdenes represivas del Gobierno. *ABC*, en efecto, se distinguió en la denuncia implacable contra la responsabilidad de Azaña, a quien la tragedia de Casas Viejas dejó políticamente herido de muerte. El viaje de Gil Robles a Alemania en 1933 se interpreta por Preston como una (falsísima) connivencia con el partido nazi (p. 54); sentado lo cual, Preston identifica a la CEDA con el nazismo y el fascismo, ésa fue precisamente la tesis de los socialistas españoles que aún la mantienen. Reconoce Preston que Largo Caballero, el líder socialista, dirigió la campaña para las elecciones de noviembre de 1933 con «extremismo radical»; pero ataca a Gil Robles, que condujo su campaña de modo impecablemente democrático, como incurso en el mismo extremismo, lo que constituye una flagrante mentira (p. 55).

A partir de entonces, de 1934 a 1936, Largo Caballero, cada vez más sugestionado por los comunistas que le proclamaban «Lenin español», orienta al PSOE en sentido revolucionario, con objetivo en la revolución violenta para la conquista del poder. Preston, como Jackson, como el propio Tusell, quitan importancia a las declaraciones revolucionarias que incendiaban a las masas y las encaminaban al bolchevismo, término que aparece entonces frecuentemente en las proclamas de las Juventudes Socialistas. Esos autores de izquierda (o que se comportan irresponsablemente como tales) atribuyen solamente valor retórico a las declaraciones revolucionarias; pero octubre de 1934 y julio de 1936 iban a demostrar a sangre y fuego que la revolución socialista y comunista no era retórica, sino violenta y por supuesto antidemocrática. «El PSOE —dice Preston al referirse a ese período— empezó a adoptar una táctica de revolucionismo retórico» (p. 58). Establecida tan engañosa tesis, Preston insiste en la identificación de *ABC* con el fascismo duro: «Desde este momento (mayo de 1934) la Prensa monárquica, además de acusar a Gil Robles de debilidad, empezó gradualmente a hablar de la conquista del Estado como de la única vía segura para la creación de un nuevo régimen autoritario y corporativo» (p. 60). Ya que G. Luca de Tena y Anson no defienden a *ABC*, sino que se suman a las tesis de Preston, tendré yo que asumir esa defensa. Con una pregunta: ¿Puede Preston citar una sola

página de *ABC* en toda la República en la que se incite a la conquista del Estado para implantar un régimen fascista? ¿Es que no conoce Preston la polémica que Juan Ignacio Luca de Tena entabló con José Antonio Primo de Rivera acerca del fascismo, que el director de *ABC* rechazaba de plano?

«Gil Robles seguía negándose a prestar el juramento de lealtad a la República», dice Preston en la p. 61. Sin la promesa de lealtad al nuevo régimen no se podía tomar posesión del escaño en el Congreso; Gil Robles formuló la promesa y aceptó la legalidad republicana de acuerdo con la doctrina constante de la Iglesia sobre el acatamiento de los católicos al poder constituido. (El general Franco prestó la misma promesa e hizo que muchos militares siguieran su ejemplo, para poder mantenerse en activo dentro del Ejército). Por supuesto que Largo Caballero no formuló en 1934 un calendario para la revolución futura; tampoco lo hizo en 1936. Lo que sí proclamaba es la urgencia de conquistar el poder mediante la revolución, una vez que lo consiguió en febrero de 1936, ¿para qué iba a programar una revolución si podía realizarla, como en efecto hizo, desde el poder del Frente Popular?

Rafael Salazar Alonso, ministro de la Gobernación en 1934, no «provocó una serie de huelgas», como le acusa Preston sin la menor prueba (p. 63), sino que las reprimió con mano dura pero con la ley en la mano; eso le valió la sentencia de muerte (sin juicio, por supuesto) en la guerra civil.

El relato de Preston sobre el estallido de la Revolución de Octubre de 1934 es históricamente absurdo. Según él, la CEDA anunció el 26 de septiembre que «no apoyaría más a un gobierno minoritario», con lo que provocó la crisis revolucionaria mientras las fuerzas republicanas «rompieron relaciones con el Presidente» (p. 65). La verdad histórica es precisamente la contraria. No había tal «gobierno minoritario», sino un gobierno mayoritario de coalición constituido en virtud de un pacto de legislatura entre los radicales y la CEDA, si bien ésta se mantenía provisionalmente fuera del consejo de ministros. La CEDA ejercería el 1 de octubre de 1934 (no el 26 de septiembre) su derecho constitucional de reclamar el poder al ser el partido con mayor número de escaños en las Cortes y naturalmente logró el nombramiento de los tres ministros que deseaba. La CEDA por tanto no provocó la crisis de octubre de 1934; fueron los republicanos y socialistas, derrotados en las anteriores elecciones de noviembre de 1933, quienes rompieron relaciones no con el Presidente, sino con la democracia, al negarse a aceptar el normal ejercicio de la Constitución y alzarse contra un gobierno legítimo de clara mayoría.

Preston pasa como sobre ascuas por la Revolución de Octubre (p. 66), aunque acierta al transcribir la frase de Gerald Brenan que consideraba a esa revolución como la primera batalla de la guerra civil. La exposición de lo sucedido en 1935 bordea el ridículo, entre continuos errores. Preston hace a Franco jefe «del Estado Mayor General» (p. 67), cargo que no existía en la República; su cargo auténtico fue el de jefe del Estado Mayor Central. Goded no fue nombrado «inspector general», sino director general de Aeronáutica (p. 67). La oposición de los generales al golpe de Estado en diciembre de 1935 (Preston no concreta la fecha), no se debió a la fuerza de los mineros en Octubre de 1934 (que fueron derrotados por fuerzas militares mínimas) (p. 69), sino a la opinión del general Franco sobre la peligrosa división del Ejército que impedía la proclamación de un alzamiento. Para Preston los materiales de la campaña electoral de 1936 fueron encargados por Gil Robles «a los nazis» (p. 69) y constituían «un verdadero arsenal»; las dos cosas no son un error sino una falsedad. Preston apenas concreta datos sobre las elecciones de febrero de 1936 (ibíd.) y ni menciona los pucherazos de la izquierda que lograron una mayoría aplastante, falseada e ilegal. Más aún, Preston atribuye los trucos y corruptelas electorales a la derecha y no a quien de verdad los prodigó, que fue la izquierda (p. 70).

Ya en la primavera trágica de 1936, «Gil Robles hizo todo lo posible para secundar a los partidarios de la violencia» (p. 72). Fue exactamente al contrario: hizo lo posible por oponerse a la violencia. El caos del Frente Popular, denunciado por las derechas en las Cortes repetidas veces, fue, según el alucinado Preston, «orquestado por la derecha» (p. 76). Esto no es Historia, sino propaganda barata.

Sobre el accidente de tiro que costó la vida al general Balmes en Las Palmas, creo que Preston, en lugar de decir cosas raras sobre el invento del «biógrafo oficial de Franco» (p. 81) que naturalmente soy yo, y pese a tan alto nombramiento no recibí ni una recompensa ni una condecoración mínima, debería repasar el expediente del que yo tomé mis datos, que se conserva en el Servicio Histórico Militar; pero a Preston le repelen los archivos, sólo se deja guiar por prejuicios de propaganda. Y una observación final sobre el horrible tratamiento histórico que Preston da a la República; el factor religioso, que fue determinante, no recibe la más mínima atención.

Preston comienza el estudio de la guerra civil con una afirmación ignorante: «Los conspiradores no habían previsto que su sublevación se convertiría en una larga guerra civil» (p. 83). Acaba de citar el libro de Luis Bolín: si lo hubiera leído comprobaría que Bolín se pasó gran parte de la

noche del 18 de julio hablando con Franco en la habitación que compartían los dos en un hotel de Casablanca, y que Franco le aseguró que la guerra sería inevitablemente larga. El relato del alzamiento es una caricatura. Preston presenta a los párrocos rurales de Andalucía y Extremadura bendiciendo a la «tiranía de los caciques» (p. 85), interpretación tomada de *la Traca* más que de la documentación histórica; Preston opina así para justificar el asesinato en masa de sacerdotes en aquellas regiones. La próspera crianza de los toros de lidia, que hoy constituye un renglón importante de la economía, se interpreta folclóricamente por Preston como «un capricho de los propietarios que había contribuido a la miseria local» (p. 85). La reconstrucción del asesinato de García Lorca (p. 87) es un amasijo de mentiras indigna de un historiador, sobre todo, ante la copiosa investigación disponible sobre el suceso. El protagonismo en la derrota de los rebeldes en el Cuartel madrileño de la Montaña no es de los milicianos, que actuaron como simple comparsa, sino de las fuerzas regulares —sobre todo artillería— y de Orden Público, todas bajo mando militar que obedecía al Frente Popular (p. 89). Dice Preston que en Madrid, «los partidos de izquierda formaban milicias» (ibíd.). Ninguno lo hizo; las milicias se habían creado ya meses antes por comunistas y socialistas, no por los republicanos. «El Campesino» no era un «peón caminero», sino un constructor (p. 89). Las columnas de Mola fueron, según este genio de la historia militar, «detenidas inexplicablemente por inexpertas milicias obreras» (p. 92). La abrumadora superioridad de hombres y medios explica sobradamente esa detención, cuyo factor principal fueron los elementos regulares y de Orden Público que, bajo mando militar, frenaron a las columnas rebeldes en la Sierra. El relato que nos ofrece el buen Preston sobre la formación del puente aéreo de Franco, organizado sólo sobre la base de aviones alemanes e italianos (p. 94) es lamentable. ¿Por qué no se ha molestado en repasar los estudios clarísimos y documentados del general Jesús Salas? En su fase inicial, la más decisiva de todas, que dura desde el mismo 19 de julio hasta fin de mes, los aviones del puente eran solamente españoles, más un Junkers alemán requisado por los rebeldes; desde principios de agosto se incorporan los aviones italianos y después los alemanes. El paso naval del Estrecho tuvo lugar el 5 de agosto, no el 6.

Preston no da una a derechas. Adelanta en dos meses el ascenso del teniente coronel Yagüe y en un día la toma de Mérida, descrita disparatadamente así: «una antigua capital romana próxima a Cáceres» (p. 94). Preston, naturalmente, cae, sin prueba alguna, en la leyenda sobre las matanzas de Badajoz, reproduce el falso testimonio de Jay Alien y vuelve a

equivocarse en la fecha de la toma de Talavera, un acontecimiento decisivo en la historia de la guerra civil, que fue el 3 y no el 2 de septiembre (p. 96). Como no podía ser menos, Preston cree a pies juntillas en uno de los principales tópicos de la propaganda roja; al disculpar las ejecuciones del Frente Popular como justo desahogo de la espontaneidad popular y condenar a las del bando nacional como fríamente premeditadas (p. 97), absurda distinción que será esgrimida después por otros «historiadores» de su cuerda, como Julio Aróstegui. También sintoniza con quienes afirman, en favor de la República, que los asesinatos, saqueos y destrucciones, obra de incontrolados, cesaron pronto; lea, por favor, la opinión contraria de Azaña para el año 1938, que atribuye la continuidad de la represión al gobierno Negrín precisamente para desautorizar con baños de sangre renovados a los propósitos pacificadores del presidente de la República.

Preston no se ahorra un solo tópico, una sola mentira. Se apunta a la mentira de los «rehenes» del Alcázar de Toledo (p. 100) y niega la llamada telefónica de Luis Moscardó a su padre, perfectamente documentada (p. 100); se ha dejado convencer por su amigo el parcialísimo Southworth, que ha sentado plaza de ignorante absoluto en tan heroico y delicado asunto. Otra confusión de fechas, como casi siempre; adelanta en un día la liberación del Alcázar (p. 102). El ejército de África «iba acompañado por los hijos de los latifundistas que habían formado un regimiento de caballería» (p. 100). Esto significa que en la zona andaluza adscrita al bando nacional existían setecientos latifundios y por supuesto no hay rastro de tal regimiento en los partes —se conservan todos—, ni Franco hubiera permitido jamás la recluta de un regimiento por motivos de clase. «El resultado de la guerra se decidió en las cancillerías de Europa» (p. 107). Las aportaciones y apoyos exteriores a los dos bandos resultaron, a fin de cuentas, equilibradas en hombres y material; y la guerra la decidieron los españoles. Es curioso que Preston llame «supuestas» (p. 109) a las atrocidades perpetradas por los anarquistas, se ve que no ha consultado los estremecedores relatos del comunista Líster sobre los horrores de los anarquistas en el Consejo de Aragón, organismo al que, por orden del gobierno, hubo de suprimir por la violencia con su 11 división.

Insiste Preston en considerar a la República en guerra como un «régimen democrático» (p. 123), pese a que no celebró elecciones, eliminó a docenas de diputados del centro y la derecha, no utilizó, salvo un par de sesiones de propaganda, al Parlamento ni siquiera hizo caso al gran demócrata Stalin que a fines de 1936 recomendó inútilmente a Largo Caballero, jefe del gobierno, que guardase al menos una apariencia de democracia formal. Las batallas ante

Madrid y en torno a Madrid se describen a través de una sarta de despropósitos (p. 126). Y es que «las fuerzas de Franco y de Mola pretendían reunirse en la capital…, a mediados de octubre». En esa fecha no había «fuerzas de Franco y de Mola» sino Ejército del Norte a las órdenes de Mola, y al mando supremo de Franco. En la batalla de Madrid ya no existía el Quinto Regimiento comunista; la XI Brigada Internacional no fue «la unidad mejor organizada», ni más eficaz en la defensa de Madrid; Preston desconoce la sobria crónica militar del jefe de Estado Mayor de la defensa, teniente coronel Rojo, que prácticamente no menciona a las brigadas internacionales. Y menos aún conoce la magistral obra del general Ramón Salas sobre el Ejército Popular, en la que desmonta la leyenda del apoyo popular a los defensores de la ciudad; no se pudo formar ni una brigada de voluntarios de Madrid. Es absolutamente falso que «una brigada de mujeres participó en los combates» (p. 132), no hay ni rastro en la documentación, diga Preston de dónde ha tomado tan calenturienta noticia. Niega la total dependencia soviética de las brigadas internacionales, afirma que «los moros casi llegaron al centro de la ciudad» (p. 139); una sola patrulla penetró hasta el paseo de Rosales y se perdió, pero Preston les ve rechazados «por el pueblo de Madrid después de una heroica refriega cuerpo a cuerpo». Indigna tanta mentira, tanta leyenda gratuita, sin un solo documento, sin una sola prueba.

Ni la más delirante propaganda roja se atreve a atribuir a la represión que se produjo en la zona nacional la cifra absurda de doscientos mil fusilamientos (p. 155). No cabe más inadecuada descripción de la Falange que denominarla «un equivalente español del Tercer Reich alemán» (p. 157). El Tercer Reich era un Imperio y una época, la Falange un partido que jamás alcanzó el poder. ¿Cabe mayor divergencia? Serrano Suñer ideó una planificación política de la zona nacional no «con» Nicolás Franco, sino frontalmente en su contra (p. 157). Atribuir la caída del avión de Mola a un ataque erróneo debido a cazas nacionalistas (p. 160) es una simple e infundada falsedad. El sacerdote Enrique y Tarancón «se sentía perplejo ante la militancia de la jerarquía eclesiástica» (p. 164). Nada sabe Preston de don Vicente, que se libró milagrosamente de la zona roja, apareció en Tuy, se adhirió fervorosamente al Movimiento y militó con tanto entusiasmo en la Cruzada que se esforzó en lograr la síntesis perfecta entre la Falange y la Acción Católica. Los cuatro nombramientos episcopales de que gozó iban firmados, sin excepción por el general Franco; sus adláteres le forjaron una leyenda de antifranquismo temprano que nada tiene que ver con la realidad. Vea Preston cómo pruebo esta tesis en mi libro *La Hoz y la Cruz*, aunque su

ignorancia sobre la historia de la Iglesia española es tan abisal que dudo pueda comprender una palabra del texto.

«Para el cardenal Goma la causa de Franco era la causa de Dios» (p. 164). Y para el resto de los obispos españoles, y para los dos Papas Pío XI y Pío XII, y para el Episcopado mundial que reaccionó de manera prácticamente unánime a la Carta colectiva de los obispos españoles, firmada el 1 de julio de 1937. Al hablar de la carta Preston tenía forzosamente que caer en el error: «el texto —afirma— describía la Cruzada» (p. 164). Lo malo es que el texto no utilizaba ni una sola vez el término «cruzada». Otro de los sensacionales descubrimientos de Preston es el «franquista Víctor Pradera» (p. 166), a quien los rojos amigos de Preston no permitieron ser franquista porque le fusilaron en su zona. La «reaparición del antisemitismo» (p. 166) es una paparrucha; no podía reaparecer lo que nunca había aparecido en los tres últimos siglos. Y de los falsos *Protocolos de los sabios de Sión* se han hecho numerosas ediciones en España desde la aparición del texto francés a principios de siglo hasta hoy mismo, no se trata de excepción alguna en el régimen de Franco. «La fórmula legal que sustentaba al Estado nacionalista procedía de las idea del grupo monárquico Renovación Española» (p. 167). No hay tal. La fórmula legal consistía en el decreto de la Junta de Defensa firmado el 29 de septiembre de 1936, y de las disposiciones constitutivas emanadas del propio Franco.

«La vida intelectual descendió a extremos de estulticia» (p. 168); Preston debe de referirse a otra vida intelectual, porque cita «quemas rituales de libros» que jamás se celebraron en la zona nacional. En el campo de la cultura Preston se comporta como un ajeno. «Las artes —dice— se limitaban a la representación más roma y la música virtualmente no existía». Zuloaga y Sert, entre docenas de ejemplos, eran, para Preston, romos; y por supuesto nunca supo este intérprete de la Historia que el primer presidente del Instituto de España, creado por el gobierno de Franco en 1938, se llamaba Manuel de Falla. Preston se despeña en sucesivos abismos de ridículo: «Los sombreros —dice— apuntaban que sólo los rojos iban con la cabeza descubierta» (p. 169). Los sombreros no apuntaban nada; fue una clásica sombrerería, Brave en la calle de la Montera, quien se adornó en 1939 con un eficacísimo reclamo comercial: «Los rojos no usaban sombrero». Y así era en la realidad.

La descripción de Preston sobre la zona roja es todavía más lejana. «Durante un breve período reinó en toda la zona el terror» (p. 175). Un breve período que según testimonios clarísimos de Manuel Azaña e Indalecio Prieto duró desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. El breve terror se debía, naturalmente, a los «incontrolados»; Preston hace suya la excusa del

siniestro Santiago Carrillo. Tan documentado como siempre, Preston cita al gran especialista en la represión roja contra la Iglesia, hoy arzobispo de Extremadura, como «fray Antonio Montero» (p. 177).

La clave política para la evolución de la zona roja fue el acoso del Partido Comunista, apoyado en los consejeros soviéticos, al poder militar y al poder político. Esta tesis la ha establecido definitivamente Burnett Bolloten, a quien Preston cita, pero sin haber comprendido la profundidad de la investigación de Bolloten; la alusión de Preston es superficial y frívola, no toma en consideración los demoledores informes de Prieto sobre el auge de los comunistas (p. 195). En torno a problema tan importante será inútil buscar citas y documentos —todos existen— en la narración de Preston. Para quien la derrota de Guadalajara «supuso la aniquilación del importante contingente de tropas italianas» (p. 199). Una mínima cifra de prisioneros, que no superó el orden de las centenas; una pequeña cantidad de material, eso fueron las pérdidas. El CTV italiano acabó la batalla a vanguardia de sus posiciones de partida y pronto, convenientemente reorganizado, participó con casi todos sus efectivos en las campañas del Norte, en las de Aragón, en la de Cataluña y hasta en la Ofensiva General, como Franco designó a la que terminó con la zona republicana en los muelles de Alicante. Demasiado rendimiento para una unidad aniquilada.

Preston piensa que el bombardeo de Guernica tuvo carácter de símbolo; pero los monumentos simbólicos de Guernica, el Árbol y la Casa de Juntas, quedaron intactos (p. 200). El relato de Preston sobre Guernica era ya anacrónico cuando se publicó en este libro; hoy está reducido a basura tras las investigaciones de Jesús Salas. La reconstrucción de la batalla de Teruel, que ofrece Preston, es sencillamente cómica (p. 214). El elogio que derrama sobre el general Rojo: «El omnipresente cerebro del mando estratégico republicano» (p. 216), es la expresión más extraña del libro, sobre todo aplicada a quien, en definitiva, resultó artífice de la más sangrienta derrota de la República. La campaña de Cataluña, la más brillante ideada y ejecutada por Franco en la guerra civil, se despacha de medio plumazo. Después de haber escrito un libro con más de siete mil documentos sobre los meses finales de la guerra, no quiero ensañarme con el capítulo final que el pobre Preston dedica a ese período, sobre el que no sabe una palabra. Por supuesto se equivoca en la fecha para la caída de Madrid, que no fue el 27, como él dice, sino el 28 de marzo de 1939. La agonía del mando y la zona republicana, que resulta especialmente dramática, no merece la atención de este aficionado, que nos presenta a un «Madrid silencioso y aterrado», sin molestarse en repasar las

numerosas fotografías del entusiasmo de la capital que salía de la pesadilla de casi tres años (p. 223).

En el epílogo concentra Preston toda su insuficiencia y todo su odio: «Desde 1939 —dice— hasta la muerte de Franco, España estuvo gobernada como un país ocupado por un ejército extranjero» (p. 226). Pero el ejército extranjero, las Brigadas Internacionales, habían desaparecido ya. Preston no duda en describir falsedades enormes, como el traslado de los restos de José Antonio entre Alicante y El Escorial, donde los falangistas aprovechaban los descansos en cada etapa para asaltar prisiones y fusilar presos; cite un solo caso para justificar su mentira. En el epílogo Preston se supera a sí mismo; presenta a quienes habían confiado en la CEDA decepcionados por el golpe de Sanjurjo (p. 227), pero resulta que el golpe de Sanjurjo ocurrió en 1932 y la CEDA se fundó al año siguiente. «El régimen de Franco —pontifica en la p. 228— se preocupó especialmente del mantenimiento de la estructura social rural amenazada por la República» (p. 228). Es otra enormidad; el régimen de Franco provocó el cambio más profundo y amplio de la estructura rural española, porque en 1936 España era un país rural de economía agraria y en 1975, fecha de la muerte de Franco, una parte inmensa de la población rural había abandonado el campo y España era predominantemente un país moderno, industrial y de servicios. «Al no existir ninguna red de asistencia social —sigue desbarrando en la p. 228— no trabajar significaba morir de hambre». Pero esa situación es la que dejó la República, porque Franco fue el gran creador de la Seguridad Social española, el estadista que terminó con el hambre en la historia de España y que consiguió la desaparición del paro y la implantación del pleno empleo.

«El franquismo —sigue la sarta de disparates— fue simplemente el último de una serie de intentos militares de bloquear el progreso social en España» (p. 229). Por el contrario, los dos regímenes militares del siglo XX en España han logrado para la nación el máximo progreso social en toda la Historia; la verdad es que no me explico cómo la ignorancia de Preston se despeña con tanto cinismo y tanto ridículo. En fin, a tal libro tal bibliografía; sobran casi todos los libros recomendados al final y faltan casi todos los esenciales. Entre la copiosa bibliografía sobre la historia de España, este libro es la peor historia de la guerra civil que se conoce; ni siquiera se han atrevido sus editores a reeditarla desde que se cubrió de polvo en las estanterías de los almacenes

EL CRIMEN DE PRESTON Y ANSON: UNA ANTIBIOGRAFÍA DE FRANCO

El análisis detallado que acabo de ofrecer sobre el libro de Paul Preston acerca de la guerra civil no se debe al interés interno de ese abominable panfleto, sino a una sencilla consideración lógica. Uno de los objetivos polémicos de mi presente libro consiste en la demolición de la biografía de Franco publicada por Preston en 1992 y convertida inmediatamente en la biblia negra del antifranquismo. Pero el período clave en la vida de Franco es la guerra civil; en ella remató toda su trayectoria anterior y de ella dependió todo lo que Franco fue e hizo después. Por tanto si puedo demostrar, como acabo de hacer —y el lector, así lo espero, reconoce— que la historia de la guerra civil de Preston es un amasijo rechazable de insuficiencias, falsedades y mentiras, su biografía de Franco cae por la base, sepultada en la insuficiencia del libro fundamental precedente.

Pero la biografía de Franco perpetrada por Preston no es sólo de Preston. Hubiera pasado sin pena ni gloria como todos sus libros anteriores y posteriores si no hubiera gozado de un lanzamiento excepcional por parte de uno de los personajes que a su vez voy a presentar como uno de los grandes evadidos de la derecha histórica, tal vez el más nefasto cultural, política e históricamente de todos ellos; estoy hablando de Luis María Anson, a quien voy a dedicar en este libro un capítulo sin contemplaciones. Anson, converso al más frenético de los antifranquismos, necesitaba un historiador con cierto nombre para apoyar en él sus retorcidas actitudes y su implacable hostilidad contra el general Franco, por el imperdonable delito de haber dejado en la cuneta de la Historia al amo y señor, ídolo y fetiche de Luis María Anson, que, como sabe el lector, no es otro que un príncipe fracasado y doliente, don Juan de Borbón y Battenberg. No podía utilizar para ese fin siniestro y antihistórico, fundado en mentiras históricas colosales, a historiadores españoles que generalmente aborrecen al propio Anson. Se topó entonces con un historiador inglés, Paul Preston, y decidió elevarle al estrellato de la Historia contemporánea de España. Anson adoptó a Preston en *ABC*, diario monárquico que era de derechas y del que era director. Le entregó el privilegiado espacio de la Tercera. Le convirtió en protagonista del panfleto impreso en papel de estraza, real y simbólico, *ABC cultural*. Y gracias al apoyo de Anson, que no siente en absoluto el ideal ni la solidaridad histórica de la derecha, que sólo atiende a sus intereses personales, muchos españoles

de bien compraron el *Franco* de Preston y creyeron que se trataba de una biografía seria y no de una endeblez metafísica. Para colmo, el editor de la traducción española tendió a los lectores una trampa ingenua pero muy eficaz: cambió el título. El título inglés era simplemente *Franco*. La traducción española incorporó la palabra *Caudillo*. Este término, muy grato a Franco, nunca se utiliza por la izquierda salvo entrecomillado o con despectiva minúscula. Aquí no; aquí aparecía a toda envergadura, como indicando que el libro era favorable a Franco. La izquierda sabe de sobra que ya al borde del siglo XXI los libros desfavorables a Franco no se venden, sólo se almacenan; véase el espantoso fracaso del penúltimo libro del antifranquista visceral José Luis de Vilallonga, *El sable del caudillo*, con el que se han estrellado él y su editorial; después hablaremos algo del caso. Con el libro de Preston muchos lectores españoles cayeron en la trampa; a la quinta página advertían la trampa y cerraban el libro. El libro ha sido uno de los menos leídos de estos años; pero se ha vendido mucho entre las derechas, gracias a la trampa. Para colmo, la degradación histórica que ha contagiado a parte de la derecha española por otro viraje histórico inconcebible, el de don José María Aznar, azañista fervoroso gracias a su culpable ignorancia de Manuel Azaña, puede haber sugerido a una parte de la derecha española, que se configure como derecha antifranquista, algo que históricamente siempre me ha parecido una contradicción *in terminis*. Pero la influencia realmente nefasta ha sido la de Anson, que por cierto ofició con ritual especialmente alienado (y coreado por sañudos abucheos) en la presentación del libro de Vilallonga. Dicho sea todo como aperitivo para el capítulo de este libro dedicado a Luis María Anson.

En mi libro de 1994, *No nos robarán la Historia*, publicado en esta misma Editorial, propiné un primer repaso somero a esta biografía de Preston y dirigí una seria salva de aviso a Luis María Anson por sus veleidades históricas, que entonces se centraban más bien en la exaltación acrítica de la figura histórico-literaria de don Francisco Pérez Martínez, conocido literariamente como Francisco Umbral. Por lo visto a Preston no le sentó bien mi crítica, en la que me limitaba a señalar una antología de errores garrafales, en su biografía de Franco; y ha tenido la amabilidad de manifestar en varias ocasiones su disgusto, que le agradezco; porque al menos ha podido advertir que, entre la pléyade de ignorantes y resentidos que se han rendido incondicionalmente a su libro gordo de Petete, hay al menos un historiador español que no se ha tragado el ladrillo y le ha descalificado con documentos, argumentos y abundancia de razón histórica, amén de algún otro revés adobado no con aborrecimiento, sino con sentido del humor. El señor Anson ha encajado bien

mis críticas, pero me temo que con efectos insuficientes. Por eso tengo que volver en este libro sobre el *Franco* de Preston, con mejor encuadre histórico (que ya he ofrecido en el análisis sobre la guerra civil prestoniana) y con mayor agudeza en la detección y destrucción de los disparates. Si después de este nuevo comentario algún lector sigue creyendo en la capacidad de Preston como biógrafo de Franco y como historiador de la España contemporánea, no será por mi culpa; también entre los lectores españoles, incluso entre una minoría culta de centro-derecha, existen fanáticos cultivadores del sado-masoquismo y admiradores fervientes de la política cultural que desplegaba en mala hora cierto personaje de quien no quiero acordarme.

La biografía de Preston es una doble venganza

Paul Preston titula a su prólogo *El enigma del general Franco*. Imita, sin citarle, a Stanley G. Payne, que también creyó enigmática la personalidad del Caudillo. Es cierto que Franco tuvo presentes siempre a los grandes héroes de la Historia; hablaba a veces de los «Reyes y caudillos que hicieron España», pero Preston, al recordarlo con la mala uva que le caracteriza (p. XVII), comete ya su primer error grave; porque si conociera a Franco como el autor de este libro tuvo el honor de conocer y tratar, sabría que Franco no se proponía a esos héroes como *predecesores*, sino como *ejemplos* a la hora de administrar un amplísimo poder que él no solicitó nunca, como veremos, sino que exigió a quienes, sin pedirlo él nunca, le propusieron la elección. Mis diferencias con Preston van a ventilarse muchas veces en este libro bajo estas dos circunstancias: primera, mi conocimiento y su desconocimiento personal del personaje; segunda, una continua valoración de matices, que él sustituye casi siempre por una oclusión de prejuicios. Sé que juego con ventaja, que Preston tratará de compensar con mi descalificación; pero yo, para descalificarle, me voy a fundar en sus dependencias y en el análisis de sus escritos. Soy absolutamente independiente; Preston, que desconoce hasta extremos cómicos la realidad española y es bastante lejano, comprenderá que yo no he obtenido ni obtengo absolutamente nada cuando me creo obligado a defender a Franco o mejor a describir al Franco auténtico; él, por el contrario, tiene forzosamente que atacarle porque se lo exigen sus dependencias políticas y sectarias.

Un ejemplo temprano del desconocimiento personal de Franco por Preston: «era tímido en privado, y se encontraba inhibido y a disgusto en público», (p. XVIII). Desde 1931, a la llegada de la República, hay algo de verdad en ese retrato: «La República —me decía uno de sus íntimos, el

almirante Jesús Fontán— le cambió el carácter; hasta entonces se comportaba de forma extrovertida y hasta despreocupada, desde su choque con Azaña se volvió receloso y reservado». El profesor Sainz Rodríguez, que le conocía desde los tiempos de Oviedo, me aseguró lo mismo. Con frecuencia Preston describe, como si fuese psicólogo de Franco, rasgos y razones de su carácter que desconoce por completo: piensa, por ejemplo, que ese talante huraño era la razón de su «profundo sentido de inadaptación» (ibíd.), cuando Franco fue siempre un prodigio de adaptabilidad.

Otra vez vuelve a fallarle a Preston el sentido del contexto histórico. Ahora nos dice que «obtuvo el poder sólo por la ayuda de Hitler y Mussolini y sobrevivió durante cuarenta años por una combinación de represión salvaje, la necesidad estratégica de las grandes potencias y la buena suerte» (ibíd.). Franco obtuvo el poder el 28 de septiembre de 1936, cuando sólo había recibido una ayuda mínima de Alemania e Italia, muy inferior a la conseguida ya por la República. No era aún responsable de la gran mayoría de la represión en una zona sobre la que no ejercía mando territorial. Le favoreció el giro estratégico de las potencias occidentales, pero ¿desde cuándo aprovechar una circunstancia favorable constituye un reproche? Y la suerte me parece una explicación poco científica, aunque muy positiva; Franco no sólo tuvo suerte, sino que supo merecérsela. Preston tiene que conceder de mala gana algunos aspectos positivos en la trayectoria de Franco, pero los estropea todos al atribuirle «una mediocridad intelectual sorprendente que le llevaba a creer en las ideas más banales» (ibíd.). Esta opinión despectiva —lugar común de toda la propaganda antifranquista, de Anson a Preston— es rematadamente falsa. Lean los falsarios el número extraordinario que dedicó el Servicio Histórico Militar a los escritos militares de Franco y verán cómo Franco poseía una formación cultural relevante en los aspectos profesionales y considerable en los problemas políticos, de signo nacional e internacional; su preparación cultural en asuntos generales y en varios campos de la cultura era superior a la media de sus conmilitones, que tampoco era despreciable, hasta el punto que se ha podido hablar de un «98 militar». Escribió dos libros de sumo interés autobiográfico y el hipercrítico (Tusell), que dice haberle encontrado alguna falta de ortografía, haría mejor en evitar las que se han deslizado en sus libros, firmados por un catedrático de Universidad, no tocado ciertamente por la vara de Clío. Como no conoce a Franco, Preston cree que «su clave consistía en evitar las definiciones concretas», (p. XVIII), pero ésa no es una característica de Franco sino del modo de ser de su tierra galaica. Presentar a Franco, como quien «reescribió regularmente su propia vida»,

(p. XIX) es un nuevo rasgo de desorientación; nunca escribió su vida propiamente tal, aunque dejó escritos o dictados algunos trazos autobiográficos. En sus autorretratos, Franco dejó escapar según Preston toda la frustración de su vida; pero la vida de Franco es plenitud, no merece ni a cien leguas el calificativo de «frustrada». Lo que dejó insinuado no fue la frustración, sino el ideal. Por eso ni en *Raza* (cuya reedición acabo de prologar para Editorial Planeta) ni en otro intento alguno trató Franco de fomentar su hagiografía; si hubiera escrito Preston la suya con el personaje al lado, como yo tuve ocasión de hacer, hubiera podido comprobarlo, pero el Franco que Preston veía no era Franco, sino una contrafigura creada por el odio y el resentimiento socialista de antibiógrafo.

En lugar de exhibir la pretenciosa tesis del enigma de Franco, Preston pudo ahorrarse su alambicado prólogo escribiendo una sola frase: «Franco era un gallego». Afirma fatuamente que su libro es un intento de observar a Franco más de cerca y con más detalle que en cualquier biografía previa. Se equivoca; capta todos los detalles del Franco falso, del Franco deformado; su biografía es la que desean la Internacional Socialista y la Masonería, las dos grandes potencias semisecretas a las que Franco desenmascaró y venció. La biografía de Preston es una venganza cabal, no un retrato histórico.

La «construcción» de un héroe

Cada capítulo de Preston va a competir con los demás en un muestrario de inconsecuencias. ¿Por qué «construcción» de un héroe? (p. 1). ¿Es que Preston cree a Franco un héroe prefabricado artificialmente? ¿Ignora que la carrera propiamente heroica de Franco no da comienzo, ante el reconocimiento público, hasta la campaña de Melilla en 1921, la cual queda fuera de este capítulo? Nació, dice, en la remota región de Galicia. Pero Galicia nunca ha sido remota, ¿lo es Escocia en Gran Bretaña? Preston debería consultar las guías de ferrocarriles de la época para poner de acuerdo las horas en que se llegaba de la costa gallega a Madrid a fines de siglo; se contradice en la información de las páginas 2 y 14 en un rasgo de su característica imprecisión. La observación clasista de Preston, que depende de su obsesión inglesa, no sirve para explicar la sociedad española, donde la familia de un intendente de la Armada, que llegó al generalato y que además tenía probada su hidalguía desde varias generaciones antes, no puede encuadrarse en la «clase media-baja» (p. 2), vecina del proletariado. El cuerpo administrativo no era considerado «inferior» en las escalas de la Marina, ¿de dónde lo habrá sacado este audaz? A bordo del *Azor*, Franco no solía llevar el

uniforme de almirante de la Armada (p. 3), ¿no ha visto fotos Preston?, aunque tenía derecho a ello como capitán general de los tres ejércitos desde su nombramiento como tal en la guerra civil. El retrato de Nicolás Franco padre como un ogro violento (p. 3), no corresponde a la realidad. No fue un buen marido y se alejó de su familia, pero nunca dejó de preocuparse por sus hijos. Cuando Franco vio mi primer apunte sobre su padre, apostilló: «Sí, pero nunca le privaron de la patria potestad». La descripción de Franco niño como aislado, solitario e incomunicado es pura fantasía; fue un niño alegre y enteramente normal. Preston se obsesiona con la «voz atiplada» de Franco y pretende deducir de ella todas las pautas de su vida. Se hubiera ahorrado muchos disparates si hubiera consultado, para ediciones posteriores, el luminoso estudio odontológico del doctor Julio González Iglesias, *Los dientes de Franco* (Ed. Fénix), donde nos presenta a un Franco que desde la niñez a la muerte se vio seriamente afectado por graves dolencias bucales y dentarias, a las que siempre se sobrepuso y que son la causa del timbre de su voz, que no le provocó disfunción psicológica alguna. El desprecio de Nicolás Franco padre por las hazañas de sus hijos Francisco y Ramón en los años veinte es (p. 3) una falsedad gratuita para completar la exagerada imagen del monstruo. A la vez que aduce exageraciones sobre la conducta de don Nicolás (que desde luego no era un padre ejemplar), Preston, por sí y ante sí, decreta que el recuerdo de Franco sobre la presencia de un padre y un hijo en la Legión es una idealización de su propia vida familiar (p. 5), pero se trata de un hecho cierto; Franco no inventa nada en el *Diario de una bandera* cuando vivían tantos legionarios que hubieran podido desmentirle. Es verdad que Franco se identificó con su madre, a quien adoraba, pero nunca «repudió a su padre» como cree Preston (p. 6). Y buscar resentimientos de autocompasión en los discursos de Franco (ibíd.), significa que Preston ha visto demasiadas películas norteamericanas, donde se utiliza mucho el recurso, o se ha fiado sin criba del psiquiatra comunista Carlos Castilla del Pino, al que cita en estas páginas.

Sin que venga a cuento, suelta que Franco, en 1941, «cuando estaba a punto de declarar la guerra en favor del Eje» (p. 6). Jamás en 1941 estuvo Franco próximo a semejante propósito. El rebrote del catalanismo político no tuvo lugar *durante* la guerra de Cuba, como dice Preston (p. 7), sino después; véase el dictamen del profesor Pabón. Los oficiales que asaltaron el «Cu-Cut» y «La Veu» en 1905 no eran «orgullosamente centralistas» como dice Preston en la p. 7, sino simplemente patriotas que veían desprecio a la Patria y al Ejército en las exageraciones del catalanismo; no faltaban catalanes entre esos

oficiales. Preston incide en las acusaciones habituales contra la Ley de Jurisdicciones, pero no explica que esa ley fue hecha aprobar por un gobierno precisamente liberal.

Preston da la impresión de no conocer muchos de los lugares que osa describir. Toledo no se alza sobre la «árida llanura castellana» (p. 9), sino sobre el fértil valle del Tajo. Después de varios alardes de psicología barata, que ni voy a citar, Preston se aplica a reinventar la historia interior de Franco en relación con sus vivencias de militar adolescente; y cree, muy serio, que su «posterior identificación con el Cid» (p. 9) se deba a los paseos del cadete Franco por las calles de Toledo (p. 9). Ésta es una prueba palmaria de que el talante de Preston se inscribe en la historia-ficción más que en el horizonte histórico. El campo de acción era, para el Cid, durante el reinado de Alfonso VI, no la ciudad de Toledo, sino los campos de Levante y de Aragón; bien pudo evocar Preston a don Rodrigo con motivo de la entrada triunfal de Franco en la ciudad de Valencia, pero Preston desconoce la relación del Cid con Valencia y seguramente ignora las conexiones históricas de Franco con la misma ciudad. Al describir la transformación que Franco experimenta en la Academia de Toledo, nos dice que allí concibió «el fetiche del heroísmo». Eso nunca fue para Franco un «fetiche», sino un ideal de servicio a España, cosa bien diferente. También le gustaba estudiar «la acrítica e idealizada historia de España que se ofrecía a los cadetes» (p. 9). Tampoco sabe Preston que las fuerzas armadas españolas han gozado siempre de excelentes historiadores; y que los textos de historia militar que se estudiaban en la Academia —¿ha repasado la biblioteca y el catálogo de textos, que puede comprobar en la seria investigación del biógrafo de Franco George Hills, que es además un excelente militar?— no alcanzaban un nivel inferior, sino casi siempre superior a los textos universitarios de la época, que generalmente también eran excelentes.

Los caballeros alumnos eran, para Preston, «muchachos ineducados» (p. 10), pero procedían de academias preparatorias muy serias y habían superado un durísimo examen de ingreso en que no valían las recomendaciones. Otro decreto educativo del arbitrario biógrafo: en Toledo «Franco aprendió poco fuera de las lecciones prácticas de equitación y tiro». En el estudio biográfico de Hills podría haber comprobado Preston, ayuno de conocimientos militares, la seriedad de los programas teóricos y prácticos que estaban vigentes en la Academia, y que demostraron su eficacia en la prolongada guerra de Marruecos y en la guerra civil española. También decreta Preston que la experiencia militar de Cuba no se utilizaba en las aulas

toledanas. Franco, así como muchos de sus compañeros, iba a demostrar en la guerra de Marruecos una capacidad y un adiestramiento militar extraordinario en operaciones tan difíciles como la penetración en Yebala, la reconquista del territorio de Melilla, la dificilísima retirada de Xauen en 1924 y los desembarcos victoriosos en El Ksar Seghir y la bahía de Alhucemas. Preston no conoce seguramente ni de nombre esos puntos geográficos que yo he recorrido minuciosamente con guía y asesoramiento militar. Cuando lo desee le doy un curso breve sobre lo que allí sucedió a partir de 1912, fecha de la llegada de Franco a Marruecos.

Se inventa el osado una doble presión de oficiales del ejército y capitalistas mineros sobre el gobierno Maura a partir de 1907; no existe el menor indico de tal presión (p. 11). Es para morirse de risa considerar como «espontánea manifestación contra la guerra» (p. 11) la que organizaron los extremistas en Barcelona, en vísperas de la Semana Trágica de 1909, con alquiler de plañideras enteramente ajenas a los soldados expedicionarios que partían hacia Melilla. Como es ridículo describir al cuerpo expedicionario tan excelentemente organizado por el general Marina, uno de los jefes más competentes del Ejército, «sin mapas ni equipos» (p. 11). Atribuye Preston al capitán general de Barcelona la decisión arbitraria de pasar por encima del gobernador civil Ossorio para reprimir la insurrección a fines de julio de 1909 (p. 12), pero no hubo tal arbitrariedad, sino la consecuencia directa del estado de guerra decretado no por el capitán general sino por el gobierno. El gobierno no se distrajo de los sucesos de Barcelona ante la derrota del Barranco del Lobo, sino que intensificó el envío de refuerzos a Melilla hasta restablecer plenamente la situación. Luego conjetura Preston que Franco consideró las manifestaciones organizadas por toda Europa en favor del promotor de los sucesos de Barcelona, Francisco Ferrer, como obra de la Masonería (p. 12). Pues claro que lo eran; para proteger o vengar al masón Ferrer, lo sabían hasta las piedras.

Un fallo fundamental de Preston, que vicia todo su tratamiento de la guerra de África, consiste en la identificación de las cabilas rebeldes de la zona española con la autoridad del Sultán, a la que no respetaban lo más mínimo (p. 15). Porque para Preston no existía diferencia alguna entre la corte del Sultán y los yebalíes y rifeños que se agrupaban en las levantiscas cabilas de la zona española de protectorado. También yerra al describir a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que pertenecían a España antes de que se constituyese el actual reino de Marruecos (y en el caso de Melilla, antes de que se hubiera completado en Navarra la actual unidad española), como

«enclaves militares» (p. 15). Desprovisto de ideas profundas sobre el patriotismo, cree Preston que Franco, en su juventud militar, se sumergió en una «retórica compartida de patriotismo» (p. 16). El ejército español de África no ofrecía su vida y sus penalidades por un tipo de retórica, por un patriotismo superficial. Franco se incorporó a los Regulares, una fuerza indígena fiel a España que para Preston es una emanación de machismo en su valor suicida frente al enemigo (p. 17). Ése no era el valor de los Regulares, que sí tenía buenas dosis de fatalismo; ni el valor de Franco, que según un cronista testigo, llamado nada menos que Indalecio Prieto, representaba «la fórmula suprema del valor», el valor racional y sereno, cuyo empeño principal era ahorrar vidas de sus hombres. Franco reveló al periodista inglés Coles en 1945 que, en sus ratos de ocio durante las campañas, estudiaba los ejemplos de la Historia, las vidas de los grandes generales, los filósofos antiguos y las principales obras de ciencia política (p. 18). Como el testimonio (del que hay pruebas concordantes en la prensa de 1924) no conviene a las tesis de Preston, para quien Franco era una especie de zopenco, descalifica el testimonio en vez de estudiar un poco de historia de España que no le vendría nada mal para reducir su acumulación de disparates. Por ejemplo, los que profiere pocas líneas más abajo cuando describe al poblado moro de El Biutz, que se esconde en un valle hondo, como situado «en lo alto de una montaña» (p. 18). Y para colmo, la montaña «domina la carretera de Ceuta a Tetuán», por la que Preston no ha pasado en su vida; yo lo he hecho varias veces y he podido comprobar que no es una carretera, sino un camino secundario y que no une a Ceuta con Tetuán (cuya conexión discurre por el borde del Mediterráneo), sino que bordea la vertiente atlántica hacia El Ksar Seghir y Tánger. Desde la montaña, llamada Loma de las Trincheras, se domina el poblado abajo; y el Estrecho de Gibraltar, por el lado del Monte Musa, al fondo. Lo que más me divierte de Preston es la cara con que se inventa los paisajes que desconoce. Y para completar con otra originalidad la escena de la herida de Franco (que le fue causada en la citada Loma), dice que sobre ella «existe poca evidencia médica»; en mi primera biografía de Franco reproduje hasta la radiografía de la gravísima herida, sobre la que discute con mala uva si afectó a la actividad sexual de Franco. Vea la radiografía antes de desbarrar.

Interpreta Preston con su originalidad habitual que el guión de Franco para la película *Raza*, que considera una novela (p. 10), demuestra la insatisfacción de Franco con su propia vida. En medio de la época en que escribió el guión —o mejor, la base del guión—, Franco escribía también a don Juan de Borbón los motivos por los que consideraba vitalicia su jefatura;

toda una lista en la que no se encuentra insatisfacción alguna, pero Preston no ha tenido tiempo de conocer tan importante correspondencia. Describe al ya comandante Franco durante su etapa de guarnición en Oviedo como «siempre reservado y retraído» (p. 20); cuando Pedro Sainz Rodríguez, que le conoció allí, le presenta como miembro de un grupo selecto y amplio de amistades, entre las que se mostraba simpático y muy comunicativo, hasta que la irrupción, mucho después, de la República le obligó a esconderse bajo una máscara de hielo. Y explica ridículamente su «incomunicación», «para no revelar su inseguridad interior», (p. 21). Franco pensaba mucho las cosas por prudencia, no por inseguridad; y cuando tomaba una decisión era inquebrantable. Al enfrentarse con el noviazgo de Franco y la señorita Polo vuelve a patinar; «Franco, profundamente conservador, sentía casi reverencia por la aristocracia y admiraba a la familia de su novia» (p. 21). La familia Polo Martínez Valdés era distinguida, pero no aristócrata; y el conservadurismo de Franco ofrecía ya entonces, aunque Preston lo ignore, fuertes vetas de populismo y preocupación social.

Con motivo de la neutralidad española ante la Gran Guerra se registró una prosperidad desbordante que luego condujo, por su carácter relativamente artificial, a la crisis económica, pero jamás a la «bancarrota» como cree Preston (p. 22). El *boom* de la Gran Guerra no constituyó, ni mucho menos, el «primer despegue espectacular» de la industria española (p. 23), para el que convendría elegir fechas mucho más tempranas: la segunda mitad del siglo XVIII en Cataluña, los años treinta del siglo XIX en Málaga, a partir de 1845, bajo Narváez, en toda España y 1875, con la primera Restauración, para la ría de Bilbao. El regeneracionismo es bastante anterior a la derrota de 1898 (p. 24). Preston se limita a negar arbitrariamente las declaraciones de Franco a su biógrafo George Hills, cuando le confesaba que su profundo interés por los estudios socioeconómicos se suscitó ante las duras condiciones en que vivían los mineros asturianos (p. 25); un problema sobre el que Franco, con toda credibilidad, volvió varias veces en su vida incluso en alocuciones muy sinceras ante los hijos de esos mineros. Pero cuando a Preston no le conviene un aspecto positivo de Franco lo niega cínicamente y se queda tan fresco.

Al abordar la creación del Tercio de Extranjeros, del que fue cofundador el comandante Franco junto a su amigo José Millán Astray, Preston incide en todas las lejanías y todos los tópicos que forman su panoplia histórica (p. 29). Tengo que abreviar porque si no lo hago me veré obligado a reescribir todo el ladrillo del buen Preston. A Franco, cuya personalidad era esencialmente militar, le presenta como «un hombre cuyas preocupaciones eran escasamente

militares» (p. 29). Dice —otro invento— que en África se le conocía como el hombre «sin miedo, sin mujeres y sin misas» (p. 29), una simple falsedad que nunca dijo nadie de Franco, sino que se atribuyó a Franco en forma de cartel dispuesto por él para el almuerzo en Ben-Tieb con Primo de Rivera en 1924 y que además no está bien transcrito; la versión general era «Ni vino, ni misas, ni mujeres». Cuando pregunté a Franco sobre ese cartel aseguró muy indignado que jamás había existido. Es verdad lo de «sin miedo», pero tuvo en África más de una novia y fue católico practicante toda su vida desde la infancia en El Ferrol hasta su muerte. La crueldad de Franco con el enemigo es una leyenda barata retorcida por dos antifranquistas profesionales, Southworth y Garriga; sin que esto suponga negar el encarnizamiento en que a veces se caía por ambos bandos en una guerra a muerte como la de África. Y poco más da de sí el primer capítulo de Preston. Su seguimiento de la trayectoria de Franco hasta 1921 es tan incompleto, tan mendaz y tan ramplón, que nos sugiere una sola pregunta. ¿Por qué impondrá Preston el título «la creación de un héroe» a este amasijo de insuficiencias y mentiras al que competiría mucho mejor «la forja de un ser alienado, acomplejado y frío»? Porque eso es lo que trata de presentarnos el paisano de los Beatles en el capítulo primero de su antibiografía.

La forja de un general

Así titula Preston su siguiente capítulo que comprende la vida militar de Franco entre 1922 y 1931. Nos ha escamoteado un momento crucial de esa vida militar: la intervención de Franco en la reconquista de Melilla, que Preston trata tan someramente que en una primera lectura casi se me escapa. En esa campaña el comandante Franco se distinguió al frente de sus banderas legionarias como el oficial más brillante y valeroso del ejército de África; no sólo por sus dotes tácticas para el avance menor, como cree Preston, sino por sus condiciones para la maniobra de gran estilo, como la que dirigió en vanguardia desde Nador por la vertiente meridional del Gurugú. En esta campaña surge ya la imagen de Franco, exaltada por toda la prensa, especialmente por Indalecio Prieto en *El Liberal* de Bilbao y por Manuel Aznar como director del diario de la intelectualidad madrileña, *El Sol*. El propio Franco acreditó un sentido extraordinario para lo que hoy llamaríamos relaciones públicas; de todo esto Preston, que lo ignora, no dice una palabra y cuando sugiere algo, me copia flagrantemente sin dignarse brindarme la cita, así es el personaje. Pero vamos a su siguiente sarta de disparates.

Los gentilhombres de cámara no eran «un grupo selecto de militares cortesanos» (p. 37), sino un conjunto de dignatarios, civiles y militares, entre los que algunos eran cortesanos y otros no; entre éstos figuraba Franco. La entrevista de Juan Ferragut, que también me ha copiado, no es una «inmensa adulación», sino un reportaje preciso y simpático que no conviene a las tesis de Preston, quien lo ha leído con los ojos torcidos (p. 37). Describir a don Miguel Primo de Rivera, uno de los más distinguidos y condecorados generales españoles, como un «excéntrico falstafiano» (p. 40), es desconocer a Primo de Rivera y a Falstaff. A medida que avanza el relato cada vez me parece más claro que la principal característica de Preston es la lejanía. Por ejemplo, en la p. 45 se refiere al testimonio que Franco me ofreció en 1972 sobre su choque y posterior reconciliación con el general Primo de Rivera en el campamento legionario de Ben Tieb, el año 1924. Es un testimonio que le salía del alma a Franco, que lo comunicaba con acento de sinceridad impresionante y que ha fascinado a dos personajes tan diferentes como Luis María Anson y Manuel Vázquez Montalbán. El escritor monárquico ha pensado siempre que ese testimonio es una de las páginas más importantes en la vida de Franco. El comunista hizo algo muy significativo; me plagió el testimonio sin citarme y llenó con él varias páginas de su *Autobiografía del general Franco*, como demostré plagio por plagio en mi libro *No nos robarán la Historia*. Pero los dos aceptaron el testimonio de Franco por la fuerza de convicción que emana de él y porque está confirmado en otras fuentes. Preston no. No conoció jamás a Franco, no habló con él, pero en este ladrillo rechaza el testimonio por inverosímil. Lo dicho, un escritor lejano. Sin ninguna base objetiva ni documental acepta de la vida de Franco lo que arbitrariamente decide, rechaza lo que no le gusta. Si hubiera recorrido metro a metro el terrible camino de Xauen a Tetuán, por el que Franco, con la Legión, cubrió a retaguardia la retirada del ejército según órdenes de Primo de Rivera, y evitó el nuevo desastre español que buscaba Abd-el-Krim en 1924, no se reiría de algunos autores que consideran la actuación de Franco como una «lección militar magistral» (p. 47), pero lo fue, y en muy alto grado; aunque Preston dedique una coz al llamar «hagiógrafos» a esos autores, prefiere negar y hasta satanizar la vida de Franco en uno de sus momentos de mayor intensidad, rayana con el heroísmo.

Sin la más mínima mención del victorioso ensayo general de desembarco realizado por Franco a principios de 1925 sobre el entrante y la playa de El Ksar Seghir, sin fijarse en que dicha acción sirvió de marco para el encuentro histórico entre el joven coronel de la Legión y un joven oficial de Marina

llamado Luis Carrero Blanco, Preston hace acopio de toda su inconsecuencia y toda su intención para ofrecer a sus lectores una caricatura del desembarco de Alhucemas, uno de los hechos militares más decisivos que han tenido lugar en la historia española del siglo XX (p. 47). Preston no tiene en cuenta para nada un siniestro precedente: el trágico fracaso de la primera escuadra del mundo, la británica y el primer ejército del mundo, el de Francia, en el desembarco que habían intentado contra los turcos en la península de Galípoli durante la Gran Guerra. España había adquirido precisamente los lanchones autopropulsados tipo K que se usaron en Galípoli para que fuesen remolcados y luego soltados frente a las playas que cierran por Poniente la bahía de Alhucemas, corazón de la resistencia rifeña, el 8 de septiembre de 1925. Una poderosa escuadra conjunta de Francia y España consiguió desembarcar a la bien entrenada columna del general José Sanjurjo, que llevaba a vanguardia a la Legión y los Regulares a las órdenes de los coroneles Franco y Goded. El mariscal Pétain y el general Primo de Rivera observaban la operación desde la flota. Bajo audaz apoyo aéreo español y después de un demoledor bombardeo de la escuadra combinada, las dos vanguardias de choque desembarcaron brillantemente, sortearon las minas de las playas y treparon por los abruptos riscos de la costa en combates cuerpo a cuerpo hasta que consiguieron coronarlos y establecer una sólida cabeza de puente que se fue ampliando para convertirse en inexpugnable. Por su parte un contingente francés rompió las defensas rifeñas en la frontera interior y avanzó hasta lograr la conjunción con las fuerzas españolas de la costa. El comportamiento de Franco fue tan efectivo que le valió el ascenso a general y muchos contemporáneos afirmaron que era el militar más joven que ostentaba ese grado en Europa. En nuestros días no han faltado ratas de hemeroteca que tal vez han descubierto algún generalito balcánico o algo semejante para fastidiar la «leyenda de Franco». Son así de generosos.

El propio Franco, que terminaba su fulgurante (¿no será éste un adjetivo de hagiógrafo?) carrera militar africana de 1912 a 1926, apuntó que «Alhucemas era el principio del fin». Tenía razón. Alhucemas quebró estratégica y moralmente el poder de Abd-el-Krim, que se había proclamado Emir del Rif. Varios jefes españoles —Goded y Mola entre ellos, bajo la dirección de Sanjurjo— emprendieron sucesivas campañas en el Rif y otras rebeldías residuales y a través de una hábil penetración política pacificaron completamente el territorio del Protectorado en 1927. La victoria era decisiva; terminaba con el triunfo de la metrópoli una guerra colonial en el siglo XX, lo que no consiguieron otras naciones europeas, como Francia en Argelia; y la

pacificación resultó tan profunda que más de setenta mil combatientes del Norte de África acudieron como voluntarios a la llamada de Franco y los demás militares africanos al declararse la guerra civil española en 1936, donde actuaron con eficacia de primera magnitud.

Preston no ha estado en su vida en la bahía de Alhucemas. No ha pisado las playas de la Cebadilla y de Ixdain, no ha trepado a los Morros Viejo y Nuevo, no ha visto el cambio del rótulo de Villa Sanjurjo por el de Al-Hoceima, no se ha inclinado ante el cementerio de los españoles que murieron allí, en la batalla y en la paz. No conoce la brillantísima carrera militar de Sanjurjo, ni admira, como admiraron nuestros aliados franceses, la eficacia combinada del Ejército, la Marina y la naciente aviación española, cuyas estremecedoras fotos aéreas tengo en este momento sobre la mesa de trabajo. No comprende el singular valor estratégico del desembarco ni el prestigio que recuperaron de golpe en Alhucemas las fuerzas armadas de España, al planificar y rematar tan brillantemente una operación anfibia en que habían fracasado los grandes ejércitos aliados de la Gran Guerra frente a los turcos de Galípoli. Por todo este conjunto de ignorancias, se atreve a descalificar la espléndida operación que liquidó virtualmente el principal problema que en 1925 tenía planteado España, y lo hace en términos más intolerables que despectivos:

> «La entera operación fue una condena de la patética organización del ejército español y de la pésima planificación de Sanjurjo» (p. 48).

Y para colmo enumera una serie de errores militares que deben volverse del revés para comprender la verdad. No los reproduzco por lástima y porque no quiero ensañarme con quien se lo merecería más que de sobra. En cambio se extraña de que Franco ordenara el fusilamiento inmediato de un legionario desertor que fue capturado, una práctica común en cualquier ejército del mundo que opere en zona de guerra.

Cuando Franco llega a Madrid para mandar la Primera Brigada de Infantería, tiene tiempo para admirar el gesto de Primo de Rivera al suprimir el sindicato comunista, mientras protegía al socialista (p. 50). Es verdad que protegió a los socialistas; pero no hizo falta que suprimiera al sindicato comunista porque éste no existía entonces. Después cae en la ridícula grosería de atribuir a Ramón Franco la paternidad de Carmen Franco Polo (p. 52); debería haberse molestado en leer la partida de nacimiento de Carmencita, que está publicada. Y como es habitual en él, Preston expresa su desprecio a Franco mediante un espolvoreo de negaciones indocumentadas; y nos revela que Franco nunca dejó huellas de su comprensión histórica o económica. ¿Ha

leído el artículo de Franco sobre la batalla de San Quintín? ¿Ha repasado en sus *Conversaciones* los comentarios sobre economía y sociedad que merecieron este dictamen del profesor Velarde: «Siempre tomó en el plano económico las soluciones correctas en cada caso»? ¿Le ha seguido en sus esfuerzos continuos para dotar a España de una auténtica clase media? (p. 53).

El problema de las Juntas de Defensa resulta demasiado complicado para las estrechas miras de Preston en cuestiones militares. No es que para un oficial de Artillería o de Ingenieros los ascensos por méritos de guerra fueran más difíciles, como él dice (p. 54), es que estaban absolutamente vetados.

En otro de sus infundados inventos, Preston describe al Franco de la Academia General Militar como cultivador más relajado de la disciplina (p. 56). Lo que hizo realmente fue intensificar su exigencia de disciplina hasta proponerla como razón suprema para acatar al nuevo régimen republicano. El ministro francés de la Guerra, Maginot, y los numerosos visitantes militares del más alto rango que examinaron la Academia General dirigida por Franco mostraban públicamente su admiración por los planes de enseñanza y su realización teórica y práctica; pero el gran experto militar Paul Preston, de quien no consta que sepa distinguir una ametralladora de un tirachinas, se permite asegurar que el nivel de la Academia General era muy bajo y que se empleaba mucho tiempo «en denunciar la política democrática» (p. 59). En tan absurda tarea no se empleaba ni un minuto; ¿cuándo hubo en España una política democrática antes de 1976? Eso de presentar a Franco parando por la calle a los cadetes para comprobar si llevaban un preservativo es una originalidad de tomo y lomo, aunque bastante repetida (ibíd.). Es cierto que Franco prefirió para Zaragoza profesores con experiencia de combate real; era un mérito evidente para comunicar en vivo experiencias militares. Pero Preston piensa que los profesores con esa clase de experiencia estaban «brutalizados» (p. 59), un criterio lejano según el cual los veteranos de la Segunda Guerra Mundial deberían eliminarse para la docencia en West Point, por ejemplo. El objetivo de la Academia sería, según este personaje, «inculcar a los alumnos la implacable arrogancia de la Legión, y la idea de que el Ejército era el árbitro supremo del destino político de la nación» (p. 60). Hay realmente capítulos de Preston, y éste es uno de ellos, que parecen la antología del disparate. Y este historiador es el ídolo de Luis María Anson, que sólo piensa en él para confirmar «científicamente» su propio antifranquismo obsesivo y morboso.

En Zaragoza, dice Preston, Franco empezó a intensificar sus ideas «anticomunistas y autoritarias» (p. 61). Son dos actitudes completamente

diferentes; ser anticomunista no equivale sin más a profesar el autoritarismo. Lo que Franco intentó y consiguió en Zaragoza es una información más adecuada sobre la amenaza comunista, cada día más real y peligrosa después de la creación de la Internacional Comunista por Lenin en 1919, ¿o eso fue una ensoñación de la derecha?

Muchos profesionales combinan el amor a su familia con la entrega a su carrera sin necesidad de establecer comparaciones esotéricas como las que insinúa Preston (p. 61). Que una breve visita a la Academia alemana de Dresde fuera una especie de relación amorosa que florecería en la guerra civil es otra confesión de inconsecuencia. El aprendizaje académico-militar de Franco en Francia fue mucho más prolongado y a Preston no le interesa. En cambio olvida que la opinión casi completa, los intelectuales y la prensa respaldaron casi por unanimidad a don Alfonso XIII cuando el Rey se decidió por apoyar el pronunciamiento de Primo de Rivera; pero Preston decreta que el gesto de don Alfonso en 1923 fue «irresponsable» (p. 62). Se arma un buen lío con el intento de asesinato del «duque de Esmera» (p. 65), personaje y título que jamás han existido en España. Sobre las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Preston dice, naturalmente, lo que de él se esperaba; y demuestra que nunca se ha enterado del auténtico significado, los auténticos datos y el colosal engaño que, en medio de la deserción del Rey y los monárquicos liberales, trajo la República. Creo que a estas alturas de su vida ya no averiguará nunca la verdad, (p. 68).

Franco durante la República 1931-1936

Preston justifica, como era de esperar, la legitimidad de la Segunda República con el argumento falaz y antidemocrático de que los votos rurales, controlados por los caciques, no valían frente a los votos urbanos del 12 de abril de 1931, únicos que considera válidos. Es el mismo argumento que utilizaba Azaña al denominar *burgos podridos* a los pueblos en que había triunfado sin lucha la candidatura monárquica en 1931…, y luego las derechas confirmaron la victoria en las elecciones parciales convocadas por Azaña en 1933. He explicado en *Los años mentidos* y en los «Episodios históricos de España», y confirmaré en este mismo libro, la ilegitimidad de esas elecciones de 1931 que no se habían convocado para decidir el régimen y que además dieron la victoria a los concejales monárquicos por mayoría absoluta, por lo que la República nunca publicó oficialmente los resultados. Es inútil; a Preston no le interesa la Historia auténtica cuando ella descalifica a las obsesiones del antibiógrafo. Volveré sobre el asunto.

La Guardia Civil, institución hoy más que secular, respetada por todos los regímenes que se han sucedido en España, liberales y conservadores, monárquicos y republicanos, es descalificada irresponsablemente por Preston como «fuerza brutal y conservadora» (p. 69). Preston considera a los capitanes generales de 1931 como «virreyes efectivos», absurda exageración (p. 70). El discurso de Franco para despedir a los cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza, suprimida por Azaña en 1931, fue un modelo de energía, ponderación y disciplina, en el que no encontró motivo de acusación el auditor del Ministerio de la Guerra; era, además, una arenga tan tensa y dolida como clara y tajante. Para Preston se pronunció con «un lenguaje retorcido y ambiguo» (p. 73), lo que demuestra que no la ha leído. Cree que Azaña «había estudiado política militar». Se había traído de Francia, durante la Gran Guerra, algunas notas y datos superficiales de política militar que luego desarrolló en un libro menos que insuficiente, lo cual no es lo mismo. Cree el antibiógrafo que Azaña y su gobierno estaban decididos a «eliminar las irregularidades de la Dictadura» (p. 74). La Dictadura no cometió irregularidades importantes; lo que Azaña y la República eliminaron no fueron solamente lo que consideraban defectos de la Dictadura (que no lo eran), sino toda su obra, lo discutible y lo positivo. Franco y los generales opuestos a la República no se opusieron a los militares afectos al nuevo régimen como «lacayos de la masonería y el comunismo» (p. 77), aunque no ignoraban que bastantes de ellos eran masones, sus nombres fueron denunciados en las Cortes de 1935. Nunca les acusaron de comunistas, sabían que no lo eran.

¿De dónde habrá sacado Preston que la República suprimió las ocho regiones militares históricas? (p. 78). Las mantuvo todas desde el principio hasta el final. Naturalmente Preston niega que Azaña hablase jamás de «triturar al Ejército», pero está probado que utilizó la palabra «triturar» en el contexto de sus reformas militares y de hecho, como señala un testigo inmediato, el general Mola, las fuerzas armadas en bloque atribuyeron a Azaña la expresión y el desprecio al Ejército, que aflora en muchas páginas de sus Memorias políticas. Es casi divertido el hecho de que Preston cite el «rumor» de que Azaña estaba aconsejado por el gabinete que las derechas llamaron «negro» (p. 78). Pero no era un rumor, sino una realidad que Azaña reconoce repetidas veces en sus Memorias, cuando habla e incluso critica con dureza el favoritismo de su Gabinete militar, como se denominaba. Claro que Preston no habrá tenido tiempo de leer las Memorias de Azaña, es un libro demasiado voluminoso y complicado.

El comentario de Preston sobre el problema religioso en el debate y el texto constitucional de 1931 es delirante. Afirma que los artículos contra la Iglesia tendían solamente a eliminar «la situación de fuerza que la Iglesia mantenía sobre la educación» (p. 83), cuando en realidad, la Iglesia, en posición de libertad de enseñanza (que es una de las libertades fundamentales), se limitaba a competir libremente con las demás instituciones educativas de la sociedad y el Estado; mientras que la Constitución eliminaba por las buenas a la orden religiosa más distinguida por la calidad de su enseñanza (la Compañía de Jesús) y abría el camino para expulsar de la enseñanza a las demás, una consigna clara y expresamente masónica que se confirmó por la ley de Azaña en 1933 (p. 83). Preston elogia, por tanto, esta flagrante violación de un derecho democrático principal, o mejor de dos: la libertad de asociación y la libertad de enseñanza. Es divertido, si no encubriese una tragedia, que Preston atribuya los desórdenes reales de la izquierda revolucionaria en Castilblanco y otros puntos de España en 1932, a una campaña de propaganda de las derechas para soliviantar a los militares (p. 87). Consta por numerosos testimonios que en ningún momento respaldó Franco el pronunciamiento de Sanjurjo en agosto de 1932; vea Preston a Franco Salgado, Sainz Rodríguez y Azaña (que mantenía muy vigilado a Franco), pero Preston decreta sin prueba alguna que Franco favoreció primero y luego se desmarcó del golpe (p. 89), una nueva demostración de frivolidad historiográfica. Preston no conoce Galicia, pero describe como «fiordos» a las rías bajas (p. 90) que en nada se parecen a los escarpados entrantes marítimos de Noruega. Para reproducir la negativa de Franco a la defensa de Sanjurjo, Preston cita a un autor intermedio que toma el dato de mi información directa; pero el antibiógrafo no se digna citarme (p. 92). Al describir la caída de Azaña en 1933 Preston omite el crimen gubernamental de Casas Viejas, que fue el elemento clave, así como los desastres electorales de los «burgos podridos» y los puestos en el tribunal de Garantías, acontecimientos capitales en ese proceso (p. 93).

Dedica Preston su capítulo cuarto al período de altos mandos militares que Franco desempeña en la República entre 1934 y 1936, bajo gobiernos de centro-derecha en que participaba el partido católico, la CEDA. Interpreta la victoria del centro-derecha en noviembre de 1933 como «una oportunidad para retrasar el reloj» (p. 94), como si los únicos fines de la CEDA en este segundo bienio hubieran consistido en reimplantar el reaccionarismo, lo cual constituye notoria injusticia histórica. La CEDA fue un partido católico eminentemente popular, pero para Preston era «el partido de los muy ricos».

Preston atribuye al bienio de centro-derecha una política de censura (p. 95), pero la censura fue ejercida mucho más intensa y arbitrariamente durante el bienio Azaña; basta con repasar los huecos en las colecciones de la prensa. Identifica a los monárquicos alfonsinos con los seguidores nostálgicos del general Primo de Rivera (p. 97), cuando en realidad eran movimientos de fines divergentes que se agrupaban en partidos políticos muy distintos (Renovación Española y Unión Monárquica Nacional). Nuevamente vuelve a confundir la prensa monárquica de derechas con *La Conquista del Estado* que fue un semanario fascista por completo ajeno al *ABC* (p. 97). Cita Preston obsesivamente a Franco como suscriptor de un boletín anticomunista que se editaba en Suiza (p. 97), pero no lo conoce ni analiza su contenido, que era, por lo general, bien informado y estimable. La descripción de José Antonio Primo de Rivera como «resplandeciente *playboy*» es pura y alienada frivolidad; era uno de los pocos hombres de la derecha española dotados de hondo sentido social.

Repite Preston el continuado error de que Gil Robles negó lealtad a la República (p. 99), el gran político ha explicado su posición convincentemente en sus Memorias *No fue posible la paz*, el problema es que hay que leerlas antes de opinar. Describir al enérgico ministro radical Rafael Salazar Alonso como provocador de huelgas en la primavera de 1934 es otra frivolidad típica de Preston (p. 99) y desprovista del más remoto fundamento. La responsabilidad social y política de la Revolución de Octubre, en cuanto a su preparación y su desarrollo, recae exclusivamente en socialistas y catalanistas de izquierda, pero Preston se empeña en echarla sobre el centro-derecha (p. 100), sin una sola prueba. Llega a afirmar que, para la derecha española de 1934, la clase trabajadora ¡se identificaba con los sarracenos de la Reconquista! Un cómico disparate que bastaría para descalificar a un historiador (p. 100). ¿Se enterará de una vez Preston de que la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno, a principios de Octubre de 1934, no fue una provocación a la izquierda, sino simplemente el ejercicio de un derecho constitucional, dado que la CEDA era el partido más votado en las elecciones de 1933? (p. 102). La decisión de enviar a las unidades de África —que estaban integradas en el Ejército español— a combatir la revolución de Asturias (p. 105) se interpreta por Preston de forma folklórica y peor que frívola; nada menos que como una contradicción ¡con la Reconquista! No sé quién fue el autor extranjero de escasas luces que inventó ese presunto contrasentido; pero no fue el general Franco, encargado por el ministro Hidalgo de combatir a la Revolución asturiana desde el Estado Mayor

Central, quien primero trajo tropas de África contra rebeldes de la Península: se registró un significativo precedente en 1931 y Preston debería saberlo, pero no lo sabe. Los rebeldes de Asturias en 1934 no eran «civiles» como dice Preston, sino rebeldes armados y encuadrados, milicias de partido. Después cita Preston a Gijón y Oviedo como «retomados» por las fuerzas del gobierno; en 1934 ninguna de las dos ciudades se había perdido (p. 105). Ni tampoco se había proclamado la «República catalana» por Companys el 6 de octubre (p. 106) sino el «Estat Catalá de la República federal española» que es cosa bien diferente.

Los mítines multitudinarios de 1935 no tuvieron como protagonista único a Azaña (p. 111), sino también a Gil Robles y Lerroux. El Frente Popular se originó en España por la conjunción Prieto-Azaña (desde fines de 1934), pero el VII Congreso de la Internacional Comunista (verano de 1935) y los comunistas españoles le proclamaron como creación propia (p. 111) y el general Franco seguía convencido de ello en el año 1969, soy testigo presencial. Los escándalos del estraperlo y la denuncia Nombela no fueron «masivos» (p. 111), sino miserables en comparación con los escándalos del período socialista en 1982-1996.

Tras su ramplona presentación del bienio de centro-derecha en la República, uno de los capítulos más insuficientes y desastrosos de su libro, Preston trata de estudiar la relación de Franco con el Frente Popular en 1936, bajo el desafortunado título de su capítulo V, *La génesis de un conspirador*. Para Preston la única preocupación de la derecha en la fase final de la República fue destruir a la República (p. 122), pero el alzamiento de julio y su preparación, como expresamente declararon los sublevados, no se dirigió contra la República, sino contra su degradación, el desgobierno del Frente Popular. Preston debería aprenderse bien el dictamen y las pruebas de Salvador de Madariaga, que son inapelables y provienen de un exministro de la República en fecha reciente, 1933. Por el contrario, considera el desorden público absoluto, del que hay pruebas innumerables, como una falsa denuncia de la derecha (p. 130), lo que no pasa de ser una burda mixtificación. El desorden fue simplemente para Preston «una provocación de la derecha para generar una atmósfera de terror» (p. 131). Esa tesis no sólo es una falsedad, sino una flagrante lejanía.

No merece la pena detallar las inconsecuencias, que parecen inconcebibles, en que se «fundamenta» el tratamiento de Preston sobre el período de enero a julio de 1936, la primavera trágica. Parece, como en tantas ocasiones de su libro, que está hablando de otro país. Su dogmatismo y su

cerrazón son indescriptibles. Cuando presenté la documentación conservada en el Servicio Histórico Militar sobre la muerte accidental del general Balmes, comandante militar de Las Palmas, en ejercicio de tiro, Preston, además de llamarme «biógrafo oficial», cuando él lo es efectivamente del antifranquismo socialista, ignoró los documentos y no se molestó en comprobarlos, pese a que yo daba la localización; es su procedimiento habitual, negar cínicamente las pruebas que se presentan de forma clara y localizada (p. 139). En todo este desdichado capítulo, Preston no trata de indagar sobre las razones del Alzamiento, ni cita la famosa premonición de Gil Robles en el Congreso: «Media nación no se resigna a morir», ni la angustia efectiva de media España que se decidía más cada semana a combatir con las armas por su supervivencia. Y así, sin el más mínimo análisis histórico, se precipita el pobre antibiógrafo británico en el estudio de la trayectoria de Franco durante la guerra civil.

Franco en la guerra civil: una versión surrealista

Ya hemos visto en un análisis específico los vacíos, las falsedades y las incongruencias de Preston sobre la guerra civil española; ahora analizamos los capítulos de su antibiografía que se refieren a la actuación de Franco durante la guerra de España. No cabría esperar otra cosa diferente de la que vamos a encontrarnos: una versión de carácter surrealista.

Como ejemplo de la prodigalidad de Franco con sus legionarios, Preston se asombra de que cobraran una peseta diaria; pero resulta que los *mercenarios de Franco* cobraban varias veces menos que los milicianos del Frente Popular, cuya paga ascendía a diez pesetas al día, que era muy buen dinero en los años treinta. En la misma página de asombros, Preston muestra su sorpresa porque los rebeldes dejaran bien clara su «determinación de ganar» (p. 143), esto es, su voluntad de vencer; naturalmente, por eso ganaron la guerra. Pero pronto vuelve Preston de su intuición, que es correcta, para sentar su tesis: la victoria de los rebeldes se debe al terror, a un terror multiforme, de corto y largo plazo, que paralizaba a sus enemigos (p. 146). Terror cuya causa principal eran «los moros», aunque éstos, con ser numerosos, no llegaron ni de lejos al diez por ciento del Ejército rebelde. El esquema que Preston propone para el alzamiento es aberrante: fueron las «fuerzas populares» las que se enfrentan al poder de «las fuerzas militares» (p. 147). Pues no; desde los libros del general Ramón Salas Larrazábal el alzamiento, que fue «cívico-militar», como detectaron acertadamente los obispos en la Carta Colectiva de 1937, se decidió en todas partes mediante la

superioridad de las fuerzas militares y de orden público en cada cabecera de región militar o de provincia, con las «fuerzas populares» como acompañamiento, en una y en otra zona. La versión de Preston sobre el fracaso de los rebeldes del Cuartel de la Montaña en Madrid (p. 147) es pura historia-ficción.

José Moscardó no era el comandante militar de Toledo (p. 148), sino el director de la Escuela Central de Gimnasia. Los mineros rojos de Asturias no sucumbieron ante una emboscada de la Guardia Civil en Ponferrada (p. 148), que se ha inventado Preston, sino que fueron desviados por una fuerza mucho menor; la de una sencilla telefonista de Benavente, pero eso no entra en los esquemas de Preston sobre la «clase obrera», término que repite con fervor marxista durante todo el libro. Después de repasar —y generalmente sentimos de acuerdo— con los artículos de don Manuel Azaña sobre las causas profundas de la derrota de la República (en sus artículos publicados en Buenos Aires durante el año 1940), nos parece ridícula la explicación de Preston: «la izquierda republicana de clase media, los socialistas moderados y el partido comunista combinaron sus fuerzas contra la revolución y devolvieron el poder a la República burguesa» (p. 149). Los socialistas moderados no pintaron nada en toda la guerra; el partido comunista organizó desde el primer día su marcha hacia la captación del poder total; y esa falsa conjunción no devolvió nunca el poder a la República burguesa, porque el poder fue ejercido siempre durante la guerra en la zona republicana, de forma anárquica o dictatorial, por el Frente Popular revolucionario, sin que la «República burguesa» tocase pelota. Cree Preston que ese objetivo lo consiguió tan extraña e inexistente coalición en mayo de 1937, pero esa fecha marca la intensificación dictatorial del Frente Popular, ahora bajo la égida soviética representada por Negrín. Realmente el antibiógrafo ignora los rasgos esenciales de la guerra civil. Las autoridades republicanas no hicieron nada para impedir el terror extremista; ellas mismas organizaron el terror extremista, como en la checa de Fomento o en la Junta de Defensa de Madrid, que eran organismos de autoridad pública del Frente Popular.

Preston presenta los movimientos del general Mola como obstáculo principal contra el ascenso de Franco al poder (p. 160), pero Mola fue, desde las primeras semanas de la guerra, el primer valedor de Franco y quien facilitó a Franco la exclusiva de las relaciones internacionales. Ignora Preston la eficacia y la rapidez del puente aéreo no sólo creado, sino inventado por Franco desde el mismo 19 de julio, nada más llegar a Tetuán (p. 161), estudie los trabajos del general Jesús Salas Larrazábal.

Preston es un inventor de noticias falsas. Nos comunica, sin cita alguna, una matanza en Almendralejo (p. 164). Las ejecuciones masivas (siempre con inclusión de mujeres) en la marcha sobre Madrid son efecto de la propaganda republicana para compensar la pésima impresión que produjo en todo el mundo la matanza de presos significados (entre ellos varios ilustres republicanos) en la cárcel Modelo de Madrid el 22 de agosto de 1936. Preston acepta sin crítica cualquier información de fuente republicana, rechaza cualquier otra que provenga de fuente nacional. Es el cronista de la guerra civil más parcial que conozco y el que menos tiene en cuenta las fuentes, incluso cuando algunas veces las cita. Le sería provechoso estudiar la detallada investigación de Ángel David Martín Rubio, joven sacerdote de Badajoz, sobre la represión en Badajoz, que se incluye en su libro *Paz, piedad, perdón… y verdad*, editado por Fénix en diciembre de 1997. Un escritor que pretende presentarse como biógrafo de Franco, aunque sea absolutamente hostil, no debería prescindir del hecho, demostrado en numerosos documentos (Preston siente alergia invencible a los documentos), de que Franco actuó con naturalidad como jefe supremo virtual de toda la zona desde su pronunciamiento en Canarias el 18 de julio de 1936; en Tetuán, en Sevilla, en Cáceres, hasta su elección formal en Salamanca a fines de septiembre.

Con tan escasísimo fundamento aborda Preston su capítulo VIII, *La génesis de un caudillo*, del que cabe ofrecer para información del lector una sencilla comparación: es todavía peor, y ya es difícil, que el dedicado al mismo período por Javier Tusell. La decisión tomada por Franco para acudir en socorro del Alcázar de Toledo en vez de proseguir directamente sobre Maqueda, la marcha sobre Madrid, no dependía de motivaciones políticas, sino de la experiencia de Franco, que en varias ocasiones cruciales de la guerra de África no había dudado en arriesgarse con tal de socorrer a los soldados españoles cercados por el enemigo en alguna fortaleza o algún blocao. La decisión no se tomó en Maqueda el 21 de septiembre, sino en Mérida el 11 de agosto, porque en esa ciudad y fecha se enteró Franco de que el Alcázar continuaba resistiendo frente a un enemigo diez veces superior; la decisión consta en los documentos del Ejército de África.

El general Mario Roatta no pudo presentar a Franco sus «credenciales» en septiembre de 1936 (p. 176), porque nunca fue embajador; ese documento fue presentado a Franco por el primer embajador de Italia, bastante después. Las charlas del general Queipo de Llano por Radio Sevilla no suscitaban desprecio alguno; sino regocijo en la zona nacional y alivio inmenso entre los

partidarios de Franco en zona republicana, que recibían la sal gruesa del general de Sevilla como una insustituible inyección de moral (p. 178). Después de la reciente publicación de la correspondencia entre el coronel Moscardó y su familia —uno de los más interesantes y más profundamente humanos documentos de toda la guerra civil— quedan en ridículo las dudas de Preston sobre el heroísmo del coronel y su desprecio a la fortaleza, cuya liberación no fue un «golpe de propaganda» (p. 186), sino un acontecimiento militar y moral de primer orden, digno del alcance mundial que suscitó la noticia, a la que Preston, insigne desconocedor de la historia de España, compara con la «leyenda del Cid», ¿creerá que el Cid fue un personaje de ficción? (p. 181).

Preston no entiende una palabra sobre la elección de Franco a la jefatura suprema de la zona nacional el 28 de septiembre de 1936 (p. 188 s.). No cita para nada mi fijación de fechas y de lugares, que se publicó en 1972 y nadie ha podido mover desde entonces.

Para la elección de Franco, Preston busca, husmea referencias negativas, reales o ficticias, rumores, calumnias de toda laya y las incorpora al relato con fruición implacable y vengativa. Lo dicho; para este importante episodio de la vida de Franco, Preston es todavía peor que Tusell.

José Antonio Primo de Rivera no fue encerrado en la cárcel de Alicante desde su detención (por cierto, fraudulenta) por el Frente Popular el 14 de marzo de 1936 (p. 193). Preston no se esfuerza lo más mínimo en detectar la indudable magia de José Antonio, los motivos por los que su figura sigue rodeada incluso hoy de admiración y respeto, actitudes que compartió desde la misma guerra civil uno de sus enemigos, Indalecio Prieto. Franco no se identificó nunca con los ideales de Hitler; eso es un hecho clarísimo que Preston, obseso con la tesis contraria, se harta de repetir (p. 193). ¿Cómo un desconocedor tan patente de Franco y de la familia de Borja se atreve a comparar a Franco con la famosa familia valenciana de los siglos XV y XVI?

Tiene razón Preston en dedicar un capítulo, el octavo, a la trayectoria de Franco durante las operaciones de asedio en torno a Madrid, entre octubre de 1936 y febrero de 1937 (aunque realmente podría haber ampliado un mes más el período porque esas operaciones terminaron en marzo del 37 con la batalla de Guadalajara). Pero ahí terminan los aciertos. Porque el choque frontal de Franco con la defensa de Madrid se traza por Preston con una agudización de su ignorancia militar y su sectarismo político.

En octubre de 1936, Madrid no estaba rodeada por el Oeste ni por frente alguno; la defensa disponía de un espacio amplísimo para organizarse en los

cuatro puntos cardinales. Si no fuera porque yo he hablado, aunque sea brevemente, con Preston en la calle de Serrano juraría que no ha estado nunca en Madrid por la imprecisión de sus descripciones geográficas. La táctica del Ejército de África hasta su llegada a Madrid no consistía nunca en ataques frontales (p. 200), sino en arriesgadas maniobras de envolvimiento, que resultaron especialmente brillantes en los casos de Talavera y Toledo. Por lo pronto, Preston nos dibuja a Franco ausente del frente de Madrid, donde sospechaba «que había poca gloria fácil que ganar». Error y disparate: Franco jamás estuvo ausente de los frentes decisivos y visitaba el de Madrid continuamente, prácticamente a diario; por ejemplo, en la crítica batalla de Seseña-Esquivias a fines de octubre, y durante toda la batalla del Oeste de la capital en noviembre de 1936; las principales decisiones militares las tomó en consejo de guerra celebrado a poca distancia de la primera línea, en el castillo de Valderas. En cuanto a la gloria… Madrid era la gloria suprema de la guerra, lo que justifica la obsesión de Franco por atacarla primero y envolverla después hasta que comprobó la solidez de las defensas y decidió, en marzo de 1937, alcanzar la superioridad estratégica en frentes periféricos.

Precisamente la batalla de Seseña-Esquivias, a fines de octubre de 1936, se le «olvida» a Preston y eso que en su escenario entraron en acción de forma masiva los carros y aviones soviéticos imprudentemente anunciados por el jefe del gobierno Francisco Largo Caballero. No se puede achacar, como hace Preston, el fracaso de los carros soviéticos a falta de habilidad de sus conductores y artilleros; tanto los tripulantes de la agrupación Krivoshein como luego los de las agrupaciones Arman y Pavlov eran de alto valor y primera calidad (p. 202). Pero a Preston, dominado por una concepción materialista de la vida y la guerra, se le escapa siempre el factor moral; y no comprende, como no lo entendieron los hombres de Stalin, que unos legionarios y unos oficiales de Caballería completamente locos atacasen a sus supercarros con botellas de gasolina y granadas de mano…, y los incendiasen. Para entender esto había que ser un poeta de la talla de José María Pemán que compuso sobre esa escena principal su estupendo *Poema de la Bestia y el Angel*, al que los enemigos de Pemán, y algunos obligados a ser sus amigos, se han negado a considerar como obra literaria excelsa, mientras se obstinan en calificar como tal los versos degradantes de Antonio Machado, en un momento de alucinación, a la pistola del siniestro Enrique Líster Forjan.

El general José Miaja no fue nunca, como cree Preston, Capitán General de Castilla la Nueva (p. 203), rimbombante título decimonónico, que no existía en 1936 (así como ninguna Capitanía General desde 1931), sino

presidente de la Junta de Defensa y general jefe de la defensa de Madrid, con autoridad militar subordinada, por el momento, a la del general Sebastián Pozas. En cuanto a precisión militar Preston no superaría en España un examen para cabo. Según Preston, Miaja y su competente jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Vicente Rojo, «carecían de toda idea sobre la magnitud, disposición y responsabilidad de las fuerzas a su mando», así como de su armamento, que era muy escaso y la eficacia de sus fuerzas irregulares… (p. 203). Hasta el profesor Tusell suspendería al profesor Preston por esta sarta de dislates. Yo en cambio le castigaría a copiar cien veces el primer tomo de la *Historia del Ejército Popular de la República*, del general Ramón Salas Larrazábal, y son más de mil páginas. Allí vería que el ejército que se encargaba de la defensa de Madrid, en noviembre de 1936, era una tropa enteramente nueva, moderna, compuesta no por bandas irregulares, sino por doce estupendas Brigadas mixtas entre las que las números 11 y 12 eran Internacionales; con armamento y munición superabundante, artillería que decuplicaba a la enemiga y aviación de caza y bombardeo modernísima, que también superaba en todos los sentidos a la enemiga, en la que además no había entrado aún en servicio la Legión Cóndor hasta ya finalizada prácticamente la batalla por Madrid. El orden de eficacia asignado por Preston a las fuerzas de la defensa de Madrid produce pasmo. Resulta que la unidad más efectiva fue el Quinto Regimiento comunista, seguido por la XI Brigada Internacional. Pero el Quinto Regimiento no fue una unidad de combate sino un centro de recluta del que salieron varias unidades tácticas; y la XI Brigada entró en fuego cuando las primeras brigadas españolas habían aguantado ya el primer empuje enemigo en la línea del Manzanares; desde el 8 de noviembre la XI Brigada compitió con las españolas en capacidad de resistencia, pero sólo fue una entre once. Y sus efectivos no fueron 1900 hombres como dice Preston, sino más del doble (p. 204). Preston se inventa una resistencia heroica de los madrileños pero la triste realidad es que la respuesta de Madrid fue tan tibia que con voluntarios de Madrid, como ha establecido Salas, no se pudo formar no ya una brigada pero ni un batallón. La «milicia de la clase trabajadora» no tuvo actuación significativa, la defensa cuajó porque se encargó de ella el nuevo Ejército popular que era un ejército regular en todos los sentidos. Después de estos disparates de planteamiento, la descripción de la batalla de Madrid en Preston brilla por su ausencia; no se explica nada, no se detalla nada, no se registran efectivos ni armamento de los dos bandos, ni se estudian los choques en los diversos sectores del amplio frente. Un desastre total.

La ayuda germano-italiana fue aceptada por Franco como compensación por la ayuda soviética al Frente Popular, que llegó a España meses antes y con material que hasta entrado 1937 fue de mejor calidad. Sobre la ayuda soviética en hombres, técnicos y material, Preston sigue un método característico: se calla. Don Juan de Borbón fue rechazado, dice, por los jefes del bando nacional para evitar que «las grandes masas de monárquicos» le siguieran (p. 209), pero los monárquicos definidos de la zona nacional eran insignificantes en número, nunca consiguieron formar unidades de tamaño considerable. Preston lo ignora todo sobre la intervención extranjera; por eso puede afirmar que la ayuda de Italia y Alemania fue muy superior a la que la República recibió de la URSS. Debería estudiar detenidamente el definitivo libro del general Ramón Salas, *Los datos exactos de la guerra civil*, donde vería que las ayudas a uno y otro bando fueron equivalentes en hombres, técnicos y material, pero con la ventaja para la República de que las ayudas soviéticas llegaron meses antes y eran de mucha mejor calidad militar que las recibidas por los rebeldes. Baste un solo ejemplo. Las Brigadas Internacionales, «una fuerza soviética en España», según el historiador americano David T. Cattell, empezaron a formarse en la base de Albacete el 15 de octubre de 1936; las unidades italianas de infantería desembarcaron en los puertos del Sur ya entrado el mes de enero de 1937. Y se podría completar fácilmente el catálogo con los datos de Ramón Salas, hoy universalmente aceptados, aunque Preston los desconoce.

La recuperación de la reliquia de Santa Teresa, muy venerada desde entonces por Franco, pone en auténtico trance al infeliz Preston que demuestra escasos conocimientos cronológicos acerca de la Doctora de Ávila. Según Preston, Franco designa a Santa Teresa como la Santa de la Raza, advocación que jamás he visto en mi vida; como la campeona de España y la religión en la Reconquista y en la conquista de América (p. 119). El problema es que la Reconquista había empezado ocho siglos antes del nacimiento de Teresa, mientras que los episodios fundamentales de la conquista de América tuvieron lugar cuando Teresa de Jesús era una niña, pero a Preston le interesa el folklore rutinario, no la coherencia histórica.

Con este alarde de precisión emprende Preston su capítulo IX —la conexión con el Eje— que dice desarrollarse en marzo y abril de 1937 mediante la batalla de Guadalajara y el bombardeo de Guernica. Nuevamente el planteamiento de Preston es antihistórico. El Eje Roma-Berlín se había forjado no en 1937, sino a fines del año anterior con motivo de la conjunción de ayudas germanoitalianas para cooperar a la batalla de Madrid. Guadalajara

debería incluirse en el capítulo anterior, porque es el último intento de Franco en el forcejeo por Madrid. Y Guernica es un episodio aislado y exageradísimo de la guerra civil en un teatro de operaciones bien distinto, el frente Norte. Por tanto este capítulo 9 (p. 225) es metodológicamente aberrante.

Y por lo pronto incluye una regresión. Afirma Preston a estas alturas que «la naturaleza del mandato de Franco era provisional» (p. 228), cuando en el campo de Salamanca y en la toma de posesión del 1 de octubre de 1936 en Burgos había quedado clarísimo su carácter definitivo. Un amago de comparación de Franco con Hitler es tan ridículo que ni siquiera me detengo en comentarlo (p. 228). El capítulo se refiere a la batalla de Guadalajara, pero no incluye la más mínima descripción del choque sobre la meseta de la Alcarria, omisión que nos sienta muy mal a quienes, como el autor de este libro, hemos recorrido con todo detalle, paso a paso, el camino y las evoluciones de las diversas fuerzas que en ella chocaron. Preston cuenta «miles de prisioneros» italianos en Guadalajara; ¿por qué no se molesta en consultar la estupenda monografía del coronel Martínez Bande y anota el número exacto de esos prisioneros, que no rebasa los trescientos, mientras que el propio CTV, al romper el frente, envió a su retaguardia más de cuatrocientos prisioneros de la división republicana mandada por Lacalle?; lo he explicado detenidamente en mi *Historia esencial de la guerra civil española*. La concepción superficial y folclórica, que Preston demuestra sobre el conjunto de la historia de España, aflora una vez más cuando se indigna por una entrevista de Franco a un periodista extranjero, a quien subraya que las condiciones de la victoria serán la capacidad de mando y la fe en el triunfo; es decir, la maestría militar y el factor moral. Esta concepción, que es la clave de la victoria en cualquier época, parece a Preston anticuada frente a los grandes progresos del pensamiento militar en los últimos tiempos. El general Vicente Rojo, que conocía el arte militar mucho mejor que Preston, admiraba profundamente los conocimientos militares de Franco y su forma de aplicarlos. Me fío más, desde luego, de la opinión de Rojo que de la ramplonería de Preston en cuanto a sus valoraciones militares (p. 236).

Preston no entiende la campaña del Norte ni su carácter decisivo para la guerra civil. Ignora que Franco inclinó allí a su favor el equilibrio estratégico logrado por la República en el forcejeo por Madrid. Se lanza a la consideración de Guernica sin conocer las investigaciones definitivas del general Jesús Salas y aplica una metodología basada en la polémica, no en los condicionamientos tácticos. Nada sabe sobre las relaciones entre el mando nacional ni el de la Legión Cóndor (p. 244). Dice que el número de víctimas

nunca se sabrá y apunta la absurda cifra de la propaganda del gobierno vasco, 1645 muertos. Pero la cifra se conoce; algo más de cien muertos como máximo, cuyos nombres y circunstancias son en gran parte conocidos hoy. Remata todo con un disparate: «Guernica fue la antigua capital del País Vasco» (p. 244). Pero no sabe que el País Vasco nunca formó en la Historia unidad política y no tuvo nunca una capital, sino tres cabeceras de provincia, ninguna de las cuales era Guernica.

El desencadenamiento de la campaña del Ejército del Norte sobre Vizcaya coincide en el tiempo con la primera fase del proceso político de la unificación en la zona nacional. Los dos acontecimientos, el militar y el político, se relacionaron seriamente, aunque Preston no lo advierta (p. 248) en su capítulo X, que titula *La génesis de un dictador*, con mucho retraso; porque tal génesis se produjo desde el 18 de julio de 1936 al 1 de octubre, en que terminó; desde esa fecha, Franco ejerció el poder supremo en plenitud, no se preparó para ello. Muy formalista Preston dictamina que Franco no tuvo más base jurídica para su nombramiento que la designación por un pequeño grupo de generales (p. 255). En ese acto veía Franco precisamente el origen de su poder como caudillo, según la costumbre de los jefes medievales «alzado sobre el pavés» por sus compañeros de armas, una frase que gustaba mucho repetir en privado y en público. Aquellos generales representaban el poder real en la zona rebelde y su elección fue aclamada de forma virtualmente unánime por todo el pueblo, ¿no era suficiente base jurídica? ¿No se ha dado un caso así en ejemplos históricos semejantes, incluso para la creación de Estados y dinastías? En este capítulo, trama de intrigas y anécdotas irrelevantes, Preston no dice una palabra sobre la necesidad del mando único y la unificación de tendencias en orden al objetivo supremo de ganar la guerra; nada sobre la comparación con el procedimiento seguido en la zona nacional para unificar el esfuerzo de guerra y el caos simultáneo de la zona republicana que abocó en los primero días de mayo de 1937 a una pequeña, pero cruenta, guerra civil en Barcelona; nada sobre el espíritu de la zona nacional, el «Estado campamental» del que da cabal testimonio Ramón Serrano Suñer que acababa de llegar a ella con el terror de Madrid todavía reflejado en su mirada. Preston tiene que aceptar la aprobación general de la unificación en la zona rebelde (p. 270) y se apoya en su impúdico maestro Southworth para hacerse una idea del proceso unificador, que desvirtúa debido al odio que siente por la nueva Falange, con permanente confusión entre la anécdota y la categoría.

La carta pontificia *Mit brennender Sorge* contra el nazismo no es una encíclica, sino una misiva del Papa a la jerarquía católica alemana, que precede a su formidable encíclica contra el comunismo, donde se hace una expresa referencia a la agresión del comunismo internacional contra España. Preston reconoce que la Carta Colectiva del episcopado español en julio de 1937 hizo un extraordinario servicio a la causa de Franco (p. 273). Pero no comprende que la sintonía de Pío XI con los católicos españoles fue precisamente la clave del factor moral que condicionó decisivamente la Victoria, sin que en la zona enemiga pudiera ofrecerse, fuera de una vana propaganda de independencia nacional, un factor semejante.

Al comenzar el capítulo XI, dedicado a la «guerra de aniquilación» dirigida por Franco contra la República entre mayo de 1937 y enero de 1938 (p. 275), Preston incurre, como en casi todos sus enunciados de capítulo, en un tremendo error de enfoque. La guerra de aniquilación por parte de Franco empieza algo menos de un año después, en las grandes maniobras que se abren al comenzar el mes de marzo de 1938. En el período que marca Preston desde la primavera al invierno de 1937, lo que se produce es la campaña del Norte, entrecortada por las vigorosas reacciones del Ejército Popular en los frentes del centro, que Franco se limita a contener a la defensiva. Es la fase de la guerra civil en la que el Ejército Popular demuestra su madurez, que corroborará al final de ese período con ocasión de su victoria en la toma de Teruel. Las claves sucesivas de la guerra civil quedan, pues, una vez más, ignoradas y tergiversadas por Preston. Que abre el capítulo con un nuevo disparate; considerar que Franco prestaba a la religión y a la Iglesia una reverencia puramente exterior y superficial (p. 275), cuando realmente la dimensión religiosa, que siempre había cultivado, desde su infancia, como católico practicante, se había convertido ya en providencialismo vivido como una especie de segunda naturaleza.

También incurre, como casi siempre, en crasos errores geográficos. Nos informa de que entre Guernica y Bilbao hay solamente ocho kilómetros (p. 276). Preston no dice una palabra sobre la importante batalla de La Granja, donde el Ejército Popular realizó peligrosamente su primer gran ensayo de maniobra ofensiva a fines de mayo de 1937, al precio de ver aniquilada a la XIV Brigada Internacional. No sé de dónde ha sacado Preston la absurda idea de que Mola visitó a Franco a primeros de junio de 1937 para plantearle un ultimátum formal (p. 278), lo que sucedió realmente es que recibió de Franco en el campo de batalla de Segovia, ya pacificado, un broncazo monumental por haber permitido la infiltración del enemigo. Tras esa conversación Mola

volvió a Burgos, pero encontró la muerte en los montes de la Brújula. Sin informarnos sobre la trascendental victoria de Franco en Bilbao, Preston resume la batalla de Brunete sin tener en cuenta su elemento clave: las resistencias decisivas de pequeños puestos de vanguardia que frenaron al enemigo hasta que pudieron alinearse las reservas del sector, con las que la ofensiva quedó desarticulada incluso antes que llegasen las brigadas de Navarra (p. 283). A este fallo esencial sigue una garrulería estratégica inane que carece de sentido y de fundamento. Luego se pierde Preston en el «proyecto Montana» que consistía simplemente en el control de los minerales estratégicos españoles por Alemania y parece inclinarse a que Hitler consiguió su propósito cuando los archivos secretos alemanes, publicados después de la guerra mundial, demuestran exactamente lo contrario, como estableció el profesor Velarde en un memorable estudio monográfico.

Por fin Preston parece haber leído alguno de mis estudios sobre la caída del Norte y sus fatales consecuencias estratégicas para la República (p. 289), aunque no cita las opiniones de Azaña y Prieto que rezuman, ya desde entonces hasta el final de la guerra, derrotismo y desmoralización. Inmediatamente, sin que venga a cuento, Preston se lanza a criticar la «teoría del caudillaje» que es muy posterior a la guerra civil y debate caóticamente los problemas de la agricultura en la guerra civil y la postguerra (p. 297). ¿Quién habrá enseñado metodología histórica a este historiador?

Como no entiende la dirección militar de la guerra, Preston se desliza a los aspectos políticos y critica al Consejo Nacional como institución inútil, pero no indica cuál era su auténtica finalidad para Franco; que lo creó como vivero para futuros cargos de confianza y con el fin de ofrecer una nueva clase política de notables que necesitaría el régimen al terminar la guerra. Se le escapa a Preston un rasgo biográfico fundamental de Franco; desde la caída del Norte el Caudillo se preocupaba tanto de la reconstrucción de España como de apurar una victoria que ya reconocía como inevitable. No sé por qué se empeña en describir a Franco como «déspota oriental» con ritmo de un número determinado de páginas (p. 300).

El capítulo XII y último de la guerra civil se titula, por fin, de forma adecuada: *Victoria total*. En cambio el desarrollo de una época tan rica en acontecimientos militares, políticos e internacionales (febrero de 1938 a abril de 1939), se despacha de forma cansina y superficial. Por lo menos hubiera podido Preston tomar bastante información útil de mi libro *1939, agonía y victoria* que conoce, al menos por el lomo. Y este mismo año he reeditado, o mejor reescrito, en esta Editorial con el título *La Victoria y el caos*.

Por desgracia Preston no aprovechó mis documentos, ni el asombroso libro *Alerta los pueblos* del general Vicente Rojo, escrito en caliente tras la derrota en la guerra civil, ni los espléndidos artículos que Azaña escribió desde el exilio francés. Por eso su capítulo final de la guerra civil es lamentable, insuficiente, infundado, lastrado de prejuicios atroces y empeñado en presentar a Franco, el total vencedor, como virtualmente vencido. Por lo pronto interpreta su año victorioso de 1938 como lleno de equivocaciones militares de las que se reían Hitler, Mussolini y Ciano, sin advertir que los tres tuvieron que tragarse una tras otra sus despectivas críticas ante las sucesivas sorpresas que Franco les deparaba. La Brigada Aérea Hispana, que combatió en las ofensivas finales con eficacia de primer orden, no existe para Preston, que sólo se fija en la Legión Cóndor y la Aviación legionaria italiana, sin conocer ni valorar nunca sus efectivos y su rendimiento (p. 303). Preston no advierte la gradual e implacable destrucción de las Brigadas Internacionales en la sucesión de ofensivas planteadas por Franco en Aragón. Y se equivoca de medio a medio al relatar las onerosas concesiones mineras de Franco a Alemania (p. 306); me permito recordarle de nuevo el trabajo documentadísimo del profesor Velarde sobre el asunto Montana. El grado de capitán general —que ostentó Franco— «se reservaba antes para el Rey» (p. 307). No es verdad; también lo ostentaron, entre otros, los generales Weyler y Miguel Primo de Rivera. Preston piensa que la pintoresca Guardia Mora era para Franco «un símbolo de su categoría imperial» (p. 310). No es así; era un recuerdo de sus tiempos de África y fue elegida por la absoluta fidelidad de sus miembros al Caudillo. Los errores en cadena de Preston hubieran podido reducirse con una experta revisión editorial; por ejemplo la condición de general que atribuye al coronel Juan Modesto y la consideración de la batalla del Ebro como una maniobra de diversión para salvar a Valencia (p. 310). No es verdad; la batalla del Ebro era una maniobra de gran estilo con la que el ya general Vicente Rojo trataba de dividir y aniquilar al ejército de maniobra de Franco, no una operación secundaria, sino la más importante que emprendió el Ejército popular en toda la guerra civil. La batalla del Ebro no fue «estratégicamente insignificante» (p. 311) en la mente de Franco, su finalidad, de evidentes consecuencias estratégicas, consistía en destruir al principal ejército de maniobra enemigo, con lo que Cataluña, tras la victoria en el río, quedaría indefensa, como en efecto sucedió. Y con este motivo profiere Preston uno de sus peores disparates como biógrafo; afirma que Franco arrojó a la muerte a miles de sus hombres sin preocuparse por sus vidas, de acuerdo con su experiencia africana (p. 331). Es exactamente al

revés: todas las fuentes, fuera del odio mendaz de Preston, coinciden en que la más ostensible y reconocida cualidad de Franco como jefe militar en África era, junto a su valor «supremo» como le llamó Prieto, su obsesión por ahorrar a toda costa las vidas de sus hombres.

La habitual ignorancia de Preston sobre las relaciones internacionales de la época le impulsa a imaginar a un Franco temeroso de una alianza de la República con Rusia y Francia contra Alemania. Pasado el pacto de Múnich, que tuvo lugar en plena batalla del Ebro, era imposible que Franco pensara tal cosa; porque precisamente entonces Stalin, decepcionado por la cobardía de los occidentales, empezó su marcha de aproximación a Alemania y la información internacional de Franco fue siempre privilegiada. El caso es que cuando apareció en el horizonte el peligro de guerra europea, Franco dio seguridades a Inglaterra y a Francia sobre la neutralidad de España en caso de conflicto general, lo que retrajo la ayuda alemana cuando más necesaria era a la España nacional. Éste ya apuntado viraje de la URSS es el dato esencial que escapa a la percepción de Preston que, sin embargo, reconoce la sinceridad de la oferta de neutralidad española (p. 313). Tampoco capta Preston que, con la batalla del Ebro ya inclinada en favor de Franco (que consideró liquidado al ejército enemigo de maniobra a mediados de noviembre), el desenlace de la guerra civil dependía cada vez más de los españoles, mientras la intervención extranjera pasaba a segundo término. Tampoco dice nada Preston sobre los movimientos finales de Inglaterra en contacto con el defensor de Madrid, coronel Casado y con los defensores republicanos de Menorca que por mediación británica fue entregada a Franco. En un historiador británico cabría esperar mayor precisión sobre movimientos británicos tan significativos e importantes. Por otra parte, yerra Preston al considerar canceladas las ulteriores ayudas de la URSS; repase el segundo tomo de las interesantísimas Memorias de Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, que logró «*in extremis*» esas ayudas e incluso su transporte a Cataluña, aunque el caos de la retaguardia republicana impidió que se entregaran a las fuerzas armadas que ya sólo pensaban en escapar (p. 314).

Sobre la campaña militar de Cataluña, que fue la más perfecta de toda la guerra civil, Preston no tiene nada que informamos, salvo alguna observación exagerada e irrelevante acerca del mérito de los voluntarios italianos. Sí informa, aunque muy mal, sobre los «millares» de fusilamientos que tuvieron lugar en Cataluña (cuya cifra se conoce hoy con precisión), pero no dice una palabra sobre los testimonios de Azaña acerca de los fusilamientos ordenados

por el gobierno Negrín en las fases finales de la guerra, aunque la cifra también está probada; la parcialidad de Preston en cuanto a la represión es brutal. Tampoco dice una palabra sobre el «gran engaño» inmortalizado en el monumental estudio de Burnett Bolloten, que describe el plan y la realización comunista para la toma del poder político y militar en la zona republicana desde el principio hasta el final de la guerra civil; con Indalecio Prieto y sus famoso informe como principal testigo de cargo. Preston escamotea todo lo importante que se refiere al final de la guerra civil, la minuciosa preparación de la que Franco llamaba Ofensiva General, las dramáticas negociaciones de Gamonal, la actividad heroica de la Quinta Columna, la tragedia final en los muelles de Alicante. Cierra el estudio de Franco en la guerra civil con otro disparate: «La victoria había costado medio millón de vidas. Iba a costar muchas más» (p. 322). Pues ni lo uno ni lo otro; algo más de trescientas mil vidas entre los dos bandos durante la guerra; entre veinte y treinta mil después de la guerra. Las fuentes serias —Ramón Salas, Ángel D. Martín Rubio— lo han establecido con toda claridad. Pero Preston no ha tenido tiempo de estudiar sus obras decisivas.

No puedo terminar el análisis de la guerra de Preston sin incluir una perla que ya adelanté en la versión previa y mucho más breve de este comentario: la singular devoción que el biógrafo de Franco siente por la patrona de Segovia, Virgen de la Fuencisla.

En la línea 9 de la página 471, «El Caudillo —dice Preston— había concedido los honores de capitán general a SAN FUENCISLA (N. del A. Está clarísimo en el original inglés del libro, que es el que utilizo para este comentario), el santo patrono de Segovia, en reconocimiento de la milagrosa defensa de la ciudad por el general Varela». No cabe la menor duda. Preston dice «San Fuencisla» y le describe en masculino, como «patrón saint». Hasta la reveladora investigación de Preston, la ciudad de Segovia veneraba como patrona no a un santo varón, sino a Nuestra Señora de la Fuencisla, pero estábamos equivocados. Preston, el insigne historiador, el relevante hispanista, el autor de una biografía saludada como magistral y definitiva por *ABC* y *El País* —nadie había conseguido arrejuntarlos hasta hoy— aplica a la liturgia un procedimiento transexual posmoderno y nos presenta como salvador de Segovia no a la Virgen, sino a un nuevo Santiago, ahora Matarrojos, encamado para la ocasión en el bilaureado general Varela.

Con esta formidable astracanada termino el comentario sobre la guerra civil de Preston. Para perpetua ignominia de los dos grandes diarios de

Madrid, sorprendidos en el mismo ridículo de sus elogios al descubridor de San Fuencisla.

Franco en la II Guerra Mundial: el lacayo de Hitler

En los capítulos que Preston dedica a Franco durante la guerra mundial se le desbordan aún más la injusticia y el odio. Los errores y desenfoques que hemos detectado en los capítulos anteriores de su antibiografía pueden achacarse muchas veces a frivolidad e ignorancia; pero los que descubrimos y vituperamos en este epígrafe nacen, me parece, de la mentira, del odio impotente, del espíritu de venganza, sin que por supuesto quede descartada la permanente ignorancia de Preston sobre la historia de España en general y sobre Franco en particular.

El primero de esos capítulos se refiere al breve período de abril a septiembre de 1939, entre la victoria en la guerra civil y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se abre con un repudio de la tesis de Franco sobre la colaboración de la Masonería española y la Masonería universal (Preston dice «norteamericana», p. 323) como causa de la mina imperial de España y, en concreto, del desastre de 1898; pero desgraciadamente, aunque pueda haber exclusivismo en la tesis de Franco, no cabe negar ante la Historia un poso de verdad que empezó a ser detectado por un autor tan poco sospechoso como Salvador de Madariaga. En los archivos creados en Salamanca por orden de Franco —el dato es mío, aunque Preston no cita la fuente— existía una sección con unas ochenta mil carpetas de expedientes personales, pero de ninguna manera se refería exclusivamente a los sospechosos de masonería como cree Preston, sino que tales expedientes fueron abiertos a personas desafectas con carácter general (p. 325). Concebir el primer desfile de la Victoria en 1939 como «una identificación de Franco con Hitler y Mussolini» produce amplia hilaridad en quienes tuvimos la suerte de asistir a él; fue un desfile del Ejército nacional, con intervención de destacamentos aliados que se perdían en la masa militar y carecieron de todo protagonismo (p. 325). Como suele sucederle con los topónimos, Preston se equivoca con la que llama «Avenida de la Castellana» (ibíd.), que nunca se llamó así, sino paseo; y que Franco sólo permitió que se llamase del Generalísimo el tramo nuevo que se construyó durante su régimen, mientras ordenó conservar el nombre tradicional desde Recoletos a los Nuevos Ministerios. Preston no refleja, en su insuficiente capítulo, dos hechos esenciales: el comienzo de la reconstrucción de España después de los destrozos de la guerra civil, sólo por el esfuerzo de los españoles seguros de su futuro en paz; y la decisión de Franco de

restablecer las relaciones comerciales y financieras plenas con todas las potencias de Occidente, sin distinción de ideologías, realidad que contradice a los exclusivismos de la autarquía que Franco jamás cultivó como idea o directriz, aunque tuvo que aceptar en parte y provisionalmente por necesidad derivada de la guerra mundial. Los testimonios que presentan a don Alfonso XIII decepcionado por Franco son falsos. No consta que ni una sola vez, en el breve espacio que le restaba de vida después de la Victoria, don Alfonso hablase mal de Franco con quien se había identificado una vez más al solicitar para él la Laureada (p. 325). Los dos mil mineros asturianos que mantenían la lucha armada en el verano de 1939 es otro de los clásicos inventos de Preston (p. 334) sin la más mínima prueba. Tampoco hay pruebas sobre las afirmaciones del conde Ciano en su breve visita a España ese mismo verano; las frases amables de Franco con él jamás tuvieron carácter de compromiso y ni Franco ni la opinión española hicieron el menor caso del lascivo yerno de Mussolini, cuyo único interés era disponer de mujeres fáciles (p. 334). Es absolutamente falso que el general Kindelán pensara en 1939 que la designación de Franco como jefe supremo en septiembre de 1936 se refería exclusivamente a la duración de la guerra civil; ésa fue una primera idea que no pasó de borrador en 1936 y que Franco rechazó tajantemente como condición para aceptar ése mando supremo, (p. 340). Y Kindelán lo sabía cuando muchos años después aceptó un marquesado de Franco, Jefe del Estado. Para Preston el gobierno de Franco no era más que una tertulia inoperante (p. 340), pero se equivoca, fue de principio a fin un órgano deliberante y ejecutivo, el más importante de todo el sistema. ¡Cómo se nota que Preston no estuvo en España en 1939 ni siquiera, esto es lo más grave, se ha molestado en repasar la prensa oficiosa del mes de agosto! El comentario del diario de Falange *Arriba* no fue felicitar a Alemania porque con el pacto germano-soviético a fines de agosto «se había ganado un aliado tan poderoso» (p. 341), sino algo mucho más coherente que se me quedó grabado para siempre: «La sorpresa, la inmensa sorpresa». Ni España ni Franco aceptaron jamás el pacto germano-soviético y cuando Hitler lo hizo pedazos con su invasión de junio de 1941 toda España aplaudió el ataque. Preston anota como reproche a Franco que pronosticase un resultado de la guerra entre los occidentales como un gran servicio al comunismo (p. 341), pero eso no merece un reproche, sino un aplauso; es lo que sucedió de hecho, como pudo comprobarse entre 1944 y 1989, nada menos que durante cuarenta y cinco años.

Casi siempre despectivo con España, no sólo con Franco, Preston piensa que desde 1939 el sometimiento de la prensa a las consignas alemanas era una de las muchas vías por las que España se estaba convirtiendo en colonia de Alemania (p. 342). Pero ese sometimiento no era, ni mucho menos, total; y España fue dueña de sus destinos y de su orientación frente a Alemania durante toda la guerra mundial.

Preston se cubre de gloria en el título de su capítulo XIV, *El hombre que sería emperador* (p. 343), a propósito de la derrota de Francia en 1940. En exageraciones como ésta, que tanto abundan en su libro, Preston pierde todo el sentido de la medida. Consta por el testimonio del almirante Carrero Blanco que a Franco le fue ofrecida la corona de rey y la rechazó sin vacilar. ¿Querría ser emperador quien se había negado a la realeza? Franco exigía, para entrar en la guerra al lado de Alemania, una modesta ampliación de la soberanía española en el Norte de África, además de la permanente reivindicación de Gibraltar. Pero eso lo quería para España, no para adornarse personalmente con una corona imperial. Preston distingue casi siempre mal entre Franco y España; y desprecia al hombre y a su nación.

El intento de presentar como cínicos los sinceros intentos de Franco para ofrecerse como mediador ante los beligerantes de la Segunda Guerra Mundial (p. 343), no tiene en cuenta el peso histórico de España ni la experiencia de España como víctima de una cruenta guerra civil que se había desencadenado en buena parte por culpa de Europa. Luego recae Preston en sus superficiales e infundadas acusaciones sobre la directriz autárquica de Franco (p. 344). ¿Por qué no se ahorra Preston unos cuantos disparates mayúsculos con una simple consulta al documentado capítulo del profesor Velarde sobre la política económica de Franco, incluido en el espléndido conjunto *La España de los años setenta*, dirigido por el profesor Fraga Iribarne poco antes de la muerte de Franco? Toda la página 345 del libro de Preston es económica e históricamente demencial. Acto seguido incurre Preston en una serie de inexactitudes históricas sobre el palacio del Pardo. Preston afirma que Franco se fijó el sueldo después de consultar lo que cobraban los presidentes de la República; y luego dice que el sueldo de Franco era de 700 000 pesetas, pero no cita el sueldo de don Niceto Alcalá Zamora, que cobraba anualmente siete millones de pesetas, por tanto si Franco se fijó en ese sueldo fue para dividirlo por diez. ¿Por qué no se fija Preston en los haberes de la reina de Inglaterra en vez de perderse en corral ajeno? (p. 346). Que yo sepa, Preston es el único historiador que denuncia en Franco una tendencia «antisemítica» (p. 347), sin dignarse citarle como salvador de más de cincuenta mil judíos, un hecho que

las comunidades judías de todo el mundo reconocen. Pretende ridiculizar a Franco como arbitrista y lego en asuntos económicos, sin advertir su experiencia económica en la Legión, en la Academia General Militar de Zaragoza, en el Estado Mayor Central de la República y, sobre todo, en la ejemplar dirección económica de la guerra civil, llevada personalmente por él (p. 348). Sobre las relaciones de Franco con el cardenal Segura, en las que el Caudillo dio muestras de infinita paciencia, Preston no sabe nada; y es irritante cómo pontifica enfáticamente sobre los asuntos, tan numerosos, de los que no sabe nada (p. 350). Tampoco sabe nada sobre la finalidad de Franco al construir el Valle de los Caídos, donde pretendía enterrar no sólo a sus partidarios, sino también a los muertos del enemigo, como de hecho sucedió en parte (p. 351). Obsesionado con el asunto de monseñor Segura resulta que Preston, a quien no conocíamos como escritor religioso fuera de la exaltación de San Fuencisla, interpreta el término «caudillo» según los escritos de San Ignacio como sinónimo de Satán (p. 353); y no tiene en cuenta la verdadera raíz de la arriscada hostilidad de don Pedro Segura contra Franco, que tiene una explicación mucho más sencilla y obvia, el buen cardenal era un santo y un excéntrico que vivía desde su largo exilio en Roma fuera de la realidad española.

La razón de la actitud favorable de Franco —seguido por casi toda España — a Alemania e Italia era la reciente ayuda de las dos potencias a España durante la guerra civil y la coincidencia de muchos españoles en que Inglaterra y Francia habían sido los enemigos históricos de España, mientras que la vinculación de España con Italia era multisecular y con Alemania habíamos vivido bajo la misma corona imperial y nunca habíamos combatido en los campos de batalla. Si Preston comprendiera esa realidad histórica se hubiera ahorrado decenas de páginas y cientos de errores y originalidades. En todo este capítulo Preston cree a pies juntillas el testimonio (que muchas veces es falso) del embajador británico en Madrid sir Samuel Hoare.

Es verdad que Franco envió al general Vigón al castillo belga de Acoz, donde se alojaba Hitler en junio de 1940, con una carta muy amable, aunque tal vez no tan amable como las que el gobierno soviético dirigía por entonces al victorioso Führer. Pero si Preston se hubiera molestado en repasar mi biografía de Franco, en vez de fusilarla de cuando en cuando, vería que Vigón, por orden de Franco, empleó un tiempo desmesurado en la entrega de una carta «urgente» y que en esa carta no se contiene compromiso alguno, sino gestos de cortesía con el antiguo aliado de la guerra civil, todo ello condicionado por la relación de suministros que España necesitaría para poder

incorporarse al esfuerzo de guerra alemán. Ésta es una constante de la que nunca deberá prescindir quien pretenda comprender en serio la actitud de Franco durante toda la guerra mundial. Hay además una segunda constante, fijada documentalmente por el profesor norteamericano Halstead, que me parece fundamental, aunque Preston, no sé si por ignorancia o unilateralidad, no la tiene en cuenta. Desde 1940 a 1944, es decir, a lo largo de la fase germánica y la fase aliada de la guerra mundial, Franco hizo presente varias veces, con sinceridad en la que creyeron sus destinatarios, que España no entraría en el conflicto universal a no ser que sufriera algún ataque por parte de los beligerantes. Éste era el único criterio: responder a la fuerza con la fuerza, aunque la fuerza de España en aquellos momentos fuese tan desproporcionadamente inferior. Consta que Hitler fue muy sensible a la amenaza potencial española y de hecho frenó sus proyectos de irrumpir en España para apoderarse de Gibraltar ante el recuerdo del comportamiento de los combatientes irregulares españoles en la guerra de 1808-1814 contra los poderosos ejércitos de Napoleón. El mérito de Halstead consiste en demostrar que también los estrategas del bando aliado creyeron en la posibilidad disuasoria de esa firme posición española. Preston en cambio no cree en la actitud ni en la decisión española; pero es que Preston no sabe la Historia necesaria para tomar en serio esa posibilidad.

Preston se empeña, inútilmente, en acusar a Franco de pretender atacar a Francia por la espalda aprovechándose de la derrota francesa ante Alemania. En eso demuestra que no tiene la menor idea del carácter de Franco, que criticó acerbamente esa misma acción cuando Mussolini la emprendió. Franco aducía razones de caballerosidad para no agredir a la Francia ya virtualmente vencida. Pero para comprender los motivos de caballerosidad es preciso, y los historiadores no son excepción, conocer bien la historia caballeresca.

El obseso Preston vuelve a su ridícula descripción de Franco como déspota oriental (p. 360), cuando tan cerca tenía a una encamación de esa imagen, el bestial Stalin.

El precio del imperio es el título que se le escapa a Preston para enmarcar la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler en octubre de 1940. Era sin duda el momento capital para las relaciones de los dos estadistas y hoy está documentado con toda seguridad, tanto en cuanto a las pruebas escritas como en los testimonios orales. Por eso me parece tan aberrante la reconstrucción de Preston, preconcebida para inculpar a Franco y para acusarle de pretender la entrada de España en la guerra mundial, cuando la realidad es exactamente la contraria: Franco acudió a Hendaya después de conocer el fracaso de la

aviación alemana en la batalla de Inglaterra contra la eficacia y el heroísmo de la RAF y su experiencia, tanto africana como en la guerra naval, le había guiado a un juicio estratégico exacto sobre las posibilidades reales del general Rommel en la lucha de carros sobre el desierto norteafricano. Pero digo que el título se le escapa a Preston porque realmente el factor dominante en las argumentaciones de Franco frente a Hitler fue mucho más el precio que el imperio; las exigencias de ayuda alemana, que Franco sabía desorbitadas, reclamaban, al ser formuladas, una negativa.

Frente a este planteamiento de estrategias, presiones y decisiones —que fue el de Hendaya— se estrellan, sin fuerza histórica alguna, los manoteos de Preston que busca, como sea, inculpar a Franco hasta presentarle como cómplice de Hitler. La hipótesis de Preston, a la que se adhieren con entusiasmo dos desconocedores tan notorios de Franco como son Tusell y Anson, es que en la primavera de 1940 Franco pidió a Hitler con ardor la entrada de España en la guerra, mientras que la frialdad de Hitler frenó los fervores de Madrid (p. 375). En Hendaya, según los tres mosqueteros citados (les llamo así por lo anticuado de sus armas dialécticas), los dos interlocutores mantuvieron idéntica posición. El hecho de que ni en junio ni en octubre exista la menor prueba, y sobran en cambio pruebas para demostrar que las posiciones de Franco y de Hitler eran exactamente las contrarias, no inmuta a los detractores de Franco que buscan identificarle con Hitler y demonizarle para siempre. Los medios de la Internacional Socialista y, por tanto, de la Masonería jalean esa tesis antihistórica y descartan la contraria como urdimbre de los «hagiógrafos» de Franco, contra la «avanzada» idea de los cacógrafos.

Curiosamente Preston coincide con la tesis de Carrero Blanco que me expresaba poco antes de su muerte su convicción de que Serrano Suñer volvió de Alemania con el compromiso de que España entrase en la guerra; pero Preston sitúa este compromiso en la primera conversación Serrano-Hitler (p. 378), mientras que Carrero la atribuía a la segunda, después de Hendaya. Por mi parte me he atenido siempre a la afirmación de Serrano sobre la actitud de resistencia que en las dos entrevistas mantuvo contra las presiones de Hitler; y Franco me confirmó esa posición de Serrano, aunque sin darle excesiva importancia porque, según el Caudillo, su cuñado se había limitado a cumplir instrucciones superiores. La apetencia de Hitler sobre una de las islas Canarias fue un disparate que hirió vivamente la sensibilidad del enviado de Franco y alejó de él cualquier tentación intervencionista. «Franco —afirma Preston— creía ciegamente en la victoria del Eje» (p. 380). No había tal

ceguera; sean cuales fueren sus preferencias personales, Franco alegó en Hendaya las dificultades de Alemania en la batalla aérea de Inglaterra y en las maniobras del desierto africano, que son dos informaciones muy lúcidas, muy alejadas de ceguera alguna. La actitud y las respuestas de Franco en Hendaya no son las de un satélite, como le llama Preston. El antibiógrafo tiene que reconocer que si bien España expresó sus simpatías hacia Alemania y su deseo genérico y teórico de participar en la guerra presentó una lista de exigencias imposibles de satisfacer y jamás se comprometió a una fecha, ni siquiera aproximada, para esa entrada (p. 382). Abrumado por la evidente y efectiva resistencia de Franco a la presión de Hitler, por fin Preston ha de reconocer que el interés de que España entrase en la guerra es de Hitler y no de Franco; y que Franco no participaba de las convicciones de Hitler sobre la victoria alemana (p. 384). Ahí debería Preston haber terminado su exposición; porque después de haber alcanzado esas conclusiones serias y objetivas, luego las olvida y vuelve a las andadas de la leyenda y la inculpación. Del conjunto de la exposición de Preston sobre la entrevista de Hendaya, leída y subrayada despacio, se deducen casi exactamente las tesis de los defensores de Franco, atentos solamente a los argumentos históricos. Con motivo de la segunda conversación de Serrano Suñer en Alemania «el contexto de las relaciones entre España y Alemania había cambiado radicalmente», según Preston (p. 386). Es exactamente la verdad.

Preston se distingue por conceder la misma importancia a los grandes problemas que a las anécdotas irrelevantes, generalmente equivocadas además. Se saca de la manga, por ejemplo, que en las recepciones diplomáticas Franco exigía a sus invitados que pasaran ante él con una inclinación, costumbre nunca usada por los reyes de España (p. 390), pero ése era precisamente el protocolo que se había seguido en la Monarquía, por lo que la frivolidad habitual en Preston resulta, además, como tantas veces, una falsedad. Luego se empeña en que, tras el nombramiento de un nuevo ministro del Interior, Serrano Suñer siguió controlando el Ministerio (p. 391). Nueva falsedad; no hubo nombramiento de ministro y fue el propio Franco quien controlaba el ministerio a través del subsecretario. Nos describe unas prisiones rebosantes con centenares de millares de presos en los años cuarenta (p. 392). ¿Por qué no se molesta en repasar las estadísticas publicadas por don Máximo Cuervo, que reflejan la rápida caída de la curva de presos?

En los detalles de la entrevista de Hendaya, Preston incurre en falsedades notorias, contradicciones hirientes, carencias testimoniales y documentales asombrosas. En la página 398 nos informa de que Hitler no exigió la entrada

de España en la guerra; en la 399 nos dice que sí. Se obstina en el compromiso de España, pero no puede señalar una fecha porque nunca la hubo. Cree que la sensación de fracaso por parte de Hitler surgió mucho después, pero sabe perfectamente que, según los testimonios alemanes, la frase de Hitler sobre que prefería que le arrancasen las muelas antes de discutir otra vez con Franco se pronunció a raíz del encuentro (p. 399). Los insultos de Ribbentrop contra Franco y contra Serrano Suñer se profirieron en el mismo tren recién salido de Hendaya. El capítulo de Preston termina en la más completa frustración, entre contradicciones y medias verdades, con la afirmación de que Franco se había quedado con la iniciativa —es decir, había vencido— y que, sin embargo, su entrega a la causa del Eje se había reforzado, pero había tomado cuerpo su aversión hacia Hitler. La explicación es sencilla; Preston, arrastrado por los documentos y los testimonios, tiene que dar la razón a la táctica de Franco; pero cuando se acuerda de que escribe por otro fin se revuelve contra Franco…, y contra sí mismo.

Está muy claro que el propósito fundamental de Preston en todo este libro es descalificar a Franco durante el período de la guerra mundial, al que dedica una extraordinaria atención y extensión. Lástima que no dejase de aferrarse a su obsesión contra Franco y no atendiese mucho más a las fuentes de la Historia en vez de entregarse a los excesos de la propaganda. El capítulo XVI se dedica a las relaciones de Franco y el Eje entre noviembre de 1940 y febrero de 1941. Resume algunos informes secretos alemanes en que se afirmaba que Franco era débil y no lograba el control, Serrano Suñer era aborrecido y España estaba en situación de anarquía caótica; salvo las constantes críticas al «cuñadísimo»; esos informes no respondían ni de lejos a la realidad española (p. 403). Ahora reconoce por fin Preston las urgencias de Hitler para que Franco entrase en la guerra en orden al objetivo Gibraltar. Por fin Preston se fía de la información dada por Carrero a López Rodó y acepta el peso decisivo del informe de la Marina para apartar a España de la guerra a raíz del segundo viaje de Serrano Suñer (p. 405). Preston no tiene en cuenta para nada la tesis del profesor Halstead sobre la permanente decisión española de reaccionar militarmente con toda energía contra cualquier invasor; una tesis que resulta especialmente importante en el bienio 1941/1942. Preston despacha el asunto de la obra de Franco, *Raza*, con la frivolidad que cabía esperar de él y al expresar la tensión entre la «modesta» familia de Franco y los orgullosos «hidalgos aristócratas», olvida que las familias paterna y materna de Franco tenían reconocida su condición hidalga por lo menos desde el siglo XVIII, como podría haber comprobado en mi biografía (p. 417). Al

referir el ultimátum de Hitler a Franco en enero de 1941 (p. 419), Preston confunde gravemente la fecha (que adelanta nada menos que en un año, con lo que el importante episodio carece de sentido) y además omite cuidadosamente el enérgico rechazo por parte de Franco de la conminación alemana. A lo largo de este capítulo Preston tiene, por fin, que inclinarse ante el éxito de Franco al impedir la entrada de España en la guerra mundial pese a las desesperadas presiones alemanas. En abierta contradicción con sus tesis de los capítulos anteriores, Preston viene así a alinearse entre los defensores de Franco. Bienvenido a bordo, aunque pronto volverá a las andadas.

Hacia una nueva cruzada es el título del capítulo XVII de Preston, que comprende desde febrero de 1941 a enero de 1942. Preston utiliza con su superficialidad característica el término *cruzada*, hasta el punto que cuando acaba el tratamiento, nos quedamos muchas veces sin saber a qué se refiere. Preston desconoce por completo quién era de verdad el general Antonio Aranda, héroe de Oviedo, resentido con Franco porque nunca le ascendió a teniente general (lo que efectuó el rey don Juan Carlos años después de la muerte de Franco). No explica Preston por qué Aranda, que había estado próximo a la embajada alemana, viró en 1942 hasta iniciar y dirigir una vasta conspiración militar contra Franco, que le llevó a la marginación y el destierro. Para Preston la causa única del viraje de Aranda es muy sórdida; y consiste en que la embajada británica le sobornó, y por medio de él a una docena de generales (de los que no da un solo nombre) mediante una cantidad astronómica, trece millones de dólares de entonces (p. 431). Para ello dice fundarse en una revista de escaso crédito y en un biógrafo de Churchill que odia a Churchill. Algunas familias de varios generales que se sienten aludidos han anunciado ya acciones judiciales contra el infundio y desde luego ese dineral no dejó poso alguno en la vida de Aranda, que murió sin fortuna y sin el menor indicio de haber manejado tanto dinero; el soborno se realizó para evitar la entrada de España en la guerra al lado de Alemania, de lo que a principios de 1942, como venimos diciendo, no existía peligro alguno. Luego ha resucitado el rumor con base en ciertos «documentos» que nadie ha exhibido. Desde luego la conspiración de algunos civiles y militares contra Franco a partir de 1942 no evidencia un derroche de fondos; se trató siempre de una conspiración de tertulias, sin manifestaciones ni publicaciones que justificasen un gasto importante.

Preston no entiende una palabra sobre el estallido de entusiasmo que provocó en España la invasión alemana de la URSS en junio de 1941 y el eco de la famosa invectiva de Serrano Suñer «Rusia es culpable» de la que brotó

la División Azul, ni menos de la gesta militar y el apoyo popular de que gozó la División Azul (p. 437). La guerra civil estaba todavía muy próxima y la juventud española se volcó en la aventura contra el comunismo, porque se reprodujeron numerosas declaraciones de voluntarios en las que se manifestaba que la campaña no se emprendió ni se desarrolló contra el pueblo ruso. Cuando el 7 de diciembre de 1941, Franco observó atónito la destrucción de la escuadra norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor, no varió sus convicciones sobre la neutralidad española. Preston no lo reconoce, pero el «sentido de las realidades mundiales» por el que siempre se distinguió el Caudillo incluía un conocimiento de motivos históricos (la decisión de la Gran Guerra por la entrada de los Estados Unidos en ella) y estratégicos (la superioridad abrumadora de los Estados Unidos) que inclinó a Franco a consolidar la neutralidad de España y mantenerse definitivamente alejado del conflicto. Estas convicciones le condujeron a un evidente viraje frente a la Segunda Guerra Mundial, como se pondría de manifiesto en la misma primavera de 1942.

Observando el cambio de la marea; otra vez, entre tantos dislates, un título adecuado para el capítulo XVIII de Preston, que comprende todo el año 1942. Por lo pronto los prisioneros de guerra en España no eran un número determinado de «centenas de millares», sino un número muy determinado, y publicado en el anuario estadístico, de decenas de miles (p. 453). Asombra la frivolidad de Preston ante estadísticas que están disponibles desde hace décadas. Tras repetir los habituales lugares comunes sobre la muerte del padre de Franco, Preston cree, por lo visto, que el Caudillo, distinguido siempre por su excelente información, era una especie de imbécil cuando le atribuye la opinión de que «estaba convencido de que Gran Bretaña y los Estados Unidos eran nidos de conspiradores comunistas y francmasones». Franco poseía un serio servicio de información sobre las actividades masónicas, encomendado a un pariente suyo, el almirante Jesús Fontán; y probablemente simplificaba excesivamente las dimensiones históricas de la Masonería en España. Pero no era un imbécil. El libro sobrecogedor del exespía comunista Whittaker Chambers, del que me he hecho amplio eco en mi libro de 1996, *La Hoz y la Cruz* (Ed. Fénix), describe y prueba de forma convincente la infiltración comunista en el Departamento de Estado de Washington durante los años cuarenta, así como los progresos del comunismo en la Administración, en la sociedad (incluso la alta sociedad) y la prensa de los Estados Unidos, desde que el «demócrata» Stalin se convirtió, a partir de junio de 1941, en el aliado principal de las democracias occidentales contra Hitler. Y en cuanto a Gran

Bretaña son conocidas de sobra las grandes traiciones de los universitarios comunistas desde los años treinta, capitaneados por el increíble Kim Philby, superespía y supertraidor que tendió graves amenazas a la seguridad de Occidente. La amenaza masónica contra España se enmascara entre acusaciones que a veces resultan exageradas, pero la acción masónica en favor de la República y en contra de los valores religiosos que eran aceptados por la gran mayoría de la sociedad española son un hecho importantísimo que no merece la mofa continua y sospechosa de Paul Preston, muy favorable a los comunistas y a los masones españoles. No es extraño que Preston ataque de forma tan desmedida a un gran amigo de España, el embajador católico de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, profesor Carlton Hayes (p. 459).

Preston no se entera de las verdaderas razones que motivaron la caída final y definitiva de Ramón Serrano Suñer. Después de citar equivocadamente, según costumbre, la fecha del atentado en la basílica de Begoña (p. 467) y el cargo que desempeñaba Luis Carrero Blanco, trata de rebajar la importancia de éste en la defenestración de Serrano. No tiene razón. Después que el propio Carrero me explicara el episodio poco antes de su muerte quedé completamente convencido de que fue él, durante una conversación con Franco en San Sebastián, quien efectuó, a costa de Serrano Suñer su primera gran maniobra política, aunque Serrano Suñer no se enteró de esta intervención hasta 1975, cuando ya había muerto Carrero, de quien ha echado pestes desde entonces. Se equivoca Preston al subrayar que la Junta Política controlaba a Falange (p. 469); era en realidad un organismo inoperante que no controlaba nada. Y se vuelve a equivocar cuando niega que el nombramiento de Jordana como ministro de Asuntos Exteriores significaba una reorientación de la política exterior en sentido favorable a los aliados (p. 469). Franco no hacía las cosas sin sentido y ¿qué otro podría tener este nombramiento después de semejante cese? Y éste es el momento trascendental en la historia de la Iglesia española en que Preston nos presenta al nuevo patrono de Segovia, San Fuencisla, en el momento más hilarante de su libro, que ya he descrito suficientemente (p. 473).

Preston arremete varias veces contra Churchill, a quien no puede ver ni en pintura, por la sola razón de que reconoció los hábiles y eficaces servicios prestados por Franco a la causa aliada desde 1942 (p. 474). Pero Preston sigue pensando que Franco era imbécil y afirma que no se dio cuenta del nuevo balance de poder que dominó la guerra mundial a partir de ese año.

Los sucesos que tuvieron lugar en España durante las horas anteriores al desembarco aliado en el Norte de África, el 8 de noviembre de 1942, están calcados de mi biografía de Franco, pero sin que Preston lo reconozca (p. 477).

La actividad de Franco durante el año 1943 corresponde al capítulo XIX de Preston, bajo un título insultante: *El héroe como camaleón*. Franco se encontraba entre los alemanes de Hendaya y los aliados al Norte de África; España limitaba con los dos beligerantes. ¿Qué otro camino quedaba a Franco sino navegar entre los dos agresivos escollos? Prefirió hacerlo con suprema habilidad, aunque biógrafos indocumentados del futuro se lo reprochasen. El protocolo secreto firmado con Alemania en febrero de 1943 no rebasó el carácter simbólico, pero Preston se atreve a presentarlo como una cesión de independencia, lo cual es simplemente absurdo (p. 486). Todo este capítulo es un amasijo de hechos sin vincularlos mediante un análisis histórico elemental; sin una palabra para el tremendo esfuerzo de reconstrucción que, prácticamente sin medios exteriores, estaba realizando el pueblo español, mientras el mundo se enzarzaba en su tragedia. Es curiosa la calificación de Gil Robles como «extraordinariamente bien informado» según Preston (p. 499); sin culpa suya, y en virtud de su permanente aislamiento, el gran político de la derecha católica carecía de información pronta y fidedigna durante todo su exilio en Portugal, ni siquiera don Juan de Borbón le informaba debidamente. Preston se traga una «bola» de Franco que atribuyó a los servicios de inteligencia la interceptación de la carta de don Juan de Borbón al conde de Fontanar (a quien no nombra); si lee mi estudio *Don Juan de Borbón, toda la verdad* (Fénix, 1997), comprobará quién hizo realmente entrega de la carta al almirante Carrero (p. 504). Como es natural, Preston se muestra favorable a don Juan de Borbón en su correspondencia con Franco (p. 505); no parece advertir el carácter errático de las actitudes, sucesivas y contradictorias, del conde de Barcelona, entregado a un grupo heterogéneo de consejeros resentidos y dotados de muy escasa claridad de visión.

Dedica Preston su último capítulo de Franco durante la guerra mundial, período de la vida del Caudillo que recibe un tratamiento desproporcionado, semejante en desenfoques al libro de Tusell sobre el mismo tema, con el que hace el número XX, titulado con intento de humor negro *La victoria de Franco*. No hace falta tal recurso. Las verdaderas victorias de Franco llevan otras fechas: 1925, 1939, 1953, 1969 hasta el punto que la versión que espero definitiva de mi biografía va a titularse seguramente *Las doce victorias de Franco* y la estoy escribiendo después de las mentiras de Preston, los

resentimientos de Anson y las agresiones de Vilallonga. Este capítulo XX se ocupa de la trayectoria de Franco entre enero de 1944 y mayo de 1945.

Es curioso que Preston crea un falso invento de Franco el «cerco internacional» contra España que comienza durante el período cubierto por este capítulo. ¿Cómo se puede llamar de otra manera la implacable y prolongada hostilidad de los vencedores de la guerra mundial, atizados frenéticamente por los comunistas? (p. 509).

La gran crisis económica que sufrió España en los primeros meses de 1944, en virtud de ese cerco internacional —«los peores momentos que en la guerra pasamos», así la calificó Franco años después— está tratada por Preston con ignorancia, con odio y con saña, una combinación muy habitual en él. La salida de la crisis no tiene lugar en mayo, sino ya en marzo de 1944 (p. 511). El convenio con los aliados, mediante el cual éstos toleraban la continuación del envío de wolfram a Alemania, reducido a cantidades punto menos que simbólicas, fue realmente una victoria de Franco pese a las gesticulaciones de Preston para presentarlo como una derrota (p. 512). La nueva defensa de España por Churchill, pronunciada en los Comunes el 24 de mayo de 1944, provoca las iras de Preston que aborrece a Churchill tanto como a Franco (ibíd.). No advierte Preston las prudentes instrucciones que se dieron a la prensa española desde principios de 1944 para que dejase de hostilizar a los aliados, ni la muy significativa presencia de don Manuel Aznar, el periodista más prestigioso del país, en las páginas del diario oficioso *Arriba* desde el desembarco aliado en Normandía, sobre el que informó con exquisita objetividad. Realmente los ataques a Churchill por Preston se vuelven claramente en favor de Franco y consiguen que su título irónico de este capítulo se convierta en una descripción objetiva. La incultura de Preston sobre las manifestaciones de la vida española se pone de manifiesto cuando califica al colosal pintor Ignacio Zuloaga como «artista de moda» (p. 524). Se cree que está en la zona roja cuando nos dice que en cada edificio de apartamentos había «un portero falangista» encargado de denunciar desviaciones (p. 524). Preston no se cree la cifra de presos comunicada por Franco al comenzar el año 1945 que sólo ascendía a veintiséis mil (p. 526) y se arma un lío descomunal con el manifiesto de Lausana dado por don Juan el 19 de marzo de 1945, un complicado pronunciamiento que requiere un serio análisis, no la patochada de Preston; lo he intentado con amplísima documentación en mi citado libro sobre don Juan de Borbón. Y con tan ramplones e insuficientes rasgos termina el estudio de Preston sobre la

actuación de Franco durante la Segunda Guerra Mundial; en el que falta casi todo y sobra casi todo. Una auténtica hazaña histórica.

El cerco internacional

Preston, como sabemos, había rechazado la idea y la expresión «cerco internacional» para describir el acoso contra España a partir de 1944 por los soviéticos y sus títeres los comunistas europeos, que habían entrado en los gobiernos de Francia y de Italia cuando se restablecieron los regímenes democráticos. Pero una vez más, la realidad se impone a Preston que titula su capítulo XXI *El héroe asediado*, para tratar de la resistencia de Franco a la terrible presión exterior, atizada por los rojos españoles reanimados, durante los años 1945 y 1946.

Es el período siguiente al que Franco acarició como «emperador en ciernes» (p. 533), expresión que marca uno de los momentos de mayor alejamiento en la antibiografía de Franco. Por entretenerse en caricaturas deja escapar el hecho clave: quien acude en socorro de Franco, acosado por los vencedores en 1945, no es el presidente de Acción Católica Alberto Martín Artajo sino el prelado a quien Artajo obedecía, el primado de España don Enrique Pla y Deniel, que había proclamado la Cruzada en Salamanca, de donde era obispo, justo la víspera de la toma de posesión de Franco en Burgos y ahora alineaba a la Iglesia española con Franco para devolverle el insigne favor de haberla salvado. Franco vivió convencido, entre 1945 y 1950, según afirma Preston irónicamente, de que él y España sufrían en estado de sitio por sus enemigos exteriores (p. 535). Entre 1944, más bien, y 1947, cuando se declara la guerra fría y los Estados Unidos se aproximan a España por motivos estratégicos, esa convicción está fundada en la verdad. Pero Preston no penetra en el motivo profundo: la venganza de los comunistas, vencidos en toda la línea por Franco en 1939 y que ahora se presentan como vencedores en la guerra mundial. El arzobispo de Toledo, Pla y Deniel, que aún no era cardenal, aunque Preston no lo sepa (p. 536), no se ofreció como negociador entre Franco y la restauración monárquica como afirma Preston sin fundamento alguno, sino que se sintió obligado, por deber de identificación y gratitud, a salvar a quien había salvado de la aniquilación a la Iglesia de España. Por cierto que, en todo este capítulo y los inmediatos, Preston no dice una palabra sobre la trayectoria y la influencia de la Iglesia; es un problema que no le concierne, aunque sea capital. Restringir los proyectos nacionales de Franco a una declaración sobre que en el futuro le sucedería una monarquía tradicional medieval (p. 538), es una frivolidad ridícula; Franco jamás pensó

en una monarquía de la Edad Media y por cierto, Felipe II no era un monarca medieval. El proyecto de Franco era mucho más próximo y tangible: la regeneración de España, para convertirla en una nación de clases medias. El proyecto, aunque Preston no lo sepa, se cumplió.

Preston ignora la filiación política de José Ibáñez Martín y al señalar la transferencia a su jurisdicción de la censura omite el dato clave de que esa actividad pasó de la Falange a la Iglesia (p. 538). Martín Artajo era, sí, hombre de Ángel Herrera, pero éste, futuro cardenal, no era la «eminencia gris de la Democracia Cristiana», por la sencilla razón de que en España no han existido más que amagos de democracia cristiana, todos ellos frustrados y muy posteriores (p. 539). La decisión de Franco para excluir a don Juan de Borbón de la sucesión no se tomó como dice Preston tras el manifiesto de Lausana en 1945, sino tras el manifiesto de Estoril en 1947 (p. 539). La iglesia regia de San Francisco el Grande es calificada por Preston, que no da una en fechas y lugares, como «lo más próximo a una catedral de que disponía Madrid» (p. 544). Pues no; lo más próximo a una catedral de Madrid era la catedral de Madrid, que era entonces la de San Isidro al principio de la calle de Toledo. La sospecha de Alfonso XIII sobre la «pérdida del amor de su pueblo» en 1931 no era «errónea» entre comillas, sino simplemente errónea; le había respaldado en las elecciones de abril de ese año la mayoría absoluta del pueblo. La invasión del «maquis» comunista, a partir de noviembre de 1944, por el valle de Aran no era en 1945 una «guerra en gran escala», sino una simple infiltración de partidas que nada tenían que ver con las guerrillas, porque carecían casi por completo de apoyo popular; y no amenazaron al régimen en momento alguno (p. 549). Afirmar que en el presupuesto para 1946, dedicado principalmente al esfuerzo de reconstrucción, el cuarenta y cinco por ciento se dedicaba a actividades represivas es falso y denota no haber leído el presupuesto. El panfleto antiespañol y extranjero de 1946, *El gobierno español y el Eje*, muy difundido en medios internacionales, es una repugnante bazofia de propaganda que aún hoy provoca vergüenza ajena cuando lo repasamos. El documento dirigido a don Juan por unos centenares de partidarios españoles, a quienes don Juan importaba un bledo y que apenas pasaron de la firma en apoyo del conde de Barcelona, se conoció como el «saluda» y no como «el saludo» (p. 551), un nuevo alarde por parte de Preston de desconocimiento de los matices españoles.

Cristino García, veterano comunista de la guerra civil, había participado en la Resistencia francesa, pero fue capturado y fusilado en España como

terrorista convicto (p. 553). En 1946 se concentró el ataque exterior contra Franco en la Nota tripartita, que como comprendió inmediatamente Franco, quedó inmediatamente neutralizada por el famoso discurso de Churchill en Fulton, Missouri, donde denunció la caída del «telón de acero» del Báltico al Adriático. Preston no informa sobre la acertada intuición de Franco (que escapó a don Juan de Borbón y sus consejeros) acerca de la inflexión estratégica que estaba experimentando la política exterior de los Estados Unidos ante el hecho de la guerra fría naciente (p. 555), y mucho menos confiesa que Franco, con su amplia experiencia sobre los fines y tácticas del comunismo, había previsto esa inflexión. Con la consiguiente rabia Preston mantiene un seguimiento que es, sin embargo, puntual y objetivo del continuado apoyo de Churchill a Franco, que Preston cree negativo para Churchill, pero que en todo caso resultó muy positivo para Franco (p. 559). Como Preston no comprende casi nunca la realidad del pueblo español, piensa que la manifestación del 9 de diciembre de 1946 en la plaza de Oriente fue fruto de la manipulación (p. 561), y lo dice sólo porque no estuvo allí. Pero seguramente ha leído algunos documentos diplomáticos aliados sobre el suceso y se ve obligado, como otras veces, a rendirse a la evidencia del apoyo popular, aunque lo haga con reluctancia.

Las realidades de la estrategia de bloques van configurándose de forma cada vez más favorable a Franco, Preston titula su capítulo XXIII como *Una mano ganadora* y en esta ocasión acierta. Se arma su lío habitual con las relaciones entre Franco y la Masonería (p. 563) y afirma erróneamente que el seudónimo de Franco *Jakin Boor* reúne los nombres de las dos columnas del Templo salomónico-masónico lo cual no es cierto, la segunda se llama Boaz. El problema de la Masonería se trata por Preston, una vez más, en relación a Franco, como una caricatura que responde directamente a los efugios habituales en la propaganda masónica.

La Ley de Sucesión de 1947 se trata despectivamente por Preston (p. 567), con olvido de su consecuencia fundamental: en el momento decisivo se cumplió. La típica lejanía de Preston se refleja una vez más en la evocación de la visita de Himmler durante la guerra mundial cuando se está tratando del viaje triunfal de doña Eva Duarte de Perón por España en 1947 (p. 571). La innegable victoria de Franco en el referéndum popular que aprobó la Ley de Sucesión recibe un clásico comentario contradictorio por parte de Preston, que por una parte resalta el carácter antidemocrático de la consulta y por otra acepta que el referéndum demostraba, como admitieron las potencias occidentales, la adhesión a Franco y su régimen por el pueblo español

(p. 571). Los pasos dados por la estrategia norteamericana para cancelar en 1947 la hostilidad oficial contra Franco y reconocer el derecho de su régimen a la convivencia internacional no están mal diseñados por Preston, que excepcionalmente recurre en esta ocasión a los documentos y acciones históricamente correctas (p. 574). Preston tiene que reconocer la victoria de Franco sobre don Juan con motivo de la entrevista del *Azor* en el verano de 1948. Luego retoma a sus habituales obsesiones sobre la identidad de Franco y el Cid. Otra figura más próxima, el cardenal Segura, es presentado falsamente por Preston como víctima de la hostilidad de Franco, que por el contrario, como muestra la documentación del propio archivo de Franco, mostró siempre una paciencia casi heroica ante los desplantes de don Pedro, quien por fin cayó por decisión de Roma, harta de sus excentricidades (p. 583).

Todo el aborrecimiento de Preston por Churchill se desborda al comentar la intervención del líder conservador en los Comunes el 10 de diciembre de 1948 en favor y reconocimiento de Franco (p. 584). Para desahogar su frustración anti-Churchill, Preston arremete contra Franco y exagera ridículamente la mala situación económica de España cuando precisamente se acercaba ya el año 1950, en el que, aunque Preston lo ignore, España iba a recuperar inmediatamente el nivel económico perdido, después de los grandes logros y progresos de la Dictadura, en 1930 (p. 585); éste es un momento trascendental en la historia del régimen y en la biografía de Franco que Preston, por ignorancia culpable, desconoce. Y encima niega cínicamente los ofrecimientos de Gran Bretaña durante la guerra mundial al comprometerse a apoyar el resurgimiento de España como potencia en compensación por haber impedido a los alemanes el paso para que pudieran cerrar el Mediterráneo (p. 589); cuando una tesis probada molesta a Preston, simplemente la niega.

El título para el capítulo XXIII es disparatado; se refiere a los años 1950-1953, merecía encabezarse como había hecho el historiador socialista francés Max Gallo, mil veces más objetivo que Preston, como *La Segunda Victoria* y no con el título de una exagerada biografía pro-Franco, *Centinela de Occidente*. Preston se refiere a mi tía Pura Huétor, todo un personaje de la época, sobre la que no sabe una palabra, por eso dice que Franco la tenía como principal fuente de información. La verdad es que Franco se divertía mucho con las ocurrencias de mi tía, que por cierto era listísima, pero poseía unas fuentes de información bien diferentes. En mi próxima biografía de Franco me referiré a esas fuentes —mejor dicho centros— de información, cuyos terminales estaban en uno de los dos torreones del palacio del Pardo y

sobre los que Preston no tiene la menor idea. Dígase en su excusa que nadie ha hablado nunca de esos terminales ni de esos servicios, cuya acción fue insustituible para la pervivencia del régimen.

No sé por qué se extraña tanto Preston de la espectacular indumentaria con la que el yerno de Franco, marqués de Villaverde, se presentó en su propia boda. Llevaba el vistoso uniforme de la Orden del Santo Sepulcro, de la cual, aunque Preston no lo sepa, existe un solemne capítulo en las Islas Británicas, lo mismo que albergan al menos dos ramas —protestante y católica— de la Soberana Orden de Malta, que cuenta también con rutilantes uniformes de gala y cuyo miembro más notorio es el actual Gran Maestre, S. A. S. fray Andrew Bertie, emparentado con la Reina Isabel II. Y nada digamos de los Caballeros Templarios, que también poseen una sede en Londres. Supongo que al socialista Preston no le fascinan excesivamente todos estos oropeles pero no debe creerlos exclusivos de la familia de Franco. Sobre el marqués de Villaverde, Preston no sabe mucho; es un personaje importante del franquismo y en una biografía de Franco merecería mucha mayor atención, porque su vida afectó de forma muy directa a su suegro, que adoraba a su hija. Y ya que estamos en asuntos familiares, quisiera comentar que Preston ignora sistemáticamente un rasgo fundamental de la salud de Franco que influyó muchísimo en su vida: la grave afección de su dentadura, que le produjo en muchas ocasiones dolores insufribles y que le forzó a numerosas intervenciones que ha narrado un gran especialista, ya citado, el doctor Julio González Iglesias, en su libro *Los dientes de Franco*, publicado en 1996 por esta misma editorial. En ese libro se descalifica la rutinaria tesis de Preston (y de tantos biógrafos) sobre la famosa «voz atiplada» de Franco adolescente y se facilitan datos de sumo interés sobre la salud y la personalidad del Caudillo.

No se mueve a gusto Preston en el desencadenamiento de la guerra fría. Se ensaña con la cruzada anticomunista del senador McCarthy, a la que me he referido, junto con el terrible testimonio de Whittaker Chambers, en mi libro ya citado, *La Hoz y la Cruz*. No reconoce el impulso comunista agresivo que desencadenó la guerra de Corea. Los gastos reservados de España para condicionar la política norteamericana son verdaderamente ridículos (p. 601) en relación con las cifras reales que se emplean en el *lobbying* de la política sucia y secreta desarrollada en las intrigas del Congreso de Washington. En el fondo, Preston no toma nunca en serio la amenaza comunista; y se sitúa en una posición intermedia entre el compañero de viaje y el habitante de la «Casa común». Para las infiltraciones masónicas en los centros neurálgicos de

Inglaterra debería Preston repasar los estupendos libros de Stephen Knight y su muerte misteriosa (p. 604). El relato de las relaciones, muy complicadas, entre Franco y don Juan de Borbón es inconexo y está muy desorientado (p. 611). Es absolutamente falso que Franco fuera hipócrita al manifestarse como pronorteamericano (p. 616); desde la desaparición del incauto Roosevelt, que, rodeado de traidores, había entregado a Stalin media Europa, Franco admiró la imposición del Pentágono sobre los presidentes en sentido anticomunista militante, lo que inevitablemente comportaba una aproximación a España. Sobre el congreso eucarístico de Barcelona en 1952, Preston retoma a sus obsesiones y presenta a Franco como un rey cruzado medieval que consagra España a la Eucaristía; toda una sarta de dislates (p. 619). Dice tonterías sobre la Masonería en relación con Franco, pero pierde la estupenda ocasión de relatar (porque lo desconoce) el despampanante episodio antimasónico de Franco con motivo del Congreso de Barcelona y su visita al monasterio de Poblet (p. 621). Vuelve a la manía de Franco como «rey medieval» a propósito del Concordato de 1953, con lo que incurre en flagrante anacronismo; no existían Concordatos en la Edad Media, sino identificación del trono y el altar. Es divertida la interpretación de Preston sobre el acuerdo de España con los Estados Unidos en 1953 como una «disminución se soberanía». Cuando se afianzaba la política de bloques estratégicos y pactos multinacionales bajo la hegemonía de una superpotencia el concepto de soberanía, acuñado en el siglo XVI para la época del predominio de las potencias europeas, había perdido mucha carga dogmática. Es más que ridículo interpretar la apertura de la economía española como aferramiento a la autarquía durante otros seis años (p. 624). El año 1953 fue, por partida doble —Roma y el Atlántico— la segunda gran victoria de Franco. Preston se pierde en menudencias para no aceptarlo.

La transformación de España (1953-1969)

Este título en que resumo los capítulos XXIV a XXVII de Preston no es de Preston sino que nace de la propia realidad del progreso y el cambio económico y social de España. Preston titula el estudio de los años 1953-1956 en su capítulo XXIV *Años de triunfo y crisis* con el deliberado fin de que la época así definida termine mal; un recurso típico de la propaganda roja durante la guerra civil. He escogido este título para los capítulos XXIV a XXVII porque refleja la esencia del período y la más importante contribución del régimen de Franco al futuro de España, de la que entonces quedaron arrancadas dos lacras seculares: el hambre y el analfabetismo. La palabra

clave es precisamente ésa: transformación. En el plano económico, mediante los planes de estabilización y desarrollo, que encauzaron una economía española ya lanzada, aunque desordenadamente, desde el final de la década de los cuarenta.

El capítulo XXIV se refiere, pues, a los años que siguen a los pactos de 1953 con el Vaticano y los Estados Unidos, hasta la crisis de 1956. Paradójicamente Preston toma tan en serio la afición pictórica de Franco (que desde luego tenía cierta idea, pero no me parece que rebasara nunca la mediocridad) que llega a evocar, ante algunos de sus cuadros, los nombres de Goya y Modigliani (p. 630) y sinceramente creo que se pasa. Puesto a tomar en serio cosas raras también se impresiona Preston con la propuesta de «tercera fuerza» inventada por el profesor Rafael Calvo Serer, del Opus Dei, y formada por una mezcla de jesuitas, correligionarios del Opus y otro grupúsculos de cuyo asentimiento no consta; se trataba de una maniobra personal en la que el inquieto político, que procedía del integrismo franquista, quiso implicar a don Juan de Borbón, que durante bastante tiempo le hizo un caso excesivo. Una vez más Preston se recrea en la anécdota y la confunde con la categoría; el tratamiento que otorga a las elecciones municipales de 1954 lo demuestra (p. 635). Como el propósito principal de Preston consiste en denostar y enfangar la memoria de Franco, no dice una palabra sobre las continuas aproximaciones y concesiones ideológicas de don Juan de Borbón a los proyectos de Franco para el futuro, después del encuentro a bordo del «Azor» en 1948; ni sobre los diversos grupos de emisarios que trataron de aproximar a los dos personajes, porque estaban lúcidamente convencidos de algo que Preston afecta ignorar: que Franco, y sólo Franco, fue quien trajo a España la Monarquía, la segunda Restauración.

En la página 640 de su curiosa antibiografía, Preston se enfanga en sus obsesiones de crueldad. «El objetivo principal de Franco parecía ser matar a tantas personas como fuera posible». Y relaciona la afición de Franco a la caza con esa sed de sangre humana. Esto no es solamente un error y una injusticia, sino simplemente una falsedad insostenible. Hasta en la afición que Franco sentía por la pesca de altura encuentra Preston reparos; la pesca del atún, dice, se hacía con cuantiosos fondos del Estado (p. 642). ¿Por qué no compara los costos de las excursiones pesqueras del modesto *Azor*, con los enormes dispendios del príncipe Felipe de Edimburgo y su equívoca corte de amigos y amigas en largos viajes a Extremo Oriente a bordo del grandioso *Britannia*? Todo ello aderezado con alusiones a la «colonia de Marruecos» y otras lindezas. Al menos debería haberse procurado Preston una información

elemental sobre el problema de la independencia de Marruecos, que desconoce por completo.

Para la crisis universitaria de 1956 Preston debería leer la *Autobiografía de Federico Sánchez*, de Jorge Semprún, en vez de despotricar contra Franco por atribuir las causas de la agitación a la acción concertada de la Masonería y el comunismo. Evidentemente no se trataba de una acción exclusiva del comunismo, pero Semprún y sus muchachos eran ardientes comunistas y desempeñaron un papel de primer orden en la crisis (p. 645). La imprecisión de siempre: la Universidad de Madrid no se llamaba entonces Complutense, como se conoce ahora con notoria impropiedad (p. 646). Y con un ramplón tratamiento de la crisis juvenil de 1956 termina frívolamente el capítulo XXIV.

El período, de comprensión nada sencilla, 1956-1960 es objeto del capítulo XXV. Preston titula *Aprendiendo a delegar* y se refiere a la presunta entrega de Franco al equipo económico seleccionado por Carrero Blanco entre tecnócratas afectos al Opus Dei, que en 1957 se convirtieron en el grupo dominante del gobierno hasta la muerte de Carrero, con varios cambios de personas. De momento Preston se arma un lío entre el líder de los monárquicos que colaboraban con Franco, conde de Ruiseñada, y el capitán general de Cataluña, Juan Bautista Sánchez, los dos desaparecidos prematuramente en plena actividad política sin que nadie (o casi nadie) haya explicado su muerte. Preston me copia la frase de Franco: «Somos una monarquía sin realeza» (p. 656), que no explica pese a su trascendencia. Preston no ha comprendido nunca el carácter de las dos plataformas católicas para la vida pública en la España del siglo XX, la Asociación de Propagandistas y el Opus Dei y se contenta con afirmar formulariamente que «no son muy diferentes» (p. 669). Lo son como un huevo y una castaña, pero será inútil explicárselo aquí. Otra curiosidad de Preston es considerar que España no empezó su crecimiento económico hasta que Franco delegó la responsabilidad en los tecnócratas (p. 682). Y sobre el orden, la paz y la disciplina social que Franco había mantenido en España desde el 1 de abril de 1939, y que constituyó la base esencial para el progreso y la transformación económica, Preston no se digna reconocer nada; es capaz de elogiar desmedidamente a los tecnócratas con tal de restar méritos a Franco (p. 682). El auge turístico español se debe, según Preston, al gasto de los trabajadores europeos en España, sin que tenga en cuenta para nada el enorme esfuerzo de infraestructuras y alojamientos realizado por los españoles. Adelantar a 1960

la reducción de Franco a un simple figurón es una arbitrariedad que no se funda en un solo hecho demostrable.

Preston disimula la transformación de España en la primera mitad de los años sesenta —el desencadenamiento pleno del desarrollo—, sin atención alguna a las transformaciones simultáneas en los campos social y cultural, que fueron trascendentales; y con referencia que pretende ser excluyente a quienes pensaban en el carácter mortal del Caudillo, a quien en 1960 restaban aún quince años de vida y poder. Preston, al hablar de don Juan, llega casi al colmo del pequeño despropósito con una cita del inefable juanista José María Toquero, cuyos libros sobre el que llamaba «rey padre» fueron flor de un día entre la rechifla general (p. 687). Se ha hartado Preston de censurar la inoperancia de las Cortes; pero al hablar de 1960 reconoce la eficacia de los procuradores para bloquear proyectos de ley presentados por el gobierno (p. 688). Trata Preston de ridiculizar a Franco por su afirmación de que sin su victoria España sería un país comunista (p. 693), pero ésa era la profunda verdad, como subrayó Gonzalo Fernández de la Mora en el debate sobre la época de Franco dirigido por Luis Herrero en TVE a fines de 1997. Nuevamente trata de denostar a Franco y Carrero por su idea de que la Comunidad Económica Europea estaba trufada de masones (p. 701), pero los observadores más sinceros siguen pensando lo mismo cuando se escriben estas líneas treinta y tantos años después. También abomina de Franco por exagerar la influencia social del comunismo en España, pero en los años sesenta los comunistas se habían infiltrado en organizaciones obreras católicas y las habían destrozado por dentro, como he demostrado cumplidamente en mis libros recientes sobre historia de la Iglesia (p. 702). Con la Iglesia topa siempre la ignorancia de Preston; quien afirma que el choque del régimen con el Vaticano y la Iglesia católica se inició con la convocatoria del Concilio Vaticano II, cuando realmente sólo apareció, y de forma minoritaria, al final de la gran asamblea romana (p. 703). El capitán general Muñoz Grandes era para Preston un extremista de derechas (p. 705), calificación completamente inadecuada para el austero militar. Preston nos prohíbe toda comparación entre la situación económica española en 1936 y en 1962 (p. 706), pero la primera representaba el caos, la segunda la transformación completa y la prosperidad rampante. ¿Por qué su odio a Franco le lleva a proferir semejante frivolidad arbitraria e infantil? No hubo en el comportamiento de Franco durante los años sesenta cambio de ninguna clase; Preston le describe como un afectado personaje de la realeza, que se limitaba a recibir a grupos de admiradores (p. 706). Pero nadie que viviera

cerca de Franco notó semejante transformación. Hacía la vida de siempre, mantenía la supervisión de los asuntos públicos y los trabajos ministeriales como siempre. ¿De dónde habrá sacado Preston ese infundio? Afirma, erróneamente, que políticos tan competentes y con tanta visión global del gobierno como Fraga y Silva poseían sentido de la política, pero no de la economía; es una aberración inconcebible (p. 707). La contribución de Fraga al desarrollo económico de España en los años sesenta, mediante una exhaustiva atención y fomento del turismo, es algo que sus peores enemigos le reconocen; Preston no lo sabe. Franco no simplificó al Concilio como nido de masones y comunistas; fue Pablo VI, elegido en pleno Concilio, quien denunció la infiltración del «humo del infierno» en la Iglesia conciliar. Franco se rendía a veces a la simplificación, pero Preston le supera en toda la línea.

En mi libro *Carrillo miente*, de 1994, he estudiado el caso Grimau, tratado por Preston con su característica frivolidad (p. 708). La revista *Cuadernos para el diálogo*, no era liberal, sino preferentemente socialista, con incrustaciones comunistas y democristianas; y jamás fue un diario como cree Preston.

Durante los años 1964-1969, Franco, ante la insistencia de sus principales colaboradores de todos los matices, continuó la supervisión del desarrollo y se puso seriamente a preparar la sucesión en la persona del príncipe don Juan Carlos, no se dedicó a «prepararse para la inmortalidad» como titula con frivolidad el profesor Preston. En ese período, el ritmo de la transformación de España y la aproximación al nivel económico y social de Europa adquirió caracteres de insólita aceleración. Todo el mundo hablaba del «milagro español»; España lograba el pleno empleo y se convertía en un país industrial y de servicios, cada vez más alejado del país agrícola que había sido durante siglos. Por supuesto que Preston no atiende a los aspectos más hondos de la sucesión, ni a la preparación del Príncipe que desde 1960 se había decidido ya inequívocamente por la democracia y cada vez ocultaba menos, dentro y fuera de España, esa decisión. De todo esto, que era lo esencial, no se ocupa Preston, obsesionado con sus cominerías y sus irrelevancias. Reconoce Preston el otorgamiento de una amnistía para «varios millares de prisioneros políticos», pero precisamente en 1969 Franco otorgó una amnistía total a millones de españoles por cualquier tipo de crímenes que hubieran cometido algunos durante la guerra civil; a estas alturas todavía se está juzgando en Francia a colaboracionistas con el régimen de Vichy en los años cuarenta. Y esos «millares de prisioneros políticos» son otro de los acreditados inventos de Preston (p. 715). El término «nacional-catolicismo» (p. 717) es una

falsedad partidista que ignora el apoyo muy mayoritario de los católicos españoles a Franco mientras vivió. Ese término fue inventado por la clerigalla antifranquista, no era, como cree erradamente Preston, un vocablo perteneciente a la jerga del régimen (p. 718). No cree Preston en la infiltración comunista dentro de las organizaciones católicas, pero en mi libro *La Hoz y la Cruz* podrá ver las pruebas, una por una. Federico Silva Muñoz, el «ministro eficacia» de la Asociación de Propagandistas, principal émulo y rival, con Fraga, de los tecnócratas, es calificado por Preston, en una expresión de brutal insuficiencia, como «tecnócrata gris» (p. 722). Nunca se ha dignado reconocer ni menos analizar Preston los efectos de la Ley de Prensa, conseguida por Fraga, que fue adelantada de la apertura y puerta irreversiblemente abierta al camino de la democracia. Tampoco estudia Preston la esperanza y la decepción de la Ley Orgánica del Estado de 1967 aunque reconoce que el referéndum, celebrado después que Franco pusiera en televisión toda su hoja de servicios a España para pedir el sí, se convirtió en una gran victoria de Franco (p. 731). La información enviada por Alfredo Sánchez Bella, embajador en Roma, sobre la financiación de la oposición de izquierdas por los poderosos sindicatos de Norteamérica (p. 733), fue un gran acierto de penetración y de intuición, pero Preston la despacha con sus obsesivos lugares comunes. La frase demasiado famosa, atribuida a la Reina Victoria Eugenia durante el bautizo del príncipe Felipe, en la que pidió a Franco que designara pronto al sucesor en cualquiera de las tres generaciones borbónicas presentes, nos ha hecho caer a muchos en la trampa, pero, como probaré en mi definitiva biografía de Franco, nunca se pronunció, aunque al profesor Carlos Seco le va a dar un soponcio cuando vea mis pruebas (p. 736). Y así llega Preston al acto solemne de la jura del Príncipe don Juan Carlos en las Cortes, en julio de 1969, acto trascendental en cuyos entresijos se niega a entrar sencillamente porque los desconoce.

El final de Franco

El largo adiós se titula el largo capítulo final de Preston, el XXVIII, para resumir los años 1969 a 1975. Creo que adelanta un poco los adioses; según el testimonio de quienes vivían junto a Franco, y de acuerdo con lo que puede observar directamente en él cuando le visité, el declive irreversible de Franco se aceleró de forma galopante al sobrevenir en diciembre de 1973 el asesinato del almirante Carrero Blanco.

Preston no analiza a fondo la crisis Matesa de 1969, decidida por Carrero al descubrirse el turbio asunto de los telares sin lanzadera (p. 744). No sé de

dónde se ha sacado Preston la idea de que, en las audiencias de su fase final, Franco ordenaba que le colocasen una luz detrás para deslumbrar a su interlocutor e impedirle que viera a dónde se dirigía su mirada; yo nunca vi tal luz y sí le vi siempre claramente los ojos en aquellos años, era lo más vivo y penetrante de su aspecto y su actitud (p. 750). La distribución de sotanas por el Movimiento para fingir una amplia presencia clerical en las manifestaciones finales es una invención (p. 756). Es absolutamente falso que Carrero, al haber perdido confianza en su equipo de tecnócratas, alentase las actividades terroristas de la extrema derecha (p. 759); esa información contiene varios disparates. El tratamiento de Preston al asesinato de Carrero es otro ejemplo de superficialidad y frivolidad (p. 764). Yo viví intensamente aquellos años muy cerca del poder y no reconozco la febril época de España en las desvaídas páginas de Preston. Los miembros del grupo Tácito que accedieron a la alta política como entrenamiento para desempeñar más altos puestos en la transición, ya prácticamente iniciada, no recibieron direcciones generales como cree Preston (p. 770) sino subsecretarías. El inicio de la irreversible enfermedad de Franco no fue el 15, sino el 12 de octubre; y la importante crisis anterior grave de su salud, en julio de 1974, no merece la atención de Preston pese a la pugna feroz entre bastidores que se desencadenó. La patética agonía y muerte de Franco se trata por Preston deslavazadamente, se despacha con cuatro brochazos intrascendentes. El torpe relato de la muerte es digno del torpe relato de la vida de Franco. Un desastre.

El epílogo es digno también de todo el libro; una cacofonía final sin fuste ni gracia, sin pena ni gloria. Un revoltijo de lugares comunes que no merece mayor comentario.

Esto da de sí el libro de Preston, de imponente apariencia y ostentoso vacío interior. He querido sacar al aire limpio de la Historia sus vergüenzas, porque el audaz historiador británico ha influido de forma desproporcionada en bastantes españoles que se han tragado sus innumerables sapos, y especialmente en algunos escritores, más ignorantes que él en historia de España, pero más culpables, por haberse entregado sin crítica a las invenciones y resentimientos del alienígena de Liverpool. Entre ellos destacan Luis María Anson y José Luis de Vilallonga, cuyos escritos voy a abordar inmediatamente. Cancelado todo posible valor en la obra histórica de Preston, las opiniones de esos dos personajes sobre Franco caen por su base y se estrellan. Voy a demostrarlo.

EPÍLOGO PROVISIONAL DE PRESTON: LA REPÚBLICA ASEDIADA

Sin embargo, antes de adentrarme en los citados libros antifranquistas, debo completar el tratamiento de Preston con el libro que ha dirigido para conmemorar los sesenta años de la guerra civil y que llega ahora a mis manos.

Paul Preston repudia muchas veces el término «cerco internacional» aplicado a la España de Franco desde el año 1944 hasta el desencadenamiento de la guerra fría en 1947 e incluso hasta 1953, como si se tratara de una expresión para la propaganda. Pero no es así, sino expresión de una realidad evidente para quienes no quieran retorcer las cosas; se trataba de un movimiento de acoso al régimen de España por impulso de los vencidos en la guerra civil y sobre todo los comunistas despechados por su derrota de 1939. Sin embargo, para conmemorar el 60 aniversario de la guerra civil, Preston dirigió en 1996 una obra colectiva que ha tardado tres años en aparecer en España con el título *La República asediada*, que no se refiere a la República de 1931-1936, como podría creer un lector español, sino a la República del Frente Popular en guerra civil desde 1936 a 1939. En España el libro ha aparecido en Ediciones Península y en el año 1999, es decir, en el 60 aniversario del final del conflicto.

Con este libro, como ha sucedido con el dirigido por Santos Juliá sobre las víctimas de la guerra, Preston incide en una táctica que va siendo habitual en el frente histórico al que se adscribe; el frente de los herederos históricos de la República vencida en 1939. La táctica consiste en la publicación simultánea de varios ensayos debidos a autores diferentes, todos con ideología semejante y dotados de unas elevadas dosis de parcialidad y revanchismo. Dentro del encuadre de este libro, que en el caso de Preston resulta especialmente claro, la tendencia de este conjunto historiográfico parece coincidir con la línea inspirada por la Internacional Socialista, los antiguos comunistas recalcitrantes y, por supuesto, la orientación masónica, lo cual confiere al resultado un inequívoco sabor a *vendetta* histórica. Repasaré brevemente los ensayos, entre los que hay mucha, demasiada paja pero también un par de ellos dignos de atención y consideración.

La introducción sesgada de Paul Preston

Creo haber analizado ya con detalle más que suficiente, las que considero obras capitales de Preston sobre el temario a que se refiere este nuevo libro colectivo. No cabe, desde luego, esperar del autor británico una rectificación que por su entidad habría de resultar abrumadora si buscara de verdad una

reconciliación con la Historia. No lo hace; se limita a dar paso a las colaboraciones especializadas de sus coautores. Empieza hurgando en algo que fue sagrado para todos los españoles en los momentos más difíciles de la transición histórica que siguió a la muerte de Franco; el que llama, con verdad, «pacto del olvido» para no enconar las antiguas memorias históricas enfrentadas desde los tiempos de la República y la guerra civil. Ese pacto existió; soy testigo de que, sin recibir instrucciones expresas de ninguna clase, los españoles de las más diversas tendencias acudieron al referéndum para la Reforma Política de 1978 y a las primeras elecciones generales (las de 1977 y 1979) con alto espíritu de reconciliación, sin pretender excluir políticamente ni a los colaboradores del régimen de Franco ni a las antiguas figuras de la política española, algunas de las cuales (Carrillo, la Pasionaria, etc.) volvieron al Parlamento y a la plenitud de la vida política, otras como José María Gil Robles y Joaquín Ruiz-Giménez, quedaron descartados en las urnas.

Si no me falla la memoria, el pacto de silencio sobre la memoria histórica quedó violentamente roto en la arena política por el líder socialista Felipe González en las campañas electorales de 1993 y 1996. Está claro que en la primera fecha no consiguió aventar las graves sospechas de corrupción que recaían sobre su partido y en 1996 perdió las elecciones generales frente al Partido Popular, que después de su estrecha victoria trató de romper, arbitraria y equivocadamente, con la propia memoria histórica de su tradición política, lo que le ha valido después peligrosas abstenciones. El viraje anticonciliador del Partido Socialista ha continuado desde entonces, de acuerdo con nuevas orientaciones de la Internacional Socialista y la Masonería, las dos instituciones tan emparejadas en el siglo XX que están tratando en estos últimos años de condicionar la memoria histórica de los españoles, a través de la poderosa acción de sus medios de comunicación afines, en sentido mucho más partidista que el observado por todos los partidos en 1977-1979. Creo que el dramático fracaso del pronunciamiento militar del 23 de febrero de 1981, con la práctica desaparición del «poder disuasorio» de las Fuerzas Armadas, como le llamaba el profesor Amando de Miguel antes de ese acontecimiento, ha tenido mucho que ver en el cambio de situación, agravado por el acomplejamiento de las fuerzas del centro-derecha empeñadas en presentarse como de centro-izquierda con diversos disfraces. Todo este libro dirigido por Paul Preston responde al nuevo objetivo electoral marcado, sin duda, por las nuevas directrices de la Internacional Socialista, con la colaboración de los comunistas y excomunistas y, por supuesto, con una venganza de corte masónico.

La localización temporal del Alzamiento de 1936 se cita muy confusamente en el nuevo ensayo de Preston, que la reduce a los días 17 y 18 de julio, aunque realmente se prolongó hasta fines de ese mes y los primeros días de agosto (p. 12). En la misma página, Preston incluye la tesis fundamental de todo este libro y de todo el frente histórico cuya actividad se ha recrudecido desde 1993: «confirmar la otra verdad fundamental sobre la guerra (civil), durante la misma y tras ella: constituye un episodio más de la gran Guerra Civil europea que acabó en 1945». Creo que fui el primer historiador en calificar como guerra civil europea a la Segunda Guerra Mundial, y no los autores citados en nota por Preston; pero en todo caso, creo que Preston no tiene razón al asumir como clave histórica una tesis cerrada de la propaganda afecta al Frente Popular; que la guerra civil española fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Volveré sobre este punto capital al tratar de la mitología sobre la guerra civil en este mismo libro, pero deseo dejar clavada desde ahora mismo mi discrepancia. Nuestra guerra fue un conflicto interno que nada tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial; ésa es la desnuda verdad histórica.

Es falso que las unidades selectas del ejército español que formaban las Fuerzas de Marruecos puedan calificarse de «ejército colonial» (p. 13); eran parte del Ejército español, integradas en gran parte por ciudadanos españoles. Y es injurioso denominar «sanguinaria» a la «Legión Extranjera» transportada por el puente aéreo de Franco (p. 13), Legión Extranjera era el nombre de la francesa, la nuestra se denomina Tercio o Legión y admitía extranjeros que siempre constituyeron una minoría desde la misma fundación de la unidad en al reinado de Alfonso XIII. Era una tropa de choque a la que no compete el calificativo de sanguinaria en modo alguno. Para Preston el falso asedio a la República (desde el exterior) comienza desde el principio de la guerra civil; no cabe una concepción más aberrante sobre la actitud de Europa. La zona nacional pudo sobrevivir por su disciplina y orden interno; Preston interpreta que estaba «brutalmente militarizada» (p. 15), simplemente porque no vivía en régimen anárquico como la zona enemiga, pero eso no es un demérito, sino una condición de la victoria. Luego habla de la «versión oficial franquista» sobre la ayuda exterior que recibieron uno y otro bando; pero Preston se equivoca de medio a medio y debería saber que jamás la Junta de Defensa, ni la Junta Técnica del Estado, ni los gobiernos de Franco en guerra y postguerra (que son las únicas entidades capacitadas para comunicar «versiones oficiales») facilitaron versión oficial de ninguna clase sobre los efectivos recibidos por cada zona; salvo la nota del Ministerio de Hacienda redactada

por el ministro Larraz y aparecida ¡en la página de anuncios del *BOE*! Dejaron esa estimación en manos de los historiadores a quienes no impusieron directrices de ninguna clase, demuéstrelo Preston con documentos, que no los hay (p. 15). Preston asume sin crítica las tesis de Howson sobre el armamento recibido por las dos zonas; hablaré de ello al tratar del ensayo de Howson. Preston asume, se traga las conclusiones de sus colaboradores; no las comenta con el más mínimo espíritu crítico que requieren problemas tan polémicos. Éste es un libro de equipo político y con pretensiones de contrapropaganda, no un simposio de carácter científico, por eso Preston acepta, ya hacen falta tragaderas, la absurda tesis de su colega Southworth, a la que me referiré en su lugar. Franco, que empezó la guerra civil aislado y con escasísimos recursos, no se empeñó en «ganar la guerra lenta y concienzudamente» (p. 18); es una tesis corriente en la propaganda antifranquista, como si Franco hubiera rechazado la realización de una victoria rápida. Olvida Preston que los planes de Mola, con los que Franco estaba completamente de acuerdo, pronosticaban una victoria del Alzamiento en 72 horas, que evidentemente tuvieron que prolongarse un poco más, hasta un millar de días. Incluir a Badajoz y Guernica entre las «masacres premeditadas y sistemáticas» (p. 18) carece de sentido. ¿Cómo calificaría Preston a las masacres premeditadas y sistemáticas de Dresde, Hiroshima y Nagasaki, perpetradas al fin de la Segunda Guerra Mundial por sus compatriotas y sus aliados? ¿Por qué los hechos de la guerra civil española se investigan hasta el retorcimiento y el absurdo y las hecatombes de la Segunda Guerra Mundial permanecen ignoradas salvo en el caso del Holocausto contra los judíos?

La imagen británica oficial de Franco durante la guerra civil

El primer ensayo que inserta este libro, después de la insuficiente presentación escrita por Preston, es un estudio de Enrique Moradiellos sobre la que cree actitud británica mucho más favorable a Franco que al Frente Popular. El ensayo no carece de interés, pero me consta personalmente que Franco no estaba convencido ni mucho menos sobre esa tesis. Que Franco gozaba de alto prestigio para los observadores británicos anteriores a la guerra civil, y que la zona nacional representaba muchas mayores garantías para los intereses y las inversiones británicas en España que los incautadores del Frente Popular es obvio, aunque el autor profundiza documentadamente en el asunto. El hecho de la presencia de Franco al frente del Alzamiento, dice Moradiellos con razón, «demostraba claramente a las autoridades británicas

que se hallaban ante un movimiento militar contrarrevolucionario y nacionalista, sin peligrosas pretensiones fascistas, de revisión del *statu quo* internacional como sucedía en el caso de Italia y Alemania» (p. 26, el autor quiere decir sin duda «contra lo que sucedía»). «Por tanto —continúa— la insurrección era básicamente inocua para sus intereses estratégicos… y económicos» (p. 26). Así era en realidad. Franco, en efecto, no parecía (porque no era) «un peligroso político doctrinario como Hitler ni un imprevisible demagogo fascista como Mussolini» (p. 26). Hace bien Moradiellos en destacar el acierto de los observadores británicos de entonces sobre la primacía inminente de Franco entre todos los promotores del movimiento. Cuando creo que un colaborador de Preston acierta en sus datos y diagnósticos, me complace mucho manifestar mi conformidad, como en este caso.

Desde el 8 de agosto —el dato es importante—, «Franco se apresuró a telegrafiar una garantía formal de que tal ayuda (germano-italiana) no supondría compensaciones territoriales de ningún tipo para Roma y Berlín» (p. 26). Más aún, «la posterior evolución de la situación política en el campo insurgente acentuó la confianza oficial británica en las cualidades del general Franco» (p. 27). Todos estos datos han sido confirmados por Moradiellos en la documentación británica, lo que constituye mérito notable. Los observadores de las islas pronosticaban una dictadura «militar liberal de Franco con la Iglesia católica restablecida, pero al margen de la política» (p. 27) y eso realmente era lo que Franco pensaba en los primeros meses de la guerra. Éste es el fundamento de la política británica de No Intervención y de la tolerancia de Londres a la ayuda militar germano-italiana a Franco para contrarrestar la ayuda soviética a sus enemigos. Este enfoque británico se mantuvo durante el año 1937, reforzado por la importante victoria de Franco en el Norte de España. Esta actitud se continuó luego hasta el final de la guerra civil. Todo el ensayo de Moradiellos es históricamente aceptable; lo que no comprendo es por qué al final lo estropea atribuyendo a Franco, sin mayores pruebas, una actitud divergente a la que había mantenido hacia Inglaterra durante toda la guerra civil. Pero como no intenta la prueba, no me molestaré en refutar la sombreada tesis.

El tercer ensayo, debido al propio Preston, es más partidista y discutible. Se titula *La aventura española de Mussolini: del riesgo limitado a la guerra abierta*. Cuando se mantiene en el espacio reducido de lo monográfico aporta datos interesantes sobre los contactos italianos de Franco en el Norte de África; cuando generaliza, casi siempre desbarra. Llama a Mola «comandante

de los rebeldes militares en la España peninsular» (p. 41), pero nunca ejerció como tal, ni antes ni por supuesto después de la jefatura suprema de Franco, a la que él contribuyó sobremanera. Es verdad que Mola había previsto el éxito de un pronunciamiento rápido; pero Franco pensó, desde la misma noche del 18 de julio, en una guerra larga, dura y cruel, como revela Luis Bolín en su testimonio, que Preston conoce pero luego olvida. Sufre cierta confusión por la diversidad de las gestiones de la España rebelde en Italia en busca de armas; conoce también el testimonio del marqués de Luca de Tena en *Mis amigos muertos* sobre la intervención decisiva de Alfonso XIII ante Mussolini, pero no advierte su carácter esencial y determinante; el rey fue quien consiguió el envío de los aviones italianos a Melilla. Junto a Franco destacó el enlace italiano Luccardi, cuya correspondencia secreta se revela con oportunidad indudable (p. 49). En suma, la investigación de Preston se refiere a un tiempo corto pero esencial; resulta muy interesante y en rasgos esenciales aceptable, sobre todo cuando no cede a la tentación de generalizar.

El estudio siguiente se debe a Christian Leitz, doctorando del St. Antony's College de Oxford y versa sobre la intervención inicial de Alemania en la guerra civil española. Tengo la impresión de que no aporta muchos datos nuevos por encima de la importante investigación del profesor Ángel Viñas sobre problema semejante, pero se lee con interés cuando no cede al tópico, por ejemplo, cuando se emperra en que los generales del Alzamiento no esperaban una guerra larga (p. 71), lo cual en el caso fundamental de Franco es falso. Aporta el caso curioso de una considerable venta de armas pesadas alemanas al gobierno del Frente Popular español (p. 77) y se obstina inútilmente en encontrar contactos serios entre la Alemania nazi y los rebeldes españoles antes del Alzamiento; como no existieron no puede hallarlos. Se equivoca en la datación del primer transporte aéreo de tropas africanas a Sevilla (p. 79).

Denys Smyth contrasta la solidaridad y el egoísmo en la política soviética respecto a la España republicana. Tal vez así intenta Preston, con técnica de malabarismo, incluir a la mismísima Unión Soviética en el contexto general del asedio exterior a la España del Frente Popular. Nada importante observo en este ensayo que no afecta a la ya bien establecida tesis de que la Unión Soviética fue, desde que sus dirigentes se percataron de lo que estaba pasando en España, valedor principal de la España roja, que sin la cooperación de Stalin hubiera sucumbido muy pronto. Por supuesto que sería inútil buscar en este flojo ensayo el más mínimo dato sobre la obsesión de Stalin en la

persecución y aniquilamiento de los grupos españoles a quienes consideraba «trotskistas».

En cambio me parece sumamente original e interesante el ensayo siguiente, debido a R. A. Stradling, sobre la participación irlandesa en la guerra de España. El autor se empeña en inscribir a la zona roja dentro de la marcha incesante del socialismo universal hacia el progreso de la Humanidad, lo que requiere altísimas dosis de ficción y un optimismo tan desbordante como falso (p. 120). El estudio revela con maestría las difíciles circunstancias de la política irlandesa, interior y exterior, en los años treinta. La gran mayoría de la población en la Irlanda libre era católica y sin vacilar favoreció a la causa de Franco que identificaban, con razón, como la causa de la Iglesia católica. El gobierno presidido por Eamon De Valera se mantuvo teóricamente neutral en la guerra de España, pero no se empeñó en impedir la marcha discreta de voluntarios a combatir en una y otra zona; unos pocos en las brigadas internacionales, otros, en mucho mayor número, en la brigada católica irlandesa que mandó el general O'Duffy, fundador de la policía nacional de Irlanda. Cree el autor del ensayo que el número de clérigos asesinados en la España del Frente Popular alcanzó cifras «que quizás no se conocerán nunca» (p. 127), pero las listas se han incluido en el libro fundamental de monseñor Antonio Montero, que el autor cita. La Brigada Irlandesa contó con un millar de voluntarios que acudieron esforzadamente a la zona nacional para combatir en una guerra de religión. Llegaron a España en los últimos días de 1936 y después de una participación defensiva en el sector del Jarama-Cuesta de la Reina, su jefe no consiguió que sus bravos soldados se integrasen efectivamente en el Ejército Nacional y Franco no tuvo más remedio que disolver la unidad, que se había encuadrado como una bandera del Tercio. El esfuerzo que hace el autor para comparar a los escasos irlandeses que lucharon en las brigadas internacionales y la valerosa Bandera del general O'Duffy resultan evidentemente desproporcionados. Salvado el honor, la aventura irlandesa en España no salió bien y tuvo que interrumpirse en la primavera de 1937.

La extraña proclividad británica hacia los anarquistas

Nunca me he explicado la extraña proclividad de los escritores británicos hacia los anarquistas. Tal vez porque tienen la suerte de no haber experimentado en sus islas brotes de anarquismo como los que a veces han reventado en Europa continental a través de la «propaganda por el hecho» y otras formas de terrorismo puro y duro que los intérpretes británicos tienden a

considerar como desahogos del quijotismo proletario. El caso es que la civilizada Europa se había liberado de la pesadilla anarquista poco después de comenzar el siglo XX, cuando el anarquismo europeo se refugió en España, creó aquí el sindicato más importante con un millón de afiliados a los que encuadraron los grupos de acción terrorista que acabaron por integrarse en la Federación Anarquista Ibérica en los años veinte. Pero el anarquismo español nada tenía de romántico ni menos de caballeresco. Era un movimiento sin ley, enemigo del Estado y de la sociedad, empeñado en abolir la religión, las instituciones, las normas elementales de la economía, la familia, el Derecho y, en definitiva, la civilización. Lo malo es que el movimiento anarquista contó con un conjunto muy efectivo de abanderados culturales que han conseguido presentar al anarquismo como una empresa redentora de la humanidad y promotora de la cultura con la que querían sustituir al sentimiento religioso; no han faltado gravísimas exageraciones que han tratado de presentar al anarquismo español como un intento redentor de los marginados e incluso una nueva religión. El autor de este ensayo es uno de esos filo-anarquistas impenitentes que escribe más con el sentimiento que con la razón; y el anarquismo es un movimiento esencialmente irracional.

Chris Easham cree que la raíz del anarquismo es un individualismo exacerbado y tiene razón. Lo que ya se ve menos claro es el otro lema del anarquismo, la solidaridad, que dio título a un diario anarquista de Barcelona, *la Soli*. ¿Cómo se concilia el individualismo absoluto, expresado a través del desprecio total a la ley «burguesa», con la solidaridad humana, si los métodos de la «propaganda por el hecho» son el terror, el asesinato, el crimen considerado como un rito? El órgano de los intelectuales anarquistas españoles, la famosa *Revista Blanca* exaltaba algunas figuras intelectuales burguesas como Enrique Ibsen, Friedrich Nietzsche y, sobre todo, Max Stirner, que «creía en la virtud del mal y alababa el crimen», con rechazo total de toda moral colectiva, tanto religiosa como revolucionaria. Así se da el hecho curioso que estos autores burgueses, a quienes el proletariado importaba un bledo, se convierten, gracias a los culpables intelectuales del anarquismo andante en su revista, en inspiradores máximos de la masa anarquista que pugnaba a duras penas por superar el analfabetismo. Stirner, dice con razón Easham, concebía como «agentes del cambio» a una «mescolanza de pobres, villanos, criminales e intelectuales desclasados». Éstos eran los profetas del anarquismo español y en buena parte los responsables de las espantosas calamidades que el anarquismo español indujo en la sociedad española desde fines del siglo XIX hasta desembocar en la

República, cuya destrucción es efecto primordial del anarquismo, y en la guerra civil, durante la cual los anarquistas hicieron reventar al Frente Popular cuando ingresaron en su gobierno en noviembre de 1936. Es muy curioso un hecho que ni Easham ni otros tratadistas del anarquismo explican: la guerra civil terminó con el anarquismo en España a través de varios baños de sangre, decenas de miles de anarquistas sucumbieron en la represión de la propia zona y en la zona enemiga, después de haberse apuntado en su «ideal regenerador» innumerables desórdenes y asesinatos. Nadie subraya con la debida energía que la actividad anarquista fue el cáncer de la República desde el mismo verano de 1931; cuando ya se había declarado la guerra civil, los anarquistas de Madrid continuaron varios días emperrados en la huelga general que habían proclamado semanas antes, a la que consideraban más importante que el conflicto que terminaría con ellos.

Easham estudia muy bien las contradicciones que trajo consigo la aparición del anarcosindicalismo, cuyas pugnas internas perturbaron la evolución del proletariado español durante todo el primer tercio del siglo XX. Está bien vista por Easham la confusa relación, más bien la contradicción, entre individualismo y colectivismo, pero uno y otro eran los dogmas principales del anarquismo. Prohibidos en España por la Dictadura de Primo de Rivera, los líderes anarquistas españoles, Durruti y Ascaso, «barrieron Sudamérica y Cuba expropiando bancos, asesinando empleados a su paso» (p. 161), pero pese a exponer desnudamente los crímenes de los que llama «grupos de afinidad», el autor de este ensayo no puede disimular una extraña fascinación por estas bandas de criminales empeñadas en terminar con la civilización e incluso con la sociedad tal como se comprendían en Occidente.

Al declararse la guerra civil, el territorio principal del anarquismo y el anarcosindicalismo era Cataluña, especialmente la ciudad de Barcelona, donde los grupos de acción y de control se apoderaron en buena parte del poder. Nadie ha descrito mejor que Azaña el desgobierno provocado por los sindicatos socialista y, sobre todo, anarquistas en toda la España republicana. Es cierto que consiguieron armas y se opusieron al alzamiento de los militares, pero también hicieron virtualmente imposible toda acción de gobierno y se opusieron cerradamente a toda organización seria del ejército, que no pudo emprenderse hasta que Francisco Largo Caballero, líder sindical antes que político, fue encargado del poder por el presidente Azaña primero en septiembre y luego en noviembre de 1936, en esta segunda fecha, los anarcosindicalistas, contradictoriamente, ingresaron en el Frente Popular y desempeñaron cuatro importantes carteras en la coalición gubernamental. Que

un anarquista de pura cepa, Juan Garda Oliver, ocupase precisamente la cartera de Justicia, fue todo un sarcasmo que nadie se podía explicar. Acertadamente, Easham rebaja la importancia de los *incontrolados*, que eran casi siempre libertarios incapaces de someterse a cualquier tipo de disciplina y que de hecho estaban mucho más controlados de lo que se cree. En resolución, el ensayo de Easham, si le podamos de excesivas admiraciones «incontroladas» por las «gestas anarquistas» es, me parece, un instrumento muy útil para comprender por qué el Frente Popular, con los anarquistas dentro, perdió la guerra civil española. En esta ocasión, el *asedio a la República* se plantea y desarrolla por dentro, sin límite ni remisión.

La profesora Helen Graham, veterana hispanista inscrita ideológica e históricamente en la Internacional Socialista, nos obsequia en este libro con un ensayo titulado *La movilización con vistas a la guerra total: la experiencia republicana*. Por desgracia nada nuevo parece añadir a sus escritos anteriores y a las investigaciones serias más recientes. Abre con un desenfoque palpable: la insurrección militar de 1936 pretendía simplemente restablecer la situación anterior al advenimiento de la República en 1931, lo cual es falso: en las Instrucciones de Mola se fija con toda nitidez que el Alzamiento no se preparó ni emprendió para restaurar la monarquía de don Alfonso XIII, ni menos su contexto económico y social. ¿Por qué restringe Graham a las izquierdas el conjunto de «clases medias que habían apoyado el proyecto reformista republicano»? (p. 175). Ni aquel proyecto era reformista sino vindicativo y, desde 1934, revolucionario, ni todas las clases medias le apoyaron; eran más numerosas las que secundaban el gobierno de centro-derecha que salió de las elecciones de 1933.

La tesis fundamental de la profesora Graham es que los obreros revolucionarios fueron los artífices de lo que llama «movilización». Pero el testimonio inmediato del presidente Azaña, dotado de la máxima credibilidad cuando habla de la guerra civil para la prensa argentina y cuando escribe para un futuro común de los españoles en *La Velada en Benicarló*, no nos permite aceptar ese término. Aquella acción de las masas revolucionarias no fue movilización, sino desgobierno y caos (p. 178).

La descripción de la esencial batalla por el Estrecho y el transporte del Ejército de África (p. 182) es aberrante. «La flota leal al gobierno poco pudo hacer». Motivo: «la intimidante presencia de los buques alemanes que patrullaban las costas marroquíes». En los momentos decisivo de esta batalla, que alcanzó decisivas consecuencias estratégicas, no hubo en aguas del Estrecho ni un solo buque de guerra alemán; y la Flota del Frente Popular,

abrumadoramente superior a la mínima fuerza naval enemiga, pudo hacerlo todo, pero sus rápidas y modernas unidades huían despavoridas porque como informó por radio una de ellas «tenía un muerto a bordo». Ante disparates de este calibre, el comentarista siente tentaciones de no continuar; la autora, con esta descripción para un punto tan vital de la guerra, se incapacita para historiarla. «Sin duda (p. 188), España albergaba unas variadas clases medias». Todo lo contrario; el fracaso de la democracia en la Monarquía de Alfonso XIII y en la Segunda República se debió ante todo a la carencia de unas clases medias significativas que se necesitaban para el establecimiento de esa clase de régimen. La democracia se pudo implantar en 1976/1977 porque esas clases medias ya se habían generado y precisamente a lo largo de la época de Franco. Para la profesora Graham, Largo Caballero, al formar su gobierno tras el verano de 1936, había fomentado una coalición «entre las fuerzas de centro y las de izquierda» (p. 190). Pero no había en la España del Frente Popular fuerzas significativas de centro, que estaban perseguidas o presas; las fuerzas de centro, en todos sus matices, habían favorecido al Alzamiento. No fue «el Partido Comunista el elemento fundamental para la movilización y pervivencia de la República» (p. 191), sino para ocupar crecientes zonas de poder militar, social y político gracias al chantaje ejercido sobre los gobiernos republicanos por la Unión Soviética, su principal abastecedora de suministros bélicos. El artífice de esa movilización fue Francisco Largo Caballero, a quien los comunistas defenestraron a consecuencia de los sucesos de mayo en la Barcelona de 1937. Helen Graham, socialista de izquierdas en la línea de Preston o de Santos Juliá, es ferviente partidaria del doctor Negrín y sus afines, los comunistas y los soviéticos, en la guerra de España. Por cierto, que su descripción política de Negrín no se tiene de pie: «su objetivo era consolidar el esfuerzo de guerra dentro de un orden económico liberal capitalista ortodoxo» (p. 195). Negrín rigió una dictadura marxista en el polo opuesto del liberalismo capitalista; bajo su mando los medios de producción siguieron incautados, las industrias totalmente intervenidas, los campos expropiados y colectivizados. ¿Cómo se atreve la profesora Graham a escribir de este modo la historia del revés?

Michael Richards, que se presenta como especialista en la historia económica del régimen de Franco, ofrece en el libro dirigido por Preston un ensayo sobre *Guerra civil, violencia y la construcción del franquismo*. Es difícil emprender una visión de la guerra civil española con mayor parcialidad y mayor enfoque unilateral. En todo el ensayo no hay una sola referencia a la violencia del Frente Popular; no hay un solo reconocimiento de los valores de

organización, capacidad logística y acierto económico que fueron decisivos en la articulación del régimen de Franco y, como condición previa, en la preparación y consecución de la victoria en la guerra civil. Todo ese conjunto de elementos, que fueron los esenciales, queda sepultado en el pozo de las ignorancias y los desprecios.

Que se abre con una distorsión marxista; la guerra civil española fue principalmente una guerra de clases (p. 201). Desde esa base es imposible comprender nada. No solamente los campesinos tradicionalistas de Navarra, sino los propietarios pequeños y medios de la agricultura castellana, los innumerables voluntarios populares que se incorporaron al Alzamiento en toda Galicia desde el principio de la guerra, o en Cantabria, cuando esta región fue liberada del Frente Popular en 1937, formaban parte de ese «pueblo del Movimiento» como le llamaría Gil Robles, porque ellos y sus familias habían votado en 1933 y febrero de 1936 a los partidos del centro-derecha. ¿No eran pueblo, no pertenecían a las clases medias y trabajadoras los numerosos católicos que formaban en 1936 la mayoría clara de la población en España? El esquema de una guerra de clases no se sostiene y es, por desgracia, el esquema de Richards. Casi podríamos dejar el comentario aquí mismo.

«El franquismo —nos explica en la p. 203— privó a la gente del futuro y la esperanza». A la gente integrada en el Frente Popular de forma militante y significada en la represión ejercida en zona republicana, es verdad. A la gente que se identificaba con la afirmación de Franco (en su correspondencia con don Juan de Borbón) de que se había empeñado en «salvar una sociedad», de ninguna manera. Richards incide, naturalmente, en la curiosa y absurda teoría de las dos violencias; la que se ejerció espontáneamente en la zona republicana, por la más o menos justificable reacción popular ante la sublevación enemiga; y la que fría y sistemáticamente planificada se organizó en la zona nacional. Éste es ya un invento antiguo que encona las heridas y para nada favorece a la reconciliación de los españoles, casi conseguida ya tras décadas de lejanía, convivencia y olvido que ahora quieren removerse de nuevo con oscuros e insistentes propósitos. «El gobierno republicano —se atreve a decir Richards— nunca ordenó el uso de la brutalidad y su ética pública era de hecho contra el uso del terror político» (p. 207). No pensaba así el máximo testigo de la zona republicana, el propio presidente Azaña, cuando se quejaba (por desgracia sólo en sus diarios íntimos) de que el gobierno Negrín, para restregarle sus palabras de piedad y perdón, había decidido intensificar cruelmente la represión en la zona. La Junta de Defensa de

Madrid era un organismo gubernamental y desde ella se ordenó una y otra vez el auténtico genocidio de Paracuellos del Jarama, entre rasgos de crueldad y salvajismo que están perfectamente, trágicamente documentados en la «Causa General». Y la persecución letal contra los sacerdotes y religiosos de la zona republicana, que fue sistemática e implacable desde el principio de la guerra civil, pudo justificarse en la condena genérica de la Iglesia católica que el gobierno Giral, con la firma del presidente Azaña, insertó en la *Gaceta* antes de terminar el mes de agosto para acabar con el culto y la práctica religiosa en toda la zona, al considerar a la Iglesia católica como cómplice de la rebelión militar contra el gobierno, cuando la Iglesia no había formulado todavía el más mínimo pronunciamiento.

Dentro del falso esquema de la lucha de clases, Richards se atreve a decir que «los generales insurrectos consideraron a la clase obrera como entidad infrahumana» (p. 119), tesis absurda que no conoce una sola prueba y que fue desmentida por un hecho evidente: del Alzamiento saldría la articulación de la política social más importante, duradera y efectiva que jamás se haya emprendido en España, aunque la izquierda española se obstine en ignorarlo. En fin, para todo este torpe y unilateral ensayo valen todas nuestras observaciones, insertas ya en este libro, sobre el conjunto de ensayos incluidos en el libro de Santos Juliá *Víctimas de la guerra civil*, que pertenece a la misma oleada que desencadenan en los últimos años las nuevas consignas de la Internacional Socialista y la Masonería sobre la tergiversación de la memoria histórica de los españoles.

Los armamentos de Howson y el último coletazo de Southworth

Gerald Howson arremete en el penúltimo estudio de este libro contra las tesis establecidas por el general Ramón Salas y su hermano, el también general Jesús Salas, acerca del material de guerra recibido por una y otra zona de la guerra civil española. El estudio de Howson es el resumen de un libro bastante más extenso que aún no he podido consultar, aunque espero hacerlo pronto. Los libros en que se contienen los estudios de los hermanos Salas son, para el caso de Ramón, *Historia del Ejército Popular de la República* (Editora Nacional, 4 tomos desde 1973) y *Los datos exactos de la guerra civil* (Madrid, Dracena, 1980). Jesús Salas ha publicado *La guerra de España desde al aire* (Barcelona, Ariel, 1970, 2.ª ed., 1971) e *Intervención extranjera en la guerra de España* (Madrid, Editora Nacional, 1974).

Precisamente informaciones del mundo editorial me anuncian una reedición actualizada (escribo en septiembre de 1999) del esencial libro de

Jesús Salas, *La guerra de España desde el aire*, en el que se apoyan los datos de su hermano Ramón sobre intervención extranjera en armamento pesado, sobre todo aéreo. He sido testigo durante muchos años de la minuciosidad y la honradez con que investigan los generales Ramón (q. e. p. d.) y Jesús Salas Larrazábal y por eso espero con auténtica avidez sus datos de ese libro actualizado que, como ha sucedido en el controvertido bombardeo de Guernica, zanjarán toda posible posición polémica adversa. Necesito por tanto, para mi respuesta final a este ensayo de Howson, estudiar su libro extenso, que espero recibir en unos días, y la actualización de Jesús Salas. Mientras tanto adelantaré algunos comentarios que pueden resultar esclarecedores para el lector.

Gerald Howson actúa en este ensayo como historiador de la guerra civil y como teórico y analista de propaganda en torno a la guerra civil. Este ensayo, y seguramente su libro extenso, demuestran una alta capacidad de investigación, pero por desgracia los resultados tienen que resultar muy discutibles y torcidos porque la investigación responde, evidentemente, a posiciones preconcebidas: Howson reconoce el impacto perdurable de las tesis acuñadas por los generales Salas Larrazábal y se lanza como una tromba sobre ellas, con el fin de demostrar lo que tantas veces afirmaba el general Vicente Rojo: que la República perdió la guerra civil militarmente por manifiesta inferioridad de medios frente a la superabundancia de medios que siempre mantuvo el bando nacional. Es decir, que la investigación de Howson se orienta según un prejuicio militante; es decir, que su ensayo es más de propaganda que de investigación.

Estoy repetidamente aludido en ese ensayo y tengo algo que decir sobre esas alusiones. Howson piensa que la Sección de Estudios sobre la Guerra de España creada por mí en el Ministerio de Información el año 1965 era un centro formidable de comunicación histórica que funcionaba con directrices férreas y medios abundantes que nos permitieron dar la vuelta a la opinión interior y exterior sobre la guerra civil española, hasta entonces muy favorable a los republicanos y por nuestra acción, reconvertida en favorable al bando nacional. Por supuesto que me siento profundamente halagado por tan alta opinión proveniente de un enconado adversario histórico, pero muy a mi pesar debo dejar las cosas en su punto, porque como historiador me debo ante todo a la verdad. La Sección de Estudios sobre la Guerra de España (luego, por el incremento de nuestros fondos, se denominó Centro de Estudios sobre Historia Contemporánea) se creó en el Ministerio de Información y Turismo, regido por el profesor Fraga Iribarne, en 1965, cuando el ministro de Asuntos

Exteriores Fernando Castiella llevó al Consejo de Ministros el libro, recién aparecido, de Gabriel Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War*, y se quejó de que nadie respondiese a lo que creía falsedades históricas de ese libro. Fraga, que conocía mi afición a esos temas y en general a la Historia de España, replicó que en su Ministerio había una persona —se refería a mí— experta en historia española y me encomendó un comentario al libro de Jackson, así como un estudio sobre el Frente Popular en 1935/1936, por otro motivo: Dolores Ibárruri había insistido poco después en la falsa tesis comunista de que el Frente Popular había sido una creación de los comunistas españoles y soviéticos (tesis con la que Franco estaba conforme) y el Jefe del Estado deseaba un informe extenso sobre ese asunto, que Fraga también me encargó a mí. Por entonces la historia contemporánea española que se enseñaba en la Universidad apenas rebasaba el siglo XIX, excepto la cátedra del profesor Palacio Atard, en la que se investigaba lúcidamente sobre la República y la guerra civil. El gran proyecto comunista para la manipulación de la historia española contemporánea casi no había dado sus primeros pasos, que entonces nadie conocía apenas. Pero quisiera aclarar al historiador Howson un detalle significativo. Yo acababa de ganar por oposición una plaza como Técnico de Información y Turismo en 1963, pero tuve ciertas dificultades con el subsecretario, don Pío Cabanillas (de quien años después fui muy amigo) y, para decirlo claro, me tuvo castigado más de un año en un despacho de la cuarta planta del Ministerio, de altísimas paredes con más de dos mil libros sobre la República y la guerra civil que provenían de los antiguos servicios de propaganda que funcionaron en Burgos durante la guerra civil bajo la dirección de un historiador monárquico y eminente, el profesor Jesús Pabón, y luego fueron dando tumbos hasta ese despacho donde nadie sabía que se conservaban. Como nadie me daba mucho trabajo y la Historia me interesaba mucho dediqué muchísimas horas al estudio de aquellos libros, que en algunos casos eran ejemplares únicos y realmente adquirí una seria preparación sobre los años treinta en España. Pensé que no bastaba; que necesitaba una base académica para moverme con precisión en terreno tan difícil, preparé la cátedra de Historia en Institutos y luego, por sus pasos, la cátedra universitaria que conseguí al empezar el año 1975.

Pero mientras tanto, el señor Fraga había creado la Sección sobre la guerra de España, de la que me encargó. Era una dependencia pública por la que pasó mucha gente; entre mis visitantes más interesados estaba el máximo propagandista de la España republicana, el escritor Herbert Rutledge Southworth, con quien hablé mucho, y los hermanos Salas Larrazábal, de

quienes inmediatamente me convertí en discípulo al comprender la amplitud y profundidad de sus conocimientos sobre la guerra civil.

Entré también en contacto con otros especialistas de primera magnitud, como el coronel José Manuel Martínez Bande, del Servicio Histórico Militar, autor de una insuperable serie de monografías sobre la guerra de España, amén de otras obras imprescindibles; el coronel José María Gárate, a quien se deben también libros importantes y luego el hoy general Rafael Casas de la Vega, historiador y publicista a quien debemos investigaciones primordiales. Así nació esta modesta Sección de Estudios, cuya labor continué después desde la Editora Nacional a partir de 1973, donde no vacilé en editar las obras de los hermanos Salas y el hoy general Casas de la Vega. Cuando volví en 1980 a la cuarta planta del Ministerio, ahora como Ministro de Cultura, ordené que la magnífica biblioteca de la Sección de Estudios se incorporarse a los fondos de la Biblioteca Nacional donde hoy se conserva. Por supuesto que nunca di a mis amigos historiadores la menor consigna ni realizamos el menor plan de publicaciones; cada uno de nosotros investigaba de forma independiente y publicaba sus originales donde mejor le parecía, con lo que nuestro trabajo jamás tuvo un carácter oficial ni costó al Estado un duro en publicaciones. Siempre pensamos que los libros que no fueran al público por vía editorial independiente (quise convertir en eso mismo a la propia Editora Nacional y creo que lo conseguí) carecían de todo interés. Y éste es todo el inocente secreto de la Sección de Estudios sobre la Guerra de España, que hizo, en mi opinión, un aceptable servicio a la verdad histórica con medios muy escasos, sin la más mínima disciplina férrea entre sus miembros y mucho menos sus colaboradores y a la que se debe una agradable labor de coordinación entre quienes nos resistíamos a la conjura para la perversión de la memoria histórica de los españoles, la cual, sin que nosotros lo supiéramos, daba ya sus primeros pasos por oscura inspiración comunista. Hablaré de ello después en este libro; ahora vuelvo al ensayo de Howson.

Tuve que interrumpir la redacción de este capítulo durante unos días y cuando vuelvo al trabajo me encuentro con dos libros trascendentales de Jesús Salas Larrazábal que Howson no cita. Uno de ellos, que estaba en mi biblioteca bien visible, se me había pasado de forma bastante inexplicable, porque es fundamental: lo firman los dos hermanos Jesús y Ramón Salas Larrazábal y lo editó Rialp en Madrid el año 1986. Es una síntesis analítica, sin paradojas; la obra que cabría esperar de la conjunción de los dos grandes y fraternos historiadores. El segundo libro es todavía más importante: se debe a Jesús Salas, acaba de salir este mismo año 1999 editado por el Instituto de

Historia y Cultura Aeronáuticas y por el momento consta de dos tomos, que cubren la guerra civil en 1936 y hasta el final de la campaña del Norte en 1937. Si el ensayo de Howson corresponde exactamente, como él asegura, a su libro extenso de 1998 *Arms for Spain*, ya no necesito consultar esa obra extensa; sus tesis polémicas, articuladas más para la política que para la Historia, quedan pulverizadas por estos dos imponentes tomos de Jesús Salas, cuyas copiosas ilustraciones equivalen, además, a documentos históricos vivos. Los distintos caminos que hemos emprendido desde los años setenta han alejado en el trato, que no en la estima y respeto mutuo, a los historiadores que en su momento nos veíamos en la Sección de Estudios; ahora proseguimos nuestro camino estrictamente personal, como por lo demás sucedía ya entonces, cuando nos juntaba la común pasión por la Historia, no mandato oficial u oficioso alguno. Jesús Salas conoce, como no podía ser menos, las tesis de Howson que por lo que veo en estos dos grandes tomos pueden haberle facilitado algunos datos, pero no invalidan ni de lejos sus tesis fundamentales, evolucionadas hacia un mayor perfeccionamiento, pero reforzadas con el conjunto de nuevas aportaciones publicadas. Por eso, después de remitir al lector a los dos tomos de Jesús Salas, deseo comentar en torno al ensayo de Howson las siguientes apreciaciones:

1. Para evaluar el equilibrio o el desequilibrio militar de los dos bandos en pugna Howson no tiene para nada en cuenta la situación de un factor fundamental, la Marina de Guerra, que han estudiado el almirante Ricardo Cerezo y los dos almirantes Moreno, don Salvador y don Fernando. Se trata de obras fundamentales, imprescindibles, en las que resalta la abrumadora superioridad naval del Frente Popular después de las trágicas consecuencias del Alzamiento en la Marina. Con la gran mayoría de la Escuadra a su servicio, el Frente Popular pudo obstaculizar de forma decisiva el transporte del Ejército de África a la Península, pudo cerrar totalmente el paso al transporte naval y hostilizar, mediante acciones ofensivas sin limitarse a torpes e inútiles represalias, la precaria situación de la zona Sevilla-Cádiz-Algeciras; pudo neutralizar a Ceuta y Melilla, ocupar efectivamente la isla de Mallorca y destruir la táctica enemiga de bloqueo de las costas republicanas del Mediterráneo, así como impedir por completo el suministro de petróleo a la zona nacional que se hacía exclusivamente por vía marítima. Es decir, que la Escuadra constituía un factor estratégico de primera magnitud en varios aspectos clave y el Frente Popular la mantuvo casi toda la guerra civil encerrada torpemente en la base de Cartagena. No basta solamente con señalar una superioridad o inferioridad de medios; es necesario saber utilizar

esa superioridad. Éste fue uno de los fallos más decisivos y menos comentados del esfuerzo de guerra republicano. Howson no lo menciona.

2. El análisis de Howson sobre el material de guerra que llegó a cada bando se emprende desde un punto de observación exclusivamente materialista, sin recurrir para nada ni al cuidado del material ni al decisivo factor moral. Ramón Salas ha descrito, en su *Historia del Ejército Popular*, numerosos casos de desidia y abandono por parte de los republicanos, mientras Franco mantenía en este terreno una disciplina implacable. En cuanto al factor moral, el Frente Popular no tuvo nada semejante a un Alcázar de Toledo, a una defensa de Oviedo o de Huesca, donde con efectivos y medios militares muy inferiores consiguió el bando nacional victorias defensivas de suma trascendencia. El principal ingrediente para la superioridad moral de los nacionales fue el elemento religioso, que los historiadores contrarios tratan de sepultar en exageradísimas desinformaciones sobre una brutal represión incluso con la complicidad (sic) de la Iglesia mártir. El factor más importante del Frente Popular para la resistencia y la victoria era sin duda la decisión del Partido Comunista, pero bajaba muy turbia por la inexhaurible ansia de poder total, militar y político, con la que los comunistas se produjeron desde finales del verano de 1936, lo que no contribuyó a la unión, sino a la desunión de la zona republicana.

3. Howson se obsesiona por las «versiones oficiales» que en la época de Franco se imponían acerca de asuntos de la guerra civil. Nunca hubo versiones oficiales de ese tipo. La revista *Ejército* no era un «diario oficial» (p. 239) y las opiniones que publicaba sólo eran responsabilidad de sus colaboradores. Nunca se impuso una versión oficial a un historiador o a un editor. Lo viví muy de cerca. Mi biografía de Franco en 1972 nunca tuvo carácter oficial ni oficioso; por eso se vendió mucho. Los efectivos y armamento de uno y otro Ejército fueron estudiados a fondo por el Servicio Histórico Militar que proporcionó en la *Revista de historia militar* cifras muy fiables que Howson desconoce (p. 240). El propio Howson considera virtualmente no sólo oficiales, sino definitivas, las cifras sobre importación de aviones a la República que proporciona el aviador republicano Andrés García Lacalle (p. 241), cuyos datos considera Jesús Salas confusos y no fiables; y atribuye valor de un dogma de fe a ciertas tardías opiniones sacadas de los archivos soviéticos (p. 243). El hecho de que una información provenga de una fuente oficial de origen soviético no constituye un dogma histórico, sino que en principio resulta más que sospechosa si no viene acompañada de un análisis exhaustivo.

4. Las argumentaciones de Jesús Salas son científicas y siempre está dispuesto a rectificar. Howson vive obsesionado con destruir las tesis que considera fruto de la propaganda franquista, sin advertir el escaso crédito que el general Franco concedía a su propia propaganda, a la que jamás condicionó. Espero que la detenida lectura de los dos grandes tomos de Jesús Salas haga recapacitar a Howson y al propio Preston, aunque lo dudo; los dos autores están en la Historia para otros fines, está demasiado claro.

La guinda: Southworth contra Burnett Bolloten

He conocido personalmente a Herbert Rutledge Southworth y a Burnett Bolloten. He leído con suma atención las obras de cada uno. Southworth era algo así como el jefe emérito de la propaganda roja a estas alturas; Burnett Bolloten, ya fallecido, sigue siendo el autor del libro más importante jamás escrito sobre la guerra civil. Tan importante que las filas de la conjura histórica contra la memoria colectiva de los españoles parecen empeñadas en invalidar a ese grandioso libro, sin conseguir apenas rozarle; y para ello incluye Preston, aventajado discípulo de Southworth, esta guinda final de su libro, que se titula como la primera versión de Bolloten: *El Gran Camuflaje*. Aunque el panfleto del americano vendedor de bibliotecas, que no historiador, responde mejor al subtítulo: *Julián Gorkin, Burnett Bolloten y la guerra civil española*.

Creí equivocadamente que H. R. Southworth gozaba ya de un descanso próximo al eterno. Por eso no me decidía a escribir un libro feroz de contrapropaganda sobre sus tesis (incluida su aberrante tesis doctoral de la Sorbona sobre Guernica), pero ahora, al repasar esta guinda, voy a reactivar mi proyecto. He avanzado bastante en Historia desde que recibí en el Ministerio de Información, poco después de fundar la Sección de Estudios sobre la Guerra de España, a este propagandista de la Historia, de quien me constaba su condición de profeta y líder de la propagada histórica antifranquista. No sólo le recibí, sino que además le ayudé, como hacía indefectiblemente con todos mis visitantes. Había escrito él ya su libro de choque, *El mito de la cruzada de Franco,* cuya tesis fundamental era que la cruz de esa cruzada era la cruz gamada. Una enorme estupidez; no sabía que el Papa Pío XI, cuando Hitler hizo su famoso viaje a Italia, declaró: «La cruz que hoy entra en Roma no es la cruz de Cristo» y por supuesto no recibió al Führer como era, tal vez, protocolario.

La verdad que yo esperaba algo. No digo algo más, sino simplemente algo, de este ensayo de H. R. S.; que es la guinda final del libro de Preston.

No he encontrado nada. Se trata solamente del comentario a una nota del formidable libro de Bolloten en su versión final de 1989. Final y póstuma; Bolloten no vio la traducción española en las librerías, murió poco antes.

Burnett Bolloten, historiador galés, luego nacionalizado americano, era corresponsal de una agencia mundial de noticias en la zona roja. No era, al principio, hostil a la causa republicana. Pero vivió intensamente toda la guerra civil en esa zona, recogió decenas de miles de testimonios y recortes de prensa, comprendió con lúcida profundidad «el gran camuflaje» de los comunistas soviéticos y españoles para hacerse con el poder total en zona republicana y centró su experiencia atroz en un libro, un solo libro. «Temo al hombre de un solo libro» decían los intelectuales del Renacimiento. El libro de Bolloten apareció en 1961 con ese título del gran camuflaje. Luego fue creciendo y mejorando a través de varias versiones, hasta la final de 1989 publicada por Alianza Editorial. Es un libro muy caro, pero merece la pena. Los comunistas quedaron abrumados, pero el libro caló en la opinión pública mundial donde se aceptaron todas sus tesis gracias a una formidable e indestructible metodología. El campo comunista, cuando puede, le dedica algún puyazo de mala ley. Sin el menor éxito.

Son más de mil doscientas páginas en esta versión final, pero Southworth sólo se atreve con una nota y además bastante intrascendente. Trata de demostrar que Bolloten acepta una tesis histórica de «Julián Gorkin», antiguo intelectual del POUM que, víctima de la represión soviética y comunista en la guerra civil española, pudo salvar la vida (lo que no logró su amigo Andrés Nin, torturado y asesinado cerca de Madrid por los comunistas) y que luego dedicó toda su vida a combatir contra el comunismo soviético durante la guerra fría. Southworth se empeña obsesivamente en «demostrar» que Gorkin era un colaborador de la CLA, lo cual invalida según él todo su trabajo como historiador. Le atribuye la redacción de las famosas memorias de Valentín González, el Campesino, a las que se refiere Bolloten. Y esto es todo.

El Campesino era un zote y tal vez utilizó los servicios de Gorkin como intérprete literario de sus recuerdos trágicos y aventuras en la URSS. Es un recurso literario que se utiliza continuamente sin que nadie se escandalice. Southworth, que es americano de origen, cree que la CIA es un engendro demoníaco y que la guerra fría fue una ofensiva del mundo libre contra el paraíso del proletariado. A Southworth le encantaba vivir en un castillo de Francia, pero se considera adalid de la causa del proletariado. Piensa que colaborar con la CLA es una credencial de mentira histórica, mientras que actuar como un epígono de la KGB es una credencial histórica inigualable.

Pero muchos pensamos lo contrario que él. Que Valentín González contase sus vivencias soviéticas a Gorkin, lo que creo probable, me parece muy bien. Que Gorkin contribuyese a la difusión de toda la literatura antisoviética (Jesús Hernández, por ejemplo) durante la Guerra Fría me parece estupendo. Pero invalidar el asombroso libro de Bolloten, ese monumento perenne del anticomunismo, por la cita sobre el Campesino me parece prueba de que el jefe emérito de la propaganda roja sobre la guerra civil estaba, a estas alturas, completamente gaga. Una nota plenamente aceptable contra más de mil doscientas páginas. No tiene remedio Southworth ni su discípulo Preston.

Cuando corrijo estas líneas, Southworth acaba de morir. Preston y Jackson le han dedicado en *El País* epitafios conmovedores; el de Preston acrítico, el de Jackson mucho más serio y crítico. Mantengo mi propósito de analizar a fondo la obra de Southworth para proporcionar a Preston algunas sorpresas, ya verá.

ANSON-VILALLONGA: UN DOBLE MISTERIO HISTÓRICO EN UNAS EXTRAÑAS VIDAS PARALELAS

Mi primera idea fue dedicar en este libro sendos capítulos muy cuajados a dos españoles de la aristocracia —de cuna y de letras— cuyos ambientes naturales parecerían estar en la España de la Victoria y en pleno régimen de Franco. Me refiero a Luis María Anson, casado con una hija del conde de Puñonrostro y por tanto hermana del conde de Cumbres Altas, y a José Luis de Vilallonga, marqués de Castellvell y grande de España, hijo de un prócer catalán, el barón de Segur. ¿Por qué cabría suponer que uno y otro deberían inscribirse, en principio, en la España que se consideraba partidaria de Franco? Ante todo porque los dos pertenecen al restringido círculo de la nobleza y se han movido durante años en el campo de la aristocracia. Luis María Anson es actualmente académico de número de la Real Academia Española, porque ha llegado a la cumbre del periodismo español como articulista de primera, brillante escritor, director de *ABC* y algo así como promotor universal de los académicos, a quienes ha asomado a los balconajes de la gran prensa nacional. Se ha interesado además siempre por el mundo y los mecanismos de la cultura y de la política cultural y ha dirigido durante años al estamento periodístico español con sumo cuidado, atención y acierto. Se le pueden discutir muchas cosas, pero ninguna de las que acabo de enunciar. Como José Luis de Vilallonga, Anson se incorporó desde muy joven a actividades de tipo político siempre en el campo monárquico y

concretamente al servicio de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, heredero de don Alfonso XIII y, visto desde el Palacio del Pardo, pretendiente al trono de España, calificativo que el general Franco le otorgaba y que a don Juan le molestaba muchísimo, porque tras la muerte de su padre, don Alfonso XIII, en el destierro, nunca se consideró pretendiente sino rey; por eso asumió, de acuerdo con sus consejeros, el título regio de Conde de Barcelona que sólo puede llevar, desde don Fernando el Católico, un rey de España. Y lo más curioso es que Franco, si bien le llamaba «infante don Juan» y alguna vez «Pretendiente», no le regateó el título de Conde de Barcelona, aunque nunca le consideró Rey ni menos le reconoció como tal. El destino de Luis María Anson estuvo siempre vinculado al de don Juan de Borbón, a quien sirvió leal y eficazmente desde la primera juventud.

Naturalmente que Luis María Anson, por motivos de edad, no pudo participar en la guerra civil española. Si hubiese pertenecido a la generación de Vilallonga se hubiera mostrado, sin duda, favorable al bando del general Franco; siempre se ha sentido y proclamado católico sincero y un católico de profunda vocación monárquica sólo podría militar y, de tener edad, combatir en las Fuerzas Armadas de Franco, como quiso hacer, y por tres veces, el futuro ídolo de Anson, don Juan de Borbón. No sé si Anson hubiera llegado a demostrar entusiásticamente por escrito su adhesión a la Falange, como según he probado documentalmente hizo don Juan en la guerra civil, pero cabe imaginar que Anson hubiera dado entonces todos los pasos que tuvo a bien dar el propio don Juan.

José Luis de Vilallonga nació en Madrid en 1920; es bastante mayor que Luis María Anson y sí que tuvo tiempo y ocasión para manifestar su adhesión activa a la causa de Franco. Acompañaba a su padre, el barón de Segur, durante ciertas misiones de inspección y reconocimiento cerca de primera línea durante la campaña de Cataluña. Se interesaba por los asuntos militares, bastante más de lo que dejan traslucir sus obras. Y en sus biografías de solapa —las que reflejan lo que cada autor de libros desea que aparezca para el público— apenas figuran otros datos fuera de una temprana vocación de escritor y publicista en la notable revista del catalanismo franquista, *Destino* —y una estancia en Buenos Aires, desde 1944 hasta que decidió instalarse en París hacia 1951—, sus admiradores consideran esa fecha como el principio de su exilio, pero ignoramos qué actividades políticas contrarias al régimen conferirían a su establecimiento en Francia ese carácter.

En mi primer esquema de capítulos para este libro, cuando este breve epígrafe dedicado a Vilallonga y Anson se pensaba como un capítulo extenso,

con datos de investigación sobre la vida y milagros de los dos que, por los que conozco, resultarían muy sugestivos, pensaba dar noticia cumplida de sus trayectorias. Luego observé que mis lectores no sentirían excesivo interés por esas andanzas y decidí presentar a los dos escritores como símbolo de esa «derecha de Edipo», a la que me he referido antes en este libro. Todo hace pensar que la adolescencia de Vilallonga resultó fácil y placentera, la de Luis María Anson difícil y abnegada. Vilallonga se sumergió con éxitos más que notables en el mundo de la cultura francesa; dominó totalmente el francés, alumbró escritos que le valieron la Legión de Honor concedida por el presidente Mitterrand y sobre todo se hizo famoso en las grandes revistas ilustradas y en la gran pantalla. Fue precisamente en una película cuando conocí a José Luis de Vilallonga. Le conocí en una pantalla de los Campos Elíseos, y creo recordar que actuaba entre los protagonistas de una historia romántica con Jeanne Moreau; lo mejor de la película es que toda la música era de Brahms y Jeanne Moreau, casada en la cinta con el aristócrata español, se le fugaba ante la llegada de un apuesto mozo que decidió llevársela. Por entonces Luis María Anson se dedicaba ya intensamente a la política monárquica y se acreditaba como gran periodista en los sucesivos destinos que le tocó servir.

Luis María Anson nació en Madrid en 1935. En mi libro *No nos robarán la Historia* (Fénix, 1995) dediqué un capítulo a lo que titulé *La leyenda de Luis María Anson*. Su infancia y su adolescencia fueron mucho más duras y sacrificadas que las de Vilallonga. En los difíciles años de la postguerra española tuvo que empezar a trabajar para sacar adelante a sus hermanos menores. En el libro citado tampoco intento una biografía plena de Luis María Anson, que sin embargo alguien debería acometer alguna vez. Si en la vida de José Luis de Vilallonga está aún por desentrañar el misterio de su antifranquismo agresivo, algo semejante sucede con el antifranquismo de Luis María Anson, que es, como el de Vilallonga, terriblemente virulento. En los dos el antifranquismo se traduce en un activismo incansable en medios de oposición; en el caso de Vilallonga esa oposición se orientó primero a la Junta Democrática de inspiración y colaboración comunista en 1974, luego derivó al socialismo de Felipe González, pero cuando el marqués de Castellvell advirtió la marea negra de corrupción que anegaba al PSOE, devolvió su carnet de militante, lo cual le honra. Luis María Anson, que yo sepa, no ha participado como militante en ningún partido político de la transición española. El momento cumbre de su vida como escritor fue la publicación clamorosa y multitudinaria de su libro *Don Juan* en 1994, cuando todavía era

director de *ABC*, periódico que actuó meses y meses como una generosísima y prolongada caja de resonancia para la publicidad y la ambientación del libro. Ahora que voy yuxtaponiendo sucesos de las vidas de Anson y Vilallonga voy comprobando, no sin asombro, que en más aspectos de los que yo pensaba se trata de dos vidas extrañamente paralelas. Uno y otro monárquicos; uno y otro relacionados atípicamente con el socialismo; acabamos de ver la militancia y el repudio de Vilalonga al PSOE, podríamos elucidar ahora la intervención de Anson en la famosa conspiración mediática para el derribo de Felipe González, «enmendada» luego con su rarísima aproximación a Belloch ministro y Belloch periodista, un colosal embrollo tal vez demasiado claro a estas alturas. Una nueva coincidencia: el libro estelar de Anson en 1994 *Don Juan* y el libro estelar de Vilallonga *El Rey* que precedió poco antes al de Anson (1993); pero sobre todo, el antifranquismo visceral, edípico, de Anson en su *Don Juan* y de Vilallonga en el libro que voy a comentar ahora, *El sable del caudillo*, en cuya solemne presentación, que iba a celebrarse en un salón del hotel Palace, se produjo la, por ahora, conjunción final entre Anson y Vilallonga, con los efectos explosivos que luego referiré.

El antifranquismo de Anson tiene, para mí, una explicación personal e histórica: Luis María Anson se había jugado todo el futuro —tal vez hasta el futuro político, que nunca ha desdeñado— a una sola carta, la de don Juan III Rey de España. Perdió ese juego porque esa carta, como Anson sabe muy bien, fue «robada» —diría él— por el general Franco. Por supuesto Anson no se lo perdonó jamás a Franco. Algo peor: ni siquiera quiso aceptar el hecho. Ha seguido proclamando Rey a don Juan; le distingue siempre como Juan III; ha promovido monumentos, como el de la Feria de Madrid, con la inscripción de Juan III bajo el busto de don Juan; ha insistido en la peligrosísima tesis de que don Juan mantuvo la legitimidad de la Corona hasta su Renuncia de 1977, lo cual implica que desde la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 hasta esa Renuncia don Juan Carlos I no ha sido un rey legítimo, sino un usurpador; y al atacar a Franco en los puntos más fundamentales de su vida, ha brindado a otros historiadores afectos a la línea de la Internacional Socialista y la Masonería, como Paul Preston, la coartada para esgrimir contra la figura de Franco las tesis de la Ruptura y no las de la Reforma, único proceso existente en la historia auténtica de la Transición. El libro famosísimo *Don Juan* no es solamente la biografía idealizada del Conde de Barcelona, ni la descalificación personal más cruda de un consejero de don Juan, don Pedro Sainz Rodríguez, sino sobre todo el desahogo, mediante un torrente de lodo,

del odio que Anson ha ido embalsando contra Franco durante toda la azarosa vida del gran periodista. Y lo más curioso es que, desde el punto de vista ideológico, la clave inicial del pensamiento de Luis María Anson es muy semejante a la de Franco. En *No nos robarán la Historia* lo he demostrado con los propios escritos de Anson en 1958, publicados en la editorial de Zaragoza *Círculo*, sobre todo *La Hora de la Monarquía*, obra libremente sometida por Anson a la censura eclesiástica. Hay más libros, hay más escritos que hoy, como tantas otras veces, me he resistido a utilizar por los motivos que diré ahora. Insisto; si Franco llegó a leer ese libro se relamería de gusto. Anson, que había bebido en las más claras fuentes de don Eugenio Vegas Latapié, preceptor del príncipe Juan Carlos, dirige un ataque frontal contra el hecho y el significado de la Revolución Francesa. La ideología de partida que utiliza Luis María Anson es el integrismo absoluto, la hostilidad al liberalismo, el repudio completo a la democracia liberal. He visto muchas transformaciones en las ideologías de muchas personas; algunas pueden explicarse por evolución, pero otras, como la de Anson, requieren una investigación en el misterio. En 1958 Anson escribía en *La hora de la Monarquía*: «Para algunos el totalitarismo es lo contrario del liberalismo. Y sin embargo tienen una misma e idéntica esencia. Porque si no se admite el poder divino y el orden sobrenatural ¿qué más da la asamblea que el tirano, que diferencia hay en que mande uno o quinientos, entre el absolutismo de uno o el de la mayoría parlamentaria?» (p. 21). Un enemigo principal de Anson en 1958 era «la expresión de la voluntad general a través del sufragio universal» (p. 20). Palabras que recuerdan la famosa condena de José Antonio Primo de Rivera: «Hubo un hombre nefasto llamado Juan Jacobo Rousseau».

Pero en 1994 Luis María Anson ha cambiado. Su señor, Don Juan, pensaba, evidentemente, en 1958 lo mismo que el Anson de *La Hora de la Monarquía*: Anson ha pensado siempre lo mismo que don Juan. Pues bien, en 1994 Anson escribe en *Don Juan*: «La soberanía nacional reside en el pueblo. Ésa es la columna vertebral de la democracia. A través de la voluntad general libremente expresada» (p. 427). La transformación ideológica, un verdadero cataclismo, se había producido ya mucho antes y ahora parece ya definitiva. Después del éxito de *Don Juan*, libro en que Anson nos presenta a un don Juan demócrata de toda la vida, muy lejos del Don Juan antidemócrata y totalitario que había sido durante la mayor parte de esa vida, Anson celebró en las páginas de *ABC*, del que era director, el centenario de Voltaire con arrebatado entusiasmo, pero en 1958 había clamado contra «su inextinguible sectarismo anticristiano». Las contradicciones entre el Anson de 1958 y el

posterior a 1966 son pasmosas, alucinantes; y por supuesto son las mismas contradicciones de don Juan. Acaba de establecer la soberanía del pueblo como base de la democracia; pero en 1958 abomina del «principio fatal de la soberanía del pueblo» (p. 42). El Anson de 1994 se extasía cuando contempla a don Juan departiendo en Portugal con José Ortega y Gasset, pero el Anson de 1958 escribía: «Basta citar el caso del popular y conocido escritor Ortega y Gasset, cuya falta de base doctrinal y filosófica ha sido demostrada en reciente libro por el padre Santiago Ramírez» (p. 70).

Hasta 1966 la ideología política de Luis María Anson estaba mucho más cerca de la ideología de Franco que de la democracia. La ideología de don Juan se concretó en un documento que los monárquicos pretenden sepultar inútilmente: las Bases Institucionales de la Monarquía española de 1946 redactadas por Gil Robles y demás consejeros de don Juan, en las que se planteaba una Monarquía católica, tradicional, articulada con criterios de Monarquía orgánica (no me atrevería a denominarla democracia orgánica) y por supuesto enteramente alejada de toda idea o sistema de democracia liberal. Ésta era la ideología política de don Juan, de los consejeros de don Juan y por supuesto de Luis María Anson hasta bien entrados los años sesenta. En mi libro *Don Juan de Borbón, toda la verdad*, publicado por esta misma editorial en 1997, reproduzco constantes declaraciones, escritas y orales, de don Juan de Borbón en las que identifica a su Monarquía con la Monarquía de los Principios Fundamentales del Movimiento. Estas declaraciones se prodigan hasta bien entrados los años sesenta, mientras don Juan albergó la más mínima esperanza de que Franco le podría designar sucesor, lo cual era imposible desde el Manifiesto de don Juan en Estoril en 1947.

Creo que estamos ya en condiciones de fijar la fecha para la conversión en bloque de don Juan, la corte de Estoril y por tanto Luis María Anson a la democracia liberal inorgánica y de partidos, tan abominada antes en semejante escenario. La fecha no es un día concreto, sino más bien todo un bienio, 1964-1965. El 10 de octubre de 1964 José María de Areilza, que siempre ha poseído un certero instinto de orientación hacia los rumbos del poder, presentó a Franco, con todo respeto y educación, su renuncia a la embajada de España en París con el fin de dedicarse de lleno a articular e impulsar la política monárquica entre Estoril y Madrid. Areilza, que provenía del franquismo más acrisolado, había abrazado ya la democracia liberal plena, que el concretaba en un ideal de «Monarquía constitucional y representativa» como le oí repetir ya por entonces muchas veces. El otro impulsor de la

democracia liberal española era el Papa Pablo VI, el cual tenía tiempo para preocuparse de ese giro político español en medio de sus afanes y problemas del Concilio Vaticano II; su hombre de confianza en Madrid era el sustituto de la Nunciatura, monseñor Giovanni Benelli, promotor de una Democracia Cristiana para España, a quien el almirante Carrero expulsó del país por procedimientos discutibles en 1965. Por supuesto que dos políticos católicos, José María Gil Robles y Joaquín Ruiz-Giménez, estaban ya en la misma onda democrática, pero Areilza supo ganarles por la mano.

En este contexto de cambio estratégico en Estoril, Luis María Anson, cuya identificación con la ideología y la voluntad de don Juan de Borbón era absoluta, se olvidó de las enseñanzas integristas que había recibido de don Eugenio Vegas Latapié, se transformó en demócrata de toda la vida y tuvo además el valor de proclamarlo públicamente a través del artículo más importante de su vida, el que publicó en la Tercera de *ABC* el 21 de julio de 1966, con el título *La Monarquía de todos* que naturalmente era la Monarquía liberal, democrática y de partidos, alejada de la Monarquía definida hasta entonces como la Monarquía de las Bases Institucionales Orgánicas de 1946. El ministro de Información, Manuel Fraga, acababa de conseguir, con tremendos obstáculos, la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta que sustituía, el 18 de marzo de ese mismo año, a la totalitaria Ley de Prensa de 1938. Aun así, muy a su pesar, Fraga, a quien toda la prensa española había aclamado como liberalizador (y era verdad) tuvo que secuestrar el *ABC* y persuadió a la empresa y la dirección del diario monárquico que alejasen a Luis María Anson durante una larga temporada. Al conocer el contenido del artículo, Franco hizo a Anson el favor de su vida; y en las conversaciones con su secretario militar Franco Salgado llamó al joven periodista «el peor enemigo del régimen». Evidentemente le abría el futuro aunque por el momento causó a Luis María Anson muchos problemas y molestias de todo género, que él trató de convertir en experiencia profesional sumamente útil en una serie de viajes por el mundo que en realidad encubrían un exilio político.

Que Anson hiciese buena la definición que había merecido de Franco me parece humanamente muy explicable. Pero, dados los efectos positivos que revirtieron sobre Anson en el futuro, ninguno de quienes le conocíamos pudimos suponer que su odio a Franco le llevase tan lejos, hasta el extremo de desvirtuar la historia de toda una época y de satanizar a Franco, mientras tal vez creía Anson que con esos métodos reivindicaba a don Juan. Todo el *Don Juan* es un libro que rezuma subjetividad y esconde intenciones secretas, pero Anson lo ha convertido en una feroz antología del antifranquismo, hasta el

punto que el aguerrido joven periodista, que dirigía en las explanadas de la Universidad los encontronazos de las Juventudes Monárquicas con los partidarios de Falange, luego, en los años ochenta y sobre todo noventa, se empareja con historiadores que siguen las directrices de la Internacional Socialista y la Masonería en una oleada gigantesca de descrédito y descalificación contra Franco, a quien tantas veces había mostrado su acuerdo don Juan de Borbón. Anson sabe, porque conoce bien la historia reciente de España, que sin la decidida voluntad de Franco, la Monarquía no hubiera regresado jamás a España. Lo sabe y sin embargo arremete contra Franco, porque su odio y su sed de venganza le impulsan a ello hasta rebasar los límites de la verdad y la racionalidad histórica.

Para Anson Franco es un católico intermitente (lo cual nunca fue cierto) que vivió siempre empequeñecido y acomplejado (falso). Un militar mediocre que en la guerra de España subordinó la estrategia a la ambición política (falso y gratuito). La única virtud que le reconoce es un altísimo valor militar, pero no matiza ese valor con la decisión de ahorrar, por encima de todo, las vidas de sus hombres. No le reconoce ni patriotismo ni sentido monárquico y se equivoca en una y otra consideración. Le describe muy a gusto con la República desde 1933 y cree que sus negativas a los apresurados proyectos de pronunciamiento en 1934 y 1935 se deben a complacencias con la República. Anson odia tanto a Franco que se apoya con fruición en fuentes antimonárquicas deleznables y partidistas; ello explica su identificación mal meditada con la antibiografía de Paul Preston y el hecho de que el introductor de Preston en los medios españoles de comunicación ha sido el *ABC* de Anson y no los medios afectos a la Internacional Socialista como parecería lógico. El capítulo XV del libro de Anson se titula insultantemente *Franco el hitleriano* y consiste en una antología de la falsedad histórica dependiente de fuentes antifranquistas profesionales sin la menor crítica. No tiene para nada en cuenta las definitivas investigaciones de Halstead sobre Beigbeder; acepta, con Preston, que los ofrecimientos de Franco a Hitler para el sometimiento de España a la estrategia germánica fueron absolutos, sin las condiciones invalidantes con que Franco consiguió desactivar sus propias propuestas aparentes. Anson no considera ni cita el testimonio del intérprete alemán en la entrevista de Hendaya ni la investigación fundadísima de Detwiler. No se entera de la auténtica posición proespañola del almirante Canaris. Cae en el mismo error de Preston al minusvalorar y menospreciar las intervenciones de Churchill a favor de Franco y de la difícil trayectoria española en la guerra

mundial. No entiende el auténtico propósito de la carta de Roosevelt a Franco en vísperas del desembarco aliado en el Norte de África a fines de 1942.

No voy a repetir cuanto ya dije sobre el *Don Juan* de Anson en mi libro *No nos robarán la Historia*. La presentación de una figura tan interesante y complicada como la de don Pedro Sainz Rodríguez, el exministro de Franco, a quien Anson describe a través de una enrevesada relación amor-odio, pero siempre en el fondo con una reprimida admiración, se consigue a través de procedimientos fabuladores cuya finalidad sigo, a estas alturas, sin entender. Para Anson don Pedro deja mil codos abajo a la Sibila de Cumas y al oráculo de Delfos. Personalmente no lo veo tan claro. Traté y estimo sobremanera a don Pedro Sainz Rodríguez; entre él y yo se estableció, al final de su vida, una intensa corriente de comprensión mutua. No creo que los presuntos y groseros excesos sexuales del gran especialista en espiritualidad tengan demasiado que ver con la Historia. Pero no comprendo tanta admiración de Anson por la clarividencia de don Pedro Sainz Rodríguez, si el sobresaliente profesor y escritor se equivocó de medio a medio con la trayectoria de España bajo el mando de Franco, cuando se vio obligado a escapar al exilio en 1942 y tuvo que permanecer marginado de la vida española durante las décadas más fecundas de su propia vida. Sainz Rodríguez no era ni había sido enemigo de Franco, sino, por el contrario, un amigo todo lo íntimo que Franco permitía. Era enemigo de la República, a la que se refería como «la horda» y «la hidra». Nunca fue demócrata al menos hasta la súbita conversión de toda la corte de Estoril a la democracia en 1964/65 a la que ya me he referido. Si no tuvo empacho alguno en disimular su fama liberal adquirida en tiempos de Primo de Rivera bajo el uniforme de Falange con correajes en 1937 y un puesto en el primer gobierno de Franco desde principios de 1938, ¿por qué se pasó con armas y bagajes a la oposición virulenta contra Franco en 1942? Evidentemente porque sus amigos británicos le pronosticaban una pronta caída de Franco y su régimen; pero aceptar esa tesis, para un estrecho colaborador de Franco, no me parece precisamente un acto de clarividencia política. Anson cree que todo cuanto sucedió en España desde la caída de Alfonso XIII hasta el advenimiento de don Juan Carlos estaba perfectamente previsto e incluso condicionado por los esquemas mentales y políticos de don Pedro Sainz Rodríguez. Estoy en el más completo desacuerdo. Desde el punto de vista de la previsión política, el insigne profesor me pareció siempre un completo fracasado y si esta tesis es, como creo, más que cierta, entonces cae por la base una de las columnas de la Historia sobre las que se sustenta el

libro de Anson sobre don Juan, don Pedro y don Francisco Franco, porque no es uno, son tres los protagonistas.

Más de una vez he publicado comentarios muy positivos sobre Luis María Anson. Cuando, como en esta ocasión, me veo obligado a formularlos con carga muy negativa, siempre los he subrayado con la frase del clásico: *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. Nunca me avergonzaré de tantos años de amistad con Luis María Anson. Siempre he podido mantenerla pese a las discrepancias, a veces muy fuertes, que me separan de él; porque sigo creyendo que es todavía mucho más lo que nos une. Por mi parte se mantendrá esa amistad, en un difícil equilibrio de elogios y de críticas. No sé proceder de otra manera.

EL SABLE DEL CAUDILLO: ANTOLOGÍA DEL ODIO DE VILALLONGA CONTRA FRANCO

Y sigamos, para rematarlas, con las vidas paralelas de Anson y Vilallonga. Si el *Don Juan* es la antología del odio de Luis María Anson contra Franco, *El sable del caudillo* (1997) es la antología del odio de Vilallonga contra el mismo personaje. Los orígenes del odio de Anson hacia Franco acaban de quedar muy claros en torno a la súbita conversión democrática de la corte de Estoril en 1964/1965; el odio de Vilallonga contra el Caudillo nace de fuentes más oscuras e incógnitas, cuando se establece en París después de su estancia en Buenos Aires. Aunque carezcamos hasta ahora de explicación para ese odio, el aristócrata se ha encargado de manifestarlo de forma muy pormenorizada; ha estudiado mejor que muchos partidarios de Franco la biografía del general y luego se ha dedicado a escribir negro donde los biógrafos favorables escriben blanco.

No deseo ensañarme con el antifranquismo visceral de Vilallonga. En primer lugar, por motivos de comprensión humana. He mantenido la norma invariable de no incluir aspectos concretos de vida privada en la crónica contemporánea, hasta que nos separe de los personajes un largo período de Historia. Así lo haré aquí, aunque Vilallonga haya citado con escaso fundamento dudas muy íntimas sobre altas personalidades. Vilallonga superó el trauma y con esfuerzos ímprobos, incluido un intenso trabajo de escritor sobre problemas históricos de España, ha logrado éxitos notables, con los que se podrá o no estar de acuerdo, pero sin anular la admiración que deben suscitar actitudes así a edades ya avanzadas. Hay otro motivo. En el por ahora último de sus libros, José Luis de Vilallonga revisa sus ideas anteriores sobre

Franco por recomendación de su amigo el Rey y reconoce en el Caudillo cualidades de capacidad e inteligencia que hasta entonces le había regateado. Sin embargo, *El sable del caudillo* sigue ahí, como un bastión importante de la ofensiva contra la figura histórica de Franco que se desencadenó en los años noventa; los otros dos puntos fuertes de esa ofensiva son precisamente, en la misma época, el *Franco*, de Paul Preston, y el *Don Juan*, de Luis María Anson. Las relaciones evidentes y públicas entre esos personajes, dos a dos, me permiten apuntalar con seriedad para ese período toda una tesis sobre la fase biográfica de la conjura contra Franco y contra un período vital de la historia de España, que es propósito fundamental de este libro. Por eso, sin menospreciar el valor real de la relativa palinodia posterior de Vilallonga sobre Franco, no tengo más remedio que desmontar objetivamente las acusaciones y tergiversaciones de Vilallonga en *El sable del caudillo*.

LAS CUATRO FASES DE LA CONJURA CONTRA LA HISTORIA DE ESPAÑA

La tesis de este libro, como ya hemos indicado, consiste en que existe, desde hace ya muchos años —concretamente desde la década de los sesenta —, una auténtica conjuración contra la historia de España en que yo creo, junto con muchos españoles, conjuración que se ha desarrollado en varias fases. Primera fase, de origen comunista, fue la conquista de las cátedras universitarias, los puestos de profesorado de Historia a todos los niveles y las columnas de la prensa y las revistas, para cancelar la memoria histórica de los españoles y presentamos una historia de impronta marxista, completamente diferente o, mejor, opuesta a la que los españoles conocían e incluso, como testigos, muchos de ellos recordaban. Las cátedras fueron, en efecto, conquistadas, los puntos clave del profesorado y de los medios de comunicación fueron ocupados con personas adscritas al proyecto, aunque adoleciesen de ignorancia y de incompetencia en muchos casos; citaré solamente uno, el del profesor Julio Aróstegui, cuya metodología consiste en negar la evidencia, descartar las pruebas fundadas y sustituir el análisis histórico por el insulto sistemático. La conquista de las cátedras no se hizo improvisadamente, sino con criterio estratégico que comenzó con la presencia del profesor Manuel Tuñón de Lara en la Universidad de Pau, donde organizó unos selectos cursos de historia marxista de España, a los que asistieron muchos jóvenes historiadores. Concretaremos esta fase de la conjura en su momento. La segunda fase se desencadena en los años ochenta, cuando las

Comunidades Autónomas comienzan a adquirir competencias en el campo de la enseñanza, el control de los libros de texto y, en definitiva, el ejercicio cada vez más descarado de la censura. Esta fase ofrece menos signos de influencia comunista, dado que el Partido Comunista había fracasado políticamente entre 1975 y 1982; el signo de esta nueva fase es autonómico, nacionalista y muchas veces separatista. El fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 aceleró la puesta en marcha de la tercera fase, que adquirió claro signo socialista después de la increíble victoria del PSOE en las elecciones del mes de octubre de 1982. Los tres proyectos, cada vez más dominados por el proyecto socialista, mantuvieron su camino y su ritmo hasta hoy.

Cuando la sociedad española estaba suficientemente violada, desarmada y desmantelada, por el efecto demoledor de la larga noche socialista y su estrategia en los medios de comunicación, llegó la hora de que la conjura contra la historia de España, sin perder fuerza en los demás frentes, se concentrase en la destrucción y satanización histórica de la figura y la obra del general Franco. Puede señalarse con claridad el comienzo de esta ofensiva, que me atrevo a calificar como cuarta fase de la conjura y que consiste en la publicación de varias biografías de aparente empaque, fundamento científico y fuerza literaria, sobre cuyo impacto pudiera apoyarse la actuación renovada de los terminales de la conjura en los medios de comunicación. El éxito resultó considerable; la derecha española y, sobre todo, sus dirigentes se avergonzaron de que se les considerase como franquistas y sus propios medios adictos entraron al trapo de la conjura contra la historia de España. Las obras biográficas para la satanización de Franco fueron, por orden de aparición en escena, la del escritor y comunicador comunista Manuel Vázquez Montalbán, *Autobiografía del general Franco* (Planeta, 1992); la ya comentada por nosotros en este libro, biografía de Paul Preston (1993); el *Don Juan* de Luis María Anson (Plaza y Janes, 1994), y *El sable del caudillo* de José Luis de Vilallonga en 1997, que ahora comentamos. Del intento de Vázquez Montalbán, indeleblemente marcado por el plagio, comentaré algo al final de estas consideraciones. Ahora voy con el sable de Vilallonga.

UNAS NOTAS DE LECTURA

Un sable comprado en Toledo por un joven cadete por treinta y cinco pesetas en 1907. Vilallonga convierte al sable en testigo de lo que él entiende por vida de Francisco Franco, que no lo es. Nunca he leído una cosa tan

retorcida, tan alambicada, tan falsamente obligatoria. El caso es que Vilallonga, al borde hoy de los ochenta años, ha vivido mucho. Hijo del barón de Segur, un miembro muy destacado de la más alta nobleza catalana, conoce por su padre y su familia muchos testimonios sobre la vida y la historia de España en el último siglo. Por desgracia, y sin que alcancemos a vislumbrar la causa, Vilallonga sintió, a partir de un momento de su vida, una fuente inextinguible de odio por Franco. Entonces se puso seriamente a estudiar la vida de Franco, sus biografías y sus antibiografías. Tres de éstas, que acabo de enumerar, precedieron a la suya. Que es, digámoslo desde el principio, una antibiografía truncada. Empieza con el nacimiento de Franco en Galicia, con su infancia y juventud, sigue con su ingreso en la Academia de Infantería, toda su carrera militar africana, la formación de su familia íntima, las etapas de la República y la guerra civil. Conoce más o menos, sin profundizar mucho, esa trayectoria biográfica. Pero al terminar el relato de Franco en la guerra civil, Vilallonga se cansa. Da la impresión de que se muere de asco no solamente por los hechos de Franco, sino sobre la forma con que él los interpreta. Lo del sable es un recurso poco original, mohoso, aburridísimo. Entonces, cuando narra la llegada de los esposos Franco al palacio del Pardo, a raíz de terminar la guerra civil (equivocándose, porque tardaron en decidirse por el Pardo, tras su estancia en el Soto de Viñuelas cuando dejaron el palacio de la Isla en Burgos), el sable se pierde en un desván y la antibiografía de Franco sufre un inexplicado eclipse más o menos hasta 1974. Quedan en medio, inéditos, períodos como el de Franco en la guerra mundial, en pleno acoso internacional que tanto molesta a otros antibiógrafos y la gran época en que Franco acomete y logra la transformación histórica de España. Es muy difícil convertir esas etapas en basura agresiva y Vilallonga opta por olvidarlas. Luego cuenta la decadencia de Franco en 1974 y 1975 y para ello recibe varias lecciones magistrales del testigo más próximo e importante: el entonces Príncipe de España.

En las fases estudiadas de la vida de Franco, José Luis de Vilallonga escarba minuciosamente con el único fin de encontrar datos y aspectos desfavorables y negativos para Franco. Nos ofrece un catálogo de todos los tópicos, de todas las mentiras. Algunas son terribles, otras no es que bordeen, es que se sumergen en el mal gusto impropio del afán elegante del aristócrata. Vilallonga puede opinar lo que quiera sobre Franco, pero no tiene ningún derecho a poner en duda la legitimidad de su hija Carmen, ni de trazarnos un retrato tan erróneo y tan alevoso de doña Carmen Polo de Franco. Retratos así son, además de falsos, carentes de toda prueba, de toda posibilidad de verdad

y de demostración. Pero son algo peor: sucios, aleves, repulsivos. Que yo sepa nunca un grande de España había procedido así en toda la historia de la nobleza española.

No transcribiré aquí un catálogo de errores, tan sólo unas notas de lectura. Ya sé que el libro se presenta como obra de ficción, inventa recursos y personajes, pero sin embargo apenas oculta una intención antibiográfica real. Empezaré por una falsedad gramatical. ¿Cómo puede decir quien se presenta como amigo del Rey que don Juan Carlos afirmase «Francos han habido varios»?, (p. 11). Resumir la vida de Franco como la de «un fracasado» (p. 12) nace del odio, pero de un odio cómico. Desde las primeras páginas (p. 15) presenta el título de Franco, jefe del Estado, como «una argucia de su hermano Nicolás»; eso es una trola donosa que se le ocurrió a un imaginativo historiador inglés que nunca tuvo idea sobre la elección de Franco en Salamanca. El *contra natura* de la p. 17 refleja la habitual confusión de nominativo y acusativo en que incurren casi todos los que utilizan el término en España. Franco no estaba de acuerdo con Hitler, pero no le despreciaba por motivos castrenses (p. 18), siempre admiró las campañas alemanas de 1939-1941. Todos los tópicos; la ignorancia de Franco en economía, la carencia de lecturas básicas (p. 19). «Franco tuvo una infancia de niño pobre» (p. 21). No es verdad; ni que la familia de un intendente de la Armada perteneciera a la «clase media baja», como creen con Vilallonga todos los antibiógrafos de Franco (p. 24). Durante todo el libro aparece la tergiversación de la «voz atiplada» y se falsea la causa, que nos ha enseñado a todos el doctor González Iglesias en *Los dientes de Franco*, libro de urgentísima lectura para Vilallonga. Nos describe en la p. 25 que «repetidas veces las tribus kabileñas (redundancia) atacaron el puerto de Melilla». Jamás lo hicieron, ni siquiera en 1921. Las más torpes insinuaciones sobre la misma virilidad de Franco se deslizan de vez en cuando a impulsos del odio (p. 20). Vilallonga sabe poco de Melilla. «Aquí —dice de la Melilla que conoció Franco— la población local nos odia». Por el contrario, la población de Melilla estaba entonces y estaría siempre identificada con el Ejército, que forma parta integrante de ella.

Como casi todos los historiadores o escritores que han descrito el combate del Biutz en 1916, que estuvo a punto de costarle le vida a Franco, Vilallonga propone un marco geográfico al revés (p. 37). La aldea no está situada «en lo alto del monte», sino al fondo del valle dominado por el lugar de la acción, llamado la Loma de las Trincheras. No había emplazadas ametralladoras en el campo enemigo, ni la herida, cuya radiografía publiqué en mi primera biografía de Franco, interesó lo más mínimo al aparato genital de Franco, una

de las obsesiones menos fundadas de Vilallonga, que la extiende a todo el conjunto de las relaciones del general con doña Carmen Polo, enteramente normales según testigos íntimos de la familia. La buena suerte o *baraka* de Franco era una leyenda de África, pero basada en una continua sucesión de hechos reales (p. 38) de los que se hace eco incluso un novelista-testigo muy hostil, Arturo Barea.

En el momento en que Vilallonga registra la aversión de Franco a las Juntas de Defensa (p. 45), el jefe militar africano colaboraba con ellas, como consta en su hoja de servicios. La aversión fue algunos años posterior, ya en las circunstancias del Desastre de 1921. La presentación de Franco como aliado de terratenientes e industriales contra la clase obrera de Asturias en 1917 (p. 46), no puede ser más injusta; en aquellas circunstancias tanto él como su regimiento se pusieron a favor de los obreros y en el ambiente obrero y minero, donde Franco no realizó el más mínimo acto de represión, nació el populismo social de Franco que, si bien Vilallonga lo ignora, fue una característica fundamental de su futura política.

Ya se que formalmente Vilallonga quiere ofrecemos un libro de ficción en el que se permite cualquier licencia literaria. Pero esa forma es sólo aparente. La intención del autor es antibiográfica, la forma novelada es sólo un pretexto. Y cuando en un contexto literario así se acumulan datos de todas clases con pretensiones de describir los hechos de un personaje real, identificado por su nombre, apellidos y circunstancias, los errores o manipulaciones históricas son errores y manipulaciones, no simplemente licencias poéticas. He trabajado intensamente en los campos, próximos y diferentes, de la Historia y la novela histórica y creo poseer ideas claras sobre las reglas de cada género. Comisiones de la oposición al gobierno y a la Monarquía recorrieron minuciosamente el territorio asturiano después de los disturbios de 1917. De ellas no salió un solo informe contra Franco, ni contra jefe alguno del Regimiento del Príncipe por lo que las acusaciones de Vilallonga en la p. 47, gravísimas, carecen de base.

La descripción de los legionarios reclutados por Franco como hombres derrotados por la vida que deseaban redimirse la escribió con duros trazos el propio Franco en su *Diario de una bandera*; pero de ahí a denominarles, como hace Vilallonga, *bestias salvajes* hay una distancia intolerable. El motivo director de todo el libro es presentar a Franco como una persona empeñada en manejar el terror como arma de guerra y de política, pero tal tesis no pasa de constituir una arbitrariedad preconcebida por un odio insaciable. Nuevamente incurre Vilallonga en toda clase de falsedades a

propósito de la derrota militar sufrida en 1921 por las tropas de la Comandancia de Melilla. Le hubiera sido útil, como hicimos nosotros en 1971, recorrer paso a paso el camino trágico que va desde Monte Abarrán a Monte Arruit y Nador para no pervertir las descripciones. Abarrán era un campamento sobre un monte; Monte Arruit no era un monte, sino un campamento fortificado en una llanura. Las harcas de Abd-el-Krim actuaron en tres cuerpos, que no estaban mandados por emires. El telegrama de Alfonso XIII a Silvestre no se ha podido nunca demostrar y menos las frases despectivas, inverosímiles, del Rey contra las víctimas militares del Desastre que nadie, y menos un monárquico familiarmente vinculado a don Alfonso, deben atribuirle sin fundamento alguno. No es verdad que Silvestre en 1921 «tomase Abarrán y prosiguiera el avance» (p. 61); allí quedó clavada su vanguardia de Regulares, que en gran parte desertaron. Los efectivos del ejército irregular rifeño no alcanzaron ante Annual la cifra de «cientos de miles» (p. 65), sino apenas tres mil, lo que hace inexplicable la derrota. No había sobre la aldea de Annual «ciudadela» alguna, el campamento se alzaba sobre un cerro pelado que yo pude recorrer con honda emoción, guiado por ancianos testigos de la catástrofe. Toda la relación entre el Rey, el general Primo de Rivera y el teniente coronel Franco sobre los «planes de desembarco» en Alhucemas es fantasmagórica, aunque se inspira en revelaciones exageradas del propio Franco. Vilallonga no tiene además en cuenta el desembarco previo de Franco en Alcázar Seguer a principios de 1925, ni la actuación de Franco, junto a Goded, al mando de las vanguardias que desembarcaron en las playas del Morro Nuevo y marcaron el éxito de la empresa. El resto de las campañas (tres desde la de 1927), con las que se concluyó la dura guerra de Marruecos, se despacha de un plumazo despectivo, pese a que resultaron trascendentales para la victoria en África y para la futura guerra civil. En ellas rayó a gran altura la capacidad militar del general Sanjurjo, artífice de la victoria militar. Primo de Rivera no pudo acusar a Franco de que no le importaba la vida de sus hombres porque precisamente una característica de Franco, reconocida por todos los observadores de entonces, era su preocupación constante por el ahorro de vidas de sus hombres, lo que una vez le privó de la Laureada. Es también ajena a la verdad la famosa (y enteramente falsa) ambientación del almuerzo de Ben-Tieb ofrecido por el joven jefe de la Legión a Primo de Rivera; el propio Franco me insistió casi indignado, tantas décadas después, en que jamás hubo allí «un menú a base de huevos».

Producen asombro, y reacciones peores, las obsesivas afirmaciones de Vilallonga sobre la suposición de que doña Carmen Polo nunca estuvo embarazada y que por tanto la actual duquesa de Franco era hija de Ramón, no de Francisco Franco. ¿Es que son falsas las partidas de nacimiento y de bautismo, cuyos facsímiles yo publiqué en mi primera biografía de Franco?

Los planes de estudio y la organización de la Academia General Militar creada por Franco en Zaragoza por orden del general Primo de Rivera han sido perfectamente estudiados por George Hills y otros historiadores; que Franco primase la experiencia de los profesores en el combate no es un defecto, sino una acertadísima exigencia. Para el decaimiento, el abandono y la huida del rey en abril de 1931, Vilallonga se basa en el testimonio de su padre, barón de Segur, que era uno de los jóvenes ayudantes de don Alfonso y vivió intensamente aquellas jornadas. Vilallonga puede comprobar en varios testimonios que Franco asumió siempre las tesis de mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel ante aquellas luctuosas jornadas que no evitaron, sino simplemente aplazaron, el enfrentamiento de la guerra civil. Vilallonga conoce bien el libro de Franco Salgado, a quien llama equivocadamente «primo de Franco», pero olvida alguna de sus citas fundamentales, como la que se refiere a la opinión de Franco sobre la caída de Alfonso XIII. Vilallonga acepta como posible cualquier rumor peyorativo sobre Franco, como el que le atribuía el propósito de dirigir el Alzamiento desde el sur de Francia (p. 187). Y no nos informa ni sobre el comportamiento de Franco en Zaragoza durante la transición de la Monarquía a la República, ni sobre su importante nota publicada en *ABC* en que ratificaba su fidelidad al rey derrocado (p. 131). Y comete un error grave al decirnos que Franco había formado parte del Consejo de guerra que condenó a los capitanes Galán y García Hernández a la pena capital (p. 136). Formó parte del segundo, celebrado ya en 1931, en el que no se dictaron penas de muerte, éste es un error en que incurren varios antibiógrafos de Franco.

Salta Vilallonga sobre ascuas entre los desmanes del primer bienio republicano 1931-1933. La coalición vencedora en las elecciones de noviembre de 1933 fue la derecha moderada, no la «derecha pura y dura» que se opuso a la anterior (p. 141). El movimiento separatista de la Generalidad, el 6 de octubre de 1934, no fue sofocado principalmente «por las fuerzas de Seguridad», sino por la presencia de fuerzas militares en la plaza de San Jaime (p. 147). La Revolución de Octubre de 1934 queda por completo desdibujada en el relato, así como la actuación de Franco contra ella por nombramiento ministerial que no es de septiembre, sino del 4 de octubre de

1934; en estas circunstancias, las fechas resultan esenciales. No es verdad que Franco tomara el mando de la conspiración para el Alzamiento antes de partir de Madrid para Canarias en marzo de 1936 (p. 173). En aquella primavera, según Vilallonga «todos llamaban a Mola el director» (p. 181). No lo hacía nadie; era una contraseña secreta entre poquísimos iniciados y un seudónimo secreto del propio Mola para sus Instrucciones reservadísimas.

Le leyenda sobre el asesinato del general Amado Balmes, comandante militar de Las Palmas, por los partidarios de Franco inmediatamente antes del Alzamiento (p. 197) es pura patraña, porque los hechos se describen claramente en un legajo del Servicio Histórico Militar. Vilallonga se inventa conversaciones telefónicas imposibles en los días del Alzamiento y al principio de la guerra civil, entre ellas las de Franco con Mola (p. 199).

La ironía sobre una Cruzada con los moros como aliados es de la propaganda republicana, sería absurda entre los colaboradores estrechos de Franco (p. 206). La subida de sueldo a los legionarios que escandaliza a Vilallonga (p. 207) no rebasó la cantidad de una peseta, mientras los milicianos del Frente Popular cobraban diez, tres veces más que los mal llamados «mercenarios» del Tercio. Franco utilizó en los primeros días de la guerra el término «cruzada» en sentido exclusivamente patriótico, sin connotación religiosa alguna; cuando la Iglesia adoptó la palabra, y pasado algún tiempo, Franco volvió a utilizarle, ahora en el mismo sentido que la Iglesia (p. 209).

He conocido suficientemente a doña Carmen Polo de Franco para comprender la gravísima injusticia con que Vilallonga, que la aborrece, trata de atribuirle la instigación para que los partidarios de Franco eliminasen a todos sus posibles rivales, como José Antonio Primo de Rivera, Sanjurjo y Mola. Las conversaciones, a veces extensas, de la señora de Franco y su esposo en este sentido rebasan las dimensiones del esperpento, sin la menor base de realidad. Doña Carmen Polo de Franco fue en todo momento de su vida una mujer llena de dignidad, con aspectos simpáticos o antipáticos como todo el mundo, pero hizo gala siempre de una discreción admirable sin una estridencia ni una salida de tono. Jamás se inmiscuyó en la vida profesional, militar o política de su esposo. Es natural que demostrase su impresión por la boda de su nieta con un nieto de don Alfonso XIII, pero siempre favoreció el camino de don Juan Carlos y doña Sofía hacia el trono de España. Representó en todos los momentos difíciles de la vida una gran ayuda para el general Franco. Presentarla ahora gratuitamente, reiteradamente, como una mujer recomida por la ambición, promotora de la eliminación de posibles

adversarios o émulos de su esposo y auténtico monstruo para la permanencia en el poder, me parece una gravísima injusticia sin justificación de ninguna clase (p. 213 para el caso de Mola).

La intervención temprana de Franco para asegurar el triunfo del Alzamiento en Las Palmas desde la madrugada del 18 de julio queda muy desdibujada, así como las importantes circunstancias del vuelo a Tetuán con descanso en Casablanca. Vilallonga trata de rebajar la importancia del puente aéreo organizado por Franco desde Tetuán el mismo día de su llegada, 19 de julio; pero fue una decisión trascendental, que para nada requirió la presencia de imaginarios «buques de guerra alemanes en el Estrecho» (p. 234). El paso naval del Estrecho el 5 de agosto de 1936 fue peligrosamente obstaculizado por la Marina del Frente Popular y en concreto por el destructor «Alcalá Galiano», que pudo terminar fácilmente con todo el convoy, pero que huyó despavorido ante el ataque aéreo enemigo prácticamente sin bajas; Vilallonga propone una descripción alejada de la verdad, en la que convierte nada menos que en acorazado de la República al destructor *Lepanto* (p. 229). La represión, tanto republicana como nacional en Badajoz, está muy estudiada a estas alturas; no se puede despachar con rasgos irreales (p. 235). El Ejército de África no llegó ante Talavera de la Reina hasta principio de septiembre, no el 17 de agosto como señala Vilallonga (p. 242), una cosa es la imaginación y otra el simple descuido en la fijación de los datos.

Todo el asunto del Alcázar de Toledo está tratado de forma intolerable. Hasta por respeto al heroísmo y solidaridad humana debería Vilallonga haberlo preparado con un poco de solvencia. A propósito del regreso de su esposa desde Francia, Franco, según Vilallonga, se explaya con ella en la —por sus enemigos— difundida teoría de que no quiso ganar la guerra rápidamente, sino muy despacio, para dar tiempo a la eliminación fría e implacable de esos enemigos políticos e ideológicos (p. 249). No sé de dónde salió este infundio. Franco avanzaba desde primeros de agosto a partir de Sevilla, primero por el valle del Guadiana y luego por el del Tajo, con efectivos inferiores a los de una división, por aguerrida que fuese, y no necesitaba echar el freno al Ejército de África para que avanzase despacio, hubiera sido imposible acelerar más la marcha sobre Madrid. Durante el resto de la guerra civil le ocurrió lo mismo, ante un ejército enemigo cada vez más potente, mejor armado y organizado. Al historiador que sólo se preocupa de establecer y documentar la verdad de los hechos le molesta cada vez más el tópico manoseado y repetido hasta la saciedad por motivaciones de propaganda política posterior.

El problema de la Iglesia católica en la guerra civil española es demasiado serio y trágico para despacharlo con frivolidades palmarias como las que utiliza Vilallonga en torno a la p. 235 de su libro. Una guerra de la que ha salido para los altares una cifra de mártires que llega al orden de los centenares, no menor de la que brotó de las grandes persecuciones romanas, no debe valorarse de forma despectiva por motivaciones de política a ras de tierra. El propio señor Vilallonga tiene en Paracuellos del Jarama familiares suyos que descansan junto a mártires beatificados por el Papa Juan Pablo II. Franco no «incorporó inmediatamente» (p. 255) a sus discursos el concepto que la Iglesia alumbraba sobre la guerra civil española, tardó todavía mucho tiempo. Luego sí, cuando dos Papas seguidos aceptaban y proclamaban ese concepto, Franco lo hizo suyo hasta el final de su vida y no me parece fácil reprochárselo a un militar que había sido desde la niñez, sin eclipse alguno, un católico sencillo, sincero y practicante.

Vilallonga se siente incapaz de precisar la fecha en que Franco encargó a su cuñado Serrano Suñer la articulación política y jurídica del nuevo Estado (p. 261). Comprendo sus dificultades; el contexto que se dibuja en esa página se refiere al año 1936 y Serrano Suñer, mortalmente amenazado en zona roja, donde murieron asesinados dos de sus hermanos, no pudo presentarse en Salamanca hasta febrero de 1937. Otra de las obsesiones de Vilallonga en este libro es que Franco no movió ni dejó mover su dedo para salvar la vida de José Antonio Primo de Rivera; no sólo él sino su esposa manifestaban la conveniencia de que fuese eliminado por el enemigo (p. 267). Es otra tenaz y mendaz leyenda, de esas que Vilallonga no puede dejar sin sacarles provecho literario, pero es una falsedad más.

De vez en cuando Vilallonga sufre extrañas obnubilaciones en su seguimiento de los sucesos de la guerra civil. La batalla de Madrid en noviembre de 1936 se le marcha viva y la decisión de Franco para trasladar el esfuerzo principal a la izquierda y a la derecha del ataque frontal la retrasa todo un mes (p. 269). Luego, como inspirado en un frenesí de propaganda enemiga, hace quejarse a Franco porque el embajador de Alemania y el mando militar italiano en España le imponen nada menos que una docena de asesores militares de esas nacionalidades en el Cuartel General del Generalísimo (p. 271), lo cual es un absurdo impensable. El lío se hace aún mayor con la posición de los voluntarios italianos en España, que no eran el desecho del fascismo, sino una división completa del Regio Essercito (la «Littorio») y tres de camisas negras, muy bien encuadrados por una oficialidad en buena parte profesional. Pero en la ofensiva de Guadalajara,

donde no fueron aislados por el Ejército nacional, que situó en su flanco derecho a la División de Soria, actuó en bloque todo el cuerpo italiano, y no disperso en todos los sectores de la zona, incluido el Jarama, como dice Vilallonga (p. 271 s.). Si en un relato de fondo histórico se citan divisiones y localizaciones no se puede convertir todo en un desbarajuste so capa de ficción.

A medida que avanza el relato de la guerra civil, Vilallonga se va cansando. El conjunto de las operaciones militares a partir de abril de 1937, con la trascendental ofensiva de Franco en el Norte y los zarpazos de Rojo con el Ejército Popular en el Centro, se le escapa casi por completo. Algo semejante ocurre con las operaciones de 1938, precedidas por la victoria republicana de Teruel. Ya no hay un relato seguido, ni trazos firmes. Sus acuarelas cada vez más desvaídas, menos concretas, más cansadas. La batalla del Ebro, como antes las de Aragón y de Levante, no se sostienen de pie. El propio Vilallonga fue, junto a su padre, el barón de Segur, testigo de la campaña de Cataluña, pero no nos la quiere describir. Sólo se detiene un instante cuando atrapa lo que cree ser un rasgo desfavorable de Franco, pero con estos procedimientos la victoria final se le desdibuja y la guerra civil termina sin motivos, sin concreción.

Y entonces se interrumpe el libro. El sable locuaz se pierde en un desván del palacio del Pardo y sólo reaparece para transmitirnos una narración de la agonía de Franco en 1974 y 1975. Aquí echa mano Vilallonga de un narrador más elevado, el propio Rey que le había comunicado ampliamente sus impresiones para el libro que tituló precisamente *El Rey* y constituyó un éxito importante en medio de las polémicas. No es que ahora Vilallonga nos descubra Mediterráneos, pero las páginas finales de su libro se leen con interés, lo que no sucede con casi ninguna de las precedentes.

Prefiero terminar aquí el comentario a este libro que ni es Historia ni novela sino todo lo contrario. No comentaré el libro que Vilallonga ha publicado después, para decirnos que el Rey le ha convencido, al fin, sobre algunos datos y rasgos que permiten comprobar la inteligencia política de Franco. Me alegro, pero ya no es mi problema. Falta solamente el colofón.

El sable del caudillo se iba a presentar a poco de su publicación en 1997 en un salón del hotel Palace de Madrid. Se iban a encargar de dirigir el acto y presentar el libro, los dos monárquicos actuales más antifranquistas, el autor, José Luis de Vilallonga y el autor de *Don Juan*, Luis María Anson. Por lo que me cuentan apenas lo consiguieron. Cuando tomaron la palabra un nutrido grupo de partidarios fervorosos de Franco les interrumpió y nos les permitió

hablar. Lo importante, como símbolo, es aquella presentación pública de todo un frente monárquico antifranquista dentro del proceso y la conjura general para la erradicación de la memoria histórica de los españoles. Hace muchos años jamás me hubiera creído que tal cosa pudiera suceder.

El lector habrá advertido la más que sospechosa coincidencia entre las tesis de Preston contra Franco, las de Anson y las de Vilallonga. Tesis que coinciden, por supuesto, con las que esgrime la propaganda histórica de socialistas y comunistas. A esa coincidencia es a lo que llamo *conjura*, no encuentro otra explicación.

Los anteriores Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, llegan a Sevilla en abril de 1923. A la derecha del Rey, los infantes Juan y Gonzalo. No acudió el Príncipe de Asturias, gravemente enfermo de hemofilia. Alfonso XIII abandonó España en 1931 víctima de una terrible depresión agudizada por el abandonismo de sus consejeros liberales. La Monarquía no perdió las elecciones de abril de 1931, que además no se habían convocado para el cambio de régimen. La República advino fuera de la legitimidad y de la legalidad.

Capítulo II: La falsa glorificación de la Segunda República como ejemplar régimen democrático

ABANDONO Y HUIDA DE ALFONSO XIII

Alfonso XIII no perdió el trono por decisión popular. Lo perdió por abandono personal y huida, mal aconsejado por los monárquicos liberales que le hicieron tragarse dos mentiras horrendas; primera, que no tenía ya el amor de su pueblo; segunda, que la Monarquía había perdido las elecciones del 12 de abril de 1931. Vamos a examinar de cerca esas mentiras.

Primera mentira: «Ya no tengo el amor de mi pueblo»

La condena mendaz y luctuosa del Congreso de los Diputados el 14 de septiembre de 1999 contra el Alzamiento del 18 de julio de 1936, aprobada por todos los partidos menos el Partido Popular (sabía perfectamente que se jugaba más de la mitad de sus votos si llega a aprobar la proposición), ha sido, como explico en la Introducción, el impulso principal para la salida de este libro. En esa condena, que es un dictamen histórico para el que el Congreso carece, en mi opinión, de competencia alguna, se establecen, como decíamos, dos tesis. Primera, el carácter golpista-fascista del Alzamiento; segunda, la «legalidad republicana» como objetivo del golpe. De la primera tesis hablaremos en los capítulos siguientes, al plantear la guerra civil. Al estudio sobre la legalidad republicana dedicamos este capítulo, articulado en una serie de mentiras históricas fundamentales. Pero no basta con un solo capítulo: necesitaremos otros dos más.

La primera de estas mentiras explica por qué cayó realmente don Alfonso XIII por sorpresa el 14 de abril de 1931, sin que para ello mediase referéndum, ni plebiscito, ni siquiera unas elecciones en las que se dirimiera la forma de gobierno en España. Alfonso XIII, con la mejor voluntad del mundo, dejó formulada su mentira que, con autorización del gobierno provisional de la República, que no podía creerse el fabuloso regalo que le hacía el rey derrocado por ella, se publicó al día siguiente, 15 de abril, en

portada del diario monárquico *ABC*. La mentira era ésta: «*Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo*». Por supuesto que los historiadores partidarios de la República estarán de acuerdo con este falaz dictamen de Alfonso XIII —seducido por sus consejeros liberales— y en contra de considerarlo como mentira trascendental. Por ejemplo, Paul Preston y Javier Tusell, a lo largo de sus varias obras, consideran a la segunda República como régimen democrático. Lo mismo hace la lamentable formulación del Congreso que acabo de comentar cuando se refiere a le *legalidad republicana*. Éste es un dogma de fe histórica, que no admite distingos ni componendas, podría llenar todo este capítulo con citas de historiadores, políticos y demás demócratas profesionales, que una de dos, o no saben lo que es la democracia o no saben lo que fue, de principio a fin, la Segunda República.

La inconcebible mentira del Rey abrumado (mentira objetiva, porque él creía decir o sentir la verdad) tuvo un precedente en la mentira que profirió el día anterior, 13 de abril, el último jefe del gobierno de la Monarquía, que, vaya por Dios, se llamaba Aznar; el almirante don Juan B. Aznar, cuando le dijeron (engañándole) a primera hora de la mañana del 13 de abril que la Monarquía había perdido las elecciones. No era verdad; como veremos; pero él la creyó verdad cuando comentó, tras haber pasado una noche agitada donde pudo conciliar el sueño gracias a una novela policíaca: «¿Y qué me dicen ustedes de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?». Mentira sobre mentira, la del Rey sobre la de su incauto jefe de gobierno.

Alfonso XIII fue recibido por la opinión española (y europea) en 1902 al subir al trono cuando cumplía dieciséis años de edad, con un entusiasmo desbordante y con todo el amor de su pueblo. España acababa de atravesar por un enorme desastre, la guerra de agresión norteamericana de 1898, cuando la Reina Regente, doña María Cristina de Austria, salvó a España de la desintegración y supo devolverle el pulso perdido. España estaba dispuesta a enfrentarse a los gravísimos problemas del siglo XX —sólo un gran intelectual y gran político católico, Juan Donoso Cortés, había acertado a vislumbrar la magnitud del desastre venidero, había entrevisto en sus pesadillas nada menos que un ejército de Rusia en Madrid—, pero la nación, después de su desastre agónico de 1898, estaba deseando lanzarse al futuro bajo el mando de un rey joven y animoso que ya prometía un futuro diferente. Pese a la edad inmadura en que asumió la Corona, Alfonso XIII, guiado por su experimentada madre y ex Regente, parecía confirmar esas esperanzas.

Contó con consejeros experimentados y leales, nunca desmintió su sincero sentimiento religioso ni su patriotismo, aunque tuvo la desgracia de fracasar en su matrimonio y de reinar sobre una España a la que su primer intérprete intelectual llamó invertebrada. Pero conservaba el amor de su pueblo, que en gran parte no dudaba de la Monarquía secular; hasta que en 1929 perdió a su madre doña María Cristina y entró en una situación de abatimiento que se agravó cuando una parte minoritaria, pero muy influyente y sensible, de la opinión pública, o tal vez mejor, de la opinión publicada, decidió echar sobre el Rey todos los enconamientos liberales contra la Dictadura que terminó abruptamente, por agotamiento del dictador, general Primo de Rivera, a fines de enero de 1930. La primera dictadura había logrado grandes cosas para España; había resuelto dos problemas que se arrastraban durante décadas, la guerra de Marruecos y el desorden público; había realizado una auténtica política económica en tiempos de prosperidad internacional y había recuperado para España el respeto de las naciones. Había desahuciado, sí, a una clase política inoperante y desacreditada y había incurrido sin necesidad alguna en una sucesión de agresiones institucionales que le valieron la hostilidad de grupos minoritarios, pero muy influyentes en la opinión. Los liberales, descartados por los militares de la Dictadura, se tomaron cumplida venganza al caer el régimen militar y al desaparecer muy pronto el Dictador caído y autoexiliado en París, volvieron su sed de venganza contra el Rey que había dado paso en 1923 al general, a quien al principio aclamaron muchos de quienes en 1930 se convirtieron en sus más agresivos detractores.

El gran pecado histórico del régimen liberal, restaurado a fines de enero de 1930 por el prestigioso general Dámaso Berenguer, fue, como explicó el profesor Jesús Pabón, abominar del efecto —el régimen autoritario— para volver a la causa, es decir, a la causa que provocó la Dictadura: prescindir de los acertados remedios de la Dictadura para volver al desorden social y político que hizo necesario el régimen implantado por las Fuerzas Armadas. A lo largo del año 1930 se fueron produciendo resonantes deserciones de grandes políticos liberales y monárquicos que pedían el derribo de la Monarquía y la exclusión del Rey. Los monárquicos fieles no advirtieron el peligro y no acertaron a defender a don Alfonso XIII, que cada vez se hartaba más del trono y además lo confesaba en privado, con lo que todo el mundo se enteraba. En el verano de 1930, algunos de esos monárquicos tránsfugas se reunieron en el Pacto de San Sebastián —con personalidades antimonárquicas del republicanismo tradicional (que mantenía su llama pese al insondable fracaso de la Primera República en 1873) y el socialismo, que constituía la

primera fuerza política de izquierdas en España, y se había reforzado en la Dictadura por transigencia ostensible de don Miguel Primo de Rivera— y allí acordaron abrir un proceso de autonomías regionales cuando llegase la República, lo que esperaban tras el éxito de las dos conspiraciones militares que estaban en contacto con ellos: la de varios generales, como Queipo de Llano y Villa Abrille y la de un grupo alucinado de jóvenes oficiales, muy vinculados con los grupos anarcosindicalistas clandestinos que les prometían apoyo. Los líderes principales de este segundo grupo conspirador eran el capitán Fermín Galán, destinado en la tranquila guarnición de Jaca, y un héroe nacional, el comandante aviador don Ramón Franco Bahamonde, que había cruzado el Atlántico Sur al mando del hidroavión *Plus Ultra* y era hermano de un joven y famoso general enteramente fiel a la Corona, don Francisco Franco Bahamonde, director de la Academia General Militar de Zaragoza.

Éste es un primer hecho para demostrar el nacimiento antidemocrático de la segunda República, que se preparó mediante dos conspiraciones militares coordinadas por un Comité Revolucionario —nacido del Pacto de San Sebastián— con carácter evidentemente anticonstitucional. Si el Congreso de la República hubiera enjuiciado el triple pronunciamiento antidemocrático de 1930/1931 con plena objetividad, hubiera tenido que proclamarlo «golpe militar fascista» sin la menor duda; pero naturalmente no lo hizo. Primero porque el golpe militar anticonstitucional fracasó en tres etapas: primera en Jaca, cuando el capitán Fermín Galán sublevó a la guarnición, encabezó al frente de ella una marcha invernal y absurda contra Huesca, encarceló a varios jefes y oficiales leales al gobierno legal —la legalidad monárquica— y asesinó al general Las Heras, que llegaba de Huesca para reducir la rebelión. Las tropas rebeldes chocaron entonces cerca de Huesca, junto a la ermita de la Virgen de Cillas, con tropas leales al Gobierno que derrotaron y dispersaron a las de Galán, quien sometido inmediatamente a consejo de guerra fue condenado a muerte y fusilado con su compañero el capitán García Hernández. El 15 de diciembre se sublevó en el aeródromo de Cuatro Vientos, a la salida oeste de Madrid, el general Queipo de Llano con el aviador Ramón Franco, que también fueron reducidos por una columna del gobierno y tuvieron que escapar por aire a Portugal, donde el gobierno de la Monarquía les acusó de robar un avión en su rebeldía. Por el momento el golpe militar fascista de los republicanos había fracasado completamente.

Todo el mundo, empezando por los protagonistas republicanos, está de acuerdo en que la causa de la República carecía de toda posibilidad; la

República no advino meses después por la fuerza de los republicanos, sino por el hundimiento moral de los monárquicos liberales y del propio rey don Alfonso XIII. El tercer elemento antidemocrático del golpe de diciembre de 1930, el golpe político del Comité Revolucionario convertido en Gobierno provisional de la República, fracasó también lamentablemente cuando el general Emilio Mola, director general de Seguridad, metió en la cárcel a todos sus miembros que pudo encontrar; algunos, como don Manuel Azaña, lograron esconderse.

El problema de la Corona, y por lo tanto el problema de España entre fines de enero de 1930 y mediados de abril de 1931, era el abatimiento del Rey y la deserción de los monárquicos de signo liberal, no que los Reyes hubieran perdido el amor de su pueblo. Varias pruebas ofreció ese pueblo a los Reyes en este sentido. Las Memorias del general Mola, que conservó con Berenguer y Aznar la dirección general de Seguridad, no dejan lugar a dudas. Cuando el 23 de enero de 1931 se colocaron a la entrada de Palacio los pliegos de mayordomía —era el santo del Rey— hubo que reponerlos una y otra vez por la superabundancia de firmas, sobre todo populares. Cuando poco después, alarmada por las noticias de España, la reina Victoria Eugenia llegaba a la estación del Norte después de un viaje a Londres para pedir ayuda a su familiar Corona británica, decenas de miles de madrileños acudieron a recibirla en manifestación espontánea que emocionó a la fría Soberana.

Pero a lo largo de 1930 y los primeros meses de 1931 se producían con regularidad trágica, que parecía y seguramente era programada, resonantes deserciones de líderes monárquicos liberales, que alternaban con groseros ataques de republicanos y socialistas. El Rey se quejaba de que su gobierno le dejaba solo; no se defendía; y caía por semanas en una depresión cada vez más grave. Miguel Maura Gamazo, hijo del prócer monárquico don Antonio Maura, había iniciado el desfile al declararse republicano en el Ateneo de San Sebastián el 20 de febrero de 1930; le siguió una semana después don José Sánchez Guerra, jefe del partido monárquico liberal-conservador, con un durísimo discurso contra el Rey en el teatro de la Zarzuela; el 13 de abril, un exministro de la Corona, el liberal don Niceto Alcalá Zamora, anunció una República conservadora en Valencia; el 23 de abril, el líder socialista Indalecio Prieto incendió de entusiasmo negativo el Ateneo de Madrid con acusaciones de corrupción a la Dictadura y al Rey, que luego se demostrarían enteramente falsas. Tras esta primavera de abandonos y deserciones, se supo que el propio Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, conspiraba con el católico Alcalá Zamora contra quien ostentaba el título de Rey Católico; una

parte considerable del clero bajo se desenganchó de la Monarquía. Pero los sucesos más graves tendrían lugar ya en 1931, cuando el gobierno Berenguer programó un proceso electoral que se iniciaría en abril con unas elecciones municipales, consideradas enteramente seguras por los monárquicos, seguidas por unas provinciales a las Diputaciones y unas generales que darían paso a unas Cortes Constituyentes, en donde inevitablemente se iba a discutir el problema del régimen, la decisión entre monarquía o república.

La reacción de los partidos monárquicos fue desoladora para el gobierno y el rey. Dos exjefes de gobierno y líderes del parido monárquico liberal, conde de Romanones y marqués de Alhucemas, publicaron el 14 de febrero de 1931 que no concurrirían a estas sucesivas elecciones; pretendían, como toda la oposición antimonárquica, resolver el problema del régimen que Berenguer creía posible eludir si se ganaban, como parecía fácil, las elecciones para los Ayuntamientos y Diputaciones. Sin embargo, el gesto de los liberales monárquicos actuó como una bomba política y el gobierno Berenguer cayó.

Mientras el pueblo, ajeno a estos manejos de la política partidista, aprovechaba cualquier ocasión para manifestar su adhesión a la Corona y a los Reyes, los líderes políticos, republicanos y sobre todo monárquicos, dejaban cada vez más aislado a don Alfonso que recibía crueles negativas de colaboración de parte de exministros de la Corona tan significados como don Santiago Alba y don Francisco Cambó; el primero por venganza ante las injusticias de que había sido objeto al principio de la Dictadura, el segundo porque se creía víctima de un cáncer que luego se resolvió favorablemente. Hasta que el Rey, desesperado, llamó al exjefe del gobierno y líder conservador don José Sánchez Guerra, enemigo jurado de la Dictadura, y le encargó formar un gobierno de salvación monárquica que el original político trató de reclutar entre los miembros del gobierno provisional de la República, presos entonces en la cárcel Modelo. Nunca se había visto mayor disparate en toda la historia política española y para colmo del absurdo y el deshonor, los presuntos ministros encarcelados despidieron al emisario regio con cajas destempladas. Era el 16 de febrero de 1931, el día más negro de la Monarquía. Entonces mi abuelo, Juan de la Cierva y Peñafiel, convocó una reunión urgente en su casa de la calle Alfonso XII a la que acudieron varios líderes monárquicos que tomaron la decisión de proponer al Rey un gobierno de salvación, cuya jefatura fue encomendada al buen almirante Juan B. Aznar, excelente marino sin experiencia política para encarar semejante temporal. Los diversos líderes formaron por fin ese gobierno que mantenía en Guerra al general Berenguer, situaba a Gabriel Maura y al conde de Romanones; y a

dos políticos dispuestos a resistir, Juan de la Cierva y el conde de Bugallal. Pero como conjunto ése era un gobierno dispuesto al abandono que sólo duró pocas semanas ante el empuje de los republicanos, muy envalentonados después de la increíble escena de Sánchez Guerra en la cárcel. Aun así existen testimonios tremendos, posteriores ya a las elecciones del 12 de abril, en que algunos líderes republicanos pensaban con optimismo que tendrían República dos años después. No imaginaban que antes de veinticuatro horas serían Gobierno.

Segunda mentira: las elecciones del 12 de abril fueron una derrota monárquica

Las elecciones del 12 de abril de 1931, convocadas por el gobierno Berenguer y presididas por el gobierno Aznar, no eran un plebiscito, ni un referéndum; sólo eran unas elecciones municipales, en las que debían elegirse unos ochenta mil concejales de toda España. Es absurdo que unas elecciones administrativas de nivel mínimo se interpreten como aptas para decidir un problema constituyente tan grave como es la forma de Gobierno. Cuando las Cortes de 1873 proclamaron el 11 de febrero la Primera República se había producido previamente la abdicación, o «dimisión» del Rey constitucional, don Amadeo I de Saboya, elegido también por el Parlamento; y acto seguido las Cortes, compuestas por una mayoría monárquica, proclamaron la República. Para cambiar legalmente el régimen de 1931, regido hasta el 12 de abril por la Constitución de 1876 y leyes electorales vigentes, hubieran sido necesarias, como reclamaban los republicanos y los constitucionalistas, unas Cortes de carácter constituyente convocadas expresamente para decidir esta cuestión del régimen; condición de que no gozaban las elecciones municipales de abril de 1931, convocadas exclusivamente para elegir los concejales de toda España, unos ochenta mil. De toda España; sin distinción de ciudades y pueblos, de poblaciones grandes o pequeñas. Esto es lo que todo el mundo sabía; nadie imaginaba que tales elecciones municipales decidirían entre Monarquía y República.

Vamos a ver lo que sucedió en esas elecciones. De acuerdo con la ley electoral de 1907, en su famoso artículo 29, cuando en una circunscripción municipal se presentara una sola lista de candidatos, éstos serían proclamados sin lucha, y así se hizo tras esta primera fase electoral, celebrada el 5 de abril. La prensa publicó el resultado de esta primera fase, que no se impugnó por nadie, y que ascendía a 14 018 concejales monárquicos y 1832 republicanos. Entre los casi diez mil ayuntamientos de España, los que pasaron a control

republicano fueron exactamente dos; un pueblo de Granada y otro de Valencia. Nadie habló entonces, por supuesto, de plebiscito.

En la tarde del 12 de abril de 1931 se fueron reuniendo varios ministros en el despacho del de Gobernación, que asoma por su balcón principal a la Puerta del Sol (actual edificio sede de la Comunidad de Madrid), para ir conociendo los resultados que llegaban por teléfono desde numerosas circunscripciones. Varios testigos han referido con acentos dramáticos lo que sucedió en la reunión. Como los ministros presentes estaban especialmente interesados en los resultados municipales de sus respectivas provincias resulta comprensible que interpretasen el conjunto a través de esos datos particulares. Pronto se advirtió que el número de concejales monárquicos resultaba superior al de republicanos; pero sin embargo los concejales republicanos de las más importantes capitales de provincia arrojaban una clara mayoría republicana. Sólo vencieron los monárquicos en las ciudades de Soria, Pamplona, Lugo, Gerona, Cádiz, Burgos, Palma de Mallorca, Ávila y Vitoria. Las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia— tendrían ayuntamientos de mayoría republicana. Muy llamativo fue el hecho de que en Cataluña, la veterana y poderosa Lliga Regionalista —dirigida por Cambó y clave para el proyecto centrista que Cambó dirigía junto con el ministro Gabriel Maura— sufría una derrota espectacular a manos de la Esquerra Republicana de Catalunya, una formación improvisada semanas antes por Lluís Companys a la que casi nadie concedía posibilidades. Los feudos de Romanones —Guadalajara— y Cierva —Murcia— se pasaban a la República y la gran mayoría de las capitales de provincia tendrían ayuntamientos republicanos. Nadie se preocupó de esperar a los resultados definitivos; nadie parecía reconocer que si aquéllas eran unas elecciones democráticas, la victoria monárquica era evidente. Nadie. Los consejeros liberales del Rey, conde de Romanones y duque de Maura, profundamente afectados por sus derrotas particulares en sus zonas de influencia, generalizaron la sensación no ya de derrota, sino de derrotismo. Nadie comentó que ante la clara victoria monárquica en los resultados del artículo 29, cuya cifra se había publicado en la prensa y ya hemos dado, una parte sustancial del electorado monárquico se abstuvo de votar el 12 de abril; hay testimonios sobre la riada de automóviles cuyos ocupantes, sin votar, se habían marchado temprano para un descanso en la Sierra. Pabón resalta la desidia y la veleidad de otros muchos monárquicos que votaron a favor de la República, arrastrados por la propaganda infundada contra la Monarquía y contra el Rey.

Curiosamente —y significativamente— la República, instaurada el 14 de abril por sorpresa y por abandono de los monárquicos, jamás publicó oficialmente los resultados electorales del 14 de abril de 1936. Nunca se había visto, ni se vería cosa semejante. La prensa del día 14 de abril publicó los resultados que se habían contabilizado hasta entonces y que consistían en 22 150 concejales monárquicos y 5775 republicanos, «incluidos los elegidos por el artículo 29», (Artola). Pero como los concejales a elegir eran unos ochenta mil, tiene razón Artola cuando afirma que tales resultados «equivalen sólo a un tercio del total»; los otros dos tercios se evaporaron y la República nunca dio cuenta de ellos oficialmente. Pero esos resultados incompletos fueron los decisivos; los historiadores (incluso algunos tan antimonárquicos como Tuñón de Lara) los dieron por buenos y así pasaron durante muchos años a la Historia. ¿Por qué, si eran tan favorables a la Monarquía, provocaron su hundimiento? Porque esos cinco mil setecientos y pico concejales republicanos incluían las mayorías municipales de la mayor parte de las capitales de provincia, entre ellas las más importantes; y entonces los republicanos, por sí y ante sí, decidieron que el voto de las ciudades era el decisivo, porque el de los pueblos y el campo carecían por completo de valor al depender del caciquismo reinante en los distritos. Y los monárquicos, que en el fondo estaban hartos de su propia Monarquía, se tragaron el sofisma y se rindieron. Lo importante es que el 14 de abril por la mañana todo el mundo estaba convencido de que la gran victoria numérica de los monárquicos había representado en realidad la gran victoria de los republicanos. O aquélla era una elección democrática o no. Si no lo era, España estaba en la anarquía y el caos y ninguna conclusión servía para nada. Si se aceptaba, por realidad o por convención, que las elecciones eran válidas y democráticas antes de celebrarse, entonces no se podía decir que no lo eran después de la elección. En suma, las elecciones quedaron prácticamente invalidadas no ya el 14, sino desde la mañana del 13 de abril; el Rey y sus consejeros liberales habían decidido ya abandonar durante la noche precedente —la noche del día electoral— y la Monarquía cayó como cáscara muerta, según frase posterior de José Antonio Primo de Rivera, que la completaba así: sin que se levantase a defenderla ni un piquete de alabarderos.

Lo más curioso es que, meses después, los resultados definitivos aparecieron no como declaración oficial de la República, sino por la profesionalidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, que los publicaron en el Anuario estadístico de 1932; Artola ha sido el primer historiador en advertirlo. Estos resultados estadísticos, que pese a esa

profesionalidad se publicaron en circunstancias inequívocamente favorables a una manipulación de origen oficial, eran bastante ajustados, pero seguían registrando una victoria de los concejales monárquicos. Según transcripción de Artola, y sumando ya los resultados previos del artículo 29, los concejales monárquicos habían sido 40 324, los republicanos 40 168. Unos pocos cientos de diferencia, pero la democracia es un hombre, un voto. El total de concejales ascendía a 81 099 y el total de ayuntamientos a 9259[48].

En resolución, según los propios resultados electorales publicados por la República, aunque meses después y de tapadillo, la victoria en las elecciones municipales de abril de 1931 correspondió a los monárquicos. Este hecho se confirmó históricamente dos años después. Manuel Azaña, inventor de la idea de que los votos del campo no representaban nada ante las ciudades, calificó a los pueblos que habían votado concejales monárquicos el 12 de abril de 1931, por abrumadora mayoría, como *burgos podridos*, inadecuada traducción política del término inglés *rotten boroughs*, es decir, distritos electorales que habían perdido su población, pero que seguían enviando, sin base electoral, miembros al Parlamento. Y entonces decretó que se repitieran en 1933 las elecciones en los pueblos que habían votado candidaturas únicas, casi todas de signo monárquico, en 1931. Así se demostraría que al votar ahora democráticamente, esos pueblos se inclinarían por la República. Pues bien, no le salieron las cuentas a don Manuel. Por lo general los pueblos que habían votado contra la República en 1931 volvieron a hacerlo en 1933; no estaban podridos sino enteramente sanos. Con esta actitud invalidaron la tesis republicana de 1931 que privaba de valor a los votos rurales.

La conclusión está más que clara: el rey don Alfonso XIII abandonó el trono en la madrugada del 14 de abril de 1931, cuando salió por la puerta excusada del Campo del Moro en automóvil camino de Cartagena. Además hubo entonces un español clarividente —mi abuelo Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de su último gobierno— que, junto con el conde de Bugallal, acertó a explicárselo con toda claridad. La excusa principal del Rey para el abandono fue que, perdidas las elecciones, no quería de ninguna manera provocar una guerra civil con su presencia. Mi abuelo era uno de los grandes juristas de aquella época y conocía muy a fondo los problemas dinásticos. Cuando le tocó despachar con el Rey a primera hora de la tarde del 14 de abril, ya había advertido en el precedente Consejo de ministros las señales del abandono; y sabía que, sin conocerlo él ni otros ministros, pero de acuerdo con el Rey, el conde de Romanones y los hermanos Maura habían pactado con don Niceto Alcalá Zamora —por cierto, muy amigo de mi abuelo

— la entrega de la Monarquía. Cuando el Rey le recibió, mi abuelo captó perfectamente la trascendencia de aquellos momentos: «Señor estos momentos son históricos». Exhortó al Rey a no rendirse sin lucha. Parecía presentir que esa guerra civil iba a desencadenarse no por la permanencia del Rey, sino por su abandono; una guerra civil con terrible derramamiento de sangre que el Rey quería evitar por el camino equivocado; una guerra civil que costaría la vida a mi propio abuelo y a sus dos hijos, mi tío Juan, inventor del autogiro, víctima de un sospechoso accidente en Londres cuando actuaba como agente de la España nacional y mi padre, asesinado en Paracuellos del Jarama. Dijo mi abuelo al Rey que abandonar no era simplemente «suspender la prerrogativa regia» como le habían dicho los liberales, sino renunciar a un trono «que no pertenece a V. M. sino a su Dinastía». Todo fue inútil. El Rey replicó airado que «algunos no ven más allá de sus narices» y entonces don Alfonso, con toda su nobleza, despidió a mi abuelo: «Juan, no me guardes rencor». Y a las pocas horas dejó a la familia real a merced de sus enemigos en Palacio y huyó a Cartagena camino del exilio. Estaba fuera de la realidad; cuando desembarcó en Marsella preguntó si le habían reclamado ya desde España. Históricamente fue una deserción provocada por una larga depresión; interpretó al revés unas elecciones municipales que no se habían convocado para destronarle ni confirmarle; y cedió al desánimo de sus consejeros liberales, sobre todo el conde de Romanones y el duque de Maura.

Casi cincuenta años después, el 18 de enero de 1980, yo juraba como ministro de Cultura ante el Rey en el palacio de la Zarzuela. Me constaba ya, por conversaciones anteriores, que don Juan Carlos había estudiado muy bien la caída de la Monarquía anterior y había formado sobre el asunto un criterio muy justo. Terminado el breve acto de mi jura, me tomó aparte un momento. Aquella mañana volvían a España, desde Cartagena y por helicóptero, los restos de don Alfonso XIII acompañados por su hijo que no pudo reinar, el infante don Juan de Borbón. Íbamos a salir para San Lorenzo del Escorial a recibirle; para mi el momento era de altísima tensión personal e histórica. El Rey me dijo, muy convencido: «El 14 de abril fue tu abuelo quien tuvo razón, no mi abuelo. A mí, si llegase el caso, nunca me sacarán de aquí de esa forma. Solo me sacarán con los pies por delante». Al año siguiente nadie me tuvo que explicar el comportamiento del Rey ante el pronunciamiento del 23 de febrero de 1981.

LA SEGUNDA REPÚBLICA NO FUE DEMOCRÁTICA

Primera falsedad republicana: la República democrática de Tusell-Preston

Numerosos historiadores, republicanos o no, han formulado una y otra vez la gran mentira de la República democrática. Quien lo suele expresar con mayor rotundidad e insistencia es Javier Tusell, quien tuvo la suerte de no vivir durante la República; suerte como persona, no como historiador, porque quienes alcanzamos a vivir aquella época conservamos una vivencia a la que ningún testimonio ni consideración puede sustituir. Así se expresa Javier Tusell:

> «Se puede decir que la Segunda República constituye, ante todo y sobre todo, la experiencia democrática española. Nunca, ni antes ni después, tuvo España un régimen tan semejante a lo que normalmente se conceptúa como una democracia occidental[49]».

Tusell formuló esta tesis en una de sus primeras obras publicadas y luego la ha repetido con parecidas palabras e idénticos motivos en sus obras siguientes. Es un hecho de ejemplar coherencia personal, pero ajeno, según creo sinceramente, a la verdad histórica.

Por lo pronto, la Segunda República no se inició de forma democrática, como acabamos de demostrar en los epígrafes anteriores. Se originó en virtud de unas elecciones municipales que no se habían convocado para dirimir la forma de gobierno. El advenimiento de la República no se produjo por un trastorno revolucionario ni por una decisión popular, sino por una sucesión de hechos anticonstitucionales (contra la Constitución vigente de 1876), como fueron una conjura de personalidades republicanas (el Pacto de San Sebastián), dos golpes militares mal coordinados y claramente subversivos, la depresión y el desánimo incontenibles del Rey don Alfonso XIII y sus consejeros liberales, la agresión sostenida de una parte del estamento intelectual y algunos portavoces de partidos hostiles muy minoritarios y, finalmente, las elecciones municipales que, desde el punto de vista democrático, la República no ganó, sino que perdió y además no se consultaba en ellas la voluntad popular sobre el cambio de régimen. Un testigo de excepción, Miguel Maura Gamazo, que había desertado del campo monárquico en 1930 y sería ministro de la Gobernación en el primer gobierno de la República, lo expresaba con toda claridad:

> «Habrás comprendido que nos regalaron el poder. Que nosotros no hicimos sino recoger en nuestras manos cuidadosamente, amorosamente, pacíficamente, a España, a quien esos mismos hombres (los políticos monárquicos) habían dejada caer en medio del arroyo[50]».

Pero la falsedad histórica que Tusell, Paul Preston y tantos otros historiadores hacen suya, es decir, el carácter democrático de la Segunda República se demuestra no sólo por el evidente origen antidemocrático de aquel régimen, sino por su comportamiento. He repetido muchas veces que, según todos los tratadistas de ciencia política, para que un régimen sea verdaderamente democrático hacen falta dos condiciones necesarias y suficientes. Primera, que los cargos públicos, instituciones, poder ejecutivo, cámaras representativas y situaciones de gobierno, se renueven periódicamente por medio de elecciones libres, auténticamente libres. Pero antes de esa exigencia electoral es preciso, como advirtieron los renovadores modernos de la ciencia política desde el siglo XVII, que el pueblo que va a ser gobernado por un sistema democrático demuestre previamente una inequívoca voluntad de convivencia, es decir, renuncia a los métodos violentos para tomar el poder, sometimiento a un sistema de leyes que se aprueben legítimamente y, por supuesto, acatamiento a la división de poderes que es una condición estructural indispensable de esa democracia. Si falla cualquiera de esas dos condiciones —la convivencia y las elecciones libres—, el régimen no es democrático. Esto nadie lo niega; no caben excepciones en su aceptación. Por eso el actual régimen democrático en España incluye una trágica excepción: el País Vasco, que no vive en democracia auténtica porque no cumple más que de muy lejos esas dos condiciones.

Pues bien, la Segunda República no cumplió ninguna de esas dos condiciones esenciales para la democracia. Celebró tres elecciones generales; las de junio de 1931, noviembre de 1933 y febrero de 1936. Las elecciones de junio de 1931, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes, se celebraron bajo el estupor y la coacción provocadas por el advenimiento antidemocrático de la República tras las elecciones trucadas del 12 de abril; en condiciones que por tanto no fueron democráticas. Una parte mínima de la derecha no respetó el resultado electoral y se sublevó contra la República mediante el golpe militar del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. La segunda consulta electoral se celebró en noviembre de 1933 y arrojó una clamorosa victoria del centro-derecha. Nadie pudo formular protesta alguna contra esta inequívoca victoria, pero las izquierdas (republicanos fuera del Partido Radical, que era el más numeroso, socialistas, comunistas y catalanistas de izquierda) no aceptaron el clarísimo resultado electoral y, una vez repuestas del batacazo, organizaron un alzamiento armado general contra el gobierno de centro-derecha, la Revolución de Octubre de 1934, que explicaremos con más detalle. Desde entonces la convivencia democrática, así torpedeada por las

izquierdas, se hizo ya imposible y, en diciembre de 1935, el presidente de la República, antidemocráticamente, privó del poder a la alianza de centro-derecha, socavada, bien es verdad, por escándalos que hoy, tras la experiencia de la larga noche socialista, nos parecen ridículos y dio paso al período suicida regido por el Frente Popular. Las terceras elecciones generales de la República se celebraron el 16 de febrero de 1936, tras una campaña en que líderes significados de la derecha y la izquierda proclamaron que, de perderlas, no aceptarían el resultado electoral; la convivencia había terminado y la campaña no fue de elecciones, sino de guerra civil. Las elecciones quedaron viciadas de origen y ejercicio. El jefe del gobierno centrista, don Manuel Portela, abandonó el poder —otra vez salió a relucir el arroyo, ahora en boca de Manuel Azaña— y el Frente Popular ocupó el gobierno antes de celebrarse la segunda vuelta de las elecciones, cuyos resultados se obtuvieron y consumaron tras una sucesión de pucherazos. Los partidos vencedores no necesitaron preparar expresamente una revolución: la desencadenaron desde el poder. Ante la arbitrariedad y el desgobierno del Frente Popular, un grupo de generales, entre los que no había fascista alguno, creyeron que la República había perdido toda su legitimidad, si le quedaba alguna, y decidieron sublevarse contra ella, seguidos por lo que llamó el jefe de la derecha en las Cortes, José María Gil Robles, «media España que no se resigna a morir». La falsa democracia republicana condujo inexorablemente a España al caos de la guerra civil. No cabe mayor fracaso democrático.

Segunda falsedad republicana: los nostálgicos de Manuel Azaña, el profesor Juan Marichal y el ministro socialista Jorge Semprún

Don Manuel Azaña, antiguo militante del partido posibilista y reformista de don Melquíades Álvarez, jurista notable y hombre muy culto, había fracasado en los procesos electorales de la Monarquía, se había opuesto (sin alborotos) a la Dictadura y se había incorporado a la causa republicana clandestinamente durante el régimen militar. Conocido por sus intensas actividades en el Ateneo de Madrid, intervino en el Pacto de San Sebastián y en el Comité Revolucionario que salió de él. Ministro de la Guerra en el gobierno provisional de la República fue, desde las primeras semanas, la revelación y luego se le consideró como la encamación de la República; tuvo la última palabra en problemas parlamentarios y políticos tan importantes como la quema de conventos el 11 de mayo de 1931 (cuando aconsejó y obtuvo la tolerancia del gobierno frente a las masas desmandadas e incendiarias), en la cuestión religiosa y en el problema de la autonomía de

Cataluña. Educado y luego casado en el seno de la Iglesia católica, la había abandonado en la práctica desde sus estudios universitarios y, poseído de espíritu jacobino, ingresó en el Gran Oriente de España en 1932, a través de una ceremonia de la que él mismo habló con hastío y menosprecio. Por sus reformas y su actitud netamente antimilitarista y anticlerical fue considerado por las derechas como el enemigo máximo de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Para los republicanos y los nostálgicos de la República permanece hoy como un ídolo. Era un gran orador parlamentario, pero un político de convicción autoritaria y muy inclinado a la prepotencia y la arbitrariedad. Su actuación en 1933, el año de Hitler, fue claramente antidemocrática; se negó a reconocer que la marea de opinión pública, manifestada en dos procesos de elecciones institucionales celebrados ese año con resultados muy adversos para él (elecciones de los «burgos podridos» y para cubrir puestos en el Tribunal de Garantías Constitucionales), pese a lo cual se obstinó en aferrarse al poder del que fue echado por el presidente de la República. Esa marea contraria a la República de Azaña se manifestaba, por un lado, en las gravísimas manifestaciones de violencia anarquista contra la República y, por otro, en la aplastante victoria de centro-derecha en noviembre de 1933, que Azaña, en su fuero interno, no aceptó jamás. Con ello demostró que sus convicciones no eran democráticas.

Los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, una vez asentados en el trono, quisieron, lúcidamente, esbozar una reconciliación con la figura de Manuel Azaña y para ello visitaron a su viuda, doña Dolores Rivas Cherif, durante su primera visita a México. Pero los nostálgicos de Azaña han ido mucho más allá de la reconciliación; han manipulado la figura histórica de su ídolo, de quien suelen elogiar desmedidamente lo vituperable y en cambio suelen callar lo elogiable; ensalzan las actitudes autoritarias y antidemocráticas cuando se cerraba a la evidencia de su declive político, reprueban los momentos de suprema elevación que, por encima de las dos Españas en pugna mortal, cuajó Azaña en las etapas finales de la guerra, en sus reflexiones de *La Velada en Benicarló* y en sus certeros y terribles artículos de autocrítica republicana enviados desde su exilio de Francia a la prensa argentina. Critican e incluso no aceptan su reconciliación final con la religión católica, de la que nunca había abjurado, y que conocemos en detalle gracias al testimonio del obispo que le ayudó espiritualmente en los instantes más negros y deprimidos de toda la vida del gran personaje.

Pero vayamos ya a las mentiras persistentes sobre Azaña, que seguramente se relacionan con la profesión masónica de don Manuel en 1932;

la Masonería nunca suelta fácilmente sus presas. El profesor Juan Marichal publicó en México, durante la segunda mitad de los años sesenta, cuatro valiosos tomos de las Obras Completas de Azaña en la Editorial Oasis. Faltaban los cuadernos de Memorias raptadas, en acto de guerra, por un funcionario del consulado de España en Ginebra donde guardaba los manuscritos el cuñado de Azaña, Cipriano Rivas Cherif. Los cuadernos estaban en la biblioteca del general Franco, donde al advertir su presencia la duquesa de Franco, hija del Caudillo, los entregó a la ministra de Educación y Cultura no mucho antes de escribirse estas líneas. La valiosa labor de Marichal, azañista impenitente, en la compilación y presentación de las Obras Completas, se desdora con el partidismo manifiesto que derrama en sus comentarios. He aquí una prueba hiriente:

> «La personalidad histórica de Azaña, en su condición de reformador moral y por vocación de político creador, representa así —ha de afirmarse con legítimo orgullo hispánico— uno de los más nobles y más heroicos ejemplos de tradición liberal de Occidente[51]».

Manuel Azaña era, sí, de ideas liberales, por eso formó parte del partido reformista de Melquíades Álvarez, denominado en otra etapa liberal-demócrata. Pero durante su actuación política en la República, esas ideas liberales no se tradujeron en comportamientos y hechos liberales. Por definición, un liberal es una persona que adora y fomenta la libertad. Azaña respetaba la libertad de los suyos, pero no la de todos los españoles. Como ministro de la Guerra, parlamentario puntero y jefe del gobierno en el bienio que lleva su nombre, 1931-1933, Azaña anuló varias libertades fundamentales de los españoles, como sucedió de hecho con la libertad religiosa, al actuar como un perseguidor de la Iglesia, negar por decreto la existencia en España de una orden española tan importante como la Compañía de Jesús, por pretextos especiosos e intolerables; prohibir la enseñanza a todas las órdenes y congregaciones religiosas por su ley de 1933, al dictado de la secularización masónica; por lo que se violaban las libertades y derechos fundamentales de enseñanza y asociación. Atentó también contra la libertad de expresión mediante censura, estados de alarma y suspensiones continuas de periódicos que no le agradaban. Promovió una Constitución para media España, imponiéndosela a la otra media con cuyas creencias más íntimas chocaba. Su política frente a dos instituciones sociales tan importantes como la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas se planeó y ejecutó de forma injusta, agresiva y provocativa. Esos comportamientos no son los de un liberal, sino los de un jacobino y éste es el nombre que recibió Azaña muchas veces durante sus mandatos. La cualidad principal de un liberal es la tolerancia, pero Azaña era

intolerante e intransigente; despreciaba a sus adversarios además de impedirles el ejercicio de sus libertades. Azaña no fue un reformador moral, ni siquiera un reformador: ¿qué sectores de la vida española reformó? No hizo la reforma agraria, como demuestran los testimonios de un ingeniero eminente que colaboró en el Instituto correspondiente, don Pascual Carrión; no hizo la reforma bancaria y dejó al Banco de España en manos de accionistas privados; su actitud y sus medidas agresivas contra la Iglesia y el Ejército no pueden calificarse de reformas, sino de ataques traumáticos. ¿Qué reforma emprendió Azaña, qué reforma moral? Nadie lo ha explicado nunca. La reforma autonómica de 1932 desembocó fatalmente en la rebelión separatista de 1934 en Barcelona. ¿Dónde está la tradición liberal de Occidente en el bienio 1931-1933 y en el período del Frente Popular de 1936, presididos por Azaña? ¿Dónde el carácter liberal de la zona republicana en guerra civil, bajo la presidencia de Azaña, durante la cual no se celebraron elecciones, ni Cortes, ni se respetó la propiedad, ni la industria, ni la Banca, ni la Iglesia?

La mentira de don Jorge Semprún Maura sobre Azaña resulta, ante la perspectiva histórica, igualmente detonante. Se formuló así: «La identificación de España y la democracia, la inteligencia y la razón como medios inexcusables de la política y la voluntad de gobernar en un país de hombres civilizados fueron ambiciones y esperanzas de Manuel Azaña[52]».

Don Jorge Semprún Maura, que escribió estas palabras como ministro socialista de Cultura, es nieto del prócer liberal-conservador don Antonio Maura, fue durante años miembro del Partido Comunista y con el seudónimo de «Federico Sánchez» actuó en la oposición contra el régimen del general Franco. Su padre, distinguido liberal, ocupó cargos importantes durante la Segunda República. La vinculación comunista del señor Semprún Maura no le convierte precisamente en una autoridad en materia de liberalismo; es famosa su elegía a la muerte de Stalin, que probablemente no pasará a la Historia como un liberal. Fue expulsado de la dirección y del Partido Comunista por Santiago Carrillo, que sentía ante él un explicable complejo de inferioridad, y en ese doloroso proceso la Pasionaria calificó a Semprún como «cabeza de chorlito», no cabe mayor injusticia. Semprún se tomó cumplida venganza en un libro de profundo eco, la *Autobiografía de Federico Sánchez*, que fue Premio Planeta y reveló tremendos secretos de la vida interna del comunismo en España y en el exilio. No se trata, sin embargo, de un alegato liberal.

Las características, que Semprún llama «ambiciones y esperanzas», es decir, el programa y horizonte político de Manuel Azaña, serían, primera, «la identificación de España y la democracia»; segunda, «la inteligencia y la razón como medios inexcusables de la política», y tercera, «la voluntad de gobernar en un país de hombres civilizados». Azaña no cumplió, ni siquiera intentó cumplir, uno solo de tan altos fines.

La identificación de España y la democracia ha sido ya detalladamente descartada en los epígrafes anteriores: La República no se implantó democráticamente, ni cumplió las dos condiciones fundamentales para ser considerada democrática: la convivencia (que no existió a lo largo de un plano inclinado hacia la guerra civil) y las elecciones libres que o no lo fueron (1931 y 1936) o no fueron acatadas por los perdedores (1931, 1933 y 1936).

La inteligencia y la razón no fueron los medios inexcusables de la política seguida por Azaña. Que Azaña fuera inteligente no lo discute nadie; poseía una inteligencia filosófica, que vertía en sus cuadernos de notas nocturnas, pero no en el ejercicio del gobierno ni de la política. No gobernó con la razón, sino con la sinrazón; porque si bien una vez lo dijo, no gobernó para todos los españoles, sino sólo para media España en contra de la otra media.

Y tampoco cumplió la tercera ambición: gobernar para un país de hombres civilizados. Por desgracia los españoles de 1931-1936 no demostraron ser políticamente civilizados. Los españoles habían vivido bajo regímenes liberales, pero nunca bajo regímenes auténticamente democráticos. La Segunda República parecía una excelente ocasión para ello, pero no cuajó. Se han propuesto varias explicaciones: la más aceptable es que un régimen democrático necesita, para arraigar y desarrollarse, una sociedad de clases medias, que en la España de los años treinta formaban un conjunto muy tenue entre un proletariado militante volcado en la lucha de clases y una clase alta con escaso sentido social. En la España de 1976, cuando se iniciaron los procesos políticos de reforma y elecciones, el sistema de clases medias era mucho más amplio y capaz de sustentar un régimen político democrático, si bien el tiempo y la experiencia posterior ha demostrado que los traumas de la República y la guerra civil están todavía lejos de considerarse cerrados, sobre todo cuando por parte de las izquierdas, vencidas en la guerra civil, se suscitan cada vez con mayor frecuencia apelaciones a resucitar la problemática y aun el clima de la guerra civil, al menos en la arena política.

Tercera falsedad republicana: las revoluciones de don Niceto, compensadas por su certero dictamen sobre la Constitución de 1931

La tercera falsedad republicana se debe, muy a su pesar, al que fue primer presidente de la Segunda República, don Niceto Alcalá Zamora. Era el 14 de julio de 1931, aniversario de la fecha de 1789 escogida por la Revolución Francesa para conmemorar el desabrido y desangelado asalto a la Bastilla, que por su contenido real no servía ni para símbolo de la opresión cancelada por el pueblo soberano. Erguido en su momento de gloria don Niceto creía ventear la Revolución en el insospechado ambiente y dijo:

> «La revolución triunfante es la última de nuestras revoluciones políticas, que cierra el ciclo de las otras, y la primera, que quisiéramos fuera la única, de las revoluciones sociales[53]».

Ni don Niceto tenía nada de revolucionario —era un buen liberal católico, insigne jurista, florido orador y dos veces exministro de la Corona— ni aquella República que él había prometido en Valencia como compatible con San Vicente Ferrer, el Senado vitalicio y los obispos fue tampoco una revolución, en ninguno de los dos sentidos insinuados por el Presidente. No fue una revolución política más que en el cambio de régimen, sin tocar las estructuras del Estado; mantuvo en sus puestos al Nuncio, al subsecretario de la Guerra y al director general de la Guardia Civil, nada menos. Revolución social todavía menos; no acometió ni la reforma agraria de verdad, ni la reforma bancaria, ni la transformación profunda de la sociedad española. Sólo cuando se hundió la República ante el desgobierno revolucionario del Frente Popular se desencadenó en la zona republicana una revolución auténtica, equivalente al suicidio de la República y clave de su derrota final. No era esto lo que con tanta ilusión y carga de utopía había prometido don Niceto Alcalá Zamora el 14 de julio de 1931.

Pero en esa fecha el Presidente de la República aludió también al origen y al carácter democrático de su República. Debemos darle ahora de nuevo la palabra para que nos explique su desengaño, que coincide plenamente con las tesis del presente libro.

Don Niceto Alcalá Zamora, depuesto anticonstitucionalmente por las Cortes del Frente Popular en 1936, escribió un libro demoledor contra la realidad de la República desde sus mismos comienzos. El libro, cuyo título es *Los defectos de la Constitución de 1931*, fue utilizado por el propio Fiscal General de la República en su Memoria de 1935. El alegato del Fiscal fue reproducido, con citas a pie de página, por un documento fundamental, el *Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936* y de forma más extensa y pormenorizada en el *Apéndice I* de ese dictamen[54].

Éstas son las palabras exactas de don Niceto Alcalá Zamora, tomadas del citado Apéndice I en su p. 11:

«Este libro ha sido pensado y escrito antes del 34; y por tanto antes del 7 de abril de 1936 (p. 10). (*Don Niceto se refiere a la fecha de su destitución*). Ya en la sesión del 11 de octubre de 1931, cuando presentí mi derrota acerca del artículo hoy 26 de la Constitución, anuncié, condicionada, pero resueltamente, la bandera de reforma, que hiciera posible la convivencia pacífica y justiciera de todos los españoles… (p. 6). Al lado de tan inapreciables cualidades y para hacer peligroso en ocasiones su ejercicio, las Cortes Constituyentes adolecían de un grave defecto, el mayor sin duda para una Asamblea representativa: que no lo eran, como cabal ni aproximada coincidencia de lo estable, verdadera y permanente opinión española (p. 14). Desde mí a la extrema derecha se necesitaban, para que hubiese una representación fiel de España, cerca de 200 diputados y había unos 70. Desde el Partido Radical inclusive, a la derecha, debieron componer dos tercios de la Cámara, y sólo formaban, cuando coincidían, una minoría inevitablemente vencida» (p. 15).

»Las Cortes que no sabían su debilidad representativa, quizá en lo subconsciente la presintieron. Aquello era malo y esto fue peor, ya que un instinto oscuro, turbio, las llevó a aprovecharse de un predominio pasajero y ficticio, para extremar la victoria de impulsos y tendencias que corrían el riesgo de tardar mucho en hallar otra ocasión parecida» (p. 16).

»Es un poco difícil señalar a primera vista y por datos directos, cuáles fueron los criterios que determinaron el carácter de la Constitución. Dejada la Cámara a su albedrío, así como la Comisión a sus anchas, no fue siquiera y siempre el parecer de la mayoría de ésta el que con meditación se impuso. Predominó con frecuencia, ante la discusión y frente a las enmiendas, la voluntad impresionada y variable de los que, sentados en el banco de la Comisión, formaban una mayoría accidental, que era minoría absoluta respecto de la total composición de aquélla. Así el azar, que no el capricho, determinó la fortuna de varios preceptos y la frustración de otras iniciativas (p. 41).

»*De espaldas a la realidad nacional*. Quizá este epígrafe no sea exacto del todo y peque de inexacto por benévolo. La Constitución se dictó, efectivamente, o se planeó sin mirar a esa realidad nacional que era la que imponía, y logra que prevalezca siempre la norma refleja de su honda, esencial e íntima estructura. Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España» (p. 46).

»Pero no fue sólo por imitación de textos o influencias doctrinales del extranjero. Entró por mucho, decisivamente, el espíritu sectario que quiso lograr y consolidar soluciones tendenciosas, imponiendo una fuerza parlamentaria pasajera, y no representativa de la total y real voluntad española (p. 40). ¡Y sin embargo se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil, desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable, sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes!», (p. 50).

La condena de don Niceto Alcalá Zamora a la Constitución de 1931, a la que llama sectaria e impulsora de la guerra civil, es exacta y sobrecogedora. En virtud de esa Constitución él aceptó, sin embargo, la Presidencia de la República antes de acabar el año 1931. En virtud de esa Constitución él fue destituido alevosamente en 1936. Don Niceto afirma, con razón sobrante, que la Constitución de 1931 hacía imposible la convivencia en España. Luego, en razonamiento del propio presidente de la República, esa República no era democrática, no podía serlo con esa Constitución. Casi no haría falta acumular más pruebas.

Capítulo III: La prueba suprema contra la República Democrática: La Revolución Socialista de Octubre de 1934. (Los documentos fundamentales)

DOCUMENTO 1 DE LA REVOLUCIÓN: LAS NOTAS REPUBLICANAS Y SUBVERSIVAS DEL 5 DE OCTUBRE

Sin embargo, la prueba suprema para demostrar el carácter antidemocrático de la Segunda República consistió en que de forma oficial y pública todos los partidos que habían promovido la implantación de la República, todos los que habían integrado la mayoría republicano-socialista dominante en el primer bienio 1931-1933 y que en calidad de tales habían elaborado e impuesto la Constitución de diciembre de ese año, todos ellos sin excepción, se negaron —¡casi un año después!— a reconocer la validez de las elecciones generales celebradas en noviembre de 1933 con victoria del centro derecha y manifestaron, por cierto, ese rechazo, insisto, casi un año entero después; entre el 4, 5 y 6 de octubre de 1934, por un motivo clarísimamente antidemocrático: cuando el jefe del partido más votado en esas elecciones, la CEDA, el partido católico de José María Gil Robles, que con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, formaba la mayoría absoluta del Congreso, respetada hasta aquel momento aparentemente por los citados partidos republicano-socialistas, decidió, en pleno uso de sus derechos constitucionales, reclamar al presidente de la República la inclusión de tres ministros de la CEDA en el gobierno sustentado por esa mayoría absoluta. Gil Robles pudo proponer como ministros a los diputados o personalidades que hubiera preferido, pero para evitar protestas decidió escoger como ministros a tres diputados de la CEDA de intachable conducta personal y política y que además se habían declarado públicamente afectos o al menos no hostiles a la República, a la que habían acatado sin reservas. La propuesta la hizo formalmente el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, de acrisolado republicanismo. El 4 de octubre de 1934 se conoció pública y oficialmente la aceptación del presidente de la República, que era obligada; de no obtenerla, Gil Robles hubiera roto la mayoría y forzado la caída del gobierno. Pero el

nombramiento de esos tres ministros, que gozaban de todos los derechos constitucionales y políticos, no fue aceptado por los partidos de la que fue mayoría, pero ahora era minoría republicano-socialista de la Cámara. Esta negativa era una flagrante violación contra la Constitución y contra la democracia.

La formación del nuevo gobierno de la mayoría absoluta, presidido por Alejandro Lerroux y que junto a otros grupos republicanos, incluía por vez primera a tres ministros de la CEDA, fue gestionada intensamente por José María Gil Robles (que no quiso formar parte de ese gobierno, aunque poseía pleno derecho para ello, incluso para presidirle) y una vez aprobada por el presidente de la República, Alcalá Zamora, fue comunicada a la prensa por don Alejandro Lerroux al anochecer del día 4 de octubre. La noticia se iba difundiendo por toda España como reguero de pólvora y se confirmó sin lugar a dudas en los periódicos del día siguiente, 5 de octubre: Las notas de los partidos republicanos eran sospechosamente semejantes en las frases fundamentales, lo que revelaba sin la menor duda un concierto previo entre ellos. La nota de Izquierda Republicana, el partido dirigido por Manuel Azaña, decía así:

> «Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición: rompe toda solidaridad con las actuales instituciones del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República[55]».

Por su parte, Unión Republicana, el partido dirigido por Diego Martínez Barrio que se había escindido del Partido Radical de Lerroux por el acercamiento de éste a la derecha católica, proclamó un manifiesto con la principal expresión idéntica:

> «El Partido de Unión Republicana se cree en el deber de declarar ante la opinión nacional que al constituirse el Gobierno que acaba de formarse, integrado, entre otros, por un grupo político cuyo pretendido republicanismo no ha recibido la sanción del voto popular, le obliga a apartarse de toda colaboración y romper toda solidaridad con los órganos del régimen.»

Ruptura antidemocrática mostraban con expresiones virtualmente idénticas, los demás partidos republicanos: El Partido Nacional Republicano, que presidía don Felipe Sánchez Román, «rompía también toda solidaridad con las instituciones y elementos que hoy entregan la República a sus enemigos». Izquierda Radical Socialista se expresaba en términos parecidos, como el Partido Republicano Conservador, al que pertenecían Miguel Maura y el propio presidente de la República que había designado a los ministros de la CEDA, dice prácticamente lo mismo[56]. Por su parte, José María Gil Robles, con toda razón, identifica estas notas con el desencadenamiento del

movimiento subversivo general al día siguiente, y en el prólogo que escribió para el libro de Jaume Miravitlles sobre el 6 de octubre, Luis Companys reconoce que estas notas le empujaron a desencadenar la revolución de esa jornada en Barcelona[57].

DOCUMENTO 2 DE LA REVOLUCIÓN: EL DICTAMEN DE MADARIAGA

No pretendemos incluir en este epígrafe la historia completa de la Revolución de Octubre ni siquiera de sus antecedentes. Me voy a limitar a un objetivo más reducido, pero tal vez más importante; en medio de una reseña casi telegráfica de los hechos desnudos, ajenos a toda polémica, voy a reproducir los documentos fundamentales que pueden hoy mostramos el verdadero carácter de la Revolución de Octubre de 1934, para contrarrestar el impudor histórico con que otros se refieren a los sucesos de la guerra civil como si antes del 18 de julio de 1936 no hubiese ocurrido nada más que la vida tranquila y concorde de una República impecablemente democrática.

Y no es así. Por la culpa exclusiva de las izquierdas, arrastradas por el PSOE, la Revolución de Octubre de 1934 fue una convulsión antidemocrática sin justificación alguna, como ya hemos empezado a probar en el importante documento anterior y seguiremos probando en los demás de esta serie. Ahora toca el tumo a don Salvador de Madariaga, príncipe de los liberales españoles de nuestro tiempo, testigo inmediato de los hechos porque había ejercido por algún tiempo el Ministerio de Instrucción Pública de la República dentro de la conjunción de centro-derecha en el año 1933. El dictamen que citamos ampliamente, con todo su contexto, a continuación nos parece definitivo[58]:

> «Los mineros y demás obreros asturianos trataron de organizar una especie de comunismo más o menos libertario. Hubo muchas pérdidas materiales y personales por ambas partes, pues los desórdenes degeneraron en guerra civil. Las tropas gubernamentales, al mando del general López Ochoa, de añejo abolengo republicano, tuvieron que abrirse paso por la fuerza desde Avilés para socorrer a la guarnición de Oviedo, estrechamente sitiada por los indomables mineros. La hermosa ciudad quedó casi destruida por la ferocidad de los combates que en su seno se libraron. Los mineros habían hecho de la Universidad su almacén de dinamita, y cuando se vieron perdidos pusieron mecha al monstruoso polvorín, que destruyó el noble edificio con no pocos de los circundantes. En medio del patio central, único superviviente de aquel caos de ruinas, el Inquisidor General Valdés, fundador de la Universidad, seguía incólume en su cuerpo de bronce sobre su silla de bronce. El contraste provocó en Unamuno una de aquellas frases en que vertía su amargura inconsolable: “Allí estaba Valdés, advirtiéndonos con el dedo: Ya os lo dije yo”.
>
> »No creo que sea útil ni necesario referirme a las llamadas atrocidades. Las hubo por ambas partes. Ambas, parece, los rebeldes y el Gobierno, inundaron a España y a los demás países con folletos y fotografías para demostrar que la otra parte lo había hecho peor…

»La rebelión de Barcelona fue una cosa más compleja y oscura, como suelen ser los sucesos políticos de Cataluña. Es probable que el doctor Dencás intentase dejar atrás al señor Companys en punto a demagogia; y que el señor Companys, dándose cuenta de que su historia como catalanista no era de lo más convincente, se decidió a no dejarse oscurecer por su Consejero de Gobernación. En una proclama elocuente que lanzó a la multitud desde el balcón de la Generalitat, afirmó de nuevo la lealtad de Cataluña a la República española, pero se declaró abiertamente en rebeldía contra la Constitución vigente, cuyo guardián era, con palabras que conviene citar textualmente: "En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española y al restablecer y fortalecer las relaciones con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno Provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica[59]".

»Palabras tan generosas como imprudentes, sobre todo si se tiene en cuenta que al invitar a los dirigentes de la protesta contra el fascismo a establecer el Gobierno Provisional de la República en Cataluña, Companys comprometía gravemente a Azaña, que se encontraba a la sazón en Barcelona y estaba en completo desacuerdo con la actitud violenta que habían tomado para con la República sus amigos socialistas y catalanistas.

»Mandaba la guarnición de Barcelona y todas las tropas de Cataluña el general Batet, catalán, que al declarar la ley marcial el día anterior había expresado la esperanza "como catalán, como español y como hombre" de que no sería necesario hacer uso de las armas. Pero el gobierno catalán, que se había hecho fuerte en el edificio de la Generalitat, se negó a todos los requerimientos que se le hicieron para que se rindiera y, durante la noche del 6 al 7 de octubre, el general Batet tuvo que dar la orden de atacar el Palacio. Al alba todo había terminado y el gobierno de la Generalitat estaba en la cárcel, con excepción del doctor Dencás, que había huido por la alcantarilla.

»El alzamiento de 1934 fue imperdonable. La decisión presidencial de llamar al Poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas del señor Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración alguna para lo que se proponía o no el señor Gil Robles y por otra, a la vista está que el señor Companys y la Generalitat entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 contra sus enemigos, más o menos ilusorios, de la derecha, a aquellos mismos que para defenderla la destruían? Pero el argumento era además falso, porque si el señor Gil Robles hubiera tenido la intención de destruir la Constitución del 31 por la violencia, ¿qué ocasión mejor que la que le proporcionaron sus adversarios alzándose contra la misma Constitución en octubre de 1934, precisamente cuando él, desde el Poder, pudo como reacción haberse declarado en dictadura? El señor Gil Robles, lejos de haber demostrado en los hechos apego al fascismo y despego al parlamentarismo, salió de esta crisis convicto y confeso parlamentario a punto de que cesó de ser, si alguna vez lo había sido, persona grata para los fascistas.

»En cuanto a los mineros asturianos, su actitud se debió por entero a consideraciones teóricas y doctrinarias que tanto se preocupaban de la Constitución como de las coplas de Calainos. Si los campesinos andaluces, que padecen hambre y sed, se hubieran alzado contra la República, no nos hubiera quedado más remedio que comprender y compadecer. Pero los mineros asturianos eran obreros bien pagados de una industria que por frecuente colusión entre patronos y obreros venía obligando al Estado a sostenerla a un nivel artificial y antieconómico que una España bien organizada habrá de revisar.

»Finalmente tampoco se justifica la actitud de los catalanes. A buen seguro que la política de Madrid careció de sutileza y hasta de sentido común. Nunca debió haber permitido el señor Samper que los terratenientes catalanes y la Lliga pusieran al Gobierno de la República y al Tribunal de Garantías Constitucionales en situación de tener que arbitrar e intervenir en un pleito interior catalán. Pero la Generalitat no debió ni aun así haber violado la Constitución, tan sólo porque el Tribunal de Garantías había fallado de acuerdo con las opiniones o incidentalmente con los intereses de una

oposición estrictamente catalana. Es evidente que los jefes de la Generalitat pecaron contra la luz, pues Azaña puso especial cuidado en explicarles esta situación con la mayor lucidez. Por otra parte, como los hechos iban a demostrar, la CEDA no tenía intención alguna contra el Estatuto catalán. El incidente viene, pues a confirmar lo que en estas páginas se viene sosteniendo: que los catalanes son típicamente españoles y presentan en forma no menos acusada que los demás españoles los defectos que nos afligen como entes políticos. Así por ejemplo, la derecha catalana, émula como todos los partidos españoles del conde don Julián, se apresura a buscar apoyo fuera de Cataluña para vencer a la izquierda catalana. Y la izquierda catalana, al ver que el sistema funcionaba contra ella, rompió el sistema. Ambos rasgos caracterizan toda la vida española.

»Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió toda sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936.»

DOCUMENTO (múltiple) N.º 3 DE LA REVOLUCIÓN: LOS SOCIALISTAS ROMPEN SU CONJUNCIÓN CON LOS REPUBLICANOS

El año 1933, último del primer bienio republicano, fue un año trágico para Manuel Azaña y para la coalición gobernante de republicanos y socialistas españoles. Los motivos de la tragedia eran simultáneamente exteriores e interiores. En el horizonte europeo se registraba en Alemania el triunfo político de Adolfo Hitler que accedía al primer puesto del gobierno, la cancillería del Reich, alzado por una marea de votos nacional-socialistas y en alianza con el antiguo Zentrum católico, dirigido ahora por Franz von Papen. Hitler se dispuso inmediatamente a cumplir el programa que había diseñado muchos años antes en su famoso libro *Mein Kampf* que ahora se difundía por España en cuidada traducción y lograba suscitar mucho interés, aunque muy pocas adhesiones; jamás hubo en España algo parecido a un partido nazi. Además de sentar las bases para la economía de guerra con vistas a respaldar su expansión en Centroeuropa que había propuesto en ese libro, Hitler convirtió inmediatamente en dictadura personal y fanática el puesto de canciller al que había accedido por vías más o menos democráticas, algo que necesitaba para someter a los católicos alemanes (muchos de los cuales estaban sinceramente con él) y para aniquilar a las minorías que siempre había considerado enemigas: socialistas, comunistas y, sobre todo, judíos, en los que veía la misma raíz del mal absoluto. La persecución contra los judíos se desencadenó, al principio, de manera sorda e intimidatoria, el proyecto para la eliminación de socialistas y comunistas como fuerza política se realizó inmediatamente. Las dos Internacionales, la Segunda y la Tercera, se consideraban como los más rechazables enemigos políticos del Tercer Reich y tan alarmantes noticias provocaron en los demás socialistas europeos, con expresa mención de los españoles, un miedo creciente que pronto se convirtió en pánico. El Partido Socialdemócrata alemán SPD ostentaba la primacía

entre todos los europeos y su calvario alemán se reprodujo en febrero del año siguiente, 1934, en Austria. Casi a la vez chocaban en París, sangrientamente, la extrema derecha y la extrema izquierda, lo que sobreexcitó el pavor de los socialistas españoles y les indujo a pensar, con grave distorsión, que la derecha católica española, representada por la CEDA de José María Gil Robles, era una derecha profascista o cuasifascista, como las de Alemania y Austria.

El horizonte interior no se presentaba, para los republicanos y socialistas españoles, menos negro. Habían pensado que su victoria inicial en 1931 les aseguraba el monopolio de la República, pero desde el otoño de 1932 asistían, sin quererlo aceptar, a una vigorosa resurrección de las derechas españolas, bajo la bandera católica movida por una explicable reacción de la Iglesia y los católicos españoles contra la persecución de los gobiernos republicano-socialistas dirigidos por Manuel Azaña y animados por el objetivo masónico de secularización total y jacobina. Como la República de 1931 se había creado no sólo ilegal y antidemocráticamente, sino ajena al sentir general de los españoles (sólo representaba, a lo sumo, a una parte), el choque con la realidad se manifestó a lo largo de 1933 en un recrudecimiento de la ofensiva de los anarcosindicalistas y en una serie de victorias de la nueva derecha en pruebas electorales catastróficas para Azaña y para la unidad de la Conjunción republicano-socialista: entre ellas las elecciones de los «burgos podridos», donde la derecha volvió a ganar y la elección de las vocalías del Tribunal de Garantías, con nueva derrota de las izquierdas que Azaña, cada vez más obstinado, se negaba a aceptar. Pero ante la gravedad de los hechos y la alienación de Azaña, el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, se vio obligado a forzar la dimisión de Azaña que tuvo lugar el 8 de septiembre de 1933. Le sustituyó al frente del gobierno don Alejandro Lerroux, como aliado parlamentario de la CEDA. El bienio Azaña había terminado abruptamente y se abría el bienio de centro-derecha.

En este vaivén saltó por los aires la Conjunción republicano-socialista a través de dos declaraciones revolucionarias y antidemocráticas de dos grandes líderes del PSOE; Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. En ese año 1933, las Juventudes Socialistas, dirigidas por un joven inteligente, ambicioso y cada vez más inclinado al bolchevismo y por tanto al partido comunista, Santiago Carrillo, había dominado la Escuela socialista de verano, instalada en Torrelodones, donde los jóvenes del PSOE defenestraron políticamente al profesor Julián Besteiro, sucesor del fundador Pablo Iglesias al frente del PSOE y la UGT y exaltaron al veleidoso y demagogo Francisco Largo

Caballero, que colaboró con la Dictadura en el Consejo de Estado, luego colaboró con la República como ministro de Trabajo y ahora aceptaba con gusto las invocaciones de «Lenin español» que le dirigían, por inspiración soviética, los jóvenes socialistas de Torrelodones.

Cuando ya se había producido la derrota de Azaña, Largo Caballero preparó la ruptura de la Conjunción con los republicanos. Y en un mitin socialista celebrado en el cine Europa de Cuatro Caminos, el 11 de septiembre de 1933 anunció la ruptura:

> «Hemos cancelado nuestro compromiso con los republicanos. Fieles a nuestra doctrina, la clase trabajadora debe aspirar a tener en sus manos el poder, íntegramente. Hemos de luchar hasta convertir el régimen actual en una República socialista» (delirantes ovaciones)[60].

Dentro de esta misma prueba documental debemos citar ahora la proclamación oficial de la ruptura revolucionaria, pronunciada por Prieto en las Cortes el siguiente 2 de octubre de 1933:

> «Yo declaro, en nombre del grupo parlamentario socialista, absolutamente seguro de interpretar el criterio del PSOE, que la colaboración del partido socialista en gobiernos republicanos, cualesquiera que sean sus características, su matiz y sus tendencias, ha concluido definitivamente[61]».

DOCUMENTO (múltiple) N.º 4: LOS SOCIALISTAS ANUNCIAN LA REVOLUCIÓN ARMADA PARA LA TOMA DEL PODER

Ya en los documentos, que acabamos de transcribir, sobre la decisión socialista para tomar el poder al margen de los republicanos, es decir, al margen de la Constitución de 1931, quedaba claro que su proyecto consistía en apelar para ello a la violencia revolucionaria. Es sumamente curioso, y escasamente tolerable, que historiadores de izquierda y prosocialistas, afectos luego al Frente Popular en 1936 antes y después de la guerra civil, traten inútilmente de rebajar tonos y atribuir este proyecto revolucionario y violento del PSOE a excesos verbales de campaña electoral. Pero es fatuo tratar de convertir las amenazas en desahogos verbales y eufemismos. La prueba suprema es que esas amenazas se cumplieron puntualmente, tanto en la Revolución de Octubre de 1934 como en la que siguió, contra el gobierno de la República, en la llamada zona republicana una vez declarada la guerra civil. Pero los socialistas no se limitaron a romper públicamente su conjunción con los republicanos. Anunciaron además, de forma expresa, su proyecto de revolución violenta y armada. Vamos a comprobarlo en los documentos inmediatos.

Gabriel Mario de Coca era un convencido militante socialista, afecto a la línea de Julián Besteiro (único de los líderes de los años treinta que acertó a exponer con autoridad la doctrina marxista en el PSOE) que publicó en 1936, inmediatamente antes de la guerra civil, un análisis valiosísimo, titulado *Anticaballero*, en que se incluía el siguiente diagnóstico, que se comprobó con los hechos:

> «¿Cuál era la actitud del partido socialista ante la nueva situación política planteada por las Cortes vaticanistas y los Gobiernos del partido radical?
>
> »De un lado habían llegado a su concreción madura y firme los amagos bolcheviques que tuvieron su primer brote sensible en la Escuela de Verano de 1933, que se habían convertido en unánime consigna de la inmensa mayoría del proletariado socialista. Al frente de ese irresistible impulso de opinión obrera figura Francisco Largo Caballero, *resueltamente partidario de aceptar la insurrección armada para apoderarse del Poder* (s/n). La propaganda de estos métodos expeditivos causaba entusiasmo ciego en las masas, seguras de encontrar su redención por tan seguros procedimientos[62]».

El 3 de enero de 1934 se produce una dura polémica sobre la concordia en la prensa de Madrid. El diario católico *El Debate*, vinculado a la CEDA, había manifestado que la concordia era imposible en Cataluña mientras el señor Companys ocupara la presidencia de la Generalidad. *El Socialista*, el 3 de enero, extendía el problema a toda España con un titular y una amenaza famosa: *No puede haber concordia. Atención al disco rojo.* Y lo explicaba así: «Ahora piden concordia es decir, una tregua en la pelea, una aproximación de los partidos, un cese de hostilidades. Eso antes, cuando el Poder presentaba toda su ejecutoria de legitimidad. ¿Concordia? ¡No! ¡Guerra de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal! ¿Concordia? Sí, pero con los proletarios de todas las ideas que quieran salvarse y librar a España del ludibrio. Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!».

Ya había terminado la campaña electoral, el anterior noviembre. Las amenazas socialistas no eran desahogos electorales sino proyectos revolucionarios.

DOCUMENTO (múltiple) N.º 5: EL ANUNCIO OFICIAL DE LA REVOLUCIÓN

No, no se trataba de palabras. Al comenzar su capítulo, que se refiere a 1934, no a 1936, *Diseño de una guerra civil*, Pío Moa registra de nuevo la creación del Comité Nacional Revolucionario, el 3 de febrero de 1934, al que denomina justamente «comité organizador de la insurrección» bajo la presidencia de Francisco Largo Caballero, con Juan Simeón Vidarte y

Enrique de Francisco, por el PSOE; Pascual Tomás y Díaz Alonso, por la UGT; Hernández Zancajo y Santiago Carrillo, por las Juventudes Socialistas. Como adjunto a Caballero, máximo animador y coordinador de la empresa revolucionaria, figuraba Indalecio Prieto, que andando los años declararía públicamente su arrepentimiento, pero que ahora, en 1934, temió ser marginado por la marea bolchevique que anegaba al PSOE y a las Juventudes Socialistas y decidió subirse, con toda su capacidad de organización y comunicación, a la cresta de la ola[63].

Cuando el Comité Revolucionario ya había comenzado a funcionar, tanto Largo Caballero como Prieto formularon pública y oficialmente la amenaza revolucionaria socialista. Largo Caballero volvió al cine Europa para decir: «Yo declaro que hay que armarse y que la clase trabajadora no cumplirá con su deber si no se prepara para ello». Insistía en que no se debía luchar contra la burguesía con simples declaraciones. «En definitiva —terminaba— habrá que luchar en las calles[64]». Alcanzó mucho mayor resonancia, por el ímpetu del orador, el discurso pronunciado por Prieto en el cine Pardiñas de Madrid, el 4 de febrero de 1934, donde remató una serie de amenazas parlamentarias. Ahora, en un local público y abarrotado, Prieto expresaba a conciencia una provocación para intimidar al enemigo:

> «En fecha muy próxima, el partido socialista y las organizaciones sindicales han de cumplir el destino que la Historia les ha deparado. Frente a una burguesía de bárbaros estigmas, no hay más huestes que las nuestras… Si seriamente nos proponemos la conquista del Poder, el triunfo es indiscutible e innegable… Frente a estas falanges socialistas y la UGT es imposible oponer nada. La tragedia para la República es que no existen partidos republicanos. Todas las ilusiones de la masa izquierdista del país descansan en nosotros… Nuestro triunfo es inevitable. Os llamo la atención sobre cómo podemos y debemos administrar la victoria. Yo tengo del Poder una experiencia. No hay más remedio que domeñar a la burocracia española y hacerla fiel servidora de la República, sin contemplaciones. Los órganos de la Administración deberán estar intervenidos por Comisarios del Pueblo. Hay que democratizar a la fuerza pública y principalmente al Ejército, éste debe desaparecer, pero la necesidad de la defensa del país hace precisa la existencia de un elemento armado. El Ejército debe ser la síntesis expresiva del alma del pueblo. No habrá castas entre los soldados. Hay que ir a la dignificación moral de cabos y sargentos, abriéndoles de par en par las puertas para el ingreso en la oficialidad y el generalato. Hay que hacer lo que no se hizo, porque no se pudo o no se quiso, el 14 de abril. Hay que aplastar definitivamente a las fuerzas que no debieron revivir entonces, y se precisa para ello una revolución honda, sin muchos plazos de meditación. Hay que cerrar la Universidad al señoritismo y abrirla para el proletariado. Urge atender al paro obrero y eso podría hacerse con el importe de la plusvalía del oro que guarda el Banco de España, que yo descubrí siendo ministro de Hacienda. Se trata nada menos que de 3500 millones de pesetas. No creo que se puedan socializar cuantas industrias existen, pero sí creo que se puede socializar la tierra. Debe desaparecer la propiedad privada de la tierra y hay que cambiar la estructura de los cultivos. Todo esto es misión del proletariado. Hágase cargo el proletariado del Poder y haga de España lo que España merece. Para ello no debe titubear y si es preciso verter sangre, debe verterse[65]».

En sus Memorias, Largo Caballero, Santiago Carrillo y Juan Simeón Vidarte, miembros del Comité Revolucionario, coinciden en la confirmación de la actividad frenética desplegada por el Comité Nacional Revolucionario para organizar la huelga general y la insurrección armada del Partido Socialista en toda España. Creo que después de las citas concretas de Caballero y Prieto que acabamos de transcribir, no son necesarios más testimonios. La Revolución de Octubre, cuyos promotores principales fueron el PSOE en toda España y la Generalidad, perteneciente a Esquerra Republicana de Cataluña en Barcelona, fue la más anunciada en toda la historia de Europa. Por sus fines, como acabamos de ver, se trataba de destruir la legalidad republicana expresada en la Constitución y de subvertir, con métodos y hasta con instituciones bolcheviques —la reforma agraria absoluta, la eliminación, incluso física, de la burguesía, los Comisarios del pueblo—, la estructura de la sociedad y la economía española. Y debe notarse que Indalecio Prieto era, ante la opinión pública, el más moderado y equilibrado de los líderes socialistas. En su vida declaró expresamente que nunca fue masón ni marxista. Pues bien, si este «moderado» es el gran coordinador de la Revolución de Octubre, calcúlese cómo pensarían y como se disponían a actuar los exaltados. No cabe un proyecto más antidemocrático que el socialista de Octubre, que quería terminar con el orden republicano y con la propia República para instaurar un régimen bolchevique. Hasta los militares rebeldes declararon en sus proclamas del 17 de julio de 1936, bajo la firma del general Franco: «Venimos a restaurar el orden dentro de la República». Si a este propósito, que era verdad, han calificado los herederos de Octubre de 1934 como «golpe militar fascista», ¿qué calificativo reservan para la Revolución de Octubre de 1934?

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Los militares españoles que en la primavera de 1936 prepararon el Alzamiento contra el Frente Popular desmandado, lo hicieron en nombre de la que había denominado José María Gil Robes «media España que no se resigna a morir». Lo estudiaremos con más detalle en el siguiente capítulo de este libro. Sin embargo no anunciaron públicamente su proyecto de insurrección armada, como acabamos de ver que sí hicieron los socialistas. Sin embargo el Comité Revolucionario, creado el 3 de febrero de 1934, elaboró también varios documentos secretos, que han sido revelados muchos años después por fuentes comunistas y caballeristas, pero que generalmente

no han trascendido al gran público. Me parece muy importante transmitirlos aquí con indicación de su fuente.

a) *Documento secreto revolucionario número 1.— El programa revolucionario socialista (enero de 1934).* Autor y ponente del documento: Indalecio Prieto.

Fuente: la publicación oficial del PCE *Guerra y Revolución en España*[66].

1. Todas las tierras de España se declararán de la propiedad del Estado. Suprimiendo por consiguiente el pago de la renta a particulares, renta que, en todo caso, habría de percibir el Estado, los municipios o aquellas otras comunidades o corporaciones de carácter público en quienes delegará el Estado sus derechos. En aquellas zonas donde la propiedad agrícola tenga carácter minifundista, las tierras seguirán en posesión de quienes actualmente las cultiven, mediante el pago del canon que se estableciese conforme a la estructura económica que queda apuntada. En las zonas donde la propiedad agrícola tiene predominantemente carácter de latifundio, se procurará el establecimiento de explotaciones colectivas, bien a cargo del Estado, de los municipios o de las comunidades de campesinos, que al efecto se constituyan, debiendo el Estado asumir, por medio de su personal facultativo, la dirección técnica de esas explotaciones agrícolas colectivas.

2. Radicando el porvenir de la agricultura española en el aprovechamiento de todos los regadíos que permitirán vivir a costa de la tierra a un número enorme de familias muy superior al de las que actualmente se consagran a la labor campesina y siendo insuficientes las consignaciones del presupuesto ordinario del Estado que puedan ser destinadas a las obras hidráulicas para que ésas lleven el ritmo acelerado que resulta más que conveniente, indispensable, se procederá a la captación de la mayor parte posible del ahorro nacional para, asegurándole un interés prudencial, invertirlo en la pronta realización de esas obras hidráulicas con lo cual se facilitaría, de momento, trabajo a bastantes millares de obreros y quedaría garantizado el próximo asentamiento en excelentes condiciones de una masa considerable de labradores.

Esta operación podría realizarse mediante un consorcio entre el Estado, la entidad federativa de las Cajas de Ahorro y la banca oficial, quedando en hipoteca las tierras repartidas que, como las demás y en virtud de la propuesta del art. 1 de este programa, habían de ser objeto de incautación por parte del Estado.

3. Reforma radical de la enseñanza pública, modificando la organización de la enseñanza superior, de manera que a ella no tengan acceso sino aquellos alumnos que hubiesen demostrado en la enseñanza primaria y en la secundaria un grado de capacitación plenamente demostrativo de que habría de ser para ellos enteramente provechosa la permanencia en las universidades y escuelas especiales. La realización de esta idea se verificará encargándose el Estado de modo total del sostenimiento de aquellos alumnos que ya en la escuela de primeras letras evidenciaran condiciones especiales de talento que, observadas por el respectivo maestro, fuesen comprobadas por las juntas pedagógicas que se encargarán del traslado de esos niños a centros de enseñanza primaria que mediante una organización especial aprovechasen mejor las condiciones especiales de esos alumnos. Idéntico procedimiento se seguirá respecto a ellos en la enseñanza secundaria. De esta forma, la Universidad tendrá cerrado su acceso a quienes actualmente pululan en ella sin más méritos que los procedentes de una situación privilegiada económicamente, llegando únicamente hasta su recinto los que acreditasen su capacidad suficiente para evitar la esterilización del esfuerzo universitario. Señalando los cupos correspondientes de licenciados de todas las facultades y titulados de las escuelas especiales habrían de limitarse el número de estos centros derivando el esfuerzo del Estado que así quedará sobrante a la creación de escuelas profesionales que perfeccionarán los conocimientos técnicos del obrero y perfeccionarán su cultura general.

4. No existiendo en España una religión disidente de potencia bastante para mantener en su rivalidad con la Iglesia católica el mínimo de libertad de conciencia exigible en un pueblo civilizado y siendo notorio el afán bárbaramente intransigente de los católicos españoles que conduciría al mantenimiento del fanatismo religioso pese a la separación de la Iglesia y el Estado y de las leyes laicas hasta ahora votadas por la República, procede la disolución de todas las órdenes religiosas y la incautación de sus bienes, más la expulsión del territorio nacional de los miembros de aquellas que por su pasada actuación se considerasen más peligrosas para las nuevas instituciones.

5. Disolución del ejército y reorganización inmediata del mismo a base de la reducción de sus contingentes, de la separación de todos los generales, jefes y oficiales sin más excepción que hubiesen revelado sin tibieza su adhesión al régimen y dando paso incluso a los más relevantes puestos de mando en forma democrática a quienes a partir de su ingreso en filas como soldados hubiesen demostrado las necesarias condiciones de capacidad, haciendo en

suma que según la frase de Napoleón, «pueda ir en la mochila de cualquier soldado el bastón de mariscal».

6. Disolución de la guardia civil y reorganización de todos los institutos armados al servicio del Estado sobre las mismas bases democráticas diseñadas para reformar el ejército y con la condición indispensable de una adhesión verdaderamente leal al nuevo régimen. Núcleo principal de esos institutos sería una milicia reclutada exclusivamente y preponderantemente entre los afiliados a las organizaciones que realicen la transformación apuntada en este programa.

7. Modificación esencial de todos los órganos de la administración pública, a base de una mayor flexibilidad y eficiencia de los mismos, de un riguroso cumplimiento de los deberes por parte de todos los funcionarios, de una revisión implacable de las condiciones de capacidad de los mismos y de una separación de aquellos que por ser desafectos al régimen lo sabotearan en una u otra forma.

8. No siendo de momento conveniente realizar en la mayor parte de la industria española modificaciones esencialmente socializadoras que ofrecerían por su complejidad los peligros de un fracaso ante la circunstancia de la debilidad incipiente de nuestra industria, el programa en este aspecto quedaría por ahora limitado a una serie de medidas encaminadas al mejoramiento moral y material de los trabajadores industriales, cuidando de su dignificación e independencia y ofreciéndoles los medios de controlar la marcha de aquellas organizaciones industriales a cuyo servicio están adscritos.

9. Reforma de nuestro sistema tributario partiendo de la modificación de las cuotas en el impuesto de la renta y en las transmisiones hereditarias principalmente.

10. Todas las medidas derivadas de los puntos enunciados en este programa serían implantadas rápidamente mediante decretos para los cuales en su día se habría de solicitar la convalidación por los órganos legislativos que libremente se diera el pueblo y estimando que este programa revolucionario no obtendría el asentimiento de quien ahora desempeña la presidencia de la República procedería la cesación de éste en sus funciones.

No hace falta extenderse en el comentario. El programa aprobado por el Comité Revolucionario y por la Ejecutiva del PSOE es utópico, arbitrario e inviable. Provocaría *incontinenti* la guerra civil en España; atenta a las libertades fundamentales de los españoles, destruye la sociedad occidental. Cae en el absurdo de reconocer la inmensa mayoría de que goza entre los

españoles la religión católica para, acto seguido, destruir sus instituciones. Liquida al Ejército y a la Guardia Civil, lo que para los militares españoles era, como afirmarían en 1936, *casus belli*. Parece mentira cómo Prieto, con fama de inteligente, pudo alumbrar tamaño disparate. Es muy curiosa la condena *a priori* del presidente de la República. La segura voluntad contraria de más de media España se desprecia casi con sadismo.

b) *Documento secreto revolucionario número 2.— Puntos de acción a realizar en la insurrección revolucionaria, aprobados por la Ejecutiva del PSOE para cumplir prácticamente el programa anterior*. Fuente: la misma que para el documento anterior, es decir, archivos del PCE, transcritos en el citado libro p. 54.

1. Organización de un movimiento francamente revolucionario con toda la intensidad posible y utilizando los medios de que se pueda disponer.
2. Declaración de este movimiento en el instante que se juzgue adecuado, incluso antes de que el enemigo, cuyos preparativos son evidentes, tome precauciones definitivas o ventajosas.
3. Ponerse el Partido y la Unión General, evitando confusionismos, en relación con los elementos que se comprometan a cooperar en el movimiento.
4. Hacerse cargo del poder político el Partido Socialista y la Unión General, si la revolución triunfase, con participación en el gobierno, si a ello hubiese lugar, de representaciones de elementos que hubiesen cooperado de modo directo a la revolución.
5. Desarrollo desde el poder, sin dilaciones, del programa mínimo reflejado en el proyecto de bases.

Al reproducir estos dos documentos secretos, los historiadores comunistas critican, con toda razón, sus «serios defectos y omisiones»; su falta de realismo, la ausencia de toda directriz para las autonomías regionales, las anacrónicas posiciones de anticlericalismo absoluto, la falta de limitaciones para la gran Banca y los monopolios capitalistas. Y añaden que este programa de acción fue pergeñado personalmente por Largo Caballero.

c) *Documento secreto n.º 3.— Las Instrucciones del Comité Revolucionario para la insurrección de Octubre de 1934*.

Instrucciones preliminares

1. *Se prohíbe en absoluto* sacar copias de estas instrucciones y se hace responsable de la custodia y reserva de las mismas a la persona a quien se entreguen.

2. La junta de la provincia se encargará de constituir juntas locales en cada uno de los pueblos, a cuyo efecto se pondrá en relación con la persona de más confianza que pueda encargarse de formar la junta local encargada de organizar todos los trabajos de relacionarse con la provincial.

3. El número de miembros de estas juntas será de *tres*, solamente ampliable en caso de absoluta necesidad.

4. Las juntas provinciales residirán en la localidad de la provincia que se crea más conveniente para el desempeño de su misión y serán las únicas que mantengan relación con la Junta Central.

5. Las juntas provinciales se hallan investidas de autoridad plena sobre toda la provincia, y las juntas locales sobre todos los individuos de la localidad.

6. Debe evitarse, en todo lo posible, poner en circulación instrucciones u órdenes escritas, y cuando sea indispensable usar este medio, utilizar claves o lenguaje convencional.

7. Los miembros de la junta estarán obligados a guardar la más rigurosa reserva. No hablarán de los propósitos, instrucciones y órdenes, sino lo absolutamente indispensable, y esto solamente con las personas con quienes tengan que mantener relación para los fines que se persiguen. Ninguna confianza con nadie más.

8. Las juntas provinciales no deberán atender otros avisos e instrucciones que las que reciban de la junta Central, ni acatar otras órdenes que las de ésta, *sin excepción alguna*. Las juntas locales, las que reciban de las provinciales.

9. Ningún rumor, noticia, hecho ni circunstancia, puede justificar la declaración del movimiento en un pueblo o provincia sin haber recibido la orden precisa de las juntas exclusivamente facultadas para ello. El faltar a esta instrucción puede acarrear graves daños al movimiento general.

10. Todas las juntas deben vigilar que la organización se haga con toda escrupulosidad y que se observe una rígida disciplina, base esencial del éxito.

11. Donde no existan personas de absoluta confianza, las juntas deben abstenerse de constituir grupos o dar instrucciones.

12. Conviene tener dentro de las organizaciones enemigas personas de confianza que nos faciliten información fiel de sus planes y medios.

13. Las juntas de provincia tendrán convenidas con las de los pueblos contraseñas especiales, no sólo para cursar las órdenes relativas al movimiento, sino para garantizar la visita de los delegados y para evitar que una orden falsa pueda provocar un movimiento a destiempo.

14. Conviene estar prevenidos contra las noticias falsas que el gobierno o los enemigos de todas clases puedan esparcir por medio de la prensa o la radio, tales como «el movimiento está dominado», «sus directores detenidos», etc.

Cada pueblo debe hacerse a la idea de que tiene que ser un firme sostén de la insurrección, sin ocuparse de lo que ocurra en otros lugares. La debilidad ajena no justifica la propia.

El triunfo del movimiento descansará en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca, más el tesón con que se defienda.

15. Los grupos de acción han de convertirse en guerrillas dispuestas a desarrollar la máxima potencia. En esta acción nos lo jugamos todo y debemos hallarnos dispuestos a vencer o morir. Una vez empezada la insurrección no es posible retroceder.

Instrucciones generales

16. Corresponde a las Juntas provinciales:

a) Asumir la organización y dirección de todo el movimiento en la respectiva provincia.

b) Mantener relación con la junta Central y las locales.

c) Constituir una junta local en cada pueblo, con arreglo a la instrucción número 2.

d) Organizar las fuerzas de la capital.

e) Velar por la observancia y cumplimiento de las instrucciones y órdenes que reciba y transmita.

Relación con entidades

17. Informarse de las que se hallan decididamente dispuestas a secundar un movimiento revolucionario, y contando con su concurso, adoptar todas las previsiones para que una vez declarado pueda mantenerse indefinidamente; sobre todo en lo que concierne a los servicios más importantes e indispensables.

18. Con los individuos más decididos y de mayor confianza, dispuestos a ejecutar sin discusión las órdenes que se den, se formarán grupos de diez, dos

de los cuales serán designados como jefe y subjefe. Estos grupos deberán estar armados y sus jefes les instruirán en ejercicios de tiro y táctica militar.

19. La potencia revolucionaria de las fuerzas habrá de valorarse convenientemente para dividirse en dos clases: Hombres capaces de batirse y de ejecutar órdenes. Hombres dispuestos a cooperar en otros servicios. Con los primeros se constituirán las milicias en grupos de diez. Con los segundos pueden cubrirse servicios de poco riesgo.

20. Deben constituirse grupos técnicos de los servicios de Electricidad, Alcantarillado, Teléfonos, Telégrafos, etc., capaces de formalizar y llevar a cabo planes para, en caso necesario, suprimir estos servicios en la población en forma que no puedan ser fácilmente reanudados por otros.

21. El movimiento debe afectar a todos los servicios, pero principalmente a los de vital importancia (alimentación, transportes, agua, gas, etc.), y los grupos de acción cuidarán de anular a los que se presten a evitarlo.

22. Cualesquiera que sean las circunstancias de una población y por débil que sea la fuerza organizada, el movimiento debe ser lo más extenso posible. Los grupos técnicos con los de acción cuidarán de lograr por todos los medios la paralización de industrias y servicios y dominar en la calle.

23. Las relaciones con los demás sectores afines serán cordiales sin el menor confusionismo; sin facilitarles datos concretos de nuestra organización y nuestros planes, procurando que ellos hagan su organización propia, y comprometiéndose a respetar la dirección del movimiento que siempre debe ser nuestra.

24. Todos los grupos que se formen, por medio de sus jefes, estarán bajo el mando de la junta local y provincial.

25. Debe ponerse interés en organizar servicios sanitarios para atender rápidamente a los que puedan caer heridos en la lucha. Las mujeres *en el momento oportuno* pueden prestar a este servicio un concurso valioso.

Fuerza pública al servicio del Estado

26. Precisa conocer la fuerza pública que exista en cada localidad. Militares, Guardia Civil, asalto, Seguridad, etc. Armamento de que disponen. Condiciones defensivas de sus cuarteles, medios de apoderarse de ellas, inutilizarlas o, por lo menos, inmovilizarlas.

27. Con el mayor cuidado debe conocerse la manera de pensar de jefes, oficiales y clases, procurando establecer relaciones con algunos que merezcan plena confianza y recomendarles que, independientemente de nosotros, formen ellos su junta.

28. Nuestros jóvenes no deben perder el contacto, discretamente, con los amigos que se hallen en filas.

29. En cada provincia debe conocerse con la mayor exactitud el número de jefes, oficiales y clases de la guarnición, con sus nombres, domicilios y significación para actuar en cada caso como las conveniencias aconsejen.

30. También deben conocerse los depósitos de armas y polvorines y los medios de apoderarse de ellos o, en otro caso, inutilizarlos.

31. Los elementos auxiliares de confianza que haya dentro de los cuarteles deben facilitar, con exquisita discreción, toda la información que les sea posible respecto a órdenes, preparativos, estado y disposición de la fuerza, medios por los cuales puede hacerse la incautación de las armas o su inutilización en caso contrario; modo de impedir la salida de las fuerzas de los cuarteles y cuánto sirva a contrarrestar estos elementos.

32. Cuando haya inteligencia entre las fuerzas militares y la junta local, se formalizará el plan de acción combinada de ambas fuerzas, para lo cual deberán celebrar reuniones que no sean numerosas. Bastará con que se reúnan un individuo de cada parte.

33. Triunfante el movimiento, las fuerzas militares adictas tendrán una representación oficial en la junta local.

Grupos de acción

34. Los grupos de acción se formarán con arreglo a la instrucción número 18, bajo las órdenes del respectivo organismo directivo local al que obedecerán sin discusión.

35. Además de instruirse convenientemente para el momento de la acción, se encargarán de facilitar a la junta local los nombres y domicilios de las personas que más se han significado como enemigos de nuestra causa o que puedan ser más temibles como elementos contrarrevolucionario. Estas personas deben ser tomadas en rehenes al producirse el movimiento, o suprimidas si se resisten.

36. En el momento de la acción, cada grupo tendrá señalado de antemano el lugar donde debe actuar y adonde debe trasladarse después de concluida su primera misión. Estas instrucciones se las darán sus jefes oportunamente. Las juntas cuidarán escrupulosamente de no dar órdenes contradictorias a los jefes de grupo, para que todos los movimientos se produzcan ordenadamente, sin barullo y sin confusiones.

37. Deben determinarse los edificios y calles que conviene ocupar para mejor resistir los ataques de la fuerza, o para evitar que escapen los elementos enemigos.

38. Fórmese una relación de los automóviles y demás medios de transporte que haya en la población; lugares donde se encierran y lista de los individuos que puedan conducir en caso necesario.

39. Conocer los depósitos de gasolina, dinamita y armas, y planear el medio de apoderarse de ellos en el momento preciso.

Previamente debe adquirirse y guardar en lugar seguro dinamita. Cada individuo puede tener en su casa sin compromiso *para uso doméstico* un bidón de gasolina.

40. La gasolina y la dinamita empleada inteligentemente, pueden servir para desmoralizar al enemigo con incendios y petardos.

41. Hay que dificultar con gran rapidez los movimientos del adversario cortando las líneas de ferrocarril, inutilizando puentes, interceptando carreteras; todo ello respondiendo a un plan bien meditado por los elementos previamente designados y que imposibilite que la fuerza pueda acudir a todas partes.

42. En principio, se llamará la atención de la fuerza pública, donde así convenga, con incendios, petardos u otros medios, para que se vea obligada a acudir donde se produzcan. Estos momentos se aprovecharán para cortar las líneas de comunicación, o inutilizar aparatos, etc., y asaltar centros oficiales y políticos. En éstos, incautarse de ficheros y archivos.

43. Rápidamente apoderarse de las autoridades y personas de más importancia y guardarlas en rehenes.

44. Preferentemente hay que inutilizar la fuerza pública de los pueblos *desarmándola totalmente, aunque prometa permanecer neutral*.

45. Se tomarán las salidas del pueblo. Se requisarán automóviles y otros medios de locomoción. Se incautarán de los depósitos de gasolina y, grupos armados, recorrerán las casas de los enemigos para apoderarse de las armas que tuvieren y armar con ellas a los amigos que no las tengan.

46. Apoderarse, lo antes posible, de los establecimientos donde se vendan armas, municiones y explosivos.

47. Los Bancos y archivos se vigilarán estrechamente. Se impedirá por todos los medios que en las iglesias se toque a rebato.

48. Haciendo una buena distribución de fuerzas por toda la población deberá hacerse una guerra de guerrillas. *Nunca deben presentarse grandes masas frente a la fuerza pública*, procurando así que toda sea distribuida y hostilizándola sin cesar hasta rendirla por agotamiento. Atacar siempre que sea posible desde lugares seguros.

49. Las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan. Son depósitos que conviene suprimir.

50. Caso de que por cualquier motivo se produzcan bajas en las juntas provinciales o locales, serán cubiertas nombrándolos los jefes de grupo en los pueblos y los organismos provinciales en las capitales.

51. Si fuerzas superiores del gobierno intentasen reconquistar un pueblo y éste no ofreciese condiciones de resistencia, los revolucionarios lo abandonarán llevándose los rehenes y buscarán en el campo o la montaña el lugar más favorable para defenderse e intimidar al enemigo.

52. Los grupos deben estar numerados en cada localidad; o sea: Grupo número 1, Grupo número 2, etc., y se les distinguirá de este modo a todos los efectos.

53. Triunfante el movimiento en un pueblo, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar su dominio estableciendo vigilancia armada y asegurando bien los servicios y la defensa y, si sobrase elemento armado, se acudirá en auxilio de los pueblos próximos donde aún no se hubiese triunfado.

54. Cuando una ciudad caiga en manos de los revolucionarios, nada debe justificar su abandono. Aunque la lucha se prolongue no debe desmayarse. Cada día que pase aumentará el número de los rebeldes. En cambio la moral del enemigo irá decayendo. Nadie espere triunfar en un día en un movimiento *que tiene toda los caracteres de una guerra civil*. En este movimiento, el tiempo es el mejor auxiliar.

Medios

55. Procurarse armas hasta donde sea posible. La junta Central, por medio de las provinciales, facilitará las informaciones que posea.

56. Para dificultar los movimientos de la fuerza, pueden cerrar bocacalles con alambre de espino u otros medios y, al mismo tiempo, regar todo el ancho de la calle con gasolina, dar fuego y desde puntos o casas inmediatas atacar a la fuerza cuando trate de quitar esos obstáculos.

57. Levantar barricadas, entre las cuales se oculten aparatos explosivos conectados con la corriente eléctrica o sustituida ésta por pilas, y cuando la fuerza llega a la barricada hacerlos explotar, formando un cortocircuito desde una casa o lugar próximo y aprovechar la sorpresa para atacar a la fuerza que quede y coger sus armas.

58. Acumular carros, coches o camionetas a la salida de los cuarteles o en las calles en que sea obligado el tránsito de la fuerza y atacarla desde lugares seguros y por distintos flancos.

59. Lanzar botellas de líquidos inflamables a los centros o domicilios de las gentes enemigas.

60. Cortar las comunicaciones en forma de difícil arreglo por parte de las fuerzas enemigas.

61. Volar puentes. Cortar carreteras. Líneas de ferrocarril. Imposibilitar el traslado de fuerzas para concentrarlas.

62. Estropear los neumáticos y los motores de aquellos vehículos que no puedan ser utilizados por nuestras fuerzas.

63. Donde haya estación emisora de radio, si no puede incautarse, incendiarla o volarla. Si hay dentro personal adicto, inutilizarla.

64. Imposibilitar que los jefes de las fuerzas que no vivan en los cuarteles puedan incorporarse a sus puestos, deteniéndolos a la salida de sus domicilios y atacándolos si se resisten.

65. Donde sea posible, utilizar uniformes del ejército, incluso de oficiales, para dar impresión de insubordinación militar.

66. No gastar inútilmente las energías ni los medios de ataque.

67. Tomar y mantener la ofensiva es siempre infinitamente más eficaz que quedarse a la defensiva. Se domina mejor al enemigo, pero debe evitarse cometer imprudencias que pueda aprovechar el adversario.

Después del triunfo en la lucha

68. Triunfante el movimiento revolucionario, lo primero que debe asegurarse es el dominio absoluto de la población, perfeccionando las milicias armadas, ocupando los sitios estratégicos, desarmando totalmente a las fuerzas contrarias y ocupando los edificios públicos.

69. Se restablecerán rápidamente las comunicaciones y se dará cuenta a la junta de la capital y ésta a la Central de la situación.

70. Se procederá a la incautación de los víveres, o bien se controlará al comercio para que éste los facilite al vecindario, evitando enérgicamente todo abuso.

71. Siguiendo las instrucciones y órdenes de la junta local se nombrará una junta administrativa y de defensa del pueblo, cuyas órdenes se acatarán sin discusión y, si fueren abusivas, *se acatarán también*, pero denunciándolas inmediatamente a la Junta provincial que deberá proceder rápidamente a enviar a un delegado suyo con plenos poderes cuyas resoluciones se acatarán.

72. Los bienes de la gente pudiente servirán para garantizar las necesidades del vecindario hasta que se dicten medidas por el Poder Central. Nadie debe quedarse sin comer en tanto haya en el pueblo recursos para proporcionarlo.

73. Durante el movimiento revolucionario toda la energía y todos los medios serán pocos para asegurar el triunfo. Una vez que éste se haya logrado, debe ponerse la misma energía para evitar crueldades innecesarias ni daños, sobre todo en cosas que puedan ser luego útiles o necesarias para los fines de la revolución.

La firma indica, en cifra, personas cuya identidad sólo conocen los dirigentes. El texto anterior convierte en páginas de delicadeza casi monjil a las Instrucciones del general Mola para el Alzamiento, dictadas durante la primavera y primeras semanas del verano de 1936. Están tomadas del apéndice con que Pío Moa cierra su interesantísimo libro citado, quien a su vez las transcribe de una genuina fuente socialista: los documentos de Largo Caballero publicados por Santos Juliá en *Escritos de la República, Notas históricas de la guerra de España (1917-1940).*

Las Instrucciones para la Revolución socialista de Octubre programaban algo más que una simple insurrección: una sucesión de actos vandálicos que parecen terrorismo puro. La insurrección se denomina «Movimiento» (n. 9). En el punto 35 se incita al secuestro y asesinato de «rehenes» entre los que se incluye a las personas significadas y a los jefes y oficiales de las fuerzas del gobierno. En el punto 65 se ordena el robo de uniformes del «enemigo» para desorientarle; es lo que intentó Santiago Carrillo, según confiesa en sus Memorias, (Planeta, 1993), para dominar a la Guardia de Asalto en Madrid, no puede quejarse de la irrupción de la Guardia Civil en el Congreso el 23 de febrero de 1981. Las órdenes de asaltar armerías, robar bancos e incendiar cuarteles de la Guardia Civil se cumplieron profusamente en Asturias durante los sucesos reales de Octubre. Tras este precedente documentado, que estaba en el ambiente, los rebeldes de julio de 1936 no necesitaban ya más documentos secretos para prepararse contra un alzamiento del Frente Popular. Los inmediatos antecesores del Frente Popular habían intentado y consumado su rebelión armada en 1934.

Capítulo IV: La degradación antidemocrática de la República: campaña, elecciones, gobierno y régimen del Frente Popular

LA REBELIÓN DE LAS MASAS EN 1935

Suena muy bien en el *Diario de Sesiones* de las Cortes democráticas de 1999, la afirmación de que el fementido *golpe militar fascista*, dado el 18 de julio de 1936, se dirigía *contra la legalidad republicana*. El tal golpe es una mentira de igual calibre que la legalidad republicana. En los capítulos anteriores hemos demostrado, histórica, testimonial y documentalmente, que la República de 1931 no fue democrática ni en su origen ni en su ejercicio entre 1931 y 1935, por parte de sus promotores de izquierdas (incluidos los más significados republicanos de derechas, excluidos, entre 1933 y 1934, los republicanos de centro que seguían a Lerroux, e incluidas también, aunque menos espectacularmente, las derechas católicas y monárquicas). Los menos democráticos de toda la escala política fueron, por supuesto, los socialistas, organizadores y ejecutores, junto con los catalanistas de izquierda, de la hiperantidemocrática Revolución de Octubre en 1934, y, por supuesto, los anarcosindicalistas, que se mantuvieron en rebelión permanente contra la República de abril desde ese mismo verano de 1931 hasta la primavera trágica de 1936, como tendremos ocasión de demostrar. Pero puede que algún lector se extrañe de que incluyamos a las derechas, tanto monárquicas como católicas, en el coro de los antidemócratas. Ahora está de moda seguir también en este punto el famoso dictamen de Madariaga, que ya hemos transcrito, y atribuir a las derechas monárquicas y sobre todo a las católicas, una inconsútil pureza democrática en la etapa republicana. Pero no es así. La derecha monárquica se dedicó afanosamente a conspirar contra la República desde el mismo 15 de abril de 1931 y no dejó de hacerlo hasta que cooperó en el alzamiento de julio de 1936. La derecha católica se comportó, desde luego, con talante más democrático que las izquierdas socialistas y catalanistas, pero intentó de forma expresa alentar al Ejército a un pronunciamiento contra la República en 1934 —con motivo de los indultos acordados por el presidente de la República a favor de algunos significados rebeldes de la izquierda

socialista y catalanista— y repitió el mismo propósito en diciembre de 1935, cuando la CEDA hubo de abandonar el Ministerio de la Guerra después de los escándalos que estallaron en otoño y que a ella no le concernían, aunque sí a sus aliados los radicales. En el citado libro de Gil Robles, *No fue posible la paz* (1969, Eds. Ariel), están las pruebas taxativas de esos pronunciamientos militares sugeridos por la derecha católica y abortados por el general Franco. Por tanto, a lo largo de la República, sólo podríamos considerar demócrata al prócer liberal don Salvador de Madariaga, que en su famoso libro de 1935, *Anarquía o jerarquía*, propuso (Eds. Aguilar) formalmente un sistema de democracia orgánica, algo que suele olvidarse.

Sin embargo, a partir del mes de enero de 1934, como hemos empezado ya a comprobar documentalmente, la izquierda socialista, respaldada por los comunistas cada vez con mayor entusiasmo, se comportó de forma notablemente más antidemocrática que la derecha católica. Octubre de 1934 fue una cumbre antidemocrática del socialismo, pero el antidemocratismo socialista se recrudeció si cabe en el período del Frente Popular, que vamos a considerar aquí en tres etapas: la campaña electoral desencadenada incluso antes de la convocatoria de elecciones generales en enero de 1936; las mismas elecciones generales celebradas el 16 de febrero en primera vuelta; el período de gobierno del Frente Popular, febrero a julio de 1936. Hemos de notar desde el principio que el Frente Popular no fue solamente una coalición para formar un gobierno de izquierdas; ni tampoco fue solamente ese Gobierno. Fue un régimen, un sistema con vocación revolucionaria de irreversibilidad, un régimen dispuesto a no ceder jamás el poder, a no convocar ya más elecciones. (La prueba es que no lo hizo durante su período de vigencia, entre febrero de 1936 y abril de 1939). No cabe una actitud más antidemocrática, vamos a comprobarlo.

Y el primer campo de comprobación ha de ser la campaña electoral para los comicios del 16 de febrero de 1936. Acabamos de ver que en las Instrucciones para la insurrección de octubre de 1934, el Comité Nacional Revolucionario del PSOE convocaba expresamente a la guerra civil. Para un observador socialista tan consciente como Antonio Ramos Oliveira, en el tercer tomo de su difundida *Historia de España*, publicada en México y no reeditada en España, la guerra civil no empezó el 18 de julio, sino el 16 de febrero de 1936; y le sobra razón histórica para opinar así. Vamos a ver que incluso la campaña electoral para esas elecciones, plagada de desafueros antidemocráticos, puede considerarse como la primera batalla de la guerra civil española.

La Revolución de Octubre no se canceló ni en la mañana del 7 de octubre, cuando el gobierno rebelde de la Generalidad fue detenido en Barcelona y poco después enviado a la cárcel, ni cuando las tropas y fuerzas de seguridad del Gobierno Lerroux terminaron, tras quince días de guerra civil declarada, con la actividad revolucionaria de los mineros en Asturias. Lo más peligroso de la Revolución de Octubre es que no se canceló nunca y no se liquidó nunca. El acontecimiento más grave en toda la historia de la República ni siquiera fue discutido ni analizado en las Cortes de la República, de las que durante meses estuvieron ausentes los grupos parlamentarios —socialistas y catalanistas— que habían realizado la Revolución. Es decir, que España llegaría al régimen del Frente Popular en febrero de 1936 y a la guerra civil declarada el 17-19 de julio del mismo año sin haber liquidado legalmente, parlamentariamente, las causas, el desarrollo y los efectos de la Revolución. La Revolución de Octubre cerró, pues, en falso. Y reventó, con energía purulenta en febrero y en julio de 1936.

El centro-derecha, vencedor de la Revolución gracias a que las Fuerzas Armadas y las de Orden Público se alinearon con el Gobierno, salvo mínimas excepciones, se mantuvo en el poder todo un año largo, hasta mediados de diciembre de 1935. Pero el ambiente estaba cada vez más enrarecido y se iba convirtiendo gradualmente en explosivo. La derecha católica y el Partido Republicano Radical —es decir la mayoría gubernamental— más la derecha católica, se mostraban cada vez más desilusionadas y desunidas. El único motivo que podría unirles era el temor a una nueva revolución violenta, pero ese motivo quedó, de momento, descartado y no afloró, con letales consecuencias, hasta la primavera trágica de 1936, bajo el régimen del Frente Popular. El gobierno de centro-derecha, de acuerdo con la Constitución de 1931, ocupó y tuteló las instituciones de la autonomía catalana, a la que sin embargo no desmanteló. Entregó a la Justicia a los jefes revolucionarios que pudieron ser detenidos y les mantuvo en la cárcel con graves penas. Pero también detuvo y encarceló a muchos participantes de filas en la Revolución, que llenaron las cárceles, en número que inicialmente parece próximo a lo quince mil, de toda la izquierda revolucionaria: sobre todo socialistas pero también comunistas, anarquistas y catalanistas. Durante meses estos miles de presos aguardaron inútilmente la liquidación parlamentaria de Octubre y el juicio de los Tribunales, que inevitablemente se retrasaba. Este elevado número de presos revolucionarios provocó la unidad sentimental y política de todos los grupos de izquierda y sus familias. El centro-derecha en el poder se empeñó en convertir a Manuel Azaña, detenido por la policía en su escondite

de Barcelona, en jefe y máximo responsable de la doble revolución catalanista y socialista. El centro-derecha se obstinó en su acoso contra Azaña y con ello, como bien vio Gabriel Jackson, le convirtió realmente en el símbolo efectivo para la nueva unión de todas las izquierdas. Azaña, jurista y escritor eminente, se defendió con inteligencia, garra y alto sentido del ridículo en el proceso y en su libro *Mi rebelión en Barcelona*, que fue el *bestseller* español de 1935. Los indicios eran fatales, pero Azaña había acudido a Barcelona poco antes de la Revolución para asistir al entierro de su exministro Jaume Carner y para evitar la rebelión de la Generalidad de izquierdas, que no le hizo el menor caso. Azaña hubo de ser puesto en libertad por falta de pruebas y su liderazgo sobre el conjunto de las izquierdas se agigantó. Es cierto, sin embargo, que las derechas le acusaban convencidas de su culpabilidad; parecía demasiado casual que Azaña llegase a Barcelona justo cuando la rebelión de la Generalidad iba a empezar. Desde diciembre de 1934, Manuel Azaña e Indalecio Prieto, huido a Francia, cruzaron una decisiva correspondencia que formó la trama para restablecer la Conjunción republicano-socialista, llamada en la próxima etapa, desde fines de diciembre de 1935, Frente Popular. Primero se efectuó la aproximación de todos los republicanos; luego la de los partidos obreros, con los comunistas fuera, hasta que Largo Caballero, al salir de la cárcel a fines de 1935, impuso a sus compañeros socialistas la admisión de los comunistas en el Frente Popular.

El gobierno de centro-derecha amplió, a partir de mayo de 1935, la participación de la CEDA entre sus ministros. Esta vez José María Gil Robles obtuvo la cartera de Guerra, que desempeñó a gran altura, tras haber designado como colaboradores a los principales generales del Ejército. Fanjul fue su subsecretario; Franco, ascendido a general de división por un ministro radical, jefe del Estado Mayor Central tras desempeñar la jefatura de las Fuerzas Militares de Marruecos, en la que le sucedió Emilio Mola; Goded, director general de Aeronáutica. Esta selección provocó el disgusto de los generales azañistas; ya se perfilaba la división de las Fuerzas Armada en la próxima guerra civil. Pero el buen gobierno de Gil Robles y los demás ministros del gobierno Lerroux, no podía paliar el rugido de la tormenta revolucionaria que venía de las cárceles repletas y de los cada vez más cuajados proyectos para la reunificación de las izquierdas bajo la jefatura suprema de Manuel Azaña.

Se registró además en 1935 un mortal fenómeno de masas; lo que José Ortega y Gasset había profetizado en su libro famoso, *La rebelión de las masas*. Desde el motín de Esquilache en el siglo XVIII al de Aranjuez en 1808,

a la Gloriosa de 1868 y al 14 de abril de 1931, las masas, previamente manipuladas, habían ejercido —por excepción— colectivamente la gran política española. Pero siempre se trató de presencias breves, efímeras, a favor de la emoción o el odio del momento. En 1935, una vez puesto Azaña en libertad, las masas actuaron pero de forma muy diferente. Acudían a mítines políticos jamás vistos, hasta de medio millón de personas; y acudían enfrentadas por separado, en unos lugares para escuchar a Manuel Azaña, en otros a Gil Robles, quien a veces, gracias a una avioneta, pronunciaba dos grandes discursos en una sola jornada. Las masas no actuaban ahora como comparsas, sino como protagonistas. Aparecían en torno a sus ídolos, enardecidas, presas del odio y el miedo, como dos años más tarde, ya demasiado tarde, advertiría lúcidamente, lejos ya de aquellas masas, Manuel Azaña. Eran ya las dos Españas que iban a enzarzarse, las dos Españas de la guerra civil.

Y por si éramos pocos, saltaron al ruedo los comunistas. Los comunistas españoles eran pocos, apenas unos millares en 1935. Pero contaban con asesoramiento directo y férreo a través de los enviados de la Unión Soviética, que habían logrado, a fines del año 1935, la conquista de las numerosas Juventudes Socialistas para el PCE. En pleno verano de ese año, los delegados del PCE asistían al VII Congreso de la Internacional Comunista, donde los inspiradores soviéticos diseñaron la estrategia del entonces llamado Bloque Popular y que en España se denominaría luego Frente Popular, agrupación de las izquierdas republicanas y marxistas que por el momento mantenía fuera a los comunistas, por considerarlos como simple delegación de una gran potencia revolucionaria extranjera. En ese Congreso de Moscú, Gueorgui Dimitrov propuso también la táctica del caballo de Troya para que los comunistas se infiltrasen en las defensas de los demás partidos proletarios e incluso pequeño-burgueses. Muchos dirigentes de la nueva unión de las izquierdas aborrecían la presencia comunista en la nueva Conjunción. Pero Francisco Largo Caballero, guiado por su demagogia y engañado por sus Juventudes, acabó por imponer, a fines de 1935, la inclusión del PCE en lo que ya se empezaba a denominar Frente Popular. Un año más tarde le roía la desesperación por tal dislate, cuando los comunistas habían decidido ya, en la zona republicana, terminar políticamente con él después de utilizarle.

Así caminaba inexorablemente a la guerra civil la España de 1935, entre los tirones encontrados de sus masas desmandadas, cuando reventaron un par de escándalos de poca monta, que hoy, tras la larga noche del socialismo en la democracia española hasta 1996, nos parecen fruslerías de tercera división.

Los escándalos salpicaron al viejo partido de Alejandro Lerroux, el Partido Radical, famoso por sus corrupciones desde principios de siglo, y la coalición con la derecha católica se vino abajo. El presidente de la República, que no podía ver a Gil Robles, no quiso darle el poder, y Gil Robles no consiguió que el general Franco encabezase un golpe de Estado para evitar lo que se venía encima. Don Niceto Alcalá Zamora intentó entonces un proyecto supremo para crear desde el Poder un nuevo partido de Centro que fracasó lamentablemente. Y el 7 de enero de 1936 entregó al presidente del gobierno, don Manuel Portela Valladares, el decreto de disolución de Cortes. Iban a plantearse las elecciones de la guerra civil.

EL IGNORADO «DICTAMEN» DE BURGOS EN 1938 CONSERVA TODA SU FUERZA PROBATORIA

En este momento de nuestro trabajo vamos a romper las lanzas que sean necesarias para reivindicar la memoria y la vigencia de un documento esencial, culpablemente ignorado por los comentaristas e historiadores que asumen la herencia de la zona roja y del que resulta hoy casi imposible obtener un ejemplar. Se trata del *Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936*, firmado por la Comisión en febrero de 1939 y publicado en ese mismo año por Editora Nacional, que entonces dirigía don Pedro Laín Entralgo. El Dictamen lleva anejo un amplio *Apéndice I* de la misma Editora y fecha, donde se reproducen documentos de suma importancia relacionados mediante números con el texto del Dictamen.

La Comisión se creó por orden del Ministerio que regía Ramón Serrano Suñer con fecha 21 de diciembre de 1938. El objetivo del Dictamen es demostrar, ante todo el mundo, que «los sedicentes poderes legítimos, a saber, los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el Poder, adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo que al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley» (p. 9). Es decir, la tesis opuesta por el vértice al dictamen de las Cortes españolas democráticas de 1999, cuando condenaron el «golpe militar fascista» con el que identificaban, por gravísimo error histórico, el Alzamiento del 18 de julio de 1936.

La Comisión que redactó y aprobó por unanimidad este Dictamen estaba integrada por personas de relevante ejecutoria jurídica o política. La presidía don Ildefonso Bellón Gómez, magistrado del Tribunal Supremo. Sus miembros eran don Adolfo Pons y Umbert, exdiputado a Cortes, presidente de

las Reales Academias de Jurisprudencia y de Ciencias Morales; don Joaquín Fernández Prida, catedrático de Derecho Internacional, miembro de la Asociación «Francisco de Vitoria», exministro de Estado con la Monarquía; don Antonio Goicoechea y Cosculluela, exdiputado y ministro de la Monarquía, letrado del Consejo de Estado; don Adolfo Rodríguez Jurado, exdiputado, presidente de la Unión Nacional de Abogados; don Federico Castejón y Martínez de Arizala, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, magistrado del T. Supremo; don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, muchas veces exministro y expresidente del Consejo de la Monarquía, expresidente del Congreso y del Senado, diputado a las Cortes Constituyentes de la República; don Abilio Calderón Rojo, exministro de Fomento en la Monarquía, exdiputado; don José María Trías de Bes, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, miembro de la Asociación «Francisco de Vitoria», exdiputado; Don Manuel Torres López, catedrático y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca; don Salvador Bermúdez de Castro, exministro, exdiputado, de la Real Academia de Ciencias Morales; don José Manuel Pedregal, exministro, presidente del Consejo de Estado; don José María Cid Ruiz-Zorrilla, exministro de la República, exdiputado, abogado del Estado; don Wenceslao González Oliveros, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Salamanca, miembro de la Asociación «Francisco de Vitoria»; don Rafael Aizpún Santafé, exdiputado y exministro de la República; don José Gascón y Marín, exministro de la Monarquía, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, de la Real Academia de Ciencias Morales, exdiputado; don Eduardo Aunós Pérez, exministro de la Monarquía; don Santiago Fuentes Pila, exdiputado; don Romualdo de Toledo, exdiputado de la República; y varias eminentes figuras más (p. 10-11).

No formaban la Comisión unos propagandistas indocumentados, sino un amplio conjunto de reconocidos juristas, magistrados y catedráticos, exministros y exdiputados de la Monarquía y la República, a quienes sólo pueden despreciar como conjunto quienes ignoran sus méritos y servicios.

El Dictamen de Burgos es un alegato formidable que forzosamente ha de ser tenido en cuenta en cualquier discusión seria sobre la legitimidad de la situación regida por el Frente Popular en julio de 1936. Una buena parte de lo ya escrito en el presente libro está conforme con sus tesis, a las que también acudiremos en lo que resta de nuestra obra. En este momento pretendíamos ante todo rescatarlo del torpe olvido en que yace y subrayar su importancia capital.

El Dictamen de Burgos consta de dos tomos. En el primero se recogen los hechos en que se funda la calificación de ilegitimidad respecto de los poderes que actuaban al producirse el Alzamiento; en el segundo se recopilan, junto a las citas del volumen primero, los documentos y otras pruebas que corroboran cuanto se afirma en el Dictamen. En la referencia que resumimos a continuación numeraremos del 1 en adelante los Documentos de la Comisión (DC) en la misma serie numérica que se utilizó al publicarlos.

DC-1: *Una desconocida condena del Papa Pío XI al comunismo en vísperas de la guerra civil española*.

Pío XI se ha referido con expresiones condenatorias a la persecución contra la Iglesia en España antes y después de este documento. Primeramente en su encíclica *Dilectissima nobis*, en que condenaba, el 3 de junio de 1933, la inicua ley de confesiones y congregaciones religiosas, que privaba a la Iglesia del derecho a enseñar. Luego, ya durante la guerra civil, en su alocución a un grupo de peregrinos españoles el 14 de noviembre de 1936, en la que llamó «verdaderos mártires» a cuántos en España habían muerto por su fe. Nueva alusión en su mensaje de Navidad de 1936 y en la encíclica *Divini Redemptoris*, de 19 de marzo de 1937, donde atribuye a la acción comunista la tragedia de la persecución religiosa en España. Pero entre los mensajes de la que llama monseñor Antonio Montero «etapa prebélica» —la República— y la etapa bélica, hay una invocación de Pío XI al inaugurar la Exposición vaticana de la Prensa católica, en mayo de 1936, en pleno período del Frente Popular, que nunca he visto citada fuera del Dictamen que ahora comento:

> «El primero, el mayor y más grave peligro es ciertamente el comunismo en todas sus formas y grados. Lo amenaza todo, lo impugna abiertamente todo, y encubiertamente todo lo insidia; la dignidad individual, la santidad de la familia, el orden y la seguridad del consorcio civil y sobre todo la Religión, abierta y organizada, de Dios y más señaladamente la Religión católica y la Iglesia católica.
>
> »Toda esta copiosísima y, en gran manera, difundidísima literatura pone en plena y certísima luz un tal programa. Nos dan fe de ello los ensayos ejecutados o intentados en diferentes países: Rusia, México, España, Uruguay, Brasil… Una tarde tormentosa, que parece anuncio de noche más tormentosa, cae sobre el mundo entero» (DC I, p. 5).

DC-2: *Actitud de logias masónicas ante la Revolución*.

Consta al autor de este libro el gran interés que el general Franco tenía, desde el principio de la guerra civil, en que en los lugares donde ejercía el mando el Ejército se incautara de toda la documentación de las logias masónicas que luego él mismo ordenó almacenar y catalogar en el Archivo de la calle Gibraltar, 2, en Salamanca. De ese archivo proceden las dos actas

masónicas de 8 de febrero de 1934, con actitud que se extiende a todo el período de la Revolución de Octubre y el Frente Popular:

«La Logia Constancia de Ceuta en 8 de febrero de 1934 dice: *Hora es ya de que se ponga freno a todos los desmanes cometidos. Por falta de criterio en sentido izquierdista, pero si la hora no llega debemos ser los masones los primeros que demos la mano al proletariado español y hagamos la Revolución controlada por nosotros*».

Del acta de 8 de febrero de 1934 en la logia Alfa n.º 80 de Tetuán. «*Consultados personalmente los miembros del Cuadro, se acordó por unanimidad incorporarse al Frente Único de Izquierdas ofreciéndole como entidad masónica nuestros concursos y el apoyo moral y material hasta conseguir la desintegración del frente de derechas*» (DC II, p. 6).

DC-3: *La Constitución de 1931 anulada por la Ley de Defensa de la República*.

Ya hemos visto, y probado documentalmente, que la Constitución de 1931 no fue un texto fundamental democrático, por su evidente partidismo que impedía la convivencia; es decir, la primera condición imprescindible para la democracia. Pero hemos de añadir ahora que el *Dictamen* de Burgos anticipaba ya esta gravísima acusación en la p. 23 de su texto y en sus documentos anejos en el número 3. Después de considerar inválidas las elecciones del 12 de abril de 1931, con los datos que entonces se manejaban y nosotros hemos podido ya concretar más y mejor, se refiere el *Dictamen* al período electoral para las Cortes Constituyentes de 1931, «que transcurre —afirma, con verdad— en medio de las más exaltadas manifestaciones de pasión revolucionaria, que hacen de hecho imposible la propaganda de toda opinión no favorable al nuevo régimen, según lo acredita el cierre del Círculo monárquico que se intenta abrir en Madrid y la quema de iglesias y conventos en toda España».

A continuación transcribe el *Dictamen* la condena del texto constitucional por el propio presidente de la República, que ya hemos citado. Pero se aprueba, en fin, esa Constitución de la discordia de la que el *Dictamen* reproduce, en su tomo II, p. 7 ss., varios artículos en los que se proclama la defensa de los derechos y libertades públicas. Esta proclamación nace muerta. Porque la Constitución lleva la fecha de 9 de diciembre de 1931 y poco antes, el 21 de octubre, se había aprobado una ley llamada «de Defensa de la República», que mantuvo su plena vigencia una vez aprobada la Constitución, y a la cual, incluso antes de aprobada la Constitución, las Cortes otorgaron rango constitucional mientras esas Cortes siguieran vigentes, es decir, hasta

noviembre de 1933, todo el bienio Azaña. El efecto destructivo de la Ley de Defensa de la República se resume atinadamente por el *Dictamen* en los siguientes términos:

«Desvirtuando (a la Constitución) apenas nacida, pone en manos del Gobierno resortes que hacen totalmente ilusorios los derechos individuales en ella reconocidos. Al amparo de esta transformación constitucional y legal, las opiniones medias y las tendencias conservadoras y prudentes que se anunciaron en la propaganda anterior al 14 de abril, y que de buena fe fueron aceptadas por muchos, se convierten en predominio de todos los extremismos del radicalismo anticlerical, separatista, marxista y comunista. En una palabra, el régimen instaurado, contando por una parte con el asentimiento pasivo del país, vive, se mantiene gracias a alardear y mostrar ser no un Gobierno respetuoso del derecho, sino una revolución iniciada y en marcha».

La auténtica historia de la Segunda República demuestra sin la menor duda la verdad del párrafo anterior. Pero como nuestra preocupación principal en este libro consiste en demostrar cuanto afirmamos, la mejor prueba será transcribir dos artículos de la Ley de Defensa de la República que ponen de hecho en manos del Gobierno poderes dictatoriales:

«Art. 2. Podrán ser confinados o extrañados por un período no superior al de la vigencia de esta ley o multados hasta la cuantía máxima de diez mil pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización los autores materiales o los inductores de hechos comprobados en los números I y X del art. anterior. Los autores de hecho comprendidos en el número XI serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones».

«Cuando se imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar contra el señor ministro de la Gobernación en el plazo de 24 horas. Cuando se trate de sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar contra la misma ante el Consejo de Ministros, en el plazo de cinco días».

(Los epígrafes citados controlaban dictatorialmente cualquier actividad que el Gobierno, arbitrariamente, juzgara peligrosa).

«Art. 3. El Ministro de la Gobernación queda facultado:

I.— Para suspender las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político, religioso, social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública.

II.— Para clausurar los centros o asociaciones que se considere inciten a la realización de actos comprendidos en el art. 1 de esta ley.

III.— Para intervenir la contabilidad o investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la Ley de Asociaciones.

IV.— Para decretar la incautación de toda clase de armas y sustancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente».

El último punto es peregrino: el Gobierno podrá apoderarse incluso de efectos legalmente poseídos por quien le venga en gana. Naturalmente la República hizo amplio uso de esta ley arbitraria, antidemocrática por esencia, en que los derechos y libertades públicas quedaban anulados y sometidos al arbitrio gubernativo.

DC-4: *La República ante la Iglesia: la promesa y la realidad*.

No sin cierto sentido de humor negro, el *Dictamen* contrapone dos textos del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. El primero, tomado de *ABC* de Madrid y *El Liberal* de Bilbao del mismo día, 15 de abril de 1930, un año justo antes de la proclamación del nuevo régimen, definía con todo respeto el que para un gobernante católico como él, sería el papel de la Iglesia en la República:

> «La solución liberal del problema político español es la forma republicana. Sería fácil proclamar la República, que debe tener un sedimento, una tendencia conservadora. Yo quisiera en una República poder formar parte de su centro: una República con representación parlamentaria de la Iglesia.
>
> »Una República gubernamental, viable, conservadora, la sirvo, la propago, la defiendo y la gobierno.
>
> »Una República convulsiva, irreflexiva, no. Yo puedo comprometerme y arriesgarme, pero no tengo derecho a comprometer a mi Patria».

Ante esa República idílica, con senadores vitalicios y bajo el patronazgo de San Vicente Ferrer, la realidad, presidida trágicamente por el propio don Niceto, fue ésta:

> «Antes de cumplirse el primer mes de instaurada la República, y en los días 10, 11 y 12 de mayo de 1931, fueron quemadas iglesias y conventos en toda España:
>
> »En Madrid lo fueron la iglesia de los Jesuitas de la calle de la Flor; el Instituto Católico de Artes e Industrias de la calle Alberto Aguilera; el colegio de Maravillas en Cuatro Caminos y la iglesia de los Carmelitas en la plaza de España. Y en Málaga el palacio episcopal; la iglesia del Sagrado Corazón; la de San Agustín; la de los Santos Mártires; la de Santo Domingo; el famoso Cristo de Mena, que allí se veneraba; la del Carmen; la del Servicio Doméstico; la de San José; la de San Juan; la del colegio de Barcenilla; la parroquial de la barriada de Miraflores del Palo y la iglesia de Zamarinilla» (Dictamen II, p. 10).

El *Dictamen* se refiere a continuación, serena y documentadamente, a la Revolución de Octubre de 1934 en Cataluña, en Asturias y en Madrid. Tanto el análisis del Dictamen como los documentos del Apéndice contienen cuanto se sabía en 1938/1939 sobre la Revolución de Octubre. Hoy sabemos mucho más, gracias a la documentación revelada por los mismos socialistas y por sus aliados los comunistas, que ya hemos citado. Pero ahora nos interesa constatar que el Dictamen concedía una importancia capital a la Revolución de Octubre como prueba de la ilegitimidad de la República, que ni siquiera acertó a enjuiciarla judicial ni parlamentariamente; ni a condenarla con efectividad.

LAS ELECCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS E ILEGÍTIMAS DE FEBRERO DE 1936

Llevados por el espejismo de lo políticamente correcto y por los trabajos de aquellos autores que creen esencialmente democrática a la Segunda República, e incluso la consideran como democracia ejemplar, muchos españoles creyeron desde 1936 que el Frente Popular había ganado las elecciones de 1936; que las había ganado con trampas y coacciones, pero que tales defectos no invalidaban el resultado. Por eso el Congreso de 1999 osó condenar el «golpe militar fascista» del 18 de julio porque se había dado «contra la legalidad republicana». Las secciones segunda y tercera del *Dictamen* de Burgos expresan la convicción de toda la España nacional que negaba abiertamente esa legalidad republicana; y después de haber estudiado a fondo el problema, puedo albergar algunas discrepancias menores o metodológicas, pero estoy completamente convencido de que ésa es la verdad. En otros períodos e incluso obras anteriores no había profundizado lo suficiente; ahora sí y debo expresar mi testimonio con los razonamientos que me han llevado a concebirlo.

1. *El compromiso revolucionario del Frente Popular*

En realidad todo el año 1935, desde que las izquierdas empezaron a levantar cabeza después de la tragedia y la vergüenza de su fracaso en la Revolución de Octubre, aquella España de los frentes opuestos, de los discursos en campo abierto y de la rebelión de las masas vivió en plena campaña electoral. La intensidad de la campaña se agudizó cuando, a mediados de diciembre de 1935, el presidente Alcalá Zamora se negó a dar el poder a Gil Robles e intentó, con el señor Portela Valladares, unos extraños experimentos de centro político que en realidad encubrían sus deseos de protagonismo político en la República. Por desgracia la opinión pública seguía encrespada con la resaca de la Revolución de Octubre y no quería saber nada de centro ni de moderación, sino de dirimir de una vez por todas el destino de España o mejor de las dos Españas que se iban a enfrentar, se estaban enfrentando ya, irreversiblemente.

El 7 de enero de 1936, el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, disolvió las Cortes de 1933 y, tras ratificar en el gobierno a don Manuel Portela Valladares, le entregó el decreto de disolución de esas Cortes, en el que se establecía la primera vuelta de las elecciones generales para el 16 de febrero de 1936. La campaña preelectoral tomó entonces un ritmo infernal. Las dos Españas enfrentadas trataron de reunirse en dos bloques destinados al choque: el centro-derecha no consiguió un frente homogéneo, sino tan sólo un

conjunto de acuerdos parciales y locales; en cambio las izquierdas sí que lograron unirse, aunque fuera precariamente, en la alianza para las elecciones y para gobernar después —se trataba de una verdadera coalición— denominada Frente Popular. Las mayores discusiones en la izquierda ya estaban sustanciadas: se referían a la admisión o el rechazo del Partido Comunista en el seno del Frente. Decidió la admisión, contra los moderados del PSOE, el líder de la mayoría extremista o *bolchevique* del PSOE, Francisco Largo Caballero, y el PCE, satélite abyecto de la Unión Soviética, es decir, del demócrata Stalin, entró a formar parte del Frente Popular, llevando además del ronzal a Caballero, sus socialistas revolucionarios y sus Juventudes, entregadas ya virtualmente por su líder Santiago Carrillo.

Se discutió mucho en otros tiempos si las izquierdas, y todo el Frente Popular, habían adquirido un compromiso revolucionario al que una parte del Ejército se adelantó con el Alzamiento del 18 de julio de 1936. Eran discusiones bizantinas. Ese documento revolucionario, e incluso, se decía, inspirado por Rusia, no fue el conjunto de proyectos apócrifos que publicó el diario caballerista *Claridad* poco antes de estallar la guerra civil. No hacía falta alguna. Hay, como veremos, otros documentos, pero el verdadero documento revolucionario del Frente Popular era el pacto del Frente Popular, firmado por las izquierdas republicanas y los llamados «partidos obreros». Los partidos republicanos eran Izquierda Republicana (Azaña), Unión Republicana (Martínez Barrio). Los partidos obreros eran el PSOE, con la UGT; las Juventudes Socialistas; el PCE, el partido sindicalista de Pestaña (procedente de la CNT) y el Partido Obrero de Unificación Marxista, de Joaquín Maurín y Andrés Nin, comunistas disidentes conocidos como trotskistas. La CNT-FAI quedaba fuera, pero sus militantes votaron masivamente al Frente Popular porque el primer postulado del Pacto era la amnistía total por la Revolución de Octubre. Ese primer postulado equivalía a enarbolar la bandera de Octubre, la revolución abortada, cuyos propósitos revolucionarios conocemos documentalmente.

Pero el documento revolucionario del 15 de febrero de 1936 era realmente ese documento fantasma que algunos buscaron inútilmente en otros papeles comprometedores, que no hacían ninguna falta. El Pacto del Frente Popular, tras asumir la bandera de Octubre expresamente, pide «restablecer el imperio de la Constitución» que todos los partidos firmantes habían violado flagrantemente en octubre de 1934. Luego el pacto promete reformarlo todo, es decir, adecuarlo a los fines de la izquierda coaligada; la estructura local, las Cortes, la justicia «libre de los viejos prejuicios de jerarquía social», es decir,

una justicia revolucionaria… Se prometen toda clase de represalias contra la actuación de los «Gobiernos reaccionarios», es decir, los que legítimamente habían vencido en las elecciones de noviembre de 1933. Y el resto del manifiesto-programa es lo que llama Gil Robles exactamente «el acta de desacuerdos».

En el punto III se dice que los partidos republicanos no aceptan la nacionalización de la tierra, pero los partidos obreros sí, es decir, que se nacionalizará la tierra revolucionariamente. Curiosamente, los partidos obreros no exigen al principio de la nacionalización de la industria, aunque lo pondrían en vigor antes de acabar ese año 1936. Republicanos y obreros discrepan en cuanto al alcance de las obras públicas (para los obreros todas las obras serían públicas); en cuanto a la nacionalización de la Banca, que los obreros exigen; en cuanto a la idea de la República social de clases enfrentadas que exigen los obreros y no admiten los republicanos. Unos y otros coinciden en que la enseñanza ha de ser un atributo del Estado; y en el pleno restablecimiento de la legislación autonómica. En el Pacto se indica que gobernarán los republicanos exclusivamente, con el apoyo exterior (es decir la coacción absoluta) de los partidos obreros. (Pacto en R. de la Cierva: *Los documentos de la primavera trágica*, 1967, p. 66 s).

Insisto; el Pacto del Frente Popular equivale a la ratificación y la continuación de la Revolución de Octubre; es un catálogo de medidas revolucionarias que a nadie podía engañar. Su cumplimiento rebasó, con tintes anárquicos, todas las expectativas de sus promotores.

2. *Una campaña electoral antidemocrática*

La bandera de las izquierdas era, por tanto, pura y simplemente la revolución, que ya había probado España en octubre de 1934. Las derechas, aun desunidas, lo advirtieron y su lema electoral respondía exactamente a la idea revolucionaria de las izquierdas: *Contra la Revolución y sus cómplices*. Era un lema negativo, que excitaba al miedo de las derechas frente al odio de las izquierdas; mientras que las izquierdas, con su programa, patentizaban su miedo al que creían odio de las derechas, concretado en la represión por los sucesos de Octubre. Nada tiene de particular que la campaña electoral, que ya se arrastraba como venimos diciendo durante todo el año 1935, se recrudeciera a mediados de diciembre de ese año con la caída del centro-derecha y se desbordara en el paroxismo desde la convocatoria de elecciones el 7 de enero de 1936.

Todas las paredes de España se llenaron de carteles. Más agresivos los de la izquierda, en que el motivo de Octubre reaparece con fuerza amenazadora. Más abundantes, incluso inundantes, los de las derechas, sobre todo la derecha católica, que derrochó una profusión de medios tal vez exagerada. Porque, junto al lema «Contra la Revolución y sus cómplices», aparecía con exceso la figura del Jefe con actitudes totalitarias: «Éstos son mis poderes», que eran las masas reales que le seguían; y «A por los trescientos», el número de diputados que la CEDA pretendía obtener. José Antonio Primo de Rivera, que se reveló como un extraordinario analista político, dijo que el enorme cartelón que exhibía en la Puerta del Sol una desmesurada figura de Gil Robles fue un grave error que produjo rechazo. Es posible, y eso que en la campaña Gil Robles fue casi el único gran líder que se mostró inequívocamente demócrata; casi todos los demás se comportaron antidemocráticamente.

El famoso hispanista Raymond Carr resume la esencia de la campaña electoral magistralmente: «Tanto derechas como izquierdas habían basado su propaganda electoral en sus respectivas actitudes sobre la Revolución de Octubre[67]». Gil Robles traza una excelente introducción a las elecciones de febrero con base en las vivencias de Octubre por ambos frentes. El 9 de febrero, cuando la campaña electoral rugía en toda España, se celebraban 387 actos de la derecha, 300 del centro ficticio y 361 del Frente Popular. Ya desde sus preparativos revolucionarios de 1934, Indalecio Prieto profetizaba: «Habrá una lucha entre las dos Españas». Por entonces, dos años antes de la campaña de 1936, Manuel Azaña resumía la situación en «dos bandos irreconciliables». El testimonio más conocido y significativo proviene de un historiador socialista, Antonio Ramos Oliveira: «Si las elecciones de 1933 tuvieron efecto en una atmósfera de guerra civil, las de febrero de 1936 fueron la guerra civil misma. Las fuerzas políticas más considerables de la nación se agruparon en dos bloques irreconciliables y de parejo volumen. La propaganda electoral, tumultuosa y violenta, sobrepasó en incidentes a toda experiencia anterior de igual linaje. Estaba de manifiesto que a ambos bandos se les alcanzaba sin asomo de duda el carácter decisivo de la prueba». El texto más profundo que expresa la situación interior de las Dos Españas no sólo en la guerra civil, sino en su período precedente, exacerbado a partir de los años 1934 y 1935 y manifestado con caracteres explosivos en la campaña electoral de enero-febrero de 1936, se debe a la reflexión de Manuel Azaña en *La Velada en Benicarló*:

Rivera.— La nación está dividida internamente en dos bandos irreconciliables.

Garcés.— Ni más ni menos. Estoy demostrándolo, o más bien recordándolo. Un frente interior de sinuoso trazado separa a unos españoles de otros, más profundamente que separan a la nación entera de los pueblos extraños, las fronteras territoriales políticas. Si en virtud de tal separación la llama emblemática del espíritu nacional es bífida, concluyo que la nación, por lo menos actualmente, no existe.

Rivera.— Frontera trazada por el odio.

Morales.— Es innegable. Mas ¿por qué se odian hasta ese punto? ¿Qué se han hecho los españoles unos a otros para odiarse tanto?

Rivera.— Acuchillarse sin piedad.

Morales.— Durante la guerra… Mas ¿por qué se acuchillan? ¿Por qué se odian hasta recurrir a la matanza?

Marón.— El odio es engendro del miedo. Una parte de España temía, hasta el pavor, a la otra parte. La perenne amenaza y los desquites atroces han mudado en pavor el aborrecimiento y azuzado el espíritu de venganza. El odio es injustificado. El miedo es pésimo consejero. Ha exagerado los peligros. Un viajero habla de la energía de tigre del español cuando se irrita. Ninguna irritación mayor que la de saberse destinado a las fieras[68].

El 21 de enero de 1936 un benemérito grupo de intelectuales y profesores, presididos por el exministro de la Monarquía don Ángel Ossorio y Gallardo e integrado, entre otros, por Unamuno y Azorín, publicaba un noble manifiesto para salvar a España de la guerra civil. Ya era tarde. Desde las sombras de octubre ya no era posible la convivencia ni la paz. Experiencias extranjeras, como las persecuciones de Alemania, Italia y Austria contra los socialistas y comunistas, o el ejemplo santificado del paraíso soviético, pudieron excitar el odio y el miedo en media España; mientras que el peligro, más real, de un nuevo Octubre atizaba el miedo y el odio de la otra media. Pero prácticamente nadie fuera de España pronosticaba una guerra civil en España, ni menos la preparaba. La guerra civil se originó dentro de España, por motivaciones y con antecedentes españoles, nada más. No fue efecto de incitaciones exteriores, ni prólogo para la guerra civil europea conocida como Segunda Guerra Mundial. Nada tuvo que ver con ella. Lo recordaremos enérgicamente en su momento.

Manuel Azaña reflexionaría durante y después de la guerra civil, como acabamos de comprobar, de forma imparcial y elevada sobre sus causas. Pero en la campaña electoral de 1936, como líder exaltado del Frente Popular, se comportaba de forma tan antidemocrática como cuando se negaba a dimitir en 1933 y no admitía más victoria que la del Frente Popular. Los testimonios son concluyentes. «Fecha decisiva —afirmaba en el teatro de la Zarzuela en vísperas de las elecciones de febrero— y en la que se juega a cara y cruz el porvenir del régimen republicano». Tres días antes había dicho en el teatro Principal de León: «Nosotros esperamos una de estas dos cosas: o un triunfo del Frente Popular o un atraco de los poderes oficiales para robarnos el triunfo después de obtenido realmente y que no aparezca en las cifras oficiales». Y

remataba: «Las izquierdas, si las elecciones son sinceras (es decir, si las ganan, N. del A.) acatarán el voto ciudadano, pero si no lo son se saldrán del camino legal[69]». Azaña y sus colegas tenían experiencia de ello; ya se habían salido de ese camino en 1931, en 1933 y 1934: volverían a salirse a raíz del 16 de febrero de 1936.

Si así se comportaban los moderados del Frente Popular puede imaginarse el lector lo que pronosticaban los más radicales. Y a la cabeza de todos, el líder socialista del PSOE, Francisco Largo Caballero, de quien el 25 de enero reproduce las siguientes palabras su diario afecto, *Claridad*:

> «Llamarse socialista no significa nada. Para ser socialista hay que ser marxista, hay que ser revolucionario… Para los socialistas españoles, la fuente de las ideas está en *El Capital*, en la crítica y en el *Manifiesto comunista*, en la orientación política. Ésta es también la fuente de sus ideas para muchos trabajadores que tienen otro título que el nuestro, otro nombre pero que realmente no les separa de nosotros una gran diferencia. ¡Qué digo, ninguna diferencia!».

Es decir, ser socialista era ya lo mismo que ser comunista.

Pero el apogeo de la provocación llegaría en el discurso que el líder socialista pronunció en Valencia, tal como lo refleja, con plena identidad, el diario comunista *Mundo Obrero* del 3 de febrero:

> «Las derechas me acusan de que yo preparo la guerra civil. Yo tengo que decir aquí que cuando yo he dicho que hay que responder con la guerra civil es contestando a sus amenazas de pasquines y Prensa que dicen que van a exterminar al marxismo y esto será imposible porque nosotros (*La ovación impide oír las últimas frases, Vivas y gritos, el público, puesto en pie y con el puño en alto, acoge estas palabras*). Todo esto lo hacen para atemorizar a la clase media, presentándonos como salvajes, porque no decimos la verdad respondiendo a esas gentes y les advertimos que no hablamos por hablar, sino que cumplimos nuestra palabra».

Es decir, que Largo Caballero reconoce palmariamente que, para responder a las amenazas de la propaganda derechista, él incita a responder con la guerra civil. Ante la amenaza final del párrafo citado, pierden todo su valor histórico las dulcificaciones de estas palabras que exhiben los historiadores de la izquierda cuando las consideran como simples bravatas exageradas. No lo eran, sino amenazas auténticas, propósitos firmes. Los habían cumplido ya en Asturias de 1934, los cumplirían en el período del Frente Popular y durante la guerra civil. En el discurso de Valencia, Caballero ratificaba lo que había dicho en el de Alicante el 25 de enero, según su órgano *Claridad* recogió el 30 del mismo mes:

> «Si triunfan las derechas no habrá remisión: tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. No se hagan ilusiones las derechas, no digan que esto son amenazas: son advertencias. Ya saben que nosotros no decimos las cosas por decirlas; las decimos porque las llevamos dentro del corazón y del cerebro el propósito de hacerlo». (Gil Robles: ibíd., p. 489).

Los líderes más significativos de los dos bandos anunciaban, pues, que las elecciones del 16 de febrero iban a zanjar definitivamente los problemas de España. La única excepción era Gil Robles, que avisaba del peligro, pero nunca prometió la desobediencia a las urnas. Las otras dos figuras más significativas contra el Frente Popular, José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, advirtieron también que no acatarían el resultado electoral en caso de derrota. José Antonio de Aguirre, líder del PNV, citó a Calvo Sotelo sin que éste lo desmintiera, porque era verdad:

> «No decimos, como dijo el señor Calvo Sotelo en el mismo recinto del frontón Urumea, que no esperamos ganar en las urnas, que España no tiene más solución que una dictadura roja o una dictadura blanca, que España no tiene solución de legalidad».

Y el jefe de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que no pudo incorporarse a una candidatura del centro-derecha porque sus compañeros le exigían un número de actas imposible de aceptar por Gil Robles, avisó también con claridad el 2 de febrero:

> «Vosotros, religiosos, católicos españoles, que vais a ver convertidas las iglesias en museos de los sin Dios; vosotros, ¿acataríais el resultado electoral? Pues la Falange tampoco; la Falange no acataría el resultado electoral[70]».

Nadie esperaba declaraciones moderadas por parte de los comunistas, que luego, en la guerra civil, tanto alardearon de moderación mientras se adueñaban inexorablemente del Poder. Los comunistas preferían soliviantar los ya exaltados ánimos de Caballero y sus socialistas revolucionarios, pero no dejaron lugar a engaño. Al comenzar el mes de febrero de 1936, ya dentro del pacto del Frente Popular, difundieron un llamamiento en que afirmaban fríamente que el programa revolucionario y explosivo del Frente Popular no era más que la mínima parte de las aspiraciones comunistas[71].

En Cataluña, la Lliga votó con las derechas, la Esquerra con el Frente Popular. Los nacionalistas vascos actuaron como independientes, pero sus disputas con la derecha monárquica les alejaron de toda coalición con las derechas, que habían abrazado en 1931. Y en la Comisión de Actas, en la que el Frente Popular consumó el pucherazo, el PNV votó con el Frente Popular; la suerte estaba echada. Los centristas oficiales, dirigidos por Portela, trataron de conseguir diputados gracias al apoyo del poder, mediante la técnica del pucherazo; no consiguieron nada. Los centrista desahuciados de Lerroux, rota su alianza con la CEDA católica, votaron solos y las urnas les abandonaron ante el recuerdo de sus escándalos. La derecha monárquica, el Bloque Nacional, se incorporó a varias candidaturas de la CEDA, pero sin convicción alguna. Lo mismo sucedió a veces con los tradicionalistas. Quedaba un gran

bloque de votos, el de los anarcosindicalistas, cuya abstención en las elecciones de 1933 exageró la por lo demás clara victoria de las derechas. Los líderes anarquistas recomendaron, como siempre, la abstención. Pero la victoria del Frente Popular significaba amnistía, y muchos anarcosindicalistas seguían en la cárcel por su participación en la Revolución de Octubre. Por tanto las masas anarquistas desobedecieron a sus líderes vacilantes y votaron Frente Popular. En todo caso queda claro que al no existir —muy mayoritariamente— una decisión de acatar los resultados electorales ni de aceptar la convivencia pacífica tras las elecciones, éstas no fueron en modo alguno democráticas en el momento de celebrarse. Y la situación se agravó después, ante las coacciones, las ilegalidades y los pucherazos de la izquierda.

3. *Los resultados electorales: el dictamen de Gil Robles*

Creemos, por tanto, probado hasta la saciedad que en las elecciones de febrero de 1936 no existió, mayoritariamente, el espíritu de convivencia que era necesario para considerarlas democráticas. Fuerzas políticas decisivas prometieron que no acatarían el resultado electoral si no les era favorable y de hecho sus líderes, incluso los poquísimos que no se habían comportado así, se dejaron arrastrar a la guerra civil después de haberla invocado en algunos casos notorios y comprobados. Pero ahora nos interesa investigar si esas elecciones tan encrespadas pueden considerarse legales. De dos fuentes escritas se deduce claramente que no: el testimonio de un protagonista, don José María Gil Robles, y la opinión razonada y documentada del *Dictamen de Burgos*. Repasemos las dos pruebas detenidamente. Existen otros análisis electorales; pero el más conocido es obra de un autor que considera a la República ciegamente como régimen democrático, por lo que deja de interesarnos automáticamente, ya que jamás prueba esa arbitraria tesis.

En su libro *No fue posible la paz* (Barcelona, Ariel, 1969), José María Gil Robles ofrece testimonios suficientes como para considerar ilegales las elecciones del Frente Popular. El conjunto de los capítulos XV y XVI del libro de Gil Robles contiene una acumulación de pruebas que nos parece irresistible. No olvidemos que don José María no era sólo el jefe de la CEDA, sino el presidente del partido que obtuvo el mayor número de diputados en toda la Cámara. Su opinión, muy fundada y documentada, me parece decisiva. Su testimonio sobre las gravísimas dificultades que le impidieron formar un gran frente unido de las derechas en toda España es verídico y patético. Eso sólo se consiguió en algunas circunscripciones como Madrid, donde la candidatura, encabezada por Gil Robles, llevaba a José Calvo Sotelo en el

número 2. En otras provincias cada grupo derechista acudió en solitario, quitando votos a los que poseían mayores posibilidades. Empeñado el presidente de la República, Alcalá Zamora, en conseguir votos para el partido gubernamental de centro que patrocinaba el jefe del gobierno, señor Portela, éste procuró por medio de algunos gobernadores civiles un apoyo a las candidaturas gubernamentales con todo el ardor y el descaro de los tiempos del caciquismo. Y después de registrar, en el sentido que hemos indicado, la oleada antidemocrática que invadió la campaña electoral, Gil Robles expone su testimonio sobre la jornada electoral del 16 de febrero y sus resultados.

A su despacho de Acción Popular llegaban continuamente denuncias de desmanes, coacciones e irregularidades ante las urnas de casi toda España. Pronto vino a la convicción de que las candidaturas del Frente Popular, apoyadas muchas veces por los gobernadores, no alcanzaban sin embargo ni de lejos la mayoría absoluta en la primera vuelta. Alarmado por tan graves presagios, Gil Robles se vio obligado a ponerlos en conocimiento del jefe del Gobierno durante la noche del 16 al 17 de febrero, habló con él y le animó a imponer el orden sin lo cual los resultados adolecerían de falsedad. «En breves palabras —dice— le pinté la situación. Dominaba ya la anarquía en algunas provincias, los gobernadores civiles desertaban de sus puestos y las turbas amotinadas se apoderaban de las actas» (Gil Robles p. 492). Gil Robles insta a Portela a que ponga orden a toda costa y que para ello utilice el recurso constitucional de declarar el estado de guerra. Como notaba indeciso y vacilante al jefe del gobierno, que asumió desde el primer momento una actitud fatalista y pasiva, Gil Robles envió recado al general Franco, que era entonces jefe del Estado Mayor Central, para informarle de los hechos. Franco pide al ministro de la Guerra, general Molero, que lleve al Consejo del día siguiente la declaración del estado de guerra. Entretanto Portela, con Gil Robles delante, logra hablar con el presidente de la República que no autorizó el estado de guerra, pero sí el de alarma.

Esa misma noche Portela consideró que ya se había producido el triunfo del Frente Popular, lo cual era completamente falso. Contra una disposición expresa del gobierno, el día 17 se produjeron muchas manifestaciones para celebrar ese falso triunfo. En el consejo de ministros se acordó proclamar el estado de alarma y aun el estado de guerra donde fuera necesario. Cuando Portela comunicó al general Franco que ya tema en su poder el decreto, el jefe del Estado Mayor Central consiguió que varias guarniciones aplicasen el decreto, pero la medida tuvo que interrumpirse a media tarde de ese día 17 por orden del presidente de la República y, como insinúa Gil Robles, por

instrucciones masónicas superiores. Esa tarde Franco visitó a Portela para que aplicase el decreto; debía hacerlo el gobierno y no el Ejército, en quien Franco no veía unidad moral para ello.

Las elecciones seguían indecisas. Una fuente tan poco sospechosa como el diario comunista *Mundo Obrero* publicó, el 18 de febrero, un mapa que reproduce Gil Robles, en el que se pronosticaba el triunfo de las derechas en varias provincias cuando se celebrase la segunda vuelta; con lo que la victoria final se inclinaría por las derechas. Éste es un documento importantísimo del que nadie habla. El director general de la Guardia Civil, general Pozas, masón y muy izquierdista, convenció al masón Portela de que no declarase el estado de guerra. Pero además Portela, completamente abatido, desertó de la jefatura del gobierno, dimitió el 19 de febrero y forzó a que Alcalá Zamora entregase el poder al Frente Popular. A mi modo de ver, éste es el momento más grave y más invalidante de todo el proceso electoral. El gobierno estaba obligado a presidir el conjunto de las elecciones, vigilar la pureza de los resultados y presidir también la segunda vuelta. Así lo exigía la ley y así se había cumplido en noviembre de 1933. Ahora no. Ahora el señor Azaña ocupó la jefatura del gobierno, que tomó, según dijo, del medio del arroyo, el mismo 19 de febrero de 1936. Gil Robles muestra los desmanes que a partir de entonces cometieron las turbas del Frente Popular. Robaron y violaron cuantas actas les vino en gana; liberaron a los presos, políticos y comunes; tomaron represalias contra personas y políticos de derechas. Por supuesto que el Frente Popular presidió la segunda vuelta de las elecciones, cuyos resultados fueron los que el nuevo régimen deseaba. El propio don Niceto Alcalá Zamora, en artículo publicado el 17 de enero de 1937 en el *Journal de Genève*, ofrece un testimonio decisivo, que luego presentaremos.

Y Gil Robles concreta el efecto de esa conducta ilegal: «Al amparo de ese desorden, el Frente Popular, que había obtenido doscientos mil votos menos que los candidatos derechistas, logró arrebatar a éstos treinta y cinco actas. Aun así no disponía sino de unos doscientos escaños en un Parlamento de 473 diputados» (p. 250). Por tanto, el Frente Popular no consiguió en primera vuelta la mayoría absoluta y carecía del menor derecho para formar gobierno. Para ello necesitaba mayoría absoluta que consiguió ilegal y fraudulentamente como resume Gil Robles: «La conquista de la mayoría absoluta hubo de producirse en una segunda fase de la operación, tan escandalosa, por lo menos, como la primera. Una vez reunidas las Cortes, se aprovechó esa mayoría inicial, obtenida por tales procedimientos, para anular un gran

número de actas derechistas de valor indiscutible, como por ejemplo todas las de Granada y Cuenca, tres de Salamanca y una de Burgos».

Por tanto las elecciones de febrero de 1936 fueron, inequívocamente, antidemocráticas, falsas, inválidas. El gobierno, que ya estaba formado antes de que se terminaran las elecciones y se proclamaran los resultados, era un gobierno ilegal e ilegítimo. Gil Robles cita, además del suyo, numerosos testimonios en ese sentido. Entre ellos el más sorprendente es el que apareció en *El Socialista* del 4 de junio de 1936:

> «La victoria de febrero se asienta sobre algunos supuestos falsos, los mismos, exactamente los mismos, sobre los que se asentó la República del 14 de abril».

Este dictamen que publicó el órgano de los socialistas moderados me parece el más lúcido de cuántos conocemos acerca de la tesis que estamos sustentando: las elecciones del Frente Popular fueron antidemocráticas e inválidas, ilegales en su propia entraña.

4. *La ilegitimidad de las elecciones según el Dictamen de Burgos*

Si el dictamen de Gil Robles posee toda la autoridad de un observador que era, además el jefe del partido que más escaños obtuvo en las elecciones de febrero de 1936, el *Dictamen* de Burgos ofrece en su sección segunda tal cúmulo de datos, con la documentación de las actas delante, que corrobora y aun agrava las certeras conclusiones del jefe de la CEDA. Los capítulos de Gil Robles que hemos extractado reflejan la proximidad y la documentada vivencia del testigo inmediato; los análisis del *Dictamen* de Burgos provocan en quien los estudia el efecto abrumador de sus listas, sus certificados, sus relaciones de nombres y casos. Coincide el *Dictamen* con Gil Robles en que los dos bloques electorales fueron de magnitud semejante, aunque con ligera ventaja de las derechas; pero como Gil Robles recuerda precisamente, las veleidades de la ley electoral arbitrada por los republicanos en su favor concedía tal prima a las mayorías que arrojó un resultado exageradamente favorable a las derechas en noviembre de 1933 y a las izquierdas en febrero de 1936, aunque el número de votos derechistas superase al de los izquierdistas. Hay sin embargo que observar algo muy importante; la consideración anterior sería válida si las actas electorales se hubieran proclamado con autenticidad; pero al haberse robado y falsificado en muchas partes, la distribución de escaños final quedó falseada, lo que convirtió en ilegales a las elecciones y en ilegítimo al gobierno que se instaló en el poder sin que se hubieran proclamado oficialmente los resultados.

El *Dictamen* de Burgos se redacta con documentación más copiosa de la que dispuso Gil Robles para su libro y por eso los resultados del *Dictamen* se ajustan a la realidad más que los de Gil Robles, aunque son semejantes. Es imposible resumir aquí los datos y documentos del *Dictamen* de Burgos, que dedica muchas páginas a sus pruebas concretas; lo tiene el lector a su disposición en la Biblioteca Nacional. Nos limitamos a citar su conclusión básica:

> «Es evidente que los casos aludidos representan por lo menos cincuenta actas de diputados, quedando fuera de este cómputo aquellos otros casos de falseamiento electoral correspondientes a las provincias aún dominadas por los marxistas (toda la zona Centro-Sur de la República a fines de 1938, N. del A.), en que la Comisión no ha podido investigar todavía.
>
> »De las listas oficiales de diputados resultan inscritos en los partidos del Frente Popular 279 diputados y restando de dicha cifra esas cincuenta actas resultan 229 diputados, los cuales no alcanzan la mitad más uno de la Cámara, que es de 237 diputados», (*Dictamen* I, p. 41).

Estas cincuenta actas se investigan una por una en la documentación del tomo II, sin que quede duda alguna respecto del resultado final, que arrojaría menor número de diputados una vez realizada la investigación de la Comisión encargada del Dictamen, pero no la realizó, que sepamos.

Añade el *Dictamen* una consideración importante. Analiza una por una las principales actuaciones de las Cortes del Frente Popular y el número de votos que obtuvieron. Sin mayoría absoluta esos actos hubieran resultado prácticamente imposibles, por ejemplo, la invalidación de nuevas actas de la derecha, la destitución del presidente de la República, etcétera. Toda la acción de gobierno del Frente Popular queda afectada, por tanto, mediante la ilegitimidad de las elecciones de 1936 y la formación anticipada e ilegal de ese gobierno.

En resolución, con la formación de un Parlamento afectado por tales vicios de origen, se incumplió el art. 52 de la Constitución de 1931, que establecía: «El Congreso de los Diputados se compone con los representantes elegidos por sufragio universal, directo y secreto». Pero como acabamos de ver no fue así. Un número decisivo de diputados —por lo menos cincuenta— llegó a sus escaños una vez designados por el fraude, la coacción y el pucherazo. Por tanto, concluye con acierto el *Dictamen*: «El Parlamento de 1936 fue inconstitucional y faccioso».

LA ILEGITIMIDAD DE EJERCICIO DEL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR

En medio del debate histórico no olvidemos un hecho esencial: el Alzamiento del 18 de julio de 1936 no se hizo contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular que desgobernaba a la República, iba cayendo inexorablemente por el plano inclinado de la Revolución y acosaba con auténtica actitud terrorista a lo que Gil Robles definió como «media España que no se resigna a morir». Estamos tratando de demostrar en este libro que la República española de 1931 no fue democrática; que los partidos republicanos y obreros se alzaron antidemocráticamente en la Revolución de Octubre; y que el gobierno del Frente Popular, instalado ilegalmente en el poder cuando aún no se habían consumado las elecciones de febrero de 1936, era desde entonces, en su mismo origen, «un gobierno ilegal y faccioso» cuando empezó a ejercer el poder a raíz de unas elecciones falsificadas y coactivas. Pues bien, examinada la ilegitimidad de origen de tal gobierno vamos ahora a analizar su ilegitimidad de ejercicio, que la doctrina tradicionalista contrapuso enérgicamente a la legitimidad de origen en la mente de sus mejores pensadores.

Contemplaremos la ilegitimidad de ejercicio del Frente Popular, y la probaremos documentalmente, en dos casos especialmente significativos, sin olvidar que las Cortes del Frente Popular, nada más constituirse, agravaron su ilegitimidad de origen al reducir arbitrariamente todavía más el número de actas parlamentarias que habían ganado en buena lid sus enemigos, como demuestran cumplidamente las dos fuentes que hemos aducido en los epígrafes anteriores: el testimonio de Gil Robles y el *Dictamen* de Burgos.

1. *La destitución ilegal del presidente de la República*

Don Niceto Alcalá Zamora es una figura noble y patética, a quien debemos, en sus *Memorias* un testimonio de historia política realmente excepcional. Liberal sincero, católico practicante, exministro de la Monarquía, había evolucionado hacia el horizonte de la República cuando el liberalismo español, junto con los demás partidos, fue violentamente excluido del poder por la Dictadura de Primo de Rivera en 1923, con la aquiescencia inmediata del Rey don Alfonso XIII. Jurisconsulto brillante, letrado del Consejo de Estado, político de amplia experiencia, moderado en sus convicciones, fue utilizado por los revolucionarios de la República para que desde la Presidencia tranquilizase a sus enemigos mostrándoles esa faz moderada de la que los extremistas carecían. Al final de su mandato, tras las elecciones de 1936, se había granjeado la enemistad de todos. Las derechas

no le podían ver porque había abandonado al Rey y sentía evidentes celos políticos de Gil Robles, porque el gran político salmantino se había hecho con la dirección de la derecha católica a la que don Niceto se creía con mejor derecho. Las izquierdas no le podían ver; Azaña por incompatibilidad personal, los socialistas por su profesión católica y su carácter conservador. En las Cortes del Frente Popular casi no tenía un solo amigo; tanto José Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional, la derecha monárquica, como socialistas y comunistas ansiaban públicamente la destitución del presidente. Sus últimas semanas se parecen a todo un calvario político. Si no hubiera tenido la previsión de marcharse de España, es más que posible su fusilamiento en cualquiera de las dos zonas en que se dividió España. Que no otro ha sido en España, demasiadas veces, el aciago destino de los moderados.

El artículo 81 de la Constitución establecía que la primera tarea de las nuevas Cortes nacidas de una segunda disolución presidencial sería examinar si esa disolución había sido pertinente, porque si votaban que no, el presidente de la República quedaba fulminantemente destituido.

Don Niceto estaba tranquilo. Los líderes del Frente Popular, señaladamente Azaña, le habían reclamado la disolución de Cortes que el presidente firmó el 7 de enero; en virtud de esa disolución había ganado, con los trampantojos que conocemos, el Frente Popular. Las derechas se habían opuesto a la disolución; querían mantenerse en el poder. Además don Niceto, como gran jurista, había advertido en el decreto que la disolución de 1936 era oficialmente la primera; cierto que en 1933 se habían disuelto las Cortes, pero entonces eran Constituyentes y por tanto esa disolución no se computaba. Algo semejante sucedió en 1979, cuando la legislatura abierta se denominó «primera legislatura», ya que la anterior, sin declaración expresa, había sido Constituyente porque había creado una Constitución. A don Niceto no le cabía en su bien organizada cabeza jurídica que, quienes habían subido al Poder por la disolución de enero de 1936, votasen ahora que tal disolución había sido innecesaria. Y tenía toda la razón.

Pero el Frente Popular y especialmente el PSOE querían librarse de él y junto con los comunistas, que gracias al PSOE habían obtenido un exagerado número de escaños, propusieron el 3 de abril el debate sobre la necesidad del decreto de disolución de Cortes. Don Niceto se vio perdido. No alargaremos el desenlace de su drama. El Frente Popular, en uno de sus gestos arbitrarios y contradictorios, votó a favor de que la disolución fue innecesaria; las derechas, que tampoco amaban al presidente, se abstuvieron vengativamente y sólo votaron en contra el puñado de amigos fieles que don Niceto mantenía

en el Congreso. Bordeó el ridículo la peregrinación de una comisión parlamentaria al domicilio del presidente, que no la recibió, pero contempló la escena tras unos cortinajes. Y salió de la escena para perderse en la Historia.

El Frente Popular, guiado por su paranoia revolucionaria, quiso entonces librarse de otro gran moderado y designó como candidato presidencial a don Manuel Azaña. De esa forma le privaba de facultades ejecutivas, le relegaba al Olimpo y cortaba después la iniciativa del socialista moderado Indalecio Prieto, que pretendió convencer a la minoría parlamentaria del PSOE de que le permitiese formar, de acuerdo con Azaña, un gobierno moderado de Frente Popular que pudiera salvar a España; en la primavera de 1936 ya se hablaba por todas partes de salvar a España. Los socialistas bolcheviques que eran mayoría y seguían a Caballero en estrecha colaboración con los comunistas, vetaron la inteligente combinación. Azaña fue elegido presidente de la República el 10 de mayo en el Palacio de Cristal del Retiro y se instaló en el Olimpo, desde el que contemplaría impotente cómo se desintegraban el Frente Popular y la República. Nombró jefe del gobierno a un político incapaz e imprudente, don Santiago Casares Quiroga, que contribuyó con sus inflamados disparates al estallido de la guerra civil. Pero casi no hacía falta; el Frente Popular, desmandado, acosaba cada día más a la media España que no se resignaba a morir. El *movimiento cívico-militar* se había puesto ya en marcha tan irreversible como los desmanes de sus enemigos.

2. *El Frente Popular, responsable del caos revolucionario*

Gil Robles expone en el capítulo XVII de su libro-testimonio tantas veces citado, una documentada antología de los desmanes cometidos, en las Cortes y en la calle, por el desgobierno del Frente Popular. Como España vivía bajo el estado de alarma, cuyo efecto principal era la censura de prensa, los líderes de la derecha católica, Gil Robles, y de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, recurrieron al único medio legal para informar a toda España de la situación: denunciar tales desmanes en el Parlamento, ya que cuanto quedaba registrado en el *Diario de Sesiones* estaba excluido de la censura gubernativa. Es curioso y lamentable cómo los historiadores afectos, a estas alturas, al Frente Popular, tratan hoy esas terribles listas que teman sumida a España en el terror. No niegan los hechos, que tampoco negaron los portavoces del Frente Popular en las Cortes, pero los achacan a la «justa venganza del pueblo» que respondía con la violencia al reaccionarismo de las derechas durante sus años de gobierno. La confrontación de los grupos extremistas del Frente Popular en la calle con los activistas de la llamada Primera Línea de

Falange era un hecho cierto; pero en todos los casos la agresión de los jóvenes revolucionarios precedió a la respuesta de los jóvenes falangistas y por supuesto la magnitud de las juventudes revolucionarias resultaba ingentemente superior, al menos diez veces superior, a favor de las milicias callejeras de choque que organizaban socialistas y comunistas, a quienes se sumaban los anarcosindicalistas, que retomaban a su querencia terrorista. A la que ya podía calificarse como guerra civil en la calle respondió el Frente Popular con la guerra civil en el Congreso. En la sesión del 16 de junio, que Gil Robles describe como «situación prebélica», Calvo Sotelo invocó al Ejército como «columna vertebral de la patria» y no sólo como «brazo ejecutor», según la definición de Gil Robles. Y comunicó la primera lista de desmanes, asaltos y destrozos, incendios de iglesias, número de muertos en desórdenes (setenta y cuatro) cuya responsabilidad atribuyó al Gobierno, como era natural. La respuesta del jefe del gobierno, Santiago Casares, fue una sarta de insultos y amenazas intolerables contra el diputado monárquico, a quien llegó a amenazar de muerte. La anarquía en el campo y en las fábricas parecía un eco de los enfrentamientos producidos en el Congreso. Insisto: no puedo, en los límites de este libro, transcribir las numerosas páginas con que Gil Robles prueba lo que ya probó abiertamente en las Cortes del Frente Popular; que el choque entre las dos Españas era inevitable y que la responsabilidad por este clima de guerra civil correspondía por entero al gobierno del Frente Popular. Las tensiones llegaron hasta tal punto que diversas personalidades republicanas pidieron la concesión al gobierno de plenos poderes y, en el caso de don Miguel Maura, la proclamación de una dictadura republicana, como hizo en varios artículos publicados durante el mes de junio en el diario *El Sol*.

Aquel ambiente exasperado provocaba en el campo de las derechas las reacciones detectadas y previstas por Gil Robles en su discurso del 15 de abril, que él cita extensamente en la p. 682 de su testimonio. El Frente Popular en bloque interpretó esa actitud defensiva de las derechas como fascismo, y desde entonces hasta hoy los supervivientes y los herederos del Frente Popular han calificado a sus enemigos de entonces y de ahora como fascistas, incluyendo en esta etiqueta a los militares que se sublevaron. El término me parece, ante el análisis histórico, inexacto y abusivo, una simplificación intolerable. Gil Robles dedica un luminoso epígrafe al *Mito y realidad del fascismo* (p. 687 ss). Su tesis es perfectamente aceptable: aun suponiendo que la identificación de Falange Española con el fascismo sea correcta, de lo que tengo muy serias dudas desde la Historia. En 1935 José Antonio Primo de

Rivera lo que pretendía crear era una izquierda nacional, un antipartido (era término suyo ya en 1933) de corte autoritario, pero a quien separaban del fascismo un acendrado sentimiento católico y, como él mismo dijo, un profundo sentido del humor. Con hondo sentido del análisis político, Gil Robles reconoce que desde el trucado triunfo del Frente Popular, las filas de la Falange, hasta entonces muy poco nutridas, recibieron innumerables adhesiones que desbordaron a sus dirigentes, que para colmo estaban arbitrariamente encarcelados desde mediados de marzo de 1936. Azaña y Casares llegaron a convencerse ciegamente de que Falange era un fascismo semejante al de Italia y Alemania; y además que Falange se había convertido en el enemigo más peligroso del Frente Popular, lo cual era completamente falso. Ese enemigo no era la Falange solamente, era la *media España que no se resigna a morir*, como les había advertido en plenas Cortes Gil Robles en la fecha citada. En cuanto al Ejército, ninguno de los generales y altos jefes que se sublevaron el 18 de julio era fascista. La Falange se había extendido entre la oficialidad del Ejército de África, pero más como protesta contra el Frente Popular que como conjunto de afiliaciones concretas. El tristemente célebre *golpe militar fascista contra la legalidad republicana* no fue sólo un golpe militar, ni un golpe fascista, ni siquiera simplemente un golpe. Esa expresión es tan falsa históricamente como la propia legalidad republicana que históricamente nunca existió, pero en el caso de que de ella quedaran algunos restos antes de las elecciones de febrero de 1936, se habían aventado ya irremisiblemente durante el desgobierno del Frente Popular.

Gil Robles relata, a partir de la p. 691, las muestras de hostilidad y las expresas amenazas de muerte que recibieron en las Cortes y en la prensa del Frente Popular los líderes de la derecha, es decir, él mismo y Calvo Sotelo. La estrella roja del Congreso, Dolores Ibárruri, se distinguió en las invectivas, así como su correligionario José Díaz, secretario general del PCE, aunque no todas las amenazas figuran en los diarios de sesiones por orden de quienes las presidían. Aquello no era sólo un clima de guerra civil, eran ya acciones de guerra civil que en más de un caso empezaban ya a llegar a los hechos. Los diputados de derecha respondían con valor y dureza, pero no puede señalarse un solo caso en que ellos iniciaran este tipo de dialéctica. Otro elemento fundamental del ambiente revolucionario que Gil Robles cita documentadamente, es la creación, adiestramiento y armamento de las milicias del Frente Popular, entre las que destacaban las Juventudes Socialistas, inmediatas ya al comunismo, y las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, de estricta dependencia y obediencia comunista. Unas y otras

habían actuado ya para la revolución de Octubre de 1934, pero cuajaron su organización efectiva como fuerzas de choque en la primavera de 1936. Los dos grupos paramilitares juveniles se fusionaron a fines de marzo, según la noticia dada por el diario comunista *Mundo Obrero*, el 25 de ese mes. El 10 de abril, el líder comunista José Díaz expresó el fin de esa unificación: «Queremos una sola milicia. Ni camisas rojas ni camisas azules; una sola milicia que sea el embrión del Ejército rojo en España» (Gil Robles, p. 705).

3. *La ilegitimidad de ejercicio del Frente Popular según el «Dictamen»*

Antes de analizar los hechos de la guerra civil en la calle y en las Cortes, el *Dictamen* de Burgos formula varias fundadas acusaciones contra el Frente Popular, que confluyen en la ilegitimidad de sus gobiernos.

Primera: La amnistía. La promesa de amnistía total por los sucesos de Octubre había sido clave de la presunta victoria del Frente Popular. La Constitución exigía en su art. 102 que «las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento». Pero el gobierno instalado ilegalmente el 19 de febrero de 1936, como sabemos, decidió la amnistía por decreto-ley de 21 de febrero, con manifiesta parcialidad e ilegalidad, que el Dictamen analiza cabalmente.

Segunda. Los patronos se ven obligados a readmitir a los asesinos de sus familiares. El Frente Popular añadió a la arbitrariedad el sadismo. Mediante decreto del 29 de febrero de 1936, los patronos debían restablecer las plantillas anteriores a la Revolución de 1934. El Dictamen prueba en su Apéndice algunos casos terroríficos.

Tercera. Por decreto de 24 de febrero, el Frente Popular restablece en sus funciones a las instituciones catalanas que se habían declarado rebeldes y separatistas en octubre de 1934.

Cuarta. Por varias disposiciones se legalizan las ocupaciones ilegales y revolucionarias de fincas rústicas; se violan la Constitución y la Ley de Reforma Agraria en puntos esenciales; se anulaban sin más procedimiento sentencias firmes; con lo que se fomenta la anarquía del campo, más visible aún que en las ciudades.

Quinta. Se atenta gravemente contra el Poder Judicial, desprovisto de la presidencia de los nuevos Jurados Mixtos de trabajo, se somete a magistrados y fiscales a traslados forzosos e ilegales, se jubila arbitrariamente al presidente del Tribunal Supremo, se introducen elementos extraños a la

magistratura en las comisiones destinadas a juzgar las responsabilidades de jueces y magistrados.

Todas estas acusaciones vienen respaldadas por expresos documentos del Apéndice que no podemos reproducir por ineludibles exigencias de brevedad.

A continuación, el *Dictamen* reproduce las acusaciones formuladas en el Congreso por parte del diputado Calvo Sotelo sobre los datos que demuestran el intolerable desorden público que desbordó por completo a los gobiernos del Frente Popular y que fue una de las causas evidentes de la guerra civil. Son listas que se encuentran en el libro de Gil Robles, en el de Arrarás y en todas las historias solventes de la Segunda República. Los diputados del Frente Popular trataron inútilmente de «explicar» la raíz de estos datos, pero nada pudieron decir para rebatirlos.

Desde este momento hasta la relación del asesinato de Calvo Sotelo, el *Dictamen* reproduce unos documentos muy difundidos antes de la guerra civil, en los que se pretendía demostrar la implicación soviética en los planes revolucionarios del Frente Popular. Nunca he creído en la veracidad de tales documentos, que estimo como una superchería de origen desconocido, seguramente procedente de medios de extrema derecha. Sin embargo, la situación de anarquía y desgobierno que vivía España, a lo largo de los seis primeros meses de 1936, explica el que muchas personas de orden, entre ellas numerosos militares, creyeran auténticos estos documentos evidentemente apócrifos y que como tales fueron denunciados por el diario caballerista *Claridad* poco antes de la guerra civil. En el campo de las derechas, pocas personas se enteraron de esta publicación; una característica de aquella época es que nadie leía en la derecha los periódicos de la izquierda, ni en la izquierda los diarios de la derecha. Una prueba de la incomunicación en que vivía España durante la República. Y en todo caso el Frente Popular era ya la Revolución; no necesitaba impulsos soviéticos para realizarla en España, como sus masas iban a demostrar muy pronto tras el Alzamiento de 1936.

LOS DOCUMENTOS DE LA PRIMAVERA TRÁGICA

A principios de 1967 publiqué, casi a la vez, mis dos primeros libros de Historia. El segundo se titulaba *Los documentos de la primavera trágica*, publicado por la sección de Estudios sobre la Guerra de España que yo mismo acababa de crear en el Ministerio de Información y Turismo durante el año de la importantísima y nueva Ley de Prensa propuesta por el ministro Manuel

Fraga Iribarne. Se trataba de un extenso estudio documental sobre el Frente Popular, hoy completamente agotado y que haré lo posible por reeditar algún día, porque creo que mantiene su interés. Son más de setecientas páginas que naturalmente no puedo ni resumir aquí. Pero puede ser útil al lector citar en el presente epígrafe los títulos y localización de los principales de esos documentos, que constituyen en conjunto una irrebatible acta de acusación contra el Frente Popular y su degeneración. Conservo la numeración de los documentos en ese libro.

Documento 22 *El comunismo ante las elecciones* (Mundo Obrero, 3. Feb. 1936)

El PCE se presentaría como partido moderado y democrático al estallar la guerra civil. Ante las elecciones del Frente Popular se muestra como lo que es: beligerante, revolucionario, antidemocrático. Dice que su revolución es democrático-burguesa, pero se refiere a la Revolución de febrero de 1917 en Rusia. La lucha que empieza en las elecciones es simplemente «fascismo y antifascismo». La tierra debe ser expropiada, la de los ricos y la de la Iglesia. Hay que arrancar a las mujeres de la Iglesia.

Documentos 44 y 45. *Protestas contemporáneas a las elecciones* (*ABC*, 29.3.36)

Diario de Sesiones 31.3.36.

Se ha dicho por historiadores y polemistas prorepublicanos (entre ellos el finado H. R. Southworth) que no hubo, a raíz de las elecciones de febrero, protestas de las derechas sobre falseamiento de actas. Estos documentos prueban que sí se publicaron enérgicas protestas. La minoría tradicionalista protestó en *ABC* con tanta energía que llegó a subrayar «la inutilidad de cualquier esfuerzo por vía parlamentaria». Y no sólo por las irregularidades de la Comisión de Actas, sino por la entrega ilegal del poder al señor Azaña. Más profunda aún fue la protesta de la CEDA por medio de su portavoz, Giménez Fernández, en la propia Comisión de Actas y en el Pleno, protesta que pasó al Diario de Sesiones. Allí habló de «sustitución de la voluntad popular, base de un régimen democrático, por el imperio de una minoría discutible, esencia de los regímenes totalitarios». Protestó también Renovación Española, por boca de don Antonio Goicoechea y por los tradicionalistas el señor Lamamié de Clairac. Todos los grupos de derechas abandonaron la Comisión de Actas y el Pleno que la ratificó. ¿Cabe mayor protesta?

Documento 49. *El presidente de la República condena las elecciones (Dictamen, I*, p. 228)

Ya hemos aludido a esta importantísima opinión de don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República al celebrarse las elecciones de febrero. Conviene insistir en su dictamen que estimamos decisivo:

> «A pesar de los refuerzos sindicalistas el Frente Popular obtenía un poco más, muy poco, de 200 actas con un Parlamento de 475 diputados».

Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se les escapaba. Sin embargo logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.

Primera etapa: Desde el día 7 de febrero incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, la que debiera haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis; algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales. En muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.

Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos (el PNV), el Frente Popular eligió una Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa: se proclamaron candidatos a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de la Comisión a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer de las Cortes una Convención, aplastar a la oposición y sujetar al grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que las mayorías de izquierdas pudieron prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.

> «Fue así como las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil».

Recordemos una vez más que el autor de esta terrible condena contra las elecciones del Frente Popular es el mismo presidente de la República que las convocó y presidió. No hacen falta, en realidad, mayores confirmaciones.

En el documento 55 acumula las mayores invectivas contra el Frente Popular el que sería ministro, en el gobierno de la República, en representación del PNV, don Manuel Irujo (DPT, p. 55). Por su parte, don Ángel Ossorio y Gallardo, político monárquico que en la guerra civil apoyó al bando del Frente Popular, escribía en *El Pueblo Vasco* del 23 de junio de 1936: «Ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni el Frente Popular significan en España nada. No mandan ellos. Mandan los inspiradores de huelgas inconcebibles, los asesinos a sueldo y los que pagan el sueldo a los asesinos; los mozallones que saquean los automóviles en las carreteras, los que tienen la pistola como razonamiento» (DPT, p. 187). La diputada feminista del Partido Radical, Clara Campoamor, en el documento 57, confiesa: «Madrid vivió, desde mediados de mayo a comienzos de la guerra civil, una situación caótica». Calificó al Frente Popular como «imposible armonía» y declaró que a principios de 1936 «el gobierno republicano no tiene ya poder». El máximo representante de la tradición republicana en España, don Alejandro Lerroux, varias veces jefe del gobierno en la República, miembro del Comité Revolucionario en 1930-1931, en el documento 59, publicado en Puerto Rico en el mismo año 1936, justificaba que si «el comunismo y sus cómplices se lanzaran a la calle, los que en nombre de la Patria y la República salieran a hacerles frente, podrían contar incondicionalmente conmigo».

Documento 59 (DPT, p. 187). El Frente Popular, como sabemos, estaba dominado política y parlamentariamente por el PSOE, y dentro del PSOE por su ala revolucionaria a las órdenes de Largo Caballero, apoyado en todo momento por los comunistas. El órgano de este grupo era *Claridad*. La colección de este diario durante la primavera trágica es la más contundente prueba de los propósitos de revolución violenta del Frente Popular, sin que sea necesario echar mano de fantasmagóricos documentos secretos de extraño origen.

En su número de 28 de mayo de 1936, *Claridad* arremetía contra los socialistas moderados dirigidos por Prieto y Fernando de los Ríos; se opone a la democracia burguesa, es decir, a la democracia occidental y proclama la necesidad de un socialismo revolucionario fundado en la dictadura del proletariado. Merece la pena leer el extenso editorial, que constituye una prueba de cargo sobre la tendencia dominante en el PSOE y por tanto en el Frente Popular. Y eso en un diario que se vendía en la calle, que todo el mundo podía comprar.

Idéntica actitud aparece en el documento 70, transcrito de *Claridad* correspondiente al 19 de marzo de 1936. Es el auténtico manifiesto oficial y público del socialismo revolucionario, calificado expresamente de bolchevique, que dominaba al Frente Popular. No caben más opciones que el fascismo, «que representa un retroceso de siglos» o el socialismo revolucionario, que debe conseguirse mediante la implantación de la dictadura del proletariado. Es, sí, una dictadura; «pero será la democracia más extensa y perfecta que haya habido jamás en la Historia». Se reconocerá a las colonias, a cualquier región o provincia, el derecho a la autodeterminación y aun a la independencia: nunca la desintegración de España se había propuesto tan descaradamente en un programa. De pleno acuerdo con las directrices del VII Congreso de la Internacional Comunista en el verano de 1936, los socialistas revolucionarios exigen «la fusión política y sindical de todos los grupos obreros y la ruptura completa del partido socialista con toda tendencia reformista o centrista». El documento exige la abolición de la propiedad privada y su transformación en propiedad pública. Exige la supresión del ejército, la supresión del presupuesto del clero y confiscación de todos sus bienes. Con disolución de todas las órdenes religiosas. Nacionalización de toda la banca y de la tierra. Termina el manifiesto con la propuesta de unificación de los partidos socialista y comunista.

¿Hacen falta más documentos para demostrar la degradación revolucionaria total del Frente Popular? ¿Por qué rasgarse las vestiduras ante la inspiración soviética de la revolución española si el grupo dominante en el Frente Popular aceptaba así las expresas directrices del VII Congreso de la Internacional Comunista? ¿Es que la Internacional Comunista no era una creación y un instrumento soviético para la revolución mundial?

Documento 61. *Claridad*, 2 de abril de 1936. Convocatoria a socialistas, comunistas y sindicalistas para que formen urgentemente milicias armadas del pueblo en todas las localidades (DPT, p. 197). Contra el ejército, la Iglesia, las profesiones jurídicas y la policía. Negativa a la orden del gobierno que exige el desarme de todos los ciudadanos. En cada pueblo debe reclutarse un centenar de milicianos armados y disciplinados.

Documento 62. *Claridad*, 22 de abril de 1936. (DPT, p. 201). Primer manifiesto conjunto de socialistas y comunistas ante un Primero de Mayo común. Identificación total y expresa del proletariado español con la Unión Soviética, de la que se acepta la consigna básica, «Contra el fascismo y la guerra». Ante unos documentos así, ¿puede reprocharse a los observadores de

la derecha que identificaran los objetivos del Frente Popular con los de la URSS, si un órgano cualificado del Frente Popular lo proclamaba de forma tan expresa?

Documento 68. *El Dictamen de Madariaga sobre la época del Frente Popular* (Salvador de Madariaga, *España*, 4 ed., Buenos Aires, Sudamericana, 1962, p. 454 s., DPT, p. 210). Salvador de Madariaga, exministro liberal de la República, luego miembro distinguido de la oposición contra el general Franco, acumula en la versión definitiva de su libro sobre la historia contemporánea española numerosos aciertos. Creo que los dos más importantes se refieren a la Revolución de Octubre, al que ya hemos aludido, y al período del Frente Popular, que describe con rasgos inimitables e irrebatibles. En este documento, que es un testimonio trascendental, atribuye como causa principal de la guerra civil a la guerra civil que había estallado en el partido socialista, una tensión que venía de antiguo, pero que para su última fase decisiva se desarrolló de 1933 a 1939, con la guerra civil por medio. Describe con objetividad y gracejo a los dos «capellanes» que por cuenta del comunismo, que luego abandonó uno de ellos, adoctrinaban al señor Largo Caballero al dictado de Moscú; se refiere a los señores Luis Araquistain y Julio Álvarez del Vayo. Simboliza Madariaga la guerra civil del socialismo en la célebre escena del Palacio de Cristal, el día de la elección de Azaña como presidente, en que uno de los capellanes del señor Caballero, don Luis Araquistain, se enzarzó a golpes con el socialista moderado don Julián Zugazagoitia. Pero nadie ha descrito las arbitrariedades y desmanes del Frente Popular como el liberal Madariaga en este documento que rezuma exactitud y objetividad. Como si quisieran darle la razón, los documentos 69 y 70 de nuestra colección de 1969 reflejan con vivacidad distintos episodios de la guerra civil socialista que salía casi diariamente a las páginas de la prensa.

Los documentos 76 a 79 siguen los pasos de Indalecio Prieto, el líder centrista y moderado del PSOE, a quien trataban de aplastar, como ya habían hecho con Julián Besteiro, los extremistas procomunistas de Largo Caballero (DPT, p. 235 ss.). El 1 de mayo de 1936, Prieto pronunció en Cuenca un importante discurso en que habló de España en términos patrióticos y se refirió con elogio al general Franco para apartarle de las tentaciones de golpe de Estado que a veces se le atribuían. Inmediatamente el sector caballerista arremetió contra Prieto y la disputa se dirimió a veces a tiro limpio entre la escolta de Prieto y los esbirros enemigos.

A partir del documento 82 nuestra recopilación DPT selecciona varios documentos para comprender la actitud de los anarquistas durante la primavera trágica. Los anarquistas no se incorporaron formalmente al Frente Popular hasta ya dentro de la guerra civil, cuando se formó el segundo gobierno de Largo Caballero en vísperas del asalto del Ejército de África a Madrid a principios de noviembre de 1936. Pero sus masas, que se habían abstenido en las elecciones de 1933, votaron a favor del Frente Popular en febrero de 1936 e incrementaron notablemente los votos de la coalición de izquierdas. Luego, durante la primavera trágica, los anarquistas contribuyeron al desorden desesperado en que se debatía España y en su Congreso de Zaragoza confirmaron sus bases teóricas que luego trataron de aplicar en la guerra civil.

Pero no sólo aprobó el Congreso de Zaragoza (celebrado durante la primera quincena de mayo de 1936) bases teóricas, sino que decidió el traslado de sus órganos directivos de Barcelona y Zaragoza a Madrid, y ratificó sus proyectos permanentes de insurrección armada contra el Estado y la sociedad burguesa.

A continuación, nuestros documentos de 1969 reproducen algunos análisis de José Antonio Primo de Rivera, que figuran entre los más exactos y certeros que pueden consultarse, por ejemplo, en las difundidas obras completas del fundador de Falange sobre la época del Frente Popular. Y recogen el dictamen de varios observadores e historiadores, muy interesante, aunque no iguale al testimonio directo de Madariaga.

Dedicamos el capítulo IV de nuestra selección DPT a la actuación del comunismo español durante la República y señaladamente durante la época del Frente Popular. El Partido Comunista de España, fundado como una escisión del PSOE en 1923, era insignificante hasta la Revolución de Octubre de 1934. Allí surgió su gran estrella, la bilbaína formada por las monjas del Sagrado Corazón y luego demagoga máxima de la historia española. La Pasionaria, como todo el mundo la llamaba, enarboló la bandera de Octubre que habían abandonado los socialistas, avergonzados por haber preparado ese movimiento subversivo, y la esgrimió en mítines, artículos y en el Parlamento, donde se reveló como oradora agresiva y contundente. El comunismo seguía muy escaso de efectivos, pero según la táctica de la Internacional Comunista empezó a crecer como parásito del ala revolucionaria del socialismo, que marchaba a las órdenes de Largo Caballero. Los asesores soviéticos en España captaron al líder de las

Juventudes Santiago Carrillo, que las entregó al PCE en la primavera de 1936, aunque no ingresó en el partido prosoviético hasta el 6 de octubre de 1936.

En el documento 113 reproducimos el manifiesto fundamental del PCE, tomado del libro de Briones *Conquistemos las masas* (Madrid, s. a. pero 1934), inmediatamente anterior a la Revolución de Octubre e importante porque revela sin tapujos el verdadero fin del comunismo en España: «el Gobierno obrero y campesino de los soviets» (p. 331). Después incorporamos la documentación auténtica del VII Congreso de la Internacional Comunista en el verano de 1935, (documentos 115-119), cuyas directrices cumplió ciegamente el PCE al incorporarse al Frente Popular y procurar como táctica fundamental la creación del Partido Único del Proletariado; no detallamos estos documentos porque el lector puede comprobar mejor su desarrollo en el espléndido libro de Bolloten, cuya última edición y definitiva es de 1989 (Alianza Editorial, *Guerra civil española, revolución y contrarrevolución*).

Si no fuera porque, como hemos advertido, pensamos alguna vez en reeditar nuestra antología histórica que resumimos en este capítulo, nos veríamos obligados a reproducir algunos documentos sobre el comunismo que muchos autores actuales hacen culpablemente como que olvidan. Citémoslos al menos como denuncia de esa actitud de ocultación.

En el documento 118 el órgano comunista *Mundo obrero* (23 de octubre de 1935) puntualiza al caballerista *Claridad* sobre el verdadero alcance del VII Congreso de la Internacional Comunista. Las claves son: unificación inmediata de los sindicatos socialista y comunista, constitución del Frente Único del proletariado, frente común de unidad antifascista y creación del Bloque Popular (luego Frente Popular) sobre la base del Frente Único del proletariado. Éste fue precisamente el documento que esgrimieron los comunistas para demostrar después que el Frente Popular había sido un invento suyo, lo que no es cierto; el Frente Popular nació de la correspondencia de Azaña y Prieto después de la Revolución de Octubre, aunque de hecho se creó como querían los comunistas; como una especie de balsa republicana sobre un océano rojo.

El documento 120 es una exposición del profesor Manuel García Morente escrita durante la guerra civil, después de salvarse de la muerte en Madrid y titulada *Experimentum crucis*, donde explica la caída en la guerra civil como una consecuencia de lo que llama «invasión comunista de España» desde 1931. Se trata de una reflexión interesantísima, digna de una de las

inteligencias más profundas de España. Señala Morente las diversas fases de la estrategia comunista: primero, englobar a todo enemigo posible bajo una etiqueta resonante, aunque sea falsa: el fascismo. Todo obstáculo al comunismo era fascismo. Segundo paso: favorecer la creación del Frente Popular —una unidad aparente, de clara apariencia negativa, antifascista— para conseguir los fines del comunismo internacional. El tercer recurso ha sido (el texto se escribe en 1938) la colosal y magistral propaganda comunista que había llegado antes de la guerra al último rincón de España. «Comunismo» se disfrazaba de democracia, de socialismo, de anarquismo, de todo menos de comunismo. La destrucción de la Iglesia y la desmembración de España son dos frentes claramente comunistas que tienden al aniquilamiento de lo hispánico. 1934 ha sido «el ensayo general revolucionario» para lo que sucedería en 1936.

En el documento 122, el gran periodista e historiador de la derecha española, Joaquín Arrarás, analiza magistralmente las etapas de la unificación comunista-socialista (DPT, p. 370).

Incluyo después en DPT varias reacciones de los políticos y la prensa de la derecha sobre los objetivos y métodos del comunismo en España, así como los postulados de lo que Bolloten definió como *el gran camuflaje*, es decir, el disfraz democrático del comunismo, planteado ya en la primavera trágica y desarrollado activamente desde el primer día de la guerra civil. Pero el documento 160 es mucho más concluyente que cualquier efugio de la propaganda roja. Se trata de un mitin gigante reflejado en *Mundo Obrero* el 23 de enero de 1936 en el que actuaron el líder socialista revolucionario Largo Caballero, el líder comunista Jesús Hernández y el criptocomunista Julio Álvarez del Vayo. Les escuchaban quince mil personas y el mitin fue radiado a toda España. Jesús Hernández habló del VII Congreso de la Internacional Comunista, al que había asistido como delegado del PCE.

Hernández exalta las consignas del VII Congreso y urge su cumplimiento. Elogia la fusión de las Juventudes socialistas y comunistas, ya cuajada. Impulsa al gran proyecto, el Partido Único del Proletariado. Y deja escapar la confesión palmaria y definitiva:

> «Un Partido que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder, y la instauración de la dictadura del proletariado».

¿Para qué se necesitaban más documentos que demostrasen el proyecto abiertamente revolucionario del Frente Popular? En un mitin conjunto de socialistas y comunistas se exaltaban las directrices soviéticas del VII

Congreso de la Internacional Comunista y se proclamaba con urgencia la insurrección armada para la conquista del poder y la forma de ese poder: la dictadura del proletariado. Tal vez sea éste el documento más grave y revelador de toda la primavera trágica.

En el capítulo séptimo de DPT reunimos los principales documentos de la guerra civil en las Cortes y en la calle durante la primavera trágica. A muchos de ellos nos hemos referido ya.

EL ASESINATO DE CALVO SOTELO: «ESE ATENTADO ES LA GUERRA»

Al anochecer del 12 de julio de 1936, dentro de la escalada trágica de asesinatos políticos que jalonaban el camino hacia la guerra civil, fue asesinado poco después de salir de su casa en Madrid, en la calle de Augusto Figueroa, casi esquina a la de Fuencarral, el teniente de Asalto José del Castillo. El crimen ocurrió prácticamente a la vista de su esposa, poco después de su boda. Castillo era un conocido instructor de las MAOC y las derechas le atribuían la muerte de uno de los jóvenes asistentes al entierro del alférez Reyes, otro de los más famosos crímenes políticos de la época. Los asesinos escaparon y hasta hoy se desconoce su identidad, aunque se han dado algunas pistas. El teniente Castillo era uno de los activistas más conocidos dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y cuando su capilla ardiente se instaló en el cuartel de Pontejos, que la Guardia de Asalto tenía junto a la Puerta del Sol, las escenas de protesta y de venganza marcaron ominosamente el velatorio. No tratamos en este epígrafe de innovar nada sobre el asesinato de Castillo y su consecuencia inmediata, que fue el asesinato de José Calvo Sotelo; hechos y testimonios han sido investigados en el *Dictamen* de Burgos, en la *Causa General*, en la historia de la Segunda República de Joaquín Arrarás y revisados recientemente en dos investigaciones importantes: las simultáneas de Ian Gibson y Carlos Fernández (Ed. Argos Vergara). Entre los testimonios contemporáneos es esencial también el que Indalecio Prieto refiere en *Convulsiones de España* y el de Julián Zugazagoitia en su libro de 1940, *Guerra y vicisitudes de los españoles*. Con todo el testimonio contemporáneo fundamental se encuentra en el debate suscitado por las derechas en la Diputación Permanente de las Cortes el 15 de julio de 1936. Con este conjunto delante, el asesinato de Calvo Sotelo queda históricamente aclarado en cuanto a lo esencial. Y es lo esencial lo que en este libro nos interesa.

Calvo Sotelo estaba condenado a muerte por el Frente Popular. Como hemos visto, el propio presidente del Consejo de Ministros del Frente Popular había formulado esa amenaza de muerte que luego se reprodujo más de una vez desde las filas comunistas, cuyos portavoces lo han negado cínicamente; y es que en el Diario de Sesiones se borraban muchas veces, sobre todo entonces, los textos que no convenía al Gobierno publicar.

Existe una fuente segura y pública que relaciona el asesinato de Calvo Sotelo con la Masonería. Conocí al teniente coronel don Urbano Orad de la Torre, padre de quien fue luego una famosa bailarina española, activista político durante la República y conocido miembro de la Masonería. El 26 de septiembre de 1978, el señor Orad de la Torre publicó una sorprendente carta en el diario *El País*, que nunca se ha distinguido por su hostilidad a la Masonería, en la que atribuía a un proyecto masónico el asesinato de Calvo Sotelo. Reconocía allí su propia condición masónica, su conocimiento del proyecto y su implicación en él. Como recuerda la *Causa General* (ed. 1956, p. 14), Calvo Sotelo atacó a la Masonería con estas palabras: «Y lo digo con toda claridad y sin ningún género de veladuras, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos planteados en España es éste de la infiltración tentacular de la Masonería en todos los órganos del Estado, incluso en el de los militares» (Diario de Sesiones, n. 146, pág. 5763).

Pero existe además un texto público comunista con la condena a muerte de Calvo Sotelo; se publicó en *Mundo Obrero* el 15 de mayo de 1936, bajo el título «Sin careta. Calvo Sotelo y el pistolerismo fascista» y lo reproduje en DPT, p. 567.

> «La defensa —ardorosa, provocativa, cínica— que ayer hizo Calvo Sotelo en la Diputación Permanente de los crímenes fascistas es toda una caracterización política de ese lacayo de la dictadura, incubado bajo la bota del general majo y chulón que tiranizó al país durante siete años, que aún sueña con el solio dictatorial.
>
> »Exaltó y justificó el terrorismo como instrumento de lucha.
>
> »Y esta defensa del fascista Sotelo, de sus pistoleros, tuvo como trampolín la derogación del estado de alarma.
>
> »Como pocas veces representó su papel de cínico primero. Protestó de todo. Protestó de las detenciones de los asesinos. Estos miserables, además de una buena pistola y un buen salario, cuentan en la Cámara con un buen abogado.
>
> »La organización es perfecta: cuentas corrientes en los Bancos, cotizaciones en organismos de contratación, como Renovación, JAP y ese Bloque nacional, cómplices en la Administración de Justicia, el Cuerpo de Vigilancia y en las cárceles.
>
> »Y hasta un caudillo con investidura parlamentaria para agitar un espantajo de martirologio con las actividades de unos asesinos.
>
> »La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular. Con ese miserable Calvo Sotelo a la cabeza».

Calvo Sotelo estaba marcado a muerte por el Frente Popular en el Congreso y en la prensa. Gil Robles testifica que su amigo presentía su muerte. Se le cambió una escolta adicta por otra hostil. Junto con Gil Robles era el primero en la lista de las represalias rojas.

La *Causa General* abre sus acusaciones con el asesinato de Calvo Sotelo, consigna una serie de testimonios valiosos y es un documento imprescindible para la Historia. La Causa General afirma que los dirigentes de la protesta en el cuartel de Pontejos, donde como he dicho se había instalado la capilla ardiente del teniente Castillo, exigieron de las máximas autoridades del Ministerio de la Gobernación ser ellos quienes se encargasen de las detenciones que esa noche habrían de realizarse entre activistas de Falange y personalidades de la derecha que pudieran relacionarse con el asesinato del teniente activista. Es muy importante que estas conversaciones en el Ministerio de la Gobernación quedan confirmadas en el relato de Gibson, que cuenta con testimonios directos, fuera ya del apasionamiento de aquella noche frenética. El caso es considerar las diversas patrullas que se formaron en el cuartel para proceder a las detenciones (que se consumaron en elevado número). Dirigía toda la operación el comandante Ricardo Burillo, jefe del cuartel que luego ostentó cargos de suma importancia en el Ejército Popular durante la guerra civil. Los dos comandos más importantes eran el dirigido por el teniente Máximo Moreno, que fue detenido por su responsabilidad en Octubre de 1934, y el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condes, miembro del Partido Socialista y afecto a Indalecio Prieto. El primero marchó con su escolta en un automóvil para detener a Gil Robles, a quien no pudieron encontrar ni en su casa ni en el despacho de Acción Popular, porque estaba de viaje en Francia; así se libró de la muerte. Moreno y su automóvil se incorporaron entonces al segundo comando, dirigido por Condes, que había salido de Pontejos en la camioneta de Asalto número 17 y marchó directamente a casa de Calvo Sotelo, en la calle de Velázquez, número 89. Casi ningún autor señala que los miembros más significados del comando asesino eran socialistas afectos a Indalecio Prieto: el propio Condes, detenido también por su participación en Octubre y muy próximo a Prieto, como cuenta el propio Prieto según veremos; Victoriano Cuenca, un pistolero de airada historia, a quien algunos quieren hacer comunista, pero era socialista de Prieto. Condes escogió para el comando a varios miembros de la escolta de Prieto, la famosa «Motorizada» que había defendido al líder socialista en varios altercados, a veces muy violentos, de aquella misma primavera. Otro de ellos era el guardia de Asalto, José del Rey, adscrito también a la escolta

de la diputada socialista Margarita Nelken, terriblemente acusada por el anarquista Juan García Oliver, luego ministro de Justicia, en sus importantes Memorias *El eco de los pasos*. Muy amigo de Prieto era el estudiante de Medicina, Francisco Coello, también militante socialista. Dos hombres de acción pertenecientes a las Juventudes Socialistas y amigos de Prieto, Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, se incorporaron también a la operación.

Al descender de la camioneta junto al domicilio de Calvo Sotelo, Condes forzó la entrada ante los requerimientos de los policías de escolta que la guardaban. Iba de paisano, pero exhibió su carnet de capitán de la Guardia Civil. La escena que sucedió en el piso donde vivía el diputado monárquico con su esposa y sus hijos pequeños marca, antes de la tragedia, uno de los momentos más vergonzosos en la historia de la República. Miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado, algunos de uniforme, detienen ilegalmente, anticonstitucionalmente, a un diputado que les manifiesta esa ilegalidad por su condición de aforado. Sólo le dejan vestirse con vigilancia de vista, empujan a uno de sus hijos y se llevan a su víctima sin más explicaciones. Todo estaba premeditado. La camioneta baja por Velázquez y al cruzar la calle de Ayala el pistolero Victoriano Cuenca, que se había situado tras el prócer monárquico, le asesina de dos disparos en la nuca. Luego le llevan al Cementerio del Este donde le abandonan.

Cuando a media mañana siguiente se conoce la noticia en Madrid e inmediatamente en toda España, una conmoción inenarrable sacudió todos los espíritus. El gobierno, acosado por los amigos y familiares de la víctima, sólo acertó a balbucir torpes excusas. Esa misma mañana del 13 de julio, el inteligente periodista y directivo del PSOE moderado, Julián Zugazagoitia, acertó a expresar ante un visitante la opinión unánime de los españoles: «Ese atentado es la guerra», (*Historia de la guerra en España*, 1940, p. 11). Era, por supuesto, la señal para la guerra civil que ya estaba en el ambiente, cada semana con mayor gravedad, desde la Revolución de Octubre de 1934 y desde las elecciones del Frente Popular en febrero anterior. En plena guerra, el 19 de abril de 1938, el general Francisco Franco declaraba: «Aquel régimen murió definitivamente aquella madrugada triste en que un sedicente gobierno, constituyéndose en brazo ejecutivo de la masonería, fraguó y llevó a cabo, por medio de sus agentes, el vil asesinato del jefe de la oposición parlamentaria y gran patricio, José Calvo Sotelo». No se debe olvidar que en la trascendental sesión de la Diputación Permanente de las Cortes el 15 de julio, Gil Robles no atribuyó al gobierno Casares la responsabilidad material y criminal del

atentado; pero sí la plena responsabilidad moral y política. No olvidemos tampoco que el oficial masón don Urbano Orad de la Torre afirma públicamente en 1978 que Calvo Sotelo fue asesinado en virtud de una conjura masónica en la que él mismo participaba. Y que la Causa General termina su alegato con estas palabras terribles y comprobadas: «Ha de señalarse la circunstancia de que el presidente de la República, don Manuel Azaña; el presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, don Santiago Casares Quiroga; el ministro de la Gobernación, Juan Moles Ormella; el director general de Seguridad, José Alonso Mallol; el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio; el comandante del Cuerpo de Asalto, Ricardo Burillo Stolle, y algunos oficiales del mismo que participaron en el asesinato todos pertenecían a la Masonería» (Ibíd., p. 24).

Algunos polemistas recalcitrantes, como el recientemente finado Herbert Rutledge Southworth, se entretienen en discusiones fútiles que no enturbian la esencia y la gravedad del atentado. Desde los mismos hechos, los portavoces del Frente Popular trataron de equiparar en gravedad el asesinato de Castillo y el de Calvo Sotelo. En el orden humano y personal sí existe la semejanza entre dos hombres que luchaban por sus ideales. Pero en el orden político la equiparación es disparatada. Castillo era un activista del Frente Popular, instructor de las MAOC, cultivador de la violencia y figura desconocida en España. Calvo Sotelo jamás ejerció la violencia física, era el jefe de la oposición monárquica en el Parlamento, exministro de Hacienda, político de gran envergadura y amenazado varias veces de muerte por sus enemigos; sus asesinos pertenecían a las fuerzas de Seguridad del Estado, se tomaron la justicia por su mano con la colaboración de activistas del PSOE. Otros polemistas aseguran que el avión enviado por los monárquicos a Franco ya había despegado de Inglaterra cuando sucedió el asesinato de Calvo Sotelo. Es verdad; pero he demostrado en mi biografía de Franco que éste no estaba decidido del todo, con avión o sin avión, hasta que le llegó la noticia del magnicidio. Los mismo sucedió con Mola y otros conspiradores; porque al conocerse la noticia no eran algunos españoles, era toda España quien sabía que la guerra civil iba ya a estallar fatalmente.

El 14 de julio se celebraron los dos entierros en el mismo cementerio del Este: el de Calvo Sotelo con los ritos católicos, el de Castillo en el cementerio civil. El teniente de Asalto recibe sepultura por la mañana, entre un mar de puños en alto. Al despedir, poco después, a Calvo Sotelo, el jefe de Renovación Española, Antonio Goicoechea, promete «imitar tu ejemplo, vengar tu muerte, salvar a España». Indalecio Prieto dedicará un tremendo

artículo en su periódico *El Liberal* sobre los dos entierros casi enfrentados, a los que considera como el prólogo de algo mucho más grave y definitivo.

Suspendidas las Cortes durante ocho días —ya no se reabrirían nunca—, la sesión necrológica por Calvo Sotelo, último acto de la guerra civil parlamentaria, se celebra en la Diputación Permanente el 15 de julio. El portavoz del Bloque Nacional, conde de Vallellano, formula una auténtica declaración de guerra al Frente Popular. «Nosotros no podemos convivir ni un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto (…) Desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una monstruosa subversión de todos los valores morales que ha conseguido poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia. No por ello desertamos de nuestros puestos en la lucha empeñada ni arriamos la bandera de nuestros ideales. Quien quiera salvar a España, a nuestro patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará los primeros en el camino del deber y del sacrificio».

José María Gil Robles pronuncia un discurso digno de él. Completa las estadísticas de la violencia que había comunicado Calvo Sotelo y de las que hace responsable al Frente Popular. «No pretendáis —dijo al Gobierno— que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia». La acusación de Gil Robles es formidable. Insiste en que quiere mantenerse en la democracia y en la legalidad, pero que la actuación del gobierno lo hace cada vez más imposible.

Indalecio Prieto, que ha tratado inútilmente de poner un poco de paz, sale para su casa, pero decide pasar por la redacción de *El Socialista* a cuya puerta se encuentra con el capitán Condes. Le llama y junto a la esquina de Monteleón con Carranza cruza con él estas palabras tremendas:

> «—El sumario por la muerte de Calvo Sotelo evidencia que fue usted quien detuvo a la víctima — le advertí».
>
> «—Lo sé —me contestó—, pero nada me importa ya de mí. Abrumado por la vergüenza y el deshonor, estoy dispuesto a quitarme la vida».
>
> «Suicidarse —le atajé— sería una estupidez. Van a sobrarle ocasiones de sacrificar heroicamente su vida en la lucha que, de modo ineludible, comenzará pronto, dentro de días o dentro de horas».
>
> «—Tiene usted razón —asintió».
>
> «Pocos días más tarde Fernando Condes era bajado en una camilla desde Somosierra, donde se había batido con bravura contra los facciosos que, mandados por el general Mola y procedentes de Pamplona y de Burgos, pretendían apoderarse de Madrid. Venía gravísimo. Al cabo de una semana expiraba en el hospital. En la misma acción de Somosierra cayó, para no levantarse jamás, el autor material de la muerte de Calvo Sotelo**[72]**».

Se refería a Victoriano Cuenca. En Somosierra murió también en combate aéreo el teniente Máximo Moreno, observador de aeroplano. Otros miembros

del comando asesino fueron hechos prisioneros —ninguno por el Frente Popular, que dejó el crimen impune— y condenados, no todos a muerte. Unos milicianos robaron poco después el sumario abierto en el Tribunal Supremo, del que nunca más se supo.

El diario caballerista *Claridad* pide, al día siguiente, plenos poderes para el gobierno; ya que las derechas parecen reclamar una dictadura, que sea una dictadura de las izquierdas. «¿No quieren la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. ¿No quieren el Parlamento? Pues gobiérnese sin él». Conviene recordar que éste era el órgano del grupo dominante en el Frente Popular, el socialismo revolucionario de Largo Caballero.

La consecuencia fundamental del asesinato de Calvo Sotelo fue, como preveía toda España, según acabamos de ver en mentes lúcidas de la derecha y la izquierda, la guerra civil inmediata. Desaparecieron las dificultades, por lo demás no muy graves, que el general Mola, director del Alzamiento y comandante militar de Pamplona, tenía con los carlistas, que se incorporaron inmediatamente a la empresa que ellos veían como cruzada. Según el testimonio de su ayudante Fernández Cordón, que estimo definitivo, Mola fijó para el día 16 la ya prevista insurrección del Ejército de África, a las órdenes de Yagüe, mientras llegara el general Franco de Canarias. Llevaba la orden un enlace de Mola, el capitán Gerardo Imaz, a quien pudo alcanzar en Algeciras un correo del Director, la señorita Elena Medina, con las fechas finales: África debería sublevarse el 18 de julio. Ya indiqué que creo haber demostrado de forma segura, desde mi primera biografía de Franco, que el comandante general de Canarias aventó sus últimas dudas al conocer la noticia de la muerte de Calvo Sotelo y se dispuso a esperar la llegada a Las Palmas del avión enviado por los monárquicos españoles que le llevaría a Tetuán. Se sublevó el 18 de julio y estaba en Tetuán a primera hora de la mañana del 19. A raíz del asesinato de Calvo Sotelo, un auténtico crimen de Estado, la guerra civil era, como advertía Indalecio Prieto, cuestión de días. Exactamente de dos días.

DE LA GUERRA JUSTA A LA GUERRA SANTA

Ahora el mundo, y en especial el mundo católico, parece aherrojado por la infausta manía de pedir perdón. Dígase con todos los respetos, porque con la mejor intención del mundo, la manía proviene, a veces, de las más altas cumbres de la Iglesia católica. Pero no deja de ser una manía anacrónica; se juzga el pasado con las categorías del presente, una antianacronía más bien

que una anacronía. Mientras tanto nadie pide perdón a los católicos por los innumerables daños y víctimas que les han causado los emperadores romanos, los herejes de toda laya, los judíos, por supuesto, el Islam, que borró del mapa florecientes reinos y provincias católicas en varios continentes. La exigencia de perdón se reserva a los católicos, para que se obstinen en ignorar las reglas y los contenidos de la Historia. No pienso sumarme a esta moda tétrica y cobarde.

Dentro de unas semanas, me dicen, la Iglesia católica va a pedir perdón, otra vez, por sus errores en la guerra civil española. Ya lo hizo una parte manipuladora y manipulada de esa Iglesia en la tristemente célebre Asamblea Conjunta de 1971. Si ahora se intentara y se ejecutara algo parecido por más altas fuentes, siento confesar que yo me plantearía, con todo dolor del alma, algunas cosas importantes que no me he planteado jamás.

Durante su valerosa actuación en la República, la revista *Acción Española*, frente intelectual de la derecha monárquica, se planteó a fondo el problema de la guerra justa. Ante los desmanes de la República, la revista veía venir la guerra; y quiso asegurar a sus adeptos que la Iglesia católica poseía en su acervo cultural y teológico una doctrina sobre la guerra justa frente a la guerra injustificable. Una vez que estalló la guerra civil, la documentación episcopal sobre el conflicto contiene serias referencias a la justificación del «movimiento cívico militar», como le denominaba más de una vez oficialmente la Iglesia católica. Los adictos al Frente Popular, los de 1936 y los de nuestro tiempo, prefieren calificar a ese movimiento como «golpe militar fascista», es otro modo de ver las cosas. Pero fuera de todo anacronismo es lógico pensar que los partidarios de la Iglesia católica y de una cierta idea de España se moviesen en 1936 por esa doctrina de la guerra justa contra la tiranía, que había explicado *Acción Española* y ahora, en plena guerra, proponían los obispos. Me impresionan especialmente dos ejemplos, que no son únicos ni mucho menos. El obispo catalán de Salamanca, don Enrique Pla y Deniel, firmó el 30 de septiembre de 1936, ya nombrado el general Franco jefe del Estado y en víspera de que tomara posesión, una de las pastorales más famosas, *Las dos ciudades*; sienta primero claramente la doctrina de la escuela jesuítica en el siglo XVII. Tomada de san Roberto Belarmino y el padre Francisco Suárez, ratificada por León XIII, esa doctrina establece que el poder viene directamente del pueblo que lo entrega al gobernante; pero el pueblo recibe ese poder de Dios. Por eso esa sociedad, ese pueblo, titular por así decirlo del poder, mantiene la potestad de quitárselo al gobernante que lo ejerce de forma nociva y tiránica; así lo estableció también

santo Tomás de Aquino, en la *Summa Theologica*, donde fija las condiciones para realizar ese cambio, que puede asumir la forma de insurrección violenta. La misma escuela doctrinal católica establece que el pueblo puede ejercer ese derecho cuando el mal gobernante pone en grave peligro la religión y la convivencia.

El obispo de Salamanca aplica esta doctrina a la guerra civil española. Está seguro de que en la insurrección contra el Frente Popular se dan todas las condiciones de la guerra justa. Subraya que los obispos españoles y el propio Papa Pío XI «han bendecido a los que luchan en uno de los dos campos». Y va más lejos. La guerra de España «reviste, sí, la forma exterior de una guerra civil; pero en realidad es una cruzada». Varios obispos españoles habían precedido al de Salamanca en esta calificación, pero la pastoral de monseñor Pla y Deniel, por su amplitud y la fundada profundidad de sus argumentos, alcanzó una difusión enorme en todo el mundo católico. Sólo después de ella se refirió el general Franco a la que había llamado cruzada en sentido patriótico, como una auténtica cruzada religiosa, como aquéllas a las que la Iglesia había calificado así.

He tomado esta referencia a la pastoral del obispo de Salamanca de la magna obra de monseñor Antonio Montero sobre la persecución religiosa en España, hoy felizmente reeditada por vez primera desde 1961. En el mismo apéndice documental de esta obra imprescindible figura la Carta Colectiva de los obispos españoles, publicada el 1 de julio de 1937.

En ella llaman los obispos al 18 de julio «movimiento cívico-militar», pero aunque no niegan su carácter de Cruzada, no la denominan expresamente así. Se refieren también a la doctrina de la guerra justa y citan la autoridad de Santo Tomás. Pero no la exponen detalladamente como ha hecho el obispo de Salamanca. Con el mismo método que años después seguirá José María Gil Robles, los obispos prefieren enumerar —casi siempre con patente verdad y fundamento, al menos indirecto— una trágica serie de hechos cometidos bajo el régimen del Frente Popular, y luego piden al lector que los coteje con la doctrina católica de la guerra justa. «Nuestro régimen político de libertad democrática —afirman— se despeñó, por arbitrariedad de la autoridad del Estado y por coacción gubernamental, que trastocó la voluntad popular, constituyendo una máquina pública en pugna con la mayoría de la nación, dándose el caso, en las últimas elecciones parlamentarias, febrero de 1936, de que con más de medio millón de votos de exceso sobre las izquierdas, obtuviesen las derechas 118 diputados menos que el Frente Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras, viciándose

así en su origen la legitimidad del Parlamento». Las siguientes alusiones de los obispos a la Internacional Comunista están comprobadas, directa e indirectamente, en la documentación que acabamos de presentar, publicada en los órganos de la misma prensa de izquierdas; la política del Frente Popular siguió de hecho, como hemos visto, las directrices del VII Congreso de la Internacional Comunista[73].

Los españoles que se alzaron en armas contra el régimen del Frente Popular —no directamente contra la República— estaban completamente convencidos de la legitimidad de su causa y de la ilegitimidad de la que mantenían sus adversarios. No se alzaron contra una legitimidad, ni siquiera contra una legalidad, violada a diario por el Frente Popular. Sus obispos les aseguraron que luchaban en una guerra justa, pero ante todo ellos pensaban luchar por su propia supervivencia. Lo había dicho uno de sus principales líderes en el Parlamento de abril de 1936: Media nación no se resignaba a morir.

EL OBJETIVO POLÍTICO DEL ALZAMIENTO. TODO MENOS UN GOLPE MILITAR FASCISTA

Para terminar la demolición histórica del término *golpe militar fascista*, con que el Parlamento de 1999 ha pretendido hundir en el barro de una Historia falsa la esencia de aquel acontecimiento, me parece imprescindible investigar los objetivos políticos del Alzamiento de julio, tal como los expresaron, a raíz de los hechos, los principales portavoces y protagonistas del acontecimiento.

Creo haber sido el primer historiador que publicó la serie completa de las Instrucciones secretas del general Mola, que transcribí del correspondiente legajo en el Servicio Histórico Militar. Al menos estoy seguro de que nadie las había publicado antes en un contexto histórico riguroso; yo lo hice en 1969.

Nunca, que yo sepa, se formuló un proyecto orgánico con los objetivos del Alzamiento. Los hechos del 17, 18 y 19 de julio, más los que se desarrollaron en las fechas siguientes hasta más o menos el 2 de agosto, cuando toda España se había pronunciado o se había visto arrastrada a elegir uno de los dos bandos, fueron ante todo, en la zona nacional, una explosión de protesta absoluta, predicha por Gil Robles en abril de 1936 y prevista por todo el mundo a raíz del asesinato de Calvo Sotelo, contra un estado de cosas que a media España le parecía intolerable e insufrible. Pero en las declaraciones,

primero secretas y luego públicas que el Director del Alzamiento, general Mola, iba enviando a los comprometidos, a partir de la primera, fechada el 23 de mayo de 1936, pueden advertirse cuáles eran las ideas básicas de los militares que se alzaron, aceptadas luego inmediatamente por los civiles que les siguieron. La *Instrucción reservada número 1*[74] expresa, en su encabezamiento, los motivos de todos los que se sublevaron:

> «Las circunstancias gravísimas por las que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral que ha determinado como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las Organizaciones revolucionarias, llevan fatalmente a España a una situación caótica, que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta. Para ello los elementos amantes de la Patria tienen forzosamente que organizarse para la rebelión, con el objeto de conquistar el Poder e imponer desde él el orden, la paz y la justicia».

De acuerdo con la documentación y las consideraciones expuestas en este libro, el autor tiene que manifestar su pleno acuerdo con esta motivación.

En la misma Instrucción, base sexta, se dice: «Conquistado el poder, se establecerá una Dictadura militar». Los Comités provinciales de administración se califican como «cívico-militares» y en la Instrucción se recaba la cooperación de todas las organizaciones no enemigas.

Dos días después, con ficticia localización en Madrid, Mola difunde la Instrucción, sin número, *El objetivo, los medios y los itinerarios*, en que traza el plan militar para que las Divisiones de Zaragoza, Burgos y Valladolid envíen, al romperse las hostilidades, fuertes columnas sobre Madrid, dada la importancia política y nacional de la capital, donde se da por seguro el fracaso del movimiento. Por el momento se descarta la intervención de las fuerzas existentes en Baleares, Canarias y Marruecos, y se cree que la Marina se adherirá e impedirá el traslado de esas fuerzas para sofocar la rebelión peninsular. Se cuenta con grandes «masas conservadoras» y con las «masas ciudadanas de orden», así como con las milicias de Falange y Requetés.

Durante la última semana de mayo, Mola dirige a los centros de la sublevación sus instrucciones 2, 3 y 4. La número 2 da normas para el avance de las columnas. La número 3 ordena que en todas partes esté preparado un comité civil que suscite y canalice la acción de las fuerzas, ante las que deben darse vivas «al Ejército, a la Marina y a la España republicana». La instrucción reservada número 4 establece el régimen de tiempos. La Hora inicial (HI) será fijada por cada general jefe de las Divisiones 5 (Zaragoza), 6 (Burgos) y 7 (Valladolid). La marcha sobre Madrid deberá realizarse en dos etapas, con un total de ochenta horas, es decir, que la llegada y eventual ocupación de la capital deberá conseguirse en el cuarto día desde la hora inicial.

Después de afianzarse como jefe único de la conspiración, el general Mola dicta el 31 de mayo nuevas instrucciones para las Divisiones 5.ª y 6.ª y 7.ª, así como para la provincia de Navarra; es el territorio que considera más seguro como base para el alzamiento.

Declarado el estado de guerra en Zaragoza, la 5.ª división enviará un importante convoy de armas a Pamplona (con destino al armamento de las milicias carlistas). Conjuntamente con la División de Zaragoza, la de Burgos organizará una columna para marchar sobre la Sierra de Madrid. Las instrucciones para Navarra cuentan con «destacamentos de patriotas», pero se refieren a la actuación de las fuerzas del Ejército; seguramente ni el mismo Mola contaba entonces con la tremenda riada de requetés que inundaría la plaza del Castillo en Pamplona desde la madrugada del 19 de julio. Las instrucciones para la séptima división (Valladolid) prevén el dominio de las resistencias que surjan en la capital y ordenan el envío de una columna sobre los puertos de Guadarrama y Navacerrada, en combinación con la columna de Burgos, a quien se encarga la toma de Somosierra.

El 5 de julio, para orientación de los jefes militares sublevados y los colaboradores civiles del alzamiento, Mola cifra y envía una instrucción de carácter político titulada «El Directorio y su obra inicial». Logrado el éxito del Movimiento, se constituirá un directorio exclusivamente militar (como el primer gobierno de Primo de Rivera en 1923, pero más reducido) con un presidente y cuatro vocales, que se encargarán de los ministerios de la Guerra, Marina, Gobernación y Comunicaciones. El Directorio gobernará mediante decretos-leyes firmados por unanimidad. En su día estas disposiciones serán refrendadas «por el Parlamento constituyente elegido por sufragio, en la forma que oportunamente se determine». Al frente de los demás ministerios se designarán consejeros técnicos. Los primeros decretos leyes serán: suspensión de la Constitución de 1931, cese del presidente de la República y miembros del gobierno; atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las Leyes y Reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados por otras disposiciones; defensa de la *dictadura republicana* (s/n), la que por entonces proponía Miguel Maura y numerosos políticos moderados de la República. «Las sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio sin intervención de los Tribunales de Justicia. Derogación de las Leyes, Reglamentos y disposiciones que no estén de acuerdo *con el nuevo sistema orgánico del Estado» (s/n).* Disolución de las actuales Cortes. Exigencia de responsabilidades por los abusos cometidos desde el poder por los actuales gobernantes y los que les han

precedido. Disolución del Tribunal de Garantías. Declarar fuera de la ley las sectas y organizaciones políticas que reciban su inspiración del extranjero (se refiere a la Masonería y al partido comunista, tal vez al socialista). Separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones. Absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso, comprobado. Extinción del analfabetismo. Creación del carnet electoral. En principio no tendrán derecho a él los analfabetos y quienes hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y las personas. Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerados Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del proyecto de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva cuando ello no fuere posible. Saneamiento de la Hacienda. Ordenación de la industria de guerra. Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas, siempre que produzcan la muerte o lesiones que ocasionen la inutilidad para el ejercicio de la profesión de la víctima.

La Instrucción terminaba así: «El Directorio se compromete durante su gestión a no cambiar en su gestión el régimen republicano, manteniendo en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas, reforzar el principio de la autoridad y los órganos de la defensa del Estado, dotar convenientemente al Ejército y a la Marina para que tanto uno como otra, sean suficientes, creación de milicias nacionales, organizar la instrucción premilitar desde la escuela y adoptar cuantas medidas estimen necesarias para crear un Estado fuerte y disciplinado».

Es importante señalar que el Consejo del Directorio podría reunirse en pleno (con todos los consejeros técnicos) y con carácter ordinario (sólo los militares, presidente y vocales). Éste era sin duda el régimen político que deseaba el general Mola, que era el político más experimentado de todos los jefes del alzamiento. Quería un Directorio provisional, de predominio militar, pero con participación de gobernantes civiles; que desembocara en elecciones por sufragio restringido y un Parlamento. Deseaba librarse de la masonería y los partidos marxistas, pero marcaba un carácter social de signo populista y sobre todo, si bien abolía el Frente Popular, mantenía al régimen republicano. Muchos militares, sobre todo jóvenes, pensaban de esta forma; Mola pretendía atraerse con este conjunto de ideas a todo el Ejército y la Armada.

Mola dedica el mes de junio a intensos y numerosos contactos con todos los jefes del alzamiento, tanto los de primera magnitud (generales Cabanellas y Queipo, fervientes republicanos) como con enlaces y jefes secundarios. El 20 de junio dicta su instrucción reservada número 5 y las Instrucciones para la

fuerzas de la Armada. En la Instrucción 5 habla del uso de la aviación adicta y el peligro de la aviación enemiga. Informa de que el gobierno conoce la inminencia del alzamiento y cree que Navarra será su foco principal. Siguen nuevas normas sobre los avances y una dura advertencia a los tibios y a los militares que no se sumen a la aventura. En las instrucciones para la Marina le confía el dominio de las bases de El Ferrol, Cádiz y Cartagena. Ni Mola ni los mandos de la Marina podían prever la hecatombe de la que sería víctima gran parte de la oficialidad naval al producirse el alzamiento. Lo más interesante de la Instrucción es que, al final, Mola ya muestra su decisión de que el Ejército de África pase a la Península, como confirmará después.

El 24 de junio Mola envía sus Instrucciones para Marruecos. Es ya el plan definitivo, que puede trazar después de recibir seguridades por parte del comandante general de Canarias, Francisco Franco, decidido a ponerse al frente de las fuerzas africanas que le consideran su jefe natural. Mola ordena la formación de dos columnas mixtas (Legión y Regulares), una en Ceuta y otra en Melilla; la primera para desembarcar en Algeciras, la segunda en Málaga. Jefe de todas las fuerzas de Marruecos será, hasta la incorporación de un prestigioso general (Franco), la persona a la que va dirigida esta instrucción (Yagüe). Las columnas de África, desembarcadas, se dirigirán sobre Madrid, arrastrando en su avance a todas las «fuerzas cívicas» simpatizantes. Luego se establecen los telegramas en clave para comunicar el inicio y los resultados del alzamiento.

El 1 de julio de 1936, desde la ficticia dirección de Madrid, Mola envía la última de sus Instrucciones, el «Informe reservado». El comienzo no es optimista: «El entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación». Y sigue: «Está por ultimar el acuerdo con los directivos de una muy importante fuerza nacional indispensable para la acción en ciertas provincias, pues la colaboración es ofrecida a cambio de condiciones inadmisibles que nos harían prisioneros de cierto sector político en el momento de la victoria». (Se refiere a los carlistas que exigen la Monarquía tradicional y la bandera). «Nosotros —replica Mola— no podemos en forma alguna hipotecar el porvenir del nuevo Estado». Por otra parte, ciertas intromisiones personales han obligado que «el director de cierta fuerza combativa», (Falange) retrase su cooperación. Ello ha provocado malentendidos y una suspensión provisional de colaboración pero el día de la fecha ya está resuelto el problema. Mola se refiere crípticamente a varias disensiones y desalientos que a veces atribuye a pusilanimidad e incluso a traición. Pero la suerte está echada. Todo está en marcha y por todas partes se

espera la señal. Nadie, salvo la víctima, podía imaginar entonces que esa señal —el asesinato de Calvo Sotelo— se iba a dar en la madrugada del 13 de julio.

No es misión de este libro analizar los proyectos de Mola y sus compañeros. Lo hemos hecho ya en varios libros y volveremos sobre ello. Lo que nos importa es subrayar que Mola expresaba la opinión mayoritaria de las Fuerzas Armadas y por supuesto de los comprometidos en el golpe; que no quería la abolición de la República, sino la eliminación del Frente Popular, al que consideraban un régimen en descomposición; que no se dirigía contra legalidad alguna porque no la reconocían en el rumbo que había tomado la República desde febrero de 1936; que no hay en las instrucciones de Mola una sola expresión fascista, ya que en ellas se dibuja un horizonte electoral y aun parlamentario; que la dictadura exigida por Mola coincidía con los proyectos de otros muchos políticos españoles de la época, empeñados en atajar el desgobierno del Frente Popular; que Mola apela continuamente a la colaboración cívica, por lo que su proyecto no se puede considerar en exclusiva como militar y menos como militar fascista. No era tampoco un golpe, un pronunciamiento clásico, sino un alzamiento general, como el de 1808 que se llamó por sus protagonistas también «alzamiento nacional». La «media España que no se resigna a morir» de Gil Robles.

En mi libro de 1969 sobre antecedentes de la guerra civil incluyo literal y completamente estos documentos de Mola y estudio también las colaboraciones ciudadanas que trabajaron para el «Movimiento cívico militar» y luego se integraron en el Alzamiento. Los casos de Gil Robles y casi toda la CEDA, el Bloque Nacional dirigido por Calvo Sotelo, están demostrados. Al producirse el Alzamiento se sumó a él una parte de las Fuerzas Armadas, pero otras instituciones como la Iglesia católica, en su jerarquía, su clero, sus organizaciones y muchos de sus fieles, se incorporaron en bloque, casi sin excepciones. ¿Podrá alguien atreverse a calificar de fascista a la Iglesia de 1936?

Cuando en el programa de la COPE, que dirige con tanto acierto María Teresa Campos, respondí, a preguntas suyas, que no consideraba al 18 de julio ni como golpe, ni como militar, ni como fascista, lo hice en virtud de una formidable evidencia histórica que he intentado presentar documentadamente en este libro.

La defensa y liberación del Alcázar de Toledo constituye el episodio central de la guerra civil española. En estas ruinas del patio del Alcázar, asediado por una fuerza diez veces superior, se reveló el factor principal de superioridad a favor del bando nacional contra un Frente Popular que no pudo contar con el factor religioso, clave para esa superioridad moral. Con esta base, nada tiene que ver la guerra civil española con la II Guerra Mundial, como todavía hoy se obstinan en proclamar los enemigos de la España Nacional.

Capítulo V: La guerra civil, madre de todas las mentiras

LA MAYOR FUERZA QUE MUEVE AL MUNDO

Al frente de este libro figura la célebre máxima de Jean-François Revel: «La mayor fuerza de cuantas mueven al mundo es la mentira». No es una frase, ni una exageración, sino una inmensa verdad. Pues bien, si la mentira es la máxima fuerza del mundo, nadie se extrañará de que la mentira sea el ingrediente principal de toda una corriente histórica sobre la guerra civil española, la que ha rebrotado hace algunos años, cuando ya pensábamos que la transición había extinguido entre los españoles los odios fundados en la guerra civil. No ha sido así. La transición se había planteado mediante la Ley de Reforma Política de 1976 como un proceso de reforma de la legislación fundamental anterior, no como un proceso de ruptura. Pero la Ruptura, derrotada clamorosamente en las urnas de 1976, ha tratado de imponerse ciegamente a partir de entonces, hasta llegar el absurdo de que ahora, al acabar el siglo XX, la propia derecha española en el poder se avergüenza de ser derecha, reniega de ser derecha y se empeña en disfrazarse de izquierda, sobre todo en el campo de la cultura y en el campo de la Historia.

Pero no hay más que una verdad, no hay más que una Historia. La que se funda en los hechos reales, no en los imaginados ni menos en los soñados; la que se articula y se expresa mediante el análisis histórico, la que es a la vez ciencia por su concepción y arte en su expresión. El primer libro que publicó, hace ahora justo seis años, Editorial Fénix, se titulaba *Los años mentidos* y versaba sobre las principales mentiras con que se pretendía configurar una falsa historia de España. El libro agotó virtualmente sus cinco ediciones y cuando la Editorial me pide una edición nueva he preferido englobar lo esencial de aquel libro en éste y ampliar la información sobre las mentiras en todos los órdenes, aunque centrándome en las mentiras de la República y las mentiras de la guerra civil. Reservo las mentiras, cada vez más abundantes y opresoras, sobre la figura y la época de Franco, para la próxima edición definitiva de mi biografía de Franco, si bien he dado cuenta ya en este libro de varias de ellas, al criticar históricamente los disparates que algunos autores

han proferido sobre Franco y su época. Ahora, en este capítulo, me voy a concentrar en las mentiras sobre la guerra civil que aún no he tratado en este libro; donde ya he analizado bastantes.

Tengo que agradecer a varios autores y escritores de Historia que se hayan decidido por el arduo e imprescindible camino del análisis de la mentira. Por ejemplo don Pío Moa en su reciente y muy celebrada obra sobre los orígenes de la guerra civil; bienvenido sea tan importante refuerzo al campo de la verdad. También agradezco profundamente a don Juan Luis Beceiro García su libro *La mentira histórica desvelada* (1994), que debate con lucidez y documentación las difundidas falsedades sobre el Descubrimiento y la Conquista de América por los españoles.

PRESTON Y LA MENTIRA FUNDAMENTAL DE LA GUERRA CIVIL

La guerra civil española nada tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Este hecho histórico me ha parecido siempre incontrovertible, y lo admiten numerosos historiadores españoles y extranjeros, de ideologías muy diversas. Por ejemplo, Gabriel Jackson, en su interesante estudio *The Spanish Republic and the civil war* (1965), concibe como un bloque histórico indisoluble la historia de la Segunda República y la historia de la guerra civil, lo cual es exacto, y además establece que la guerra civil surgió como un fenómeno completamente español, sin intervención alguna ni relación previa con ningún otro conflicto europeo. Luego he discrepado muchas veces de Jackson, pero siempre he admirado esa doble intuición que creo fundada y cierta. El doctor Juan Negrín, último jefe del gobierno del Frente Popular en la guerra civil, se obstinaba en su política de resistencia porque estaba seguro de que la guerra mundial sobrevendría pronto y pretendía conectar la guerra de España con la de Europa que luego se extendió a todo el mundo. Pero Negrín no tenía en cuenta, seguramente por desconocimiento, un hecho que hoy conocemos documentadamente; que en 1938, en plena batalla del Ebro, Franco comunicó a los gobiernos británico y francés que en caso de plantearse una guerra en Europa la España Nacional, pese a la ayuda que recibía de Italia y Alemania, se situaría en posición absolutamente neutral. Al conocer esa actitud, los alemanes se molestaron profundamente y restringieron drásticamente la ayuda que prestaban a Franco, sobre todo gracias a la Legión Cóndor, pero no le hicieron cambiar de orientación.

La guerra civil española terminó el 1 de abril de 1939 y la guerra europea empezó el 1 de septiembre del mismo año. Negrín sólo se equivocó en cinco

meses, pero Franco, con España exhausta, no estaba dispuesto a participar en la guerra mundial al lado del Eje y no participó. Los exiliados españoles, explicablemente, pretendieron identificar su guerra civil perdida con la guerra mundial que podría ser victoriosa para los Aliados, entre los que se contaba una gran potencia antidemocrática, la URSS de Stalin, desde que Hitler rompió con su agresión, en junio de 1941, el pacto germano-soviético concluido, ante el asombro de todo el mundo, a fines de agosto de 1939. La pretensión de los exiliados era explicable; habían perdido una guerra en España, pero ahora podrían enderezar esa derrota y convertirla en victoria si se incorporaban activamente a la causa aliada y ésta resultaba victoriosa. Ya que no podían vivir de realidades trataban de vivir de ilusiones y confiaban en que si los aliados creían en la identificación de los exiliados españoles con su causa, la que el general Eisenhower llamó *La Cruzada en Europa* —sin que nadie se rasgara las vestiduras—, podrían regresar a España como vencedores a remolque de los Aliados y los soviéticos. Lo que menos podían imaginar es que ya en 1945, al producirse la victoria aliada, empezaron las graves complicaciones entre aliados occidentales y soviéticos, que desde el año siguiente, 1946, se encontraban enfrentados en la guerra fría.

Sin embargo, los sectores prosoviéticos de la opinión aliada, sobre todo en Norteamérica, cultivaron asidua y tozudamente el mito de los exiliados sobre la identificación de las dos guerras, la española y la mundial. Ese mito estaba ya quebrado en 1946, cuando la estrategia de bloques que se imponía en el mundo favorecía, ante los aliados occidentales, la causa de la España nacional. Nadie, salvo los exiliados españoles, soñaba con reavivar los rescoldos de la guerra civil en España y provocar una nueva hecatombe. Pero sí cambió la estrategia, y la política occidental se aproximó cada vez más a la España nacional victoriosa durante la guerra fría, siguió la propaganda de los exiliados, que encontraban ancha resonancia en los prosoviéticos de Norteamérica y las izquierdas europeas, entre las que los partidos comunistas habían recuperado una gran influencia, después de la proscripción a que habían estado sometidos durante la época del pacto germano-soviético, la aproximación de Stalin a Hitler. Desde que ya se perfilaba la victoria aliada, en 1944, los exiliados españoles se reanimaron, las Internacionales Socialista y Comunista les apoyaron con sus poderosos recursos y surgió un río de propaganda dedicada a identificar falsamente la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial.

Esta primera riada de propaganda fracasó, porque el frente aliado, como acabo de indicar, se quebró con el divorcio de la guerra fría entre los

occidentales y los soviéticos a partir de 1946; los soviéticos mantuvieron su política leninista de expansión revolucionaria, engulleron a Europa oriental y trataron de favorecer victorias comunistas en Europa occidental —Francia e Italia— y pronto en Iberoamérica y en el Tercer Mundo, en el que China participó intensamente tras la victoria comunista en ese gran país asiático en 1949. Entre los promotores de la campaña contra la España nacional, reconocida ya por casi todas las naciones, nadie parecía pensar en que la tesis de la identificación entre la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial había quedado inservible desde la ruptura fría, pero mortal, entre las democracias occidentales y la Unión Soviética expansiva. Esa primera oleada de propaganda identificadora murió cuando los exiliados perdieron las pocas esperanzas que les quedaban en 1953, cuando España consiguió los pactos con el Vaticano y los Estados Unidos.

Hacia los años finales de los sesenta y primeros de los setenta, cuando el «milagro español» o mejor, la transformación de España coexistía con los primeros signos alarmantes de la salud de Franco, la oposición al régimen iba cobrando fuerza, los sectores más dinámicos del propio régimen y la sociedad española se orientaban hacia una ineludible apertura en dirección democrática, se puso de nuevo en marcha, como veremos en detalle, el frente de la propaganda antifranquista que ahora se centró con intensidad y excelente planificación en el sector de la Historia. En este ambiente resucitó también la vieja y ajada tesis de la identificación entre la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial; creo que el abanderado de semejante mentira fundamental fue el recientemente finado Herbert Rutledge Southworth, tan preocupado de mitologías ajenas, cuando debiera primero haber analizado la propia —que jamás se atrevió a confesar— y reapareció el gran camelo de la vieja propaganda antiespañola —no era sólo antifranquista— que ha expresado mejor que nadie Paul Preston, a quien creo el principal discípulo de Southworth, y que en la introducción al libro que ya hemos comentado, *La República asediada* la formula así:

> «Los investigadores españoles y extranjeros han contribuido a confirmar la otra verdad fundamental sobre la guerra civil; durante la misma y tras ella, constituyó un episodio más de la Gran Guerra civil europea que acabó en 1945», (op. cit., p. 11-12).

Preston y cuantos le siguen saben perfectamente que la República española previa a la guerra civil (1931-1936) fue un asunto exclusivamente español que ni interesó lo más mínimo ni fue comprendido ni seguido fuera de España. La República española mantuvo el aislamiento tradicional en la Monarquía después del siglo XVIII; en el XIX y durante la primera

Restauración, los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII; en Europa no interesaba España y en España no interesaba Europa. Extremando un poco el diagnóstico, se pude decir sin error grave que las relaciones exteriores de España durante la República se personificaban en don Salvador de Madariaga, que se esforzaba en Ginebra para mantener un precario puente de conexión. España vivía aislada, ensimismada en sus problemas. En segundo lugar, ya hemos repetido que la guerra civil estalla como consecuencia directa y desembocadura del desgobierno de la República, sobre todo en su fase final, dirigida por el Frente Popular. No se comprende una palabra de la guerra civil sin estudiar antes a fondo a la República. Sin embargo, si bien la bibliografía sobre la guerra civil es desbordante, la que se refiere a la Segunda República resulta escasísima y a estas alturas sólo contamos con las historias de la República escritas por Josep Pla y Joaquín Arrarás para hacernos una idea de conjunto de aquel período; son dos libros muy estimables, pero necesariamente incompletos. Hay otras presuntas historias de la Segunda República mucho más deficientes y por lo general poco fiables. Pues bien, Preston y sus colaboradores, en el libro a que me estoy refiriendo empiezan abruptamente el estudio de la guerra civil en el 18 de julio de 1936, sin molestarse en proponernos siquiera un breve resumen de la República como antecedente. Y sin un conocimiento serio y previo de la República, no se comprende una palabra sobre la guerra civil. Preston lo intenta en otros libros como *La destrucción de la democracia en España* que bien podía haberse ahorrado porque no se destruye lo que no existe.

Esta tesis de Preston, seguida por casi todo el actual frente historiográfico prorepublicano, nos parece la falsedad fundamental, la más grave que puede sostenerse sobe la guerra civil. La guerra civil no fue la primera batalla de la guerra mundial. Ni los beligerantes eran homólogos, ni las motivaciones de los dos bandos de una y otra guerra tenían nada que ver. La Segunda Guerra Mundial, suele decirse, se entabló entre las democracias occidentales y los regímenes totalitarios de Europa y Asia. Pero eso es mentira; en el bando de las democracias occidentales combatió, como principal beneficiaría, la Unión Soviética, dirigida por el sistema más totalitario del mundo. En la guerra mundial combatieron totalitarios contra demócratas occidentales (reforzados por el totalitarismo máximo, el estaliniano), en la guerra de España los bandos eran completamente distintos. Ninguno de los dos profesaba ni practicaba la democracia. El bando nacional era de carácter autoritario no preponderantemente fascista, como dijo el profesor Linz; el bando republicano no era demócrata, sino que estaba dominado por la dictadura del

proletariado, por la alianza entre socialistas revolucionarios y comunistas, con el resto de los grupos del Frente Popular en segundo plano. Madariaga cita las célebres cartas cruzadas entre los dirigentes soviéticos y Largo Caballero a fines de 1936 y principios de 1937. Stalin, nada menos, aconsejaba a Caballero que presentarse al bando republicano, al menos formalmente, como una democracia parlamentaria para no alarmar a los occidentales; Caballero se negaba en redondo con duras frases contra el parlamentarismo. Esas cartas se han publicado muchas veces y Preston lo sabe. La guerra mundial no fue en aspecto alguno una guerra de religión; la guerra civil española fue, básicamente, una guerra de religión. Ya hemos recordado que en 1938, cuando poco antes de la conferencia de Múnich la guerra europea parecía inminente, Franco garantizó a los aliados occidentales la neutralidad española con gran indignación de los alemanes. Identificar las dos guerras es forzar la Historia, retorcerla, falsearla.

JUAN BENET: CULTURA Y ESTRATEGIA EN LA GUERRA CIVIL

El finado Juan Benet era ingeniero de Caminos, novelista e izquierdista: Perteneció a una famosa tertulia de intelectuales que merecería una novela en torno a la transición. No sé si alguna vez tuvo algún roce con ingenieros de Caminos que honran a mi familia, pero el caso es que nunca mostró afición a mi gentilicio. Una vez critiqué su libro de ficción sobre la guerra civil *Herrumbrosas lanzas* y lo califiqué de herrumbrosa historia; no le gustó, pero no replicó a mis razones con razones, sino con otra cosa. Ahora ya vive en el más allá de todo y por ello merece respeto en esta evocación de sus escritos sobre nuestra guerra, respeto que se facilita por algunas opiniones certeras y positivas que encuentro en ellos junto a otras históricamente inadmisibles.

Los editores de Benet (*Las sombras de la guerra*, Madrid, Taurus, 1999) han incluido en un volumen tres escritos de Benet muy desiguales, precedidos por un prólogo desigual de Gabriel Jackson. El primero, *Qué fue la guerra civil*, ocupa casi todo el libro y reproduce el librito publicado por La Gaya Ciencia en 1977, dentro de una colección divulgadora de historia y política en la que colaboramos muchas personas que ya estábamos contribuyendo a la transición histórica de España. Se trata, ante todo, de una historia predominantemente militar de la guerra de España que nos revela el interés por los problemas militares y estratégicos que sentía el autor. Benet es principalmente novelista, no historiador; su conocimiento de la guerra civil era muy incompleto cuando escribió esta síntesis. Sitúa la primera amnistía

referida a comportamientos en la guerra civil ya después de muerto Franco, pero no es verdad; cualquier delito cometido en la guerra civil había sido ya objeto de una amnistía absoluta por parte de Franco en 1969, poco antes de la designación del Príncipe como sucesor a título de Rey. Fuera de esta omisión, el libro se abre con un gran acierto: la guerra civil española nada tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. «Se ha dicho —dice Benet en la p. 20— repetidamente que la guerra civil española no fue sino el preámbulo de la II Guerra Mundial y que las ideas y armas que habían de contender en ésta ensayarían sus fuerzas a escala reducida en nuestro suelo, nada más inexacto, a mi parecer, que toda teoría que, con el pretexto de verlos incursos en una catástrofe mundial que se venía incubando fuera de sus fronteras, trate de paliar la responsabilidad de los españoles sobre los destinos propios y ajenos». Acabo de exponer esa misma idea, me alegra ver que Benet se alinea abiertamente contra la que Paul Preston considera como tesis fundamental para entender la guerra civil.

Otro mérito de Benet es considerar al período de la República como antecedente necesario para comprender la guerra civil. Ésta había sido ya una tesis de su prologuista Jackson, que también me parece imprescindible, aunque ahora está de moda prescindir de la República a la hora de estudiar la guerra, que nacería así como por arte de birlibirloque. En cambio creo que Benet es injusto y unilateral cuando atribuye toda la responsabilidad por el estallido de la guerra civil a las derechas, a través de un proceso subversivo que se abre «desde el día siguiente de la proclamación de la República y sin atender a sus resultados» (p. 31). Creo que en los capítulos y epígrafes anteriores de este libro ha quedado claro que fueron los republicanos intransigentes primero, y luego los revolucionarios de Octubre de 1934 y los responsables del Frente Popular, quienes provocaron la guerra civil con mucha mayor virulencia que las derechas. Sitúa Benet el nacimiento del partido monárquico, Renovación Española, en 1931, cuando fue al año siguiente, tras el fallido golpe del 10 de agosto; Renovación no intervino en las elecciones a Cortes constituyentes de 1931, de las que salieron no sesenta, sino un solo diputado monárquico, Romanones, que nunca fue de Renovación (p. 33). Pasa despectivamente Benet por la gravísima quema de conventos de mayo de 1931 y no tiene una palabra de crítica sobre la palmaria ilegitimidad de las elecciones municipales del 12 de abril para dar paso a la República. También desprecia la vital importancia de la Revolución de Octubre como origen principal de la guerra civil y como atentado antidemocrático a la República (p. 34). Durante ella, Franco no fue jefe del Estado Mayor ni

Varela y Goded participaron en los combates. Las elecciones del Frente Popular y sus resultados se tratan por Benet con frivolidad asombrosa (p. 35).

El relato de la preparación y la ejecución del Alzamiento es excesivamente superficial y está plagado de errores que harían interminable esta reseña. Reducir la cifra de militares que escogieron servir a la República tras el Alzamiento a sólo doscientos, cuando está archidemostrado que pasaron de cuatro mil (p. 45), es inadmisible a estas alturas.

El paso aéreo y naval del Estrecho se refleja de forma insuficiente; baste decir que Benet no menciona el convoy naval llamado de la Victoria que cruzó el 5 de agosto (p. 48), cuyo efecto material y moral fue decisivo. Confunde reiteradamente al Ejército de África con el Ejército del Centro (p. 49) e incluso indica, sin base alguna, que Franco, una vez jefe del Estado, conservó el mando directo del Ejercito del Centro, nunca lo tuvo. No es verdad que las primeras columnas navarras que operaron sobre Guipúzcoa tuvieran que retirarse a su base (p. 49). En cambio está muy bien vista la importancia decisiva del Alcázar de Toledo en la marcha de la guerra (p. 57). El desembarco republicano en Mallorca escapa a la comprensión de Benet, sobre todo en cuanto a las causas del reembarque, que no fue una simple improvisación, sino efecto de una dura contraofensiva del enemigo; y en cuanto al aspecto estratégico de la isla, que dependió de la acción de Franco a distancia y constituye, junto al paso del Estrecho por aire y mar, una decisión estratégica fundamental del propio Franco que Benet afecta ignorar. Por cierto que se arma un pequeño lío entre los términos de «estrategia» «táctica» y «logística». Apenas emplea el segundo y apenas analiza el tercero, en el que radica una de las causas más importantes de la victoria de Franco.

Acierta Benet en señalar a Madrid como el objetivo primordial de la guerra civil (p. 54) y en la importancia decisiva de la ayuda soviética a la España republicana, bajo la condición de favorecer la posición de los comunistas españoles en el control del Ejército Popular y la política de la zona (p. 57). Éste es un acierto fundamental, que no es fácil encontrar en los tratadistas favorables al Frente Popular. La batalla de Madrid se resume mal. La XII Brigada Internacional no participó en la defensa inicial (ni tampoco la XI que se incorporó al día siguiente).

Benet desconoce la elección de Franco; su esquema (p. 62) falla en las fechas. Lo que se reunió en el campo de Salamanca (al lado del cual no había un «aeropuerto», sino un aeródromo de tierra muy insuficiente) era la Junta de Defensa de Burgos, cuyas reuniones fueron el 21 y el 28 de septiembre. La Junta no se había constituido en la segunda de estas fechas, sino al triunfar el

Alzamiento en Burgos y Pamplona. La elección no se celebró ante «multitud» alguna y se decidió en dos fases; el mando militar y el total. No se cambió el decreto, que incluía, al publicarse el día 29, la expresión «jefe del Gobierno del Estado»; la expresión utilizada pronto, «Jefe del Estado», no fue una maniobra sino una abreviatura. Cabanellas no se encontró con el decreto a su llegada a Burgos, lo redactó y lo firmó él. Nicolás Franco no fue secretario de la Junta Técnica del Estado, sino de la jefatura del Estado (pp. 62-63). No se trata de detalles nimios sino sustanciales. Otro acierto poco común en autores prorepublicanos; Benet reconoce la superioridad de los carros soviéticos sobre los alemanes en las primeras batallas y conoce bien la evolución de las ideas tácticas sobre el empleo de los carros independientemente de la infantería. Benet cree que las Brigadas Mixtas fueron una idea posterior a la creación del Ejército Popular; no fue así, ese Ejército nació precisamente articulado en esas unidades mixtas de armas y servicios. Tiene muchísima razón cuando afirma que la intelectualidad que había arropado a la República, le volvió la espalda en la guerra civil (p. 67).

No tiene razón Benet cuando critica al gobierno republicano por no haber formado un plan de envergadura para la primavera de 1937 (p. 69). Eso deja en mal lugar al general Rojo y a Indalecio Prieto, que sí habían formado ese plan, a la vez que contaron con un nuevo Ejército Popular que había demostrado su eficacia en las grandes batallas en torno a Madrid. Ese plan tendía a salvar la franja republicana del Norte y consiguió retrasar la ofensiva de Franco sobre Santander; por cierto que tras la victoriosa penetración de varias divisiones comunistas a vanguardia de Brunete, el general Rojo estuvo a punto de tomar por detrás y envolver a todo el frente nacional de Madrid, que tal vez hubiese significado la última posibilidad de victoria para la República.

La llegada de Negrín a la cabeza del nuevo gobierno republicano en mayo de 1937, por una imposición, comunista está bien captada por Benet, quien sin embargo se equivoca cuando quiere presentar al doctor como independiente frente a soviéticos y comunistas; estuvo sometido a ellos de forma completa, como ha demostrado Burnett Bolloten. Benet trata con demasiado esquematismo, rayano en la caricatura, la unificación política forzada por Franco en la zona nacional, y además yerra cuando atribuye a Serrano Suñer la secretaría general de Falange que nunca desempeñó.

Pasa sobre ascuas por encima del problema de Guernica, donde no demuestra implicación alguna del mando nacional y exagera hasta el paroxismo el número de bajas, que osciló en torno a cien y él describe como

tres mil. Como de pasada y de forma enteramente marginal trata un problema capital del conflicto, la implicación de la Iglesia Católica, tan relacionada con otro asunto de primer orden, el factor moral y la superioridad moral de la España nacional sobre la republicana (p. 104).

Benet parece inclinado a las cuestiones navales, pero se le escapa la organización del bloqueo por la Escuadra nacional y no capta, ni de lejos, la importante batalla de marzo de 1938 que causó el hundimiento del *Baleares*, donde Bruno Alonso, que era comisario de la Flota, ni entonces ni nunca la mandó (p. 114). Benet minusvalora las cualidades militares de Franco de forma asombrosa. Piensa que el Ejército nacional actuó según las pautas de la Primera Guerra Mundial y no de la segunda. No es verdad. Las rupturas en combinación de masa artillera y aérea no se dieron en la Primera Guerra Mundial y Franco las practicó en la batalla de Vizcaya y en las de Teruel y posteriores. La primera gran maniobra no fue en la gran ruptura de Aragón, sino antes, en el Alfambra y todavía antes, en la campaña de Santander. Abomina de la lentitud de Franco, pero el Ejército del Norte pudo situar dos divisiones de Navarra en el frente de Brunete en menos de la mitad del tiempo calculado por Rojo. Franco practicó la guerra mecanizada a lo largo de la marcha sobre Madrid, aún en 1936 y no pudo hacerlo en otros combates por la dificultad del terreno; cuando encontró un terreno propicio, como en la gran ofensiva de Aragón, planteó la batalla con técnicas luego usadas en la Segunda Guerra Mundial. No comenta Benet la campaña de Cataluña, obra maestra militar de Franco, con sus conversiones de frente y su manejo sincronizado de Cuerpos de Ejército; y en cambio critica la lentitud del avance sobre Valencia, sin tener en cuenta que, con el frente al mando de Miaja, la resistencia del Ejército Popular se endureció sobremanera gracias a las sierras que descendían hacia la costa desde un terreno interior impracticable. Habla muchas veces de logística sin aplicar bien el término; Franco destacó siempre en la auténtica logística, la organización de las líneas de suministro y amunicionamiento en primer término; y fue muy superior en el cuidado del material pesado y ligero, frente a la desidia de sus enemigos. En cambió está bien vista «la estructura del ejército de maniobra comunista». Benet discrepa de Franco por no haber maniobrado desde Lérida en la batalla del Ebro, pero no tiene en cuenta algo que está documentado; que la situación internacional no permitía a los nacionales golpear entonces sobre Cataluña, y hay de ello testimonios expresos.

Sobre el final de la guerra, Benet incurre en la superficialidad de casi todos los tratadistas. No conoce la importancia determinante de la guerra

secreta, tan decisiva en el interior de Madrid, ni los entresijos del golpe final de los comunistas, ni la meticulosa preparación de la que Franco llamaba Ofensiva General, ni su perfecta realización. Éstos son los comentarios que se me ocurren a un ensayo insuficiente, que cuenta con algunos atisbos estimables.

El segundo ensayo, *Tres fechas, sobre la estrategia en la guerra civil española*, publicado en 1990, está ya virtualmente comentado y por lo general descartado en las consideraciones finales que hemos dedicado al ensayo anterior. No volveremos por tanto sobre lo mismo.

El tercer ensayo, *Sobre la cultura en la guerra civil*, que se publica en este libro por primera vez, me parece la antología del tópico y sugiere la obsesiva apropiación del mundo cultural por las izquierdas, genéricamente consideradas, a lo largo de la historia de los últimos tres siglos de España. Benet exalta genéricamente a la Ilustración española, a la que considera como un reflejo de las ideas de Francia, cuando son dos fenómenos específicamente diferentes. Es muy injusto con el general Primo de Rivera, al que aclamaron en 1923 los intelectuales que luego abominaron de él en 1930; y los creadores de la Agrupación al servicio de la República actuaron de hecho en la guerra civil no como neutrales inhibidos, sino como promotores del bando anticomunista, de forma pública y notoria. La historia cultural española de la guerra civil no se traza con la amplitud y profundidad que demostró Hipólito Escolar; no conoce Benet la contribución de Pemán ni menos la de Sainz Rodríguez y protesta justamente contra el asesinato de Lorca, pero no dice una palabra sobre el de Ramiro de Maeztu. Es un esquema pobre de buenos y malos, que apenas penetra en la superficie del problema.

EL ALCÁZAR DE TOLEDO: MENTIRA, VICTORIA Y FINAL

Estoy implicado, desde los nueve años de edad, en la defensa del Alcázar de Toledo. Era en septiembre de 1936 cuando desde los visillos de la Legación de Noruega, entonces en la calle Abascal, 14, donde, tras la misma fachada, se halla hoy un espléndido hotel, veíamos cruzar, desafiantes, las manifestaciones del Frente Popular con banderas y pancartas que anunciaban la caída del Alcázar de Toledo en manos de las tropas republicanas que le asediaban desde poco después del 18 de julio. Pero por la prensa del día siguiente sabíamos, esa y otras veces, que el Alcázar no había caído. Y sabíamos que no caería nunca. Pocos días más tarde, cuando tras escapar del infierno llegábamos a Biarritz, vimos que *La Petite Gironde*, del 28 de

septiembre, anunciaba en bandera la liberación del Alcázar. Después de tantas mentiras, al fin la verdad.

Jamás dudé de esa verdad. Poco después, ya en San Sebastián, compré con diez pesetas de propinas el primer libro de mi biblioteca, el que escribió el padre Risco sobre la defensa del Alcázar. Luego me iban llegando, al hilo de los años, otros libros sobre la verdad y algunos sobre la mentira del Alcázar. La defensa del Alcázar de Toledo era el hecho más famoso de la guerra civil española. Representaba, para la España nacional, la clave de la superioridad moral —la moral de victoria— que hizo ganar y perder una guerra. Para los partidarios del Frente Popular el Alcázar significaba una frustración máxima. Y ya que no habían conseguido dominarlo en vivo, trataron de borrar su verdad de la Historia.

El gran enemigo del Alcázar de Toledo ha sido, hasta su muerte reciente, ignorada y perdida, el polemista americano Herbert Rutledge Southworth. Se obstinaba durante años y años en lo que no habían conseguido los cañones emplazados en la dehesa de Pinedo y las minas excavadas desde las proximidades de Zocodover; la demolición del Alcázar en el campo de la Historia. Nunca lo consiguió, pero ha transmitido a sus varios discípulos su odio al Alcázar y sus ansias de establecer el «antimito» del Alcázar, tras establecer, eso quería, que el Alcázar no era una realidad sino un mito. Lo negaba todo; el heroísmo de Moscardó, al que acusaba de no defender la ciudad entera de Toledo ¡con un millar de hombres sin artillería frente a diez o doce mil con todos los medios!; pero sobre todo negaba el espíritu, la victoria moral, el sacrificio; y por eso se obstinaba en proclamar que la conversación famosa entre el coronel Moscardó y su hijo Luis jamás había tenido lugar.

Luego vinieron más antimitos. Que la represión en Toledo tras la liberación fue espantosa y desmesurada. Que desviarse al Alcázar le supuso a Franco su fracaso ante Madrid. Que Moscardó no custodiaba familias de los defensores, sino rehenes enemigos.

La mentira y la calumnia se fueron, a veces, imponiendo. Hay agencias de viajes que no incluyen en Toledo la visita del Alcázar. Hay historiadores presuntos que repiten como papagayos las falsedades de Southworth. Pero el Alcázar había marcado para siempre a la Historia de España y echaba raíces en la opinión pública mundial y en la memoria histórica universal. A los libros mendaces, que se sucedían cansinamente como libros del odio y la mentira, se superponían los libros veraces; Manuel Aznar, el general Rafael Casas de la Vega, en un estudio monográfico insustituible, el general Benito

Gómez Oliveros, Ángel Palomino con una revisión convincente y arrebatadora, el doctor Lorenzo Morata que defendió el Alcázar con once años junto a su padre, guardia civil, y que en unas memorias apasionantes titula *¿Fui yo un rehén?*

Pero faltaba el libro definitivo. El general Fernando Esquivias, al enviudar de la última hija viva del general Moscardó, descubrió en una caja varios documentos de Moscardó que ni siquiera su hija había visto: entre ellos, las cartas que el coronel escribió a su esposa durante el asedio, algunas de las cuales llegaron a ella con copias que hicieron en un comité de los sitiadores. Moscardó guardaba todos los originales que han publicado recientemente, en la Editorial Actas, dos jóvenes investigadores de Historia contemporánea: Alfonso Bullón de Mendoza y Luis E. Togores. Bajo el título *El Alcázar de Toledo, final de una polémica*. Yo creo que si Herbert Rutledge Southworth ha alcanzado en sus últimos meses a ver este libro, no habrá que preguntar a los médicos por la causa de su muerte. Este libro representa su derrota final y definitiva, el hundimiento de su antimito, la luz recuperada, al fin, para el auténtico Alcázar de Toledo.

Este libro me estimula a escribir el mío, un proyecto que data de muchos años y que se reaviva en cada visita a Toledo. Por eso no ahondo más en el problema y en la definitiva solución. Me gusta tener al Alcázar en un horizonte relativamente próximo, otra vez. Como en aquella mañana de Biarritz cuando leí los titulares de su liberación.

No puedo sin embargo reprimir la coda. Que yo sepa la última agresión de Southworth a su odiado Alcázar ha sido un «prólogo» a un librito contra el Alcázar escrito por un señor Isabelo, nada menos. Dos años antes, ya es mala suerte, de que apareciera el *Final de una polémica*.

Desgraciadamente no era el final. Corrijo estas líneas en la Navidad de 1999 y veo que don Eduardo Serra, ministro de Defensa, declara que al trasladarse al Alcázar de Toledo el Museo del Ejército dejará de ser «guerracivilista». Mejor haría en leer el primer capítulo del libro de Jesús Cacho *El negocio de la libertad* y además completarlo con datos que él sin duda conoce bien.

HUGH THOMAS EXIGE EL ARREPENTIMIENTO A LOS VENCEDORES DE LA GUERRA CIVIL

Durante un curso del verano de 1999 por él dirigido en El Escorial, el famoso historiador británico Hugh Thomas no acertaba a explicarse, según

declaración al diario *El País* (24 de agosto de 1999), la falta de arrepentimiento y de perdón del franquismo que ganó la guerra, y contrapuso esa crueldad de los vencedores con la generosidad del marqués de Mondéjar que, en la Granada conquistada a los musulmanes, «permitió expresamente que éstos no vistieran de cristianos». Reconocía que en el bando republicano «también hubo saña y estoy de acuerdo con el historiador Víctor Alba cuando lo achaca a una indiferencia por el íntimo convencimiento de que las víctimas se lo merecían. Pero sigo pensando que fue mucho peor en el bando nacional».

No sé si Hugh Thomas está de acuerdo con la razón de esa indiferencia y cree también que las víctimas del bando republicano merecían la muerte, entre ellas los trece obispos, ocho mil eclesiásticos y las decenas de miles de católicos asesinados por serlo, muchas veces, como en el caso de las víctimas de Paracuellos, sin haber pasado ni por una parodia de proceso. No sé si las crueldades, a veces espantosas, que se reflejan en el felizmente reeditado libro de monseñor Antonio Montero le parecen insuficientes. No sé si comulga con la famosa tesis de Julio Aróstegui y tantos seguidores suyos sobre que los muertos republicanos eran «de primera» y los nacionales «de segunda».

Ramón Serrano Suñer ha explicado más de una vez, y lord Hugh Thomas lo sabe bien, que al final de la guerra civil un clamor de venganza que provenía de las familias de las víctimas asesinadas por los rojos impidió que la guerra civil del siglo XX se cancelara con una amnistía generosa semejante a la que siguió a las crueles guerras civiles del siglo XIX. Pero Serrano no explica, ni por lo visto Thomas sabe, que en miles de familias españolas no actuó al final de la guerra la venganza, sino el perdón y entre otras hablo de la mía, de la que habían desaparecido violentamente una docena de personas y nadie interpuso luego una denuncia o una acusación, aunque varios conocían el nombre de quienes habían contribuido al asesinato de los nuestros. Pero ahora quisiera alzar el debate a plano internacional, porque me temo que lord Hugh Thomas, obstinado en ver la viga en el ojo ajeno, no advierte la del propio.

¿No es la historia de Inglaterra, desgraciadamente, un ejemplo continuado de crueldad que debería aconsejar a los británicos mayor cautela al hablar de crueldades ajenas? No podría ser exhaustivo, pero la colonización inglesa de Norteamérica fue un genocidio en regla, del que los británicos (y sus continuadores en las Trece Colonias) jamás han pedido perdón. Las guerras de religión en Inglaterra y Escocia arrojaron sobre una soberana católica el título de Sanguinaria y se lo ahorraron a una reina protestante que se lo

merecía más, tras asesinar a la legítima reina de Escocia. La crudelísima guerra contra los católicos de Irlanda, que Inglaterra llevó a sangre y fuego, parece que se está cancelando cuatro siglos después. La entrada de las tropas británicas en ciudades españolas durante la guerra de la Independencia, cuando teóricamente Inglaterra era aliada nuestra, se recuerda con espanto todavía hoy en algunas de ellas como San Sebastián. La piratería inglesa, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, fue una cruel tragedia casi continua entre los siglos XVI y XVII y contribuyó a la ruina y a la pérdida de la América española más que otras causas menos innobles. Inglaterra se empeñó, y en buena parte consiguió, en sustituir a España en la vil y crudelísima trata de negros de África con destino a las Américas. La crueldad de Inglaterra en sus múltiples guerras coloniales e imperiales —casos de África del Sur y de la India, caso extremo de las espantosas guerras del opio, que merecen el poco glorioso nombre de genocidio, y no son las únicas de la lista, por citar solamente tres— permanece en la memoria de aquellos pueblos sojuzgados. El inútil bombardeo de la ciudad abierta de Dresde al fin de la guerra mundial, con decisiva participación británica, causó más de cien mil muertos en una sola noche, es decir, mil veces más que el bombardeo de Guernica, a cuya torpe mitología contribuyó más que nadie un famoso periodista inglés. Me temo que la reina de Inglaterra no ha encontrado todavía tiempo para pedir perdón por todas estas atrocidades y otras que pudieran añadirse, pero bien se lo podría sugerir el propio lord Thomas mediante una moción de la discutida Cámara de los Lores, antes de su próxima irrupción en la guerra civil española.

EL BOMBARDEO DE GUERNICA EN LAS CORTES

Durante el último debate sobre el estado de la Nación y concretamente el día 23 de junio de 1999, el señor Zabalía Lezámiz, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, mostró una excepcional inclinación a la Historia. Siempre he creído que entre las misiones que la Constitución vigente asigna a las Cortes no figura la de dictaminar sobre la Historia, así como sobre ninguna de las demás ciencias o artes, sustituyendo en tan arduo cometido a los historiadores y demás profesionales, pero el caso es que el señor Zabalía Lezámiz, en la fecha indicada, se empeñó en proponer una resolución sobre el bombardeo de Guernica que como se sabe tuvo lugar el 23 de abril de 1937. Por exigencias de la brevedad, el orador tuvo que tratar del problema

Guernica no de forma específica, sino dentro de un conjunto de propuestas que sometió al Congreso. Todas ellas se relacionaban con el estado de la Nación menos, dicho sea con todo respeto, la apostilla sobre el bombardeo de Guernica, sin duda muy importante para el estado de la Nación en 1937, pero bastante lejano ya de las preocupaciones de los españoles en 1999. Lo curioso es cómo formuló el señor Zabalía su propuesta:

> «Finalmente quiero también hacer referencia a un hecho que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Vasco y para el Partido Nacionalista Vasco, es un tema que desde luego debería haber tenido un tratamiento distinto. Me voy a referir al bombardeo de Guernica. Acaban de cumplirse sesenta y dos años desde que Guernica fue arrasada y destruida por las tropas franquistas».

Esta primera parte de la propuesta es sencillamente falsa: las «tropas franquistas» no arrasaron Guernica, como el propio señor Zabalía va a reconocer inmediatamente. Apremiado por la presidencia del Congreso, a cuyo titular el problema propuesto no le parecía en exceso pertinente, el señor Zabalía concluyó así:

> «Termino, señor Presidente. Hemos querido hacer un homenaje y restituir el honor a aquellos llamados rojos separatistas a los que el régimen de Franco calumnió haciéndoles culpables de la destrucción de Guernica, cuando nadie tenía duda, entonces y hoy, de la autoría de la masacre por parte de la Legión alemana Cóndor, a las órdenes del general Franco.
>
> »Reconocido este hecho por todos y por la historia, ningún gobierno español ha desmentido oficialmente aquella calumnia, por lo que pedimos hoy al gobierno español que sea el que oficialmente reconozca que el bombardeo de Guernica el 23 de abril de 1937 fue realizado por la Legión Cóndor y no por los rojos separatistas».

Acabáramos. El señor Zabalía, a la hora de la verdad, a la hora de la propuesta, no alude para nada al general Franco ni a las tropas franquistas, sino exclusivamente a la Legión Cóndor. Eso es verdad y cualquier español puede votarlo. Hoy nadie duda de que la Legión Cóndor destruyó Guernica, pero no fue ella sola. Estoy esperando con sumo interés la aparición del tercer volumen de la magna obra del general Jesús Salas Larrazábal *Guerra aérea 1936-1939*, porque el tomo segundo termina justo en vísperas del bombardeo de Guernica; pero el ilustre investigador ha aportado ya en obras anteriores pruebas más que suficientes como para demostrar que Guernica fue, en efecto, destruida por la Legión Cóndor, pero que ésta no actuó sola: fue acompañada, aunque en menor escala, por la aviación italiana al servicio de los nacionales. Lo que no ha demostrado nadie, como bien sabe el señor Zabalía, es que para este hecho de armas concreto, la Legión Cóndor actuase a las órdenes del general Franco, ni del general Mola ni de mando español alguno, sino que lo hizo por propia iniciativa, por lo que incluirla para esta acción entre las «tropas franquistas» «es arbitrario y gratuito».

Es verdad que la oficina de prensa del Cuartel General del Generalísimo difundió la interpretación de que Guernica había sido destruida por los rojo-separatistas. Aquello era un acto de propaganda de guerra, dictado por la sorpresa del propio Cuartel General al conocer la noticia y la magnitud del bombardeo. No fue una declaración oficial. Durante más de sesenta años el documento más buscado por la contrapropaganda del Frente Popular y del gobierno vasco de entonces y todos sus sucesores ha sido la orden de Franco o de Mola para destruir Guernica. No se ha encontrado el documento sencillamente porque no existe. Lo que el señor Zabalía llama «masacre» producida por el bombardeo de Guernica se expresa con una cifra poco superior a los cien muertos, aunque hay quien habla de millares; cien muertos son un número muy lamentable, pero ¿cómo habrá que calificar a los bombardeos de Dresde, de Hiroshima y de Nagasaki?

Pero hay algo más. Un informe encargado por el Cuartel General después del bombardeo, el informe Herrán, investigado con toda imparcialidad, señaló que junto a los indudables impactos de las bombas alemanas podían verse en varios puntos de Guernica hornillos preparados para la autodestrucción. El general Salas conoce ese informe y espero su dictamen definitivo. Por el momento yo he podido demostrar que una fuente republicana segura —o rojo — separatista, si lo prefiere el señor Zabalía, que es nada menos que un jefe de División en la campaña de Vizcaya, Víctor de Frutos, en su interesante libro *Los que no perdimos la guerra* (se refiere a los que la perdieron), da testimonio que los rojo-separatistas tenían todo preparado para la destrucción del casco viejo de Bilbao (con sus moradores dentro) antes de la entrada de las tropas nacionales, y fueron los hombres de Frutos quienes lo impidieron. Tal propósito, del que existen indicios en Guernica, está plenamente demostrado para el caso de Bilbao. Por tanto no toda la Historia está de acuerdo con el señor Zabalía, a cuya disposición estoy para facilitarle cualquier texto, documento o aclaración que desee, no faltaba más.

En cuanto a que las Cortes de 1999 tengan como misión desmentir o proponer la verdad sobre hechos históricos, una tesis así podría conducirnos al absurdo. Una derecha con mayoría suficiente podría plantear el problema de la Revolución de Octubre de 1934, que las Cortes de 1934 a 1936 dejaron no sólo sin resolver y liquidar, pero ni aun se atrevieron a plantear, cuando era palpitante actualidad. Podríamos abrir un debate sobre el exilio de Goya, sobre las atrocidades de Fernando VII, sobre la batalla de Ayacucho, sobre la Inquisición (como ha hecho ahora el Vaticano, cada vez más hundido en el acomplejamiento y en el anacronismo). Y dentro de la guerra civil podríamos

presentar mociones sobre la defensa del Alcázar de Toledo, el comportamiento de los asaltantes de Santa María de la Cabeza, etc. Habría que crear unas Cortes paralelas para concentrarse en problemas históricos, con algún juez demasiado famoso como presidente. Se ha abierto todo un camino, y aun me queda, para este libro, la traca final.

LAS EXEQUIAS POLÉMICAS DE RAFAEL ALBERTI

La reciente desaparición de Rafael Alberti ha transcurrido entre elogios absolutos y críticas relativas. La trompetería mediática se ha desatado con exageración cacofónica y culpables ocultaciones, mientras en el haber poético del personaje casi todo el mundo se limitaba a citar el título de *Marinero en tierra*. En medio de tantas medias verdades sólo un escritor, que yo sepa, se ha atrevido a abocetar la verdad completa; su nombre, como casi siempre, ha sido Federico Jiménez Losantos. Por decir esa verdad completa fue expulsado fulminantemente del extraño *ABC* de que ahora gozamos; le ocurre por segunda vez en poco tiempo, aunque por fortuna de todos vuelve a ser acogido en las heteróclitas páginas de *El Mundo*, donde estrenó su nueva etapa el 8 de noviembre con el mismo artículo admirable que la nueva dirección del diario monárquico no quiso admitir. Menos mal que el gran Alfonso Ussía vino a decir lo mismo en el mismo diario intransigente, que se tragó el artículo; perder dos estrellas de tal magnitud en la misma tacada hubiera terminado con la ya escasa credibilidad que le quedaba tras la eliminación de Losantos.

Hace no mucho tiempo tuve que intervenir, por lealtad elemental, en una polémica sobre Alberti, suscitada por un admirable artículo de Torcuato Luca de Tena, en que relacionaba al poeta, como ahora hace Federico Jiménez Losantos, con actividades represivas durante la guerra civil. Torcuato se había marchado de ejercicios espirituales y yo me sentí obligado a parar los pies a quienes, en su ausencia y obligado silencio, le denostaban sin razón. Entonces dejé bien clara la verdad sobre la estancia de Alberti en Ibiza durante la dominación nacional, su huida a su zona roja a bordo de los barcos de Valencia, su presencia en Madrid dedicado a labores de propaganda y a dirigir el Comité de Intelectuales Antifascistas sito en la calle Marqués del Duero. No me quise adentrar en su poesía política escrita y publicada en la República y en la guerra civil, porque alcanzó tales abismos de escatología, en sentido literal, que el propio poeta tuvo luego la sensatez de repudiarla al menos en parte, si bien siempre he pensado que repudiar un escrito propio anterior

puede ser algo lícito y aun loable, pero inválido. El día que alguien decida publicar toda esa basura de Alberti —ya que debe de ser *res nullius*— se hundirá en el fango la memoria de Alberti, como debería suceder cuando una mayoría suficiente de lectores conozca el incomparable libro de Paul Johnson *Intelectuales* con las vidas verdaderas, entre otros, de Voltaire, Rousseau y la compañera de Humphrey Bogart, pero abundan los que se empeñan en vivir en la mentira y el truco.

La actitud de *ABC* es en los últimos tiempos, por desgracia, marca de la casa, pero me apenó muy especialmente ver que, en el propio periódico en que se había refugiado Jiménez Losantos, le atacaba al día siguiente, desde la columna de enfrente, el periodista Raúl del Pozo. Perpetra un terrible atentado a la Historia en que yo creo y lo hace con tales acentos que no siento la menor tentación de responderle con detalle racional, después de protestar por su irracionalidad tan compatible con la conjura que estoy tratando de investigar en este libro. Nada de lo que dice Raúl del Pozo tiene que ver con el contenido ni con la intención de Federico Jiménez Losantos, nada de nada. Pero la izquierda roja salta hoy como un resorte cuando alguien toca un pelo de la ropa a sus mitos y a sus santones, recurre a la descalificación gratuita y al insulto por el insulto. En el fondo está resucitando, por voluntad de aplastamiento absoluto, la guerra civil que creíamos haber instalado en el pretérito. No lo está, por desgracia común.

Para terminar de arreglar el asunto, las distinguidas damas de Alberti —su viuda y su hija— se han enzarzado en una polémica atroz, sórdida, sin que la primera dama de Alberti, María Teresa León, haya merecido un recuerdo importante con motivo de la muerte del poeta. Espero que ya le hayan colocado al menos una lápida en el cementerio de Majadahonda donde yace olvidada.

LA NUEVA CAMPAÑA DEL ODIO SOBRE LAS VÍCTIMAS Y LA SERENIDAD CRISTIANA DE ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO

Al analizar el libro dirigido por Santos Juliá, el historiador socialista, sobre las víctimas de la guerra civil adujimos ya algunas consideraciones que ahora, en este capítulo sobre las mentiras de la guerra civil, deben ratificarse y ampliarse. La denuncia sobre las víctimas «del franquismo» como se dice abreviada e inadecuadamente, se abrió después de la muerte de Franco por medio de artículos en la prensa sensacionalista.

Que adquirieron, en conjunto, la forma de un auténtico bombardeo. Después la campaña tomó una configuración diferente: empezaron a prodigarse «estudios monográficos» de signo localista, a veces con la idea preconcebida de «demostrar» que los muertos en la represión del Frente Popular, una represión que recibía varias excusas y aun justificaciones, habían sido muchos menos que las víctimas producidas por la represión de la zona nacional, sobre las que se comunicaban datos globales cada vez más desmesurados.

En uno de los recientes congresos o simposios celebrados para conmemorar los sesenta años del final de la guerra civil, el profesor Stanley G. Payne ha expresado la opinión de que el número final de muertos no se conocerá nunca, seguramente impresionado por esta campaña febril que trata de minimizar los muertos de la zona republicana y exagerar los de la zona nacional. Por mi parte pienso que se trata de una tarea difícil y penosa, pero no imposible.

Hasta el momento la única base de partida seria para conocer esa cifra es la que nos ofreció, con profunda sinceridad, el general Ramón Salas Larrazábal en su libro *Pérdidas de la guerra*, que se basa en los datos estadísticos que están a disposición de todos. Las objeciones que los herederos del Frente Popular hacen al libro de Salas se basan en el griterío discordante más que en razones científicas. Por su parte, el general Rafael Casas de la Vega, en su importantísimo libro *El terror*, que tuve el honor de editar en Editorial Fénix, llega a la conclusión de que las únicas cifras fiables sobre víctimas de la represión son las que se ofrecen con el acompañamiento obligado de una lista nominal de víctimas, con nombres y apellidos. Así ha llegado él a cifrar en ese libro las víctimas del terror rojo en Madrid y su provincia en 8500 personas, con un error mínimo; alguna vez el ilustre autor publicará las rectificaciones que ha recibido por parte de familiares de algunas pocas víctimas, pero su investigación es tan sólida que los colaboradores de Santos Juliá, en su citado libro, la admiten con todas las consecuencias.

Por otra parte, el joven sacerdote pacense don Ángel David Martín Rubio ha publicado también en esta Editorial un libro de alto valor histórico, *Paz, piedad, perdón… y verdad*, y más recientemente, en este mismo año 1999, nos ofrece un nuevo libro, *Salvar la memoria: una reflexión sobre las víctimas de la guerra civil*, editado en Badajoz por el Fondo de Estudios Sociales.

Creo que estas dos obras —que deben ser estudiadas conjuntamente— representan el paso más importante en el estudio histórico de la represión

desde la investigación de Ramón Salas Larrazábal, a quien por cierto Martín Rubio confirma en cuanto a su método y en cuanto a sus resultados totales sobre el número de víctimas, después de introducir en los datos estadísticos una corrección basada en los mismos recuentos.

Salvar la memoria es un trabajo magistral, sereno y rigurosamente científico, que critica convincentemente a la serie de monografías locales y regionales emprendidas e impulsadas a veces por propósitos ajenos a la Historia, y basadas muchas veces en las absurdas teorías sobre la diferente valoración de las muertes y de las víctimas. Aduce uno por uno los textos de los autores que operan al margen de la historia y los rebate sin acritud, con fría racionalidad. Quienes resultan peor parados son Reig Tapia, Solé Sabaté y Moreno Gómez. Por lo pronto Martín Rubio antepone al estudio de la represión un análisis sobre las causas de la guerra, es decir, los desmanes y las persecuciones perpetradas por la izquierda revolucionaria en la época republicana. Con una documentación irrebatible deshace el mito de que la represión de la zona nacional se desencadenó y dirigió desde el Estado, mientras que la republicana se debió a las (justas) iras incontroladas del pueblo. Cita dos ejemplos patentes para aclarar esa tesis; las represiones del Frente Popular en Cantabria y en Paracuellos del Jarama. Revisa muy seria y efectivamente las mentiras acumuladas durante decenios sobre la actitud e intervención personal de Franco en la represión. También desmantela la creencia, fruto de la propaganda histórica, de que la represión en zona republicana cesó virtualmente una vez alcanzados los máximos iniciales.

Ante el análisis que realiza Martín Rubio sobre la cifra de víctimas basada en datos estadísticos serios y ponderados (además de otras fuentes), debemos reducir nuestra desconfianza en ese método, que nos aproxima mucho a la verdad aun sin contar con las relaciones expresas de nombres y apellidos; aunque mantenemos que llegar a esas relaciones debe considerarse como un ideal para obtener la certeza.

Al revisar las listas de cifras Martín Rubio sitúa las que se deben a la represión republicana en unas sesenta mil, y para la represión nacional, durante el período de la guerra, propone una cifra semejante, próxima a las 56 000. Para la represión de la postguerra coincide con Salas Larrazábal en una cifra entre 25 000 y 30 000 víctimas. Conviene recordar aquí que, por el hecho de la victoria, la represión nacional se pudo extender a toda España y prolongarse durante la postguerra, mientras que la del Frente Popular sólo se ejerció sobre una parte de España casi siempre menguante y naturalmente no se prolongó después de acabada la guerra (pp. 94-95 de la obra citada).

Metodológicamente las dos aportaciones más importantes de Martín Rubio son, primera, el desmantelamiento de las absurdas teorías sobre diferenciaciones de justicia o injusticia en la represión de cada zona; y segundo, en haber negado credibilidad, en muchos casos, a presuntas monografías que no se apoyan en datos fiables. Ofrece muchísimo interés que la condición sacerdotal del autor le haya llevado a analizar de forma incontrovertible los caracteres de persecución religiosa que en buena parte tuvo la represión del Frente Popular, y que ya había sido establecida en el libro magistral de monseñor Antonio Montero. Martín Rubio rebate, a veces casi con santa indignación, las acusaciones del anticlericalismo clásico, anacrónicamente revivido en autores jóvenes, sobre la presunta y falsísima complicidad de la Iglesia en las ejecuciones de la zona nacional, y en algunas ocasiones aduce casos hirientes. Su consideración de Paracuellos como enclave martirial es, para el autor de este libro, particularmente emocionante.

Me parece importantísimo el epígrafe que dedica Martín Rubio a los presos de Teruel (p. 122), así como la copiosa lista de intelectuales asesinados en zona roja, y nunca mencionados por los herederos del Frente Popular. Martín Rubio ya había analizado a fondo la represión en Badajoz, pero en el epígrafe que ahora dedica en este libro (p. 140) al famoso mito rojo de esa ciudad y provincia establece la versión que terminará siendo definitiva; por cierto que en ella reivindica la memoria del entonces teniente coronel Yagüe, al que la propaganda adversa ha tratado de cubrir de barro.

En fin, debemos concluir que nos encontramos ante una obra maestra de la Historia, un nuevo punto de referencia sobre el trágico problema de las víctimas de la guerra que desde otros frentes se sigue tratando de ensuciar y de manipular.

LOS SACERDOTES ASESINADOS EN EL PAÍS VASCO

El Partido Nacionalista Vasco, de origen y tradición no solamente católica, sino, sin el menor ánimo de ofender, integrista e incluso teocrático, llevaba y lleva en su lema el nombre de Dios —Jaungoikoa eta legi zarra, Dios y Leyes Viejas— y, aunque en parte se ha secularizado, todavía ostenta la impronta de clericalismo. Luego observaremos, en un epígrafe siguiente, algunos rasgos de su historia reciente que pueden resultar interesantes en nuestro tiempo. Ahora recordemos solamente que por una grave inconsecuencia histórica el PNV, que formó grupo parlamentario con la derecha católica del País Vasco y de Navarra durante la primera legislatura

republicana de 1931-1933, se alió con el Frente Popular, de quien le separaba el abismo de la religión, a raíz de las elecciones de 1936 y mantuvo esa alianza durante la guerra civil, por motivaciones autonómicas. El 1 de octubre de 1936, unas Cortes fantasmagóricas de la República, de las que habían desaparecido numerosos diputados víctimas de la guerra, concedieron al País Vasco un Estatuto de Autonomía en virtud del cual se creó un gobierno en la parte del País Vasco que estaba dentro de la zona republicana del Norte, es decir, la provincia de Vizcaya y parte de la de Guipúzcoa.

El boletín del Círculo Tradicionalista Cultural de Álava, *El Babazorro*, en su número monográfico de noviembre de 1999 ha dado las referencias sobre los sacerdotes, religiosos y eclesiásticos víctimas de la guerra civil en las tres provincias Vascongadas. El *Boletín* cita los nombres de los catorce sacerdotes fusilados por los nacionales en Guipúzcoa, así como de los 55 fusilados por el Frente Popular en el territorio políticamente dominado por el Partido Nacionalista Vasco y luego por el gobierno vasco. Debo sin embargo, añadir una breve apostilla a las listas que publica el benemérito Boletín carlista. En mi libro *Misterios de la Historia* (Barcelona, Planeta, 1990, seis ediciones) publiqué, reproduciéndolas de *El Diario Vasco* de San Sebastián, las esquelas de 58 sacerdotes y religiosos asesinados por el Frente Popular en las tres provincias Vascongadas durante la guerra civil y para los fusilamientos a la entrada de los nacionales elevé la cifra a dieciséis, que creo más exacta, por la inclusión de algunos seminaristas.

No soy muy amigo de diferenciar el carácter de los fusilamientos y asesinatos en una u otra zona. Pero en este caso específico es evidente que los nacionales cometieron el disparate de fusilar a los eclesiásticos vascos por motivaciones exclusivamente políticas, no por su carácter religioso. Creo que no se puede decir lo mismo sobre los motivos del fusilamiento en la zona enemiga.

LAS PRIMERAS CANONIZACIONES

Julián Casanova es uno de los más virulentos colaboradores del libro *Víctimas de la guerra*, dirigido por el profesor Santos Juliá. Además se asoma alguna vez a los periódicos como el 11 de septiembre de 1999 hizo en *El País* con un artículo incalificable, *Mártires de la Cruzada*, en el que, para empezar, reconoce los crímenes cometidos en zona roja contra sacerdotes y religiosos, si bien retoma a un lenguaje que creíamos olvidado cuando al conjunto de horrores inhumanos contra la Iglesia lo llama «el fuego purificador contra el

clero y las cosas sagradas». Además de distorsiones e insultos perpetra más de una falsedad comprobable. «El intenso anticlericalismo —dice— del primer bienio republicano y de la primavera de 1936 nunca había ido acompañado de actos de violencia». Reconoce la violencia revolucionaria contra el clero en la Revolución de Octubre, pero no insiste en ella. En cuanto a su tesis anterior, ¿es que la quema de conventos en Madrid y en otros puntos de España el 11 de mayo de 1931 no produjo actos de violencia? ¿Es que las listas de muertos, atracos y quemas de iglesias en la primavera de 1936, que fueron detalladas en las Cortes por los líderes de la derecha, no fueron violentas? ¿O será que el señor Casanova las atribuye a actuaciones de las propias derechas para inculpar a las izquierdas, como hace un salvaje de cuyo nombre no quiero acordarme? Segundo error comprobable: el «apadrinamiento de la guerra civil como cruzada… culminó el 1 de julio de 1937 con la carta colectiva del episcopado». Repase Casanova la Carta Colectiva y no verá el término cruzada en una sola de sus líneas; evidentemente escribe de oído. Luego desbarra sobre la intervención directa del clero en la represión de la zona nacional, hasta términos no sólo falsos, sino inconcebibles.

Estos y otros mil ataques brutales contra la Iglesia, que parecen pretender en definitiva convertir a las víctimas en verdugos, no han impresionado al Papa Juan Pablo II, que se ha apoyado en la expresión de su predecesor Pío XI cuando, todavía en 1936, llamó públicamente *verdaderos mártires* a las víctimas de la guerra civil que morían por su fe en la zona republicana, y hasta noviembre de 1999 había beatificado ya a 230 mártires de la persecución religiosa en España. (En diciembre de 1999, la Santa Sede anuncia la beatificación de otros 117 mártires de la Cruzada durante el próximo año jubilar, entre ellos doce jesuitas). Y el domingo 21 de noviembre de 1999 proclamó con el supremo honor que puede conceder la Iglesia, el de la canonización, a los diez primeros santos de esa persecución; nueve de ellos fusilados el 4 de octubre de 1934 durante la represión de los revolucionarios contra el clero de la zona que controlaban en Asturias. El décimo fue víctima de la guerra civil, no precisamente en los primeros meses del conflicto, sino el 18 de enero de 1937 en Tarragona. Uno de los diez santos que sufrieron el martirio en Asturias era sacerdote pasionista; los otros nueve, hermanos de las Escuelas Cristianas, la congregación fundada por san Juan Bautista de la Salle y dedicada a la enseñanza entre las clases modestas.

Sus nombres merecen figurar en una página de honor de la historia de España. Los santos de Asturias son los hermanos Cirilo Bertrán (nombre adoptado en religión, como sus hermanos), Marciano José, Victoriano Pío,

Julián Alfredo, Benjamín Julián, Augusto Andrés, y Aniceto Alonso. Con ellos murió san Benito de Jesús, primer santo argentino. El sacerdote pasionista es san Inocencio de la Inmaculada y el hermano catalán fusilado en Tarragona san Jaime Ilario, de Lleida. Las circunstancias de su muerte, los nueve en Turón y san Jaime Ilario, sacrificado en Tarragona, revelan una profundísima espiritualidad e incluyen el perdón a sus verdugos, uno de los cuales ha dado testimonio vital para la canonización.

A la solemne ceremonia asistieron el vicepresidente segundo del gobierno español, don Rodrigo Rato y los presidentes de las Comunidades autónomas de Cantabria y de Castilla y León. Se negaron a asistir las autoridades del principado de Asturias, con el falso pretexto de que el acto contribuía a dividir a los asturianos; no fue el acto, sino los crímenes que lo originaron. Es lamentable que en una canonización de diez santos españoles no estuviera presente ningún miembro de la familia real. La prensa española informó correctamente del acto; tengo delate las reseñas de *ABC* y *El País*, pero este periódico incurre en el inútil agravio de entrecomillar la palabra «mártires» y atribuir las víctimas sólo a la Revolución de Asturias.

LA CARTA COLECTIVA DE 1999

El 26 de noviembre de 1999, unos días después de la canonización de los mártires de Asturias y de Tarragona, la 73 Asamblea Plenaria del Episcopado español dirigió una carta colectiva *Mirada de fe al siglo xx*, cuyo texto completo he bajado de Internet el 4 de diciembre. Se esperaba con interés un tanto sensacionalista esta declaración, porque se había anunciado que los obispos pedirían perdón por la actuación de la Iglesia católica en la guerra civil de 1936 y muchos católicos, como ya he dejado escrito en este libro, esperábamos con no poca aprensión este documento. He querido dejar constancia de mis temores en otro lugar de este capítulo, para poder explicar ahora que tales temores carecían de base y que gracias a Dios no tengo que plantearme nada fundamental después de repasar detenidamente la comunicación.

Dos titulares de prensa pueden enmarcar el documento, los dos de manera muy inadecuada. El de *ABC* rezaba *Los obispos españoles piden perdón por la guerra civil en nombre de ambos frentes*. Creo que este titular no refleja la esencia del documento y resulta, en definitiva, falso. El titular de *El País* me parece peor: *Los obispos españoles excluyen a la Iglesia de la petición de*

perdón por la guerra civil. Cuando leía este titular mientras escuchaba una acertadísima intervención esa mañana en la COPE del arzobispo de Pamplona, don Fernando Sebastián Aguilar, pensé que el diario citado en segundo lugar hubiera acertado de haber dicho: *Los obispos se niegan a que los mártires pidan perdón por haber sido testigos de su fe y no verdugos como otros se atreven a llamarles*.

Pero sería mejor ir directamente al documento. Los obispos empiezan por decir, atinadamente: «No pretendemos erigirnos en jueces de la historia». Se niegan, por tanto, a actuar como Tribunales Populares de la historia, sobre todo porque recuerdan bien que los mártires no fueron casi nunca sometidos a tribunal alguno antes de que los asesinaran por odio a la fe.

Se interesan, antes que nada, en pasar revista al siglo XX para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Enumeran cabalmente esos beneficios. Entre ellos destacan la celebración del Concilio Vaticano II, del que, por el contrario, no subrayan los gravísimos efectos negativos en su aplicación. Añaden, sí, este párrafo que casi nadie parece comentar: «La vivencia y la doctrina conciliar aportaron a nuestras Iglesias el impulso y la lucidez necesarias para situarse de modo evangélico y creativo en la coyuntura de nuestra sociedad, que demandaba unos planteamientos nuevos y serenos para la reorganización de la convivencia social».

Se enorgullecen los obispos de la «aportación de la Iglesia a la transición pacífica a la democracia». Se alejan una vez más de todo sentido crítico. No dicen que la Iglesia Universal no aceptó la democracia expresamente hasta el mensaje de Navidad de Pío XII en 1944, cuando ya se cantaba la victoria aliada. Tampoco dicen nada sobre la apuesta de futuro a favor del marxismo que, sin caer por supuesto en el marxismo, hicieron dos Papas, Juan XXIII y Pablo VI; seguidos por buena parte de la Iglesia española (y otras) que además realizó numerosas opciones personales y colectivas a favor del marxismo. En un repaso al siglo XX era necesario hablar de este problema, que me parece capital. Los obispos lo rehuyen. Citan como ejemplos a dos católicos prominentes; Robert Schuman, padre de la Europa comunitaria; y el cardenal Ángel Herrera Oria, los dos en proceso de beatificación cuyos méritos no voy a discutir; pero no me parecen suficientemente representativos para todo un siglo de historia de la Iglesia.

Elogian la Constitución de 1978, pero sin aludir a sus caracteres explosivos que desgraciadamente se acrecientan ante el fin del milenio. Exaltan logros como el de la alfabetización, la educación, el desarrollo de la

sociedad española, pero no mencionan al régimen al que muy especialmente se deben.

También elogian, y no seré yo quien se oponga, la caída del muro de Berlín en 1989, pero ni aun con este motivo repudian al marxismo como pecado contra el Espíritu Santo, según le calificó el Papa actual. Luego entran abiertamente en la autocrítica.

E inciden ante todo en la manía contemporánea de pedir perdón. «Pedimos perdón al Padre de todos los hombres por habernos creído mejores que sus hijos y hermanos nuestros de otros tiempos». No sé quiénes se habrán creído mejores que los cristianos de otros tiempos, por mi parte no tengo que pedir perdón por este apartado; creo que ahora, al final del milenio, la dividida y desorientada Iglesia española no puede creerse mejor que la Iglesia de los Mártires o la Iglesia que salvó la fe de otras naciones y la propagó en otros continentes. El segundo defecto de la sociedad actual, tras la autosuficiencia, dicen, es el secularismo, que me gustaría definir como aquiescencia a la secularización anticristiana por sectores de la propia Iglesia. Estoy de acuerdo en señalar este defecto como gravísimo, pero me temo que los responsables no tienen la menor idea de pedir perdón por lo que en el fondo es una falta de fe. Por eso creo excepcionalmente lúcida esta afirmación de los obispos: «Los cristianos hemos permitido con demasiada frecuencia la secularización más o menos oculta de nuestra fe y nuestra esperanza». Esta magnífica y sincera confesión debería haber servido como el gran titular para resumir esta Carta Colectiva.

Luego entran los obispos en el tema vidrioso que muchos esperaban con morbo. Condenan «los enfrentamientos atizados por nacionalismos excluyentes e ideologías totalitarias». Todos estaremos, espero, de pleno acuerdo, cuando extienden, además, esa condena a «los intentos de exterminio de pueblos y razas y grupos sociales y religiosos». Esto les lleva a la reconsideración de la guerra civil española.

«También España —dicen— se vio arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia. No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros derramada como consecuencia de odios y venganzas siempre injustificados y en el caso de muchos hermanos y hermanas, como ofrenda martirial de la fe, sigue

clamando al Cielo para pedir la reconciliación y la paz». Luego piden la conversión y el perdón de Dios para quienes ejercen la violencia terrorista.

Este párrafo representa una importante mejora frente a la condena virtual que contra la Iglesia de los Mártires lanzó la tristemente famosa Asamblea Conjunta de 1971. El pontificado de Juan Pablo II está por medio, con sus beatificaciones y ahora las canonizaciones de los mártires de aquella guerra civil que realmente empezó en octubre de 1934. Me hubiera gustado una referencia de solidaridad a la Carta Colectiva del Episcopado español en 1937, que entonces refrendó no solamente la Santa Sede, sino el Episcopado universal. Me gustaría que los obispos de 1999 reconocieran lo que el propio Pablo VI afirmaba, es decir, la salvación de la Iglesia de España por lo que llamaron los obispos de 1937 «movimiento cívico militar». Hemos caído tan bajo en el vaciado cuando no la pérdida de la memoria histórica que casi nos conformamos con que la Iglesia de 1999 no condene a la Iglesia de 1937, como intentó hacer la Asamblea Conjunta de 1971. Hay entre los firmantes de esta última carta colectiva, la de hoy, algunos obispos que durante decenios se han opuesto a la glorificación de los mártires de la Iglesia. En este documento al menos se habla de Iglesia martirial. No se señalan culpas; espero estar dejándolas bien claras en este libro.

Pasado este grave escollo lo mejor que pudieron, los obispos definen su posición frente a la gravísima miseria que afecta a cientos de millones de personas y frente a la cultura de la muerte que señorea a nuestro mundo ultramoderno. Luego expresan su adhesión a la defensa de la familia, tan gravemente amenazada.

Los sectores moderados de la Iglesia y la sociedad española han acogido esta exhortación episcopal con respeto y aquiescencia. Socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes criticaron la «amnesia» de los obispos al eludir pedir perdón por los errores de la Iglesia en la guerra civil; pero los socialistas no pidieron perdón por la Revolución de Octubre ni por el asesinato de Calvo Sotelo, los comunistas tampoco pidieron perdón por el asesinato de Andrés Nin y por su cruel persecución al POUM, ni por los asesinatos de Paracuellos y del obispo de Teruel, los políticos de Convergencia tampoco recodaron que sus predecesores de la Lliga se alinearon abiertamente, cuando salvaron la vida, con el bando nacional. A todos dio respuesta adecuada el arzobispo de Pamplona en la COPE.

NUEVOS ENFOQUES SOBRE LO QUE NO FUE EL 18 DE JULIO: ORWELL EN LAS CORTES

El «Nuevo Lenguaje» de George Orwell

Eric Blair, más conocido como George Orwell, estuvo en España en 1937, conoció de cerca la verdad profunda, es decir, la mentira profunda, del comunismo y se convirtió en el más ferviente anticomunista de los intelectuales europeos. En funciones de tal publicó su alucinante profecía *1984*, en la que acuñó no un mito, sino la realidad universal del Gran Hermano. En la utopía comunista se utilizaba obligatoriamente el Nuevo Lenguaje de la propaganda, que nada tenía que ver con la realidad ni con la Historia. Las tres superpotencias de la época estaban en guerra pero no había guerra; porque el Nuevo Lenguaje partía de un dogma esencial: «La guerra es la paz, la mentira es la verdad, la libertad es la esclavitud». Gonzalo Fernández de la Mora me ha hecho el honor de publicar algunos trabajos míos en su espléndida revista *Razón Española*. Estoy seguro de que no le importará la inclusión en este libro de la Mentira Histórica, su colosal apunte sobre el ya tristemente célebre dictamen histórico del Congreso de los Diputados que titula (número 97, octubre 1999, pág. 207 ss.), *Orwell en las Cortes*. Y es que las Cortes, con su trágico dictamen, han añadido al dogma del Nuevo Lenguaje otra tesis: «La República era la legalidad».

Siempre me ha impresionado una leyenda, tal vez histórica, del Ateneo de Madrid, que en uno de los momentos culminantes de su historia puso a votación entre sus socios la existencia de Dios; y Dios perdió la votación por dos sufragios, con lo que la docta casa pudo dictaminar por mayoría la inexistencia de la divinidad.

El debate sobre los orígenes de la guerra civil en el Congreso

Hacía tiempo que las izquierdas parlamentarias, flanqueadas por los nacionalistas vascos y catalanes, ardían en deseos de condenar el Alzamiento Nacional de 1936. Lo hicieron gradualmente. En 1995 ya consiguieron conceder la nacionalidad española a los antiguos voluntarios de las Brigadas Internacionales, considerándoles como «voluntarios de la libertad»; iniciativa comunista que fue votada por unanimidad, incluidos los diputados del Grupo Popular, lo que motivó las acusaciones de lesa historia que me permití incluir

en mi libro *Brigadas Internacionales*, publicado por esta misma Editorial. Ahora el objetivo era mucho más elevado. Varios diputados pertenecientes a la Comisión de Asuntos Exteriores hicieron un viaje a México y allí conocieron de primera mano el recuerdo, todavía vivo, del exilio español posterior a la guerra civil; se estaba conmemorando precisamente el 60 aniversario del exilio. Decidieron todos, informalmente, presentar una proposición no de ley para conceder ayudas a los exiliados supervivientes o sus familias que lo necesitasen. Hasta ahí todos conformes, incluso los representantes del Grupo Popular. Pero entonces los diputados de la izquierda, especialmente los socialistas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decidieron incluir en el preámbulo de la proposición una durísima condena al Alzamiento Nacional, calificándole de golpe militar fascista contra la legalidad republicana. Escarmentado sin duda por las reacciones de muchos de sus militantes y votantes al desaguisado de las Brigadas Internacionales, el Partido Popular, con excelente acuerdo, decidió plantarse y sus diputados presentaron una proposición no de ley para favorecer a los exiliados, pero sin meterse en historias controvertidas. Las dos proposiciones no de ley se debatieron y votaron en la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 14 de septiembre de 1999. Tomo los textos del correspondiente *Diario de Sesiones*, número 743. Presidía el diputado democristiano del PP, Javier Rupérez. Presentaban la proposición todos los grupos de la Cámara menos el Partido Popular, que como he dicho ofrecía otra diferente y Coalición Canaria que decidió no asistir. El título de la moción era: *sobre conmemoración del 60.º aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil española.* Nadie ponía en duda la conveniencia de ensalzar la obra del exilio español, si bien nadie mencionó el episodio del yate *Vita*; la clave del debate era que, en el preámbulo de la proposición, se calificaba al Alzamiento del 18 de julio de 1936 como «golpe militar fascista contra la legalidad republicana» como causa exclusiva de la guerra civil.

Como el autor de la iniciativa había sido el Partido Socialista, tomó la palabra su portavoz, señor Caldera Sánchez-Capitán, que convirtió su discurso en una curiosa lección de historia contemporánea. Dijo que el Estado debía «reparar en lo posible los efectos traumáticos sobre quienes padecieron injusticias, persecución, destierro y muerte», pero solamente a favor de las víctimas de la zona o de la victoria nacional, sin mencionar ni por un momento a las víctimas de la otra zona. Luego se atrevió a afirmar que «ni la historiografía prácticamente unánime ni las actuales doctrinas sociales y

políticas ofrecen divergencias. Se trata de una dictadura ostentadora de un poder arbitrario y sin límites, con ausencia de garantías y libertades». Creo que el portavoz socialista incurre en una exageración múltiple. En primer lugar afirma que la historiografía sobre el régimen de Franco es «prácticamente unánime», pero los autores que cita a continuación pertenecen más bien a una línea unidimensional. El libro de historia de España más vendido en los momentos en que se producía este discurso, y durante los dos años anteriores —ahora está agotando ya la octava ediciones obra de un catedrático de Historia Contemporánea de línea absolutamente discrepante con la de los autores citados por el portavoz socialista. Los errores e incoherencias históricas que ofrecen los más significados de esos autores quedan patentes, espero, en este libro. El catedrático y académico de la Historia don Luis Suárez Fernández, los académicos Juan Velarde Fuertes y Gonzalo Fernández de la Mora ofrecen posiciones intensamente discrepantes de esa falsa unanimidad. El profesor y académico Rodrigo Fernández Carvajal, uno de los primeros estudiosos del régimen de Franco, le definió como «dictadura constituyente y de desarrollo». Ese régimen fue autolimitando sus poderes, abriéndose cada vez más, seleccionando como sucesor a un príncipe que nunca ocultó su proyecto democrático y luego lo realizó, no sin antes jurar lealtad a la «legitimidad del 18 de julio» en julio de 1969.

No reconozco al portavoz socialista autoridad científica alguna para seleccionar arbitrariamente una lista de historiadores con el fin de demostrar esa «práctica unanimidad» que suena peligrosamente a «pensamiento único». He ofrecido algunos ejemplos, existen muchísimos más. El portavoz no menciona a los profesores Palacio Atard, Seco Serrano, Hernández Sánchez-Barba, Alfonso Bullón, Rafael Gambra, entre otros muchos. Sobre los dos autores con quienes se identifica el portavoz, los señores Tusell y Preston, ya he publicado en un capítulo anterior la opinión que me merecen sus escritos sobre la legalidad republicana y sobre el régimen de Franco. Cita el portavoz a Pierre Vilar, conocido historiador marxista, y luego aduce un *totum revolutum* de historiadores cuya característica común está muy lejos de la unanimidad; qué tendrá que ver Stanley Payne con Vicens Vives, con Tusell y con Fusi. No podía faltar la mención a otro historiador marxista, Manuel Tuñón de Lara, del que hablaremos después en este libro.

El debate siguió por parecidos derroteros. El portavoz comunista dijo lo que de él se esperaba. Me dolió y alarmó la intervención favorable por parte de Minoría Catalana, cuyo portavoz pareció elegido con sadismo; nada menos

que el señor Guardans y Cambó, nieto de aquel don Francisco Cambó que se alineó fervorosamente con la causa de Franco en la guerra civil, financió parte sustancial de la acción exterior de la España nacional en redes de espionaje y propaganda y publicó manifiestos de plena identificación con el Alzamiento. El señor Guardans y Cambó no descalificaba sólo a Franco sino también, abiertamente, a su ilustre abuelo.

Empieza con una gran verdad: «Sin duda el 18 de julio comenzó uno de los problemas más dramáticos de la historia de España… y por tanto eso no debería ser nunca objeto de un debate político entre un grupo y otro, o entre uno y otro». Habría que matizar, sin embargo, esa gran verdad porque es incompleta; el 18 de julio es efecto de la República y del Frente Popular desmandados, y consiste en la reacción de esa «media España que no se resigna a morir» ante esa situación de desmán, que nada tema que ver con la legalidad, desde las mismas elecciones del 12 de abril de 1931. Luego dice que no va a entrar en disquisiciones históricas, pero apoya la iniciativa socialista y la vota; luego entra en el fondo de la cuestión sin razonarlo. Por varios motivos tengo la más alta estima por el señor Guardans y Cambó; por eso me duele más que se haya prestado a este juego que me parece antihistórico y antipolítico.

Del señor Anasagasti se puede esperar siempre cualquier cosa, aunque por fortuna en sus palabras puede predominar la sensatez. Por desgracia, no siempre. A veces, por motivos particularistas, afirma con énfasis cosas difícilmente comprensibles. Así hizo en el triste debate del 18 de julio. Dice que en la transición española ha habido un gran olvido, cuando ha sido un gran acierto; no debatir políticamente sobre la Historia común. Dudo de la pertinencia de que la única autoridad sobre la orientación de la memoria histórica de los españoles aducida por el señor Anasagasti sea el psiquiatra y escritor comunista don Carlos Castilla del Pino. Dudo de la conveniencia de calificar al general Franco, sin siquiera nombrarle, como «la figura más nefasta de la historia de España desde el neolítico», tal opinión me parece más propia del neolítico que de la Edad Contemporánea.

Le sigue el señor Rodríguez Sánchez, que intenta una incursión por el galleguismo histórico, es cosa suya. La señora Lasagabaster, en nombre de Eusko Alkartasuna, no añade ideas nuevas al debate. Entonces el joven diputado del Partido Popular, señor Robles Fraga, sí que aporta nuevas ideas y acude al reto de la Historia desde bases que creo mucho más convincentes que las expresadas hasta entonces.

Recuerda el origen de esta proposición en el viaje parlamentario a México. Luego niega que sólo los grupos de izquierda, nacionalistas y republicanos, hayan colaborado a traer a España la democracia; incluye en el esfuerzo a los grupos de inspiración democristiana, liberal y monárquica si bien por la simple razón de sus dos apellidos no debería haber olvidado a los reformistas que intentaron lo mismo y lograron con mayor influencia y éxito la evolución democrática desde dentro de las filas del régimen anterior, como ha postulado con toda razón uno de ellos, Rodolfo Martín Villa. Aparte de ese matiz, creo que el único error serio del señor Robles Fraga consiste en haber calificado de «grave y sin duda condenable…, la quiebra de la legalidad republicana en 1936». Se ha dejado llevar por las expresiones del adversario y no debiera haberlas aceptado. Pero el conjunto de su intervención fue admirable.

¿Cómo se puede olvidar que la quiebra de la legalidad republicana del año 1936 había sido precedida por otras quiebras de la legalidad republicana, entre ellas la revolución de Asturias de 1934? ¿Cómo se puede olvidar que instituciones de la legalidad republicana se habían alzado en armas contra la República en el año 1934 y partidos políticos de aquella misma institucionalidad democrática republicana se habían alzado en armas o habían llamado a la revolución armada contra la legalidad republicana? ¿Cómo se puede resumir en una simple frase el drama de las quiebras de la convivencia en nuestra sociedad que lleva al enfrentamiento civil, a la autodestrucción de este país? ¿Cómo se puede pretender hablar sólo en blanco y negro, hablar sólo de víctimas frente a verdugos…?

La intervención del joven diputado es, con las salvedades indicadas, una de las más originales, fundadas y brillantes que he podido observar en esta legislatura de las Cortes. Causó, sin duda, una profunda impresión en quienes pudieron oírla. Luego, por desgracia, apenas alcanzó difusión en los medios, que por lo general pasaron como sobre ascuas por todo este episodio. La proposición socialista, endosada por todos los demás grupos menos el Popular, fue aprobada por veintidós votos a favor y dieciocho abstenciones. Bien, después de aquella célebre votación del Ateneo en que la existencia de Dios perdió por dos votos, Dios seguía existiendo. Las asambleas humanas no están, hechas para estas cosas.

Orwell en las Cortes

En este libro se han presentado ya muchos argumentos para demostrar que el 18 de julio no fue un golpe militar fascista. Pero como ya he indicado, creo

imprescindible aducir aquí la brillantísima réplica del académico Gonzalo Fernández de la Mora en el mismo sentido, sin añadir ni quitar una coma. Éste es su espléndido dictamen:

«Según la Constitución vigente, la función de las Cortes es controlar la acción gubernamental y determinar el futuro comportamiento de los ciudadanos mediante leyes. Pero ahora, a iniciativa de comunistas y socialistas, los diputados asumirían la función de aprobar o condenar los hechos históricos, empezando por el Alzamiento de hace casi tres cuartos de siglo. Lo consecuente sería que tal misión judicativa se fuera remontando al golpe de Sagunto que restauró a Alfonso XII, a las guerras carlistas que sostuvieron a Isabel II en el trono, al pronunciamiento de Riego que abolió la monarquía absoluta y así sucesivamente hasta Numancia. Y sería coherente con tan general reválida histórica que se dieran notas, por ejemplo de cero a diez, a los protagonistas, desde Argantonio hasta Franco. ¿Qué puntuación concederían nuestros parlamentarios a Recaredo, Cisneros, Olivares o Narváez? Los autores de manuales tendrían que estar siempre muy atentos a tales calificaciones para no caer en incorrección política; su fuente principal ya no estará en los archivos, sino en la opinión parlamentaria.

»Desde luego serán inicuos juicios sin defensa, con acusados mudos. Pero las futuras legislaturas ¿no podrían revisar los exámenes y otorgar matrículas de honor a un personaje suspendido por parlamentarios anteriores? Según los tiempos, Almanzor arriba o abajo, Fernán González aprobado o notable, Gonzalo de Córdoba exaltado o proscrito y así hasta el infinito. Los estudiantes tendrán que atenerse a las cotizaciones históricas determinadas por los diputados y habrá una especie de cambiante Bolsa de méritos, por ejemplo Alfonso VI en baja, Alfonso X en alza, y viceversa. Cuando Orwell vaticinaba que el totalitario Estado venidero reescribiría constantemente la Historia, no imaginó que las famosas curvas de Elliot del mercado financiero se extenderían a los hechos históricos. Carlos V tendría, por ejemplo, una línea de resistencia en cinco puntos sobre diez. Y en general la Historia española sería bajista respecto de la francesa, dado el chauvinismo de nuestros vecinos.

»Así de trágico o de cómico, según se mire, se presentaría el panorama de nuestra conciencia histórica nacional.

»Parece que se trata de calificar al Alzamiento de 1936 como “fascista”. Se sabe con bastante precisión lo que era el fascismo italiano, fundado por el socialista Mussolini como un brote heterodoxo del marxismo, pero a pesar de la numerosa literatura disponible, no se ha logrado definir un fascismo genérico, válido para ideologías tan diferentes como las de Salazar, Codreanu, Quisling o Perón. Véase, entre otras, la investigación ya clásica de R. de Felice *Interpretación del fascismo* (1969). Los politólogos cogen con pinzas e innumerables reservas eso del “fascismo” porque saben que es un vocablo anfibológico y científicamente inválido.

»Por añadidura en los últimos tiempos, el epíteto “fascista” ha degenerado en un improperio, como antaño lo fueron “masón” o “comunista”. Es un término que ha perdido capacidad definitoria para convertirse en un modo verbal de condenar, o sea una acusación y una sanción. Con razón se reprocha a las Inquisiciones —la española y las demás— la macabra práctica de desenterrar cadáveres y enviarlos a la hoguera (se hizo con los padres de Vives). Los póstumamente sentenciados como “fascistas”, ¿podrán permanecer en sus tumbas o se impondrá un auto de fe para incinerar sus restos mortales? Algo así habría que hacer salvo que los fallos fueran simple expresión retórica de rencor, o catarsis freudiana.

»El Alzamiento de 1936 fue el segundo acto de un drama iniciado meses antes con la revolución socialista de Asturias que preparaba su revancha. Fue una contrarrevolución, que es algo que no se parece en nada al fascismo italiano, típicamente revolucionario. Los principales protagonistas del Alzamiento fueron los generales Sanjurjo, Mola, Goded, Queipo y Aranda a los que, en el último momento, se adhirió Franco. Ninguno de ellos compartía la ideología del fascismo italiano ni otra similar. Los partidos con representación parlamentaria que se sumaron al Alzamiento eran los de la CEDA, el Bloque Nacional y el carlista, ninguno de los cuales tenía parecido alguno con el fascismo, entre otras cosas porque eran católicos. Aunque al principio minoritaria, también Falange era católica

y su fundador no se cansó de repetir que no era fascista. Los ideales del Alzamiento, recogidos por la Ley de Principios Fundamentales, son una antítesis del fascismo italiano, del nacionalsocialismo alemán y de los movimientos que guarden un lejano parecido con ellos. En ciertos casos la acusación es brutalmente anacrónica porque la Comunión Tradicionalista que vertebró doctrinalmente al Alzamiento era anterior en un siglo al fascismo italiano y el catolicismo era anterior en dos milenios.

»La conversión de una legislatura parlamentaria en Tribunal Supremo de la Historia carece de todo fundamento y no puede ser tomada éticamente en serio. Además lo propio de una sentencia es la calificación de un previo delito, no el uso del improperio, lo que la desnaturaliza y envilece. Y finalmente, si algo hay de obvio en la historia de España es la peculiaridad ideológica del Alzamiento de 1936, pronto definido como cruzada por la Jerarquía episcopal y enteramente dispar del fascismo y del nacionalsocialismo. De todas las corrientes políticas del período de entreguerras, la menos diferente del nacionalsindicalismo español sería el corporativismo portugués. Si nuestros parlamentarios extienden su jurisdicción sancionadora allende fronteras para dar matrícula de honor a los brigadistas de Stalin, ¿no podrían llegar a suspender al benemérito Salazar?

»Hay diputados que no quieren ser menos que el juez Garzón, dispuesto a procesar a jefes de Estado, salvo a Fidel Castro, quizás porque presenta la eximente de haber sido stalinista en vez de la agravante de católico.

»En la propuesta de resolución se alude a la ruptura de la “legalidad republicana”. Tal supuesta legalidad no existe; sí la del Estado de las Leyes Fundamentales, jurada por el Rey. Según la legalidad republicana, la familia Borbón carecería de la nacionalidad española.

»El suntuoso Valle Inclán tendría óptima materia para un esperpento».

En 1975 se instauró en España la Monarquía porque Franco quiso, seguido por una gran mayoría de españoles que aceptaron su testamento y marcharon «de la Ley a la ley». Ésa es la legitimidad de la actual Monarquía y de la misma Constitución emanada por reforma, no por ruptura de las Leyes Fundamentales. Ésa ha sido la clave auténtica de la Transición según la auténtica Historia de España, pese a todas las conjuras que se alzan contra ella.

Capítulo VI: La conjura contra la historia de España

LAS FUENTES DE LA CONJURA: INSPIRACIONES COMUNISTAS, SOCIALISTAS Y MASÓNICAS

No tendría el autor derecho a calificar como conjura al conjunto de líneas de opinión histórica que se critican, a veces acerbamente, en este libro, si no hubiera propuesto abierta y públicamente su propia solución, que coincide con la creencia y la memoria histórica de muchos españoles, como muestran las ocho ediciones obtenidas en dos años por el libro en que se configura esa propuesta: la *Historia Total de España*, publicada por esta misma Editorial Fénix a fines de 1997, y de la que ya preparo la novena edición. Utilizo el término *conjura* en el sentido figurado que explica el Diccionario de la Real Academia (ed. 1970): «Conspirar, uniéndose muchas personas o cosas, contra alguien para hacerle daño o perderle». En nuestro caso ese alguien es la Historia de España tal como muchos españoles la concebimos. Y me preocupa menos el objetivo primario de la conjura, es decir, su propuesta de Historia de España que creo falsa, que el objetivo destructor, quiero decir el comportamiento de los conjurados para eliminar cualquier visión discrepante, desacreditarla, hundirla y con ello manipular la memoria histórica de innumerables españoles.

No poseo el monopolio de la verdad histórica. Pero cuando discuto y critico determinadas opiniones y juicios sobre esa Historia de España, que he vivido y estudiado apasionadamente desde la infancia, a lo largo de este siglo, trato de demostrar esas críticas no mediante el insulto, como cree gratuitamente Paul Preston, sino con pruebas que estimo serias y objetivas. Ahora voy a formular una conclusión cuyos elementos voy también a demostrar: el vuelco terrible que hemos visto dar a la Historia de España a partir de los años sesenta, y que se ha ido acentuando de forma ensordecedora a partir de los años ochenta, no se debe a un conjunto de investigaciones históricas relevantes, sino a una conjura inspirada desde altos estamentos o instituciones de alcance mundial que han promovido, por sus abiertas u ocultas razones, un cambio y una determinada dirección en la memoria

histórica de los españoles, hasta acomodarla, mediante poderosísimos medios de comunicación insertados en redes mundiales, a lo que esas entidades estiman conveniente y *políticamente correcto*. La finalidad de este empeño, que me parece evidente, es de índole política, para servir a los fines de tales instituciones, que ahora mismo voy a concretar. Ya he adelantado algo en los capítulos anteriores de este libro, pero ahora voy a ampliar y confirmar esa tesis.

El arranque de este gran impulso para condicionar en un cierto sentido no sólo la política, sino la memoria histórica de los españoles y de la propia opinión pública mundial ha de rastrearse en la década de los años sesenta, la década del Concilio Vaticano II, que tan profundamente iba a cambiar la mentalidad de los católicos, no siempre para bien, porque no es bueno lo que crea tal confusión que hasta un Papa tan *progresista* como Pablo VI se refirió varias veces entonces al desvío de los efectos del Concilio como siembra de cizaña por el Enemigo y como provocado por el humo del infierno que se había introducido por las grietas de la Iglesia. El asalto a la Iglesia católica, que para el siglo XX se había iniciado, en los primeros años del siglo, con la herejía modernista, se recrudeció tras la Segunda Guerra Mundial con una explosión neomodernista, que contaminó a la propia Teología católica y protestante, pervirtió en buena parte los frutos del Concilio y se combinó con la estrategia universal de dominio por parte del bloque marxista-leninista para la penetración en Europa Occidental y en el Tercer Mundo, sobre todo en Iberoamérica. Será utilísimo para mis lectores la reciente edición española (Editorial Criterio) del mejor libro sobre el Concilio Vaticano II y sus secretos, debido a un teólogo y testigo, el padre Wiltgen, con el título *El Rin desemboca en el Tíber*. No me estoy desviando del problema de este libro a la historia de la Iglesia española y universal. Menéndez Pelayo, al hablar de la identidad histórica de España, se refería a la catolicidad que nos vino por las puertas y las vías de Roma y concluía: «No tenemos otra». Bueno, ahora, a fines del siglo XX tenemos otra, pero quizás por eso carecemos de identidad o dudamos de ella. Sobre estos aspectos históricos de la Iglesia puede ampliar ideas el lector en mis libros *Las Puertas del Infierno*, *La Hoz y la Cruz* y *Historia esencial de la Iglesia católica en el siglo XX*, publicados por esta misma Editorial.

La pérdida de la identidad católica de España —pérdida felizmente parcial, no total— se agudiza y se pone de manifiesto en los años sesenta, cuando parece imponerse, incluso en la aceptación de muchos católicos, sacerdotes y aun obispos, el fenómeno de la *secularización*. En aquella época

se acumulaban los distingos sobre la secularización, pero gracias a la suprema intuición del Papa Juan Pablo II hoy sabemos con certeza que secularización significa el proceso de arrancar a la Iglesia de la sociedad; no sólo de la política, sino también de la enseñanza, de la vida y la idea de familia, de la cultura, de la moral pública y privada. Ahora bien, en mis citados libros creo haber dejado perfectamente claro que la secularización en sentido pleno y lo más absoluto posible es el objetivo principal del liberalismo radical anticristiano, de la Masonería especulativa desde los comienzos del siglo XVIII, de la Internacional Socialista y, por supuesto, del comunismo, en su forma de marxismo-leninismo y en otras formas y disfraces que hoy subsisten tras la caída del Muro en 1989. Por tanto, si la identidad católica es una raíz principal, una fuente primordial de España, es decir, de la historia de España desde el siglo I después de Cristo, la secularización, que esas grandes tendencias e instituciones han querido aplicar sistemáticamente a la vida de España, debe ejercitarse también sobre la historia de España. Por lo tanto un factor fundamental, una directriz clara de la conjura contra la historia de España será precisamente la secularización de su historia: el desprecio a la Reconquista como Cruzada —pese a que así la declaró varias veces la Iglesia católica en ocasiones decisivas—; la inquina contra los Reyes Católicos y los Austrias por haber empeñado a España en la lucha por la preservación del catolicismo en Europa y en el esfuerzo titánico por su expansión en América; las comprensiones excesivas con la Ilustración española en cuanto tenía de impulso secularizador y desamortizador —sobre todo el reinado de Carlos III, con la expulsión de los jesuitas como gran mérito—; la hostilidad de la historiografía liberal-radical contra el carlismo, que defendía las esencias de la España católica; la identificación de esa historiografía con el liberalismo radical del siglo XIX y con el progresismo; la adhesión incondicional a la Segunda República como régimen secularizador convicto y confeso; la enemistad a muerte contra el régimen de Franco por haber invertido el proceso secularizador con la Cruzada, y, en definitiva, la condena del 18 de julio de 1936 como golpe militar fascista contra la legalidad republicana.

La cooperación del impulso comunista, la ideología de la Internacional Socialista y la tradición masónica, en ese proceso de secularización de España aplicado a la historia de España, adquiere así fuertes notas de verosimilitud, que ahora voy a confirmar con hechos comprobables. Han de mencionarse, además, afluentes marginales a la gran corriente de la conjura contra la historia de España: me estoy refiriendo a la manipulación histórica y antiespañola elaborada por los nacionalismos separatistas, un conjunto

soberano (*soberanista*, mejor) de mentiras y deformaciones de la memoria histórica que para el caso vasco-navarro ha sido desenmascarado eficazmente por el profesor Jon Juaristi. Sin embargo en este libro debo referirme sólo a la corriente principal, por falta material de espacio. En otro libro estudiaré la desviada relación de los nacionalismos con su propia historia y, por supuesto, con la historia de España. Si bien, dada la importancia del asunto, algo adelantaré aquí.

Ante todo, la hipótesis de la conjura se refuerza de forma prácticamente irresistible si tenemos en cuenta que sus diversas líneas e impulsos ofrecen claras afinidades. La aproximación entre Masonería e Internacional Socialista es un hecho aceptado por testimonios tan altos y tan decisivos como el de Jacques Mitterrand en su libro, que ya hemos mencionado, *La politique des Francmaçons*. El carácter secularizados esencial en la Masonería como hemos podido demostrar en numerosas ocasiones (por ejemplo al comentar el libro definitivo de Dolores Gómez Molleda sobre la Masonería española en el siglo XX) coincide con la clave secularizadora de la Internacional Socialista, que es una emanación ideológica de la Escuela de Frankfurt, cuyo último superviviente, Jürgen Habermas, es seguramente el principal teórico de la secularización; así lo he mostrado en *Las Puertas del Infierno*, donde puede comprobarse también el carácter secularizador de la Internacional Socialista, cuyos miembros directivos, según nos ha informado un testigo tan serio como Pablo Castellano, eran masones de alto coturno cuando avalaron al PSOE «renovado» en 1974. Todos los hilos de la trama se entrecruzan. Mikhail Gorbachov acuñó el término de *Casa Común de la izquierda* como nueva identidad de la nueva conjunción entre socialistas y comunistas, para salvar a éstos del naufragio de 1989. En fecha próxima caractericé a esa conjunción en el campo cultural como *Frente Popular de la Cultura*; en el libro *España, la sociedad violada*, editado por Planeta en ese mismo año 1989. Todos los hilos de la trama se entrecruzan. Vamos a enfocar un poco más de cerca los hilos de la trama.

PRIMERA FUENTE: LA INSPIRACIÓN COMUNISTA

El comunismo fue, primero, el gran vencido de la guerra civil española en 1939 y luego el gran vencido de Occidente en 1989. En la guerra civil española, como he mostrado ampliamente en *La Victoria y el caos* a los sesenta años del final del conflicto, el comunismo no fue vencido solamente

por las fuerzas nacionales, sino por todas las fuerzas políticas y militares de la España republicana que le expulsaron del Frente Popular y le repudiaron poco antes de que se terminase la guerra civil. Más aún, ante el triple desastre electoral del comunismo en España después de la muerte de Franco —en 1977, 1979 y 1982—, su líder de la época, Santiago Carrillo, ofreció como única explicación la permanencia de la condena de Franco contra el comunismo, con lo que no fue el propio Franco, como dice Paul Preston, sino Santiago Carrillo, quien equiparó a Franco con el Cid al declararle vencedor en tres grandes batallas después de muerto. En 1989 caía el comunismo entre las ruinas del muro de Berlín; caía en Occidente, como doctrina desacreditada y anacrónica, entre el tremendo fracaso de las predicciones y postulados económicos y sociales de Carlos Marx, que llevaron la ruina a la Unión Soviética y al bloque comunista de Europa y hundieron a todo un siglo de comunismo occidental.

Pero el comunismo, herido de muerte, se obstinó en no rendirse. Por lo pronto sigue vigente en Oriente; China, Corea del Norte y Vietnam son hoy Estados y regímenes comunistas. Existe un poderoso partido comunista en la URSS (que acaba de ganar las elecciones a la Duma en diciembre de 1999), mientras se han desmantelado, con excepciones como la española, los partidos comunistas occidentales, empeñados en sobrevivir con otra cara mediante un hábil disfraz más o menos socialista. Persiste el comunismo en varios países totalitarios del Tercer Mundo, pero su amenaza latente, todavía muy peligrosa, radica en su antiguo frente intelectual y cultural, combinado con la Internacional Socialista en una Casa Común y en un esfuerzo común que dista mucho de haberse agotado.

Gracias a esas vinculaciones y transformaciones, el vigor del comunismo sigue alentando a antiguos y nuevos terminales que desde hace muchos años había conquistado en el mundo de la cultura y en el mundo de la comunicación. En España muchos comunistas como Jorge Semprún, el finado Fernando Claudín, ¡y el propio Santiago Carrillo! —una vez expulsados del Partido Comunista—, junto a una pléyade de antiguos comunistas vergonzantes, se han emboscado en el socialismo donde trabajan cómodamente en sus ideales de siempre, al lado de los intelectuales socialistas radicales. El Frente Popular de la Cultura y la Comunicación sigue siendo un hecho sin el cual no puede comprenderse la realidad actual en ninguno de los dos campos, que incluyen, en primer término, el campo de la enseñanza a todos sus niveles. Quien, como el autor de este libro, ha vivido profesionalmente con dedicación y profundidad en esos varios niveles del

mundo de la enseñanza y en concreto de la Universidad, así como el mundo editorial y cultural y el de las comunicaciones, puede confirmar con su propia experiencia tal presencia comunista en varias tonalidades, pero todas de rojo.

CIEN MILLONES DE MUERTOS POR EL COMUNISMO

Todos estos terminales comunistas o para-comunistas en esos mundos experimentaron una conmoción aplastante en el año 1997 cuando una editorial francesa tan prestigiosa como Robert Laffont publicó un libro colectivo, pero muy bien sincronizado, de varios especialistas reconocidos, ninguno de los cuales pudo ser motejado de extrema derecha, titulado agresivamente *El libro negro del comunismo* (Stéphane Courtois y cols.), que es título, exactamente reproducido, de la edición española realizada por otra editorial de neutralidad comprobable, Planeta. Se trata de un conjunto de estudios apabullantes sobre los crímenes del comunismo —muertes, represión, deportaciones, persecuciones— en todo el mundo desde 1917 hasta el momento de la publicación del libro. Los crímenes se analizan zona por zona, época por época, país por país y arrojan un balance de víctimas (un balance mínimo, notan los autores en la p. 14 del libro) de CIEN MILLONES DE MUERTOS, distribuidos más o menos de esta forma:

Unión Soviética, 20 millones de muertos.
China comunista, 60 millones.
Vietnam 1 millón.
Corea del Norte 2 millones.
Camboya 2 millones (la cuarta parte de la población).
Europa del Este, 1 millón.
América latina 150 000.
África, 1,7 millones.
Afganistán 1,5 millones.

La cifra global de cien millones es ofrecida por los propios autores como más verosímil, pero en realidad es bajísima. Según investigaciones recientes emprendidas en Rusia tras la caída del Muro y recogidas por la prensa occidental, como reproduzco en mi libro *Carrillo miente* de esta misma Editorial (1994), las víctimas de Lenin en la URSS superan los 20 millones de muertos y las de Stalin los 30 millones. Las víctimas de la China comunista rebasan, según investigaciones monográficas, las citadas en el Libro Negro.

En éste no se incluyen las víctimas por fuerzas irregulares comunistas en las breves, pero terribles guerras civiles que siguieron en Francia al régimen de Pétain y en Italia al de Mussolini, unas cuatrocientas mil entre los dos países. Sí se incluye, pero de manera muy incompleta, el estudio de las víctimas del comunismo en la guerra civil española. Es decir, que las cifras mínimas ofrecidas por Courtois y sus colaboradores acabarán fatalmente por incrementarse en venideros estudios.

Los comunistas conocían, naturalmente, el alcance de la represión que habían practicado en el ámbito mundial y cuando este primer balance de mínimos fue revelado en 1997, con impacto universal, armaron desesperadamente una contraofensiva. Sus terminales y sus aliados socialistas se lanzaron a la rebusca de víctimas por los asesinatos perpetrados en regímenes anticomunistas, y de ahí la proliferación reciente de trabajos y «estudios» sobre las víctimas de Pinochet, de Franco y del régimen militar en Argentina. El Libro Negro suscitó diversas réplicas (en tono menor porque la enormidad de las cifras «mínimas» y su fundamentación impedía que pudieran ser negadas en bloque) y recuerdo que en España, el señor Haro Tecglen y comunicadores de parecido talante, trataron desmañadamente de oponerse a la gravísima acusación de la editorial francesa. Todo fue inútil y los cien millones de muertos del total mínimo han quedado grabados desde entonces en la conciencia universal. Ha sido imposible, pese a los alardes y las exageraciones, encontrar una contrapartida anticomunista. No la hay, ni de lejos. Pero había que gritar más para acallar la fundadísima acusación histórica.

SEMPRÚN, TUÑÓN Y LA LUCHA CULTURAL EN ESPAÑA

Hay que conceder a los comunistas la primacía en la lucha cultural española desde la época de Franco. En mi libro de 1994, *Carrillo miente*, doy las pistas, las citas y las incidencias principales de esta lucha. Sus dos protagonistas se llaman Jorge Semprún Maura y Manuel Tuñón de Lara. Jorge Semprún es hijo de un político católico y republicano y nieto de don Antonio Maura. Se había comportado valerosamente en un campo de exterminio nazi y luego recibió una intensa formación universitaria en la Sorbona. Es un escritor de amplia cultura y perfecto bilingüismo, que supo abrirse camino entre la izquierda cultural francesa, tanto en el campo literario como en el cinematográfico. Ingresado en el partido comunista poco después de acabar la guerra mundial, empezó a destacarse en las filas del comunismo

francoespañol hacia 1947. En 1977 ganó merecidamente el Premio Planeta con una novela rigurosamente histórica *Autobiografía de Federico Sánchez*, que alcanzó un gran éxito y motivó el admirado repudio de los comunistas españoles y europeos. Federico Sánchez era su propio *nom de guerre* para sus actividades comunistas clandestinas en la España de Franco, donde nunca fue capturado, aunque estuvo a punto. «Yo he sido un intelectual estaliniano», dice refiriéndose a su etapa comunista, y bien lo demostró con una impúdica elegía a la muerte de Stalin en 1953, que tiene el valor de incluir al pie de la letra en su novela autobiográfica. En 1950 creó en París una revista efímera, *Cultura y democracia*, y en 1953 fue enviado por el Partido a España para un primer contacto con la realidad «del interior». Desde entonces cobró auge y hondura el esfuerzo cultural comunista en España, que hoy permanece a trancas y barrancas, bajo diversos disfraces y oportunismos. Gregorio Moran, el primer historiador del comunismo español, en su libro impar *Miseria y grandeza del PCE* (Barcelona, Planeta, 1986), relata cabalmente los trabajos y los días de Jorge Semprún en España. Comunista consciente, advierte Semprún la esencia del marxismo: «El marxismo es, ante todo, en su raíz y en su método, un ateísmo».

La idea de establecer una firme conexión entre el PCE y los profesionales de la comunicación y la cultura viene de la más acendrada tradición soviética. Durante la guerra civil española, el enviado de Stalin encargado de ese cometido y organizador de los congresos culturales comunistas en Europa era el periodista judío comunista Ilya Ehrenburg, aunque el centro de organización y propaganda radicaba en París a las órdenes de Willi Muenzenbeg. En estos congresos celebrados durante la guerra civil española participaron numerosos intelectuales que luego abominarían del comunismo pero que entonces prestaron un servicio insigne a la causa soviética y a los comunistas españoles. La idea de revitalizar esa conexión cultural, anulada por la victoria enemiga en la guerra civil, fue de Vicente Uribe en los años cuarenta, aunque pronto se la adjudicó Santiago Carrillo que pugnaba por hacerse con la secretaría general del PCE. Dentro de España el primer coordinador cultural comunista en la postguerra fue el ingeniero Cirilo Benítez, fallecido prematuramente en 1950. Le seguirá el poeta y publicista Eugenio de Nora, que con residencia en León se distinguió en la crítica literaria de aquellos años y logró conectar con varios intelectuales de mérito como Gabriel Celaya y los hermanos Millares en Canarias. Entonces Carrillo captó las ventajas de esta vía de penetración cultural y trató de articularla en unas reuniones que celebró en París con Ricardo Muñoz Suay y Jorge

Semprún; el nieto de Maura estableció contactos valiosos con el cineasta Bardem, el universitario Enrique Múgica, que mostraba veleidades literarias e ingresó en el Partido Comunista y los actores Francisco Rabal, Fernando Rey y Fernando Fernán Gómez. Este primer impulso cultural del comunismo en el interior de España nació con cuño estaliniano: los intelectuales del Partido (como se le llamaba por antonomasia) rivalizaron en endechas y ditirambos para celebrar el 75 cumpleaños de Stalin, el Padre de los Pueblos. Superaba a todos en exagerado servilismo el ambicioso Santiago Carrillo, que por entonces se permitía calificar al excelente cartelista de la guerra civil José Bardasano como «nuestro Velázquez[75]». Carrillo, por su parte, viaja a Moscú en 1947 y pronuncia allí, según nos informa Moran, una celebrada conferencia en la que dictamina: «Moscú, corazón y centro de la democracia mundial». Ya era un maestro en el manejo del Nuevo Lenguaje de Orwell, que irá perfeccionando a lo largo de su vida.

El 5 de marzo de 1953 muere el dictador rojo José Stalin, el mayor criminal de la Historia y las estrellas culturales del comunismo mundial rivalizan en servilismo absurdo para honrar su sangrienta memoria. Ya he comentado la lamentable elegía que dedicó al acontecimiento Jorge Semprún que no reproduzco aquí por su valor al comunicarla en su *Autobiografía de Federico Sánchez*. Nunca escribió Pablo Neruda en Isla Negra ripios tan atroces y tonterías tan insignes. Con motivo de la reciente muerte de Rafael Alberti nadie ha recordado sus trenos a Stalin:

José Stalin ha muerto
Padre y maestro y camarada
Quiero llorar, quiero cantar
Que el agua clara me ilumine
Que tu alma clara me ilumine
En esta noche que te vas.

Evidentemente el pobre Alberti ya estaba gaga en 1953. Ensalzar al «alma clara» de Stalin es algo a lo que ni el más arrebatado comunista se atrevió entonces.

En 1953 el régimen de Franco consiguió lo que llama el historiador socialista francés Max Gallo su «segunda victoria» gracias a los pactos con la Santa Sede —el nuevo Concordato— y con los Estados Unidos. Al año siguiente, en septiembre de 1954, se reúne en Checoslovaquia el V Congreso del Partido Comunista de España, primero desde 1932. Este Congreso marcó el eclipse de Vicente Uribe y el ascenso imparable de Carrillo y sus antiguos jóvenes de las JSU. Uno de ellos, Fernando Claudín, que había profundizado en Moscú durante largos años en la teoría comunista, se trasladaría al Buró

Político del PCE en París, controlado por Carrillo, y asumiría las funciones de primer teórico del Partido. Jorge Semprún, presentado como «Federico Sánchez» impresionó al Congreso con un brillante informe sobre los progresos de sus contactos informativos y culturales en «el interior». Claudín, presente en el Congreso, nos transmite un dato muy valioso y significativo que después aprovecharemos: en el informe presentado por Carrillo, ya preconizado delfín de la ajada Pasionaria, cada vez más reducida a la condición de icono, el joven dirigente plantea el problema de la compatibilidad entre comunismo y masonería y se inclina abiertamente a favor de esa compatibilidad ante su experiencia en la guerra civil, durante la cual, según el orador, el PCE había aceptado la colaboración masónica[76].

En 1955 comienza a agitarse la Universidad española con la llegada de las generaciones que no habían vivido la guerra civil. Jorge Semprún, coordinador comunista de Cultura en la clandestinidad, lo advierte cabalmente y trabaja con su cada vez más importante red de contactos en aquel río revuelto de la cultura española, en el que se enfrentaban dos fuerzas antagónicas: por una parte el equipo aperturista del antiguo dirigente juvenil de la JAP, Joaquín Ruiz-Giménez, con su relevante conjunto directivo en el Ministerio de Educación (Pérez Villanueva, Fernández Miranda, Fraga Iribarne) y con sus nuevos rectores universitarios provenientes del antiguo equipo intelectual de Serrano Suñer (profesores Pedro Laín y Antonio Tovar), frente a pensadores y escritores de corte más tradicional, algunos vinculados al Opus Dei como Rafael Calvo Serer, otros de categoría intelectual tan admirable como sus adversarios, caso de Gonzalo Fernández de la Mora y Florentino Pérez Embid. Con la perspectiva de hoy creo que una y otra tendencia eran compatibles y hubieran podido fecundar culturalmente al régimen si el régimen se orientaba hacia una clara apertura, como pretendía el equipo de Educación; pero Franco decidió frenar y descabezar la polémica en vez de sintetizar sus dos vectores y entonces el protagonismo de la explosión universitaria, que estalló en febrero de 1956, correspondió al poeta falangista y político idealista Dionisio Ridruejo, vinculado personalmente al equipo de Educación, pero que ya, tras romper con el régimen, marcaba decididamente el camino hacia un sistema democrático. Semprún y sus colaboradores cooperaron con el grupo dirigido por Ridruejo, pero el principal impulso del movimiento estudiantil fue el reformismo de Ridruejo, no el esfuerzo de los comunistas y socialistas universitarios, por más que ellos se lo hayan atribuido después. Es cierto que unos y otros colaboraron intensamente, pero

el efecto principal de la revuelta estudiantil de febrero de 1956 se debe al esfuerzo y los contactos de Dionisio Ridruejo.

Santiago Carrillo consumó su ruta ascendente dentro del Partido Comunista con su elección en Moscú, con motivo del VI Congreso del PCE, como secretario general, cargo que ejerció, según todos los testimonios, de manera firme, autocrática y arbitraria. La penetración informativa, cultural y docente del PCE se incrementaba en los años siguientes, a medida que la salud de Franco empezaba a declinar de forma visible. Carrillo había propuesto una política «de reconciliación nacional» difícilmente creíble por los antecedentes del personaje y trató de impulsar la penetración del PCE en la sociedad española por tres vías principales: la conjunción con el ala *progresista* de la Iglesia, la captación comunista del sindicato Comisiones Obreras, que había surgido por iniciativa de elementos cristianos a fines de la década de los cincuenta, y la intensificación de los trabajos con el mundo de la información, la cultura y la docencia en que se había empeñado Jorge Semprún. Hay que reconocer el éxito del nuevo secretario general comunista en esos tres frentes. Algunos religiosos muy conocidos, entre ellos varios jesuitas, establecieron contactos duraderos con los comunistas y personalmente con Carrillo, tomaron el carnet del Partido y participaron en cuanto comunistas en la dirección del sindicato. Los nombres del jesuita Juan N. García Nieto, como dirigente sindical, y del padre José María de Llanos, como militante comunista, causaron el asombro general de quienes llegaron a conocer el acontecimiento y son una excelente prueba por sí mismos de la crisis en que se habían sumido la Iglesia española y la Compañía de Jesús, que se revelaron en el Concilio, pero venían de antes.

LA CRISIS CULTURAL DEL PCE Y LA EXPULSIÓN DE SEMPRÚN

El proceder totalitario de Carrillo en la política cultural y en la relación con los intelectuales del Partido provocó la gran crisis cultural interna de 1964, que se incubó en la reunión de intelectuales celebrada en Arras el año anterior. El seminario se celebró entre el 22 de junio y el 5 de agosto de 1963 con intención de «homogeneizar», es decir de encauzar férreamente la actuación de los jóvenes intelectuales «del interior». La concurrencia fue muy numerosa y en ella destacaron las delegaciones de Madrid y Barcelona. Formaban en ésta Jordi Borja, Francesc Vallverdú, Francesc Vicens y el futuro ministro de Suárez, Eduardo Punset. Se encargaron de su adoctrinamiento Jorge Semprún, Fernando Claudín y el comunista cristiano

francés Roger Garaudy, quien ha dialogado tanto que ahora ya profesa el Islam como religión. Santiago Carrillo irrumpió en medio de aquellas discusiones que creía bizantinas y les llamó al orden brutalmente. Lo malo es que los jóvenes intelectuales comunistas venidos de España creían en la libertad y la democracia y por el choque con el secretario general (que también afectó vivamente a Semprún y Claudín) se incubó la disidencia de los intelectuales comunistas y se inició pronto una riada de deserciones que no conviene exagerar; porque incluso los disidentes, salvo excepciones, siguieron cultivando los principios del marxismo-leninismo.

En dos reuniones del Comité Ejecutivo del PCE celebradas en 1964 se consuma la disidencia y la eliminación de Semprún y Claudín. El propio Semprún describe este implacable proceso político, que protagonizó La Pasionaria con terribles invectivas contra los dos disidentes, bien azuzada por Carrillo, a quien evidentemente hacían sombra por su categoría intelectual y su visión política, que luego asumiría el propio Carrillo cuando logró echarles del partido.

TUÑÓN DE LARA Y LOS ENCUENTROS DE PAU

El pecado de Claudín y Semprún consistía en que los dos creían en la posibilidad de que la salida del régimen de Franco sería pacífica, mientras Carrillo predicaba exclusivamente la insurrección armada, es decir, una nueva guerra civil y alardeaba de sus contactos en las fuerzas armadas, que por lo demás eran mínimos e insuficientes. Éste era el punto de discrepancia, que La Pasionaria interpretaba como «pérdida de fe» y «negación del leninismo» en los dos disidentes. Una vez que se libró de ellos Carrillo, cuando se convenció de que tenían razón, asumió cínicamente las tesis de los dos sin asomo de autocrítica. Y así seguiría hasta que, por sus repetidos fracasos electorales, el PCE se hartó también de él y le expulsó.

Carrillo trató de compensar la grave pérdida de sus dos mejores intelectuales, seguida por la de otros, con las numerosas peticiones de ingreso que venían de España, entre las que destacaba la de un joven y ya famoso profesor universitario de Economía, Ramón Tamames, que colaboraba con el PCE desde los sucesos de febrero de 1956. Se ufanaba también de los evidentes progresos en las relaciones del PCE con el ala *progresista* de la Iglesia católica y hablaba del asunto con acentos de un Padre conciliar. Sin embargo, creo que la compensación más importante que alcanzó el comunismo español es la obra proselitista del profesor Manuel Tuñón de Lara

entre los jóvenes universitarios españoles en el terreno de la Historia, y especialmente la Historia Contemporánea de España. Yo tuve noticias del proyecto comunista para cambiar la memoria histórica de los españoles de una fuente insólita: mis conversaciones con Herbert Rutledge Southworth, cuando me visitó detenidamente en Madrid.

Manuel Tuñón de Lara, de familia intensamente republicana, llegó a una cátedra de Historia en la universidad de Pau en el año 1965. El sentido de esa presencia —fruto de una maniobra estratégica comunista de gran alcance— ha sido celosamente guardado hasta el homenaje que sus discípulos tributaron a Tuñón en 1993[77]. Nació en Madrid en el mismo año que Carrillo, 1915, se mostró muy activo en la FUE y en las Juventudes Comunistas a partir de 1932. Al estallar la guerra civil vino a Madrid, se alistó como miliciano en el Quinto Regimiento comunista y participó brevemente en los combates para la defensa de la capital en el Puente de los Franceses. Fue destinado luego como profesor a la Escuela de cuadros de las JSU, de obediencia comunista, y allí hizo casi toda la guerra hasta que fue detenido después del golpe de Casado en 1939. Consiguió escapar, pero volvió a ser capturado en los muelles de Alicante en la última acción de la guerra civil. Puesto en libertad durante el verano de 1940, se exilió a París en 1946, donde se diplomó en Historia y participó en las actividades del PCE. Jorge Semprún, que le conoció muy bien, sugiere en su *Autobiografía* que Tuñón de Lara estaba relacionado con los servicios secretos soviéticos, es decir, la KGB. Para cumplir con la misión fundamental que se le había asignado fue desvinculándose de su militancia comunista hacia 1957, pero no consta que renegase del comunismo; tal vez no le conviniera ostentar la etiqueta roja para convertirse en «historiador objetivo» como anota con sarcasmo el propio Semprún. Pero el testimonio de Semprún sobre las actividades secretas de Tuñón me parece tan importante que voy a reproducirlo en su contexto original:

> «Pues bien, en aquella época (la del proceso del comunista húngaro Laszo Rajk, en cuya culpabilidad Semprún no creía, N. del A.), un camarada de tu célula, Manuel Tuñón de Lara —que ahora se nos presenta como un historiador objetivo y liberal—, te dijo en el curso de una conversación personal, en la que expresabas algunas dudas sobre el asunto Rajk, que todas las acusaciones eran ciertas. Te dijo, para convencerte de la culpabilidad de Rajk, que él mismo había visto, con sus ojos, las fotocopias de la ficha de liberación de Laszlo Rajk del campo de concentración francés, ficha que demostraba la intervención de la Gestapo en dicha liberación. Le preguntaste, como es lógico, quién le había enseñado esa ficha. Puso Tuñón de Lara cara de misterio y te dijo en voz baja que eran los camaradas soviéticos. Moviste la cabeza, impresionado. Luego, naturalmente, y aunque no lo comentaras con nadie, tuviste que preguntarte a ti mismo qué tipo de relaciones tendría Tuñón de Lara con los "camaradas soviéticos". Luego, una serie de indicios, entre los cuales el hecho mismo de que Tuñón se alejara sin conflictos del PCE para hacer el papel de historiador objetivo y liberal, te hicieron comprender que dichas relaciones eran especiales. Mejor dicho, que debían de ser relaciones con los Servicios Especiales. Pero sea como sea, lo cierto es que,

en el caso de Rajk, tampoco hiciste uso del espíritu crítico que dicen ser propio del intelectual revolucionario[78]».

Es sabido que cuando los soviéticos se referían a la KGB utilizaban el eufemismo de «Servicios» y, de forma más técnica, «servicios especiales». El testimonio de Jorge Semprún me parece capital. Nunca he visto que lo citen o lo comenten sus fieles discípulos.

Llegó, pues, Tuñón de Lara a Pau en 1965, y ejerció su cátedra de Historia en aquel centro, filial de la Universidad de Burdeos. A partir de 1970 organizó allí unos cursos estivales de Historia, preferentemente de España, por los que pasaron numerosos estudiantes superiores de Historia que recibían una depurada formación de historia marxista-leninista, es decir, objetiva y liberal, como comprenderá el lector. Esos estudiantes que recibieron la impronta de Manuel Tuñón de Lara desplegaron después esa formación, que debió de ser, a juzgar por los resultados, impartida con estupenda eficacia, en los puestos docentes que fueron consiguiendo poco a poco en la Universidad española y en niveles inferiores de la enseñanza. Esto es lo realmente grave para la memoria histórica de los españoles, que por fortuna han conseguido muchas veces conservar la memoria auténtica gracias, en parte, a que los historiadores comunistas y sus prójimos no solamente carecen de ciencia y de método histórico, sobre todo desde que se les ha hundido el marxismo, sino que además tendrían que jurar que la lengua en que escriben es el castellano, a juzgar por su carencia de morfología, de sintaxis y del fundamental estilo que obliga a considerar a la Historia como un arte, no sólo como una ciencia humana. Esta deletérea acción docente no se ha traducido, por lo general, en estudios y libros de importancia para España ni para Europa, salvo contadísimas excepciones que me costaría enumerar. Tienen todavía menos importancia los alardes colectivos de los discípulos de Tuñón de Lara y sus congéneres que se presentan como homenajes a la figura del maestro. Ya hemos citado uno de 1993 y debo referirme ahora brevemente al volumen *Tuñón de Lara y la historiografía española*, editado por la veterana editorial marxista Siglo XXI de España en 1999, bajo la dirección (sic) de José Luis de La Granja, Alberto Reig Tapia y Ricardo Miralles. Es, en cuanto a la figura de Tuñón, un libro hagiográfico descarado, sin una sola crítica, sin una sola profundización. Los autores mantienen, por lo general, el método de la historia marxista; no conocen otro y ya no tienen tiempo de cambiar sin una intensa palinodia que por lo visto no tienen intención de emprender.

Tras un triste prólogo de los editores que intentan la canonización de su ídolo, Josep Fontana hace otro prólogo lastimoso en que aprovecha la ocasión

para arremeter contra la figura del general Franco y descalificar toda la obra histórica realizada durante el régimen de Franco, en la que podríamos señalar al menos un centenar de libros —desde Miguel Artola a Vicente Palacio Atard— a cuyo nivel no ha llegado jamás ni Tuñón ni tuñoniano alguno, ni a cien codos. Y no dice más Fontana; no tenía, por lo visto, más de un cuarto de hora para enviar estas pobres generalizaciones.

Julio Aróstegui revisa la historiografía española contemporánea a mayor gloria de Tuñón de Lara con mejor información y más educación que Fontana, pero tampoco logra evadirse de la hagiografía para salvar el compromiso. En un arco de semejante insuficiencia se mueve Manuel Pérez Ledesma. Joseph Pérez ofrece un trabajo más interesante sobre Tuñón de Lara y el hispanismo francés. Ricardo Miralles parece creer en serio que la época de Franco fue un simple retomo a la España tradicional, cuando realmente sentó las bases de la España moderna (p. 59).

La segunda parte del libro-homenaje se dedica a los diversos períodos históricos sobre los que trabajó Tuñón de Lara. Santos Juliá se ocupa de la Segunda República y Paul Preston de la historiografía sobre la guerra civil; los dos trabajos son perfunctorios, no contienen visión ni aportación alguna y especialmente el de Preston parece referirse a otro país. No caben mejores comentarios sobre la historia del franquismo vista de forma tan sesgada como es habitual en Alberto Reig. En los aspectos económicos de esa época merece leerse el resumen de Ángel Viñas, a quien veo en estos últimos años alejado de la Historia, quizá por decepción. La tercera parte se dedica a cuestiones temáticas y tampoco brinda sugerencias interesantes.

En conjunto, éste por ahora último homenaje a Manuel Tuñón de Lara es aburridísimo. Salvo excepciones, los diversos autores parecen escribir como para salir del paso. Sus contribuciones, que en varios casos solían hacerse antes desde la militancia, ahora se dirían elaboradas desde la rutina. La historiografía del marxismo y sus derivados tema fatalmente que acabar así.

He dicho que en esta ocasión el profesor Aróstegui muestra cierta educación. Otras veces no. No sé si es comunista de carnet, pero se mueve en órbita comunista indisimulable. Me reconforta que no pueda tolerar algunos de mis libros, precisamente aquéllos en que el comunismo queda por los suelos. En una «crítica» que le publicaron en la antes rigurosa revista *Híspanla*, número 196, de 1997, trata de ensañarse con mi libro *Historia esencial de la guerra civil*. Algún amigo me pide que le conteste. Es imposible. El título de la «crítica» parece que va a centrarla en ese libro mío, sobre el que sólo dice un par de bobadas insignes que no merecen ni

comentario. Lo que de verdad le duele es que yo escriba numerosos libros, lo cual significa que los vendo; y que eche sobre Carrillo la responsabilidad trágica de Paracuellos. Dice que sin pruebas. Pero mi libro *Carrillo miente* es toda una trama de pruebas documentales y testimoniales, a las que Aróstegui, como a propósito de otros libros míos, responde con inepcias e insultos. No le seguiré por ese camino. Comprendo que le encrespen mis libros; sin duda hacen vacilar su fe, sea ésta cual fuere. Pensé en un momento de alucinación dedicar a Aróstegui en este libro un capítulo semejante al de Preston o al de Tusell. Pero no veo obra alguna de Aróstegui susceptible de un análisis serio, por lo que de momento desisto. Su actitud, al negar mis pruebas sobre la culpabilidad de Carrillo en Paracuellos, resulta especialmente delirante si recordamos que una de las principales pruebas la suministró el propio Aróstegui al editar las Actas de la Junta de Defensa de Madrid. En la que corresponde al 15 de noviembre de 1936, el propio Carrillo se encarga de presentarnos su responsabilidad. La bronca que debió de recibir Aróstegui de sus amigos comunistas sería, sin duda, inenarrable. Escribir medio deshecho por los cascotes del Muro de Berlín debe de ser muy incómodo; China queda todavía lejos. Pobre hombre.

EL FACTOR MASÓNICO Y LA LÍNEA SOCIALISTA DE LA GRAN CONJURA

Sobre la cordial enemistad entre el general Franco y la Masonería no está dicho todo, ni tal enemistad se ha estudiado con talante histórico. En el libro *Masonería*, escrito o al menos inspirado por Franco en los años cincuenta, pueden rastrearse muchas pistas sobre la idea que Franco tenía realmente sobre la Masonería y sobre su idea de la historia de España, mucho menos ridícula y mucho más seria de lo que creen, sin conocer el asunto, sus detractores. Los documentos del archivo de Franco, sólo en parte publicados, pueden sugerir algunas líneas interesantes para esa investigación, que algunos han tratado persistentemente de sustituir con leyendas, como la falsedad de que Franco odiaba a la Masonería desde sus tiempos jóvenes de África, cuando la secta, dicen, rechazó su solicitud de ingreso. Eso es una patraña gratuita, de la que no se ha ofrecido ni una sola prueba, pero que se repite insistentemente; si el oficial joven más famoso de África hubiera pedido ingresar en la orden masónica, hubiera sido recibido con alegría y solemnidad, recordemos que un agente masónico importante para el reclutamiento de «hermanos» en el Ejército de África era don Alejandro

Lerroux, que mostró siempre mucha inclinación a Franco, hasta el punto que uno de sus gobiernos fue quien le ascendió a general de división, el máximo grado posible en la República.

El caso es que Franco prohibió a la Masonería en España y la persiguió de forma implacable en los primeros tiempos de su gobierno. Al final de la guerra civil dictó una severa ley para la represión «de la Masonería y el comunismo» y creó un tribunal especial para esa represión. Muchos han criticado esa especie de identificación de masonería y comunismo en la mente de Franco, con la tesis de que el comunismo ha sido siempre enemigo de la Masonería e incompatible con ella. Ésa parecía ser la situación en la Unión Soviética, donde el régimen de los soviets se impuso tras la eliminación del gobierno liberal-masónico de Kerenski en la Revolución de Octubre de 1917. He demostrado en mi libro anterior, *Los signos del Anticristo* (Fénix, 1999) que algunos grandes capitalistas masónicos hicieron todo lo posible por ayudar al triunfo de la Revolución soviética desde los tiempos de la guerra ruso-japonesa, pero creo que el régimen soviético de 1917 excluyó toda colaboración masónica, porque identificaba a la masonería con la revolución burguesa y el capitalismo, contra los que se alzó la Internacional Comunista. Sin embargo, en uno de los epígrafes anteriores, con base en los testimonios de Gregorio Moran y Fernando Claudín, hemos observado también que Santiago Carrillo, no mucho después de ser elegido secretario general del PCE en 1960, manifestó de forma expresa la compatibilidad de Masonería y comunismo para España, según sus propias experiencias de la guerra civil. Esto significa que si bien la corriente principal de la conjura contra la historia de España ha sido de impulso comunista, como acabo de razonar, la venganza masónica contra Franco puede muy bien haber cooperado a esa conjura. Por lo pronto hay un hecho histórico que creo probado hasta la saciedad: los masones y los filomasones han escrito rematadamente mal la verdadera historia de la Masonería, con excepciones brillantes como en el caso de Paul Naudon; han ocultado el carácter gnóstico, es decir, la tendencia pagana de la secta que tan claramente detectó el Papa León XIII y los rituales secretos como el del Arco Real o grado supremo de la Gran Logia de Inglaterra, en que se revela el sincretismo pagano con que la masonería expresa algo tan sagrado como el Verdadero Nombre de Dios.

Por otra parte, el general Franco vivió siempre convencido, tras su seria inmersión en la historia de España, que la acción masónica había sido nefasta, desde el siglo XVIII, para España. Su idea, en el punto más fundamental —la pérdida de América— está corroborada por Salvador de Madariaga en su

importante texto *El auge y el ocaso del imperio español en América* (Ed. Espasa-Calpe). Era de esperar que cuando la Masonería volviera a *alzar columnas* después de la desaparición de Franco, la visión masónica de la historia de España estuviese marcada por el signo de la venganza. Pero dada la relación que existe entre la Masonería y la Internacional Socialista, así como entre la Masonería y el comunismo como nos informa Santiago Carrillo a través del testimonio de Claudín-Morán, cabe pensar que esa visión masónica de la Historia de España, no sea opuesta a las líneas historiográficas de socialistas y comunistas. Desde hace mucho tiempo vengo exponiendo la coincidencia entre la actividad masónica y la Internacional Socialista en el siglo XX, una tesis admitida desde esas dos instituciones. Pero ante el hecho de que existe una historia de la Masonería pergeñada y tal vez escrita por Franco, ocurre también lo contrario; existe al menos una importante historia de la España contemporánea debida a un miembro seguro y confeso de la Masonería que, de acuerdo con la identificación recién formulada, llegó a ser secretario general en funciones del PSOE en 1934; me refiero a Juan-Simeón Vidarte, autor, desde el exilio, del famoso libro *Todos fuimos culpables*, acompañado por una serie de obras históricas sobre la Monarquía, la República y la guerra civil que me parecen importantes y rebosantes de información imprescindible, aunque degeneren muchas veces en sectarismo. Otro historiador socialista de España es Antonio Ramos Oliveira, autor de una difundida *Historia de España* en tres tomos, de los cuales el tercero se dedica a la República y la guerra civil. Obra editada en México en los años cincuenta, muy difundida pero históricamente muy endeble, sin que esto suponga despreciar bastantes intuiciones e informaciones estimables, por ejemplo, la identificación de las elecciones de febrero de 1936 con la guerra civil, no como simple prólogo. Sin embargo, el auge más importante de la historia de España en versión socialista ha ocurrido mucho más recientemente, con las obras, ya comentadas, de Santos Juliá y Paul Preston como estrellas principales. No insistiremos más sobre ellos, que exhiben una metodología de trama o al menos de resabios marxistas, en idéntica línea a la de la historiografía tuñoniana y comunista, dentro del Frente Popular de la Cultura. Los historiadores socialistas de hoy persisten en la misma línea que abrió testimonialmente su correligionario Indalecio Prieto y que ya hemos expuesto en la primera parte de este libro. Los estudios de esta nueva generación socialista parecen inspirados, como los trabajos y testimonios de Prieto, por la venganza y la incomprensión absoluta mucho más que por la objetividad.

Para la reseña de todo este frente historiográfico marxista, masónico y antifranquista me falta la referencia al maestro de Preston, un extraño personaje llamado Herbert Rutledge Southworth, fallecido ya de mucha edad recientemente. Preston se erige en una especie de testamentario de Southworth y trata tan ardorosa como desmañadamente de defenderle de mis ataques: en su delirio de exageraciones llega a decir —precisamente en su contribución al último homenaje a Tuñón de Lara— que en vez de responder a las críticas de Southworth me dedico a insultarle. En esta opinión Preston no simplemente se equivoca, sino que miente. Primero cuando afirma que he orientado toda mi obra histórica a combatir a Southworth. Lo cual es falso y Preston lo sabe; ya había publicado varios de mis libros de Historia antes de que Southworth, a fines de los años sesenta, apareciera por mi gabinete de Historia e iniciara conmigo una cordial relación, durante la cual me pidió consultar varios libros de mi archivo a lo que accedí, como he procurado hacer con los demás historiadores que lo han solicitado, desde Jesús Salas Larrazábal a José María García Escudero. Ni siquiera se interrumpió esa relación cuando publicó la versión francesa de *El mito de la cruzada de Franco*, exposición más bien bibliográfica que histórica, a la que considero un libro más divertido que de fondo, seguido por su tesis doctoral, flojísima, sobre la destrucción y el mito de Guernica, que presentó en la Sorbona y por varios artículos deleznables. Nunca he hecho un estudio a fondo sobre la obra de Southworth porque no lo he creído de suficiente relevancia; pero tengo innumerables fichas con que emprender un divertimento con su propia técnica y más base histórica. Al final de su «mito» identifica la Cruzada española como una empresa hitleriana, nada menos. Confunde al pintor falangista Pancho Cossío con don Manuel Bartolomé Cossío, un maestro de la Institución Libre de Enseñanza, no caben dos figuras más opuestas. A Calvo Sotelo, víctima de un crimen de Estado, le cree justamente ejecutado y de José Antonio Primo de Rivera y la Falange no sabe prácticamente nada. Ésa es la historia de España que sabía Southworth, de quien luego he conocido una serie de curiosas aventuras entre Tánger y París. Por ahora su último alarde consiste en contribuir a un libro dirigido por Preston, que ya he comentado, con una disertación sobre una nota a pie de página del monumental libro de Bolloten, nota en que además Bolloten tiene toda la razón, mientras su detractor se pierde en interminables y vacuas consideraciones de escolástica decadente. Parece que ha dejado una obra póstuma sobre el lavado de cerebro de Franco, que se publicará dentro de un

año; esperaré a su salida para publicar un apunte más extenso sobre los disparates de Southworth y sus adoradores.

EPÍLOGO 1: LA HISTORIA DE LA ESPAÑA ROTA

He indicado hace poco que dejaba para otro libro el comentario a la historia de España publicada por los nacionalistas radicales del País Vasco y de Cataluña. Persisto en el aplazamiento pero, por vía de epílogo, debo terminar este libro con algunas reflexiones sobre la historia separatista, porque la exacerbación separatista se agudiza cada vez más entre nosotros, sobre todo en el País Vasco y las aberraciones de la correspondiente historiografía forman parte, voluntaria o involuntariamente, de la gran conjura contra la Historia de España.

Hasta el punto que la Real Academia de la Historia ha dado la alarma y ha comunicado su propósito de tomar cartas en el asunto. Me parece una idea necesaria y encomiable; esa Academia es, naturalmente, la Academia de la Historia de España y no puede permitir impunemente que se le desgarre con tal impudicia el objeto de sus estudios e investigaciones. Dos artículos casi simultáneos en la prensa de Madrid han dado cuenta recientemente del problema.

El País del 11 de octubre de 1999 (*Libros bajo control*, p. 33) indicaba que todas las comunidades autónomas que ya poseen competencia sobre la enseñanza infrauniversitaria (dentro de poco serán todas) ejercen una durísima censura ideológica sobre los textos escolares, una censura que se ceba sobre todo en los de Historia. Lo más grotesco es que las autoridades autonómicas consultadas por el periódico utilizan el lenguaje de Orwell y niegan tajantemente que practiquen la censura que evidentemente practican. El resultado de un sistema que por supuesto atenta a la libertad de expresión y a la libertad de cátedra motiva, sin duda, la alarma de la Real Academia de la Historia, según el artículo de Clara Isabel de Bustos en *ABC* del 15 de octubre de 1999, *La Academia clama contra el disparate de los libros de texto*. El director de la Academia de la Historia, profesor Gonzalo Anes, anuncia: «Vamos a estudiar lo que se enseña y lo que no se enseña». La enseñanza de la historia de España es, dice, «una realidad terrible que no se da en ningún otro país. Una realidad que no es otra que la tergiversación de la Historia y el triunfo del absurdo, hasta extremos como el que se produce en Canarias, donde no se hace referencia a ferrocarriles o ríos (de España) porque en las islas no hay, o rechazar (en Andalucía) un libro de matemáticas porque no

refleja la cultura andaluza». Se hizo eco de una peculiar Historia de Galicia, denunciada en *ABC*, «que presenta la visión de una Galicia que libraba guerras y firmaba tratados de forma independiente, ajena al Descubrimiento, aislada del entorno y sometida al sucesivo centralismo de visigodos, Reyes Católicos, Fernando VII y la dictadura de Franco».

Bienvenida sea la iniciativa de la Real Academia de la Historia, la cual, antes de ponerse a criticar seriamente las aberraciones que se cometen en su campo específico, ya ha ofrecido con éxito notable, su propia visión sobre el conjunto de la Historia de España. Me refiero al magnífico conjunto de estudios publicados por la Academia en 1998 *España, reflexiones sobre el ser de España*. Cada trabajo está encomendado a un reconocido especialista y la obra se puede considerar como imprescindible desde su aparición.

En la polémica desmesurada que se alzó a propósito del proyecto de la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, sobre la potenciación de las Humanidades, que terminó por centrarse en que todos los alumnos españoles estudien una historia común de España sin perjuicio de que además amplíen la historia de sus Comunidades Autónomas, se deslizaba una contratesis absurda que latía en el fondo de las opiniones contrarias al proyecto: si no existe España como realidad, no es necesaria una Historia de España. No solían atreverse a manifestarlo así públicamente, pero en el fondo eso era lo que pensaban. El proyecto naufragó desgraciadamente, por la oposición cerrada de los nacionalismos excluyentes, que están basados sobre su propia mitología histórica, pero sobre todo por la sectaria repulsa de los socialistas, que decidieron el hundimiento del proyecto por simple reflejo de partidismo, sin advertir la trascendencia constitucional y nacional que albergaba.

Cataluña ha tenido y tiene en este siglo excelentes historiadores, que por lo general cultivan con igual maestría la historia de Cataluña y la historia de España; casos de Jaime Vicens-Vives, Ramón de Abadal y Ferrán Soldevila, por citar solamente a tres. El catalanismo radical no puede apoyarse excesivamente en ellos, pero sí en una línea historiográfica propia del romanticismo, que confunde demasiadas veces la Historia con la leyenda. Para contrarrestar esa leyenda se han realizado dentro de Cataluña esfuerzos beneméritos, como la *Otra Historia de Cataluña* de Marcelo Capdeferro, un libro imprescindible que me honré en prologar. Las historias de Cataluña emitidas en onda separatista, a las que muchas veces me he asomado para encontrar un destello de luz, son sencillamente aberrantes. Para el caso del País Vasco me he apoyado siempre en las investigaciones, algunas publicadas

recientemente, del profesor Sánchez Albornoz y de don Julio Caro Baroja, eminentes historiadores de España, como lo es, más próximo a nosotros en el tiempo, otro gran historiador vasco, el profesor Vicente Palacio Atard. No me explico que los participantes en el último homenaje al profesor Tuñón de Lara hayan afirmado que la característica de la historiografía vasca de las últimas generaciones es algo así como la quiebra de la historiografía liberal; ahí están los casos, más vigentes cada día, de tres grandes historiadores liberales, Claudio Sánchez Albornoz, Miguel Artola y Vicente Palacio Atard junto al legado de Julio Caro Baroja. Varias obras del profesor Sánchez Albornoz y las debidas a la dinastía Del Burgo han trazado desde la historia un foso infranqueable a la anexión de Navarra que pretenden los separatistas (ellos se llaman con la horrenda palabra *soberanistas*) del País Vasco, que marchan contracorriente de la Historia auténtica. Lo peor es que la quiebra presunta (y falsa) de la historiografía liberal se quiere llenar, por sus detractores, con historia marxista más o menos vergonzante, con lo que el remedio parece mucho peor que la enfermedad. En cuanto a la crítica demoledora de la historiografía y la leyenda romántica en que se obstinan en apoyarse los nacionalistas vascos, tengo que referirme aquí a los libros del profesor Jon Juaristi, que, con las discrepancias de rigor, me han interesado vivísimamente.

Juaristi, a quien agradecemos todos el perfecto castellano con que escribe sus libros, es definitivo en la demolición de la mitología histórica y política del nacionalismo, pero no sé si acierta en la identificación prácticamente total de fuerismo y nacionalismo. Me extraña, por ejemplo, que prescinda de historiadores vascos tan eminentes como don Gregorio de Balparda, vilmente asesinado en Bilbao durante la guerra civil por la represión republicana. Por cierto que en la amplia base histórica de Juaristi echo mucho de menos, además, una idea seria sobre la Dictadura, la República y la guerra civil; mientras sobre la época de Franco no aduce más que vilipendios sobreentendidos. Se cierra en banda contra el pacto fuerista con la Corona, que me parece sólidamente fundado en la tradición y la documentación. Si algo queda claro en el conjunto de la obra de Juaristi es la enorme confusión objetiva de la historia vasca, del nacionalismo vasco en sus diversas fases, así como un sentimiento de amargura atroz que le posee y comunica a sus lectores. Pero se trata de libros escritos por un autor de amplísima y profunda formación y que incitan a dudar, a pensar y a respetar tan arduo problema.

La Historia favoreció la convergencia de los pueblos de España en una sola Corona y una sola nación; como ahora favorece la integración de España en la nueva Europa. Pese a las ensoñaciones del creador de la Tercera Vía

socialista, sir Anthony Giddens, creo que será muy difícil imponer, sin un baño de sangre, el separatismo en la España que camina hacia Europa. Y con un baño de sangre, mucho menos y mucho peor.

EPÍLOGO 2: OBJETIVO FINAL, LA CORONA

Cuando reptaba, según algunas fuentes, una gran conspiración durante la etapa final del felipismo, fuentes socialistas concretaron que se trataba de una conspiración contra la Corona, es decir, contra el Rey. He empezado ya a leer y subrayar el colosal libro de Jesús Cacho, *El negocio de la libertad*, donde espero aclarar el asunto. Pero la gran conjura contra la Historia de España que estoy denunciando y analizando en este capítulo final de mi libro, alberga, además, otro objetivo oculto; acabar con la Corona, poner otra vez al Rey en el camino de Cartagena.

La misión histórica de don Juan Carlos era dificilísima y se apoyaba en la superación plena de la guerra civil. El Rey lo está intentando todo en esa dirección. Pero desde la campaña electoral de 1993 y desde las ofensivas de socialistas, comunistas y probablemente masones para cambiar la memoria histórica de los españoles, esas poderosas fuerzas señalan ocultamente, pero cada vez con más carga de sospecha, a la Corona y al Rey.

El 23 de julio de 1969, ante las Cortes de Franco, don Juan Carlos de Borbón y Borbón era designado sucesor de Franco a título de Rey con la denominación de Príncipe de España, aplicada ya en el siglo XVI al que pronto fue Felipe II. Una vez realizada la investidura pronunció un breve e importante discurso en que dijo:

«Recibo de S. E. el Jefe del Estado la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936». Es decir que don Juan Carlos reconoció, bajo juramento, que el 18 de julio de 1936 había surgido en España una legitimidad que cancelaba la de la República y que, a la muerte de Franco, se convertiría en legitimidad monárquica, de acuerdo con las Leyes Fundamentales de Franco. El Príncipe había firmado esa misma mañana el Acta de aceptación ante el ministro de Justicia como Notario mayor del Reino, que previamente le tomó el juramento de cumplir las Leyes Fundamentales en virtud de las cuales aceptaba su elección como sucesor a título de Rey.

Luego, por las Memorias de Torcuato Fernández Miranda, hemos sabido que el Príncipe, al formular su juramento, conocía ya, desde su encuentro con su profesor y mentor en 1960, que las Leyes Fundamentales incluían, sin

limitaciones, la posibilidad de su reforma en sentido democrático, por lo que al jurarlas y aceptar la sucesión no cometió perjurio, pese a que muchos franquistas le acusan de ello. Pero lo que nunca se ha reformado es que, en virtud de su juramento de 1969, el Rey aceptaba y recibía de Franco la legitimidad del 18 de julio, aun cuando estuviera decidido ya a reformarla desde dentro, para sustituirla por una nueva legitimidad, la legitimidad democrática.

Por tanto, cuando las Cortes democráticas de 1999, treinta años después de aquel juramento, establecen que el 18 de julio fue un golpe militar fascista contra la legalidad republicana, están negando toda validez al juramento de don Juan Carlos el 23 de julio de 1969 y a la propia Constitución democrática de 1978 que, como dice su disposición final, surgió por reforma de esas Leyes Fundamentales que con la Constitución quedaban derogadas, pero de ninguna manera con efectos retroactivos.

Afortunadamente la proposición de las Cortes en 1999 era no de ley, por lo que don Juan Carlos no tuvo que sancionarla con su firma. Si hubiera sido una proposición de ley, don Juan Carlos estaría negando su propia legitimidad. Aun así, la condena de las Cortes de 1999 arroja gravísimas dudas sobre la legitimidad del propio Rey, que no nace de la Constitución de 1978 (la que el Rey no juró) sino de su juramento de 1969, ratificado ante las Cortes a la muerte de Franco.

Con la visión de la Historia de España delante, para este observador está clarísimo que los continuos atentados a la Historia de España que estamos presenciando y sufriendo desembocarán fatalmente, si no ocurre un milagro, en una auténtica conjura contra la Corona que ha hecho a España. Habrá que seguir trabajando, contra toda esperanza, para conseguir ese milagro. Por el momento sólo tenemos a nuestro favor a la Historia de España.

RICARDO DE LA CIERVA, nació en Madrid, España el 9 de noviembre de 1926 y falleció el 19 de noviembre de 2015.

Fue Licenciado y Doctor en Física, historiador y político español, agregado de Historia Contemporánea de España e Iberoamérica, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares (hasta 1997) y ministro de Cultura en 1980.

Ideológicamente, se definía a sí mismo como «un claro anticomunista, antimarxista y antimasónico, y desde luego porque soy católico, español y tradicional en el sentido correcto del término». Afirmaba que «siempre he defendido al General Franco, y su régimen y los principios del 18 de julio, pero también era capaz de ver los errores que había dentro y de decírselos al propio Franco».

Notas

[1] George Hills: *Franco*. Londres, Robert Hale (ed. Española San Martín, 1968); C. Martin: *Franco, soldado y estadista*. Madrid, F. Iriarte, 1966; Brian Crozier: *Franco*. Londres Eyre and Spottiswoode, 1967; J. W. D. Trythall: *Franco*. Londres, Rupert Hat-Davis, 1970; M. Gallo: *Histoire de l'Espagne franquiste*. Marabout Univ., 1969 (dos vols.). <<

[2] Barcelona, Planeta, 1992. <<

[3] F. Franco Salgado: *Mis conversaciones privadas con Franco*. Barcelona, Planeta, 1976, p. 397. <<

[4] Ibíd. p. 452. <<

[5] *Memorias*, IV, p. 33 (Ed. Oasis, México, 1966). <<

[6] Ibíd., p. 36. <<

[7] Ibíd., p. 80. <<

[8] Ibíd., p. 83. <<

[9] Ibíd., p. 96. <<

[10] Ibíd., p. 315. <<

[11] Ibíd., p. 432. <<

[12] Ibíd., p. 447. <<

[13] Azaña: *Obras completas*, IV p. 609, para la mención a Franco del 19 de febrero de 1936. <<

[14] Ibíd., p. 609. <<

[15] Ibíd., p. 625. <<

[16] Ibíd., p. 630. <<

[17] Ibíd., p. 637. <<

[18] Ibíd., p. 680. <<

[19] Ibíd., p. 696. <<

[20] Ibíd., p. 701. <<

[21] Ibíd., p. 715-716. <<

[22] Ibíd., p. 734. <<

[23] Ibíd., p. 741. <<

[24] Ibíd., p. 754. <<

[25] Ibíd., p. 769. <<

[26] Ibíd., p. 773. <<

[27] Ibíd., p. 788. <<

[28] Ibíd., p. 805. <<

[29] Ibíd., p. 810. <<

[30] Ibíd., p. 812-13 <<

[31] Ibíd., p. 833. <<

[32] Ibíd., p. 886. <<

[33] Ibíd., p. 888. <<

[34] Ibíd., p. 901. <<

[35] Ibíd., p. 905. <<

[36] Publicado en 1939 a raíz de la guerra civil. Edición española en Ariel, 1974, aún en vida de Franco. <<

[37] I. Prieto: *Convulsiones de España*. México, Oasis, 197, vol. I, p. 388-389. <<

[38] *Convulsiones de España*, vol. I, p. 259 s. <<

[39] Ibíd., vol. I, p. 251 s. <<

[40] Ibíd., *Convulsiones de España*, III, p. 63 s. <<

[41] Para la audiencia de Stalin y el cambio de estrategia del PCE, cfr. mi libro *Carrillo miente*, Madridejos, Fénix, 1994, p. 312 s. <<

[42] Ed. Seuil. <<

[43] Entrevista de Carrillo con Oriana Fallaci, incluida en la biografía «clandestina» de Carrillo difundida en 1975 por los servicios secretos españoles SDECE, p. 53. <<

[44] Bilbao, Mensajero, 1983. <<

[45] Madrid, Alianza Editorial, 1987. <<

[46] VI-I (1988), 189 s. <<

[47] R. De la Cierva: *Don Juan de Borbón…* Fénix, 1997, p. 140 s. <<

[48] M. Artola: *Partidos y programas políticos 1808-1936*. Madrid, Aguilar, 1974, tomo I, p. 597. <<

[49] J. Tusell: *La España del siglo XX*. Barcelona, Dopesa, 1975, p. 239. <<

[50] Miguel Maura: *Así cayó Alfonso XIII*. Barcelona, Ariel, 1966, p. 188. <<

[51] Juan Marichal: prólogo al primer vol. de las *Obras Completas* de Azaña. México, Oasis, 1966, p. X. <<

[52] Jorge Semprún: *Azaña*, obra publicada en homenaje a Azaña en 1990/1991 por el Ministerio de Cultura, prólogo, p. 7. <<

[53] *Diario de Sesiones*, 14 de julio de 1931. <<

[54] *Dictamen*, p. 24 s. *Apéndice I*, p. 11 s. Madrid-Burgos, Editora Nacional, 1939. <<

[55] Las notas subversivas de los partidos republicanos figuran en Prats: *El Gobierno de la Generalidad en el banquillo*, 1935, p. 11. <<

[56] Cfr. J. Arrarás: *Historia de la Segunda República*. Madrid, Editora Nacional, 1964, vol. II, p. 454 s. <<

[57] J. M. Gil Robles: *No fue posible la paz*. Barcelona, Planeta, 1968, p. 139. R. de la Cierva: *Historia de la guerra civil española, antecedentes*. Madrid, San Martín, 1969, p. 430. <<

[58] S. de Madariaga: *España*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1964, p. 434 s. <<

[59] Me he permitido traducir al castellano este párrafo que Madariaga escribe en catalán. <<

[60] Cfr. R. de la Cierva: *Historia del socialismo en España*. Barcelona, Planeta, 1983, p. 130-132. <<

[61] Cfr. Pío Moa: *Los orígenes de la guerra civil española*. Madrid, Eds. Encuentro, 1999,1, p. 178. <<

[62] G. M. de Coca: *Anticaballero,* op. cit., p. 128. <<

[63] Cfr. Pío Moa: op. cit., I, p. 265. El arrepentimiento de Prieto en sus *Discursos en América*, México, 1944, p. 106. El discurso de arrepentimiento se pronunció en 1942. <<

[64] J. Arrarás: op. cit., I, p. 206. <<

[65] J. Arrarás: op. cit., I, p. 197. <<

[66] Moscú, Ed. Progreso, 1966, tomo I, p. 52. La fuente comunista (seguramente Santiago Carillo, aún socialista en la fecha del documento) subraya que este programa se redactó una vez que el Comité Revolucionario decidió que los socialistas irían solos a la insurrección, salvo con los grupos que se integrasen en las Alianzas Obreras. <<

[67] *España 1808-1939*, 1966, p. 639. <<

[68] La documentación de este epígrafe en mi libro *Historia de la guerra civil española, antecedentes*. Madrid, San Martín, 1969, p. 619 s. <<

[69] Textos de Azaña en Gil Robles: *No fue posible la paz*, p. 487 s. <<

[70] Todos estos textos en mi obra citada, *La guerra civil española, antecedentes*, pp. 623-624. <<

[71] *Llamamiento del Comité Central del P. C.*, 1936, p. 4. <<

[72] Indalecio Prieto, *Convulsiones de España* I, p. 162. <<

[73] Ver A. Montero: *Historia de la persecución religiosa.*… 1961, p. 729 s. <<

[74] Servicio Histórico Militar, Archivo Guerra de Liberación, legajo Fernández Cordón. <<

[75] Cfr. G. Moran: *Miseria y grandeza…* p. 223. Fernando Claudín, *Santiago Carrillo, crónica de un secretario general*, Barcelona, Planeta, 1983, otra fuente esencial para la biografía crítica de Carrillo. <<

[76] F. Claudín: *Santiago Carrillo… op. cit*., p. 104. Gregorio Morán: op. cit., p. 237 ss. <<

[77] J. L. de la Granja y Alberto Reig Tapia: *Manuel Tuñón de Lara, el compromiso con la Historia. Su vida y obra*. Universidad del País Vasco, 1993. <<

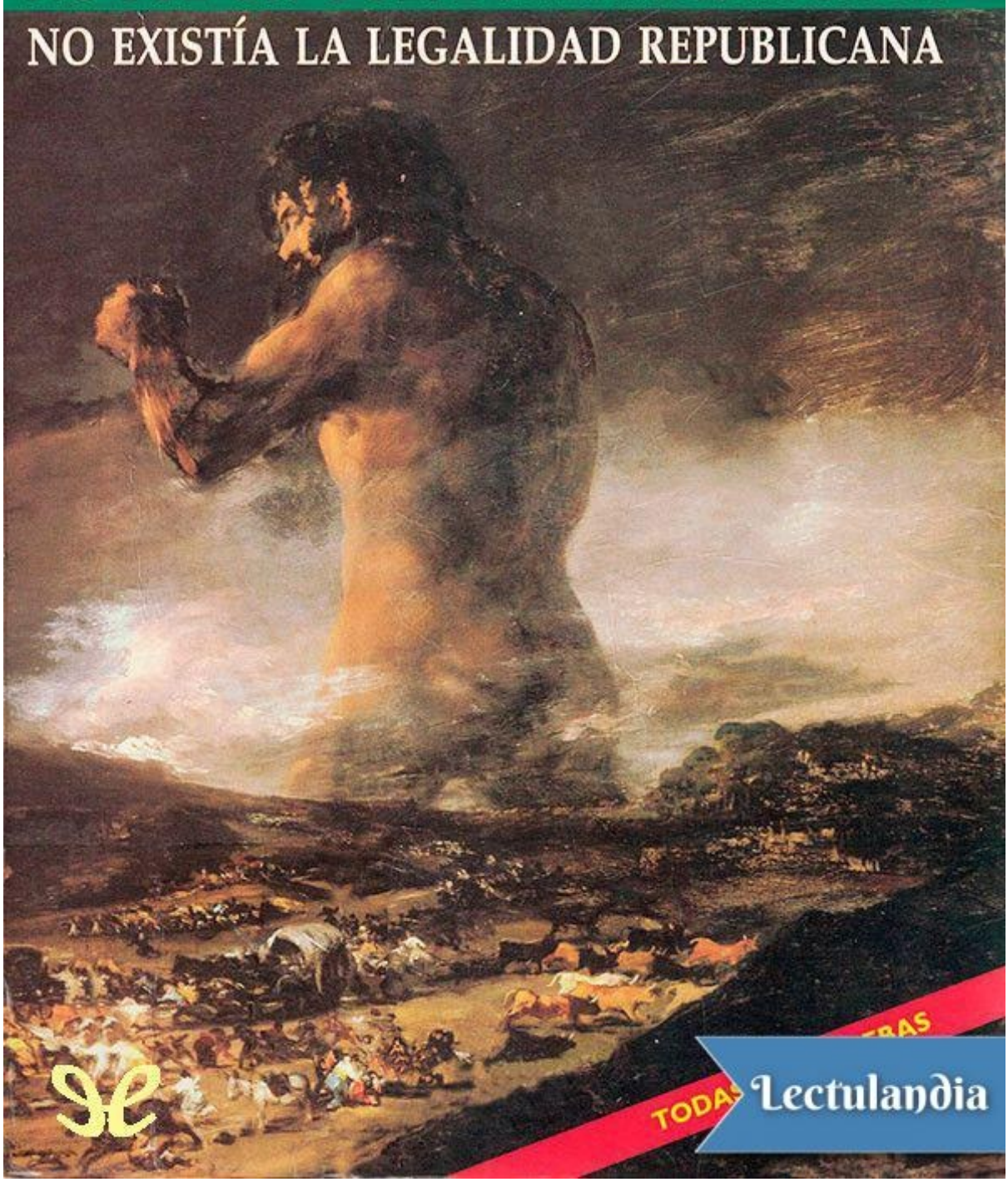
[78] J. Semprún: *Autobiografía de Federico Sánchez*. Barcelona, Planeta, 1977, pp. 125-126. <<

Ricardo de la Cierva

EL 18 DE JULIO

NO FUE UN GOLPE MILITAR FASCISTA

NO EXISTÍA LA LEGALIDAD REPUBLICANA



TODAS Lectulandia